

Resistiendo al agronegocio: la construcción de autonomía en el caso del colectivo socio-ambiental #FueraMonsanto.

Anahí Méndez.

Cita:

Anahí Méndez (2016). *Resistiendo al agronegocio: la construcción de autonomía en el caso del colectivo socio-ambiental #FueraMonsanto. III Jornadas de Estudios de América Latina y El Caribe. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/anahi.mendez/81>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pwp7/Z9s>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe

América Latina: escenarios en disputa

Eje 7- Luchas populares y movimientos sociales

28, 29 y 30 de septiembre de 2016

Facultad de Ciencias Sociales | Universidad de Buenos Aires Buenos Aires,
Argentina

Índice Eje 7 “Luchas populares y movimientos sociales”

Emilio Taddei: “Relegitimación de la gobernabilidad neoliberal y conflictos sociales en la Argentina y en Sudamérica”

Ayelén Penchulef, Victoria Naffa, Ángel García, Yamai Zapata, y Mariana Giaretto: “Luchas territoriales y estado en la posconvertibilidad (2002-2015): extractivismo, criminalización/compensación y resistencias sociales en experiencias concretas de Río Negro y Neuquén”

Oscar Soto y María Inés Lucero Belgrano: “Movimientos sociales en la Argentina reciente: balances y perspectivas”

José Seoane: “Una aproximación al nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina: desafíos de los sujetos subalternos entre la ofensiva neoliberal y la crisis de los proyectos de cambio”

Hernán Ouviaña: “La noción de política prefigurativa para el estudio de los movimientos populares latinoamericanos: algunas hipótesis de lectura”

Ana Elisa Correa y Luciana Henrique Da Silva: “Movimentos sociais e a crise brasileira: gestão da barbárie e novas formas de luta”

Anahí Mendez: “Resistiendo al agronegocio: la construcción de autonomía en el caso del colectivo socio-ambiental #FueraMonsanto”

Rayssa de Lyra Lisboa, Emília de Rodat Fernandes Moreira, André Paulo do Nascimento: “De Território de Liberdade a território de exploracao: caminho percorrido pelos camponeses do Município de Sao Miguel de Taipu/PB/Brasil até a conquista do território de esperança”

Luiza Boézzio Greff: “De *los desaparecidos en América* até *Libertad*: significando em silencio”

Iver Aracena: “Realidad y potencialidad contra hegemónica de los derechos humanos. Un análisis desde la construcción socio histórica del poder popular en América Latina”

Carolina Bautista: “Ciudad y paz territorial. Una reflexión desde las luchas urbanas en Bogotá, Colombia”

Daniela de Campos: “A Campanha Diretas Já no Rio Grande do Sul através das páginas do jornal Zero Hora”

Jorge Enrique Aponte: “Formación política por la paz de Colombia: perspectivas del movimiento social en el posacuerdo”

Francisco Longa: “Más allá de la verticalidad y la horizontalidad. La toma de decisiones en los movimientos sociales contemporáneos”

Alberto L. Bialakowsky, Cecilia Lusnich, Gabriela Buckstein y Alomai Rodríguez: “Movimientos al conocimiento como bien común: Nuevas claves en la resistencias sociales en Latinoamérica”

Guido Galafassi: “Clase y movimientos sociales. Un intento de debate alrededor de la dialéctica acumulación-conflicto-hegemonía”

Ayelén Penchulef: “Universidad, Autonomía y Movimiento Estudiantil: Aportes críticos acerca de los conflictos universitarios en la UNCo 2004-2006”

Relegitimación de la gobernabilidad neoliberal y conflictos sociales en la Argentina y en Sudamérica¹

Emilio H. Taddei²

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe/CONICET

Introducción

En los últimos meses distintos hechos de naturaleza política ocurridos en la región sudamericana tuvieron una fuerte incidencia regional y agitaron el debate político en nuestros países. Cuatro de ellos tuvieron lugar en países identificados con las llamadas experiencias “de cambio” o “progresistas” en América Latina. Nos referimos a las elecciones presidenciales argentinas y al inicio de la nueva gestión gubernamental neoliberal del presidente Mauricio Macri acontecidas entre noviembre y diciembre de 2015. Inmediatamente después se produjo la derrota electoral legislativa del gobierno venezolano. Esto se tradujo en un nuevo impulso de las presiones destituyentes de parte de la oposición que incrementó su presión contra el gobierno exigiendo la convocatoria al referéndum revocatorio. También en la arena internacional los opositores redoblaron sus esfuerzos diplomáticos contra el gobierno de Maduro. La crisis política venezolana también se expresa en la agudización de los problemas sociales, en particular bajo la forma de la penuria alimentaria que afecta actualmente a este país. En febrero de 2016 se produjo la ajustada derrotada del gobierno boliviano en el referéndum constitucional (51% por el No contra 49% por el Sí). El 22 de mayo en Brasil se consumó el golpe de estado parlamentario y mediático contra el gobierno de la presidenta Dilma Roussef a través de la votación del impedimento presidencial promovido por numerosos legisladores imputados y/o procesados por graves actos de «corrupción»³. Este desgraciado acontecimiento corona el largo ciclo de desestabilización política iniciado a poco de comenzar el segundo mandato de Roussef.

Ciertamente las repercusiones inmediatas de estos hechos no son equiparables, y tampoco su inscripción institucional. Los sucesos argentinos y brasileros provocaron cambios gubernamentales a favor de gobiernos de claro sesgo neoliberal (legal en el primer caso e ilegítimo en el segundo), si

¹ El autor agradece los comentarios y sugerencias de Susana Murillo, José Seoane, Clara Algranati, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Sergio Onofrio (Maestría en Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional de Cuyo).

² Politólogo. Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Integrante del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe (GEAL).

³ Los golpes de estado “blandos” en Honduras (2009) y en Paraguay (2012) (y las abortadas tentativas de golpe en Bolivia, Ecuador y Venezuela) son los antecedentes regionales inmediatos del golpe de estado de 2016 en Brasil.

bien en Brasil la continuidad institucional del gobierno golpista es aún incierta. Esta observación permite distinguirlos de lo ocurrido en Bolivia y Venezuela, donde los traspiés electorales de los respectivos oficialismos agudizan los interrogantes sobre el futuro de estas experiencias.

Más allá de sus especificidades y desenlaces estos cuatro acontecimientos amplificaron sin embargo la discusión (y los balances) sobre el rumbo del ciclo político “progresista” o “de cambio”⁴ en Sudamérica y su eventual extinción. No se trata por cierto de una cuestión nueva, menos aún para el campo de las izquierdas y de las fuerzas populares. Son discusiones, intercambios y controversias surgidas hace ya un par de años cuando comenzaron a aparecer señales del debilitamiento del potencial transformador y democratizador de estas experiencias. En el marco de estas controversias y debates distintas organizaciones, colectivos e intelectuales que acompañaron críticamente el rumbo de estas experiencias puntualizaron aspectos críticos de las mismas: sus límites para remover aspectos claves del andamiaje jurídico-normativo neoliberal, la profundización del modelo extractivo-exportador y sus efectos mercantilizadores, la dificultad para superar una matriz productiva que reproduce las condiciones de dependencia histórico-estructural de la región, las reticencias para concretizar reformas democráticas más radicales y durables. También en este contexto se señalaron los avances, bloqueos y límites de los procesos de integración regional, el papel de las políticas sociales en la legitimación de estos gobiernos, la relación sistémica que existe entre las lógicas mercantilizadoras características del capitalismo extractivista y la matriz de «corrupción» política del patrón de poder, entre otras cuestiones.

Estas cuestiones y debates cobran una renovada y decisiva importancia en el nuevo contexto, en momentos en que las revitalizadas fuerzas de la reacción conservadora proclaman un nuevo “fin de ciclo”. La intencionalidad atribuida por estos grupos a esta referencia no puede inducirnos a equívocos: expresa la pretensión de legitimar y naturalizar el “cierre” de toda expectativa de cambio social (en lo que parece ser una renovada, aunque por cierto más devaluada, versión de las predicciones del “fin de la historia” de los ’90). Se trata una vez más de proclamar la consagración de la racionalidad neoliberal como guía de acción y comportamiento individual y colectivo. Esta intencionalidad no opera por cierto en un vacío material e ideológico. Su “sentido lógico”, la

⁴ Hemos señalado en distintas ocasiones los riesgos de caer en un reduccionismo analítico que conlleva la evocación del término “gobiernos de cambio”, “progresistas” o de “izquierda” para referirse a experiencias disímiles en relación a las características de los procesos sociales en que se gestaron, la inscripción ideológica de los distintos gobiernos que las encarnaron, etc. Sin embargo inscribimos su génesis compartida en los procesos de resistencia sociopolítica al neoliberalismo desde los años ’90. Por esto en este texto empleamos indistintamente los términos “gobiernos de cambio” y/o “progresistas” referirnos a ellas. Oportunamente sugerimos una distinción analítica entre gobiernos neodesarrollistas y gobiernos de “cambio constitucional” o “del socialismo del siglo XXI” (Seoane, Taddei, Algranati, 2013). Más recientemente, y en particular a partir de 2012, las reorientaciones de las políticas públicas de muchos de estos gobiernos en el contexto de la crisis hicieron más borrosas las fronteras entre estas experiencias. Consideramos de todas formas que esta tipología posee aún un valor interpretativo.

legitimidad social de este discurso se asienta en la materialidad de algunos hechos incuestionables: la finalización del ciclo institucional de algunos gobiernos y los enormes obstáculos que encuentran otras experiencias. Estos hechos indiscutibles expresan un cambio más amplio y abarcativo, que trasciende la dimensión puramente institucional-estatal de los procesos de cambio: la transformación operada en la modificación de las relaciones de fuerzas sociales en nuestra región y que posibilita una relativa relegitimación política de las fuerzas neoliberales. Esto se expresa en la coyuntura ciertamente más desfavorable a los procesos de democratización y transformación social que la que existió en la última década. La negación de esta realidad constituye un acto de necedad político-intelectual de gran irresponsabilidad. Recientemente Álvaro García Linera, enfatizando la inscripción político-institucional del cambio de coyuntura, caracterizó el momento que atravesamos como de “una limitación o una contracción territorial de este avance de los gobiernos progresistas” (García Linera, 2016). Se trata sin lugar a dudas de un momento político de gran adversidad de dramáticas consecuencias para las mayorías populares.

Dicho esto siempre es conveniente recordar que los procesos sociales y políticos no son lineales, sino complejos, heterogéneos y multidimensionales. Esta consideración es fundamental importancia en los debates sobre las características e implicancias del “fin de ciclo”. Permite situar los cambios y las transformaciones de la etapa actual en un horizonte temporal más amplio: el que refiere a los efectos de la crisis capitalista en la región y su incidencia en los conflictos y confrontaciones sociales y políticas. Puestos en esta perspectiva podemos observar que la realidad resulta más compleja, contradictoria y menos lineal que la que postula el relato dominante del “fin de ciclo”. Reiteramos lo que señalamos anteriormente: no se trata de negar nuestra inmersión en un nuevo contexto político, el de un nuevo ciclo de legitimidad neoliberal, ni de subestimar los efectos des-democratizadoras de esta realidad. Pero al mismo tiempo es necesario señalar la emergencia de un nuevo ciclo de resistencias populares en Sudamérica. Con intensidades, temporalidades y amplitudes singulares estas protestas expresan una faceta también característica del nuevo momento nuestroamericano: la del activo y extendido rechazo a las consecuencias del nuevo ciclo de políticas neoliberales de mercantilización de la vida. Al mismo tiempo que deben servirnos para entender los límites de las experiencias de cambio, debemos apreciar y considerar estas luchas y conflictos para comprender los interrogantes que estas proyectan sobre la capacidad de los gobiernos neoliberales de asentar y reproducir durablemente las condiciones de dominación del neoliberalismo en la región.

A partir de estas consideraciones este texto intenta contribuir al debate sobre el balance de las experiencias de cambio y el futuro de las luchas y de las fuerzas de izquierda, progresistas y

emancipatorias en Nuestra América. Para ellos la primera parte de este artículo está dedicada a presentar algunos elementos interpretativos de los rasgos distintivos del ciclo de conflictividad social abierto en 2011-2012 en la región. La segunda parte está dedicada a analizar las características del período que se inicia con el gobierno de Mauricio Macri, en especial las implicancias de la política de shock neoliberal en el proceso de reconfiguración estatal en curso. Concluimos nuestro análisis refiriéndonos a las características más salientes de la conflictividad social durante el primer semestre de 2016.

1. Las luchas populares en Nuestra América: entre el discurso del “fin de ciclo” y las nuevas resistencias contra la gobernabilidad neoliberal.

Durante los primeros años transcurridos luego del inicio de un nuevo episodio de la crisis internacional en 2008 las economías latinoamericanas se expandieron nuevamente durante 2010 y 2011, luego de sufrir una caída del PBI en 2009. A diferencia de lo sucedido en décadas anteriores las repercusiones inmediatas de la crisis no se tradujeron en un escenario recesivo de alcance regional. Esta situación inicial contribuyó a expandir una creencia bastante difundida: que por primera vez en muchas décadas América Latina se encontraba a resguardo de la crisis y de sus tradicionales expresiones de décadas anteriores: políticas de ajuste ortodoxo, privatizaciones, etc. Esta perspectiva no resultaba completamente falsa. Sin embargo y al mismo tiempo impidió percibir que la recuperación coyuntural del crecimiento económico estaba asociada a la combinación de distintos factores exógenos e internos de incierto sostenimiento en el largo plazo. Entre ellos la importante presencia de inversiones especulativas que buscaban aquí oportunidades de una rápida valorización. La combinación de estos distintos factores imprimió un sesgo particular al procesamiento de la crisis en América Latina que se tradujo en la profundización e intensificación del modelo extractivo-exportador que había traccionado fuertemente el ciclo de crecimiento económico en los años precedentes. La reproducción de este “ciclo virtuoso” sumada a la adopción en algunos países de políticas anti-cíclicas permitió morigerar inicialmente las consecuencias sociales más agudas de la crisis. La profundización de las dinámicas de despojo y desposesión características de los procesos de mercantilización de la naturaleza tendieron a agudizar en muchos casos tensiones y conflictos preexistentes expresados en el ciclo de conflictividad que acompañó la difusión del modelo de desarrollo extractivista en la región.⁵

⁵ Para un análisis más detallado de la naturaleza del ciclo de resistencias contra los efectos socio-ambientales del modelo extractivista-exportador en América Latina ver Seoane, Taddei, Algranati (2013).

Este escenario comenzó sin embargo a experimentar cambios a partir de 2011 que se agudizaron en 2012. El agotamiento del llamado “superciclo de los *commodities*”, la desaceleración de la economía China y los cambios en la gestión sistémica de las crisis operados desde el “centro” del sistema-mundo capitalista⁶ incidieron en el rumbo de las variables económicas de la región⁷. El rumbo de los gobiernos “progresistas” se topó con obstáculos crecientes para garantizar la redistribución de los “frutos del crecimiento” que había jugado un rol importante en la legitimación de los mismos. En algunos casos la adopción de “ajustes correctivos” se combinó con políticas anticíclicas de distinto alcance e intensidad. El sentido y la amplitud de algunas iniciativas democratizantes se vio afectado en la mayoría de los casos por el nuevo rumbo de las políticas públicas. En este contexto se sucedieron distintos conflictos que daban cuenta del descontento popular de sectores que conformaban la base electoral de estos gobiernos. El “gasolinazo” en Bolivia en 2011, la marcha por el “Agua, la Vida y la dignidad” en 2012 y las movilizaciones sindicales contra la reforma del código laboral en 2014 en Ecuador, las huelgas generales y las movilizaciones sindicales en Argentina en 2012 y 2014 y las masivas movilizaciones por el “Pase libre” ocurridas en 2013 en Brasil, son solo algunos ejemplos de ello.

Sería un error explicar o entender estos conflictos y tensiones como un mero reflejo de la incidencia regional de factores externos. La influencia de los mismos fue reiteradamente señalada y no desestimamos su importancia. Sin embargo la interpretación de estos conflictos y tensiones no puede limitarse a sus dimensiones económicas, a riesgo de caer en un determinismo reduccionista. Para evitar esta trampa y entender la complejidad de factores que inciden en su desarrollo y desenlaces provisorios resulta necesario privilegiar una lectura de la crisis que pone el énfasis en la naturaleza esencialmente conflictiva de la misma. Es decir su entendimiento y análisis como una arena de disputa entre las clases y fracciones de clase y de conflictos al interior de las mismas, cuya temporalidad no es lineal. Esta temporalidad se expresa en los avances, retrocesos e *impasses* experimentados por fuerzas o fracciones en disputa en el corto y mediano plazo.

⁶ Nos referimos a la “externalización de la crisis” hacia la llamada periferia del capitalismo. Las agresiones y ataques imperialistas contra las insurrecciones democrático-populares en los países árabes del norte de África son una expresión elocuente de esta transformación. En América Latina estas mutaciones se manifestaron, por ejemplo, en la intensificación de los movimientos de salida de capitales especulativos, de repatriación de dividendos hacia las casas matrices por parte de empresas transnacionales y de fuga de divisas locales.

⁷ Esta tendencia se refleja en la evolución del PIB latinoamericano entre 2011 y 2015: 4,3% en 2011; 2,7% en 2012; 2,8% 2013, 1,2% en 2014 y una estimación de 0,5% en 2015 (CEPAL, 2015a). Según las previsiones de CEPAL para 2015 América del Sur sería la región latinoamericana más afectada con un crecimiento estimado de 0,4%, mientras que las estimaciones para América Central y México preveen un crecimiento de 2,7% y de 1,7% para la región Caribe. En 2015 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe disminuyeron 9,1% en comparación con 2014, llegando a 179.100 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010. Por otro lado el organismo señala que las fuertes caídas en los precios de las materias primas y una menor demanda internacional por los productos que la región exporta afectaron sus envíos al exterior. En 2014 y 2013 éstos anotaron disminuciones de -3,0% y -0,4%, respectivamente. Esto convierte al trienio entre 2013 y 2015 en el de peor desempeño exportador de la región en ocho décadas (CEPAL, 2015b).

La adopción de esta perspectiva analítica permite apreciar con mayor precisión la complejidad y heterogeneidad del ciclo de conflictividad social al que nos referimos, y los rasgos que lo distinguen de los ciclos anteriores. En particular la naturaleza y la incidencia de los conflictos que tuvieron lugar en los países de las llamadas experiencias “progresistas” y sus diferencias con protestas que acontecieron en otros países de la región. En relación a esto es preciso referirse a las estrategias y las acciones protagonizadas por distintos grupos y/o fracciones de las clases dominantes, en países donde las transformaciones políticas en curso habían causado el desplazamiento relativo de estos grupos de posiciones de decisión en el aparato estatal. Estas acciones se orientaron y orientan a relegitimar un nuevo ciclo de políticas neoliberales como mecanismo de “resolución” o “salida” de la crisis. Las estrategias desplegadas por estos sectores abarcan una variedad de iniciativas, no excluyentes entre sí: desde la construcción de nuevas herramientas electorales, la promoción de acciones destituyentes, los procesos de cooptación y manipulación de legítimas demandas populares, las intensas campañas mediáticas hasta los esfuerzos por “colonizar” las agendas y elencos de los gobiernos con la intención de imprimir un rumbo más moderado a algunas políticas públicas.

En los años recientes distintas fuerzas y grupos políticos neoconservadores salieron a disputar la influencia y el ascendente de los movimientos populares sobre la protesta callejera. Con el apoyo de grupos empresariales concentrados de comunicación promovieron campañas y marchas contra la inseguridad, manipulando y colonizando en provecho propio una realidad que más, allá de sus amplificaciones mediáticas, afecta prioritariamente a las clases populares y es parte de la pesada herencia irresuelta de la década neoliberal de los '90 (Murillo, 2008). Los reclamos por mayor “seguridad” exigían el tratamiento estatal de la protesta y de la “cuestión social” en un sentido crecientemente punitivo y represivo, que cuestionaba la inspiración “garantista” y “laxista” de las ciertas políticas. Este reclamo también se conjugó con denuncias contra la “manipulación de la justicia”, la «corrupción» y la inseguridad jurídica y en defensa de valores republicanos. En sintonía con las tentativas de Estados Unidos de recuperar su influencia comercial y diplomática en la región, estos grupos impugnaron el sesgo latinoamericanista de las políticas de integración. En una velada referencia a favor de los intereses financieros y del gran capital transnacional estos sectores reclamaron, como sucedió en el caso de Argentina durante la llamada “crisis de los fondos buitres” o “crisis de los *holdouts*”⁸, el “retorno” a los mercados internacionales. Los enfrentamientos,

⁸ Esta crisis sobrevino como consecuencia de la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa de reconocer la deuda del Estado argentino con los grupos tenedores de bonos de la deuda argentina *defaultada* y que habían rechazado los términos de los sucesivos acuerdos de renegociación entre el gobierno argentino y la mayoría de los acreedores privados. La decisión del juez estadounidense obligaba a la Argentina a pagar la totalidad del monto

acciones desestabilizadoras y actos criminales promovidos desde 2013 en Venezuela por diferentes grupos políticos opositores a la revolución bolivariana son la expresión más emblemática y dramática de esta secuencia sudamericana. Por su parte los propios límites del proceso revolucionario favorecieron el reforzamiento de las tendencias burocratizantes del gobierno que también contribuyen a bloquear la profundización de las reformas democrático-populares y obstaculizan la superación del modelo de desarrollo del rentismo petrolero (Lander, 2016).

El “cerco” y “asedio” de los sectores más conservadores se conjugó a las limitaciones propias de cada experiencia, bloqueando los procesos de reforma o devaluando su intensidad, mientras que numerosas demandas populares quedaban “encapsuladas” en coyunturas electorales en las que los “oficialismos progresistas” invocaron la necesidad de no atizar las tensiones políticas para justificar orientaciones claramente más moderadas. En algunos casos estas posiciones de “expectancia” se revelaron sumamente costosas para la suerte de los gobiernos (por ejemplo la actitud de desconfianza que asumió el gobierno del PT frente a las protestas urbanas de 2013 y su tentativa de promover la fracasada reforma política sin incentivar un proceso de debate y organización popular que diera sustento a este intento de transformación del sistema político).

En otros países de la región los efectos de la crisis se tradujeron en una recuperación y/o incremento de los niveles de conflictividad social y en un “relanzamiento” de la actividad reivindicativa de las clases subalternas respecto al período anterior y que modificó de manera relativa las adversas circunstancias de los años precedentes. Nos referimos aquí a los conflictos que tuvieron y tienen lugar en los países de llamado “neoliberalismo de guerra” o “armado” y que potenciaron la agregación y la convergencia de los reclamos y de las organizaciones populares, tanto en el ámbito rural como en las ciudades. Muchas de estas acciones y reclamos trascendieron los espacios nacionales y suscitaron expresiones de solidaridad regional e internacional.

El ciclo de acciones y movilizaciones protagonizadas por los movimientos sociales colombianos resulta emblemática. El paro agrario de 2013 y la articulación y movilización de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular expresaron la fuerza de la agregación de las organizaciones populares que no solo permitió articular un pliego de exigencias comunes al gobierno sino que fortaleció las

reclamado por los acreedores. El gobierno kirchnerista rechazó esta decisión e intentó negociar una salida negociada con los especuladores que acotara el drenaje de divisas. Ante la negativa de los fondos buitres (respaldada internamente por sectores políticos y financieros, entre ellos el propio Mauricio Macri) el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner decidió mantener abierto el litigio que solo fue resuelto durante los primeros meses del gobierno macrista con la votación parlamentaria en marzo de 2016 de la ley reclamada por el juez Griesa. Esta votación constituyó el primer gran triunfo parlamentario de la derecha alianza Cambiemos y habilitó al Estado argentino el pago en efectivo a los fondos demandantes con una emisión de 12.500 millones de dólares en títulos públicos.

convergencias y consolidó perspectivas políticas compartidas. En 2015 sindicatos y movimientos sociales marcharon contra el Plan Nacional de Desarrollo promovido por el gobierno de Juan Manuel Santos. A fines de mayo y principios de junio de 2016 tuvo lugar un nuevo paro agrario denominado la Minga Nacional agraria, campesina, étnica y popular que con la consigna “Sembrando Esperanza, Cosechando País” se materializó en diversas acciones de movilización pacífica y obtuvo la firma de un acuerdo entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el gobierno nacional que contempla garantías para la movilización popular, el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz y el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial. La emergencia de procesos de organización y articulación como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y popular, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Proceso de Comunidades Negras, entre otras organizaciones; son ejemplos del proceso de recomposición de las organizaciones populares colombianas y de la voluntad de estas organizaciones de intervenir en la construcción del proceso de paz acordado y anunciando en junio 2016 por el gobierno y las FARC. Estas organizaciones sostienen la importancia de avanzar hacia la “Paz justicia social” y enfatizan la necesidad de promover una noción amplia y compleja del proceso de pacificación, entendiendo que este no solo supone la violencia armada sino que debe servir para materializar profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que garanticen la efectiva justicia social.

En marzo de 2014 tuvo lugar en Paraguay una huelga general convocada por las centrales obreras, organizaciones campesinas, estudiantes en reivindicación de aumentos salariales del 25 %, en rechazo a la política de privatizaciones promovida por la Ley APP (Proyectos de Alianza Público Privada) impulsada por el gobierno de Cartés y exigiendo la desmilitarización de los asentamientos campesinos y la libertad de los presos políticos. En abril de 2016 miles de campesinos y cooperativistas marcharon hacia Asunción para exigir al gobierno la condonación de deudas adquiridas por los productores en la fallida campaña de chíá del 2014 y un plan de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Al cabo de dos semanas de acampe en la capital las organizaciones campesinas y agrarias lograron la firma de un compromiso por parte del gobierno de ese país. En julio del mismo año la justicia paraguaya condenó a prisión a once campesinos enjuiciados por la “Masacre de Curuguay” de 2012. Esta sentencia activó los reclamos de organizaciones campesinas nucleadas en la Coordinadora Nacional Intersectorial y de derechos humanos en rechazo de la decisión judicial y en demanda de la absolución de los campesinos condenados.

En mayo de 2014 miles de estudiantes chilenos participaron en la Marcha por la Educación convocada por la Mesa Social por la Educación realizada en Santiago y en las principales ciudades del país. Luego de las moderadas expectativas que despertó la segunda elección de Michelle Bachelet los estudiantes recuperaban las calles agitando sus reivindicaciones a favor de la educación pública gratuita y de calidad y en contra del carácter mercantil y privatista del sistema educativo. Exigían a las autoridades garantizar la participación estudiantil en las reformas propuestas por el gobierno de Michelle Bachelet. Numerosos conflictos protagonizados por organizaciones mapuches, ambientalistas, de pobladores en 2015 y 2016 contra los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, mineros en la Araucanía y contra la firma del tratado comercial transpacífico con Nueva Zelanda fueron duramente reprimidos por las autoridades gubernamentales al igual que las más recientes protestas estudiantiles contra el proyecto de ley educativa oficial. En mayo de 2016 tuvo lugar el levantamiento popular en la isla de Chiloé en apoyo a la protesta de pescadores y mariscadores que denunciaban las consecuencias socioambientales de la denominada “marea roja” ocasionadas por los deshechos de las empresas salmoneras que operan en la isla.

La conclusión en 2014 del proceso de privatización del petróleo mexicano impulsada por el gobierno de Peña Nieto es quizás el ejemplo más emblemático de la intensa y profunda ofensiva neoliberal que tiene como correlato la consolidación de un “Estado gendarme” en ese país. La represión estatal del conflicto social y la tolerancia y/o promoción oficial de la violencia paraestatal explican el preocupante incremento de la violencia social y política en dicho país. En este contexto ocurrió en 2014 la desaparición forzada de estudiantes en Iguala (más conocida como la “masacre de Ayotzinapa”) que suscitó masivas movilizaciones y expresiones de solidaridad regional e internacional exigiendo el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables materiales y políticos, aún pendiente. En similar dirección cabe mencionar la brutal represión en junio de este año de la huelga en contra de las reformas neoliberales del gobierno (en particular la reforma educativa) organizada por la sección sindical 22 de maestr@s adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La acción represiva de la policía federal y de la policía estatal en la localidad de Nochixtlán provocó tres muertes de docentes y padres y decenas de heridos. El repudio a estas acciones y la oposición a la citada reforma amplificaron el carácter nacional de las protestas magisteriales y de la solidaridad de diferentes organizaciones sociales.

Los datos oficiales proporcionados por la Defensoría del Pueblo en Perú permiten observar el incremento de la conflictividad social en este país durante el mandato presidencial de Ollanta Humala (2011-2016). Durante este período la protesta social tuvo como característica distintiva la

relevancia de conflictos de naturaleza socio-ambiental y territorial (demarcaciones) vinculados a la intensa política de promoción de las industrias extractivas en provecho del gran capital nacional y transnacional. En el marco de estos conflictos movimientos rurales y urbanos consolidaron convergencias multisectoriales que en distintos casos incidieron en la conformación del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Este frente impulsó la candidatura presidencial de Verónica Mendoza en las elecciones de 2016 quien obtuvo el 18,74% de los votos en primera vuelta y logró aglutinar una parte importante de las fuerzas progresistas y de izquierda. El triunfo presidencial de Pedro Kuczynski sobre Keiko Fujimori en segunda vuelta refleja sin embargo la amplitud de la legitimidad electoral de las propuestas neoliberales que probablemente será puesta a prueba en los meses venideros en el terreno social por los movimientos y organizaciones populares de este país.

A modo de conclusión de este sintético repaso de algunos de los hechos más importantes de la conflictividad señalamos que los cambios políticos en el Cono Sur imprimieron una renovada dinámica a los conflictos sociales respecto a 2015. En agosto de ese año tuvo lugar en Uruguay la mayor movilización popular ocurrida en la última década en rechazo al decreto presidencial de “esencialidad” de los servicios educativos que contemplaba sanciones para los/las docentes que realizaran huelgas en demandas de mayor presupuesto para la educación. La masividad del rechazo popular a esta medida obligó al gobierno de Tabaré Vázquez a dejar sin efecto el decreto. Un año después de la primera huelga general contra la política económica del gobierno realizada en agosto de 2015, la central sindical PIT-CNT realizó en julio de 2016 un nuevo paro nacional que contó con la adhesión de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), de la Universidad de la República (UdelaR) y del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) entre otras organizaciones. La significativa adhesión a la medida de fuerza (considerada como la mayor huelga desde la apertura ciclo democrático en 1985) es un indicador de la legitimidad social de las demandas en favor de incrementos salariales según el índice de inflación y contra la política de ajuste impulsada por el gobierno para reducir el déficit fiscal.

La crisis política abierta en Brasil en 2015 se prolongó y agudizó en 2016. En este contexto se produjeron numerosas movilizaciones y jornadas de protesta impulsadas tanto por el arco opositor conservador como por organizaciones sociales y políticas que se oponían a la destitución de Dilma Roussef. La consumación del golpe de estado en el mes de mayo fue un punto de inflexión. A partir de ese momento y hasta hoy las organizaciones populares y frentes político-sociales (como el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo FPSM, la Coordinadora de Movimientos Sociales,

entre otros) redoblaron las acciones de denuncia y resistencia contra el gobierno ilegítimo encabezado por Michel Temer con el objetivo de lograr la reposición en el cargo de la presidenta Dilma Rousseff y enfrentar las políticas privatistas y la profundización del ajuste fiscal promovidos por el gobierno golpista. Bajo las consignas de “Fuera Temer” y “Ningún derecho menos” el 10 de junio se realizó una nueva jornada de movilización contra el golpe que abarcó cuarenta ciudades brasileñas y que tuvo su réplica continental en diferentes ciudades latinoamericanas donde se realizaron actos y concentraciones y también en ciudades europeas. El 19 de julio se realizó el en San Pablo primer acto sindical unificado contra el gobierno interino donde se denunció la agenda de precarización laboral del nuevo gobierno. Más adelante (punto 2.2) nos referimos a la dinámica de la conflictividad social en Argentina desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri.

La revitalización de políticas de liberalización comercial y promoción de acuerdos de inversión y tratados de “libre comercio” es un eje importante de la revitalizada agenda neoliberal en la región. Esto ocurre en consonancia con una tendencia mundial que se expresa en la proliferación de negociaciones multilaterales y de la firma reciente de nuevos acuerdos. En el mes de julio y bajo la consigna “Ni un paso atrás” diferentes redes de movimientos sociales organizaron una “Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo”. En el marco del Foro Mundial sobre Migraciones celebrado en la ciudad de San Pablo, Brasil, los movimientos convocantes a esta jornada⁹ crearon una nueva articulación continental de movimientos sociales campesinos, sindicales, de mujeres, estudiantiles y urbanos entre otros con el objetivo de promover la unidad de acción en torno a la crítica al libre comercio y las transnacionales, en defensa de la democracia y de la integración de los países latinoamericanos.

2- **Argentina: el giro neoliberal y el “Estado empresario” macrista.**

El triunfo electoral de la coalición Cambiemos¹⁰ del 22 de noviembre de 2015 puso fin a doce años ininterrumpidos de gobiernos kirchneristas. Mauricio Macri, candidato presidencial de esta coalición, líder del PRO y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde finales de 2007 se impuso en segunda vuelta a Daniel Scioli, candidato del oficialista Frente para la Victoria por un estrecho margen de votos: 51,40 % a favor del primero (12.903.301 de votos) contra 48,60 %

⁹ Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ALBA Movimientos, Centro Martin Luther King, Jubileo Sur/ Américas, PIT-CNT Uruguay, Internacional de Servicios Públicos, Campaña para Desmantelar el Poder de las Transnacionales, entre otros.

¹⁰ La Alianza Cambiemos se conformó en junio de 2015 y está integrada por el Partido Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y Progresistas.

(12.198.441 de votos) a favor del candidato peronista (la diferencia porcentual entre ambos fue de 2,8%, 704.860 votos).¹¹

Tanto a nivel nacional como regional la victoria de Macri fue emblemática. En el terreno doméstico encarna la primera tentativa exitosa de consagración en elecciones democráticas de un presidente de inspiración neoliberal surgido por fuera de las estructuras de los dos partidos mayoritarios. El triunfo nacional de Macri se amplificó con el triunfo de la candidata del PRO María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, primer distrito electoral del país. En el escenario regional esta elección representó el primer intento electoral exitoso de una coalición conservadora de poner término al mandato presidencial de un gobierno identificado con el campo “progresista”, desde el inicio de este ciclo de experiencias sudamericanas con la elección del presidente Hugo Chávez en 1998 y consolidado a partir de 2002 con la elección de Inácio “Lula” da Silva en Brasil y los posteriores cambios de gobierno y reelecciones en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

El rasgo distintivo del breve y tormentoso período de transición política entre el gobierno saliente y el entrante fue la profundización de la crisis inflacionaria en beneficio de los grupos económicos más concentrados y en detrimento del poder adquisitivo de los sectores populares. Esta corrida, que agudizó el escenario inflacionista preexistente que influyó en la suerte electoral del candidato del Frente para la Victoria (pero que no explica por sí solo la derrota kirchnerista), prefiguraba la orientación de las medidas económicas del nuevo gobierno.

2.1 Shock económico neoliberal y reconfiguración de la forma estatal.

Desde su primer día de gobierno el presidente Macri promovió un conjunto de medidas, correlato de una verdadera “terapia de shock” neoliberal, orientadas a promover la rápida recomposición de la tasa de ganancia de diversas fracciones empresariales y que expresan una reorientación del ciclo de acumulación de capital. Ante la ausencia de mayoría parlamentaria propia el ejecutivo garantizó la implementación legal de sus medidas con la sanción de numerosos decretos de necesidad y urgencia¹².

¹¹ En un artículo reciente analizamos la relación entre la evolución de la crisis en Argentina y su incidencia en el rumbo de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante los tres últimos años de su segundo mandato presidencial. También señalamos la incidencia de estas cuestiones en el proceso electoral de 2015, en el triunfo electoral de Cambiemos y analizamos la orientación de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno (Taddei, 2016).

¹² Los Decretos de Necesidad y Urgencia son una emblemática expresión del espíritu neo-decisionista que tiñó la reforma constitucional argentina de 1994 en Argentina. Legitiman la arbitraria intervención del poder ejecutivo en un amplio abanico de esferas de la vida política, económica, social, cultural, etc. que puede colisionar con el ejercicio de

El 14 de diciembre el gobierno anunció la anulación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y carne y una baja de cinco puntos porcentuales a las exportaciones de soja (que pasaron de 35% a 30%), materializando rápidamente una promesa realizada durante la campaña electoral. Dos días después el Ministro de Finanzas Alfonso Prat Gay anunció la unificación parcial del tipo de cambio y el fin parcial de las restricciones a la compra de dólares establecidas por el gobierno kirchnerista. Este anuncio provocó una devaluación del 41% del valor del peso e incrementó la transferencia directa de ingresos al sector exportador luego de la anunciada baja de retenciones. Simultáneamente el gobierno flexibilizó los mecanismos vigentes para la importación de bienes que habían sido adoptados por el gobierno kirchnerista para limitar el drenaje de divisas extranjeras. Las autoridades económicas promovieron la anulación de las obligaciones de las empresas de informar mensualmente los precios de sus productos. Ésta y otras decisiones fueron decisivas para la promoción de una política de relajación de los controles vigentes y constituyeron un guiño oficial a la remarcación de precios.

La política financiera oficial promovió la simultánea desregulación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero anunciada por el Banco Central (BCRA) el 17 de diciembre. “La política de alza de tasas de interés de LEBACs dispuesta por el BCRA llevó esta tasa a niveles récord (38% anual por colocaciones a 35 días). Como resultado se produjo un sensible aumento del diferencial de tasas pagado por los bancos (en abril en torno al 28% anual en promedio) y la tasa que cobran por adquirir LEBACs (de 38% en abril). El diferencial, que en promedio durante los cuatro meses anteriores al cambio de gobierno era de 5,3 puntos porcentuales, se elevó hasta ubicarse por sobre los 10 puntos porcentuales en marzo y abril de 2016. Es decir, los bancos obtuvieron una rentabilidad extraordinaria sobre las inversiones financieras que realizan con la plata de los ahorristas” (Hagman, Harracá, Wahren, 2016). En el mes de febrero el gobierno extendió al sector minero (bajo control mayoritario de empresas transnacionales) los beneficios de reducción de las retenciones con el anuncio de la eliminación de las mismas para este sector, hasta entonces gravadas con una tasa de 5% anual.

El gobierno dio un paso clave en la implementación de su política económica con la aprobación parlamentaria a fines de marzo de la ley 27.249 que autorizó al Estado argentino el cumplimiento de la sentencia de la justicia estadounidense en relación al pago de la deuda a los “fondos buitres” o

derechos consagrados constitucionalmente. Legitimados por una interpretación laxa de la situación de excepcionalidad estos decretos son, a nuestro entender, un dispositivo muy importante para la reproducción de la gobernabilidad neoliberal. Expresan las tendencias a la concentración/privatización de la autoridad política que caracteriza el ciclo histórico neoliberal y su perdurabilidad es un reflejo de los límites del kirchnerismo respecto a la remoción y transformación de aspectos decisivos del marco jurídico-legal neoliberal heredado de la década de los '90.

holdouts. Esta votación constituyó el primer triunfo parlamentario del gobierno macrista ya que la aprobación de la norma fue posible gracias al voto favorable de un amplio espectro de legisladores que se sumaron su apoyo en ambas cámaras al de los representantes de la alianza oficialista. El proyecto fue aprobado en el Senado con 54 votos a favor y 16 contó con el apoyo del Frente Renovador liderado por Sergio Massa, del Peronismo Federal, del GEN, de distintos partidos provinciales, del espacio UNA y de poco más de la mitad de los senadores que integran el Frente para la Victoria. El mismo contempla el pago en efectivo a los fondos demandantes y a otros *holdouts* con una emisión de 12.500 millones de U\$ en títulos públicos. El 19 de abril el Ministro de Finanzas anunció la colocación de 16.500 millones de U\$ en bonos a 3, 5, 10 y 30 años y a una tasa promedio del 7, 2%, de los cuales 9500 millones de U\$ están destinados al arreglo con los acreedores y el saldo de 7000 millones de U\$ será utilizado para cubrir parte del déficit fiscal. La gran presión política ejercida por el macrismo para lograr la aprobación de la ley y la campaña mediática que la secundó permiten apreciar la importancia que guarda el “relanzamiento” de un nuevo ciclo de endeudamiento en la estrategia económica del gobierno. Este hecho es también revelador de la colusión de intereses de las fracciones más concentradas del poder económico local con los de los circuitos financieros internacionales que buscan oportunidades lo más ventajosas posibles para la valorización del excedente financiero hoy disponible en los mercados mundiales¹³.

¹³ El voto mayoritario en favor de esta ley de los representantes parlamentarios de la fragmentada oposición política recrea en las actuales circunstancias el histórico posicionamiento de los partidos mayoritarios ante las sucesivas crisis de pago y posteriores renegociaciones de deuda encaradas por el Estado argentino desde el período de la “transición democrática”. La referencia al carácter usurario de los fondos buitres (evocada inclusive por algunos responsables políticos de la Alianza Cambiemos) no fue un impedimento para justificar la “inevitabilidad” de esta decisión. Una vez más las fuerzas políticas mayoritarias evitaron cuidadosamente evocar la irresuelta cuestión del origen fraudulento de una parte de la deuda contraída en la época de la dictadura cívico-militar y de sus gravosos intereses cuya inspección parlamentaria aún continúa pendiente. Luego del default de 2002 y con el apoyo político de importantes sectores empresariales el kirchnerismo logró concluir entre 2004 y 2010 sucesivas y arduas negociaciones de reestructuración y canje de deuda permitieron una sustantiva reducción del monto de los intereses. La coyuntura económica relativamente favorable hasta 2012 facilitó al gobierno el cumplimiento de los compromisos asumidos y el pago regular de los vencimientos sin afectar sustancialmente la reproducción del círculo virtuoso de su política económica y social, condensada en los principios de “crecimiento con redistribución y justicia social y movilidad social ascendente”. Sin embargo y ante el cambio de coyuntura económica un elemento de naturaleza jurídica de los acuerdos de canje y reestructuración de la deuda puso en jaque la estrategia kirchnerista. Nos referimos a la cláusula legal de los acuerdos de canje firmados por el gobierno y que fija la jurisdicción de Nueva York y sus leyes como instancia de resolución de controversias. Esto resulta importante para entender la continuidad de las políticas de los distintos gobiernos democráticos en el tratamiento de la deuda, más allá de los matices existentes en cada período. El reconocimiento contractual del Estado argentino de este principio legal opera como un mecanismo que legitima la creciente contracción de la soberanía estatal y la erosión de la esfera democrática. La deuda aparece entonces como un instrumento que cíclicamente promueve la intervención estatal para promover y reproducir la mercantilización de la esfera pública. En medio de la crisis desencadenada por el “fallo Griesa” el kirchnerismo desplegó una activa ofensiva económico-legal y diplomática tendiente a contrarrestar y/o atenuar los efectos de esta medida. En septiembre de 2014 logró aprobar en el parlamento la ley 26.984 de “Pago soberano y reestructuración de la deuda” que reabría el canje de la deuda para lograr un nuevo acuerdo con los acreedores que no se habían acogido a los canjes anteriores. Esta ley, que fue dejada sin efecto en 2016 por la ley impulsada por el gobierno de Macri, establecía la supremacía de la legislación y de la jurisdicción nacional argentina para la realización del canje. Este acto constituía tentativa legal de recuperación de la soberanía nacional en este ámbito, pero su eficacia resultó limitada y su oportunidad tardía respecto a la repercusión política y económica del conflicto en curso. En septiembre de 2015 el gobierno promovió y logró hacer aprobar en la

Al cabo de los primeros seis meses de gestión del nuevo gobierno la deuda en dólares creció 27.000 millones (a principios de julio el Tesoro Nacional y el Banco Central acumulan deudas en divisas por 187.000 millones de dólares, es decir 17% más que seis meses atrás).

Un estudio reciente analiza la incidencia de las medidas económicas del gobierno durante los primeros cinco meses de gestión en las transferencias de ingresos al sector empresario. El trabajo distingue entre transferencias directas e indirectas. Las directas, entre las que se contabiliza el traslado de ingresos a los sectores exportadores vía devaluación; hacia los sectores exportadores agrarios y mineros a través de la quita o reducción de retenciones; a los bancos vía desregulación de las tasas de interés; transferencias a compradores de “dólar futuro”, “son financiadas por el Estado ya sea través de la emisión monetaria o de la modificación de la política de recaudación y gasto fiscal” (Hagman, Harracá, Wahren, 2016). Las transferencias indirectas “son las que se producen como consecuencia del shock inflacionario experimentado desde noviembre de 2015 cuyas causas son múltiples” (Hagman, Harracá, Wahren, 2016) y afectan esencialmente a los sectores de ingresos fijos a través del aumento de precios. La investigación concluye que la suma de conceptos de transferencias directas alcanza

“un total de \$ 194.231 millones de pesos (USD 13.392 millones) transferidos de manera directa a sectores empresarios exportadores y bancarios. En tanto las indirectas alcanzan los \$ 86.875 millones (USD 5.991 millones). Al combinar ambas vías se registra que la transferencia de ingresos durante los primeros cinco meses del gobierno de Cambiemos alcanza los \$ 281.106 millones (USD 19.383 millones). Esta suma equivale a USD 1.762 por trabajador ocupado, USD 451 por persona habitante de Argentina; USD 160 millones por día entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2016; USD 7 millones por hora; USD 111.242 por minuto” (Hagman, Harracá, Wahren, 2016).

El aumento de las tarifas de servicios públicos implementado a partir del mes abril es otra ilustrativa expresión de la política oficial de recomposición de la rentabilidad empresarial sobre la base de la transferencia de ingresos de los sectores populares al capital. Ya durante la campaña electoral en 2015 el gobierno había criticado duramente la política de subsidios del kirchnerismo por su doble incidencia: en el incremento del déficit fiscal por un lado¹⁴ y en la falta de inversión en materia energética que obliga a la importación de gas. Los aumentos de electricidad, agua y gas fijados

ONU una declaración a favor del blindaje de los procesos de reestructuraciones de deudas soberanas de las injerencias de los *holdouts*. El texto menciona la "inmunidad soberana" de los Estados frente a tribunales extranjeros y el respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.

¹⁴ Los subsidios tuvieron un impacto fiscal que pasó del 1,4% en 2006 a casi el 4,8% del PBI en 2015.

inicialmente por el gobierno en la Resolución 129 oscilaban entre 300% y 500% según el servicio¹⁵. Sin embargo la combinación de distintos factores¹⁶ hizo que a partir del mes de mayo los/as consumidores/as recibieran facturas con aumentos que, como el caso del gas, trepaban hasta 1500%. El malestar social, sus repercusiones políticas y distintas medidas cautelares judiciales fundadas en el incumplimiento por parte del gobierno de la obligación de realizar audiencias públicas antes de la modificación del cuadro tarifario, convergieron en el cuestionamiento de la política oficial. Distintas organizaciones sociales y representantes políticos de la oposición se pronunciaron exigiendo la renuncia del ministro Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina, accionista de esta empresa y denunciado por beneficiar a esta firma con la compra de gas importado siendo ya ministro, quien sin embargo fue respaldado por el presidente¹⁷. En el contexto de la “crisis tarifaria” y en sus intentos por legitimar esta impopular medida y mientras aguarda un fallo de la Corte Suprema de Justicia que legitime los aumentos el gobierno ensaya un discurso que atribuye el malestar causado por los aumentos a errores “técnicos”. Simultáneamente el presidente Macri despliega una retórica sustentada en valores fundantes de la racionalidad neoliberal: la responsabilización y culpabilización individual de los/las ciudadanos/as (en este caso por el “derroche” irresponsable de energía) y el cuestionamiento a la función social de los servicios públicos esenciales latente en la invocación presidencial a pagar lo que cada uno consume¹⁸. A iniciativa del gobierno el 29 de junio el Congreso sancionó la ley “ómnibus” No. 27.260 promovida por el discurso oficial como un acto de reparación histórica de las deudas previsionales

¹⁵ En el caso del transporte urbano los aumentos significaron un incremento promedio del 150% en el precio de la tarifa.

¹⁶ El frío invierno de 2016, que apunta a ser uno de los tres más fríos de los últimos sesenta y cinco años, incrementó el consumo residencial y comercial termo dependiente. En muchos casos esta situación produjo una “reclasificación” de los/as usuarios/as hacia categorías superiores. Como resultado de esta situación el incremento del valor en la factura (calculado en base al consumo del mismo período en 2015) se vio amplificado por la “penalización” resultante de un aumento del volumen consumido gas. A esto deben sumarse numerosos casos en que el monto de las facturas emitidas por las empresas prestadoras fue calculado con discrecionalidad.

¹⁷ En el mismo acto administrativo por el cual autorizó el aumento tarifario el gobierno fijó un aumento del precio recibido por las petroleras por la venta de gas argumentando la necesidad de incentivar las inversiones para lograr el autoabastecimiento. En momentos en que el costo internacional de producción promedio del millón de BTU de gas es de 1,9 dólares el gobierno llevó de poco más de 2 dólares a casi 5 dólares el precio que reciben las gasíferas. Sin embargo antes del aumento ya existía un valor de 7,5 dólares el millón de BTU para el “gas nuevo”, término utilizado para referir la producción de gas resultante de nuevas inversiones. Con esta decisión y “por el gas entregado al sistema de transporte (boca de pozo) las gasíferas pasarán de facturar menos de 4000 a casi 7000 millones de dólares anuales [...] La síntesis de estos números no demanda grandes abstracciones: el tarifazo del gas empezó con una transferencia a las gasíferas por alrededor de 3000 millones de dólares anuales. Un pase de manos gigantesco que el macrismo ni siquiera consideró necesario justificar más allá de algún balbuceo sobre las inversiones y que, a pesar de la reacción social provocada por las nuevas tarifas, continúa manteniéndose fuera de la discusión” (Scaletta, 2016).

¹⁸ El 11 de julio el presidente Macri señaló “Si están en sus casas en remera y en patas, es porque están consumiendo energía de más [...] a estos niveles de consumo (de energía) no vamos a poder salir adelante”. Ocho días más tarde declaró: “Si hubiese tenido alguna solución alternativa que recuperar, sincerar el valor de los servicios públicos, la hubiese tomado; no hay otra alternativa a que reduzcamos los consumos de energía y que cada uno se haga cargo de pagar sus consumos, excluyendo aquellos que están en situación vulnerable, para los cuales les creamos la tarifa social”.

del Estado con los jubilados. Los gastos originados por el pago de las mismas través de la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados¹⁹ serán financiados con los ingresos fiscales provenientes del blanqueo de capitales aprobado en el mismo texto legislativo impulsado por el gobierno y denominado eufemísticamente como “Régimen de sinceramiento fiscal”²⁰. Por otra parte la ley establece importantes modificaciones en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad²¹ y crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, "que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto". Es posible que esta decisión se refleje próximamente en la propuesta gubernamental de reprivatizar el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente fundado en principios de solidaridad intergeneracional. En este sentido resultan sugerentes las declaraciones realizadas pocos días después de aprobada por el Director Ejecutivo del PAMI (obra social de los jubilados) quien se declaró partidario de aumentar la edad jubilatoria²². Para garantizar el voto favorable de los representantes provinciales en el Senado el gobierno negoció con los gobernadores e incorporó un anexo a la ley que formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15% por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la ANSES. Esto resultó decisivo para la votación de la ley que obtuvo 56 votos a favor y 11 en contra.

Concluimos el repaso de las principales medidas económicas de esta primera etapa refiriéndonos a algunas iniciativas y proyectos que revelan la profundización del modelo de desarrollo extractivo-

¹⁹ La iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional por tres años para que el Poder Ejecutivo realice acuerdos con los jubilados que están en juicio. Según los datos oficiales establecidos en base a los jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron esta medida alcanzará a 2,4 millones de personas.

²⁰ El también llamado “régimen de “exteriorización de capitales” permitirá declarar bienes o divisas que no están declarados ante la AFIP, a cambio del pago de una tasa general del 10%, que en el caso de los inmuebles se reduce al 5% y que es del 0% si se realiza a través de la compra de bonos públicos a tres y siete años. Además, las sumas blanqueadas en efectivo hasta \$ 305.000 también pagarán el 0% y hasta \$ 800.000 el 5 por ciento. Las opciones de blanqueo aprobadas son mucho más generosas con los evasores que las contempladas en el anterior blanqueo impulsado por el kirchnerismo que rigió entre 2013 y 2015 y que sólo permitía blanquear divisas (no pesos) y obligaba a ingresar el dinero del exterior. La nueva ley no exige el ingreso de las divisas al país, sin que esto suponga un costo extra.

²¹ El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino constituye un ejemplo emblemático de la reconfiguración del rol estatal en el ciclo de acumulación de capital promovido por el kirchnerismo. Su reconfiguración y fortalecimiento financiero en 2008 es el resultado directo de la renacionalización del sistema jubilatorio argentino impulsada durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner luego del conflicto y “lock-out” agrario. Esta decisión implicó el traspaso en especies de los fondos de las AFJP al actual Sistema de Reparto administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está compuesto por diversos tipos de activos financieros (títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, etc.).”Los objetivos del FGS son contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la seguridad social y atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales. En definitiva, persigue como objetivo final el constituirse como un fondo de reserva (o anticíclico), a fin de que el FGS pueda atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del Régimen Previsional Público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales” (ANSES, 2016).

²² El 20 de julio dicho funcionario declaró al diario La Nación "las personas de 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando" e incluso acotó que "la medicina recomienda que sigan trabajando".

exportador y su reorientación en beneficio creciente de los grandes capitales transnacionales. Como señalamos oportunamente el kirchnerismo contribuyó a consolidar fuertemente esta matriz, en su modalidad neodesarrollista. La creciente incidencia del agro-negocio y de la minería en la dinámica exportadora son casos emblemáticos de la expansión de este modelo de desarrollo durante la última década. El término “consenso extractivista” ha sido utilizado para explicar la adhesión de gobiernos de diferente sesgo ideológico a este modelo y también para referirse a la promoción de políticas públicas que ampliaron y consolidaron esta matriz productiva. El señalamiento de este rasgo en común no impide sin embargo el reconocimiento de características específicas y/o matices entre las diferentes experiencias, en particular en relación al papel del Estado y las políticas públicas en las formas de apropiación y distribución de las rentas y beneficios generados por dichas actividades y también en relación a las tratamiento estatal de los conflictos socioambientales (Seoane, 2013).

La promoción y profundización del extractivismo agrario-exportador fue ratificada en el discurso pronunciado por Mauricio Macri a pocos días de iniciado su mandato. Durante el acto de anuncio de la citada reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas el presidente señaló a los representantes de los productores agrarios que “Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo. Estoy apostando a la capacidad que tienen de crecer, de duplicar la producción agropecuaria del país”²³. Las transferencias de la renta extractiva se ampliaron poco después con la anulación de las retenciones a las mineras y la decisión de aumentar el precio pagado al sector hidrocarburífero por la producción de gas.

Otra decisión que ilustra la orientación de la política oficial en beneficio del capital transnacional (y que complementa las favorables decisiones tributarias en beneficio del sector agroexportador) fue la modificación establecida por decreto a fines de junio de la Ley de Tierras Rurales. Esta ley había sido aprobada en diciembre de 2011 y estableció restricciones para la venta de campos, fijando el 15% como límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, los territorios provinciales y municipales por parte de extranjeros. Bajo el argumento de facilitar y posibilitar las inversiones en el país el nuevo gobierno flexibilizó los controles dispuestos por esta ley. La medida mantuvo el tope de 15% del territorio nacional y el máximo de cien hectáreas en la zona núcleo (la más productiva) o su equivalente para la compra de tierras por parte

²³ Esta frase había sido pronunciada en ocasiones anteriores en distintos actos de la campaña electoral del PRO. Al concluir la alocución presidencial Pedro Vigneau, vicepresidente de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) uno de los principales lobbies sojeros del país, declaró que “Después de una década de enfrentamientos y descalificaciones, encontrarnos con esa apuesta que busca que saquemos a relucir el potencial que tenemos es más que gratificante” y agregó que “estamos viviendo un día histórico, se está poniendo en marcha nuevamente uno de los motores más importantes del país. Ahora es un momento de mucha responsabilidad y es necesario acompañarla con mucho trabajo. Empoderar al campo, es empoderar al país” (Aapresid, 2016).

de capitales extranjeros. Pero modificó una serie de exigencias que debían cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma. El decreto estableció un período de treinta días para que las provincias definan las “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. Establece que en caso contrario será el Consejo Interministerial de Tierras Rurales el encargado de fijar las equivalencias. El texto también eliminó controles que estaban a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quitó sanciones para los intermediarios y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua. Desde el propio gobierno señalaron que este decreto es un primer paso hacia el reemplazo del régimen vigente por una nueva ley más laxa.

Luego de la anulación de las retenciones mineras las empresas del sector buscan sacar provecho de las condiciones políticas favorables y del aumento relativa del precio internacional de algunos *commodities* mineros. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) fijó el objetivo de “promover la inversión de 20.000 millones de dólares en el sector al año 2021” (CAEM, 2016). Desde este sector empresario se reactivaron algunos viejos proyectos que estaban suspendidos y se promueve nuevos yacimientos. El ejemplo más emblemático del ferviente lobby minero es el nuevo proyecto binacional Constelación presentado a fines de enero en la feria minera de San Juan por la empresa canadiense NGEX Resources. Se trata de un proyecto de explotación de oro, plata y cobre ubicado en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja en San Juan y la III Región de Chile (Atacama) que integra un trío de proyectos ya conocidos (José María, Filo del Sol, Los Helados), todos en manos de la canadiense NGEX, en asociación con una empresa japonesa y Pan Pacific Cooper Co. Este proyecto, el más grande de Sudamérica hasta el momento e incluso superior a Pascua Lama, prevé una inversión inicial de 3.000 millones de dólares y tendría una vida útil proyectada de cincuenta años. Contempla la producción secuencial de una mina a cielo abierto en José María seguida de una explotación en mina subterránea en Los Helados con agua proveniente de un acuífero sanjuanino ubicado a unos 8 kilómetros del sitio propuesto para la planta.

El inicio del mandato de Macri coincidió con el anuncio de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP21) de París. Ya en su discurso de investidura ante el congreso nacional el presidente convocó a los legisladores a ratificarlos y enfatizó la importancia de los mecanismos de mitigación en el abordaje de la crisis climática. La temprana referencia presidencial a este asunto prefiguraba la promoción de políticas de estímulo a la “economía verde”, de “dispositivos orientados a avanzar en un nuevo ciclo de mercantilización de la vida y de la naturaleza” (Seoane, 2015). La promoción de energías renovables en beneficio de

grandes grupos económicos es un ilustrador ejemplo de la activa “militancia verde” del PRO a favor de políticas públicas inspiradas en el “paradigma de capitalización de la naturaleza” (Seoane, 2015). En la actual coyuntura esto cobra una particular significación de cara a las negociaciones internacionales sobre el acceso y la distribución de créditos financieros y recursos destinados a la mitigación del cambio climático. El calendario de las mismas fue acordado en París de cara a la COP 22 que sesionará en Marruecos en noviembre de 2016.

A fines de marzo el gobierno reglamentó por medio de la resolución 531 del Ministerio de Energía y Minería la Ley 27.191 aprobada en 2015 que estableció modificaciones a la ley 26.190 del Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica²⁴. La reglamentación oficial recoge muchas de las sugerencias realizadas por grandes inversores en la Consulta Pública del Programa “RenovAr” y que apuntan a la flexibilización del marco regulatorio de la actividad. La resolución del gobierno fija un aumento de los recursos provenientes del Tesoro Nacional a ser destinados al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías - Renovables (FODER) que serán de doce mil millones de pesos en 2016. También establece hasta 2017 un régimen amplio de exención de aranceles a la importación de equipos, partes, repuestos, componentes y materias primas; la deducción de la carga financiera en el impuesto a las ganancias; exención del Impuesto a los dividendos ante la reinversión en infraestructura. El gobierno también eliminó las restricciones de repatriación de capital para las empresas que operan en el sector. Actualmente la participación de las fuentes de energía renovable en la matriz eléctrica nacional es del 5%. El gobierno pretende elevar esta cifra a 8% a fines de 2018 y alcanzar 20% a fines de 2025. Luego de la reglamentación de la ley el gobierno convocó a la primera subasta pública de este tipo de energía para agosto próximo, con el objetivo de adquirir 1.000 MW (600 mega watts de energía eólica, 300 mega watts de energía solar, 65 mega watts de biomasa, 20 mega watts provenientes de pequeñas plantas hidroeléctricas y 15 mega watts de biogás).

En los primeros seis meses de gestión las medidas de la alianza Cambiemos indujeron una notoria reorientación del ciclo de acumulación de capital en relación al período anterior. Como señalamos arriba el inicio de la nueva etapa se asentó en un fuerte shock neoliberal provocado por la acción convergente de la devaluación del peso (40%), la reducción de las retenciones a las exportaciones, la liberalización del movimiento de capitales, el aumento de las tasas de interés, el relanzamiento del ciclo de endeudamiento externo, la liberalización del movimiento de capitales, la desregulación

²⁴ La ley define como fuentes de energía renovables a las “fuentes de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la Ley 26.093.

de algunos mercados y el aumento de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos. La domesticación y control de la fuerza de trabajo resulta decisiva para el éxito del modelo económico. Esto queda de manifiesto en la ola de despidos masivos en la esfera estatal decidida por el gobierno, los despidos y suspensiones en el ámbito privado que se suceden como consecuencia de la recesión económica y de la presión empresarial y la contención de las demandas sindicales en las negociaciones paritarias. La reorientación de la política exterior guarda también relación con las posibilidades de consolidación del modelo. En relación a esto el gobierno emprendió rápidamente un direccionamiento a favor de alianzas, acuerdos y procesos de liberalización comercial cuya expresión más emblemática es la participación del presidente en la última cumbre de la Alianza para el Pacífico y la incorporación argentina a este pacto como miembro observador. En la misma dirección la política exterior del macrismo busca acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al tiempo que devalúa la participación argentina en los procesos de integración regional como Unasur y CELAC. Sin embargo la entusiasta expectativa gubernamental sobre el acuerdo con los europeos se enfrenta con dos nuevos obstáculos: la inestable situación política brasilera por un lado y la más reciente crisis del Brexit por el otro que pueden entorpecer a corto plazo la firma de esta entente.

Estas políticas reflejan la profundidad de la transformación de la matriz estatal emprendida bajo el gobierno macrista. Esta dinámica también se expresa en la participación mayoritaria de distintas fracciones empresariales en la composición del gobierno. La abrumadora presencia de representantes del poder económico en puestos clave de gestión estatal fue puntualmente analizada en una investigación que caracteriza al gabinete macrista “como el equipo económico o de los gerentes o de los CEO” (CIFRA-FLACSO, 2016). El trabajo señala que “dentro de la fracción hegemónica hay una sobrerrepresentación de los bancos transnacionales y de las firmas que integran el oligopolio petrolero en el país y de las distribuidoras de electricidad dentro de los funcionarios que ocupan el aparato del Estado. Al mismo tiempo hay una marcada falta de representación de firmas industriales extranjeras, lo cual preanuncia la implementación de políticas tendientes a profundizar la “reprimarización” de la economía con los consecuentes pero por el momento potenciales conflictos dentro de la propia fracción hegemónica porque se trata de una actividad con una elevada participación de los capitales foráneos. En síntesis, la situación del gobierno actual conducido por los sectores dominantes no sólo se distingue porque accedió mediante una elección democrática sino también porque su fracción hegemónica está constituida por bancos transnacionales y empresas extranjeras, especialmente ligadas a la producción y distribución de energía. Es decir, se trata de una administración que está bajo la égida del capitalismo transnacional, razón por la cual no es dable esperar de la misma sino políticas de corte

netamente ortodoxo cuya aplicación estará signada de conflictos sociales que no solamente tendrán como protagonista a los sectores populares que buscan disciplinar sino también a otros dentro del mismo bloque de poder e incluso dentro de la fracción hegemónica” (CIFRA-FLACSO, 2016).

2.2 La conflictividad social y las luchas populares durante los primeros meses del gobierno de Macri.

El año 2015 estuvo marcado por una tendencia general descendente de la conflictividad social respecto a los años anteriores. Las demandas sociales frente a la crisis quedaron en cierta medida “encapsuladas” por la extensión del ciclo electoral. Los datos sobre evolución del conflicto socio-laboral elaborados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ilustran esta tendencia: tanto el número total de jornadas individuales no trabajadas como el promedio de jornadas por huelguista resultaron los más bajos desde 2011 (MTESS, 2015). En este contexto de retracción relativa de la protesta social tuvo lugar la histórica y masiva movilización “#Ni una menos”. Esta marcha “violeta” fue convocada por movimientos y colectivos de mujeres para denunciar la violencia de género contra las mujeres reflejado en el alarmante aumento del número de femicidios cometidos en el país²⁵ y resultó uno de los hechos más destacados de la movilización social durante 2015.

La implementación del shock neoliberal y su particular inscripción bajo la modalidad de despidos masivos en el ámbito estatal modificaron la dinámica de la conflictividad social, que aumentó visiblemente en la primera mitad del 2016. El repaso de esta evolución permite identificar dos momentos o “ciclos cortos” que presentan características distintivas en relación a la naturaleza de los reclamos, de los sujetos y de las formas de acción. El primer momento se extiende de diciembre de 2015 a abril de 2016 y se distingue por una mayor gravitación relativa de la protesta sindical de sectores asalariados. El segundo período se despliega entre mayo y julio y se distingue por la irrupción de las protestas contra el “tarifazo”. Repasemos brevemente las principales características de cada uno.

La política socio-laboral del nuevo gobierno debutó con la ya referida ola de despidos masivos en el ámbito estatal, decidida a través del decreto 254/2015 mediante el cual el gobierno dispuso la

²⁵ La página de Internet de esta iniciativa precisa que “es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la necesidad de decir “basta de femicidios”, porque en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer”. La masividad de la iniciativa (que abarcó la Ciudad de Buenos Aires y las principales ciudades del país) y su repercusión política en el contexto de la campaña electoral expresan la legitimidad de los reclamos y ponen de manifiesto la agudización de la violencia del sistema patriarcal contra las mujeres y los/as niños/as como rasgo particular de la crisis civilizatoria del capital.

revisión de contratos de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, así como de los procesos de selección en planta permanente llevados a cabo en años anteriores a través de concursos. La ofensiva gubernamental contra los/as trabajadores/as públicos desató una ola de conflictos, reclamos y protestas de alcance nacional encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (afiliada a la CTA) que tuvo su epicentro en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires. Los reclamos de trabajadores estatales desembocaron en la realización de la primera huelga nacional de ATE realizada el 19 abril en momentos en que el gobierno cifraba en 10.000 el número de trabajadores/as cesanteados y el sindicalismo denunciaba cifras aún mayores. Un mes más tarde ATE realizó un nuevo paro el 24 de mayo con marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura de paritarias y contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional votada por el congreso. También en abril los/as trabajadores/as de ATE de la Provincia de Buenos Aires realizaron un paro de cuarenta y ocho horas al cual se plegaron otros gremios como CICOP (salud) y la Asociación Judicial Bonaerense contra el plan modernización estatal impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Asimismo el sindicato presentó un amparo sindical en la justicia cuestionando la constitucionalidad del decreto 254/2015 y denunciando "la violación de la estabilidad, el derecho a la información y el derecho humano a no ser discriminado por la filiación política, gremial o ideológica".

En el marco del ciclo de negociaciones paritarias durante este primer período se registraron distintas medidas de fuerza por aumentos salariales, contra los despidos y cesantías. Entre los conflictos más importantes cabe mencionar los paros de transporte, los trabajadores petroleros en la Patagonia, el paro bancario contra los despidos en el sector y los paros docentes, de trabajadores/as de la Salud y judiciales que abarcaron diez provincias. También hubo conflictos contra despidos en la industria de la construcción y de camioneros por encuadre sindical. Los propietarios y sindicatos de choferes de taxi realizaron protestas y bloqueos de calles contra la empresa multinacional Uber que busca instalarse en el país. En Tierra del Fuego se desarrolló un intenso y prolongado conflicto (de más de cien días) encabezado por trabajadores/as estatales que bloquearon el edificio de la gobernación en reclaman la derogación de un paquete de leyes fiscales y previsionales sancionado en enero, a propuesta de la gestión entrante de la gobernadora Rosana Bertone (Frente para la Victoria). El desarrollo del conflicto estuvo marcado por una violenta represión y el arresto de dirigentes sindicales. También en la provincia de Santa Cruz tuvieron lugar en el mes de abril varios paros y piquetes de trabajadores estatales en reclamo de aumentos salariales al gobierno de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).

Las negociaciones colectivas estuvieron desde el inicio fuertemente condicionadas por la política oficial de no homologar aumentos salariales superiores al 20%-25%, en base a sus proyecciones sobre la evolución de la inflación. Sin embargo el sostenido incremento de la misma y la presión sindical explican la conclusión de distintos acuerdos que desbordaron las pretensiones iniciales del gobierno. Distintas estimaciones sitúan en torno al 30% los aumentos promedios con una tendencia marcada por el deterioro de los haberes de los empleados públicos, el sector más perjudicado. La mayoría de los gremios tuvieron que aceptar una mayor segmentación de los aumentos que se ven erosionados por un índice de inflación oficial que en el mes de mayo se ubicó en 4,2% al mes de mayo y previsiones que oscilan entre 36% y 42% en la estimación de la inflación anual a fines de 2016.

Este primer período marcado por la impronta mayoritariamente sindical de los conflictos (especialmente en el sector público) culmina con el masivo acto sindical organizado por las CGT Azopardo liderada por el líder camionero Hugo Moyano, la CGT Balcarce conducida por el metalúrgico Antonio Caló (de extracción kirchnerista), y las CTA Autónoma (kirchnerista) y de los Trabajadores (disidente del kirchnerismo). El acto se realizó el 29 de abril en conmemoración del día del trabajador/a y contó con la participación de distintas organizaciones territoriales y de desocupados/as, de trabajadores/as de empresas recuperadas, fuerzas políticas de izquierda y distintas agrupaciones kirchneristas y fue la mayor manifestación convocada por los sindicatos en las dos últimas décadas. Las centrales sindicales centraron sus reclamos en la reforma del impuesto a las ganancias (promesa realizada por Macri durante la campaña electoral que suscitó el apoyo abierto y/o la expresión simpatía a su candidatura por parte de importantes dirigentes sindicales peronistas), en el rechazo a los despidos en el sector público y privado, contra la inflación y en demanda de la aprobación del proyecto de ley de emergencia ocupacional. Sin embargo luego de esta demostración de fuerza las centrales sindicales cegetistas fueron reticentes a llevar adelante el plan de lucha anunciado, luego de que el presidente Macri vetara la ley laboral aprobada previamente por el congreso. Dos factores gravitan en la actitud adoptada por el sindicalismo cegetista. En primer lugar las tensiones que existen entre las distintas corrientes del sindicalismo peronista en el marco de las negociaciones en curso para la reunificación de la CGT prevista para el mes de agosto. Por otra parte y luego de la manifestación sindical el gobierno tendió puentes de negociación con la burocracia sindical con el objetivo de “descomprimir” la situación, aunque esto no significara poner en discusión el rumbo de las políticas socioeconómicas. Para ello el gobierno

se comprometió a concretar prontamente la devolución de la histórica deuda con las obras sociales de los gremios cegetistas²⁶.

Si bien la impronta sindical de las protestas fue un signo característico de estos primeros meses, durante este período también se registraron acciones y movilizaciones impulsadas por organizaciones socio-territoriales. Muchas de estas fueron originadas por las supresiones, recortes y reestructuraciones de los planes y programas sociales impulsados por el gobierno, en especial en la Provincia de Buenos Aires.

En el segundo trimestre el fuerte impacto del aumento tarifario (en especial de gas) aparece como un eje importante de articulación de las demandas y reclamos sociales. Se registran también sin embargo importantes conflictos sindicales en un contexto que está sin embargo marcado por la conclusión (provisoria) de la mayoría de las negociaciones paritarias. Como consecuencia de la presión social y de distintos sectores políticos como así también a raíz de distintas decisiones judiciales adversas a la política oficial, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el aumento gasífero.

A mediados de mayo tuvo lugar una masiva marcha en defensa de la universidad pública en la ciudad de Buenos Aires realizada en el marco de una jornada de protesta y paro nacional convocado por todos los sindicatos del sector (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera) en reclamo de un 40% de aumento salarial. La inmensa movilización de estudiantes, profesores, no docentes y autoridades universitarias contó con la activa adhesión de las federaciones estudiantiles (FUA, FUBA, FULP, entre muchas otras) y las escuelas preuniversitarias y finalizó en Plaza de Mayo. El 3 de junio se realizó la segunda marcha “#Ni una menos” que logró nuevamente una importante convocatoria aunque con una sensible disminución de la participación de sectores hoy oficialistas que el año precedente, y en el marco de la campaña electoral, habían convocado a esta marcha.

Durante los meses de mayo y junio se suceden marchas y protestas contra los efectos del tarifazo convocadas por distintas organizaciones sociales, barriales, culturales y de pequeños comerciantes. A fines de junio la CTA Autónoma encabezó en la ciudad de Buenos Aires una protesta denominada "frazadazo" en repudio al aumento de tarifas de servicios públicos que replicó las acciones

²⁶ La deuda, de casi 30 millones de pesos, corresponde al denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Los gremios presionan al gobierno para que la decisión oficial de reparto de los recursos de este fondo se efectivice antes del 5 de agosto, fecha prevista para la realización del plenario de unidad cegetista en el que se definirán los lineamientos centrales de la posición política que asumirá la central “unificada”.

realizadas en las semanas previas en Mendoza y en las localidades bonaerenses de La Plata, Azul y Tandil. Esta dinámica se proyectó nacionalmente con la realización el 14 de julio de la primera jornada de protesta nacional contra el gobierno de la que participaron organizaciones sociales, territoriales, barriales, partidos de izquierda y sectores kirchneristas nucleados en la “Multisectorial contra el tarifazo”²⁷. El “ruidazo” tuvo un importante acompañamiento en las principales ciudades del país a pesar de no haber contado con la adhesión de los gremios cegetistas. Esta acción permitió consolidar procesos de convergencia entre distintas organizaciones sociales que se potenciaron amplificando la visibilidad y efecto de esta acción de alcance nacional. El 20 de julio se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires un “ollazo” convocado por las distintas organizaciones que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie. Estos colectivos instalaron ollas populares en cien puntos de la ciudad para reclamarle al jefe de Gobierno porteño la ejecución de los presupuestos sociales. La protesta con ollas populares acompañadas de piquetes buscó dar visibilidad a la dura situación que están pasando los desocupados y trabajadores informales de la ciudad.

El tratamiento crecientemente represivo y judicial de la protesta social es otro signo distintivo de la política macrista en su pretensión de controlar las tensiones sociales y domesticar la fuerza de trabajo para garantizar la reproducción de las condiciones de dominación que requiere el modelo del “Estado empresario” de la alianza Cambiemos. En esta esfera las estrategias de gobernabilidad neoliberal del macrismo se asientan en la combinación de distintas herramientas tendientes a reforzar la política de destitución de lazos sociales solidarios que “se conforma a través de la construcción de la vivencia de indefensión” (Murillo, 2015).

La primera ola de despidos de trabajadores/as estatales fue acompañada de una virulenta campaña gubernamental que invocaba la impostergable tarea de una depuración de “ñoquis”, “vagos” y de “grasa militante” en las distintas reparticiones públicas²⁸. La legitimidad inicial del gobierno le permitió avanzar con numerosos despidos arbitrarios. El discurso de los funcionarios amalgamó la denuncia contra el “crecimiento irracional” del empleo público, «corrupción» kirchnerista y estigmatización de los/as trabajadores estatales para legitimar flagrantes arbitrariedades. Por otra parte en el mes de febrero el Consejo de Seguridad Interior aprobó un nuevo protocolo de seguridad

²⁷ El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Rosario definió a las “multisectoriales” como “espacios horizontales, a los que se suman los que sufren el impacto de una política económica que está haciendo estragos en la actividad del mercado interno y el empleo”.

²⁸ La estrategia de descalificación de los/as trabajadores es un rasgo distintivo de la gobernabilidad neoliberal, presente en particular en las políticas de flexibilización laboral. Por medio de la estigmatización se pretende no solo la reproducción de un “consenso social” hostil a los/as trabajadores/as sino también la propia producción y reproducción de una subjetividad autoculpabilizante.

para regular piquetes o cortes de ruta que prevé un claro endurecimiento de los mecanismos disuasivos y represivos utilizados en los veinticuatro casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias entre los meses de enero y junio (más de un caso de desalojo violento de protestas por semana) (CTA, 2016)²⁹. Un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA, que abarca el período de enero a junio de 2016, relevó el incremento de acciones represivas contra medidas gremiales: dispersión violenta de las marchas, detenciones de los manifestantes –que en muchos casos fueron judicializados– despidos de activistas sindicales en distintas empresas y restricciones al derecho de huelga. También en relación a esta cuestión hay que citar el preocupante fallo de la Corte Suprema en el que este tribunal sostuvo que los paros sólo pueden ser convocados por organizaciones sindicales que cuenten con el reconocimiento del Estado –ya sea por tener personería gremial o inscripción simple–. Se debilita así a la acción de los trabajadores que comienzan a organizarse, a los precarizados, a los que no tienen un sindicato que los represente o integran comisiones opositoras a la conducción. El informe señala que los trabajadores del Estado “fueron los que sufrieron la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represión y criminalización de la protesta” y da cuenta de la detención de treinta y cinco dirigentes sindicales desde el inicio del año (CTA, 2016)³⁰.

La evolución de algunos indicadores socioeconómicos expresa la amplitud de las consecuencias sociales de la política económica del gobierno. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina “la proporción de población bajo la línea de pobreza habría aumentado de 29% a 32,6% entre el 4to trimestre 2015 y principios de abril de 2016 (generándose un incremento de aproximadamente 1,4 millón más de pobres, llegando en torno a los 13 millones las personas en situación de pobreza en la actualidad)” (UCA-ODSA, 2016). En relación a los despidos producidos el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informa que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 hubo 141.542 despidos. El 52% del total correspondió a trabajadores/as del ámbito privado y el 48% restante a empleados/as del Estado (CEPA, 2016). Según el “índice de inflación del movimiento obrero” elaborado por el CITRA (Centro de Innovación de los Trabajadores) de la Universidad Metropolitana de los Trabajo (UMET) la inflación promedio que afectó a la clase trabajadora se ubicó en mayo en 44,1 por ciento interanual (Página 12). En este contexto distintos

²⁹ La masividad de algunos conflictos y manifestaciones impidió sin embargo el uso del protocolo y el gobierno se vio obligado en los hechos a tolerar las acciones de protesta.

³⁰ El caso más emblemático durante el período es la detención y encarcelamiento a mediados de enero de la dirigente social kirchnerista Milagro Salas de la agrupación Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. Este hecho estuvo inicialmente viciado de irregularidades procedimentales desde el punto de vista jurídico. Tanto el gobernador de dicha provincia, el radical Gerardo Morales, como el gobierno nacional acusan a esta dirigente de haber derivado fondos destinados a diferentes planes sociales en provecho personal y de su agrupación. A principios de marzo el Grupo de Trabajo de sobre detención arbitraria de NN.UU. solicitó por escrito al gobierno la inmediata liberación de Salas quien aún continúa detenida.

sindicatos del sector público y privado solicitaron la apertura de nuevas paritarias y preparan acciones para reclamar por mejoras laborales, en particular los gremios del sector público bonaerense. Los/as trabajadores estatales nucleados en ATE anunciaron un nuevo paro para inicios de agosto y los gremios del transporte también advirtieron sobre la realización de un paro nacional. Estos anuncios y las previsiones de evolución de la situación socioeconómica en el segundo semestre prefiguran un escenario de intensa disputa de las clases populares. Este potencial escenario renueva el desafío de consolidar los procesos de convergencia contra el ajuste sobre la base de recrear prácticas democráticas que permitan potenciar la politicidad de las demandas de las clases subalternas y contrarrestar los efectos de las políticas neoliberales de mercantilización/privatización de los distintos ámbitos de existencia social. Las recientes experiencias de las multisectoriales contra el tarifazo y la confluencia de las luchas de distintos movimientos territoriales emergen como horizonte de prácticas de convergencia que deberá sin duda nutrirse de la capacidad de resistencia del movimiento obrero y de sus tradiciones combativas y democráticas.

3. A modo de conclusión

El recorrido por los hechos y características más salientes de la conflictividad social en el actual período nos permite observar su compleja evolución en un contexto marcado por la adversidad y por el fortalecimiento de las políticas represivas. Sin embargo esto no es un obstáculo infranqueable para la proliferación de una intensa acción reivindicativa de las clases populares. La legitimidad del modelo de dominación neoliberal logró reconquistar indudablemente un terreno importante en Sudamérica, sin que esto se traduzca necesariamente en un estancamiento de las reivindicaciones populares. Esta constatación es importante para poder delimitar con precisión los alcances y los efectos del agotamiento de un período o ciclo político de transformaciones democráticas que condensó en la experiencia de los gobiernos “progresistas”. Seguramente el eclipse de este ciclo no supone la clausura de las resistencias. Creemos que las promesas aún no cumplidas de estas experiencias y las resistencias a la dominación neoliberal pueden condensarse en la recreación de una potencia plebeya hoy aún latente, pero presente en las múltiples resistencias.

La reactivación de las perspectivas emancipatorias no puede pensarse escindida de la materialidad de las resistencias y de las luchas. Es allí donde prioritariamente pueden procesarse los balances de las experiencias recientes, sus límites y sus potencialidades. En este terreno los debates, aportes y controversias sobre el rumbo de las experiencias gubernamentales y los procesos sociales nutrieron el horizonte de reflexión. Las reflexiones sobre los límites políticos, ecológicos, económicos y sociales de los actuales modelos de desarrollo son un emblemático ejemplo de estos avances

conceptuales. En igual sentido debe mencionarse cuestiones relativas a las formas de trabajo y producción común para el Buen Vivir, la reconceptualización de la democracia, la crítica al productivismo capitalista y al patriarcado, la revalorización de la pluriculturalidad, entre tantas otras cuestiones. Pero también es en el terreno de las luchas, como lo demostró el camino recorrido desde fines de los '90, donde se gestan nuevas y originales formas de sociabilidad, de relaciones intersubjetivas antisistémicas que permiten recrear la dimensión emancipatoria de las resistencias y que prefiguran los contornos de los nuevos proyectos societales. La crisis de las experiencias progresistas nos indica que los proyectos de transformación social no pueden limitarse a la tarea de distribuir más justamente la riqueza socialmente producida (aunque la experiencia histórica latinoamericana demuestra que cualquier programa en ese sentido, por más modesto que sea, requiere de un fenomenal proceso de politización de las clases populares). La crisis ecológica del patrón de poder dominante hace ya incompatible la reproducción de la vida en el planeta con las formas de producción (y distribución) de riqueza asociadas al patrón hegemónico de consumo. Necesitamos entonces (re)construir otro mundo sobre la base de nuevas racionalidades que promuevan la extinción de la racionalidad neoliberal de mercado como horizonte de sentido común.

Referencias bibliográficas

García Linera, Álvaro “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica” en 2016 *IDeAL-Izquierda Democrática en América Latina*

Disponible en:

<https://www.facebook.com/Izquierda-Democr%C3%A1tica-En-Am%C3%A9rica-Latina-IDEAL-1650346348535005/>

Lander, Edgardo 2016 *La implosión de la Venezuela rentista*, Caracas: mimeo.

Murillo, Susana 2008 *Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón*, Buenos Aires: CLACSO.

Murillo, Susana “Biopolítica y procesos de subjetivación en la cultura neoliberal” en Murillo, Susana (coordinadora) 2015 “*Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en la Argentina y América Latina*”, Buenos Aires: Editorial Biblos.

Seoane, José, Taddei, Emilio, Algranati, Clara 2013 *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*, Buenos Aires: Herramienta-El Colectivo-GEAL.

Seoane, José “El sabor amargo del crecimiento económico: la expansión del modelo extractivo entre 2003 y 2008” en Seoane, José, Taddei, Emilio, Algranati, Clara 2013 *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*, Buenos Aires: Herramienta-El Colectivo-GEAL.

Seoane, José “La reformulación neoliberal de la cuestión ambiental: una genealogía del paradigma de capitalización de la naturaleza” en Murillo, Susana (coordinadora) 2015 “*Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en la Argentina y América Latina*”, Buenos Aires: Editorial Biblos.

Taddei, Emilio 2015 *Sudamérica: crisis y tentativas de recomposición del consenso neoliberal*, mimeo. Ponencia presentada en el VIII Coloquio Internacional Marx y Engels, julio 2015, Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP).

Taddei, Emilio 2016 « Fin du gouvernement kirchneriste et tournant néolibéral » en Compagnon, Olivier y Geoffray, Marie Laure *Amérique Latine : Annuaire 2015-2016*, París: La Documentation Française, en prensa.

Informes y estudios

CEPA 2016 *Análisis sobre la evolución del empleo durante la gestión de Cambiemos. Los cambios en la medición del SIPA*

Disponible en:

<http://centrocepa.com.ar/analisis-sobre-la-evolucion-del-empleo-durante-la-gestion-de-cambiemos-los-cambios-en-la-medicion-del-sipa/>

CEPAL, 2015a *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*.

Disponible en:

<http://www.cepal.org/es/publicaciones/38713-estudio-economico-america-latina-caribe-2015-desafios-impulsar-ciclo-inversion>

CEPAL, 2015b *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2015. La crisis del comercio regional: diagnóstico y perspectivas*

Disponible en:

<http://www.cepal.org/es/publicaciones/39010-panorama-la-insercion-internacional-america-latina-caribe-2015-la-crisis>

CIFRA-FLACSO 2016 *La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos*

Disponible en:

https://www.cta.org.ar/IMG/pdf/la_naturaleza_politica_y_economica_de_la_alianza_c.pdf

Hagman, Itai, Harracá, Martín, Wahren, Pablo 2016 *Transfiriendo al capital. Transferencia de ingresos al sector empresario. Diciembre 2015-abril 2016.*

Disponible en:

<http://itai.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/Transfiriendo-al-capital-Mayo-2016.pdf>

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 2015 *Base de datos sobre conflictos laborales*

Disponible en:

<http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/ConLab/>

Observatorio del Derecho Social CTA *Informe sobre prácticas antisindicales (Julio 2016)*

Disponible en:

<http://www.obderechosocial.org.ar/>

Universidad Católica Argentina-Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA-ODSA) *Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana. 2010-2015. Tiempos de balance.*

Disponible en:

<http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf>

Artículos de prensa

Scaletta, Claudio « Desmadre y costos »

Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-304130-2016-07-13.html>

Sitios web citados

Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa)

www.aapresid.org.ar

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)

www.anses.gob.ar

CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros)

www.caem.com.ar

Luchas territoriales y estado en la posconvertibilidad (2002-2015): extractivismo, criminalización/compensación y resistencias sociales en experiencias concretas de Río Negro y Neuquén

Ayelén Penchulef, Victoria Naffa, Ángel García, Yamai Zapata, y Mariana Giaretto

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.

Resumen

En este trabajo presentamos una primera aproximación teórico-empírica de las relaciones entre luchas territoriales y Estado, desde experiencias concretas de las provincias de Río Negro y Neuquén en el período que va de 2002 a 2015.

Cuando nos referimos a luchas territoriales, estamos focalizando en los modos de organización y resistencia colectiva que los sectores subalternos despliegan para defender y enfrentar la ofensiva del capital en sus territorios. De allí que, el territorio en disputa, sea problematizado en términos de territorialidades y de territorialización (Porto Gonçalves, 2013) y las luchas territoriales sean consideradas como una totalidad compleja.

En nuestra región el impacto de la ofensiva extractivista (Seoane, 2012) ha implicado la reconfiguración de formas de organización, resistencia y rebelión contra la explotación intensiva de los bienes comunes, particularmente frente a explotaciones hidrocarburíferas, fracking y megaminería en las que intervienen los diferentes poderes y niveles del Estado, tanto en la producción de conocimientos orientados a esas áreas, en la legislación de las normas requeridas, como en la disponibilidad de los recursos económicos y represivos que garanticen dichas explotaciones. En este sentido, nuestro foco de análisis son los procesos de criminalización (Korol y Longo, 2009) de quienes protagonizan estas luchas territoriales, así como las políticas de compensación económica directas y/o indirectas que despliega el Estado para neutralizar los conflictos (Gudynas, 2012).

Las experiencias de criminalización que analizamos corresponden a conflictos por tomas de tierras en Cipolletti, Fiske Menuco y Plottier, conflictos socio-ambientales generados en torno a la ampliación de la frontera hidrocarburífera en las ciudades de Neuquén y Allen y el caso de criminalización por saqueos al Movimiento Social y Cooperativo 1° de Mayo en Bariloche.

Metodológicamente apostamos a una construcción del conocimiento que avanza de forma espiralada, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y en contacto permanente con los grupos de referencia, reflexionando y construyendo datos que aporten a los procesos de lucha y sus necesidades (Fals Borda, 2012:311). El abordaje supone la triangulación de modalidades de relevamiento y de reconstrucción de situaciones y procesos.

Nos proponemos identificar rupturas y continuidades de las políticas de Estado en los distintos conflictos territoriales. Al mismo tiempo, la recuperación de estas luchas territoriales de manera articulada y de sus relaciones con el Estado, apunta a problematizar el blindaje ideológico que escinde la cuestión ambiental de la cuestión habitacional y estas de la defensa de los territorios indígenas, todas ellas tienen como base el derecho a la existencia y su combinación tiende puentes en el terreno del debate del pensamiento crítico y la acción de los movimientos sociales.

Introducción

La configuración de América Latina como territorio de subsunción al capital, se manifiesta en la expansión territorial, la ampliación del despojo, la proletarianización de poblaciones enteras, la disgregación de la comunidad rural, la ruptura de lazos protectores de la autosuficiencia material y la incorporación de naturaleza y trabajo en los circuitos de valorización, todas ellas pueden ser consideradas tendencias en el despliegue de esta subsunción (Roux, 2008). La expansión del capital entonces, se realiza a través de dos grandes procesos: el incesante aumento de la explotación del trabajo asalariado y la continua transfiguración de la acumulación por desposesión, para lo que el control territorial se torna indiscutible condición de posibilidad.

Entonces, la particularidad del capitalismo dependiente y los modos en que se expresan estos mecanismos de expansión del capital en América Latina se amalgaman en lo que hoy conocemos como la ofensiva del extractivismo capitalista, que implica la acumulación de capital basada en la explotación de la naturaleza, en gran parte, de lo que se denomina recursos no renovables (minería y petróleo), así como en la expansión de las fronteras agrarias hacia territorios denominados improductivos que permiten la implantación de agronegocios (Svampa 2012).

Los estados intervienen activamente en políticas de integración económica que posibilitan y garantizan la acumulación y reproducción del capital siendo los principales protagonistas de esta nueva tendencia de imposición capitalista. De esta manera, se configura un modo de acumulación que se cristaliza en megaproyectos de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, como es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

En la Argentina, las políticas económicas de la posconvertibilidad -incluimos la gestión de Duhalde y las kirchneristas- lograron revertir la recesión de fines de los noventa desviando el costo de la crisis de acumulación de 2001 sobre los sectores trabajadores. Si durante los años noventa la modalidad de disciplinamiento para controlar el costo salarial combinaba convertibilidad/desocupación, en la posconvertibilidad la modalidad combina inflación/precarización laboral (Grigera y Esquenazi, 2013). Entonces si los sectores populares son 'incluidos' mediante la precarización laboral, resulta lógico que hablemos de precarización habitacional en lo que respecta al acceso a la vivienda.

Así es que, bajo el signo kirchnerista se planteó un giro productivista en las políticas públicas, y las políticas urbanas tendientes a valorizar el ambiente construido, no sólo han sido una manera de reducir el desempleo, sino que también han servido para absorber los excedentes de capital que permitieron la reactivación de la economía y su crecimiento sostenido en base a la profundización de las políticas extractivas exportadoras.

Acumulación y extractivismo en el norte de la Patagonia

La expansión mundial de las relaciones sociales de producción capitalista, es un proceso complejo en el que la acumulación de capital requiere avanzar en la desposesión de los medios de subsistencia de gran parte de la humanidad, al mismo tiempo que amplía incesantemente la explotación del trabajo bajo la forma salarial. En este marco se da lo que llamamos ofensiva extractivista, un proceso social de apropiación privada por parte de grandes corporaciones empresarias –incluidas las empresas estatales capitalistas- de bienes naturales que son de propiedad común, privada individual o pequeña y sirven a la reproducción de la vida social y/o constituyen el hábitat territorial (Seoane, 2012, p.5). Agronegocios, megaminería y fracking son los rostros más visibles de esta ofensiva extractivista, pero también incluye megaproyectos de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, además de mega-emprendimientos turísticos que arrasan territorios para reconfigurarlos subordinándolos a la lógica del capital.

Si entendemos al modo de acumulación como el modo de existencia histórico que nos permite comprender las especificidades de la acumulación de capital bajo determinadas condiciones concretas (Hirsch, 1992), esto quiere decir que la producción, la circulación, la distribución y el consumo presentan características particulares que garantizan la reproducción ampliada del capital (Marx, 2004), entonces veamos cómo se dio este funcionamiento del ciclo global del capital en la Argentina posconvertibilidad.

Junto a las bases sentadas por las transformaciones estructurales de los 90', una condición fundamental para entender cómo se acumuló capital a partir de 2003 es el incremento de la demanda de commodities en el mercado mundial a partir de la incorporación de China e India. La posibilidad de revertir el déficit fiscal estuvo fuertemente ligada al superávit comercial que generó este crecimiento sostenido de exportaciones, en especial de soja, pero también en menor medida de minerales e hidrocarburos.

La economía argentina profundizó su subordinación al mercado mundial, en base a un crecimiento desigual y dependiente. Dependiente, porque el triángulo simbiótico basado en superávit comercial/superávit fiscal/tipo de cambio alto con acumulación de reservas estuvo fuertemente

anclado a la necesidad de crecimiento sostenido de las exportaciones supeditado a la competitividad de la producción local y de las condiciones externas (Grigera y Esquenazi, 2013: 182). Desigual porque los desequilibrios entre sectores de la estructura productiva reforzaba esta dependencia, mientras que el sector agroindustrial (cereales y oleaginosas) creció a tasas muy altas, el sector de energía y petróleo sufría un sostenido descenso (Astarita, 2010) que terminaría en la crisis energética y en un fuerte impacto en toda la estructura productiva a partir de 2010.

El ‘modelo’ se basó en un crecimiento con tipo de cambio alto, cuya variable de ajuste fue la precarización de la fuerza de trabajo que rondó en un promedio del 36%. Por eso, como adelantábamos en la introducción, bajo la convertibilidad predominó una modalidad de control del costo salarial basada en la combinación del disciplinamiento monetario junto a elevadas tasas de desempleo, mientras que en la posconvertibilidad la modalidad de control salarial combinó la dinámica inflacionaria con la precarización laboral (Grigera y Esquenazi, 2013).

Bajo cierto manto neodesarrollista, nos encontramos con un modo de acumulación basado en una reorientación de las exportaciones en base a *commodities* producidos por los capitales más concentrados de la industria. En síntesis:

“(...) la acumulación de capital se desarrolló a partir de una fuerte ganancia de competitividad en los inicios de la post-convertibilidad, como resultado del aumento del tipo de cambio real, la depreciación del salario, el cambio en los precios relativos y el alza de precios de las *commodities*, aprovechando los avances en la reestructuración capitalista en los ‘90” (Salvia, 2015: 2).

Veamos cómo se dio la acumulación de capital en el norte de la región patagónica.

La historia de nuestra región es una historia en la que el despojo no se reduce a un momento del pasado, sino que una y otra vez transmuta en múltiples formas violentas de apropiación, subordinación y destrucción de territorios. En la última década, la frontera hidrocarburífera ha avanzado sobre tierras del Alto Valle en las que tradicionalmente se ha desarrollado la fruticultura, y también sobre tierras de la meseta y precordilleranas destinadas a la producción ganadera, especialmente ovina y caprina en manos de pequeños productores.

Diversas fuentes nos permiten constatar que esta ofensiva unifica a las dos provincias en un mismo territorio, un territorio en el que impacta la ofensiva extractivista y emergen las tensiones propias de procesos económicos que imponen una lógica de despojo, saqueo y violencia.

En la provincia de Río Negro, la explotación de minas y canteras es la actividad de mayor importancia relativa entre los sectores productores de bienes, ya que en términos de generación de valor contribuye con el 15% del PBG (Producto Bruto Geográfico). Dentro de las actividades mineras, la exploración y explotación de petróleo y gas son actividades de gran relevancia en la provincia. En 2013 Río Negro produjo 1.662 millones de metros cúbicos de gas y 2,44 millones de

metros cúbicos de petróleo, equivalentes al 4% y al 7,5% de la producción total del país, respectivamente.³¹

Según Rodil, desde el año 2013 “(...) se experimenta un avance acelerado de la extracción de gas y petróleo (con más de 70 pozos activos) en la Estación Fernández Oro, sobre la zona rural de Allen, la ciudad productora de manzanas (2971 hectáreas) y peras (3200 hectáreas) más importante del país (Anuario de SENASA, 2015)” (2015, p.1).

Por otra parte Neuquén se destaca por la extracción de hidrocarburos: casi el 20% del petróleo y el 43% del gas producido en el país son extraídos en esta provincia. También la explotación de minas y canteras es importante ya que representa el 41% del total del PBG (según datos del año 2011). Además Neuquén posee capacidad para refinar parte del petróleo crudo que extrae (procesa el 6% del total nacional), obteniendo gasoil, productos pesados (aceites, parafinas y betunes) y nafta para consumo de la industria petroquímica.³²

Lo cierto es que, Neuquén viene marcando tendencia en materia de explotación de hidrocarburos bajo modo convencional desde una década antes. En los años noventa, en el marco de un proceso general de mercantilización de las relaciones sociales y de apertura a la acumulación capitalista de mercados, se modifica el carácter estratégico de estos recursos haciendo que el gas y petróleo perdieran peso relativo como insumos industriales y de transporte y se posicionen como commodities exportables (Pérez Roig, 2014).

Sin embargo, entre 2004 y 2012 la producción de gas se redujo en un 48%, en tanto que la de petróleo cayó un 32%, lo que explica en parte la crisis energética y el reimpulso estatal a la actividad a partir de este año. Pérez Roig (2014) señala que si bien la expansión de la frontera hidrocarburífera es un proceso que se viene dando en todo el país desde el año 2000, no deja de sorprender la velocidad y extensión que dicho fenómeno presenta en Neuquén, donde se encuentran dos de las formaciones geológicas más “prometedoras” de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta y Los Molles.

El crecimiento desigual y dependiente se traduce en el crecimiento precipitado de los emprendimientos hidrocarburíferos y mineros y el desplazamiento de las actividades ligadas al sector agropecuario como la ganadería menor y la producción agrícola. Producto de este desplazamiento, la población del campo migra las ciudades y se generan las condiciones de posibilidad para la explotación intensiva y precaria de la fuerza de trabajo.

³¹ Datos extraídos del Informe sobre Río Negro de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP. Consultado en: http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/rio_negro.pdf

³² Datos extraídos del Informe sobre Neuquén de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP. Consultado en: <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/neuquen.pdf>

Las diferenciaciones no se dan sólo de una rama con relación a otra, sino también al interior de cada una de ellas, en la fruticultura la tendencia a la concentración y centralización de capitales avanzó desde los años `80s y `90s (Steimbregger, 2004) y ha puesto en manos de las empresas del gran capital el control de la tierra, la producción, el empaque, la exportación y el de compra de las cosechas de los pequeños productores (Landriscini y Preiss, 2007), lo cual les permite transferir parte sustancial de los riesgos de la actividad al productor primario, quien debe afrontar las contingencias asociadas a la producción, a la evolución de los mercados de distribución y a las variaciones del tipo de cambio.

En 2015 los altos costos de la producción, la baja rentabilidad de los productores primarios en la venta a las concentradoras y el cierre del mercado brasileño por cuestiones sanitarias expulsó a más de 8.100 obreros y cerca del 70% de la producción de frutas para consumo interno no fue cosechada. Esta modificación en la actividad frutícola ha colaborado en el avance de empresas como Apache, YPF y Chevron, entre otras, que operan alquilando fracciones de chacras para realizar trabajos de exploración y extracción.

El proceso de expansión de la frontera hidrocarburífera y gasífera sobre las zonas de producción de fruta desde 2008, en conjunto con el desembarco de la técnica de fractura hidráulica han generado un vertiginoso aumento de la extracción en la zona (Álvarez Mullaly, 2015).

Estado y extractivismo: políticas de compensación y criminalización

Si bien el modo de acumulación extractivista exportador nos permite comprender el vínculo estructural entre dos de los elementos del tríptico del capital, entre despojo y violencia, es necesario que expliquemos cómo juega el tercer elemento, el de la dominación. En esta dirección, Seoane (2012) aporta una línea de análisis interesante, cuando sostiene que la ofensiva extractivista requiere y promueve:

“(…) la reproducción simbólica y social de la escisión y oposición entre la cuestión social y la cuestión ambiental; aquel que diversifica y multiplica la idea de que las condiciones de vida de los sectores subalternos urbanos dependen de la prolongación del ciclo extractivista; aquel que busca blindar ideológicamente los grandes centros urbanos de las luchas intensas que acontecen en los territorios donde tiene lugar el ejercicio más feroz de la acumulación por desposesión. (...) la extensión y combinación de esta última con la acumulación ampliada puede abrir nuevos escenarios en el terreno del debate del pensamiento crítico y la acción de los movimientos sociales (p. 21-23).”

Precisamente es necesaria la ruptura de ese blindaje ideológico, desautorizando incansablemente esa reproducción simbólica y social en la que se escinde la cuestión social y la ambiental. Si la dominación es condición de posibilidad de la explotación, entonces es imprescindible avanzar sobre

las formas particulares de dominación, específicamente la forma de dominación política que impide el reconocimiento de la combinación de la acumulación por desposesión con la acumulación ampliada, o bien, de lo que más arriba planteamos junto a Roux en términos de superposición y complementación de la acumulación por despojo y el *incremento de la explotación en la relación salarial*, porque justamente ese reconocimiento crítico es condición de posibilidad para la articulación de las luchas territoriales.

Los extractivismos que se dicen progresistas configuran formas estatales que tienden a un proceso complejo de subsunción real de los territorios vitales y que se cristalizan en dos líneas de políticas de estado selectivas: la criminalización de las luchas territoriales y la compensación monetaria - directa o indirecta-.

Los mecanismos compensatorios implican “(...) equilibrios dinámicos, también inestables e incluso riesgosos, ya que buena parte de los ingresos dependen de flujos de exportación de materias primas cuyo precio o demanda esos gobiernos no controlan (Gudynas, 2012, p. 139). La captación de renta extractivista entonces se vuelve central en las políticas públicas que tienden a la redistribución y la amortiguación de los efectos negativos del despliegue del capital.

En cuanto a la criminalización de las luchas, retomando a Korol y Longo (2009), algunas de sus formas de manifestación son:

“(...) el avance del proceso de judicialización de los conflictos, visible en la multiplicación y el agravamiento de las figuras penales, en la manera que éstas son aplicadas por jueces y fiscales, en el número de procesamientos a militantes populares, en la estigmatización de las poblaciones y grupos movilizados, en el incremento de las fuerzas represivas y en la creación especial de cuerpos de élite, orientados a la represión y militarización de las zonas de conflicto. Por todos estos caminos, los problemas sociales y políticos se vuelven procesos penales” (p. 84).

En Argentina, podemos corroborar esta tendencia en la medida que la mayoría de los conflictos criminalizados son los que expresan disputas territoriales: 32,7 % tierra y vivienda, 5,7 % territorial y 2,7 % medio ambiente y recursos naturales, juntos representan el 40,7 % de los de conflictos criminalizados. Pero en particular, las provincias del norte de la Patagonia, son las que en proporción de habitantes cuentan con un mayor índice de criminalización: en el segundo puesto a nivel nacional está la provincia de Río Negro con el 23,4%, mientras que Neuquén ocupa el tercer puesto con el 6,5%.

En este sentido, consideramos que estas luchas populares revelan el carácter contradictorio del Estado, ya que en su estructura se traducen la presencia específica de las clases y sus luchas. Mientras que ciertos aparatos y funciones del Estado organizan y unifican a las fracciones de la clase dominante, también desorganizan y dividen permanentemente a las clases dominadas

intentando cortocircuitar sus organizaciones políticas (Poulantzas, 1978). Claramente, las políticas de criminalización/compensación expresan este permanente intento de desorganizar y dividir a los sectores subalternos, particularmente de aquellos que defienden los derechos humanos ligados a la defensa de los territorios. Mientras que la compensación económica encuentra sus límites en la combinación variable entre disponibilidad de recursos y voluntad política de las administraciones estatales, la criminalización como expresión contemporánea de la acción violenta del Estado sólo puede encontrar su límite en las mismas luchas que criminaliza.

Conflictos socio-ambientales y derechos territoriales indígenas

Como ya hemos mencionado anteriormente, en la provincia de Neuquén, la matriz económica está anclada en la explotación de petróleo y gas. Históricamente, las comunidades originarias han denunciado las políticas de despojo y contaminación que implementa el gobierno provincial, de la mano de las empresas internacionales como Repsol-YPF, Chevron Argentina S.R.L, Petrobras Argentina S.A., Pluspetrol S.A., Total Austral S.A., Apache Energía argentina S.R.L, entre otras. La articulación entre neoliberalismo y extractivismo se torna en la pieza fundamental para legitimar e instalar políticas de saqueo de los bienes comunes. Desde la década del noventa, organizaciones políticas y sociales se han unido a la movilización y repudio contra el avance de las políticas de explotación y despojo de los territorios.

Actualmente, el debate y los procesos de resistencia están apuntando a la explotación no convencional de hidrocarburos. El descubrimiento de “Vaca Muerta” ha recrudecido la ofensiva extractivista contra la cual se venían desarrollando dichos procesos de resistencia.

Desde que en diciembre de 2010 Repsol-YPF informara del descubrimiento de gas de esquisto (shale gas) en la formación Vaca Muerta, de la Cuenca neuquina y los posteriores anuncios realizados por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, la locura del shale se transformó con un terremoto de progreso y expectativas, cuyo epicentro golpeó la realidad neuquina. El discurso oficial sostenía que los hidrocarburos no convencionales serían, en un corto plazo, la solución al déficit energético que desequilibra la balanza comercial, con saldos negativos cada vez más preocupantes por sus aumentos exponenciales en los últimos años. Además el mundo shale traería inversiones, dinamizaría la economía con crecimiento industrial e ingreso de divisas por exportaciones (OPsur, 2014).

El hecho que se cristaliza en agosto de 2013 con la firma del acuerdo entre la provincia de Neuquén y la empresa YPF- y Chevron- para la explotación de “Vaca Muerta”, institucionaliza una modalidad extractiva de los recursos que genera una profundización de las desigualdades sociales.

Sobre la zona centro de la provincia de Neuquén, la explotación de hidrocarburos entra en conflicto de manera permanente con las comunidades mapuches. 250 pozos de petróleo y gas, oleoductos petroleros y gasíferos se encuentran emplazados en territorio mapuche, en los que el conflicto territorial emerge develando la relación entre el Estado provincial y las comunidades (Svampa y Viale, 2014). La acción estatal frente a las resistencias comunitarias ha operado de maneras diversas en beneficio de las corporaciones petroleras y el poder judicial ha sido el principal dispositivo para habilitar el despojo territorial, en un sentido que va desde la manipulación de los derechos territoriales violando el convenio 169 de la OIT, hasta la abierta criminalización de las comunidades en resistencia. Por ejemplo, la comunidad Wincul Newen sufre un caso en el cuál se combinan ambos elementos, la manipulación y la criminalización.

La comunidad Wincul Newen se encuentra a 25 km de Cutral Co cerca de Zapala, desde 2010 resistió diez intentos de desalojo de sus tierras sobre las que la empresa Yacimientos del Sur (ex Apache que hoy compone YPF) busca extender de 9 a 40 los pozos petroleros. El Yacimiento Portezuelo Norte se encuentra sin operar desde el año 2012, por las diferentes acciones que la comunidad ha realizado, por lo que se dictó una orden de desalojo en diciembre de ese mismo año a la que la comunidad definió resistir impidiendo el ingreso al territorio defendiéndose con piedras.

A partir de estos hechos se inició un proceso de criminalización en contra de la comunidad, materializado en acusaciones por tentativa de homicidio y daño agravado a Relmu Ñanku y por el delito de daño agravado a Martín Maliqueo y a Mauricio Raín. Más allá del resultado final que derivó en una condena menor a Relmu Ñanku por daño simple, el proceso judicial que se llevó a cabo en este caso, fue demostrativo del recrudescimiento del despojo territorial y la criminalización contra las comunidades indígenas.

Por otro lado, en los territorios urbanos y periurbanos de la capital neuquina el encarecimiento del costo de vida y la especulación inmobiliaria se establecen como patrones del transitar cotidiano. Las ciudades se tornan núcleos de aceleradas transformaciones espaciales y los ámbitos rurales atraviesan procesos de despojo, corrimiento y contaminación.

Neuquén es una ciudad que se emplaza en la orientación Este/Oeste. Su crecimiento se dio principalmente hacia el Oeste, donde se encuentran los barrios periféricos y se concentran la mayoría de las familias trabajadoras. El crecimiento exponencial de Neuquén vino de la mano de la ausencia de proyección urbana y con fuertes intereses inmobiliarios; muestra de ello son las escasas iniciativas de loteos sociales, los pocos planes de viviendas, la falta de servicios básicos y un transporte público deficiente. La zona de Este, de la costa de los ríos Neuquén y Limay se tornó el lugar predilecto de los desarrollos inmobiliarios privados, el paisaje natural de las zonas de chacras fue perdiendo terreno con el avance de los barrios privados (Álvarez Mullaly, 2015).

Los vecinos y vecinas de los barrios periféricos localizados en zonas periurbanas, rural y de meseta conviven desde hace años con los la explotación de gas y petróleo y la contaminación de los basureros petroleros del parque industrial de Neuquén. La política del gobierno municipal y provincial es abrir la puerta a empresas como Petrobras, Comarsa e Indarsa, las cuales operan en el territorio desconociendo condiciones de vida de la población. Las problemáticas de la expansión urbana no son privativas de la capital de la provincia sino que tiene réplicas en otras ciudades de menor población.

Conflictos por tomas de tierras y modos de intervención estatal en experiencias del alto valle de Río Negro

En estos primeros quince años del siglo XXI, el déficit habitacional es un problema que atraviesa la cotidianeidad y subsistencia de miles de familias argentinas. Para comprender la gravedad de esta situación nos proponemos realizar un análisis crítico de los modos en los que interviene el Estado en las experiencias concretas de tomas de tierras en el Alto Valle de Río Negro.

La noción de forma de estado nos permite acercarnos a las características que reviste el Estado capitalista en cierto período histórico en un territorio nacional particular, y en este sentido, posibilita caracterizar un conjunto de instituciones que constituyen los aparatos de estado y un conjunto de actividades que constituyen las funciones del estado (Bonnet y Piva, 2013), En este caso, analicemos los rasgos particulares que asumen aquellos aparatos y aquellas funciones del estado que intervienen en los conflictos por tomas de tierras.

La problemática habitacional, sin lugar a dudas, manifiesta una forma particular de relación entre Estado y mercado, en la medida en que el acceso a la vivienda es absolutamente mediado por la acumulación concentrada y especulativa de la clase propietaria y el Estado lejos de regular la lógica de mercado, interviene promoviendo la financiarización y el acceso por endeudamiento de los sectores no propietarios (Giaretto y Tetamanti, 2013). Sin embargo, para las familias de trabajadores precarizados a la ciudad se accede por la ocupación de tierras y la autourbanización.

Asimismo, las relaciones interiorizadas entre lo político y lo económico en el propio Estado entre los diferentes poderes y niveles aparecen claramente en los modos de intervención en los conflictos de tierras, en los que se ven implicados tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como los tres niveles municipal, provincial y nacional: en la criminalización de los conflictos y en la operación política por parte de la Secretaría de Acceso al Hábitat hasta el 2015.

De modo tal que Estado despliega una serie de mecanismos de mediación en los conflictos entre las clases antagónicas. En términos de Therborn (1987), la centralización y la totalización son mecanismos para la mediación del Estado en la lucha de clases, mientras la primera implica centralizar los recursos de la clase dominante en el gran aparato del Estado, la segunda implica la

inclusión de todas las clases en el Estado. Con esta tensión de fondo, el Estado intenta mostrarse como árbitro neutro de los conflictos entre las clases sociales, pero lo cierto es que su carácter de clase se manifiesta en diversos procesos de mediación que intentan desde la sumisión a la colaboración de las clases dominadas. Uno de esos procesos es la judicatura la cual resulta ser un proceso de mediación que posibilita la inclusión de los diferentes grupos sociales en el Estado –totalización-, sin embargo es una inclusión selectiva, direccionada que tiende a garantizar como efecto primario de dicho proceso la sumisión más colaboración de las clases dominadas.

Cabe remarcar, que el mecanismo de judicatura en relación a los procesos de lucha por tierra y vivienda implica tanto la judicialización civil circunscripta a una disputa entre “privados”, como la judicialización en sentido penal, en la cual el Estado despliega su poder punitivo en contra de quien considera infractor de la ley penal. Ambas formas son, a su vez, parte del proceso de criminalización que convertirá a la lucha por la tierra en un ‘delito’, y a quienes luchan por ella en ‘delincuentes’.

De este modo, las luchas por tierra y vivienda son intervenidas estatalmente: siendo controladas espacialmente por la represión policial y desplazadas en el tiempo por la judicialización del conflicto. Son las experiencias concretas las que manifiestan que la criminalización es una política de Estado.

Como los referentes empíricos de la investigación demuestran, los procesos de criminalización se desenvuelven de diferente manera, y aun así el sistema penal aparece como un conjunto de prácticas interagenciales que seleccionan ilegalismos, persigue y castiga, construyendo identidades criminalizadas.

El caso de la toma de Villa Obrera, en la ciudad de Fiske Menuko, es central para entender cómo el Estado interviene mediante la criminalización de las tomas de tierras, reinscribiendo los conflictos en el régimen de primacía de la propiedad privada, sometiendo los mismos a la individualización y al disciplinamiento, para intentar luego, travestirse en mediador posible de una negociación asimétrica y violentamente discrecional.

La judicialización del conflicto se despliega a través de la criminalización de sus referentes, a quienes no solo procesan penalmente y de manera ilegal, sino que además el intendente de la ciudad y los medios locales los estigmatizan públicamente como ‘punteros’, ‘delincuentes’, ‘avivados’. La causa que fue iniciada en el año 2009, llegó a juicio en año 2014, producto de la acusación de la propia municipalidad de General Roca, como propietaria de una de las parcelas que adquirió justamente por el estado de abandono en que se encontraba el terreno, y de un consorcio denominado La Lonja, quien se atribuía otra de las parcelas del barrio.

El 17 de diciembre de 2014 se dictó sentencia en el juicio oral y público llevado a cabo en contra de seis vecinos del Barrio Villa Obrera, acusados de haber cometido el delito de usurpación y hurto de

energía. El Juez subrogante Juan Pablo Chirinos dictó sentencia condenando al referente de la toma, por su condición de tal:

“Si hoy existe una condena es porque fue el propio Olivera quien al asumir el liderazgo de la toma, y su reclamo político, generó prueba en su contra. De asumir otra actitud, con la prueba colectada en autos, quizás hubiera sido imposible éste resultado” (Sentencia O.O.M s/Usurpación, 2014).

Los argumentos vertidos en el fallo no sólo dan cuenta del carácter disciplinante del mismo hacia quienes luchan por el derecho a la tierra y a la vivienda, sino que además da directivas claras a los poderes ejecutivos en cuanto a la intervención en conflictos de tomas de tierras. “Es exigible al municipio un mínimo de diligencia en el cuidado de sus bienes privados, máxime ante reiterados pedidos y amenazas de actuar por vías de hecho” (Ibíd.). El juez le reprocha al municipio no haber procedido al desalojo inmediato de la toma: “Si el combate se va a dar en los estrados judiciales, el resultado será siempre tardío” (Ibíd.). La condena consistió en seis meses de ejecución condicional y al cumplimiento de una serie de reglas de conducta por el término de dos años. Asimismo se ordenó el desalojo del referente de la parcela de tierra que ocupa. La sentencia pone el énfasis en el carácter privado del conflicto aun cuando uno de los querellantes era la municipalidad de General Roca.

La sentencia fue apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, en esta instancia el 11 de abril de 2016 fue ratificada la condena y el desalojo del referente barrial y además fue anulada la absolución del resto de los procesados que deberán ser nuevamente juzgados. Mientras todo este proceso de judicialización se desenvuelve, se despliegan mecanismos institucionales que permiten operar políticamente para intentar capitalizar los conflictos sociales, es decir, que posibiliten obtener ciertos beneficios políticos a partir de las intervenciones estatales. En esta dirección y en un contexto electoral, la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto 1715/14 (publicado en el Boletín Oficial el 1-oct-2014).

A días de su creación, el responsable de dicha Secretaría – el arquitecto Rubén Pascolini- aclaró que los barrios que recibirían la intervención de la misma están localizados, en general, sobre tierras fiscales, aunque en algunos casos se sitúan sobre tierras privadas en los que no hay conflictos ni judicialización. Es decir, que la Secretaría fue creada para regularizar la situación de aquellos asentamientos ubicados en tierras fiscales, y no en tierras de privados. De esta manera, mientras desde el ejecutivo nacional se plantea -normativamente- una coordinación con las provincias y los municipios, las situaciones concretas demuestran que cualquier coordinación tendiente a la regularización resulta problemática: por un lado, el Municipio de General Roca con nota firmada por su intendente Martín Soria, que solicita a la Secretaría se abstenga de intervenir en la toma de

Villa Obrera, por el otro, el municipio de Cipolletti que hizo manifiesto su rechazo a cualquier trámite de expropiación o declaración de utilidad pública, por estar las tomas judicializadas y zonas en las que el propio municipio determina que no son urbanizables.

Está claro que la Secretaría entiende que la cuestión de la tierra debe resolverse en el marco de la justicia burguesa, y que el problema de la vivienda entonces es un problema entre privados, a los que el Estado asiste como un aparente mediador neutral sin responsabilidad ni intereses al respecto. Sin embargo, nos preguntamos ¿Será por eso que en pleno juicio a los vecinos de Villa Obrera, el intendente de la municipalidad de General Roca, Martín Soria, envió una nota a la Secretaría advirtiéndole que ésta no se atreviera a intervenir en dicho proceso ni en ningún tipo de negociación con el barrio porque su referente era un ‘delincuente’ al que el poder judicial iba a condenar? ¿Será por eso que la Secretaría no retomó ningún contacto con los vecinos del Barrio Villa Obrera? ¿Será por eso que el Juez Chirinos condenó al referente por su actitud de liderazgo?

El otro caso es el de la **toma Awka Liwen** en la ciudad de Cipolletti, surgió el 20 de enero de 2013, sobre un terreno abandonado de la empresa constructora Zoppi Hnos. La causa rápidamente es caratulada como usurpación, la Jueza da la orden de impedir la entrada de más personas y de materiales de construcción. El 22 de enero se presenta en el expediente el intendente de la ciudad de Cipolletti, Abel Baratti, a los efectos de adjuntar una nota emitida a los vecinos del barrio en la que realiza una oferta por parcelas en el Distrito Vecinal Noreste, zona que anteriormente funcionaba como basural. Los/as vecinos/as rechazaron esa propuesta por considerar que no atendía a la urgencia habitacional, dado que dicha zona no cuenta con infraestructuras ni servicios adecuados.

El 31 de enero la Jueza le da intervención a la DIMARC para facilitar proceso de “desocupación pacífica” del inmueble. Dispuso asimismo la guardia policial para que evite el ingreso de nuevas personas y materiales. En el marco de la intervención de la Defensora de Menores e Incapaces (Elida Lilian Rodríguez) en la causa, se solicitó la intervención de Promoción Familiar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, para que evalúe la situación de vulnerabilidad de los menores. Frente a esto, meses después, se presenta en la causa Gabriela Mussari, delegada de Promoción Familiar, alegando que no pueden afrontar -económica y funcionalmente- el relevamiento ordenado judicialmente.

El 8 de marzo del 2013, producto de una notificación de rutina llevada a cabo por la policía, se le toman los datos a una vecina del barrio y la misma es imputada en la causa siendo la única acusada. En el mes de mayo de 2015 la Jueza de la causa ordenó la elevación a juicio.

El juicio se realizó el 16 de diciembre de 2015, en la primera audiencia el fiscal Martín Pezzetta decidió retirar la acusación que recaía sobre la vecina hace casi tres años, por no contar con prueba

alguna que sustente el pedido de condena. Frente a ello al juez Gutiérrez Elcarás sólo le quedó una alternativa posible: el dictado de la absolución.

Aquí se ve con claridad cómo el sistema penal profundiza su aspecto procesal y disminuye su momento directamente punitivo-represivo, estigmatizando a los sectores populares a través del proceso, la condena y la inscripción en los registros judiciales. De este modo se despliega un sistema de control social como mayor eficacia que las formas tradicionales de penalización carcelaria. (Ferraioli, 1994).

A diferencia de los casos anteriores, el caso del **Barrio Obrero** tiene la particularidad que al estar en presencia de un proceso civil es más visible la tensión entre el derecho a la vivienda y a la ciudad de muchos/as contra el derecho a la propiedad privada de unos/as pocos/as. En la causa civil el juez Cabral y Vedia dictó el desalojo de un modo muy irregular, notificando a los vecinos recién al momento de dictar la orden, en el año 2010. Ante esto deciden presentarse en el juicio a ejercer su defensa ante la Cámara de Apelaciones, quien abrió una instancia de mediación en la que el supuesto propietario accedió a vender los terrenos y solicitó que el ejecutivo local sirviera como garante de la transacción. Las familias conformaron una asociación civil y comenzaron a reunir el dinero para efectuar la compra, además comenzaron a construir sus viviendas. A partir de allí empieza una serie de marchas y contra-marchas legales que implicaron reuniones e instancias de negociación y mediación. Sin embargo, más tarde el supuesto dueño resolvió no vender y la Cámara confirmó la orden de desalojo dictada por el juez Cabral y Vedia. Al retiro y la negación a vender por parte de Romero le siguió la resistencia al desalojo por parte de las familias. Por su parte, el municipio no autorizó la urbanización de los terrenos, ofreció como posibilidad la relocalización de terrenos en el Distrito Vecinal Noreste, posibilidad que rechazaron las familias que ya han construido sus viviendas, y denunció por instigadores a los referentes de la toma. En el año 2013 y 2014 el Superior Tribunal de Justicia confirmó el desalojo dictado en las instancias anteriores, encontrándose actualmente la causa ante la Corte Suprema que aún se encuentra resolviéndolo. Agravada esta circunstancia por no tener regularizada la propiedad quien alegó la misma y motorizó tantas veces las órdenes de desalojo.

Si focalizamos en los efectos de proceso de este tipo, a diferencia de los procesos penales, aquí desaparece la amenaza concreta a una pena de prisión, pero se mantiene latente tanto la amenaza de desalojos como otras prácticas que van desde intimidaciones a través de la policía hasta estigmatización por los medios de comunicación, etiquetándolos recurrentemente como “delincuentes”, “usurpadores” “ocupantes ilegales”. A su vez en el caso del Barrio Obrero la judicialización aparece como el principal motivo para negar la urbanización y la regularización de las tierras, tanto por parte del ejecutivo como del Consejo Deliberante. Lo que nos permite

identificar a la criminalización y judicialización como una estrategia de intervención del Estado en diferentes poderes y niveles.

Saqueos y criminalización de la protesta social en Bariloche (Río Negro)

El 20 de diciembre de 2012, en la ciudad de Bariloche, el Movimiento Social y Cooperativo 1° de Mayo (MsyC 1° de Mayo) encabezó una masiva movilización al Chango Mas, una de las cadenas de supermercados más grandes de la ciudad, exigiendo donaciones de alimentos para los sectores sociales más empobrecidos. Ante la respuesta negativa por parte de la empresa de otorgar donaciones se desencadenó un *asalto colectivo a la propiedad privada* del supermercado. Estos acontecimientos, fueron sucedidos por saqueos a cadenas de supermercados y comercios de la ciudad. En los días siguientes la situación se replicó en otras partes del país: Rosario, Gobernador Gálvez, Campana, Zárate, Resistencia, Posadas y San Fernando; interpretado por parte funcionarios públicos como un “efecto espejo” de lo acontecido en la ciudad de Bariloche.

Es necesario remarcar que en el mismo año en el que el gobierno nacional y el provincial fortalecen el modelo de seguridad democrática e inauguran la campaña contra la violencia institucional, a fines de 2012 e inmediatamente a los hechos, la policía reprimió durante horas en los barrios pobres y allanó cientos de viviendas de la zona. Según el Diario Río Negro, los “enfrentamientos” con las fuerzas policiales dejaron como resultado 30 personas lesionadas, entre ellos, un joven de 15 años con una herida de arma de fuego en el tórax “presuntamente” baleado por la policía. Desde el gobierno nacional se envió un grupo de 400 gendarmes a militarizar la ciudad, y el 23 de diciembre la policía de Río Negro declaró el estado de alerta máxima en todo el territorio a raíz de las presunciones de posibles saqueos, militarizando los barrios populares y persiguiendo a los jóvenes. En los días 24 y 26 de diciembre, el Poder Judicial, la Policía de Río Negro, la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional desplegaron un operativo, realizando allanamientos en los barrios de la ciudad, apuntando a los domicilios de integrantes del MsyC 1° de Mayo.

El 13 de enero del año 2013, el juzgado de Instrucción de Bariloche, a cargo del Juez Ricardo Calcagno, dictó la detención y procesamiento de cinco personas como *coautores penalmente responsables del delito de Robo doblemente calificado, por el uso de arma y en poblado y en banda y extorsión*, por lo ocurrido en el supermercado ChangoMas. En las primeras horas de la mañana los detenidos, fueron sometidos a indagatoria e inmediatamente trasladados a otras unidades de detención a más de 500 km de Bariloche (las tres mujeres fueron trasladadas a General Roca mientras los dos hombres a Viedma). De esta manera, vemos cómo se pone en marcha el funcionamiento del sistema penal que a través de una cadena punitiva enlaza los tres niveles diferentes pero articulados de agencia judicial, policial y encierro punitivo para entregar y sujetar a los referentes constituyéndolos en delincuentes.

En la elaboración de la propuesta de investigación hablamos de luchas socio-ambientales, luchas por territorios indígenas y luchas por tierra y vivienda. En el caso de criminalización del MSyC 1° de Mayo, identificamos algunas características específicas que nos plantean el desafío de poder relacionarlo con el resto de las experiencias de lucha territorial, ya que la lucha puntual que se criminaliza es por trabajo y alimentos. Sin embargo, en una primera aproximación a la experiencia identificamos algunos elementos que nos permiten vincular la experiencia con la ofensiva extractivista y las resistencias populares.

Vemos que la economía local de Bariloche tiene como actividad principal la producción de servicios turísticos, lo cual genera altos niveles de desigualdad social que se acompañan con políticas de segregación territorial y control policial sobre las poblaciones empobrecidas. Entendiendo a los megaproyectos turísticos como actividades extractivas (Acosta 2011), la valorización del capital invertido en estas actividades requieren de una apropiación privada de tierras y bienes comunes, una desarticulación de dinámicas comunitarias y una proletarianización/pauperización de las poblaciones que ocupan los territorios, desencadenando resistencias directas e indirectas a esa ofensiva del extractivismo turístico.

En la ciudad de Bariloche, las actividades económicas organizadas alrededor del turismo en la zona céntrica pretenden invisibilizar la pobreza y la desocupación que se vive, para ello se refuerza la presencia policial en las zonas urbanas que rodean los barrios populares de El Alto. Este escenario presenta altos niveles de conflictividad que el Estado los aborda con políticas represivas y compensatorias.

En cuanto a las políticas represivas, identificamos en el “Triple Crimen de Bariloche”, ocurrido en junio de 2010, la cristalización de un conflicto permanente entre las fuerzas policiales y las clases subalternas. En la madrugada del 17 de junio de 2010, Diego Bonefoi, un joven de 15 años perteneciente a El Alto de la ciudad, fue ejecutado por el policía Sergio Colombil con una bala de plomo en la cabeza. Este hecho generó la indignación popular, el incendio de la ex-comisaría 28 en señal de protesta y la represión policial indiscriminada durante cuatro días que dejó como resultado: el secuestro, detención y amenaza de muerte un número indeterminado de jóvenes, heridos y el asesinato de otros dos jóvenes, Cárdena y Carrasco, (Informe Multisectorial de Bariloche, 2010). En el transcurso de aquellos acontecimientos, quedó en evidencia el nivel de represión de las fuerzas policiales sobre los barrios pobres de la ciudad y también la segregación socio-espacial que terminaría por enfrentar a los sectores sociales que denunciaban la represión y exigían el castigo de los responsables materiales y políticos (ubicados en la zona del Alto), con aquellos sectores sociales, vinculados a las zonas comerciales y residenciales de la ciudad (ubicados en la zona céntrica de la ciudad), que apoyaban a la policía y demandan el reforzamiento de la política de “mano dura” (Informe multisectorial de Bariloche, 2010).

Estas políticas represivas que se ven desbordadas por las luchas que dan los trabajadores desocupados, precarizados y/o segregados, y que ponen en crisis permanentemente la gobernabilidad del territorio, son complementadas con políticas compensatorias.

De acuerdo a lo que pudimos evidenciar en una entrevista realizada al ex-intendente de la ciudad, Omar Goye, en el marco de una crisis social y política se implementó el Plan Argentina Trabaja para dar respuesta a las demandas de trabajo:

“En 2011 se agrega la explosión del volcán Puyehue. La economía local se agravó más, hubo aportes del gobierno nacional para sostener el empleo público pero no para sectores privados (...) el gobierno nacional propuso a Bariloche mil puestos de los denominados Argentina Trabaja, de los cuales 500 administraba el municipio y 500 administraba yo desde la cooperativa de electricidad, gerenciando estos proyectos”(Ex Intendente de Bariloche).

De acuerdo al testimonio de una referente del MSyC 1° de Mayo, esta política social sirvió para fortalecer el control estatal sobre los territorios, y amortiguar los conflictos que no podían ser contenidos por vías represivas:

“Cuando se bajaron esos planes desde el gobierno nacional, lo que recuerdo fue que eran 600 planes Argentina Trabaja, como no habían otras organizaciones como nosotros que independientemente reclamaran trabajo, el resto de los planes, el exceso de esos planes se lo repartieron simplemente entre partidos políticos hegemónicos de acá, peronismo y radicalismo, partes iguales de planes (...) Muchas quedaron manejadas por punteros” (Referente del MSyC 1° de Mayo).

El propio ex intendente, sostiene:

“ Es un paliativo a las situaciones más urgentes, y a veces la organización de estas cooperativas de trabajo fue claramente digitada por el gobierno anterior a mí, sin informes sociológicos que avalaran tal o cual familia, tal o cual cabeza de familia tuviera que integrar esos grupos” (Ex Intendente de Bariloche).

Atendiendo a esta realidad, en la cual se enmarca el caso de criminalización del MSyC 1° de Mayo, vemos que el proceso de organización y las luchas que sostuvo esta organización forman parte de las resistencias sociales que viene dando la clase trabajadora de Bariloche a la apropiación privada del espacio urbano y a la desocupación generada por el turismo.

A modo de comentarios finales

En este trabajo, en tanto primera aproximación colectiva al análisis teórico-empírico de la relación entre extractivismo, Estado y resistencias sociales en experiencias concretas de Río Negro y Neuquén, hemos realizado un recorrido que emprende la tarea de reconstruir la realidad como

totalidad concreta y compleja, en la que los conflictos y procesos que atraviesan a los sectores subalternos en las luchas territoriales no sean escindidos sino articulados.

En los casos analizados, tanto en las luchas por tierra y vivienda, como las luchas socioambientales y de poblaciones indígenas, aparecen tres grandes procesos como el despojo en tanto resultado de la ofensiva extractivista, la violencia desplegada por fuerzas represivas y, la dominación ejercida en términos de criminalización y compensación.

El caso de la Cooperativa 1º de Mayo de Bariloche nos permite asimismo avanzar aún más en esta ruptura del blindaje ideológico que pretende escindir las diferentes luchas, ya que pone de manifiesto cuál es la conexión inexorable entre los diferentes casos: la defensa del derecho a la existencia.

Será necesario seguir avanzando en caracterizar a las luchas territoriales y en reconocer cuáles son las diferentes formas particulares de dominación, que impiden el reconocimiento de la combinación de la acumulación por desposesión con la acumulación ampliada, para poder así seguir apostando a la articulación de las diversas luchas territoriales contra el capital.

Referencias bibliográficas

Acosta, Alberto. “Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición”, en La línea de Fuego, 23/12/2011.

Álvarez Mullally, M. 2015 *Alto Valle perforado: el petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte.* - 1a e. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Jinete Insomne.

Barzilai, Martín, 2015, en Observatorio Petrolero Sur, Buenos Aires, Argentina. Consultado <http://www.opsur.org.ar/blog/2015/05/04/cosecharas-tu-siembra/#sthash.3YKRMZIH.dpuf>, 07/09/2015.

De Giorgi, Alessandro, 2006, *El gobierno de la excedencia- Posfordismo y control de la multitud.* Madrid. Ed. Traficante de sueños.

De Sousa Santos, B. 1982, “O Estado, o Dereito e a Questao Urbana” En *Revista Crítica de Ciências Sociais*, Nro. 9 (Ver en González Ordováz, M. J. 1998, “La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas.” En *Revista de Estudios Políticos*, Nro. 101.

Fals Borda, O. 2012, “La ciencia y el pueblo: Nuevas reflexiones sobre la Investigación-Acción (Participativa)”. En Fals Borda, O. *Ciencia, compromiso y cambio social. Antología.* Bs. As.: El Colectivo.

Galafassi, G. 2008. Estado, capital y acumulación por desposesión. Los espacios rurales patagónicos y su renovado perfil extractivo de recursos naturales. *Páginas, revista digital de la escuela de historia*, año 1, n° 2. Recuperado en

<http://es.scribd.com/doc/181767194/Estado-Capital-y-Acumulacion-Revista-Paginas-rosario#scribd>

Giaretto, M. y Diez Tetamanti, J.M. 2013 “La vivienda como problema. Aproximaciones las políticas habitacionales en Chile y Argentina”. En AA.VV, *Debates sobre la desmercantilización de los derechos sociales. Análisis de las políticas estatales de Chile y Argentina en la primera década del siglo XXI*. Gral. Roca (Fiske Menuco) Ed. Publifadecs.

Giaretto, M. y Naffa, V., 2014, “Cuando habitar la tierra es 'delito'. La criminalización de las luchas por la tierra en ciudades del Alto Valle de Río Negro.” Ponencia presentada en VI Jornadas de Historia de la Patagonia, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Comahue, Cipolletti, 12, 13 y 14 de noviembre (ISBN 978-987-604-417-2).

Giaretto, M. y Naffa, V. 2015, “Criminalización y capitalización política de los conflictos por tomas de tierras: aportes desde experiencias del Alto Valle de Río Negro” Ponencia presentada en *XI Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires: Coordinadas Contemporáneas de la Sociología: tiempos, cuerpos, saberes*. Bs. As., del 13 al 17 de julio.

Grigera J. y Eskenazi, M., 2013, Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad. En Grigera, Juan (comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Bs. As.: Ed. Imago Mundi.

Gudynas, E. 2012, “Estado Compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano.” Revista *Nueva Sociedad* N° 237, enero- febrero. www.nuso.org

Hirsch, J. 1992, "Fordismo y Posfordismo, la crisis social actual y sus consecuencias" en Hirsch, J. Bonefeld, W. Simon Clarke y otros (eds.) *Los Estudios sobre el Estado y la Reestructuración Capitalista*, Buenos Aires: Tierra del Fuego.

Hirsch, J. 2001, “¿Qué significa Estado? Reflexiones acerca de la teoría del estado capitalista?” En *El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global*, México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Izquierre, I. 2003, “Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social” en José Seoane (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO.

Korol, C. y Longo, R., 2009, “Criminalización de los movimientos sociales de la Argentina. Informe general.” En Korol, C. (Coord.) *Criminalización de la pobreza y la protesta social*. Bs. As.: Ed. El Colectivo y América Libre.

Landriscini, G. y Preiss, O. 2007 “La concentración económica en la fruticultura del Alto Valle de Río Negro”, en Radonich, M. y Steimbregger N. G. (Comp.) *Reestructuraciones sociales en cadenas agroalimentarias*. Cuadernos GESA 6. Buenos Aires, Editorial La Colmena.

- Marx, K.** 2004, *El Capital. Crítica de la economía política*. México: Siglo XXI.
- Observatorio Petrolero Sur** (2014). “Discursos, pactos e impactos de una Vaca que sigue Muerta”, OPSur.org, octubre. Disponible en <http://www.opsur.org.ar/blog/2014/10/31/discursos-pactos-e-impactos-de-una-vaca-que-sigue-muerta/>
- Porto- Gonçalves, C.** 2013, *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina*, IGU UGI, Perú.
- Rodil, L.** 2015. “Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro”.VII Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE), Neuquén.
- Roig Pérez, D.** 2014, “Fracturando Argentina. Promoción y resistencias al avance de los “hidrocarburos no convencionales”. En Composto y Navarro (comp). *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México: Bajo Tierra Ediciones.
- Roux, R.** 2008, “Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época.” En Revista *Herramienta* N° 38, Bs. As.
- Sautu, R., Boniolo, P. Et. al.** 2005: *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires. CLACSO.
- Seoane, J.,** 2012, “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América.” En Revista *Theoami* N° 26.
- Steimbregger, N.** 2004. “Trayectoria y reorganización de una empresa frutícola en el marco de la reestructuración productiva”. Tesis de Maestría en Sociología de la Agricultura Latinoamericana, *Inédita*. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue.
- Svampa, M.** 2012, en Amigos de la tierra argentina, *Acaparamiento de tierras y bienes comunes*. Consultado en <http://amigosdelatierra.org.ar/wp-content/uploads/ACAPARAMIENTO-web.pdf>
- , 2014 “¿Territorios vacíos o Territorios en disputa? Las sociedades locales, ¿entre las promesas incumplidas del desarrollo regional y el establecimiento de zonas de sacrificio? ¿compite el avance de la explotación de yacimientos no convencionales con economías regionales preexistentes?”En *20 Mitos y Realidades del Fracking*, AAVV, Bs. As.: El Colectivo.
- Svampa, M y Viale, E.** 2014, *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires. Kats Editores.

Therbon, G., 1987 *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos del estado y Poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*, México: Siglo XXI.

Zavaleta Mercado, R. 1988, *Clases sociales y conocimiento*. Cochabamba: Ed. Los amigos del libro.

Una aproximación al nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina: desafíos de los sujetos subalternos entre la ofensiva neoliberal y la crisis de los proyectos de cambio

Lic. José Seoane

Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Resumen

La ponencia aborda el examen de la emergencia y despliegue a partir de 2012 de un nuevo ciclo de conflictividad social protagonizado por los sujetos subalternos en América Latina. Fundamente esta apreciación en el estudio de los procesos de movilización y protesta social históricamente significativos acontecidos en esos años en Chile, Colombia y Brasil y la consideración de su proyección y vigencia hasta la actualidad. Asimismo, con el reconocimiento del carácter heterogéneo, discontinuo y fragmentario que tienen siempre los ciclos de lucha de los sujetos subalternos a nivel regional y extendidos en el tiempo, la ponencia reflexiona sobre la actualidad de la movilización social regional. La consideración de este ciclo de conflicto se aborda también en relación con tres procesos en curso en la región. Por una parte, con el inicio de un periodo de inestabilidad, desaceleración o crisis económica, de efecto variado a nivel regional, resultado de la caída de los precios internacionales de los llamados “commodities” en el contexto de una reorientación de los flujos financieros-especulativos y del desplazamiento de los efectos recesivos de la crisis global hacia el Sur del Mundo. Por otra parte, la ponencia aborda también las características y debates que plantea para el pensamiento crítico el despliegue de lo que se llama la “ofensiva neoliberal” en el marco de ese desplazamiento de la crisis al Sur. Finalmente, se considera el estancamiento, reflujo, o crisis de los procesos de cambio no neoliberales experimentados a nivel regional en la última década y media.

Una aproximación al nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina: desafíos de los sujetos subalternos entre la ofensiva neoliberal y la crisis de los proyectos de cambio.

Neoliberalismo: aparta de mí ese cáliz

Resulta indiscutible que Nuestra América -latina, caribeña, indígena y afrodescendiente- atraviesa un nuevo momento histórico, un período de transición signado por los avances de la ofensiva neoliberal y los límites, reflujo o crisis de los procesos de cambio. En este contexto, puede señalarse también el despliegue de un nuevo ciclo de conflictos protagonizados por los sujetos subalternos que, con sus discontinuidades y heterogeneidades, se proyecta, desde hace unos años, a nivel regional.

El intento de caracterización de este período, particularmente la identificación de las causas, desafíos y tendencias que plantea, ha sido en los últimos años uno de los tópicos principales de las reflexiones del pensamiento crítico latinoamericano y del debate de los movimientos sociales y políticos transformadores. Desde el 2013, con las masivas movilizaciones en Brasil cuestionadoras del gobierno de Dilma Rouseff, y particularmente luego, con los ajustados triunfos electorales del PT y el FA en Brasil y Uruguay en 2014 y un escenario gubernamental a nivel regional cada vez más teñido del giro conservador, se planteó y desplegó un debate sobre la consideración de estos procesos en términos de un “fin de ciclo” de los “gobiernos progresistas” (Zibechi, 2014)

La relevancia de esta discusión regional sobre el “fin de ciclo” se reflejó en el lugar central que dicha temática ocupó en las diversas plataformas y publicaciones propias del campo del pensamiento crítico latinoamericano hacia fines de 2015; por ejemplo, entre otras, en las web de Rebelión y ALAI (ALAI, 2015; Arkonada, 2015a y 2015b; Boron, 2016; Gaudichaud, 2015; Katz, 2016; Modonesi, 2015; Sader, 2015; Zibechi, 2014 y 2015). Sin embargo, sus contribuciones a la comprensión de los procesos en curso quedaron muchas veces opacadas por la polémica entre la crítica y la defensa de los rumbos gubernamentales *in toto*, aunque análisis más sugerentes plantearon abordar el debate desde la consideración de “reflujo del cambio de época” o, desde otra perspectiva, del “fin de la hegemonía progresista” (Modonessi, 2015; Arkonada, 2015a; Gaudichaud, 2015). Los acontecimientos de los últimos seis meses; el triunfo electoral de una coalición derechista en Argentina; el éxito del golpe parlamentario en Brasil; la derrota del PSUV en las elecciones parlamentarias en Venezuela; la derrota en el referéndum habilitante de la reelección de Evo Morales en Bolivia; parecieron dar razón a los diagnósticos del fin del ciclo progresista en Nuestra América.

Sin embargo, como lo señalamos en oportunidades pasadas, consideramos aún que dicha caracterización dificulta la consideración colectiva de la complejidad de los procesos en los que estamos inmersos (Seoane, 2014). Esta opinión se sustenta, entre otras cuestiones, en primer lugar, en razón de que dicha perspectiva tiende a restringir la visión de los cambios y sus causas al campo del régimen político y el Estado, ciertamente importante pero cuyas dinámicas no pueden comprenderse en sí mismas sino en referencia a sujetos (por ejemplo, las clases y sus fracciones o grupos sociales) y conflictos que se constituyen y despliegan también, e incluso a veces particularmente, en otros ámbitos societales. Y, en segundo lugar, porque esta noción de fin de ciclo asociada a los destinos gubernamentales tiende a promover una visión de los cambios que entorpece su consideración en términos de procesos, iniciados en el pasado e incluso abiertos y no resueltos de manera definitiva hacia adelante, de una transición en curso y, en cierta medida, en disputa.

El ejemplo más significativo de ello es la experiencia venezolana aún vigente, a pesar del despliegue de una guerra económica y multidimensional impulsada por el imperio y las burguesías

locales que lleva, en su última fase, ya varios años; de las amenazas que oscilan entre la intervención extranjera directa, la guerra civil y la desestructuración y descomposición socio-política interna, y de la propia crisis y límites del modelo rentista-burocrático.

“Aparta de mí ese cáliz”, escribía en 1937 el gran poeta peruano César Vallejo ante el escenario de la Guerra Civil española que tuvo un profundo impacto y repercusión en América Latina. Años antes de eso, pero en un clima de época similar, Antonio Gramsci reclamaba doblemente el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. No se trata de una frase de ingenuidad formal como se la ha considerado en muchas ocasiones o de un juego de esquizofrenia política; sino de la estrecha y necesaria relación que, para las perspectivas emancipatorias, se plantea entre el examen sin contemplaciones de los procesos histórico-concretos y la intencionalidad de la intervención humana para enfrentarlos y modificarlos. Huelga agregar que en ambos planos también se trata de una construcción colectiva.

Con estos presupuestos, la presente contribución parte del reconocimiento del despliegue de un nuevo ciclo de conflictividad social protagonizado por los sujetos subalternos a nivel regional para reflexionar sobre sus características y los debates que plantea al pensamiento crítico así como sobre los desafíos e interrogantes que dicho ciclo de conflictividad afronta en un contexto signado por la revitalización de los procesos de neoliberalización capitalista y por la crisis de los procesos de cambio no neoliberal abiertos desde fines de los años '90 y principios de los 2000. Con estos objetivos, presentamos la contribución subdividida en tres secciones relativas a las significaciones y características de: a) el actual proceso de revitalización de la neoliberalización capitalista en la región que consideramos bajo la nominación de “ofensiva neoliberal”; b) los límites y/o crisis del control del aparato del Estado por fuerzas políticas no liberales y, en general, por los llamados procesos de cambio; y c) el nuevo ciclo de conflictividad social que ya hemos referido. Comencemos entonces nuestro recorrido por el primero de ellos.

Las significaciones de la ofensiva neoliberal: tres cuestiones en debate.

Nuestra reflexión parte de las constataciones de los avances conquistados a nivel regional en los últimos años o meses por lo que podemos llamar genéricamente la ofensiva neoliberal. Pero ciertamente, es una obviedad resaltar que el proceso de neoliberalización capitalista es permanente desde sus primeros despliegues en el contexto de los años '70; o, para decirlo en un sentido más amplio históricamente, que el capital en sus múltiples formas persigue constantemente incrementar su acumulación; o, como dice el sentido popular, que el afán de lucro no descansa. En esta dirección, la noción de ofensiva –o de sus avances- remite a un cambio en la tendencia que configuraba las correlaciones de fuerzas societales entre los diferentes sujetos sociopolíticos, clases y bloques sociales en la región.

De esta manera, si el levantamiento zapatista de 1994 marcó los comienzos del despertar regional de un ciclo de resistencias de los sujetos subalternos, de creciente conflictividad social cuestionadora del régimen neoliberal; y si a partir del 2000 estas resistencias se trocaron en crisis de hegemonía del neoliberalismo cristalizando muchas veces en cambios gubernamentales y en procesos de transformaciones sociales; ahora nos encontramos en un contexto inverso, de avance o revitalización de las fuerzas del neoliberalismo. El carácter de esta “ofensiva” planteó y plantea una serie de debates al pensamiento crítico que, en este caso sin pretensión de exhaustividad, sistematizamos en tres cuestiones.

1. La novedad, entre la restauración y la continuidad

En primer lugar, la ofensiva neoliberal ha sido considerada tanto como una pretensión de restauración de las políticas y regímenes impuestos en los años '90 en la región así como, desde otra perspectiva, se han enfatizado las continuidades socioeconómicas más allá de los cambios político-gubernamentales e, incluso en algunos casos, confiado en los anunciados aspectos neodesarrollistas de los nuevos gobiernos de derecha. La estrategia de shock llevada adelante por el gobierno del presidente Macri en Argentina ha refutado en los hechos esta última apreciación. Por otra parte, la idea de la restauración de los noventa, potente en la evocación de la memoria popular y del pensamiento crítico sobre los lineamientos y efectos de los procesos de liberalización y mercantilización, puede invisibilizar que dicho “Consenso de Washington” se impuso bajo los golpes de la doble crisis de la deuda externa y las hiperinflaciones –y particularmente de esta última- que construyeron las condiciones de la derrota, desarticulación y tolerancia social en un contexto internacional diferente. Más allá de las actuales evocaciones del ineluctable fracaso económico de los populismos o de su matriz de corrupción e ineficiencia –discursos también promovidos en los años '90- la derrota social que posibilitó las transformaciones neoliberales de dicha década no ha tenido aún lugar.

Finalmente, si el término neoliberalismo refiere a una nueva fase capitalista que se despliega y extiende desde los años '70 como salida a la crisis –económica y de dominación- de esos años; dicho despliegue ha transitado por diferentes momentos, espacios y formas. De facto, frente a la crisis de hegemonía que cuestionó al régimen neoliberal en Latinoamérica en la primera mitad de los años 2000, la reconstrucción de legitimidad y poder para la continuidad de estas políticas en algunos países de la región adoptó la forma de lo que se ha llamado el “neoliberalismo de guerra” caracterizado por un proceso de mafiatización y militarización social y, simultáneamente, de reforzamiento de la capacidad punitiva del Estado, de promoción de un “Estado de excepción” complementario al funcionamiento de un “segundo estado” ilegal y mafioso (González Casanova, 2001; Seoane, 2008; Murillo, 2008; Segato, 2013). En un sentido similar, desde el pensamiento

crítico se ha señalado la estrecha vinculación entre neoliberalismo y crisis, tanto en relación con el proceso contemporáneo de destrucción de las condiciones de existencia de amplias franjas de la población y la vida en general, como respecto del papel de las crisis en el arte de gobierno neoliberal y de la producción de una subjetividad que reformula el lazo social en la recreación del “estado de naturaleza” hobbesiano (Murillo, 2015; Murillo y Algranati, 2012; Amin, 2001; Klein, 2007; Beinstein, 2014; Seoane, 2016) Estos señalamientos, ciertamente, interrogan sobre las tendencias que orientan la ofensiva neoliberal que examinamos. El debate e identificación de las características de la misma; la precisión de su novedad, configurada en la tensión entre la restauración y las continuidades; y de sus relaciones con el contexto internacional actual; resulta una de las cuestiones significativas que afrontan el pensamiento crítico y la acción transformadora.

2. Coerción y consentimiento, política y economía

En segundo lugar, reflexionar sobre las formas que adopta esta ofensiva neoliberal interroga también sobre sus comienzos, sus formas, su desarrollo. En este sentido, en el terreno estatal-gubernamental el año 2009 condensa a nivel regional un punto de inflexión. El 15 de marzo de ese año ganó las elecciones presidenciales en El Salvador el Frente Farabundo Martí y casi tres meses después, el 28 de junio, resultó exitoso el golpe de estado en Honduras. El triunfo del FMLN marcó el máximo punto de expansión de la elección de gobiernos críticos del neoliberalismo en un proceso que ya había experimentado sus límites en el ciclo electoral del 2006. En contraposición, el golpe en Honduras señaló el comienzo del despliegue regional de estas estrategias de desestabilización y golpe que tuvieron en los años siguientes sus principales manifestaciones en Bolivia y Ecuador y en el exitoso golpe parlamentario en Paraguay en 2012. Acciones en las que se aunaban clases o fracciones de clase dominantes y estratos conservadores locales con corporaciones transnacionales y la intervención estadounidense y que tuvo en el red despliegue militar norteamericano a nivel regional de esos años uno de sus principales sostenes. Sin embargo esta ofensiva neoliberal -más asociada a las formas de la intervención militar, el golpe, la “guerra” o la coerción- sólo resultó efectiva en los “eslabones más débiles” de los procesos de cambio sin conseguir alterar drásticamente el contexto regional.

La misma cobró cuerpo en el contexto de la emergencia de un nuevo episodio de crisis económica de proyección global pero con epicentro en el viejo núcleo del capitalismo central y posterior al cambio de política del establishment estadounidense simbolizado en el pasaje de Bush a Obama. No es una novedad -como han señalado desde los clásicos del pensamiento crítico hasta el debate contemporáneo- que las crisis capitalistas (y sus intentos de gestión) conllevan un reforzamiento de las políticas imperiales y de ofensiva del capital (Harvey, 2004) El procesamiento del primer momento de la crisis supuso entonces, junto a la recesión y rescates públicos de la banca privada en

EE.UU. y Europa, la ofensiva neoliberal en la región y el desplazamiento de los flujos de capitales a los *commodities* con el consecuente acelerado incremento de sus precios. En este contexto, el crecimiento económico de China, los BRICS y el Sur del Mundo sostuvieron la economía global. Pero a partir del 2012 el procesamiento regional de la crisis cambió, la economía estadounidense comenzó a recuperarse relativamente, los flujos especulativos se reorientaron hacia el Norte, los precios de los *commodities* comenzaron a descender, la crisis como caída del crecimiento económico se desplazó al Sur y a los BRICS.

Un nuevo periodo de la ofensiva neoliberal en la región comenzó a desplegarse en el contexto de una creciente desaceleración e inestabilidad económica. Sus efectos a partir del 2011 y 2012 comenzaron a incrementar las tensiones en las coaliciones sociales sobre las que se sostenían los procesos de cambio –particularmente los gobiernos neodesarrollistas- y exasperó la acción de los poderes económicos y las capas privilegiadas –reconfigurando sus equilibrios y acuerdos- y abriendo posteriormente un escenario de crisis de hegemonía del posneoliberalismo. Este proceso no puede considerarse como resultado de una dinámica económica objetiva y natural, siendo los procesos económicos –de manera más mediada o más directa- el terreno propio de la acción –en competencia o cooperación- de las clases y fracciones económicamente dominantes y de los poderes económicos globales. Por otra parte, la eficacia de las crisis económicas en la construcción de las condiciones sociales del proceso de neoliberalización capitalista registra antecedentes en la historia latinoamericana de fines de los años `80 y principios de los `90, como ya hemos mencionado. En esta dirección puede leerse la profundidad actual de la recesión brasileña –según los datos recientes la más significativa de los últimos 25 años- y venezolana –que junto al desabastecimiento promueve, y persigue en la acción de diferentes actores, las condiciones de una implosión social. Aunque, es necesario recordar también que las crisis económicas pueden desembocar asimismo en la potenciación y expansión de la acción y conflictividad de los sujetos subalternos, como sucedió en Nuestra América entre fines de los años `90 y principios de los 2000.

3. Neoliberalismo, construcción de subjetividad y movilización colectiva

Por otra parte, en este contexto de retracción y caída económica que hemos descrito, la ofensiva neoliberal se constituyó también en la emergencia de sujetos colectivos que se conformaron como protagonistas de protestas y movilizaciones rivalizando, disputando y colonizando simbólicamente las prácticas de los movimientos sociales de raigambre popular que ocuparon las calles en el período de resistencias y cuestionamientos al régimen neoliberal e, incluso, tensionando la propia conceptualización de “movimiento social” y algunos de los aparatos teóricos utilizados o conformados en el examen de la conflictividad de los sujetos subalternos.

La emergencia de estos sujetos vinculados a los intereses de sectores dominantes no es una novedad en la historia latinoamericana. Los mismos habían tenido relevancia tanto en la disputa por el control de la industrialización sustitutiva frente a los regímenes nacional-populares en el periodo de posguerra y, luego incluso, frente a los procesos de radicalización y cambio social de los años `60 y `70. Sin embargo, la construcción del neoliberalismo en el periodo posterior y, claramente en los años `90, pareció asentarse en el compromiso entre los grupos dominantes de no convocar a otros sujetos sociales para dirimir sus diferencias. La explosión de las resistencias y movimientos sociales de los sujetos subalternos asediando la ciudadela neoliberal rompió ese consenso y, en un ciclo de ensayo y error progresivo, comenzaron a aparecer en la escena pública movilizaciones y acciones de protesta con gran protagonismo de sectores medios pero también con capacidad de interpelación a otros sectores sociales que, frente a los procesos de cambio, se constituían en clave ciudadana liberal, reclamaban su condición apolítica como garantía de ser expresión legítima de la sociedad civil, planteaban una programática contra la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, y el autoritarismo gubernamental-estatal y, en sus formas más violentas, se inscribían en procesos de fascistización social que pretendían servir como ariete del “golpe suave”.

La construcción de estos sujetos, emergidos con similares características en diferentes países de la región, supuso el despliegue de un conjunto de dispositivos y tecnologías de gobierno, de saberes y prácticas, promovidas y difundidas por diferentes agencias estadounidenses y experimentadas también en otros continentes bajo las llamadas “revoluciones de los colores”. En este caso, la acción regional de organizaciones tales como la USAID (United States Agency for International Development) y el NED (National Endowment for Democracy), el modelo de “onegeización” de la sociedad civil y de su empoderamiento, el uso de las redes sociales, el papel cumplido por las cadenas o grupos multimedia privados, configuraron parte importante de la matriz de constitución de estos movimientos y sujetos colectivos. Se ha señalado también la importancia de no sobreestimar el papel de los medios y las redes (Boron, 2016) En este sentido, en la medida que una comunicación alternativa sólo puede constituirse y construirse en el marco del despliegue de una práctica social alternativa, se trata de una cuestión esencialmente política, en el sentido del ejercicio y desenvolvimiento del hacer colectivo y la autoactividad de los sujetos subalternos. Este caso particular apunta así también en una dirección más amplia, a la importancia que guarda para los procesos de transformación social el fortalecimiento de las prácticas y subjetivaciones políticas de los sujetos subalternos y de los límites que para ello plantea la estatalización y mediatización liberal de su acción.

De los límites endógenos a la crisis de hegemonía de los procesos de cambio: la significación del golpe de timón

Hemos señalado en otras ocasiones que, a diferencia de lo que a veces se piensa, la crisis de hegemonía del neoliberalismo en la primera mitad de los años 2000 no se tradujo inevitablemente en cambios posneoliberales en toda la región. En algunos países las resistencias fueron derrotadas, los cambios se restringieron al interior de la élite política, y se constituyó lo que ya referimos como neoliberalismo de guerra. Con sus diferencias, lo sucedido en México, Colombia o Perú es ejemplo de ello.

Por otra parte, donde se experimentaron políticas y transformaciones del régimen neoliberal, las mismas adoptaron distinta intensidad, características y radicalidad según los países e, incluso, los períodos; inscribiéndose a grandes rasgos entre dos grandes proyectos: el del neodesarrollismo y el del nuevo socialismo –llamado del siglo XXI o comunitario.

1. Del post-neoliberalismo al post-capitalismo

Con las diferencias sustantivas que pueden señalarse entre ambos proyectos, en la historia reciente los procesos de cambio pos neoliberal en la región afrontaron una serie de limitaciones endógenas, tensiones internas que se convirtieron, progresivamente, en muchos casos, en contradicciones abiertas. Estas dimensiones aparecieron reflejadas en el balance realizado por Hugo Chávez respecto de la revolución bolivariana en 2012, sin duda uno de los procesos más transformadores y radicales de Nuestra América reciente. En el llamado “Plan de la Patria”, el programa que acompañó la última campaña electoral de Chávez y que, ya enfermo, ganara finalmente con el 56% de los votos, se señalaba: “no nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista”; y se afirmaba la importancia de avanzar: “hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo”, de “acelerar el cambio del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista al modelo económico productivo socialista”; y la necesidad de “un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo”, y de “pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política” (Chávez, 2012). Transformación de las relaciones sociales capitalistas; superación del modelo extractivo exportador (rentista petrolero en el caso venezolano); desmantelamiento de la maquinaria estatal burguesa y construcción de formas comunitarias y participativas de gestión de lo público-político y de la economía (por ejemplo, la construcción comunal); potenciación de prácticas colectivas desarticuladoras de las tramas sociales de opresión y

explotación; señalamientos que se han vuelto a mencionar en muchos de los balances y reflexiones sobre las limitaciones y falencias propias de los gobiernos no neoliberales que contribuyeron a mantener o profundizar rasgos de la estructura social propios de la razón neoliberal y que posibilitaron luego el avance de la ofensiva neoliberal.

Frente a estos desafíos, en la primera reunión del consejo de ministros ya como presidente electo Chávez planteó la necesidad del golpe de timón para motorizar estos cambios en la transición al socialismo. En el examen reciente, en similar dirección, François Houtart, entre otros, ha señalado que el desafío fundamental, en particular para los países que más despertaron expectativas de cambio, sigue siendo la definición de caminos de transición profunda hacia un nuevo paradigma civilizatorio poscapitalista (Houtart, 2015; Gaudichaud, 2015)

2. Extractivismo y distribución del ingreso

El nuevo contexto económico mundial que se abre a partir del 2012, con el cambio en el procesamiento regional de la crisis y la caída sistemática del precio de los commodities, transformó los límites endógenos de los procesos de cambio que analizamos en pérdida de hegemonía; transformó las tensiones en contradicciones, las disputas en confrontaciones abiertas.

Particularmente, el modelo extractivo exportador, motor del extraordinario período de crecimiento económico regional entre 2003 y 2007, mostró no sólo las dimensiones del saqueo y la devastación ambiental que lo caracterizan desde sus comienzos sino también su profundo carácter dependiente e inestable sometido como está estructuralmente a los flujos especulativos que fijan centralmente los precios internacionales de estos bienes en los mercados globales a futuro. Esta experiencia indica, como se ha señalado en muchas ocasiones desde el pensamiento crítico, que no puede considerarse un proyecto de cambio social que no aborde la construcción de los caminos de salida del extractivismo latinoamericano. En este sentido, la construcción de una transición post-extractivista requiere romper con la dicotomía que opone la respuesta a lo social frente a la cuestión ambiental, desde un paradigma emancipatorio que articule ambas dimensiones, que se aleje progresivamente de la explotación intensiva de los bienes naturales bajo control trasnacional y orientado a la exportación, para avanzar en la defensa y mejora de las condiciones de existencia y la soberanía efectiva de los sujetos subalternos. Hoy más que ayer bajo la amenaza global de extinción de la vida que despliega el cambio climático neoliberal-capitalista, el horizonte emancipatorio se alimenta en la misma medida de las dimensiones sociales y ecológicas.

Por otra parte, la desaceleración o caída de las economías latinoamericanas a partir de 2012, luego de los años de crecimiento -más significativo hasta 2007, menor después de ahí-, reabrió o intensificó las tensiones sociales y volvió ya definitivamente inconciliable las mejoras en ganancias, ingresos y consumo de los sujetos dominantes (o algunas de sus fracciones) y subalternos. El

ascenso socioeconómico de franjas significativas de la población –eso que se ha llamado la “nueva clase media” latinoamericana- enfrentada a restricciones no podía sino traducirse en malestar y constituirse en un sujeto disponible para la interpelación ideológica de las fracciones dominantes que demandaban un cambio. En este sentido, se ha señalado que “si esta ampliación de capacidad de consumo, si esta ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador” (García Linera, 2016: 9) La importancia de esta batalla cultural e ideológica, de la formación y debate político, ha sido destacada también en varias oportunidades (Boron, 2016; Arkonada, 2015a). Por otra parte, esta necesaria politización de los procesos de distribución del ingreso no sólo implica la efectividad y profundidad de estos procesos que no pueden desarrollarse sin conflictos y rupturas sino también de una transformación en los propios patrones de consumo y de bienestar y, consecuentemente, de producción y tecnológicos.

3. Del golpe económico a la crisis de hegemonía

Finalmente, el examen de la historia regional reciente muestra que en el contexto de caída del crecimiento económico a partir de 2012, en muchos casos los gobiernos no neoliberales, más que el golpe de timón, adoptaron una orientación económica orientada hacia un ajuste “suave” o “fino” haciendo un uso creciente del arsenal de la ortodoxia neoliberal para la confección de las políticas públicas.

Posiblemente, el ejemplo más claro y dramático de este proceso es la experiencia brasileña, y particularmente, la gestión de Dilma Rousseff. En el periodo más próximo, sus límites para responder a las demandas planteadas por las movilizaciones y conflictos del 2013 y las fallidas promesas de reforma política, sanitaria y educativa, posibilitaron que el malestar social pudiera ser capitalizado en las elecciones de fines de 2014 en gran parte por las fuerzas más conservadoras que ampliaron su presencia parlamentaria y condicionaron la ajustada victoria presidencial del PT. Posteriormente, la designación como Ministro de Hacienda del economista ortodoxo Joaquim Levy, proveniente del sector financiero y apodado “manos de tijera” por su compromiso con el recorte del gasto público, y de Katia Abreu, representante del agronegocio, al frente del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, entre otros, mostraron la decisión gubernamental de afrontar la crisis económica con mayores concesiones al pensamiento neoliberal y los grupos dominantes. En ese contexto, la crisis económica se potenció, se deterioraron aún más las bases electorales del gobierno, y la crisis política se profundizó; se construyeron así las fuerzas que hicieron posible el golpe de estado parlamentario que desplazó a Dilma Rousseff.

Sobre estos procesos, García Linera ha señalado que “algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque social revolucionario, potenciando al bloque conservador” y que “...gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que por satisfacer a todos, debiliten tu base social que te dio vida, que te da sustento y que serán, al fin y al cabo, los únicos que saldrán a las calles cuando las cosas se ponen difíciles...Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, o que va a neutralizarla, se cometió un error, porque la derecha nunca es leal, nunca va a ser legal” (García Linera, 2016: 11)

El nuevo ciclo de conflictividad sociopolítica: características e interrogantes

El estudio de la conflictividad social ha ocupado históricamente un lugar principal en la atención del pensamiento crítico. Hemos señalado ya el ciclo de luchas sociales y emergencia de sujetos colectivos desplegados a lo largo de la segunda mitad de los años `90 y que, en la primera mitad de la década siguiente, puso en muchos de nuestros países en cuestionamiento la hegemonía neoliberal. Desde esta perspectiva, consideramos un ciclo de conflictividad social no sólo como un proceso de crecimiento socio-espacial e intensificación de los conflictos sociales sino también por la existencia de un conjunto de características comunes que lo identifican, particularmente en relación con los sujetos (la constitución subjetiva), sus prácticas y programáticas (Marx, 2008; Gramsci, 1999; Seoane, 2014)

En este sentido, en el análisis del nuevo contexto regional que se planteó a partir del 2009 y, particularmente, en relación con lo que hemos llamado como una verdadera “ofensiva extractivista” puede identificarse un nuevo ciclo de conflictividad de proyección regional que emerge ante la expansión e intensificación que anima a los emprendimientos y actividades económicas extractivo exportadores (la megaminería a cielo abierto, la explotación hidrocarburífera, los hidrocarburos no convencionales, los monocultivos forestales y las pasteras, los cultivos transgénicos y el agronegocio, etc.) y las obras de infraestructura (energéticas y de transporte) que los acompañan. Hemos analizado algunas de las características de este ciclo y sus límites en el terreno de su proyección nacional y regional en contribuciones anteriores (Seoane y Algranati, 2012) El levantamiento indígena amazónico en el Perú y la masacre de Bagua que desencadenó la política de Alan García se constituyeron en un símbolo regional de esta ofensiva y de las resistencias que la confrontaron, particularmente en los avances sobre la selva amazónica sudamericana y los pueblos que la habitan.

1. Los cambios en la conflictividad social posterior al 2012

El nuevo contexto económico regional abierto a partir de 2012 que ya analizamos planteó un nuevo momento de la conflictividad social. La desaceleración o crisis económica incrementó las tensiones y malestares sociales en el mundo urbano y del trabajo y en otros sectores sociales, complejos procesos atravesaron la subjetividad de los sectores populares perdida la estabilidad económica y política del periodo anterior. Todo ello también redundó en el despliegue de un nuevo ciclo de conflictividad social a nivel regional más amplio, diverso y significativo aunque heterogéneo, en algunos casos fragmentado, a veces convergente y, en otros casos, sólo simultáneo, a las resistencias y movimientos surgidos frente al extractivismo. El ejemplo más evidente fueron los procesos de lucha experimentados en Chile y Colombia en esos años y que luego de una ralentización en el marco de los contextos eleccionarios de 2013 y 2014 se reactivaron en el periodo reciente.

Sobre ello, es conocido la emergencia, constitución y despliegue de un movimiento nacional por la educación pública en Chile entre 2011 y 2013 que tuvo en los jóvenes universitarios y secundarios su actor central pero que se amplió y convocó a profesores, padres y a otros sectores sociales hasta convertir su demanda en un reclamo nacional. Pero tal vez es menos reconocido en ese período el incremento del conflicto del pueblo mapuche en el sur, o la protesta y movilización regional pero con proyección nacional contra la construcción de las represas en Aysén, o la emergencia e intensificación de las luchas obreras (de los trabajadores portuarios, en el cobre, en el sector minero, de la industria forestal) que tuvo en la jornada de paro nacional de julio de 2013 “la convocatoria más grande realizada por una organización de la clase trabajadora desde el fin de la dictadura” (Aguiar, 2014) Las movilizaciones, conflictividad y acción de los sujetos subalternos en ese período en Chile fueron tan significativas que fueron consideradas como “el despertar de los movimientos sociales”, el del “desplazamiento de la política a las calles”, y el del final de la eficacia del terror (Aguiar, 2013a; Urra Rossi, 2012; Ouviaña, 2012; Gaudichaud, 2014) En el terreno político estas luchas conllevaron la derrota del experimento “Piñera” –con significativos parecidos al del PRO y el gobierno de Macri-, la descomposición de las fuerzas de derecha en las elecciones de 2013 y la elección nuevamente de Bachelet ahora en el marco de una nueva coalición llamada Nueva Mayoría.

Por otra parte, el proceso en Colombia comenzó en 2013 en el contexto de la apertura de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que para los sectores dominantes perseguían mejorar las condiciones para la inversión extranjera y el clima de negocios pero que inesperadamente abrió un ciclo de luchas significativas con los paros nacionales agrarios y populares. En este proceso, desde las primeras protestas de caficultores y agricultores en general – vinculados a la caída de los precios internacionales y las consecuencias del TLC con EE.UU.- la protesta creció en el ámbito rural y urbano, en la zona del pacífico y del atlántico hasta la realización del primer paro agrario y popular de agosto-septiembre de 2014 y la conformación luego

de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que agrupó y agrupa a un conjunto diverso de organizaciones y sujetos sociales donde conviven las dos plataformas sociopolíticas más importantes de dicho país (la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos), con las principales organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, populares y de los pueblos afros. Dicha intensidad y amplitud de la conflictividad social en Colombia en el año 2014 ha sido incluso considerada “un verdadero auge de luchas” y “un revivir de la lucha de clases” (Dorado, 2014; Archila, García, Parra y Restrepo, 2014) así como, en términos cuantitativos, el 2013 registró la mayor cantidad de hechos de protesta desde 1975, según el trabajo de seguimiento de los conflictos que realiza el CINEP desde los años ‘70 (CINEP, 2014)

De esta manera, en el contexto del incremento de las tensiones y la crisis de los gobiernos no neoliberales, en otros países donde la ruptura con el régimen neoliberal no se había producido, por ejemplo en Chile y Colombia, tenía lugar un ciclo de intensa conflictividad social. Sin la significación de lo acontecido en estos casos y bajo el despliegue cruento del neoliberalismo de guerra, incluso en México pueden identificarse importantes hechos de movilización y conflictividad; desde la reaparición pública del zapatismo en 2012 ante los comienzos del nuevo gobierno de Peña Nieto, las resistencias frente a la reforma (privatización) petrolera (de PEMEX) desde 2013, las movilizaciones frente a la represión y desapariciones de los normalistas en Ayotzinapa en 2014 y 2015 que desenmascararon a nivel nacional e internacional la estrecha comunión entre la clase política, las fuerzas de seguridad y los grupos de la economía ilegal en el control terrorista de la población; y más recientemente pero con varios años de historia la lucha de los maestros (particularmente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) contra la reforma educativa y que tuvo en las protestas y represión recientes en Oaxaca uno de sus acontecimientos más conocidos.

2. La conflictividad social en los procesos de cambio

Estos procesos de crecimiento de la conflictividad y de la acción de los sujetos subalternos no son una excepcionalidad de los países donde las recetas neoliberales más duras siguieron vigentes en estos años, también bajo los gobiernos no neoliberales se desplegaron experiencias similares. Por ejemplo, en Brasil las llamadas “jornadas de junio” de 2013 iniciadas con las movilizaciones juveniles por el boleto gratuito (pase libre) en San Pablo y proyectadas nacionalmente luego a todos los grandes centros urbanos tras la represión que intentó conjurar estas primeras demostraciones, ha sido comparadas, por su masividad, con la Campaña por el *impeachment* de Collor de Mello de 1992 y la recordada Campaña por las elecciones directas (Diretas Ya!) de 1985 frente a la dictadura militar (Antunes, 2013) e, incluso, como un regreso del movimiento de masas que había

desaparecido de la escena política desde 1989 (Singer, 2013) Ciertamente heterogéneas y disputadas por los sectores más conservadores y fascistas en el rechazo a Dilma Rousseff y el PT, pero que impulsaron también la primera huelga nacional al gobierno del PT organizada por las ocho centrales sindicales en julio; las “jornadas de junio” no fueron un “rayo solitario en cielo sereno” sino que se inscribieron en un proceso más amplio de crecimiento de la conflictividad social (Antunes, 2013). En este sentido, desde el 2011 puede apreciarse en Brasil un crecimiento de la conflictividad social de diferentes sectores sociales; por ejemplo, los conflictos en el campo que se incrementaron, en términos cuantitativos, casi un 15% respecto del año anterior aún sin alcanzar las dimensiones que tuvieron entre 2003 y 2007 (CPT, 2013). Pero más significativo aún resultó el crecimiento de la conflictividad sindical urbana; considerando por ejemplo que el número de huelgas creció casi un 25% en este periodo aunque de carácter particular y fragmentado (Leher, 2012; DIESSE, 2013) Esta tendencia se mantuvo y acentuó en 2012 cuando, por ejemplo, las horas de paro fueron un 75% más que en 2011 alcanzando un pico histórico apenas inferior al de los años 1989 y 1990, y la cantidad de huelgas resultó un 57% mayor, el número más importante desde 1997 (DIESSE, 2013).

3. Debates e interrogantes

En esta dirección, podríamos mencionar y examinar otras experiencias de lucha en otros países de la región en esos años. Sin ninguna pretensión de linealidad ni determinismo, con sus ascensos y descensos, sus heterogeneidades, fragmentaciones y convergencias, esas experiencias de movilización de sujetos subalternos siguen vigentes o se prolongan hasta la actualidad en lo que puede considerarse aún un mismo ciclo de conflictividad social. Por otra parte, los avances de la ofensiva neoliberal, particularmente en los países donde conquistó el control del aparato del Estado, ha supuesto también nuevos procesos de activación de los sujetos subalternos y de conflictividad social. El mejor ejemplo de ello es, tal vez, el escenario social en Argentina de este último semestre cruzado por conflictos sindicales, sociales y territoriales, desde las movilizaciones frente a los despidos y ajustes en el sector público –especialmente en el primer tercio del año-; los conflictos sindicales en el marco de las negociaciones salariales anuales y de las organizaciones territoriales contra los recortes de las políticas sociales -entre el primer y segundo trimestre-; hasta los cacerolazos o “ruidazos” en las principales ciudades del país frente al alza de tarifas –en el final del segundo trimestre. En su diversidad, estas acciones -aún en la forma local, sectorial o discontinua que a veces asumieron- constituyen un arco de resistencias frente al shock concentrador del ingreso promovido a nivel gubernamental y sus consecuencias.

Ciertamente, se trata en la mayoría de los casos a nivel regional de luchas defensivas y, muchas veces, de resistencia; y esto es una característica del periodo. Si parte del debate emancipatorio se centró en el pasado inmediato en las alternativas y horizontes de cambio, es evidente que la

coyuntura actual plantea abordar esta misma discusión desde el desafío de la construcción de sujetos y fuerzas en un contexto adverso, como lo era ya para muchos movimientos y conflictos. Pero ello no significa que estos conflictos resulten inevitablemente derrotados en sus objetivos inmediatos o en su contribución a un proceso de acumulación de fuerzas de más largo aliento. Frente al ciclo de luchas regionales que cuestionó primero y conmovió después la hegemonía neoliberal, la renovación y debate del pensamiento crítico latinoamericano se centró en la interpretación (histórica y teórica) de la novedad de la constitución movimientista de los sujetos subalternos. Las discusiones sobre los sujetos protagonistas de dichas luchas así como sobre sus prácticas y programáticas ocupó un lugar central en la producción del pensamiento crítico. En ese momento, la importancia alcanzada por los movimientos indígenas, territoriales, comunales, los constituidos desde su desposesión (los llamados “movimientos sin”) en contraposición a la pérdida de centralidad política de la forma sindical y del movimiento obrero implicó una discusión teórica y política sobre la interpretación de esta novedad que se formuló a veces desde la falaz oposición entre viejos y nuevos movimientos, o entre la valoración de la identidad cultural-simbólica enfrentada a la determinación de clase (examinamos estas cuestiones en Seoane, Taddei y Algranati, 2008). En la actualidad, este debate vuelve a emerger entre los que realzan los cambios en la configuración de los sujetos subalternos de la última década y asimilan el escenario actual más a las fuerzas que operaban antes de la profundización neoliberal y aquellos que enfatizan la continuidad de las transformaciones estructurales y resaltan el lugar que el territorio y la forma comunidad cumplen en la constitución subalterna y las resistencias. Más significativo aún, considerando la experiencia de los años ´90, puede resultar el examen de las experiencias de emergencia de la acción colectiva de los sujetos subalternos, los procesos de activación social y expansión del asociativismo y la solidaridad en sus múltiples dimensiones, y la relación que en estos procesos aparece entre lo que suele llamarse espontaneísmo y organización o, para pensarlo desde otra perspectiva más precisa, de la emergencia de nuevas prácticas colectivas y de renovación-reinvención organizativa. En este orden también, otra de las cuestiones importantes apunta al examen de las formas de lucha y organizativas referidas a los procesos de construcción de las convergencias y articulaciones multisectoriales y las relaciones que en la conflictividad y constitución subjetiva subalterna se plantea y despliega entre lo local y lo nacional; y entre lo particular-corporativo y lo político general. Esta última cuestión refiere también a la dinámica que puede establecerse entre el crecimiento de la conflictividad de los sujetos subalternos y la posibilidad del despliegue de nuevo procesos de radicalización ideológica. Y, en ese mismo orden, también en el examen de las relaciones entre estos movimientos, el Estado y la producción de lo común-comunitario más allá del Estado. Finalmente, este último aspecto interroga también sobre las formas, tiempos y características del ciclo de resistencias, en el debate sobre su capacidad de abrir

procesos de cuestionamiento social más amplios o de acumulación de fuerzas de más largo aliento. Estas problemáticas e interrogantes, y ciertamente otros más que por cuestiones de espacio quedan fuera de mención, constituyen una agenda de los debates que las luchas sociales actuales le plantean al pensamiento crítico y la acción transformadora.

Pasado y presente de los desafíos de la emancipación

A lo largo de esta contribución hemos propuesto un examen del campo de fuerzas y experiencias en las que se constituye la acción conflictiva y la constitución subjetiva de los sujetos subalternos en Nuestra América en la actualidad. En esta dirección, el análisis del nuevo ciclo de conflictividad social desplegado en la región conllevó también una reflexión sobre otros dos procesos simultáneos, contrapuestos y tendenciales: el que hemos bautizado como “ofensiva neoliberal” y la considerada crisis de hegemonía de los gobiernos y proyectos de cambio. Por otra parte, este abordaje nos condujo a proponer y formular una mirada que recorta un período de tiempo extendido, que se inicia entre 2011 y 2012 y que, potencialmente, se proyecta como horizonte más allá de la coyuntura. De esta manera, como sucede siempre, el estudio del presente interroga al pasado, en la perspectiva de escrudiñar los desafíos emancipatorios.

Sobre estas relaciones, en su obra “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, Carlos Marx, reformulando una vez más a Hegel, señala que la historia no se repite; que su evocación en la interpretación del presente opera en realidad como encubridora de las novedades que distinguen la actualidad (Marx, 2008). Coincidiendo con ello, Antonio Gramsci, por otra parte, enfatiza otra dimensión del pensamiento marxiano, sobre la importancia de la discusión, el examen y la interpretación del pasado como campo en el que se constituyen las condicionalidades consideradas “objetivas” y claves para responder a los desafíos del presente, entendido éste como disputa y posibilidad de cambio (Gramsci, 1991). Walter Benjamin aporta, en este diálogo imaginario, una nueva dimensión, donde el pasado aparece como el adueñarse de un recuerdo convertido en un relámpago, una evocación-invencción que relumbra e ilumina frente al momento de peligro, que enciende la chispa de la esperanza (Benjamín, 2006). Entre estos pasados y presentes se enhebran los futuros emancipatorios en Nuestra América.

Bibliografía

AA.VV. 2016 “Declaración ‘El Decreto del Arco Minero del Orinoco: un ataque a la vida, un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas, una violación a la esencia de la Constitución’”, mimeo

Aguiar, Santiago 2013 “Informe de conflicto social. Bloqueos y cortes. 2012”, en <http://www.estudiosdeltrabajo.cl/wp-content/uploads/2013/08/informe-de-conflicto-social-bloqueos-y-cortes-2012.do>

Aguiar, Santiago 2013 “Informe de conflicto social. Primer semestre 2013”, en <http://estudiosdeltrabajoblog.wordpress.com/2013/12/31/informe-de-conflicto-social-primer-semester-2013/>

Aguiar, Santiago 2014 “Informe de conflicto social. Huelgas y paros en el 2013: Intensificación de la lucha de clases de la clase trabajadora, y tres nuevas tendencias en el movimiento obrero”, en <http://www.estudiosdeltrabajo.cl/wp-content/uploads/2013/12/informe-de-conflicto-social-segundo-semester-2013.d>

ALAI 2015 *¿Fin de ciclo progresista? Revista ALAI N° 510* (Quito: ALAI) Disponible en <http://www.alainet.org/es/revistas/510>

Antunes, Ricardo 2013 “Los días que conmovieron a Brasil”, en *Revista Herramienta N° 53* (Buenos Aires: Herramienta)

Archila, Mauricio; García, Martha Cecilia; Parra, Leonardo y Restrepo, Ana María 2014 “Luchas sociales en Colombia 2013”, en <http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/viewFile/10350/13142>

Arkonada, Katu 2015a “¿Fin del ciclo progresista o reflujo del cambio de época en América Latina? 7 tesis para el debate”, en *Rebelión*, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203029>

Arkonada, Katu 2015b “¿Fin de ciclo? La disputa por el relato”, en *Revista ALAI No. 510*, diciembre (Quito: ALAI)

Beinstein, Jorge 2016 “Origen y auge de las lumpenbuergeoisías latinoamericanas”, *Revista Maíz N° 6* (La Plata: Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de La Plata)

Beinstein, Jorge 2014 “Del fin del comienzo al comienzo del fin. Capitalismo, violencia y decadencia”, en http://beinstein.lahaine.org/b2-img/Beinstein_violencia.pdf

Benjamín, Walter 2006 *Tesis de filosofía de la historia* (Buenos Aires: Taurus)

Boito, Armando 2012 “Las bases políticas do neodesenvolvimentismo”, en <http://eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf>

Boron, Atilio 2013 *América Latina en la geopolítica del imperialismo* (Buenos Aires: Ed. Luxemburg)

Boron, Atilio 2016 “¿Estancamiento, retroceso, involución? Hipótesis sobre la génesis de ciertos acontecimientos recientes en América Latina”, ponencia presentada

CACEYP (Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular) 2014a “Convocatoria Cumbre Nacional Agraria: campesina, étnica y popular”, en <http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article13260>

CACEYP (Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular) 2014b “Comunicado a la opinión pública. Primera victoria de la unidad agraria campesina, étnica, afrocolombiana y popular en Colombia”, en http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2330:comunicado-a-la-opinion-publica-005&catid=178&Itemid=863

Chávez, Hugo 2012 *Propuesta del Candidato de la Patria. Comandante Hugo Chávez. Para la gestión Bolivariana socialista 2013-2019* (Caracas: PSUV)

CINEP 2014 *Informe Especial “Luchas sociales en Colombia 2013”* (Bogotá: CINEP/ Programa por la Paz)

Cocco, Giuseppe 2013, “Mobilização reflète nova composição técnica do trabalho imaterial das metrópoles”, en *Cadernos IHU Ideias* (São Leopoldo: Instituto Humanitas Unisinos) N° 191.

Codas, Gustavo 2015 “Problemas de la política económica progresista”, en *Revista ALAI* No. 510, diciembre (Quito: ALAI)

CPT (Comissão Pastoral da Terra) 2014 *Conflitos no Campo Brasil 2013*, en <http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/conflitos-no-campo/2042-conflitos-no-campo-brasil-2013>

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 2013 “Balço das Greves em 2012”, en <http://www.dieese.org.br/balancodasgreves/2012/estPesq66balancogreves2012.pdf>

Dorado, Fernando 2014 “Colombia. Balance de las luchas populares de 2013”, en <http://alainet.org/active/70757>

Eagleton, Terry 2016 *Esperanza sin optimismo* (Madrid: Taurus)

El País 2014 “Empresarios manifiestan apoyo a la reelección del presidente Juan Manuel Santos”, en <http://www.elpais.com.co/elpais/elecciones/noticias/empresarios-manifiestan-apoyo-reeleccion-presidente-juan-manuel-santos>

García Linera, Álvaro 2016 “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, en revista *IDEAL* N° 2 (México: Escriba Editores)

Gaudichaud, Franck 2014 “Progresismo transformista, neoliberalismo maduro y resistencias sociales emergentes”, en *Revista OSAL* Año XV N° 35 (Buenos Aires: CLACSO)

Gaudichaud, Franck 2015 “¿Fin de ciclo? Los movimientos populares, la crisis de los “progresismos” gubernamentales y las alternativas ecosocialistas”, en portal *Rebelión*, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=204346>

- Gilly, Adolfo y Roux, Rhina 2009 “Capitales, tecnologías y mundos de vida. El despojo de los cuatro elementos”, en Arceo, E. y Basualdo, E. (comps.) *Los condicionantes de la crisis en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO)
- Giuseppe Cocco y Sarita Albagli (orgs.) 2013 *Revolução 2.0* (Garamond: Rio de Janeiro).
- González Casanova, Pablo 2002 “Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una”, en Revista OSAL N° 8 (Buenos Aires: CLACSO)
- Gramsci, Antonio 1999 *Cuadernos de la Cárcel* (México: Ed. ERA)
- Gudynas, Eduardo 2010 “La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas”, en portal Rebelión, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=204205>
- Gudynas, Eduardo 2015 “La identidad de los progresismos en la balanza”, en Revista ALAI No. 510, diciembre (Quito: ALAI)
- Gudynas, Eduardo 2011b “Desarrollo, extractivismo y buen vivir. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”; en AA.VV. *Más allá del desarrollo* (Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala)
- Harvey, David 2004 *El nuevo imperialismo* (AKAL:Madrid)
- Houtart, Francois 2016 “América Latina: el final de un ciclo o el agotamiento del posneoliberalismo”, en <http://www.telesurtv.net/bloggers/AMERICA-LATINA-el-final-de-un-ciclo-o-el-agotamiento-del-posneoliberalismo-20160419-0005.html>
- Katz, Claudio 2012 “El ajedrez global de la crisis”, en Revista Batalla de Ideas N° 3 (Buenos Aires: BI)
- Katz, Claudio 2014 “¿Qué es el neo-desarrollismo? I- Una visión crítica. Economía”, en <http://katz.lahaine.org/?p=232>
- Katz, Claudio 2016 “Ensayos neo-desarrollistas y proyectos socialistas. Desenlaces del ciclo progresista”, en portal Rebelión, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=208177>
- Klein, Naomi 2007 *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre* (Buenos Aires: Paidós)
- Landa, Roger 2015 “La historicidad del “ciclo progresista” actual. Cinco tesis para el debate”, en Revista ALAI No. 510, diciembre (Quito: ALAI)
- Lander, Edgardo 2016 “La implosión de la Venezuela rentista”, en APORREA, <http://www.aporrea.org/energia/a230770.html>
- Leher, Roberto 2013 “Manifestações massivas no Brasil têm origem na esquerda” en http://www.correiodadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8543:submanchete270613&catid=63:brasil-nas-ruas&Itemid=200
- Leher, Roberto *et al* 2013 “Brasil: agravamento da crise, coesão do bloco dominante e novos horizontes para as lutas sociais” en Revista OSAL Año XIV, N° 33, mayo (Buenos Aires: CLACSO)

Marx, Carlos 2008 *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* (Buenos Aires: Prometeo)

Modonesi, Massimo 2015 “¿Fin del ciclo o fin de la hegemonía progresista en América Latina?”, en *La Jornada*, edición del 27 de septiembre, en <http://www.jornada.unam.mx/2015/09/27/opinion/022a1mun>

Moldiz, Hugo 2016 “Un análisis de la Bolivia post referéndum”, en revista IDEAL N° 2 (México: Escriba Editores)

Morales, Evo 2016 “Gobiernos progresistas en AL, incapaces de enfrentar la guerra mediática”, en *Diario La Jornada* edición del 23 de mayo, en <http://www.jornada.unam.mx/2016/05/23/mundo/021n2mun>

Murillo, Susana 2008 *Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón* (Buenos Aires: CLACSO)

Murillo, Susana y Algranati, Clara 2012 “De la crisis mundial a la ofensiva extractivista. El BID en el presente de Nuestra América”; en *Revista La cola del diablo* N° 1 (Buenos Aires: LCDB)

Murillo, Susana y Algranati, Clara 2012 “De la crisis mundial a la ofensiva extractivista. El BID en el presente de Nuestra América”; en *Revista La cola del diablo* N° 1 (Buenos Aires: LCDB)

OSAL 2004 *Revista OSAL N° 14, dossier “Criminalización social e inseguridad”* (Buenos Aires: CLACSO). Disponible en <http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Osal/osal/osal14/index.html>

Ouviña, Hernán 2012 “Somos la generación que perdió el miedo” en *OSAL* Año XIII, N° 31 (Buenos Aires: CLACSO)

Pomar, Valter 2015 “Retos y perspectivas de la izquierda latinoamericana”, en *Revista ALAI* No. 510, diciembre (Quito: ALAI)

Rauber, Isabel 2015 “Gobiernos populares de América Latina, ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político? La clave del protagonismo popular”, en *Revista ALAI* No. 510, diciembre (Quito: ALAI)

Regalado, Roberto 2016 “América Latina ¿qué ciclo llegó a su fin?”, en <http://www.elviejotopo.com/topoexpress/america-latina-que-ciclo-llego-a-su-fin/>

Regalado, Roberto 2016 “América Latina: correlación de fuerzas, poder, gobierno y democracia”, en revista IDEAL N° 2 (México: Escriba Editores)

Romano, Silvina 2015 “La guerra por los corazones y las mentes y el ‘fin de ciclo’”, en *Revista ALAI* No. 510, diciembre (Quito: ALAI)

Sader, Emir 2015 “¿El final del ciclo (que no hubo)?”, en *ALAI*, disponible en <http://www.alainet.org/es/articulo/172389>

Segato, Rita 2013 *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado* (Buenos Aires: Tinta Limón)

Seoane, José 2008 “Los movimientos sociales y los debates sobre el Estado y la democracia en América Latina”, en Moreno, Oscar (coords) *Pensamiento contemporáneo. Principales debates políticos del Siglo XX*. Buenos Aires: Teseo.

Seoane, José 2011 “Para una cartografía del modelo extractivo-exportador en Argentina: mapas de las resistencias, desafíos de las alternativas”, en Revista Batalla de Ideas N° 2 (Buenos Aires: BI)

Seoane, José 2014 “¿América Latina ante una nueva transición? Cinco notas para debatir en perspectiva la coyuntura de Nuestra América”, en *Revista Cambio* N° 10 (Buenos Aires: PG)

Seoane, José 2014 “Trabajadores, acción sindical y conflictividad de los sectores subalternos en Argentina: historia reciente, desafíos del presente”, en AA.VV., *État des résistances dans le Sud 2013. Les mouvements syndicaux* (Bruselas: CETRI)

Seoane, José y Algranati, Clara 2012 “La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”, en Revista Herramienta N° 50, julio (Buenos Aires: Herramienta)

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2013 *Extractivismo, despojo y crisis climática* (Buenos Aires: Herramienta)

Seoane, José; Algranati, Clara y Taddei, Emilio 2011 “Tras una década de luchas. Realidades y desafíos de los proyectos de cambio en Nuestra América”, en Revista Herramienta N° 46 (Buenos Aires: Herramienta)

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2008 “El concepto ‘movimiento social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes”; en Proyecto “Los conceptos elementales de nuestro tiempo”, González Casanova, Pablo (coord.); México, UNAM.

Singer, André 2013 "A energia social não voltará atrás", en <http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/andre-singer-energia-social-nao-voltara-atras.html>

Stefanoni, Pablo 2016 “Bolivia. ¿Traspié electoral o fin de un ciclo?”, en <http://contrahegemoniaweb.com.ar/bolivia-traspie-electoral-o-fin-de-un-ciclo/>

Tarrow, Sidney 2004 *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (México: Alianza)

Teruggi, Marco 2015 “¿Comuna o nada? A tres años del golpe de timón”, en <http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/10/20/comuna-o-nada-a-tres-anos-del-golpe-de-timon/>

Ugarteche, Oscar 2015 “Cómo se ve el panorama del futuro próximo”, en Revista ALAI No. 510, diciembre (Quito: ALAI)

Urra Rossi, Juan 2012 “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología” en Revista OSAL Año XIII, N° 31 (Buenos Aires: CLACSO)

Zibechi, Raúl 2013 “Debajo y detrás de las grandes movilizaciones” en Revista *OSAL* Año XIV, N° 34 (Buenos Aires: CLACSO)

Zibechi, Raúl 2016 “Fin del ciclo del Partido de los Trabajadores: golpe al corazón de la izquierda latinoamericana”, en <http://contrahegemoniaweb.com.ar/fin-del-ciclo-del-partido-de-los-trabajadores-golpe-al-corazon-de-la-izquierda-latinoamericana/>

Zibechi, Raúl 2014 “El ciclo progresista en Sudamérica ha terminado”, en <https://notas.org.ar/2014/11/04/raul-zibechi-ciclo-progresista-sudamerica-terminado/>

Zibechi, Raúl 2015 "Hacer balance del progresismo", en *Resumen latinoamericano*, 4 de agosto, en www.resumenlatinoamericano.org/2015/08/04/hacer-balance-del-progresismo.

Movimientos sociales en la Argentina reciente: balances y perspectivas

Lic. Oscar Soto (FCPyS-UNCuyo)

Lic. M. Inés Lucero Belgrano (FCPyS-UNCuyo)

Introducción

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación mayor en el que abordamos las reconfiguraciones políticas y sociales en América Latina a la salida de los años '90, en el marco de una crisis general del modelo neoliberal. Dentro de este amplio espectro nos preocupamos por analizar la última década con foco en las formas que asumió el Estado en la región; las características de los colectivos que forjaron la resistencia al neoliberalismo y sus formas de organización ante la emergencia de gobiernos que, con matices e intensidades distintas, se opusieron a los preceptos generales del pensamiento único. Al mismo tiempo, la necesidad de repensar y formular categorías que permitieran dar cuenta de fenómenos emergentes y de su complejidad, evitando análisis simplistas y mecánicos, nos impulsó a repensar conceptos clásicos del pensamiento crítico a la luz de las especificidades de América Latina: ¿hegemonía-contrahegemonía? ¿post-hegemonía? En esta ponencia nos proponemos reconstruir brevemente la conformación de los movimientos sociales en la Argentina forjados en la resistencia al neoliberalismo en los años '90, para desde allí abordar dos ejes mutuamente relacionados: 1) la relación de tales movimientos con el Estado a partir del año 2003 en términos de autonomía-dependencia; 2) un balance y posibles perspectivas de dichos movimientos en la actualidad ante un cambio del curso político hacia gobiernos de corte neoconservador.

Los años '90: neoliberalismo v resistencia

El surgimiento en las últimas décadas de movimientos de resistencia al modelo neoliberal en América Latina y la asunción de gobiernos que plantearon rupturas con los principales lineamientos del modelo, suscitó fuertes debates frente a la realidad política y social del continente. Las distintas corrientes del pensamiento crítico latinoamericano han intentado interpretar, predecir y acompañar los sucesos sociopolíticos de la región.

Una de las razones por las cuales el continente latinoamericano ha despertado tal interés académico, institucional y militante se debe en primer lugar a que es una de las regiones - surgida y concebida desde una tradición de resistencia y combate de las formas de control y explotación dominantes¹ - en la que la emergencia de movimientos sociales disruptivos y críticos del orden de cosas vigente, reactualiza las luchas sociopolíticas en tanto las articula a un conjunto de demandas populares y una clara oposición a la hegemonía neoliberal. Esta articulación contribuyó por un lado a un proceso de cambios importantes en el orden político, económico, social y además cultural en los últimos años; mientras que por otro lado explica la necesidad de discernir la intensidad política que vive el continente por estos días.

La consolidación efectiva del neoliberalismo en América Latina implicó una serie rupturas en el orden de estructuración de las relaciones sociales, ya sea por vía de la violencia institucional ejercida *desde arriba* o por intermedio de la asimilación cultural de

¹ Aníbal Quijano se refiere al modo de inserción de América Latina en la estructura del capitalismo global y plantea: “...en el proceso de constitución histórica de América, todas las formas de control y de explotación del trabajo y de control de la producción-apropiación-distribución de productos, fueron articuladas alrededor de la relación capital-salario y del mercado mundial [...]. De ese modo se establecía una nueva, original y singular estructura de relaciones de producción en la experiencia histórica del mundo: el capitalismo mundial...” (Lander, 2000:122)

la hegemonía del mercado -y la consabida mercantilización del entramado societal, que este trajo aparejado-. Uno de los elementos centrales de esta etapa de reconfiguración y fragmentación de los imaginarios sociales, que tuvo mayor relevancia, fue precisamente el que refiere a la mutación de los ámbitos de disputa sociopolítica y las formulaciones identitarias que cohesionaban a las clases subalternas latinoamericanas. Los espacios de labor fabril, el activismo sindical y la preponderancia de los partidos políticos como aglutinadores de las reivindicaciones anti-imperiales y anti-dictatoriales, se vieron agotados en el cambiante panorama de la recolonización de las clases dominantes en el continente.

Durante los años de la aplicación de la estrategia militar, destinada a desgastar todo posicionamiento político crítico en América Latina, la ofensiva imperial norteamericana tuvo la particularidad de promover un entramado institucional que diera sustento a la lógica de acumulación del capital en la fase neoliberal en la región. Casi como una prefiguración espacial, en la medida que se consolidaba el sistema de explotación económica, los trabajadores desposeídos y mujeres explotadas comenzaban la larga marcha de la resistencia al campo, las villas miserias, la expulsión de los grandes latifundios y el destino de los márgenes y la exclusión social. Paralelamente, el proceso de transición de las democracias latinoamericanas consagraba gobiernos liberales, con propuestas de productividad y mejores salarios, en la gestión de la gobernanza neoliberal. Los años 90 significaron la aplicación de un feroz plan de privatización de la economía, desregulación del aparato estatal y la consagración de la hegemonía neoliberal.

Es posible destacar dos aspectos centrales de la ofensiva neoliberal: por un lado, la fuerte hegemonía ideológica que logra este modelo que le permitirá su permanencia; por otro lado, la exacerbación de mecanismos de explotación y control en dimensiones impensables.

Sobre este segundo aspecto, los aportes de David Harvey son esclarecedores. A través del concepto de *acumulación por desposesión*, el autor muestra que aquellos supuestos asociados a lo que Marx denominó acumulación originaria tales como la depredación, el fraude y la violencia propios de la lógica del capital, no son rasgos de un momento originario sino que se mantienen como proceso en curso, con mayor o menor

intensidad según el contexto. No serían características dejadas en un pasado y la acumulación se realizaría sólo por reproducción ampliada, sino que continúan como forma de resolver las crisis de sobreacumulación a las que el sistema tiende (Harvey: 2005).

En el caso de la Argentina, pasado el período dictatorial y el gobierno de Alfonsín, la definitiva implementación del recetario neoliberal será concretado por Carlos Menem en la presidencia a partir de 1989. Es necesario resaltar que si bien se promueve el retiro del Estado de áreas en las que anteriormente intervenía de forma directa, esto de ningún modo debe interpretarse como la no existencia de un Estado fuerte. Todo lo contrario, el rol del Estado en la instauración del neoliberalismo fue fundamental. Tal como sugiere Harvey, *“como en el pasado, el poder del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos [...]”* (Harvey: 2005), es decir, para llevar adelante las acciones necesarias para una mayor concentración de capital por parte de las clases dominantes.

Uno de los ejes fundamentales del plan neoliberal en la región fue la privatización de las empresas públicas. Esto hizo posible que importantes grupos locales asociados a su vez con el capital extranjero adquirieran estructuras y acciones de empresas a un costo menor a su valor real, lo que favoreció una concentración de capital aun más intensa. Sin duda, una de las privatizaciones más importantes fue la de YPF que dejó en manos del capital extranjero un recurso estratégico básico como el petróleo. Además, hubo una reducción drástica del gasto público: se dispuso un severo control de las compras y contrataciones que realizaba el Estado, se redujo el personal del sector público nacional con congelamiento de vacantes y se incrementó la presión tributaria (Rapoport: 2000). Pero sin duda el máximo esfuerzo estuvo en establecer una política económica basada en la reducción de los ingresos de la clase trabajadora, es decir, de los costos de la mano de obra, lo que posicionaba a la Argentina como un país realmente “competitivo”.

El discurso de Menem traducía estos lineamientos en términos de la “modernización” del país, la “competitividad” de la Argentina y su “entrada al primer mundo”. De lo que se trataba en definitiva era de seguir las pautas de los organismos financieros internacionales, especialmente el FMI, que orientaba los planes de ajuste

acordes al creciente endeudamiento del gobierno argentino. Sin embargo, la mayor forma de disciplinamiento de las clases populares fue el alto índice de desempleo registrado.

El neoliberalismo implica un fuerte proceso de des-democratización de las relaciones sociales y privatización de la autoridad pública, generando la no participación y la fragmentación de las clases trabajadoras incluso recurriendo a instancias de represión directa en caso de no poder mediar los conflictos por otras vías.

El mismo proceso de recolonización y explotación aquí descripto, comienza a exhibir rupturas por vía del cuestionamiento y la impugnación social del orden instaurado. La progresiva conflictividad que se da a mediados de los años '90 en América Latina (AL), a partir del fenómeno de la movilización social y la emergencia de una subalternidad de la protesta, atraviesa el continente (desde el levantamiento zapatista en Chiapas hasta las puebladas piqueteras en el interior argentino).

La AL de los años del neoliberalismo explícito, se vio atravesada por los conflictos provenientes de la concentración de la riqueza y la profundización de la desigualdad:

“Por contrapartida, resultado del proceso de concentración del ingreso, la riqueza y los recursos naturales que signa a las políticas neoliberales, nuevos movimientos sociales de base territorial tanto en el mundo rural como también en el espacio urbano han emergido en el escenario latinoamericano constituyéndose en algunos casos, por ejemplo, en relación a su identidad étnico-cultural (los movimientos indígenas) o en referencia a su carencia (los llamados “movimientos sin”, por ejemplo los sin tierra, sin techo o sin trabajo) o en relación a su hábitat de vida compartido (por ejemplo los movimientos de pobladores)” (Algranati, Seoane, Taddei: 2006).

En el caso de la Argentina, durante la segunda mitad de los años '90 se harán fuertes en presencia y organización movimientos sociales² como el movimiento piquetero, el movimiento de fábricas recuperadas, los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) y también se harán presentes las denominadas Asambleas Ciudadanas y en especial aquellas ligadas a reivindicaciones ambientalistas, principalmente contra la mega-minería a cielo abierto y otras prácticas contaminantes –con mayor intensidad ya en la década del 2000-

4. Crisis social y política, estallido del 2001

En nuestro país, las jornadas de lucha de 2001 son el punto más alto de la crisis que ya venía gestándose desde el segundo mandato de Menem y que el gobierno de la Alianza no pudo sortear e incluso profundizó con mayores ajustes. Las consecuencias impopulares de la política neoliberal condujeron a la agudización del conflicto social tornando insostenible el modelo y volviendo clara la necesidad de buscar salidas alternativas al mismo. Tal conflictividad obligará al entonces presidente de la Argentina, Fernando De la Rúa a dejar su cargo.

En este sentido, la forma de organización así como los principales reclamos de los movimientos sociales están estrictamente relacionados con el proceso de desmantelamiento del Estado pero también con la puesta en crisis y deslegitimación de los partidos políticos tradicionales y de las instituciones de la democracia liberal.

Sin embargo, el carácter arrasador del neoliberalismo en Argentina colocó a estos movimientos en el lugar de resistencia con dificultades para articular un proyecto político alternativo. Esto se pondrá de manifiesto claramente en la salida a la crisis. No obstante,

² Si bien la conceptualización de los movimientos sociales a la luz del pensamiento y la práctica política latinoamericana (Seoane, Taddei, Algranati: 2011) no está desprovista de las confrontaciones y diferencias teóricas que las ciencias sociales le imponen a la delimitación de un término cuyo potencial explicativo tiene dimensiones amplias, pensamos aquí en aquel tipo

de politicidad emergente que se suscita por fuera de los canales formales de la política latinoamericana, esto es los sindicatos o los partidos políticos tradicionales.

cabe considerar que aún cuando el kirchnerismo encontrará los mecanismos para reencauzar el conflicto institucionalmente, en este periodo se gestaron organizaciones, prácticas y reflexiones que han perdurado y que hoy representan lo novedoso dentro de los márgenes de la institucionalidad demo-liberal.

El estallido social de diciembre de 2001, que obligó al entonces presidente Fernando De la Rúa a renunciar, puede interpretarse como un parteaguas entre los años de hegemonía menemista y el período que se abriría a partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. El 19 y 20 de diciembre condensaron múltiples factores de protesta acumulados a lo largo de décadas de neoliberalismo. El descontento generalizado se tradujo en masivas manifestaciones, cacerolazos, piquetes y enfrentamientos con las fuerzas represivas. La crisis fue total. El cuestionamiento era general, abarcando todo el sistema político cuya deslegitimización impidió que el conflicto pudiera resolverse institucionalmente.

La sucesión en el cargo presidencial de varias personas que no pudieron “ordenar” a la sociedad, puso de manifiesto la envergadura del conflicto pero también el agotamiento de un modelo que necesariamente debía ser modificado. Sin embargo, aun cuando en los momentos más intensos de la lucha, las clases populares recurrieron a prácticas de democracia directa, de enfrentamiento al aparato represivo, de crítica al modelo institucional liberal, el alcance de las mismas no se orientó en un camino revolucionario.

Este último aspecto es central a la hora de analizar cuál es el devenir de los movimientos participantes en la lucha contra el neoliberalismo, que cobran mayor visibilidad en 2001. La respuesta casi inmediata que surge al respecto es la inexistencia en tal coyuntura de una alternativa política que pudiera canalizar las demandas de los sectores en lucha y que permitiera una organización política mayor.

Si bien este planteo podemos observarlo en la coyuntura de 2001, cabe agregar algunos aspectos igualmente importantes. En primera instancia, los intereses divergentes de los sectores participantes: aun cuando una de las consignas más resonantes fue “piquete y cacerola la lucha es una sola”, la heterogeneidad y diferencia de los participantes se observa

en sus demandas, origen social e incluso en la ocupación del territorio durante las jornadas de lucha (Fradkin: 2002).

En segunda instancia, la fragmentación de la clase trabajadora producto de años de precariedad laboral, la pérdida de representatividad por parte de las centrales sindicales y las dificultades que históricamente han tenido los partidos de izquierda tradicionales para lograr masividad condujeron, por un lado, a que no pudieran aglutinarse los movimientos en lucha pero, por otro lado, a que se abriera un espacio en el que se produjeran prácticas políticas novedosas o la revitalización de algunas olvidadas que, según sostenemos en este trabajo son elementos que de potenciarse a lo largo de esta década y, aún con la relación compleja que el Estado les impone, pueden comenzar a esbozar una alternativa política en el país que a la vez se conjugue con movimientos regionales.

Retomando, pasados los días álgidos de diciembre, en pocos meses se restauró el sistema institucional y aunque el conflicto no cesó fue perdiendo su fuerza, poniéndose de manifiesto que aun cuando las protestas estuvieron integradas por sectores sociales diversos, las diferencias de intereses entre los mismos eran claras. Además, no debemos perder de vista que el accionar del Estado fue altamente represivo, buscando de este modo el disciplinamiento de los sectores más radicalizados. Dicho disciplinamiento, tuvo su punto culmine durante la presidencia de Eduardo Duhalde, con el asesinato de los dirigentes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, por parte de la represión policial, en junio de 2002.

Kirchnerismo, una etapa nueva de luchas políticas

La posibilidad de comprender cabalmente el entramado complejo y disímil de los procesos políticos en toda la geografía latinoamericana resulta poco probable, no obstante se puede y se debe, al menos de manera parcial, intentar abordar desde la observación de los cambios sucedidos en la *resistencia* a la hegemonía del decenio neoliberal: la *lucha social* y la *lucha política* de los años 90 aquí brevemente enunciados.

Los procesos de disputa contrahegemónica en la región, encarnada por los movimientos sociales adversos al capital, han propiciado la articulación de las luchas sociales y culturales en sus formas de constitución y acceso al poder. El poder se constituye entonces en la condensación de una forma de relaciones sociales (de fuerzas culturales, políticas, económicas) articuladas y ejerciendo un dominio en función de una clase o un sector que detenta dicha hegemonía. La conformación de un bloque de gobiernos populares,

-entre los que se encuentran Venezuela, Ecuador y Bolivia pero así también los procesos políticos de Brasil, Uruguay y Argentina, entre otros, con un conjunto de discontinuidades y características diferentes entre sí- en un “cambio de época” como lo llamara el Presidente de Ecuador Rafael Correa, con la caracterización de una política *pos-neoliberal* en muchos de los ejes significativos que regulan las relaciones sociales en el continente, responde a un proceso contrahegemónico que intenta disputar la dirección cultural, pero que lo hace a través de la conducción del ejercicio del poder del Estado en algunos de estos países latinoamericanos.

El *laboratorio* político de América Latina en este periodo histórico ha vinculado lo social y lo político, la Sociedad y el Estado a partir de las formaciones políticas y de la politicidad emergente en los periodos de resistencia al neoliberalismo: el Estado ha otorgado fuerza coactiva a los fines políticos de la organización de la sociedad civil que se ha animado a cuestionar la preeminencia de la lógica neoliberal.

No obstante lo que aquí marcamos, el caso argentino no es el ejemplo más puro del salto de la disputa social y la protesta autónoma a la dirección del Estado de una manera más evidente -al estilo boliviano por ejemplo-, sino que por el contrario, el arribo de un presidente como Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, despierta en el conjunto de organizaciones populares la misma cantidad de dudas como de certezas. Es decir, el gobierno de Kirchner, como salida política a la crisis desatada en Argentina, trae en su carpeta de antecedentes la vinculación con una trama política del peronismo setentista y una posición de cierta autonomía, en muchos casos resistencia y llegada algunas instancias una confrontación directa con la presidencia de Carlos Menem (Galasso,2015: 8), pero a pesar de ello pertenece al metabolismo de la política argentina y a su corporación instituida

luego de la llegada de la democracia en 1983. En ese sentido no podría adjudicársele la total desvinculación de la profundización del neoliberalismo que tanto el peronismo como el radicalismo y el sistema político en su conjunto habían propiciado en el país. Al menos sino era un actor directo, en las organizaciones y movimientos sociales la reticencia estaba sembrada.

El gobierno de Kirchner se caracterizó por la incorporación de un discurso de proyecto nacional y una correlación en sentido práctico de una supremacía de la política frente a la lógica del interés económico rector de los gobiernos anteriores. A una alianza regional estratégica y a la recuperación de una tradición latinoamericanista fuerte se debe agregar entre sus hitos más importantes la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (2001), pensiones y obras sociales para veteranos de Malvinas (2004), la Moratoria Provisional (2006), una de sus políticas más trascendentes: la reestructuración de la deuda externa (2005), en conjunto con la cancelación de la deuda con el FMI (2006).

A eso se debe añadir que, habiendo ya asumido Cristina Kirchner, se profundizan algunos ejes del gobierno kirchnerista sobre todo en políticas sociales, de recuperación de “memoria, verdad y justicia” y de desarrollo económico. La reestatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP en 2008, ese mismo año la Ley de Movilidad Jubilatoria, el programa de repatriación de científicos al país, la participación activa en la creación de la UNASUR. En 2009 se avanza con la Ley de Medios Audiovisuales que logra un apoyo masivo de organizaciones sociales volcadas a la comunicación popular, luego vendrían Asignación Universal por Hijo, Matrimonio Igualitario y una serie de medidas políticas como la nacionalización del %51 de YPF o la recuperación estatal de los Ferrocarriles, políticas todas de un significado elevado para la descomposición social y política de los años 90, no desprovistas de ambigüedades y críticas desde muchos sectores sociales y agrupamientos políticos.

El avance social de este periodo no puede concebirse de manera plena sin la observación del grado de concentración y extranjerización económica de se experimenta entre los años 2003-

2013

(Hallibuton,

2015)

Lucha social autónoma y relación con el Estado.

Si bien América Latina es sin duda el continente de las dinámicas sociopolíticas más creativas de los últimos 15 años, no ha sido esta reinvención de la estatalidad y el florecimiento de la democracia un ciclo lineal ni mucho menos monocorde en los estados nacionales que conforman el espectro más volcado a la izquierda en el continente. No obstante, podemos afirmar junto con Isabel Rauber, que asistimos a un proceso de “revoluciones sociales desde abajo”:

“Surgidas de las resistencias, las luchas y construcciones de los pueblos, las revoluciones sociales del siglo XXI que se desarrollan en este continente nacieron de las entrañas mismas del capitalismo, desde las primeras resistencias, y en las luchas, construcciones búsquedas y ensayos de lo nuevo que se pretende alcanzar. En tal sentido, puede decirse que ellas constituyen el proceso revolucionario sociotransformador” (Rauber, 2012:88, 89)

Se ha dado en el continente la irrupción de gobiernos populares, donde la lógica de la construcción política, en gran parte *desde arriba*, se entrecruza con las demandas sociales *desde abajo* en una tensión permanente de ida y vuelta, casi como una singularidad de esta región. En cierta medida las sociedades latinoamericanas han propiciado Estados más viables, al decir de Ernesto Laclau, “donde el momento vertical y el momento horizontal de la política llegan a cierto punto de integración y equilibrio” (Gaudichaud, 2010: 22)

Argentina no ha sido ajena a las luchas latinoamericanas, como tampoco ha estado ausente a los mismos procesos de cambio, pero la lectura y los balances de la etapa que configuró el kirchnerismo en el poder y la vinculación con las organizaciones sociales, no debe ser mirada de una forma simplificada. Es decir, los movimientos populares cuyas dinámicas de protesta en la etapa anterior de lucha organizada y de acciones directas (Svampa y Pereyra: 2003) enfrentaron en el periodo que va de 2003 a 2015 un desafío a la

forma de abordaje de las problemáticas territoriales y de la demanda social cuyas practicas encarnaban.

El visible impulso de algunas variables económicas y la ampliación de medidas de cobertura social, configuraron un cuadro distinto en relación al vínculo de algunas organizaciones y movimientos sociales con del entramado estatal, sobre todo en perspectiva del significado que adquirieron algunos lineamientos políticos del kirchnerismo respecto de la práctica menemista previa que se había hecho del Estado.

El interrogante sobre la continuidad de la movilización política y la disputa por vía de la identificación autónoma del ámbito societal que asumían los movimientos y la posibilidad de preservar su independencia de las clases dominantes así también como del Estado (Cortes, 2008), está presente durante todo este periodo analizado aquí.

En primer lugar afirmamos que las lecturas tendientes a caracterizar como cooptación u oficialización toda capacidad negociadora de las organizaciones del campo popular con el gobierno en ejercicio, suelen depositar en el análisis cierta subestimación del potencial de acción política de las organizaciones gestadas en el ciclo neoliberal, cuya madurez política parece avizorarse en proceso de confrontación y acuerdo con la gestión kirchnerista. El periodo que se inicia en 2003 es un recorrido complejo de discusión política entre los formatos asumidos por la coyuntura política, que lejos de configurar el abandono de las reivindicaciones sociales de los movimientos populares, en muchos es casos es la reconstrucción de sus identidades “nacional populares” previamente asumidas (Schuttenberg: 2012).

Con respecto a esto último, entre muchas organizaciones populares piqueteras, una de las que encaró un proceso de cualificación de la resistencia con una profundización de la lógica de movimiento social a la constitución de movimiento político fue el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (que aglutinaba entre otros a agrupamientos como “Peronismo que Resiste”, “Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho” y “Patria, Pan y Poder al Pueblo”).

Eje 7. Luchas Populares y movimientos sociales:

El conjunto de organizaciones que comenzaron a acercarse al gobierno de Kirchner, ya en 2004 se propusieron el impulso de un movimiento social con perspectivas de incidencia política. En vistas de ese objetivo el MTD Evita, la Federación de Tierra y Vivienda, la organización Barrios de Pie y el Frente Transversal se propusieron canalizar lo acumulado de las luchas sociales y “dar por concluida la etapa de la *resistencia* e inaugurar la *ofensiva*”.

De esta manera surgen el Frente de Organizaciones Populares y luego el Frente Patria para Todos, de los cuales surgieron documentos como: “La Hora de los Pueblos”, “Por la recuperación del Trabajo y la Justicia Social. Fuerza Cro. Presidente Néstor Kirchner”, “Declaración Política del Frente de Organizaciones Populares” y “Diez puntos para la unidad de las fuerzas populares” (Pérez y Natalucci, 2012: 38-41). De este proceso de articulación sociopolítica surgen entre otras organizaciones, el Movimiento Evita (ME) con una clara identificación con el gobierno kirchnerista pero con una marcada impronta de inserción en los sectores populares y muy a menudo con un posicionamiento político definitivamente crítico respecto de las enormes asignaturas pendientes y los errores políticos de un gobierno que consideran como propio.

Por otro lado, en movimientos y organizaciones políticas cuya práctica surgida en los '90 estaba vinculada a la protesta piquetera y a la perspectiva autónoma, la gestión del kirchnerismo es leída en términos de una “reconstrucción hegemónica” en clave de una fuerte impronta personalista (Maneiro: 2012), esto los ha conducido a muchos movimientos sociales a la radicalización de su vertiente autonómica, dada la importancia de la defensa del territorio ante el complejo funcionamiento del gobierno nacional y sus alianzas locales.

En muchos casos el aislamiento inducido por la defensa de la territorialidad y la disputa reivindicativa condujo a un desencuentro del universo de organizaciones populares y de la izquierda social argentina frente a la estructuración del fenómeno político del peronismo-kirchnerista. Muchas organizaciones de tradición guevarista, del peronismo de base o del marxismo han tenido un complejo acercamiento al fenómeno político de los últimos años. Las disputas al interior de organizaciones significativas del movimiento social popular argentino como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) o el Frente

Popular Darío Santillán (FPDS) han ido desde sus posicionamientos tácticos ideológicos hasta los debates y confrontaciones por la incorporación en la política social de ese gobierno.

El balance de la relación entre autonomía y dependencia del Estado que ha atravesado a los movimientos sociales en estos años deja como saldo un salto en la perspectiva del enfoque de acción política. El caso de movimientos sociales organizado en instancias de acumulación político partidarias y en las disputas electorales en los años más recientes³, sumado a la articulación de organización políticas en el armado del “ala izquierda” del kirchnerismo, han propiciado algo que consideramos relevante para la reflexión del pensamiento crítico latinoamericano: el ajuste estructural que el neoliberalismo ha propuesto desde los años 90 y las limitaciones de las experiencias políticas de principio de siglo en América Latina y en especial en Argentina, no puede ser enfrentado desde una perspectiva autónoma que no se plantee la disputa contrahegemónica, es decir que la labor prefigurativa de los movimientos sociales debe ser articulada a propuestas de cambio en la correlación de fuerzas político-sociales, incluso en la disputa por el Estado, como algunas organizaciones lo han venido planteado al interior de sus espacios.

“En este sentido la autonomía puede pensarse como expresión de oposición a ciertas modalidades de construcción política. Ahora bien, cabe preguntarse si esta puede considerarse únicamente como expresión del rechazo hacia las formas de representación política tradicionales o si resulta posible al menos comenzar a plantear nuevas formas de gobierno autónomas. Es decir, de qué modo, en el marco de la autonomía, puede darse la construcción de una herramienta política cuyo horizonte sea la construcción de un proceso político contrahegemónico y que al

³ Elecciones 2015: ¿Cómo la ve el campo popular? <http://www.marcha.org.ar/elecciones-2015->

como-la-ve- el-campo-popular/

mismo tiempo, postula la necesidad de erigir alguna forma de “nueva institucionalidad” (Fornillo, García y Vásquez: 2008)

La propuesta de la institucionalización de las prácticas de los movimientos sociales como forma de vinculación de la sociedad civil y el Estado, esto es: realizar un abordaje distinto a cierta constancia en la dicotomía entre lo instituyente/destituyente que suele incluir una división entre *lo social* y *lo político* (Natalucci; 2011), es una consecuencia de las dinámicas de lucha, oposición y articulación que han dado los años del ejercicio político del kirchnerismo en relación con las prácticas políticas de los movimientos sociales.

Algunas reflexiones sobre el periodo actual

Ahora bien, frente a los sucesos políticos recientes -el paso de la administración kirchnerista a la consolidación de un formato de gobierno compuesto en su totalidad por fracciones del poder económico concentrado nacional y sobre todo transnacional, sumado al giro de restauración conservadora que se está produciendo en América Latina (García Linera, 2016), obligan a colocar la mirada nuevamente en la producción de saberes y prácticas políticas de resistencia y organización social, como por ejemplo los movimientos populares que sin embanderarse en lo autonómico únicamente, actúan sostenidos en una fuerte identificación fundada en necesidades concretas y en una memoria de luchas que les da continuidad y coherencia, contenido y proyección.

El desafío actual requiere el estudio por parte del pensamiento crítico tanto en la esfera donde se reproduce la política institucionalizada y se manifiestan las adherencias mecánicas de procedimientos, normas y técnicas que responden formalmente a los cambios pero no son permeables a estos, como así también en la potencialidad de los colectivos sociopolíticos que actúan desde la marginalidad de la política partidaria tradicional. Aquí pensamos en la práctica de los movimientos sociales que actuaron plegados a la estrategia kirchnerista como instancia de construcción de poder popular, a quienes desde una práctica social y política autónoma, “desde abajo”, construyen también formas de poder popular, pero

desde una clara confrontación a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y aquellos que se han situado en un terreno intermedio de esa vinculación política en estos años.

En la última década los impulsos de transformación social se generaron en el plano de lo político-estatal. Si bien las luchas, resistencias y rebeldías irrumpieron desde abajo, fue el Estado y los gobiernos que los encarnan el lugar de condensación de las mismas, de allí las reformas institucionales, gobiernos nacional-populares, un tipo de socialismo latinoamericano, gobiernos de los movimientos sociales, en un conjunto importante de países de la región.

Está bastante claro que esta politicidad organizada ocupa vacíos de poder, y ejercen, en el caso de los movimientos sociales, otro tipo de poder que es necesario entender. Sobre todo lo referente a cuál es la percepción de la política y el Estado y la articulación que se pretenden respecto del actual periodo de gobierno en la Argentina.

Nos preguntamos entonces acerca de la efectividad de la “irrupción plebeya” de las últimas décadas: ¿ha implicado dicha irrupción una acumulación en términos de organización contrahegemónica o por el contrario ha sido el tránsito por los márgenes abiertos por la dispersión y agotamiento del modelo que ahora las clases dominantes, ya reorganizadas, han decidido recuperar? Y, en el caso de la Argentina, ¿cuál puede ser el tránsito hacia nuevas experiencias de resistencia y ofensiva al despojo de las derechas en el poder del Estado?

Parece quedar claro que en la presente coyuntura, existe una necesidad de converger en una herramienta político-social que pueda hacer frente al neoliberalismo en la Argentina (Grimson, 2016), no obstante los movimientos sociales, la izquierda social, los gremios combativos, que se encuentran en disputa con este gobierno y también con el anterior, atraviesan una encrucijada política en los términos de cómo elaborar una experiencia de resistencia con el *kirchnerismo* adentro, dicho de otra manera ¿Cómo se articula el sujeto social que se organiza desde los movimientos populares en la disputa callejera actual configurando un entramado lo suficientemente amplio como para no anular las identidades políticas más disruptivas que la etapa kirchnerista forjó, y viceversa?. A su vez ¿Cómo se

expresa una perspectiva superadora de los conflictos que enfrentaron en el periodo político reciente a diversos vectores del campo popular en el país?

El periodo político que inaugura el macrismo en el poder trae consigo un conjunto de disputas simbólicas, ideológicas y organizativas y pone en pie de guerra a las clases subalternas frente a un programa de ajuste y represión de la protesta social. El camino de la convergencia de movimientos sociales requiere de la relectura de los procesos populares en la Argentina, los de resistencia y los de avance en las tensiones al interior del Estado. Mariano Pacheco ha puesto en palabras parte de estas pulsiones que recorren el abanico de movimientos sociales en la Argentina, con motivo de cumplirse 14 años de la Masacre de Avellaneda:

“Más que nunca aparece la necesidad de revisar críticamente la última década pero sobre todo, de visitar en términos positivos aquello que fue el período 1996-2002. Etapa que se clausura con la masacre de Puente Pueyrredón y el comienzo de una política más ligada a lo social, a las luchas de base, a los procesos de organización, más participativos. La apertura a otro tipo de democracia. Creo que en este momento, la ofensiva conservadora del macrismo no está encontrando resistencia por parte del campo popular. Si bien hay distintos grupos y sectores que vienen activando, justamente la tarea es poder construir un proceso de resistencia. En ese sentido, hay mucho para pensar sobre ese diciembre de 2001. Las iniciativas populares que se dieron en el marco de la crisis política de representación, de los modos de entender y hacer la política, tienen mucho para dar” (Figueroa, 2016)

Este es parte del desafío presente para los movimientos sociales y los procesos de politización -siempre- emergentes en Argentina y la región.

Bibliografía

Algranati, Clara, Seoane José, Taddei Emilio (2006) “Movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina”. Buenos Aires: mimeo.

Beasley Murray, J. (2010) “Poshegemonía. Teoría Política y América Latina” 1° ed., Paidós,

Buenos Aires.

Cortés, M (2008) “Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad”. Informe final del concurso: Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. Bs As.

Disponible

en:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/gobpro/cortes.pdf>

Figuroa J (2016) “Revisitar la experiencia piquetera nos puede ayudar a pensar cómo salir adelante” Entrevista a Mariano Pacheco en <http://agenciapacourondo.com.ar/militancia-590184/19873-revisitar-la-experiencia-piquetera-nos-puede-ayudar-a-pensar-como-salir-adelante>

Fornillo B, García A, Vázquez M (2008) “Perfiles de la nueva izquierda en la Argentina reciente. Acerca de las transformaciones de los Movimientos de los Trabajadores Desocupados Autónomos” en Nómadas. Revista Crítica en Ciencias Sociales y Jurídicas, Buenos Aires.

Fradkin, R. (2002); Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular Argentina de diciembre de 2001.

Galasso, N. (2015) “Kirchnerismo 2003-2015. El proyecto que transformó la Argentina” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colihue.

García Linera A. (2016) “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica” en Revista IDEAL: “Gobiernos progresistas, restauración conservadora y nuevas resistencias en América Latina y el Caribe”, p 6-17, México

Gaudichaud, F. “El volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo. Balance de una década de luchas: 1999-2009” Francia, 2010. -Licencia de Creative Commons Disponible en www.rebellion.org –

Gramsci, A (1986) “Cuadernos de la Cárcel”. Editorial Era, México.

Grimson A (2016) “Por una convergencia contra el neoliberalismo” en Pagina12 <http://m.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-304833-2016-07-21.html>

Halliburton, E (2015) “Radiografía e las corporaciones económicas 2003-2013” Instituto de Estudios Políticos Rodolfo Puiggrós, Buenos Aires.

Harvey, D. (2005) “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. Buenos Aires, CLACSO

Maneiro, M. (2012). “De encuentros y desencuentros: estado, gobiernos y movimientos de trabajadores desocupados”. Editorial Biblos.

Natalucci, A (2011) “Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales (Argentina 2001-2010) en Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 10, núm. 28, Chile.

Pérez, Germán; Natalucci, Ana -Editores- (2012) “Vamos las bandas: Organizaciones y militancia kirchnerista”, Buenos Aires, Nueva Trilce.

Quijano, A (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.” en libro: La Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (Comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.

Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

Rauber, I. (2012) “Revoluciones desde abajo: Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica”, Buenos Aires, Continente.

Rapoport, M. “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)”, Ediciones Macchi, primera reimpresión, Buenos Aires, 2000.

Schuttenberg M (2012) “Los movimientos sociales “nacional populares” en la etapa kirchnerista. Una revisión crítica de la bibliografía sobre el período” Intersticios; vol. 6 p. 191 - 207 Madrid;

Seoane J, Taddei E, Algranati C. (2011) “El concepto de ‘Movimiento Social’ a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes” en *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, ALAS n° 4, año 3. Buenos Aires

Svampa M y Pereyra S (2003) “Entre la ruta y el barrio: las organizaciones piqueteras” Buenos Aires Biblos.

La noción de política prefigurativa para el estudio de los movimientos populares latinoamericanos. Algunas hipótesis de lectura

Hernán Ouviña (IEALC-UBA)

RESUMEN

El objetivo principal de la ponencia es recuperar la noción de *política prefigurativa* como una potencial “unidad de medida”, que permita analizar los alcances y limitaciones de los innovadores modos de organización y lucha impulsados por los movimientos populares latinoamericanos, con el propósito de confrontarla con algunas de las experiencias concretas que existen en América Latina. Luego de definir a la *política prefigurativa* como un conjunto tanto de prácticas como de relaciones sociales que, en el momento presente, “anticipan” los gérmenes de la sociedad futura, se fundamenta por qué dicha categoría puede constituir una noción que resulta pertinente para el abordaje de este tipo de procesos novedosos, donde los movimientos populares emergen como un actor colectivo de peso, al momento de instalar en la agenda pública determinadas reivindicaciones y demandas, e incidir en las instituciones estatales, aunque sin integrarse ni subsumirse a sus estructuras gubernamentales.

A modo de Introducción

En lo que va del siglo XXI, las formas de articulación social y política han adquirido múltiples formatos, en permanente redefinición. Dentro de la tradición de experiencias inscriptas en perspectivas emancipatorias, se destacan los movimientos populares herederos de ciertas miradas de raigambre autónoma, que se plantean un tipo de construcción que se define por intentar “desde el ahora” producir transformaciones en sus propias prácticas de lucha, que anticipen -o “prefiguren”- la nueva sociedad a la que aspiran. Con variadas iniciativas, miradas e inserciones en sus respectivos territorios, muchos de estos movimientos latinoamericanos comparten una vocación común por reinventar la praxis política, a través de la apelación a la horizontalidad, la solidaridad, la conciencia crítica y el despliegue de diversas acciones de auto-organización territorial. En todos ellos se advierten las posibilidades de arraigo hacia nuevas formas de construcción política, así como límites cuya presencia marca la complejidad de los procesos de transformación social en su vínculo con lo estatal. A su vez, problematizar la relación de estos movimientos con los diferentes Estados latinoamericanos, a partir del nuevo milenio y en medio de una de las crisis capitalistas más profundas desde los años treinta, nos obliga a poner a prueba nuestras herramientas conceptuales y a plantearnos inevitables preguntas sobre los límites y posibilidades de las transformaciones radicales en los distintos espacios nacionales de la región.

Teniendo en cuenta este complejo panorama de mutación epocal, consideramos que la categoría de “política prefigurativa” puede constituir una noción que resulta pertinente para el abordaje de este tipo de procesos novedosos, donde los movimientos populares emergen como un actor colectivo de peso, al momento de instalar en la agenda pública determinadas reivindicaciones y demandas, e incidir en las instituciones estatales, aunque sin integrarse ni subsumirse a sus estructuras gubernamentales. En esta línea de investigación teórica, algunos autores han apelado a este concepto para dar cuenta de las prácticas radicales desplegadas por los sectores populares en su lucha por la transformación sustancial de la sociedad³³, avanzando en el análisis de la productividad teórica de dicha noción, y reconstruyendo su derrotero como categoría fructífera, a partir de la lectura detallada de la obra de autores de la tradición crítica del marxismo (tales como Marx, Gramsci, Thompson, Castoriadis y Basso, entre otros), quienes han brindado pistas teórico-

³³ Al respecto, pueden consultarse los siguientes textos: Ouviña, Hernán (2004), “Zapatistas, piqueteros y sin tierra: nuevas radicalidades políticas en América Latina”, en Revista Cuadernos del Sur 37, Editorial Tierra del Fuego, Buenos Aires; Ouviña, Hernán (2007) “Hacia una política prefigurativa: algunas reflexiones e hipótesis en torno a la construcción del poder popular”, en VV.AA. *Reflexiones sobre el poder popular*, Editorial El Colectivo, Buenos Aires; Ouviña, Hernán (2011a) “Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una perspectiva prefigurativa”, en VV.AA. *Pensar las autonomías*, Editorial Bajo Tierra, México; Thwaites Rey, Mabel (2004), *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Editorial Prometeo, Buenos Aires; Mazzeo, Miguel (2005), *¿Qué (no) hacer?*, Editorial Antropofagia, Buenos Aires; Modonesi, Massimo (2010) *Subalternidad, antagonismo, autonomía*, Editorial Prometeo-CLACSO, Buenos Aires.

interpretativas para desarrollar con mayor profundidad a este concepto. Más allá de los matices, en todos los casos lo han empleado para caracterizar a aquellas prácticas que, al decir de Mabel Thwaites Rey, aspiran a “la ampliación de formas autonómicas como anticipatorias del socialismo, como formas de construcción ‘ya desde ahora’ de relaciones anti-capitalistas en el seno mismo del capitalismo, pero que solo podrán florecer plenamente cuando se de un paso decisivo al socialismo, a partir de la conquista o la asunción del poder político”³⁴.

Problematizar el derrotero de los movimientos populares latinoamericanos en este *cambio de época*, implica por tanto vincular a aquella categoría con la posibilidad de repensar las vías de transición al socialismo en estrecha articulación y tensión con las formas predominantes de acción política durante el pasado siglo, y en particular con las que han despuntado al calor de la emergencia de movimientos de nuevo tipo en la región en lo que va del presente siglo. En función de estos desafíos, el objetivo principal del presente artículo estriba en definir a la noción de política prefigurativa como una potencial “unidad de medida”, que resulte fructífera para analizar y medir los alcances y limitaciones de los innovadores modos de organización y lucha impulsados por los movimientos populares, con el ánimo de poder *confrontarla* con algunas de las experiencias concretas que existen en América Latina, de tal manera que nos permita un análisis teórico-político, tan riguroso como crítico, de dichos movimientos.

La noción de política prefigurativa como prisma teórico-político para el abordaje de los movimientos populares

Si bien el estudio de los llamados “nuevos movimientos sociales” y de las formas de protesta en general es uno de los grandes temas de las Ciencias Sociales contemporáneas, aunque pueda resultar paradójico -habida cuenta de la importancia crucial que tienen en el marco de las transformaciones operadas en las sociedades latinoamericanas durante las últimas dos décadas- hemos podido constatar que existe una escasa literatura especializada que, bajo el prisma de la categoría de “política prefigurativa”, refiera a las nuevas prácticas socio-políticas desplegadas por los diferentes actores colectivos surgidos recientemente en América Latina. Sin duda, abundan más aquellas que remiten a las dos perspectivas teóricas que han cobrado centralidad para el análisis y la investigación empírica de estos fenómenos: por un lado, aquellos trabajos orientados hacia la “movilización de recursos”, centrados en el concepto de “racionalidad” como elemento explicativo

³⁴ Thwaites Rey, Mabel (2004), *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Editorial Prometeo, Buenos Aires, página 37.

de la acción colectiva³⁵ y, por el otro, los que destacan la noción de “identidad” como característica privilegiada que permite aprehender a los llamados movimientos sociales³⁶. Sin embargo, y más allá de las notables diferencias y contrastes entre estos dos enfoques, en ninguno de los dos casos se produce un rescate sustancial de la perspectiva mencionada.

No obstante esta hegemonía “epistémica” en el seno de las Ciencias Sociales, existen una serie de autores que pueden enmarcarse en la rica tradición del pensamiento crítico latinoamericano, y que sí han brindado elementos teórico-interpretativos para el análisis de los movimientos surgidos en las últimas dos décadas en nuestro continente, e incluso a problematizar el significante mismo de “movimiento social”. Cabe aclarar que no estamos en presencia de una corriente homogénea, sino ante todo frente a un crisol de intelectuales e investigadores que tienen como vocación común el *descolonizar* la matriz de intelección predominante en las Universidades y Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, así como dialogar con estos procesos en curso desde una óptica crítica y comprometida. Entre ellos, podemos destacar a Raúl Zibechi y Michael Hardt (2013), quienes postulan la necesidad de hablar de “movimientos anti-sistémicos”, Claudia Korol (2007) y Ana Esther Ceceña (2008), que apela a la noción de “movimientos populares” o “emancipatorios”, Massimo Modonesi (2010), que remite a la denominación de “movimientos socio-políticos”, o Luis Tapia (2002) y Alvaro García Linera (2005), quienes en el caso de la región andina optan por el concepto de “movimientos societales”.

En sintonía con estas lecturas, el presente trabajo se ubica precisamente dentro de esta tradición subterránea de corte neomarxista, que busca dotar de centralidad al antagonismo popular y a la territorialidad como ejes estructurantes de los movimientos latinoamericanos. En este sentido, optamos por hablar de *movimientos populares* y no de “movimientos sociales”, con el propósito de tomar distancia de las matrices anglosajonas y europeas antes criticadas, y a la vez restringir la aplicación de esta categoría a aquellos movimientos que no son de carácter meramente transitorio, y que conjugan el dinamismo popular, con “proyectos que rompan los límites actuales del programa capitalista y con la creación de fuerzas organizadas del pueblo que sustenten esos proyectos” (Korol, 2007).

³⁵ Olson, Mancur (1992), *La lógica de la acción colectiva*, Editorial Limusa, México; Tarrow, Sidney (1997), *Poder en movimiento*, Editorial Alianza, Madrid.

³⁶ Pizzorno, Alessandro (1994) “Identidad e interés”, en Revista Zona Abierta N° 69, Madrid; Melucci, Antonio (1994), “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en Revista Zona Abierta N° 69, Madrid.

Asimismo, consideramos sustancial resituar a la categoría de *política prefigurativa* como sumamente pertinente para el estudio de estos movimientos populares, a la luz de ciertas experiencias ya abordadas por nosotros y otros estudiosos (v.g. movimiento zapatista, asambleas barriales, movimiento sin tierra, movimientos piqueteros), brindando por tanto la posibilidad de aportar al análisis tanto de las nuevas formas de construcción política desplegadas en la región, como de los procesos políticos que se viven actualmente en contextos de persistencia de la matriz estatal neoliberal.

Se trata, entonces, de identificar en el accionar de estos movimientos populares, los nudos de potencialidad emancipatoria y los aspectos más problemáticos para su afianzamiento y expansión, desde una óptica contra-hegemónica y militante, aunque sin perder rigurosidad en el análisis teórico-político. En función de este objetivo prioritario, creemos que la noción de política prefigurativa aporta elementos interpretativos para potenciar una nueva “matriz de intelección” en pos de indagar en las formas de activación política de los sectores populares -organizados en el marco de movimientos de base territorial- en el contexto actual de América Latina, y colocando a su vez el foco de indagación tanto en sus respectivas dinámicas de edificación de embriones de una institucionalidad no capitalista en los espacios donde ensayan relaciones sociales de nuevo tipo, como en los vínculos específicos que mantienen con el Estado, en términos de demandas, incidencia en la configuración e implementación de políticas públicas, e incluso potencial antagonismo respecto de determinados aparatos estatales.

Consideramos que luego del auge de los estudios sobre “movimientos sociales” en la década pasada, hoy se torna necesario (re)pensar su accionar en función de un nuevo ciclo de protestas y generación de demandas diferente al anterior (el cual se caracterizó, más allá de los rasgos y matices distintivos en cada realidad nacional o regional, por el ascenso de las luchas sociales en contra de las políticas neoliberales, en un contexto signado por la imposición de planes de ajuste estructural).

Desde ya, la concreción de este ejercicio excede con creces al presente artículo, y requeriría sin dudas un estudio pormenorizado y articulado de las diferentes dimensiones que constituyen a buena parte de los movimientos populares latinoamericanos, tanto en los territorios donde despliegan sus proyectos políticos, como en función de las formas y modalidades a través de las cuales se vinculan con las instituciones del Estado desde una perspectiva “prefigurativa”. No obstante, intentaremos aportar algunas hipótesis de lectura que permitan trazar futuros planes de investigación y estudio colectivo para el conocimiento empírico y teórico-interpretativo, a partir de estudios de caso, del

accionar de este tipo de movimientos socio-políticos en América Latina en la actual coyuntura. De ahí que si bien no perdemos de vista que nuestro análisis está lejos de agotar la caracterización de las diversas modificaciones, así como la emergencia y/o declinación de actores colectivos organizados como movimientos populares de base territorial, consideramos que puede fomentar el debate acerca de la necesidad de potenciar el pensamiento crítico latinoamericano, a partir de la incorporación de saberes y experiencias de producción colectiva de conocimiento, gestados por los propios movimientos que se pretende investigar.

La categoría propuesta para el abordaje de este tipo de movimientos requiere una serie de aclaraciones previas. Si uno de nuestros propósitos es el de esbozar un concepto teórico de nuevo tipo como es el de política prefigurativa, y que no ha sido sistematizado aún -hasta donde hemos podido indagar- por autor alguno, no está de más explicitar que existen diversos pensadores que han abordado esta noción, si bien no hay hasta el día de hoy un trabajo o investigación que reconstruya y problematice a fondo dicha categoría. Por ello, una primera cuestión que es preciso explicitar es que el presente artículo puede ser concebido como parte de un *proceso de producción teórica* de más largo aliento, que tiene como principal desafío el forjar una “expresión compuesta” como es la de política prefigurativa.

No cabe duda de que el significante “política” ha sido analizado y definido por la teoría y la filosofía política desde hace por lo demás dos mil años. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la categoría de “prefiguración”. Y como supo expresar Louis Althusser, “es su conjunción particular (en este caso, la combinación específica de política y prefiguración, en el original vocablo de *política prefigurativa*) lo que produce un sentido nuevo, definido, que es el concepto teórico”³⁷. Al respecto, es interesante rescatar la distinción que formula este filósofo francés entre los discursos teóricos, referidos a objetos formales o abstractos, y los conceptos concretos, que remiten siempre a una realidad histórica particular. Si los primeros “no nos dan el conocimiento concreto de objetos concretos, sino el conocimiento de las determinaciones o elementos (los llamaremos *objetos abstracto-formales* que son indispensables para la producción del conocimiento concreto de objetos concretos”, los conceptos empíricos no son “puros *datos*, el puro y simple calco, la pura y simple lectura inmediata de la realidad. Ellos mismos son el resultado de todo un proceso de conocimiento, que incluye varios niveles o grados de elaboración”³⁸.

³⁷ Althusser, Louis (1969), *Sobre el trabajo teórico. Dificultades y recursos*, Editorial Anagrama, Buenos Aires, página 11.

³⁸ Idem, página 15 y 16.

Ahora bien, en nuestro caso específico hemos optado por contribuir a la elaboración de un discurso teórico (u abstracto) que sobrepase el *alcance* de los llamados discursos que versan sobre los objetos real-concretos. Esto significa que *nuestro foco no va a estar puesto en ninguna situación histórica particular*, aunque desde ya debemos referirnos en numerosas ocasiones a realidades históricas concretas. No obstante, es fundamental no perder de vista que “la teoría no se reduce jamás a los ejemplos reales que se invoca para *ilustrarla*, puesto que la teoría sobrepasa todo objeto real dado, puesto que concierne a todos los objetos reales *posibles* que se adapten a sus conceptos”³⁹. Por ello, el propósito último es aportar a la construcción de una categoría conceptual que nos permita leer e interpretar a los movimientos populares gestados en las últimos dos décadas en América Latina, pero también en otras sociedades que podríamos denominar -recurriendo al léxico gramsciano carcelario- “occidentales”.

Esta aclaración requiere no omitir otra tanto o más importante, como es *la necesidad de concebir a la producción de este corpus teórico en relación inmanente con la intervención práctica* (que dista que ser homologada con el mero “practicismo”). Nos consideramos tributarios de una larga y subterránea tradición que identifica al marxismo con la *filosofía de la praxis*. Por lo tanto, entendemos que la elaboración de conocimiento crítico no puede ser dissociada de su dimensión transformadora, menos aún al momento de indagar en las potencialidades y los límites de los movimientos populares como actores colectivos en las sociedades contemporáneas. Así pues, nuestro interés por dilucidar la pertinencia de una categoría como la de política prefigurativa, está signado por la necesidad de aportar herramientas teórico-prácticas que permitan incidir en la realidad contemporánea, en particular de nuestro continente en ebullición. Y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la política prefigurativa late hoy en numerosas experiencias políticas contra-hegemónicas a lo largo y ancho de todo el continente, en particular en aquellos movimientos que aspiran a la construcción de poder popular de base territorial⁴⁰. De ahí que quepa expresar que más que una noción elaborada estrictamente en el seno de las Ciencias Sociales, la política prefigurativa resulta una *praxis* que se viene ensayando con gran intensidad en los diversos espacios y territorios en disputa que existen en América latina, y que requiere aún ser “sistematizada”. Por lo tanto, podría decirse -siguiendo a los zapatistas- que en la actualidad “la teoría corretea a la

³⁹ Idem, página 23.

⁴⁰ Resulta imposible reseñar la inmensa cantidad de movimientos populares que emparentan sus prácticas y dinámicas de construcción con lo que denominamos política prefigurativa. A modo de simples ejemplos, podemos mencionar al movimiento zapatista y al Frente Popular Francisco Villa Independiente (México), al Movimiento de Pobladores en Lucha (Chile), al Movimiento Sin Tierra (Brasil) y al Movimiento Popular La Dignidad (Argentina). Desde ya, cada uno de ellos tiene características distintivas; no obstante, en todos los casos estamos en presencia de organizaciones de base territorial que despliegan políticas prefigurativas en su accionar cotidiano. Para un análisis en profundidad de algunas de estas experiencias, puede consultarse (Ouviaña 2004 y 2011a).

práctica”, en la medida en que resultan escasos los estudios y documentos que den cuenta de este tipo de experiencias desde una óptica prefigurativa.

Una de nuestras principales guías de trabajo se centra en recuperar de manera complementaria la interpretación crítica que del marxismo realizan Antonio Gramsci y Lelio Basso, teniendo como noción en común a la política prefigurativa. En efecto, tal como hemos planteado en otros estudios⁴¹, Gramsci concibe a la prefiguración, fundamentalmente durante su etapa juvenil, en términos de la necesidad de ir construyendo “ya desde ahora” los gérmenes de la nueva institucionalidad pos-capitalista, sin esperar a la tradicional conquista del poder para comenzar a transformar las relaciones sociales cotidianas, mientras que en Basso se constata una lectura dialéctica de las instituciones estatales, como constitutivamente contradictorias y signadas por la lucha de clases, de manera tal que cabe pensar en una política prefigurativa también dentro de ellas (bajo una original modalidad que él denomina “participación antagonista”), aunque sin descuidar las instancias de ejercicio de democracia de base, que doten de impulso a este prolongado proceso revolucionario, evitando su burocratización. Esto, desde ya, no contradice el planteo gramsciano. Antes bien, podríamos afirmar que Lelio Basso confiere mayor coherencia teórico-política a la llamada estrategia de “guerra de posiciones”, que Gramsci apenas pudo llegar a delinear en sus *Cuadernos de la Cárcel*⁴². Así, si Gramsci concibe la política prefigurativa bajo la obsesión de conquistar la “autonomía integral” de los sectores subalternos a partir de ir generando en el presente las nuevas relaciones sociales a las que se aspira, Basso hace lo propio desarrollando una de las aristas más problemáticas e incómodas para el marxismo, como es la disputa en el seno mismo del Estado por incorporar la lógica antagonista (o prefigurativa) en su seno. Desde esta perspectiva, postulamos a se vez como hipótesis complementaria, que ambas dimensiones deben pensarse en términos de *monismos articulables*⁴³, que involucran tanto la búsqueda de autonomía integral como la intervención y disputa en el plano estatal a través de una participación antagonista; la contra-

⁴¹ Ouviaña, Hernán (2007) “Hacia una política prefigurativa. Algunos recorridos e hipótesis en torno a la construcción del poder popular”, en VV.AA. *Reflexiones sobre el poder popular*, Editorial El Colectivo, Buenos Aires; Ouviaña, Hernán (2011b) *La noción de política prefigurativa. Un análisis de su productividad teórica a partir de la lectura de la obra de Antonio Gramsci y Lelio Basso*, Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

⁴² En sus notas carcelarias, Gramsci apela a la metáfora militar de las “casamatas” (que son fortificaciones destinadas a defender tanto la artillería como las tropas propias) para aludir a aquellos espacios, instituciones y territorios que constituyen a la sociedad civil, y que pueden definirse como instancias que “amurallan” o resguardan al núcleo del poder estatal. Es importante aclarar que para Gramsci este tipo de “casamatas” y “trincheras”, si bien no son neutrales, deben ser concebidos como ámbitos de disputa y lucha cotidiana, donde cabe librar una batalla integral y prefigurar nuevas relaciones sociales, desde la perspectiva emancipatoria de los sectores subalternos. Apelando al lenguaje bélico, Gramsci denomina a este tipo de estrategia revolucionaria como un proceso complejo y multifacético de despliegue de una “guerra de posiciones”.

⁴³ Con este concepto, se intenta dar cuenta de la unidad dialéctica en función de la cual la dualidad es sustituida por una relación de heterogeneidad-complementariedad entre las partes. Para un desarrollo de esta noción, puede consultarse Della Volpe (1973) “Il principio di indentita tautoeterologica e la dialettica scientifica”, en *Logica come scienza storica*, Editorial Riuniti, Roma.

hegemonía que se disputa a diario y desde abajo, con la presión popular por incorporar “elementos de la sociedad futura” en el seno del viejo ordenamiento jurídico-político.

Dicho esto, podemos destacar algunos rasgos distintivos de lo que, para Gramsci y Basso, significa desplegar una política prefigurativa: a) concebir a la revolución como un *prolongado proceso* y no un mero momento de “asalto abrupto al poder” (al estilo neo-jacobino de la revolución francesa); b) entender la dimensión prefigurativa simultáneamente en términos *objetivos* (los llamados “elementos materiales” que laten y germinan en el seno de las fuerzas productivas y en la esfera super-estructural de la sociedad) y *subjetivos* (vínculos sociales, “núcleos de buen sentido”, dinámicas organizativas, prácticas anticipatorias, etc.); y c) caracterizar a la praxis prefigurativa como una *disputa integral*, es decir, *multidimensional*, librada en todos los planos de la vida social (sean éstos económicos, culturales, educativos o estatales) desde una perspectiva de *totalidad*. En este último punto, hacemos propias las palabras del teórico norteamericano Carl Boggs, para quien la propuesta gramsciana -extensible, creemos, al propio Basso- implica que “el cambio revolucionario sólo puede ser considerado auténtico en tanto sea un cambio total, que abarque todos los aspectos de la sociedad, todas las dimensiones de la existencia humana”⁴⁴.

En función de estos rasgos distintivos, cabe definir sintéticamente a la política prefigurativa como un conjunto tanto de prácticas como de relaciones sociales y condiciones materiales de existencia que, en el momento presente, “anticipan” los gérmenes de la sociedad futura. En el primer caso, dichas prácticas involucran tres dimensiones fundamentales, a saber: las de la *organización* (movimientos populares, colectivos, organizaciones de base, etc.), la *acción colectiva* (desdoblada en estrategias y tácticas, que bajo el lenguaje metafórico militar del período de encierro de Gramsci pueden condensarse en la denominada “guerra de posiciones”) y los *sujetos* (fuerzas sociales en pugna con vocación contra-hegemónica). En el segundo, aluden a “elementos materiales” y formas de regulación social y política que remiten a las llamadas condiciones “objetivas”.

Asimismo, podemos afirmar que en la acepción tanto de Antonio Gramsci como de Lelio Basso de “política prefigurativa” subyace, a su vez, una concepción más amplia, no solamente de la política y la sociedad existentes, sino también y sobre todo de su transformación. Es en este plano donde cabe plantear que en ambos autores existe una aspiración a repensar la transición al socialismo como *un largo proceso que comienza antes de la toma del poder, y culmina mucho tiempo después de este momento bisagra*. Por lo tanto, en la dinámica cotidiana de construcción política propuesta, opera la “anticipación” del *nuevo orden venidero*, “acelerando el porvenir” que haga posible la superación de

⁴⁴

Boggs, Carl (1985), *El marxismo de Gramsci*, Editorial Premia, México, página 17.

las relaciones sociales capitalistas, sin esperar para ello a la conquista del poder. No obstante, sería ingenuo aseverar que en Gramsci (ya sea durante esta etapa juvenil o su período carcelario) y en Basso está presente una concepción evolutiva o reformista de esta estrategia prefigurativa, o la omisión de *quiebres* revolucionarios (“saltos” los llamará Basso en sus últimos escritos) en el avance hacia una sociedad sin clases. Antes bien, este proyecto emancipatorio prevé niveles de correlación de fuerzas que sin duda involucrarán alternadas dinámicas de confrontación, rupturas, ascensos y retrocesos, así como disputas no solamente semánticas sino económicas, culturales, educativas, sociales, e incluso político-militares.

El despliegue de políticas prefigurativa por parte de los movimientos populares

Ahora bien, estas características generales enunciadas, deben sopesarse en función de una serie de hipótesis complementarias, que remiten no ya a un problema teórico-interpretativo, sino sobre todo a las tensiones y complejidades que se presentan hoy en día en buena parte de América Latina, al momento de intentar ensayar, por parte de los movimientos que aspiran a la construcción de poder popular, una estrategia de tipo prefigurativa. Previo a reseñar algunas de ellas, cabe mencionar que al dar cuenta del carácter novedoso de los movimientos populares de nuestra región, es preciso tener en cuenta que el mismo no necesariamente está vinculado con una cuestión cronológica, sino ante todo cualitativa. Definiremos entonces a estos movimientos como *sujetos socio-políticos que, en sus procesos de resistencia y sus prácticas de autoafirmación, involucran el despliegue y permanencia en el tiempo de acciones, relaciones y formas de organización popular que aspiran a prefigurar en el presente el proyecto de vida por el cual luchan*. Estas relaciones y dinámicas anticipatorias se desarrollan de forma desigual -pero persistente- en sus ritmos, su existencia reivindicativa, su constancia y su perspectiva de futuro, así como en su importancia política e ideológica. El origen común es el conflicto, de forma directa e indirecta, con la materialidad de las relaciones de poder del capitalismo como sistema de dominación múltiple⁴⁵. No obstante, es importante aclarar que, según esta concepción, el devenir de un movimiento popular no constituye un proceso lineal que -en términos de una visión determinista de la lucha de clases- expresaría el carácter inexorable de las resistencias a los procesos de explotación y de opresión capitalista.

⁴⁵ Hablar de un *sistema de dominación múltiple* implica entender que las diferentes formas de explotación y/o opresión (de clase, de género o étnica, por mencionar sólo algunas de las más relevantes) se encuentran articuladas entre sí, por lo general reforzándose mutuamente unas a otras. Por lo tanto, si bien es importante dar cuenta de las *características específicas* que distinguen a cada forma de dominación (de ahí su carácter múltiple), también es preciso analizar qué vínculos e interconexiones existen entre cada una de ellas, desde una perspectiva de *totalidad*. En palabras de Gilberto Valdés Gutiérrez, “la significación histórica y epistemológica de la noción de *Sistema de Dominación Múltiple* radica en la superación del reduccionismo y la consecuente comprensión de que las luchas contra el poder político del capital están íntimamente vinculadas a la creación no sólo de un nuevo orden político-institucional alternativo al capitalismo, sino a la superación histórica de su civilización y su cultura hegemónicas” (Valdés Gutiérrez, 2009).

Hecha esta aclaración, podemos proceder a enumerar alguna de las hipótesis complementarias que nos permitan dotar de mayor inteligibilidad a nuestro prisma teórico-político. En primer lugar, consideramos que la construcción de organismos y proyectos de poder popular por parte de este tipo de movimientos tiene como precondition *la creación y experimentación de nuevas relaciones sociales no escindidas de lo cotidiano*: las cooperativas y escuelas rurales de los campesinos brasileños, los proyectos productivos, cuadrillas de trabajo, bachilleratos populares y centros de salud comunitaria gestados por los movimientos piqueteros, y las diversas instancias de autogobierno conformadas en los territorios zapatistas chiapanecos, constituyen en todos los casos instancias donde lo político, lo educativo, lo cultural y lo socio-económico, lejos de verse como compartimentos separados, se amalgaman concretamente. Estos movimientos, al igual que muchos otros de América Latina, plasman así de manera embrionaria, en sus prácticas territoriales mismas, los gérmenes de la sociedad futura por la cual luchan, en la medida en que ensayan “aquí y ahora” una transformación *integral* de la vida. Se amplía, pues, la esfera de lo político, arraigando cada vez más en el seno mismo de la sociedad civil y de las comunidades que habitan.

En segundo término, consideramos que la política prefigurativa desplegada por los movimientos populares latinoamericanos debe leerse en una clave *bifacética*, esto es, *simultáneamente en términos de impugnación y autoafirmación propositiva*. La creación de gérmenes o embriones de nuevas relaciones sociales, tiende a realizarse en el hoy, pasando de una inevitable lógica que Gramsci denominaba “luddista”, (centrada en la impugnación de planes de ajuste estructural, o bien en la vocación “destituyente” predominante en no pocos movimientos populares durante los años ‘90), a una que cede paso a la edificación prefigurativa, sin esperar para ello la “conquista del poder” como algo inmediato. Esta caracterización nos reenvía a la clásica dialéctica entre reforma y revolución, que remite a problematizar cómo engarzar la lucha por necesidades concretas y cotidianas (evidentes en la mayoría de los movimientos desde su propia denominación identitaria, que alude al acceso a la tierra, al trabajo, o la autodeterminación territorial, por mencionar sólo algunas de las más relevantes), con la constitución *ya desde ahora* del horizonte estratégico anhelado. Y a la vez nos obliga a reactualizar el debate en torno a la “transición al socialismo” sobre nuevas bases. ¿Cómo pensar en rupturas, fisuras, grietas y embriones, que prefiguren, en diferentes dimensiones e intensidades, la sociedad futura? Un problema no menor al intentar responder esta pregunta, consiste en que los clásicos del marxismo han teorizado a la transición al socialismo, en buena medida, como un proceso que comienza *a posteriori* de la “toma del poder”. Casi sin excepciones, se ha priorizado el derrotero que *conecta* a la sociedad “posrevolucionaria” (identificada como aquella que emerge de la destrucción del Estado capitalista y la expropiación de

los medios de producción a la burguesía) con el comunismo. Sin embargo, poco se ha indagado en torno al arduo y multifacético proceso de transición que haga posible *esta* transición. De ahí que un interrogante complementario sea el preguntarse ¿cuál es el rol de los movimientos populares en ese arduo *mientras tanto*? ¿A través de qué estrategias y tácticas pueden lograr conquistar aquel momento bisagra?

Las diversas y complementarias formas de construcción política puestas en prácticas por los movimientos populares enunciados, así como las elaboraciones teóricas e hipótesis formuladas por diferentes referentes del pensamiento crítico latinoamericano actual, constituyen una posible respuesta colectiva frente a este interrogante, aunque es importante entenderlas no sólo como contradicciones *en movimiento* (por su carácter dinámico, pro-activo y “anticipatorio”), sino también en tanto que movimientos *contradictorios* (debido a su carácter provisorio y sus “impurezas” constitutivas). En tal caso, lo fundamental es poder concebirlas de esta manera y “cabalgar la contradicción”, en estado de “alerta epistémico” constante. Pero sobre todo, sopesar en qué medida durante este sinuoso tránsito prefigurativo, las instituciones, espacios y prácticas en la que se encarna el proyecto de transformación al que aspiran los movimientos populares, contienen mecanismos que, desde el inicio mismo y en forma progresiva, tienden a obturar la burocratización, la férrea división del trabajo y la condición “subalterna” de los sectores involucrados en ella.

En este sentido, un tercer punto a destacar, planteado con insistencia tanto por Gramsci como por Basso, es *la necesidad de que el despliegue de una “política prefigurativa” aspire a grados crecientes de articulación*, de manera tal que se evite caer en el “encapsulamiento” del movimiento en un ámbito acotado de mera incidencia local. Como ha expresado Daniel Bensaid, “la complejidad de las divisiones sociales, la multiplicidad de las resistencias, la intersección de las identidades plantean de una forma nueva el problema de su unidad y su convergencia”⁴⁶. De ahí que remate proponiendo que “si la pluralidad de los movimientos sociales se impone como un hecho irreversible, la idea de su ‘autonomía relativa’ debería, por lo mismo, derivar en una unidad (al menos relativa); concebida no como una evidencia espontánea, sino como un trabajo estratégico de unificación”⁴⁷.

En última instancia, más allá de las situaciones específicas de cada realidad nacional, la construcción de una alternativa de las clases populares oponible exitosamente a la dominación actual, ha requerido por parte de los movimientos de base el librar una intensa batalla que, además de política, ha sido

⁴⁶ Bensaid, Daniel (2004) *Cambiar el mundo*, Ediciones Catarata, Madrid, página 74.

⁴⁷ Idem.

“intelectual y moral”, en un contexto sumamente desfavorable para los cuestionamientos radicales en sus versiones conocidas. Asimismo, plantear la lucha por una sociedad mejor en el mundo de hoy supone hacer frente tanto a la fragmentación creciente en los distintos sectores sociales, como a la segmentación de problemáticas e intereses, lo que torna aún más compleja la posibilidad de unificación de las prácticas sociales y políticas, en torno a objetivos comunes, de manera tal que pueda darse positivamente el pasaje de lo que Gramsci denominaba momento “económico-corporativo”, hacia la fase “ético-política”.

Ahora bien, esta vocación universalista -señalada por Gramsci y Basso como requisito ineludible de toda estrategia prefigurativa- no debe confundirse con uno de los mayores flagelos de la izquierda ortodoxa: el llamado “hegemonismo”. Por el contrario, de acuerdo a gran parte de estos movimientos, de lo que se trata es de ejercitar una dinámica pendular y complementaria que, por un lado, apueste al *fortalecimiento interno* de los espacios de construcción prefigurativos (a través de la creación y consolidación de instancias de autogobierno conectados orgánicamente a la vida cotidiana, como “modus vivendi”) y, por el otro, intente generar de manera constante *ámbitos de coordinación, irradiación y confluencia*, en niveles que simultáneamente excedan y contengan la dimensión local y regional de las luchas. La cuestión, al parecer, estriba en cómo resignificar esta certera dinámica bifronte, creando alianzas y redes pluri-identitarias y cambiantes, en donde ninguna de las fuerzas socio-políticas que las conforme tenga más derecho a hegemonizar, que el que le da su comportamiento concreto en cada coyuntura histórica⁴⁸. Más allá de pensar desde y a partir de lo plural, para muchas organizaciones populares la cuestión gira alrededor de un dilema pendiente aún de resolver: cómo dar el paso de la *multiplicidad de sujetos* en lucha, hacia la proyección de un *sujeto múltiple* que, no obstante, continúe estando habitado por la diversidad, esto es, sin que se imponga la homogeneización como parámetro de coordinación y confluencia de experiencias disímiles y ricas en sí mismas.

Como cuarto punto relevante, cabe explicitar que *si bien la política prefigurativa no puede ser concebida sólo desde las instancias estatales, resulta imposible una construcción de este tipo sin tenerlas en cuenta y vincularse de manera asidua con ellas*, en tanto mediación ineludible de la vida social en el capitalismo, que atraviesa y condiciona las potencias expansivas de toda práctica política, o bien concebida como dimensión antagónica que deberá ser desarticulada en un contexto de ofensiva revolucionaria (el momento del “asalto”, que desde ya debe entenderse en un marco más amplio y de carácter *procesual*). La propuesta de una “participación antagonista” formulada

⁴⁸

Castells, Manuel (1979) *Ciudad, democracia y socialismo*, Editorial Siglo XXI, Madrid.

por Basso resulta central en este sentido⁴⁹. Por contraste, en las últimas dos décadas muchas experiencias y proyectos políticos impulsados por movimientos populares, mostraron las múltiples dificultades que se presentan al intentar constituir espacios o territorios autónomos, cuyo horizonte inmediato termina siendo, en no pocas situaciones, lo que Miguel Mazzeo denominó irónicamente el “socialismo en un solo barrio”⁵⁰. De ahí que valga la pena recordar que la lucha es *en y contra* el Estado como relación de dominio, lo que implica pugnar por clausurar sus instancias represivas y de cooptación institucional, ampliando en paralelo aquellas cristalizaciones que, al decir de Mabel Thwaites Rey, tienden potencialmente a una sociabilidad colectiva⁵¹. Esta lectura supone, a la vez, poner en cuestión tanto la concepción restringida de la política que predomina en las Ciencias Sociales, como la escisión tajante entre lo público y lo privado que es parte del “sentido común” dominante.

En este sentido, no está de más explicitar que *no es posible pensar en términos excluyentes el apostar a formas de construcción prefigurativas y, al mismo tiempo, el establecer algún tipo de vínculo con lo estatal*. Más que una opción dicotómica entre el mantenerse totalmente al margen del Estado, o bien subsumirse a sus tiempos, mediaciones e iniciativas, de lo que se trata, ante todo, es de diferenciar claramente lo que constituye en palabras de Lelio Basso (1969) una *participación subalterna* -que trae aparejada, sin duda, la “integración” creciente de los sectores populares al engranaje estatal-capitalista, mellando toda capacidad disruptiva real-, de una *participación autónoma y antagonista*, de inspiración prefigurativa. Esta última, a nuestro parecer presente en muchas estrategias desplegadas por movimientos en América Latina, requiere reestablecer un nexo dialéctico entre, por un lado, las múltiples luchas cotidianas que despliegan -en sus respectivos territorios en disputa- los diferentes actores del campo popular con vocación contra-hegemónica y, por el otro, el objetivo final de trastocar integralmente a la civilización capitalista, de forma tal que cada una de esas resistencias devengan mecanismos de ruptura y focos de contrapoder, que aporten al fortalecimiento de una visión estratégica global y reimpulsen al mismo tiempo, aquellas exigencias y demandas parciales, desde una perspectiva emancipatoria y de largo aliento.

En contraposición, desestimándolo como lugar y momento importante de la lucha de clases, algunos movimientos populares han terminado cayendo -paradójicamente, en una óptica simétrica a la de la izquierda ortodoxa- en la tentadora *eseidad* que concibe al Estado como un bloque monolítico y sin

⁴⁹ Al respecto, véase en particular Basso, Lelio (1969), “La partecipazione antagonistica”, incluido en *Neocapitalismo e sinistra europea*, Editorial Laterza, Bari.

⁵⁰ Mazzeo, Miguel (2005) *¿Qué (no) hacer?*, Editorial Antropofagia, Buenos Aires.

⁵¹ Thwaites Rey, Mabel (2004) *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Editorial Prometeo, Buenos Aires.

fisuras, al que hay que ignorar, o bien asaltar remotamente cual fortaleza enemiga. En estos casos, se ignora que, si bien el Estado expresa el poder político dominante y como tal es un garante -no neutral- del conjunto de relaciones constituyentes de la totalidad social, las formas en que se materializa no deben ser ajenas. Cabe por lo tanto *recuperar la clásica dinámica de combinar las luchas por reformas sin perder de vista el objetivo estratégico de la revolución*, como faro orientador de una práctica política de nuevo tipo, que en el “mientras tanto” de un contexto adverso o una correlación de fuerzas desfavorable, permita ir abriendo brechas que impugnen los “mecanismos de integración” capitalista, y prefiguren relaciones sociales poscapitalistas, convirtiendo así, embrionariamente, *el futuro en presente*. Este tipo de iniciativas, en la medida en que se asienten en la presión popular y la movilización constante de las y los de abajo, puede oficiar de camino que alimente y ensanche el horizonte por el cual luchan dichos movimientos, *acelerando el porvenir*.

En este sentido, podemos afirmar que el proceso de construcción contra-hegemónico y prefigurativo desplegado en las últimas dos décadas por parte de muchos movimientos y organizaciones populares, en particular en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, aunque también en Argentina, Brasil, México, Paraguay o Centroamérica, se ha centrado en una *concepción dialéctica de las luchas* impulsadas por los sectores subalternos, de manera tal que si el camino ha sido la disputa cotidiana en pos de reformas progresivas y de lograr un mejoramiento relativo de las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos, el cambio socio-político radical ha operado en buena medida como el objetivo estratégico que dotaba y dota de sentido a cada una de estas reivindicaciones logradas o bien por conquistar. No sin contradicciones, en muchos casos se logró conciliar, en palabras del joven Gramsci, “las exigencias del momento actual con las exigencias del futuro, el problema del ‘pan y la manteca’ con el problema de la revolución, convencidos de que en el uno está el otro”⁵².

Esto ha implicado que de la rudimentaria concepción del Estado como bloque monolítico e instrumento al servicio de las clases dominantes, se haya pasado a una caracterización más compleja tanto de lo estatal como de la praxis política misma. La estrategia de “guerra de posiciones” defendida por Gramsci y Lelio Basso aparece así como una sugestiva metáfora para denominar a gran parte de estas nuevas formas de intervención política que han germinado en los últimos años en la región, logrando distanciarse de los formatos propios del “vanguardismo” elitista y de la vieja estrategia de “asalto” abrupto al poder. A partir de ella, la revolución pasó a ser

⁵² Gramsci, Antonio (1991) “El problema de las comisiones internas. Apostilla”, en *Escritos periodísticos de L’Ordine Nuovo*, Editorial Tesis XI, Buenos Aires, página 61.

entendida como *un prolongado proceso de constitución de sujetos políticos* (encarnados, en nuestro caso, en movimientos populares de raigambre territorial) que si bien parten de una disputa multifacética en el seno de la sociedad civil, no desestiman las posibilidades de incidencia y participación en ciertas áreas del Estado -aunque más no sea desde una perspectiva “antagonista” al decir de Lelio Basso- en pos de transformar sustancialmente sus estructuras simbólico-materiales y avanzar así hacia una democratización integral del conjunto de la vida social.

Tal como ha expresado Lucio Oliver, en particular a partir de principios del nuevo siglo, “las fuerzas populares de la sociedad civil se volcaron a la resistencia y protesta contra las políticas transnacionales y al calor de su movilización las sociedades desarrollaron experiencias significativas de defensa y reclamo de derechos, ciudadanía colectiva, poder local comunitario, democracia participativa, nación incluyente y de diversidad cultural, que habían sido ignorados o rechazados durante las dos décadas y media anteriores por los gobiernos latinoamericanos”⁵³. Esto ha llevado a este autor a reconocer un pasaje de la resistencia (o condición de subalternidad) hacia una dinámica más de tipo ofensiva, por lo que en América Latina las recientes luchas políticas y sociales “han tenido una fuerte incidencia en el Estado, entendido en su sentido amplio, como expresión de una unidad orgánica ‘en crisis’ de sociedad política y sociedad civil”⁵⁴. En efecto, el protagonismo de los movimientos populares a lo largo y ancho del continente no debe acotarse meramente a los “repertorios” de protesta ejercitados en los espacios públicos del poder (plazas, carreteras, calles y avenidas), ni tampoco a los ámbitos relativamente apartados de estas instancias (barrios, villas, poblaciones, comunidades indígenas y asentamientos rurales), sino que debe poder incorporar, como foco de análisis, a las *repercusiones* que este tipo de luchas, proyectos autogestivos y dinámicas de movilización popular generan en el propio armazón institucional del Estado y en las políticas públicas que se ve forzado a desplegar (entendiéndolo, claro está, también como una cristalización material de relaciones de fuerzas, por definición inestable y en permanente metamorfosis). Solo así, creemos, cobra un sentido integral la noción de política prefigurativa.

A modo de conclusión: los movimientos populares ante el cambio de época

Sin duda Nuestra América constituye hoy un laboratorio de experimentación único en el mundo. Como han hecho notar numerosos estudios e investigaciones, los sucesivos acontecimientos

⁵³ Oliver, Lucio (2009) “Conflictos y tensiones en torno del Estado ampliado en América Latina: Brasil y México entre la crisis orgánica del Estado y el problema de la hegemonía”, Favela Gavia, Margarita y Guillén, Diana (coord.) *América Latina: los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares*, CLACSO, Buenos Aires, página 62.

⁵⁴ Idem, página 54.

políticos y las experiencias inéditas de autoorganización y construcción de poder territorial, por parte de diversos movimientos de base, evidencian que no estamos ante una época de cambios, sino ante un *cambio de época*. Un claro ejemplo de ello es la profunda metamorfosis que han sufrido las luchas en las últimas décadas y el papel cada vez más relevante que juegan los movimientos indígenas y populares en la resistencia frente a la ofensiva capitalista en nuestra región. La crítica civilizatoria que expresan estos pueblos y organizaciones de raigambre rural y periurbana amerita, asimismo, repensar el esquema “productivista” que, salvo contadas excepciones, ofició como matriz incuestionable de tránsito hacia una sociedad socialista. En este punto, cabe reconocer cierta ambigüedad en los planteos de determinados teóricos del pensamiento crítico y de referentes de ciertos movimientos populares en lucha, respecto del “desarrollo de las fuerzas productivas” como *premisas objetivas* de prefiguración de la sociedad futura⁵⁵.

Más allá de esta pertinente polémica alrededor de los modelos de desarrollo y crecimiento que contemplen, como problema real, la posibilidad de un desastre ecológico a escala planetaria, vale la pena insistir en que en varios países de América Latina se está viviendo un pasaje, si bien contradictorio y no lineal, de la dimensión económico-corporativa, tal como la definía Antonio Gramsci, hacia la ético-política. Esto implica concebir a las aspiraciones y los despliegues organizativos de diversos movimientos de la región, como expresiones de una vocación universalista que intenta trascender la dimensión propiamente étnica, local o rural, contemplando simultáneamente como propias las demandas y aspiraciones del resto de los sectores subalternos, configurando así un nuevo proyecto nacional (o mejor aún, pluri-nacional) de raigambre plural, e incluso en algunas situaciones extremas llegando a “devenir Estado”, en el sentido gramsciano.

No obstante, cómo encarna esta lábil noción en cada situación específica no es algo predeterminado: así, el “devenir Estado” en Chiapas y Oaxaca asume la forma de una autodeterminación territorial de masas, que exige como precondition la autonomía estratégica de las múltiples comunidades en resistencia con respecto al aparato estatal mexicano, así como el

⁵⁵ Como ha advertido Hebert Marcuse, la noción de “desarrollo de las fuerzas productivas” establece una continuidad entre el capitalismo y el socialismo. En efecto, de acuerdo al autor de *Eros y Civilización*, en virtud de esta ausencia de quiebre cualitativo, la transición hacia una sociedad auto-emancipada sería en primer lugar un cambio *cuantitativo*, cuya característica fundamental radicaría en un incremento de la productividad. Véase Marcuse, Hebert (1969) “La obsolescencia del marxismo”, en *La sociedad industrial y el marxismo*, Editorial Quitaria, Buenos Aires. Por ello coincidimos con Ricardo Graziano en que “reconocer el desarrollo de las fuerzas productivas, tal como tiene lugar en la industrialización capitalista, como el factor desencadenante que permite realizar el ideal humano, entraña desconocer la dimensión política presente en el interior del proceso mismo de producción fabril”. Graziano, Ricardo (1990) “Marx frente a la democracia industrial”, en *Revista Doxa* N° 2, Buenos Aires, página 34. Si bien no es el objetivo de este artículo, cabe plantear como uno de los ejes más problemáticos que signan a los movimientos populares, a la ecuación “desarrollo de las fuerzas productivas = premisas objetivas para el inicio de la transición al socialismo”. En particular, la polémica en torno a las políticas extractivistas y neodesarrollistas denunciadas por numerosas organizaciones ambientales e indígenas, no hace más que ratificar la urgencia de este debate abierto.

ensayar formas prefigurativas de organización social y política en sus espacios de sociabilidad, mientras que en otras latitudes, si bien no se omite esta dimensión, ella tiene como horizonte de visibilidad la “refundación” de la institucionalidad jurídico-política, a través de creación de organismos de poder popular de nuevo tipo. A modo de ejemplo, la variante venezolana evidencia una aguda tensión entre las posibilidades de radicalización e iniciativa *desde* la sociedad política, y de fortalecimiento y expansión de organizaciones autónomas de la sociedad civil que, a través de una “participación antagonista” al estilo de la propuesta formulada por Lelio Basso, nutran y puedan oficiar de instancias de control y democratización de las estructuras estatales, sin perder como faro la construcción del llamado “socialismo del siglo XXI”.

Al margen de las respectivas particularidades, en todos estos procesos de insubordinación aparece una estrategia que bien podría denominarse como “guerra de posiciones”, para utilizar la metáfora bélica del Gramsci carcelario. Alvaro García Linera formuló un interrogante de suma relevante para abordar este tipo de experiencias: “hoy, los movimientos sociales a la cabeza de organizaciones indígenas, campesinas y vecinales, están ante la oportunidad extraordinaria de definir con su participación directa la estructura de poder estatal y el nuevo sistema político que habrá de surgir de esta crisis. La pregunta es si hoy los movimientos sociales serán simples mecanismos de contención del poder de las elites o parte minoritaria de la nueva estructura de poder, o bien parte hegemónica, dirigente del nuevo sistema estatal”⁵⁶.

Más allá de los matices y polémicas alrededor de las potencialidades y límites de estas apuestas socio-políticas, algo resulta claro: no cabe pensar en respuestas de antemano. Por ello, a modo de cierre final quizás sea importante insistir en que la vigencia y profunda vitalidad interpretativa de la categoría de política prefigurativa, no debe opacar el necesario ejercicio de *traducción*, actualización y recreación de esta noción, en función de las tareas específicas que cada nueva situación política nos plantea en esta “unidad problemática” que es América Latina. El desafío, en suma, estriba en *confrontar empíricamente* a este potente trípode de intelección, con el crisol de luchas y resistencias que, de manera desigual y combinada, hoy circundan el subsuelo de nuestro irreverente continente, para sopesar hasta qué punto sale indemne de ese ineludible choque praxiológico. Este necesario ejercicio de análisis en profundidad, de las diversas experiencias concretas de los movimientos populares latinoamericanos, será sin duda tema de futuras investigaciones, aunque confiamos en que la historia absolverá a nuestra novedosa “unidad de medida”.

⁵⁶ García Linera, Alvaro (2005) “La lucha por el poder en Bolivia”, en VV.AA. *Límites y horizontes del Estado y el poder*, Editorial La muela del diablo, La Paz, página 84.

Bibliografía

- Althusser, Louis (1969) *Sobre el trabajo teórico. Dificultades y recursos*, Editorial Anagrama, Buenos Aires.
- Basso, Lelio (1969) “La partecipazione antagonistica”, en *Neocapitalismo e sinistra europea*, Laterza, Bari.
- Bensaid, Daniel (2004) *Cambiar el mundo*, Ediciones Catarata, Madrid.
- Boggs, Carl (1985) *El marxismo de Gramsci*, Editorial Premia, México.
- Castells, Manuel (1979) *Ciudad, democracia y socialismo*, Editorial Siglo XXI, Madrid.
- Ceceña, Ana Esther (2008) *Derivas del mundo en el que caben todos los mundos*, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.
- García Linera, Alvaro (2005) “La lucha por el poder en Bolivia”, en VV.AA. *Límites y horizontes del Estado y el poder*, Editorial La muela del diablo, La Paz.
- Gorz, André (2008) “Reformas no reformistas”, en *Crítica de la razón productivista*, Editorial Catarata, Madrid.
- Graciano, Ricardo (1990) “Marx frente a la democracia industrial”, en Revista Doxa N° 2, Buenos Aires.
- Gramsci, Antonio (1991) “El problema de las comisiones internas. Apostilla”, en *Escritos periodísticos de L'Ordine Nuovo*, Editorial Tesis XI, Buenos Aires.
- Gramsci, Antonio (2000) *Cuadernos de la Cárcel*, Editorial Era, México.
- Korol, Claudia (2007) “La formación política de los movimientos populares latinoamericanos”, en Revista OSAL N° 22, CLACSO, Buenos Aires.
- Marcuse, Hebert (1969) “La obsolescencia del marxismo”, en *La sociedad industrial y el marxismo*, Editorial Quitaria, Buenos Aires.
- Mazzeo, Miguel (2005) *¿Qué (no) hacer?*, Editorial Antropofagia, Buenos Aires.
- Melucci, Antonio (1994) “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en Revista Zona Abierta N° 69, Madrid.
- Modonesi, Massimo (2010) *Subalternidad, antagonismo, autonomía*, Editorial Prometeo-CLACSO, Buenos Aires.
- Oliver, Lucio (2009) “Conflictos y tensiones en torno del Estado ampliado en América Latina: Brasil y México entre la crisis orgánica del Estado y el problema de la hegemonía”, Favela Gavia, Margarita y Guillén, Diana (coord.) *América Latina: los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares*, CLACSO, Buenos Aires.
- Olson, Mancur (1992) *La lógica de la acción colectiva*, Limusa, México.

- Ouviña, Hernán (2004) “Zapatistas, piqueteros y sin tierra: nuevas radicalidades políticas en América Latina”, en Revista Cuadernos del Sur 37, Editorial Tierra del Fuego, Buenos Aires.
- Ouviña, Hernán (2007) “Hacia una política prefigurativa. Algunos recorridos e hipótesis en torno a la construcción del poder popular”, en VV.AA. *Reflexiones sobre el poder popular*, Editorial El Colectivo, Buenos Aires.
- Ouviña, Hernán (2011a) “Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde una perspectiva prefigurativa”, en VV.AA. *Pensar las autonomías*, Editorial Bajo Tierra, México.
- Ouviña, Hernán (2011b) *La noción de política prefigurativa. Un análisis de su productividad teórica a partir de la lectura de la obra de Antonio Gramsci y Lelio Basso*, Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Pizzorno, Alessandro (1994) “Identidad e interés”, en Revista Zona Abierta N° 69, Madrid.
- Tapia, Luis (2002) *La condición multisocietal*, Editorial La Muela del Diablo, La Paz.
- Tarrow, Sidney (1997) *Poder en movimiento*, Editorial Alianza, Madrid.
- Thwaites Rey, Mabel (2004) *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Editorial Prometeo, Buenos Aires.
- Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2012) “La estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e hipótesis alrededor del poder político y la transición”, en Thwaites Rey (ed.) *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*, UARCIS-CLACSO, Santiago de Chile.
- Vakaloulis, Michel (2000) “Antagonismo social y acción colectiva”, en Revista del Observatorio Social de América Latina, N° 2, Buenos Aires.
- Zibechi, Raúl y Hardt, Michael (2013) *Preservar y compartir. Movimientos sociales y bienes comunes*, Editorial Mar Dulce, Buenos Aires.

Movimentos sociais e a crise brasileira: gestão da barbárie e novas formas de luta

Ana Elisa Correa⁵⁷

Luciana Henrique da Silva⁵⁸

No final dos anos 1980 e 1990 se intensificaram os conflitos sociais na América Latina. O fim dos governos ditatoriais após um intenso período de lutas em prol da democratização e a ofensiva neoliberal que preconizava a redução dos gastos sociais pelo Estado, a reestruturação produtiva, a flexibilização dos contratos e da legislação trabalhista, associadas a uma grave crise econômica elevaram as taxas de desemprego e a precarização das relações de trabalho impulsionou a emergência de uma forte resistência que culminou na proliferação de movimentos sociais.

Estas resistências conforme Katz (2008) teriam potencializado o sucesso eleitoral de candidatos que se apresentavam como nacionalistas e opositores ao neoliberalismo e ao imperialismo nos anos 2000. O êxito eleitoral alcançado originou um novo ciclo de governos na América Latina que possuíam pelo menos duas características em comum: a) a ruptura com o período ditatorial e o compromisso com o fortalecimento das instituições democráticas e b) uma relação umbilical com os movimentos sociais que emergiram a partir dos conflitos sociais do qual eram legatários e cuja força social se traduziu na força política necessária para ser convertida em sucesso eleitoral. Estes governos foram frutos de diversas classificações que tinham o intento de demarcar suas diferenças, Katz (2008) os classifica em três tipos: conservadores (Penã Neto no México), centro esquerda (Lula no Brasil, Kichner na Argentina), e nacionalistas radicais (Chavez na Venezuela):

Los conservadores son neoliberais, pro-norteamericanos, repressivos y opuestos a cualquier mejora social. Los cetroizquierdistas mantienen una relación ambigua com Estados Unidos, arbitran entre el empresariado, toleran las conquistas democráticas y bloquean las mejoras populares. Los nacionalisyas radicales son más estatistas, chocan com el imperialismo y la burguesia local, pero oscilan entre el neo-desarrollismo y la redistribución del ingreso

Lula se elege em um período marcado pela recessão econômica e pela transformação do movimento sindical⁵⁹, por outro lado é importante destacar que o Partido dos Trabalhadores também havia passado por transformações⁶⁰, dentre as quais podemos destacar a ampliação do leque de alianças e a redefinição dos posicionamentos políticos. Paulatinamente, os posicionamentos políticos contidos no Manifesto de Inauguração do partido que propugnavam um “partido sem padrões” que

⁵⁷ Doutoranda da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro

⁵⁸ Professora Adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul

⁵⁹ Vide Galvão (2002) e TUMOLO (2002)

⁶⁰ Sobre as transformações do PT vide IASI (2006)

proclamava como principal compromisso a subordinação da participação nas eleições e das atividades parlamentares à organização das massas exploradas e suas lutas, passa a aderir a lógica inversa submetendo as lutas populares às demandas eleitorais e parlamentares, que ao converter-se em principal estratégia do partido converte-o em mais um partido da ordem. Deste modo, a Carta ao Povo Brasileiro, divulgada durante as eleições presidenciais, em 2002, apontava as contradições acumuladas durante a evolução do PT: a necessidade de romper com a insatisfação popular com a política econômica dos sucessivos governos neoliberais dos anos 1990 e garantir o apoio necessário para o sucesso eleitoral. A carta anunciava os rumos do novo governo, em especial, a garantia do equilíbrio fiscal, o controle da inflação e a preservação do superávit primário. Ao mesmo tempo em que afirmava a necessidade de um período de transição a partir de uma “ampla negociação nacional” de modo a garantir “crescimento com estabilidade” e a necessidade de “reformas estruturais” para a efetivação deste crescimento, destacando a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma agrária e a ênfase em programas sociais contra fome e a insegurança pública.

Este documento é importante por que explicita algumas das características que se mantêm nos governos petistas: a continuidade de medidas macroeconômicas de caráter neoliberal (manutenção das metas de inflação, câmbio flutuante e manutenção do superávit primário) e políticas sociais compensatórias, definida por Moraes e Saad-Filho (2011) como uma “política econômica híbrida”. É importante destacar que os governos petistas sofreram modificações ao longo dos anos 2000, inclusive na política econômica adotada, para BARBOSA e SOUZA (2010) após a crise política do mensalão teria havido uma inflexão entre a “visão neoliberal” e a “visão desenvolvimentista”, passando a ter maior influência a segunda, o que teria favorecido a ampliação das políticas sociais no segundo Governo Lula. Por outro lado, este hibridismo complicou a caracterização e a conceituação dos governos petistas considerados como pós-neoliberais, novo-desenvolvimentistas ou social-desenvolvimentistas, neodesenvolvimentistas ou simplesmente neoliberais (SADER, 2013; BASTOS, 2012; MORAIS, SAAD-FILHO, 2011). Contudo, o principal aspecto que iremos analisar neste artigo são as transformações nas relações entre movimentos sociais e Estado a partir da emergência de um governo oriundo de um partido historicamente comprometido com a questão social e as lutas sociais organizadas pelos movimentos sociais.

A vitória de Lula promoveu uma grande expectativa entre os representantes de movimentos sociais que acreditavam que apesar destas contradições abria-se uma nova fase de reformas no país. A direção nacional do maior movimento social do país o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apresentava a preocupação em como se conduzir diante do novo governo de modo a não considerá-lo como “inimigo”, apresentando-o como um “governo em disputa” e orientando a crítica

aos erros e o apoio aos acertos⁶¹. A defesa da necessidade de “apoio crítico” ao governo foi utilizada muitas vezes pelos movimentos sociais durante os anos 2000 como a única alternativa diante do perigo sempre iminente de um retrocesso, que era sintetizada pela possibilidade de um retorno da oposição ao poder que implicava o regresso das políticas neoliberais.

Os governos petistas buscaram atender, ainda que parcialmente, reivindicações dos movimentos negro, feminista, estudantil, de moradia, de luta pela terra, da agricultura familiar, entre outros. Foram criados diversos programas e formalizados canais institucionais para estabelecer o diálogo com os movimentos sociais podemos destacar nos governos Lula: a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, coordenada pela Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, a Política da Promoção da Igualdade de Gênero, de responsabilidade da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), entre outros⁶². Estas políticas públicas buscaram estabelecer parcerias público-privadas, bem como a incorporação dos movimentos ou de parte de suas reivindicações na proposição e gestão de políticas públicas, inclusive por meio da contratação de dirigentes, cumpre ressaltar que muitos deles possuíam dupla ou tripla militância (atuando concomitantemente no Partido dos Trabalhadores, na organização de sindicatos e oposições sindicais e em movimentos sociais). Os movimentos sociais auxiliavam ainda, no cadastramento e, em alguns casos na seleção, dos possíveis beneficiários dos programas sociais:

Uma das práticas que vem ganhando espaço nos movimentos sociais brasileiros é a de listas de presença, passadas em diversas atividades, sejam assembleias, reuniões políticas ou atos públicos considerados importantes pela direção (...)

Ao invés de servirem como instrumento para manter o contato e a comunicação entre companheiros, estas listas estabelecem uma classificação entre os militantes, e aqueles que tiverem mais presenças e mais pontos têm acesso supostamente garantido às promessas do movimento: casas, bolsas em Faculdades, cursos de formação, loteamentos. Isso quando não são também meio de controle e monitoramento para pura prestação de contas do movimento junto ao Estado, em razão de Convênios e parcerias afins estabelecidas com ele. (PASSA PALAVRA, 2010)

O trecho acima evidencia uma nova conformação da participação nos movimentos sociais que não apenas hierarquiza os militantes, mas que promove um controle e monitoramento da participação

⁶¹ Ver mais em Silva (2007)

⁶² Para um balanço das políticas públicas implementadas nos governos petistas vide SADER (2013).

nas atividades. A cidadania passa a ser regulada pelo cadastramento e/ou vinculação a um programa social (ARANTES, 2014).

A incorporação de algumas reivindicações sociais em políticas compensatórias e a ampliação de convênios e parcerias entre o Estado e organizações criadas por movimentos sociais influenciaram nos posicionamentos políticos destes movimentos em relação ao governo, embora as orientações político-ideológicas fossem muito diversificadas, estes passaram a compor uma frente de apoio aos governos petistas. Este apoio foi fundamental nas crises políticas e nas campanhas eleitorais. Outra consequência foram os impactos nas formas de luta que privilegiaram atos, manifestações, assembleias em detrimento de outras formas de ação direta como a formação de novos acampamentos pelo MST. Isto se justificava visto que as ações diretas tinham por objetivo principal “forçar” a abertura de negociações nos governos anteriores, o que não seria mais necessário num governo aberto ao “diálogo”. Contudo, embora o “diálogo” tenha se ampliado a questão social, aparentemente mitigada, não foi solucionada por estas políticas compensatórias focalizadas, visto que estas não poderiam ser massificadas. O objetivo de tais programas não visou a superação do modelo vigente:

No programa da Reforma Urbana democrático-popular, a propriedade privada não foi questionada e combatida. Ao contrário, deveria ser regulada e distribuída a todos. Contra o latifúndio urbano a solução era o minifúndio privado, como na Reforma Agrária. Na prática, isso significou, mesmo nas experiências mais avançadas, projetar e construir loteamentos convencionais, em geral com lotes abaixo do mínimo permitido pela legislação, único meio de equacionar a compra da terra, até a construção de prédios em condomínios fechados. A propriedade privada seguiu ditando o modelo (da política à arquitetura), pois o objetivo não foi superá-la, mas reparti-la com todos. (ARANTES, 2013)

Na medida em que se ampliaram os convênios e parcerias com o Estado e, posteriormente, com empresas foi necessária a crescente profissionalização da militância, seja para muni-la de argumentos técnicos e racionais durante as rodadas de negociação com a burocracia estatal, seja para prepara-la no gerenciamento dos convênios e parcerias, que envolviam uma lógica de gestão exógena as práticas informais dos movimentos sociais. Os convênios e as parcerias foram sendo consolidados a partir de uma concepção que passou a se tornar hegemônica nos movimentos sociais de que não havia possibilidade de transformações estruturais, elegendo como prioridade o fortalecimento das estruturas organizativas e a garantia de ganhos materiais para a base social, identificadas como “acúmulo de forças”.

Na medida em que se consolidavam, tais transformações findaram por provocar alterações significativas nas formas organizativas, nas práticas, concepções e posicionamentos políticos de tais

movimentos, bem como contribuíram para uma crescente indissociação entre movimentos sociais e Estado.

Jornadas de junho de 2013: transformações da luta social no Brasil

Ao longo da última década e meia observamos um processo de intensa domesticação dos movimentos sociais outrora combativos. Isso começou a se expressar mais abertamente a partir 2003 com a eleição de Lula à presidência da república, e se explicitou de fato em 2005 com a crise do mensalão e o posicionamento de organizações sociais e militantes em favor do governo nos casos de corrupção, e se estende até os dias atuais com os reiterados apoios dos movimentos aos candidatos petistas e mais recentemente à Dilma Roussef durante o processo de impeachment.

A nosso ver, isto não é fruto de mecanismos de cooptação pura e simplesmente. As teses da cooptação carregam a consígnia moral de condenação a formas de traição de uma organização e seus ideais. É claro que ocorreram inserções diretas de militantes em cargos públicos e mesmo casos de envolvimento em abomináveis esquemas de corrupção. Todavia, não podemos simplificar a realidade em moralismos e explicar um processo histórico de transformação dos rumos dos movimentos sociais brasileiros, quiçá latinoamericanos, apenas através da condenação de processos de traição política e desvios individuais.

O que pudemos observar ao longo dos anos 2000 e 2010 é fruto de um encaminhar histórico anterior, que marca o fracasso dos movimentos combativos em levar adiante suas demandas de modo a consolidar uma crítica radical ao sistema capitalista. Alguns estudiosos que se debruçaram sobre o processo que envolveu as transformações da CUT e do PT nos auxiliam a refletir sobre o que ocorreu posteriormente com os movimentos sociais brasileiros:

Dito em outros termos, é muito simplificador pensar que o PT e a CUT se tornaram estes esteios de uma ordem social horrorosa apenas por motivações morais. Só existiria traição de uma causa onde as condições para a sua realização continuassem operando. Nas primeiras eleições diretas para presidente da república, em 1989, tanto a intenção de reatar o fio da meada com o pré-1964, como o programa de distribuição de riqueza ficaram expostos em suas limitações. O leitor lembrará facilmente que o colapso do leste europeu, que era uma das experiências que inspiravam este programa, não foi produzido por um embargo econômico e tampouco por uma invasão militar. Ele desmoronou em seus fundamentos. A classe trabalhadora brasileira, por seu turno, já não tinha força, unidade e condições objetivas no início dos 1990 para dar outra direção ao espírito do tempo. (MENEGAT, 2013: 15)

Neste sentido, os movimentos sociais, e em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se mantiveram ainda como o último bastião da luta social crítica no Brasil em fins dos anos 1990 e início dos 2000. Remando contra a maré em busca de redirecionar o “espírito do tempo”, sofreram progressivamente um processo de integração à ordem que logo antes pretendiam contestar. Este processo, para ser amplamente compreendido, precisa ser explicado a partir de um conjunto de elementos: a transformação da estrutura de classes em especial quanto ao que entendemos por classe trabalhadora ou mesmo proletariado no Brasil; a financeirização e mundialização do capital e as respectivas mudanças nas relações entre centro e periferia; a crise do socialismo real e os fracassos da esquerda anticapitalista. Contudo, devido aos limites de um artigo optamos por nos centrarmos em um elemento que consideramos fundamental: o processo político que levou candidatos provenientes de combativas lutas sociais à presidência da República em diversos países da América Latina.

Através de uma série de medidas observamos, com a chegada desses líderes populares e sociais ao Estado, a conformação de governos de pacificação social, o que Menegat denominou de “gestão da barbárie”. Para compreendermos a função que o PT eleito ao governo federal em 2002 passou a cumprir é necessário indicarmos, ainda que rapidamente, que as décadas de 1980 e 1990 expressaram o fim da onda desenvolvimentista das décadas anteriores, mergulhadas assim em um processo de galopante crise social e econômica: hiperinflação e desindustrialização, seguidas de desemprego estrutural, aumento significativo da violência urbana e rural, precarização e privatização dos serviços públicos, etc. Esse período que Menegat define como o “desmonte de nação” é fruto dos choques decorrentes da abertura econômica do país ao mercado internacional financeirizado. É nesse contexto que Lula chega ao planalto como paladino de uma política de combinação entre desenvolvimento e justiça social:

Diante deste estado de calamidade, ao vencer as eleições em 2002, o PT se credenciava para a gestão desta crise social com uma longa ficha corrida de experiências (principalmente em prefeituras). Nestas experiências *o partido foi criando para si outro lugar na história*, distinto das antigas polêmicas sobre ser um partido revolucionário ou de reformas. *Seu sentido histórico último será mesmo o de ter construído um sistema original de gestão de uma sociedade que desmorona*. Que este sistema seja concebido como parte de um esforço de transição (para onde?) é parte das formas ideológicas fantasmagóricas deste período histórico. Em toda sua arquitetura *as políticas sociais passaram a ser concebidas como uma linha auxiliar da tentativa de reanimação econômica do gigante combalido*. (MENEGAT, 2015)

Essa postura de gestores sociais de uma miséria aparentemente insuperável nos marcos do capital passou a ser marca de um governo que muitos de seus representantes autodenominaram como de “colaboração de classes”. Em um trecho de um manifesto escrito para um encontro de uma corrente do PT em 2011 temos esta declaração dos petistas por eles mesmos:

Foi necessário que o PT, nascido das lutas de enfrentamento aos patrões, chegasse ao governo para estabilizar um processo de desenvolvimento com inclusão social em um regime democrático burguês. (...) Estamos cumprindo uma série de tarefas de organização do estado, típicas das revoluções burguesas clássicas na Europa e na América do Norte. Para isso, optamos por construir um governo de colaboração de classes, onde o trabalho e o capital alcançam ganhos constantes, tais como: aumento do lucro, da massa salarial, do valor real dos salários e do nível de emprego. (...) Essa aparente sensação, de que todos ganham, só é possível porque a nossa presença no governo, combinado com o atraso secular do estado brasileiro possibilitou verdadeiros avanços comparativos para o conjunto da nossa sociedade. (I Congresso da Articulação de Esquerda, 2011)

Essa gestão se consolidou a partir de uma combinação entre formas de controle da classe trabalhadora organizada através de mecanismos de diálogo via negociação de bolsas e precários projetos sociais com os movimentos organizados, e mecanismos violentos de pacificação dos trabalhadores que sofrem com as agruras da ausência de uma política social consistente. Em síntese, Paulo Arantes nos descreve o que seria esse estado de exceção permanente, combinando violência e demagogia social, que parte considerável da população pobre brasileira passou a experimentar cotidianamente nas periferias dos grandes centros urbanos:

Numa frase, não se trata mais de “vencer batalhas, mas de pacificar populações” (BACEVICH), por meio de boa “governança”, “desenvolvimento econômico”, “segurança pública”, - enfim, todo pacote em que se entrelaça hoje *welfare* e *warfare*. O soldado protagonista de uma intervenção social armada, além de exercer o papel de trabalhador social, precisa atuar igualmente como planejador urbano, antropólogo e psicólogo, e, inevitavelmente, como um “policial” (...). O nome do pacote, como sugerido, é *governo*, ou um conjunto de técnicas cujo objetivo é a segurança (em todo seu espectro) e o *alvo*, uma população (mal) assentada num território, cuja matriz de percepção por analogia é um ambiente urbano saturado de conflitos.” (ARANTES, 2014)

Toda essa engenharia social, seja de reparação precária seja de repressão, só foi possível em um contexto econômico de grandes aflusos de capital internacional, momento em que o mercado de *commodities* chegou a ter influência fundamental no aumento do PIB correspondendo a 65% das

exportações do país⁶³, os investimentos no Pré-sal e no setor energético de modo geral avançavam e abriam flancos de atuação para as grandes construtoras que se empenhavam nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento até os megaeventos que ocorreriam no país, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, passando pelos empreendimentos sociais como o Programa Minha Casa Minha Vida. Essa bonança temporária permitida pela pujança da tríade setor energético, commodities e construção civil e estimulada pela expansão da economia chinesa permitiu que o Partido dos Trabalhadores articulasse elementos como: crescimento do emprego formal, ampliação do crédito às classes populares, concessão de bolsas e projetos sociais como o Bolsa Família, o Proni, o Fies e o Minha Casa Minha Vida e altos volumes de financiamento às empresas via BNDES⁶⁴.

Esta onda de aparente bem-estar ocultava a real condição de economia brasileira, não apenas por sua irremediável dependência do mercado mundial e suas debilidades estruturais, marcas de uma economia heterogênea e débil perante a terceira revolução tecnocientífica operada nos países centrais, mas também devido ao processo de financeirização e especulação financeira que passou a reger a dinâmica de nossa economia. Isso se expressou e tem se expressado na dimensão intangível da bolha especulativa operada no setor das commodities, carro chefe da economia nacional desde 2002 e que entra em crise a partir da desaceleração em 2012 da economia chinesa, principal país consumidor mundial de commodities. O Brasil certamente não passaria incólume por isto:

Poucos se perguntaram neste período como podia um país que já passava a habitar o brejo das almas das nações quebradas pela corrida da globalização, manter uma balança comercial superavitária exportando predominantemente commodities? O 'bilhete da sorte' do governo Lula foi tirado em 2002, quando se iniciou uma bolha especulativa com o preço das commodities. Entre este ano e 2008 os preços não pararam de subir, quando, em razão do estouro da bolha imobiliária nos EUA e do agravamento da crise mundial, os preços caíram, para voltar a subir rapidamente em 2010 e voltar a cair desde 2012. Estes movimentos dão uma base mais consistente para se entender diversos fenômenos, como a popularidade dos governos do PT neste período e a razão sem volta do dissenso atual. (MENEGAT, 2015)

Após 2012 ficou patente a insuficiência dos esforços do governo federal em prolongar o sentimento do “todos ganham” e da tão aclamada “pax social”. Aclamada inclusive por setores da burguesia que passaram a defender a manutenção do PT como chefe de Estado.

⁶³ Sobre a importância do mercado de commodities para a economia brasileira a partir dos anos 2000 ver dentre outras matérias a do jornal Estado de São Paulo, “China desacelera e põe fim à bonança das commodities” de Natália Cacioli & Yolanda Fordelone de 25/08/2015, e na Revista Exame, “Por que o Brasil surfou na onda das commodities?” de 27/09/2015.

⁶⁴ Sobre a política econômica e social dos governos petistas ver: SADER (2013).

Junho de 2013 foi a explosão social que fez cair por terra o poder conciliador do tal governo de concertação de classes. Seria assim o início do “fim da gestão da barbárie”? (MENEGAT, 2015) Nas palavras de Arantes (2015): “Do manejo macroeconômico ao distributivismo indolor, tudo bateu no limite. Mal menor não é progresso, mas estabilização numa desgraça incontornável”. E este quadro catastrófico é acompanhado por um silêncio cada vez maior dos movimentos sociais que sacudiram o país até meados dos anos 2000, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

É essencial pontuarmos aqui que estava (e ainda parece estar) em curso um processo de fragmentação das antigas organizações da esquerda, que passaram a vivenciar cada vez mais rachas e dissidências por parte de seus militantes. Estes processos, apesar de suas especificidades, estão ligados às divergências quanto à relação de movimentos sociais e partidos de esquerda com o Estado sob direção petista. Esse processo de fragmentação tem possibilitado que militantes de diversas origens que compartilham a mesma crítica possam se encontrar livremente, sem o julgo das diretrizes de sua antiga organização política. Muitos destes militantes se encontraram, ou reencontraram, em um novo capítulo da luta de classes no Brasil, nas manifestações de rua de junho de 2013.

É portanto um contexto de condições adversas para a luta social, marcada pelo sentimento de fracasso na esquerda em relação ao que se transformou suas organizações historicamente combativas (CUT, MST e PT). E é nessa ressaca brava dos combatentes agora combalidos que em 2013 o até então pouco conhecido Movimento Passe Livre (MPL), que fazia manifestações em defesa do transporte público gratuito e de qualidade em diversas cidades do Brasil desde o início dos anos 2000⁶⁵, passou a mobilizar um contingente cada vez maior de pessoas em protestos de rua. Segundo Martins&Cordeiro (2014) os protestos se iniciam a partir de uma ampla agitação com cartazes nas ruas e chamadas nas redes sociais a partir do lema: “Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar”. Agitação esta que não era novidade absoluta sendo que em 2011 o movimento utilizou táticas semelhantes na tentativa de mobilização da população contra o aumento da tarifa de ônibus na cidade de Vitória no estado do Espírito Santo. Mas é justamente esse contexto de insatisfação social permanente que pensamos ser o barril de pólvora preparado para explodir com a faísca lançada pelo MPL, em especial pelo coletivo do estado de São Paulo (MPL-SP). Segundo os autores militantes, essa tática poderia ser sintetizada como “revoltas populares contra o aumento da tarifa”.

⁶⁵ As principais manifestações citada por Martins&Cordeira são a Revolta do Buzu em 2003 na cidade do Salvador (Bahia – região nordeste) e as Revoltas da Catraca em 2004 e 2005 em Florianópolis (Santa Catarina – região sul).

Mas qual seria a especificidade, qual o diferencial desse tipo de tática em relação às utilizadas historicamente pelos movimentos sociais? Nas palavras dos autores, à época também militantes do MPL:

Enquanto os ascensos de outros movimentos urbanos – de moradia, por exemplo – dificilmente ultrapassam o limite de sua ocupação ou bairro, nas lutas contra o aumento a mobilização tem a tendência a tomar conta de toda a cidade, a se generalizar como *revolta*. Talvez porque o transporte não seja um problema restrito a um determinado local ou categoria, e sim uma questão que atravessa a vida de toda cidade. Concentra-se nele uma experiência de sofrimento enfrentado conjuntamente pelos trabalhadores, um cotidiano comum de exploração em que é possível reconhecer-se (como classe?). De sentimento compartilhado, a revolta sai de dentro do transporte: explode como ação conjunta, nos ônibus incendiados, nas catracas quebradas ou nos trilhos ocupados. (MARTINS&CORDEIRO, 2014)

Em junho de 2013 a revolta popular motivada pela luta para redução das tarifas de ônibus e metrô levou milhares de pessoas às ruas em mais de 100 cidades em todo o país, culminando em um evento concreto e de enorme simbologia: a transmissão em rede nacional de um comunicado conjunto do governador do estado São Paulo, Geraldo Alckimin (PSDB) e o prefeito da capital, Fernando Haddad (PT), em que anunciavam a redução das tarifas dos transportes públicos da cidade de São Paulo⁶⁶.

Ainda que existam enormes limitações nesta conquista, como por exemplo o fato de que a tarifa não foi de fato reduzida ou deixou de existir (como clama a bandeira por “tarifa zero”) mas apenas não foi aumentada naquele momento, é inegável que esta foi uma vitória da luta social e popular. E não é uma vitória qualquer, justamente por ser esta uma vitória em um tempo de derrotas, isto é, uma vitória a partir de uma tática radical de pressão frontal ao Estado em um contexto em que as organizações históricas da classe trabalhadora haviam praticamente sucumbido às negociações, projetos e demais vias institucionais, com seus militantes profissionalizados e convencidos de que este era o único caminho possível para amenizar as mazelas da questão social no Brasil do século XXI.

Escapando, ainda que não saibamos até quando, ao que Arantes (2014) denominou de “inevitável ossificação dos movimentos sociais”, uma juventude extremamente crítica ao PT e ao petismo, bem como aos movimentos sociais aliados ao governo petista, buscou lutar por caminhos

⁶⁶ Importante ressaltar que uma enorme onda espontânea de ações populares passou a tomar conta das periferias de São Paulo após junho de 2013. No ano de 2014 houve 662 ocorrências de ônibus incendiados na cidade e, em agosto de 2013, 13 ocupações espontâneas ocorreram no extremo sul de São Paulo. No Rio de Janeiro, se iniciou uma massiva greve dos professores municipais e estaduais culminando na ocupação da Câmara pelos grevistas que, após realizar diversas manifestações de rua com a participação dos Black Blocks, conseguiram alcançar parte da pauta de reivindicações.

distintos dos abarcados até então pela política de conciliação de classes. Mas é importante refletirmos sobre como tais proezas foram alcançadas, inaugurando-se um marco das lutas sociais no Brasil conhecido hoje como “jornadas de junho de 2013”. O que há ainda de novo na luta de 2013 do MPL em relação às lutas sociais das décadas anteriores?

Podemos citar aqui alguns princípios organizativos característicos das lutas do MPL: a horizontalidade e a autonomia como negação da “direção política” como concebida na esquerda leninista tradicional. Contudo, aparentemente, na prática estes princípios não levaram a uma ausência de direção, mas a uma outra concepção de direção política. No texto de Martins&Cordeiro há uma precisa definição reproduzida a partir da formulação de um militante do movimento:

Quando falo de direção não falo de mando e obediência, e nem de manipulação das massas. Falo de um grupo que pensa, planeja, discute e estuda as questões sociais em torno do levante popular, assim como o dia-a-dia do levante, de modo a se chegar à conquista das reivindicações do movimento. Ora, tal papel de direção se faz necessário partindo do pressuposto que, deixada à sua própria dinâmica, a revolta popular somente por acaso e pouco provavelmente se efetivaria nas conquistas almejadas. Esse direcionamento, esse grupo articulador, propulsor e pensante, visaria portanto aumentar a probabilidade de que a revolta popular se reflita no atendimento ou conquista das reivindicações. (...) com certa composição social a única direção efetiva, possível e desejável, não é aquela que tenta disciplinar, moldar ou controlar o comportamento social a um ideal, mas aquela que consegue encontrar e pôr em uma sequência virtuosa as práticas diversas, aparentemente antagônicas e espontâneas, que surgem da movimentação social. (LEO VINICIUS apud MARTINS&CORDEIRO, 2014)

Há portanto um processo diretivo, porém baseado em uma outra concepção de direção, uma direção que tem como objetivo organizar de forma descentralizada e temporária a luta guiada por uma clara reivindicação. “Uma direção que nega a si mesma” e que pretendia, portanto, durante o processo de luta, “perder o controle”. Todavia, até que esse momento de fato chegasse a direção se manteve ativa ainda que, em alguma medida, secreta.

E, mesmo que a “revolta popular” e a “perda de controle” tenham aparecido no discurso público do movimento logo no primeiro dia, aquele pequeno grupo de pessoas manteve, apesar da retórica, um controle razoável sobre as manifestações até às vésperas da revogação do decreto. Mesmo na imensa marcha da segunda-feira, 17 de junho – da qual participaram, sem exagero, mais de um milhão de pessoas –, o grupo dirigente conseguiu executar o trajeto que definira, dividindo o ato em duas frentes que reencontraram-se na Ponte Estaiada (apesar de outras divisões). Ao longo das três

semanas de luta, a primeira vez que o MPL-SP não conseguiu conduzir uma manifestação segundo o trajeto decidido foi na terça-feira seguinte. (MARTINS&CORDEIRO, 2014)

Até que a espontaneidade da insatisfação popular veio a tona, o que aliás o movimento desejava em alguma medida que acontecesse. Fez-se assim o que os movimentos sociais predecessores costumavam chamar de “botar fogo no pavio”:

Nos dias 18 e 19 de junho os protestos se descentralizaram de fato, e espalharam-se pela cidade os quebra-quebras e os saques. O Movimento não conseguiu sequer conduzir o início da manifestação e era impossível ter ideia de tudo que se passava. Enquanto centenas de milhares de pessoas tomavam a avenida Paulista e a Consolação, o centro de São Paulo torna-se uma espécie de zona liberada: ocorrem numerosos saques a lojas de grandes cadeias, um carro da Record é incendiado, fachadas de bancos e vitrines saem destruídas. Depois de derrubar o portão do Palácio do Governo do Estado no dia anterior, manifestantes tentam invadir a Prefeitura, destroem seus vidros e a cobrem de pixações. (...) Simultaneamente, mas fora das câmeras, manifestações autônomas eclodiam em vários pontos da cidade. Nas linhas Esmeralda e Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), após panes, passageiros ocupam os trilhos, quebram os trens e sabotam as vias. Em Cotia, cerca de cinco mil pessoas trancam os dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares. Protestos bloqueiam a Ponte do Socorro e a Estrada do M’Boi Mirim. No Grajaú, junto a uma onda de saques, fala-se em mais de 89 ônibus danificados. Na zona leste, o impacto foi tamanho que, no dia seguinte, o Consórcio Leste 4 colocou menos da metade da frota em operação. Em Guarulhos, manifestantes bloqueiam por horas a via de acesso ao Aeroporto Internacional. (*idem*)

Esse contexto levou a um sentimento na esquerda “por fora do consenso” de possibilidade de avanços na organização dos trabalhadores, o que, contudo, não ocorreu de fato nos meses subsequentes ao anúncio da revogação do aumento da tarifa. Os autores deste que consideramos o melhor texto analítico sobre junho de 2013 avaliam esse fracasso como fruto de uma ausência de um trabalho de base permanente e contínuo nos meandros da classe trabalhadora. Não pretendemos aqui julgar os limites de junho de 2013 e pensar suas deficiências, que são de fato várias, mas refletir sobre o que há de novo nessa experiência em relação às práticas dos movimentos sociais do período anterior. Aqui elencamos até agora dois elementos específicos das lutas inauguradas nas jornadas de junho: uma concepção específica de direção política, isto é, uma direção que nega a si mesma inspirada nos princípios da horizontalidade e da ação autônoma; e a tática da “revolta popular” que carrega consigo a necessidade desta direção “perder o controle” do processo que até então meticulosamente planejou.

Martins&Cordeiro consideram que esta seria a única forma de ação crítica possível em um país que teria se convertido em uma “fábrica de consensos e consentimentos” garantida pela “pacificação armada”. E aqui de fato está a novidade que consideramos fundamental salientar: tanto esta tática (revolta popular) quanto esta forma organizativa (direção que nega a si mesma) estão articuladas a partir de uma crítica profunda ao processo de conciliação e consentimento que passou a direcionar os movimentos sociais desde a chegada de Lula ao governo federal. E a atuação do MPL expressou sua crítica salientando a perversidade dos canais de negociação e dos processo de institucionalização das demandas e profissionalização dos militantes, negando explicitamente, ao menos até o momento, qualquer disposição de disputa das estruturas estatais, seja por via de negociações e articulações nos aparelhos mediadores das demandas sociais, seja pela via eleitoral.

Era de se esperar que a resposta viesse como perda de controle. Para os pequenos grupos que se mantinham na esquerda à margem do governo, disparar o desgoverno da revolta era a possibilidade de fazer frente àquela gigantesca estrutura de gestão da luta de classes. A explosão política violenta das ruas recusa os mecanismos de participação e reage à repressão armada. – Em São Paulo, a tática do movimento é assumidamente elaborada para enfrentar a estratégia de diálogo esperada de uma Prefeitura petista. (*ibidem*)

Essa preparação para enfrentar o diálogo proposto pela prefeitura petista se expressou principalmente no fato de o movimento se negar a participar de qualquer reunião de negociação. Afirmava-se que a pauta era pública e notória, a redução da tarifa dos transportes públicos (ônibus, trens e metrô), e que as manifestações continuariam até que esta fosse atendida plenamente, sem qualquer possibilidade de barganha ou de eleição de representantes oficiais, algo inviável de se estabelecer honestamente em um movimento popular descentralizado e difuso territorialmente.

O MPL carrega uma gama de influências que confluem para sua atuação como ponto fora da curva da conciliação de classes. Arriscamos identificar suas raízes longínquas no movimento antiglobalização - organizado ainda na década de 1990 e consolidado no Brasil a partir do início dos anos 2000 na campanha contra a ALCA - articulado através de uma organização um tanto quanto difusa chamada Ação Global dos Povos e em movimentos de comunicação alternativa como o Centro de Mídia Independente (CMI), conhecido internacionalmente como *indymedia*⁶⁷. Aqui fica patente a nosso ver a contestação às formas organizativas tradicionais da esquerda marxista leninista, ainda que nesse período estas críticas se dessem sob outras condições históricas. Mais recentemente as influências do MPL também se mantiveram múltiplas, difusas e mesmo pouco

⁶⁷ Sobre o movimento antiglobalização no Brasil ver Corrêa (2012).

claras. Arriscamos mais uma vez identificar alguma inspiração no M15 (movimento recente de ocupação da Plaza del Sol na Espanha), na Primavera Árabe e nos movimentos Occupy que se multiplicaram pela Europa e Estados Unidos.

Este é um processo em curso que está sem dúvida ainda por ser compreendido, mas que já trouxe consigo contradições a serem enfrentadas (como a “Revolta dos Coxinhas⁶⁸”) e sem dúvida inspiraram outras lutas, desde greves “por fora” da viciada estrutura sindical até a luta dos secundaristas no fim de 2015 e início de 2016. Como veremos todas estas experiências críticas à esquerda carregam consigo um tipo de luta que corresponde às inconstâncias daqueles que pretendem resistir ao processo de integração à ordem via projetos de conciliação de classes.

A falsa polarização: golpe, impeachment ou educação pública?

Nas eleições de 2014 uma aparente polarização começou a se delinear, em um primeiro momento, a partir da disputa eleitoral entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). A propaganda eleitoral petista se alçou a partir da imagem de “Dilma, Coração Valente”, uma referência ao passado guerrilheiro da agora candidata a reeleição, remetendo a sua participação em organizações de combate armado à Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). O resultado eleitoral apertado que deu vitória ao PT inaugurou um período de crescentes manifestações de rua, ora dos chamados “coxinhas”⁶⁹ de direita contra o mandato petista, ora dos “pão com mortadela”⁷⁰ em defesa aberta do PT e do petismo. Nesse contexto os movimentos sociais históricos se organizaram em Frentes de luta reunindo movimentos sociais e organizações sindicais diversas: a Frente Brasil Popular encabeçada pelo MST, e a Frente Povo sem Medo hegemônica pelo MTST. Ainda que cada uma a seu modo, ambas passaram a se organizar em torno de manifestações de rua pró-governo e aparentemente buscando tensionar os setores hegemônicos no Partido dos Trabalhadores para que estes fizessem uma autocrítica quanto às suas alianças políticas e ao rebaixamento/abandono do seu programa de reformas estruturais (agrária, urbana, educacional) conhecido como programa democrático e popular⁷¹. Setores empresariais, em especial a FIESP⁷² – uma das mais importantes

⁶⁸ Ficou conhecida como “Revolta dos Coxinhas” a participação de um amplo contingente de pessoas nas manifestações, a princípio disparadas pelo MPL, que carregavam à revelia das orientações do movimento bandeiras do Brasil e demandas nacionalistas típicas de setores da direita como os reclames “contra a corrupção”. Sobre as manifestações da direita ver o vídeo de Caio Castor, *Ato pelo impeachment da Dilma*, 15 de março de 2015: <https://www.youtube.com/watch?v=XU9FAbqbiwA>

⁶⁹ “Coxinha” é em português uma forma popular e jocosa de se referir à polícia militar, e se consolidou nos últimos anos como referência a qualquer pessoa politicamente considerada “de direita”.

⁷⁰ Essa é uma referência a pessoas que aceitariam participar das manifestações pró-Dilma em troca de um pão com mortadela ou referência ao fato de que a esquerda consumiria esse alimento popular e muito barato que seria distribuído pelas organizações da esquerda pró-PT nas manifestações.

⁷¹ Sobre o programa democrático e popular e suas transformações ao longo da história do PT ver: Iasi (2006).

organizações patronais de São Paulo, o principal centro econômico do país - passaram a se posicionar criticamente ao governo petista, alçando a necessidade do que hoje conhecemos como uma política de austeridade, marcada pelos “ajustes” fiscais nas contas do governo e do ataque frontal aos direitos sociais e trabalhistas.

A nosso ver é justamente junho de 2013 que demonstrou a incapacidade política do Partido dos Trabalhadores de perpetuar sua política de controle social e gestão da miséria, o que em grande medida indicou a incapacidade dos petistas de implementar uma política de retirada de direitos, imposta pelas necessidades empresariais em um contexto de crise econômica aberta no país desde o desaceleramento da China e o início crise das *commodities* em 2012, o que levou ao um aumento significativo da instabilidade econômica do país perante o mercado internacional, o que se agravou com o aumento das dívidas públicas, chegando estas a abarcar mais de 60% do PIB nacional⁷³.

O PT, através da figura de Lula, tem tentado se recolocar como a organização capaz de fazer o que precisa ser feito para colocar o país novamente nos eixos, isto é, controlar as manifestações sociais de massa e implementar uma política econômica austera. Isso se manifestou de diversas formas: desde ameaças à setores da direita em incentivar lutas sociais como quando Lula intimou em plenária pública João Pedro Stédile, dirigente nacional do MST, a “colocar seu exército na rua” caso Dilma fosse deposta de seu cargo, até as ameaças à esquerda de que um golpe de caráter fascista estaria em curso no país e que as organizações sociais como um todo deveriam, portanto, se reaglutinar em defesa do PT como último bastião da luta de classes. Assim, com as denúncias de corrupção da “operação Lava Jato” e o processo de impeachment de Dilma Rousseff, os quais se transformaram em capítulos de uma sórdida novela midiática com altíssima audiência e com direito a paladinos da justiça como Sérgio Moro, se constituiu uma pseudo-polarização em torno do debate se haveria ou não um golpe em curso.

Nesse sentido, os movimentos sociais se reaglutinaram nos lemas “não vai ter golpe” e “Fora Temer” em torno da tentativa de retomada de um elo perdido, de um fio da meada que pensamos que há muito se realizou e que é portanto impossível ser resgatado. A esquerda histórica nega-se a admitir que esse momento em que vivemos, de explicitação da direita e suas posições reacionárias em todos os aspectos da vida social, é fruto da década e meia da política de conciliação de classes baseada em controle social, consumo a base de créditos e afluência de capital (principalmente fictício) para a realização de uma promessa neodesenvolvimentista que fracassou no momento seguinte a sua inauguração. Seria este um projeto redentor de conciliação entre desenvolvimento

⁷² Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

⁷³ Sobre os dados de uma crise econômica talvez nunca vivenciada tão longamente pelo país ver matéria do Jornal Folha de São Paulo, País pode ter recessão inédita, diz estudo do Credit Suisse, de 07/02/2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1737586-pais-pode-ter-recessao-inedita-diz-estudo-do-credit-suisse.shtml>

econômico e política social que não conseguiu ser mais que uma promessa derrotada antes dos primeiros passos em direção a sua implementação. Almeja-se a autocrítica petista e nega-se a (re)pensar os elementos que levaram a esse perverso processo de integração à ordem capitalista.

Nesse cenário no mínimo sinistro manifestaram-se em fins de 2015 os jovens secundaristas do estado de São Paulo que, influenciados direta ou indiretamente pelas Jornadas de Junho de 2013, empreenderam uma luta radicalizada contra o “projeto de reorganização escolar⁷⁴” que denunciaram como uma tentativa de precarização ainda maior do já há muito precário ensino público. Mais uma vez através de um processo de luta difuso, heterogêneo e horizontal, após a ocupação de mais de duzentas escolas no estado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) é obrigado a recuar de seu projeto que previa, dentre outras medidas, o fechamento de centenas de escolas e salas de aula.

Essas formas de resistência que provém do legado de junho de 2013 carregam consigo uma condição de nosso tempo histórico: a luta em tempos de fragmentação. Tratamos aqui com mais atenção das lutas por transporte e educação pública de qualidade, porém outras formas de luta de caráter espontâneo tem ocorrido, isto é, lutas recentes que na prática questionaram as estruturas e formas de luta legatárias da esquerda pós-redemocratização. Algumas dessas manifestações atuais foram: a greve e insurreição dos trabalhadores da construção civil nas obras da barragem de Jirau em Rondônia no norte do país, a greve dos garis no Rio de Janeiro durante o carnaval de 2014, a greve dos professores estaduais e municipais do Rio de Janeiro que ocuparam a Câmara Municipal em 2013, a resistência à desocupação e retomadas de terra dos índios Munduruku, Tupinambá e Guarani Kaiowá nos últimos anos, dentre outras.

E a crise do sistema capitalista combinada à crise das experiências históricas de crítica social que levaram e continuam levando à emergência de motins, rebeliões, revoltas. Todos estes por fora dos moldes tradicionais e carregando consigo uma enorme gama de contradições, mas que parecem resistir à integração e ordem, pensar e agir, ainda que de modo difuso e inconstante, em direção a uma crítica social radical ao modo de vida capitalista. A fragmentação, seja da classe, seja das lutas, das organizações, e mesmo do próprio capital, não é uma questão de escolha, mas fruto desse tempo histórico em que os combatentes insistem, com as armas que tem, em contestar.

Bibliografia

⁷⁴ Sobre a luta contra o projeto de reorganização escolar ver Oliveira&Maciel (2015) e Corrêa&Cordeiro (2015). Ver também o vídeo de Caio Castor, Escolas de Luta SP 2015, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZXSñ76WkR6Y>

ALMEIDA, L.F.; SANCHEZ, F.R. Um grão menos amargo das ironias da história: o MST e as lutas sociais contra o neoliberalismo. **Revista Lutas Sociais**, São Paulo, 1998, p. 78-91.

ARANTES, Paulo. _____. *O Novo Tempo do Mundo*, São Paulo: Boitempo, 2014.

_____. A fórmula mágica da paz social de esgotou, Site Correio da Cidadania, julho de 2015. Disponível em: www.correiocidadania.com.br. Acessado em 16/02/2016.

ARANTES, Pedro. Da (Anti)Reforma Urbana brasileira a um novo ciclo de lutas nas cidades, Site Correio da Cidadania, novembro de 2013. Disponível em: http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9047:submanchete091113&catid=83:da-antireforma-urbana-brasileira-a-um-novo-ciclo-de-lutas-nas-cidades&Itemid=207. Acessado em 24/07/2016.

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. A economia política do novo-desenvolvimentismo e do social desenvolvimentismo. *Revista Economia e Sociedade*, Campinas-SP, 2012, p.779-810.

CARTA DE SAÍDA das nossas organizações (MST, MTD, Consulta Popular e Via Campesina) e do projeto estratégico defendido por elas. Site Passa Palavra, novembro de 2011, disponível em: www.passapalavra.info. Acessado em 16/02/2016.

CORRÊA, Ana Elisa & CORDEIRO, Leonardo. *Reorganizar para gerir: o ensino público como indústria*, Site Passa Palavra, 08 de dezembro de 2015. Disponível em: www.passapalavra.info. Acessado em 16/02/2016.

PASSA PALAVRA. Entre o fogo e a panela: movimentos sociais e burocratização, Site Passa Palavra, 22 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.passapalavra.info/2010/08/27717>. Acessado em 25/07/2016.

CORRÊA, Ana Elisa. O Fórum Social Mundial e as classes médias brasileiras: política de reformas e conciliação de classes. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2012.

GALVÃO, Andréia. (2002). A CUT na encruzilhada: dilemas do movimento sindical combativo. *Idéias*. Campinas: IFCH/Unicamp, ano 09, vol.1, pp. 105-154.

IASI, Mauro. *As Metamorfoses da Consciência de Classes – o PT entre a negação e o consentimento*, São Paulo: Expressão Popular, 2006.

KATZ, Claudio. *Las disyuntivas históricas de la izquierda em America Latina*. Buenos Aires: Luxemburgo, 2008.

MARTINS, Caio & CORDEIRO, Leonardo. *Revolta popular: o limite da tática*, Site Passa Palavra, maio de 2014. Disponível em: <http://www.passapalavra.info>. Acessado em 16/02/2016.

MACIEL, Daniela & OLIVEIRA, Tatiana de. Saresp e Reorganização do ensino: faces do projeto escola-empresa. Site Passa Palavra, 22 de novembro de 2015. Disponível em: <http://www.passapalavra.info>. Acessado em 16/02/2016.

MENEGAT, Marildo. *Estudos sobre ruínas*. RJ: Revan, 2012.

_____. “A crítica do valor bate à sua porta”. Prefácio In: BRITO, Felipe & MORAIS, L., SAAD-FILHO, Alfredo. Da economia política à política econômica: o novo-desenvolvimentismo e o governo Lula. *Revista de Economia Política*, vol . 31, nº 4 (124), pp . 507-527, out-dez.2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v31n4/01.pdf>.

ROCHA, Pedro. *Até o último homem*. São Paulo: Boitempo, 2013.

_____. O fim da gestão da barbárie, *Revista Territórios Transversais*, n. 3, São Paulo, set. de 2015.

PINASSI, M. O. Neodesenvolvimentismo ou luta de classes. *Revista Caros Amigos*, dez. 2012. Disponível em: <http://carosamigos.terra.com.br/index/index.php/artigos-e-debates/211-revista/edicao-189/2834-neo-desenvolvimentismo-ou-luta-de-classes>

SADER, Emir (org). *10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil - Lula e Dilma*. São Paulo : Boitempo; Rio de Janeiro : FLACSO, 2013.

SILVA, L. H., Práticas Organizativas do MST e relações de poder em assentamentos/acampamentos do Estado de São Paulo. Tese de Doutorado, Ufscar, São Carlos, 2007.

TUMOLO, Paulo Sérgio. *Da contestação à conformação: a formação sindical da CUT e a reestruturação capitalista*. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2002.

Resistiendo al agronegocio: la construcción de autonomía en el caso del colectivo socio-ambiental #FueraMonsanto.

Anahí Méndez⁷⁵

Instituto de Investigaciones Gino Germani, FSOC, UBA

Introducción

A lo largo de su historia, el ser humano se fue transformando cada vez más en un agente activo de modificación del ambiente mediante distintos procesos como son la alteración, la simplificación, la eliminación, y la extinción, los cuales se combinan paralelamente con la domesticación, la diversificación y la conservación de especies. De ser un cazador-recolector, luego se asentó en determinados territorios al crear la agricultura dando, así, origen al desarrollo de sus grandes civilizaciones y a diversos cambios ambientales como la desertificación y la destrucción de los bosques. Luego, cuando descubrió la técnica que le permitió surcar los mares y océanos, impulsó el intercambio mundial de especies (animales, vegetales y humanas). Y hacia principios del siglo XIX, en razón de 200 años, desarrolló una novedosa forma de elaboración y obtención de materias que revolucionó lo conocido previamente, acelerando los tiempos de extracción, de producción, de elaboración y de circulación de mercancías a lo largo y ancho del mundo. Varios autores (Acosta y Machado, 2012; Giarracca y Teubal, 2013; Harvey, 2004; Svampa, 2010, 2012a, 2012b) acuerdan que el sistema capitalista contemporáneo ha ingresado en una forma de acumulación diferente al del industrialismo que caracterizó la mayor parte del cercano siglo XX.

El objetivo del trabajo es analizar las acciones de resistencia al agronegocio llevadas a cabo por el colectivo en red socio-ambiental #FueraMonsanto de Buenos Aires, Argentina, desde el año 2012 en adelante. Se buscan conocer las características de las prácticas sociales y acciones de denuncia y protesta contra la corporación Monsanto en el ciberespacio y en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Se entiende que estas prácticas se articulan con las problemáticas socio-ambientales que vienen aconteciendo en el interior del país.

Las acciones de resistencia analizadas se sitúan en un contexto ambiental crítico como consecuencia de los impactos del industrialismo, la urbanización, los nuevos métodos en la agroindustria, la contaminación de los suelos, el agua y el aire, y el calentamiento global, problemáticas socio-ambientales que ya ni el sistema que las ha generado, el capitalismo, puede ignorar. Asimismo, en esta investigación se rescata la dimensión tecnológica y comunicativa de la acción. La apropiación social tecnológica por #FueraMonsanto sólo puede comprenderse teniendo en cuenta que sus prácticas se enmarcan en un contexto epocal informacional signado por la masificación de las

⁷⁵ Licenciada en Sociología graduada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Becaria UBACyT y Maestranda en Comunicación y Cultura por la misma institución. Miembro del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información del Instituto Gino Germani. Contacto: anahimendez.86@gmail.com

tecnologías digitales⁷⁶. Ambos procesos (ambiental e informacional) atraviesan las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que influyen en las formas que adopta la acción colectiva en América Latina.

En un primer apartado se plantean algunas nociones que sirvan al estudio social de los colectivos socio-ambientales latinoamericanos, especialmente, aquellos que se presentan como actores antagonistas a las formas hegemónicas de explotación del ambiente y presentan en sus prácticas novedosas formas organizativas que quiebran las estrategias tradicionales, como es el caso aquí abordado. Luego se realiza un breve recorrido por las características principales para comprender al extractivismo y el agronegocio como modelo y actividad productivos en la Argentina. En una tercera instancia se desarrolla el análisis del caso de #FueraMonsanto, es en este apartado donde se profundiza la dimensión informacional debido a que sería una comprensión incompleta sobre las acciones de resistencia del colectivo si no se tiene en cuenta su fuerte anclaje en la Cultura Digital. Finalmente, se trazan una serie de líneas para continuar estudiando el proceso de constitución de autonomía. Este es un trabajo que forma parte de la investigación en curso en el marco de la tesis de maestría de la autora.

Colectivos ¿socio-ambientales?: construyendo una nueva categoría sociológica

Lo que ampliamente puede reconocerse como la relación hombre-naturaleza se comprende aquí, no desde la perspectiva clásica economicista, individualista y mercantil, sino como una compleja relación en donde las intervenciones que producen (y han producido a lo largo de su historia) las sociedades sobre la naturaleza, la modifican y, al mismo tiempo, estas modificaciones cambian las estructuras e imaginarios de las sociedades humanas. Estudiar y comprender de este modo la relación que existe entre nosotros, la especie humana, y la naturaleza significa poner el acento en la co-evolución entre naturaleza y sociedad.

Es retomado el planteo de Antonio Brailovsky y Dina Foguelman sobre la historia ecológica. Siguiendo a los autores, “el desarrollo de las sociedades humanas genera cambios en el medio ambiente en el que están insertos. Y a su vez, los cambios en los ecosistemas condicionan modificaciones en el modo de vida de los seres humanos” (2006: 6). Vale decir que el análisis de la sociedad es indisociable de la naturaleza, en tanto, se constituye una relación recíproca, porque la *relación sociedad-naturaleza* existe en las interrelaciones entre las sociedades humanas y el ambiente. Se trata de una interacción que está situada en el tiempo y el espacio generacional, y que se vincula al modo de desarrollo de cada etapa histórica-social. Más concretamente, “los estilos de

⁷⁶ Se entiende por *tecnologías digitales* a Internet, computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, ultrabooks, tablets, celulares GSM, smartphones, filmadoras digitales, cámaras de fotos digitales.

desarrollo elegidos o impuestos por los países de la región han determinado y se han expresado a través de diversas formas de interacción sociedad-naturaleza” (Brailovsky y Foguelman, 2011: 16). Dicho lo anterior, es necesario aclarar que para el análisis que se pretende plantear en este trabajo sobre *lo socio-ambiental*, se considera más preciso reemplazar *naturaleza* por *ambiente*. Si bien dentro la temática general los términos *naturaleza*, *medio ambiente* y *ambiente* se muestran intercambiables, no quieren decir lo mismo. Por un lado, la noción de naturaleza simboliza el “mundo virgen” que parece dejar al ser humano fuera de él, su significado nos remite a los espacios del planeta inalterados por el humano. Esta noción genera algunas controversias relacionadas con los límites entre lo natural y lo humano, como situar el momento en que el ser humano comenzó a dejar de ser parte de “lo natural” o, desde otro punto de vista, si nunca dejó de ser parte y es un elemento más de la naturaleza. Por otro, se tiene presente que el término “medio ambiente” es, en realidad, una reiteración de la idea de ambiente ya que “medio” y “ambiente” terminan significando lo mismo. Como propuesta analítica se toma la acepción de ambiente planteada por Carlos Reboratti, quien acuerda en que el ambiente “engloba a todos los elementos y relaciones que se encuentran dentro de la biosfera, tanto los que son estrictamente naturales como los que han sido producto, en mayor o menor grado, de la intervención humana” (2012: 12). Por eso mismo, al espacio concreto donde el humano desarrolla sus actividades y constituye sus relaciones, estructuras, identidades e imaginarios, lo denominamos ambiente, que, por supuesto, es habitado y compartido por los animales no humanos y las plantas, y formado por muchos otros elementos como el agua, la tierra, el suelo, la luz, el aire, en suma, la biosfera o ecósfera de donde hemos surgido, *nuestro gran hogar*, el Planeta Tierra.

Es a partir de esta significación del ambiente, es decir, como el conjunto de elementos e interrelaciones de la biosfera en el que la sociedad es parte, que se construye el significado de *colectivos y organizaciones socio-ambientales*. Entendemos por ellos a todos los grupos sociales que sostienen una relación en el tiempo y comparten la característica de organizar su acción, su identidad, su objetivo social y su antagonista o enemigo, en vinculación con la defensa del ambiente y de la vida que lo habita. No obstante, al abordar el estudio de este tipo de sujeto social hay que tener en cuenta una de las características actuales: su gran heterogeneidad, su amplitud y ambigüedad lo que los convierte en un objeto de estudio complejo (Castells, 1999; Hernández, 2016; Reboratti, 2012); los colectivos socio-ambientales están compuestos por una amplia gama de actores y colectivos diferenciables sólo en el trabajo metodológico⁷⁷. Tal como señala Maristella

⁷⁷ Otros dos grandes tipos de colectivos socio-ambientales son los ecologistas y los animalistas o antiespecistas, que a su vez se distinguen por diferentes características referentes a la identidad, al tipo de acción y objetivo socio-ambiental. Uno de los objetivos de la tesis de maestría en curso es construir una tipología acerca de los colectivos socio-ambientales, ya que a partir de investigaciones exploratorias que la autora viene llevando a cabo se ha detectado que cada uno de ellos se diferencia de los otros, por lo tanto, es un error englobar bajo el ecologismo o

Svampa (2012a) para caracterizar a los movimientos socio-ambientales latinoamericanos de los últimos años, la acción colectiva que estos asumen posee una serie de dimensiones distintivas: la territorialidad, es decir, “el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (p. 77). La acción directa no convencional y disruptiva como herramienta de lucha, dimensión que se encuentra estrechamente vinculada al contexto generalizado de agotamiento de las mediaciones institucionales como son las estructuras partidarias del siglo XX. Desarrollan formas de democracia directa para la toma de decisiones apoyada en prácticas asamblearias como una respuesta proactiva a la democracia de tipo delegativa y decisionista: “la democracia directa y la emergencia de nuevas estructuras de participación que tiene un fuerte carácter asambleario se reflejan en la tendencia a crear estructuras flexibles, no jerárquicas, proclives al horizontalismo y la profundización de la democracia” (p. 78). Y la demanda de autonomía presente tanto en colectivos culturales como en grandes organizaciones regionales e internacionales. La noción de autonomía -como autodeterminación, horizonte utópico y modos de construcción contrahegemónicos- indica la autora, es al mismo tiempo eje organizativo y estratégico para los movimientos sociales latinoamericanos. Otras dos características (Svampa, 2012b) de este tipo de colectivos es su composición intersectorial ya que coexiste en ellos una articulación entre diversos actores sociales⁷⁸, y su carácter multiescalar⁷⁹: lo local, lo regional y lo global atraviesa constantemente la forma que adquieren las distintas acciones que llevan a cabo.

Coincidimos con Svampa que el conjunto de estas dimensiones ha ido configurando un nuevo ethos militante. En relación, siguiendo a Marisa Revilla Blanco (2010), este tipo de movimientos contemporáneos va produciendo una concepción alternativa de ciudadanía ya que cuestionan y vuelven a dar significado a las relaciones económicas, políticas, sociales, y culturales históricamente constituidas. Son, por ello, una ‘escuela de ciudadanía’ al ser “el espacio en el que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas”. (p. 55). Puntualmente, este trabajo comprende este tipo de procesos sociales a través del concepto de autonomía de Cornelius Cartoriadis (2008). En esta línea, es posible pensar a los colectivos y movimientos sociales como

ecologistas a todos los colectivos y movimientos “verdes”. A su vez, cada colectivo socio-ambiental se distingue en su interior coexistiendo varios estilos de antiespecismo, o de ecologismo, o de ambientalismo.

⁷⁸ Como ser activistas autoconvocados, campesinos, indígenas, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, redes de intelectuales y expertos -como es la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados-, colectivos contraculturales.

⁷⁹ La multiescalaridad de la acción hace referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización (Sassen, 2007) y alude por ello al involucramiento de un entramado complejo de actores sociales, económicos, políticos, locales, regionales, estatales y globales. La multiescalaridad tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, para el caso de las industrias extractivas, la dinámica entre “lo global” y “lo local” se presenta como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados (en sus diferentes niveles), que promueven un determinado modelo de desarrollo; y, por otro lado, resistencias provenientes de las comunidades locales, que cuestionan tal modelo, y reclaman su derecho a decidir en función de otras valoraciones (Svampa, 2012b: 20).

espacios posibilitadores para la construcción de autonomía, mientras el régimen del neoliberalismo globalizado constituye la heteronomía de la sociedad instituida contemporánea. Esto es, porque niega y oculta su dimensión instituyente fijando roles sociales predefinidos por la sociedad (individual y colectiva a la vez). Su poder se instituye en las psiques e imaginarios sociales creando individuos sujetos a su formación social.

Sosteniendo su modelo histórico-social a través de las propiedades que ha creado del ‘ser-así del mundo’, el neoliberalismo se da “apariencia de la ‘espontaneidad’ más completa y en realidad estamos ante la heteronomía más total posible” (Castoriadis, 2008: 4). Para el caso, ha instituido al agronegocio como único saber válido en la producción agropecuaria (ver siguiente apartado). Al respecto, el análisis de Valeria Hernández (2009) sirve de modo ilustrativo:

El marco teórico *agribusiness* originalmente producido en la arena académica fue apropiado por actores sociales en condiciones históricas, políticas y sociales precisas, generando sus propias prácticas materiales y representaciones. (...) decimos que el paradigma de los agronegocios es una suerte de caballo de Troya, a través del cual se hace referencia a un modelo de organización societal que supone mucho más que una opción de negocios. Es posible pensarlo como el marco ideológico que construye sentido y legitima (social y políticamente) el nuevo modo de relacionamiento agroproductivo argentino, cuyo horizonte se ha globalizado definitivamente (p. 43).

La sociedad que se ha creado anula otras significaciones coexistentes sobre cómo habitar y producir. Son, para el marco del agronegocio, como ‘transgresiones’ o ‘patologías’ de la heteronomía instituida. Sin embargo, en la línea de Castoriadis, pese al poder que ejerce la sociedad instituida -la sociedad que es-, también puede suceder *el momento de la puesta en duda de las significaciones sociales instituidas y de la ruptura con la heteronomía*. Los sujetos pueden “encontrar o crear medios sociales de una expresión pública original y contribuir a la autoalteración del mundo social” (Castoriadis, 2008: 2). Si ello sucede, los sujetos recuperan la capacidad instituyente del individuo, es decir, la capacidad de cambiar de modo reflexivo la sociedad. Se comienza a recuperar, así, la autonomía perdida en la forma de la heteronomía.

Es cuando se crea el germen de un proyecto de autonomía colectiva e individual que permite a los individuos darse a sí mismos sus leyes. Se crea política, dándose lugar para la actividad colectiva explícita de una manera reflexiva y deliberativa. Supone, por lo tanto, un actuar autorreflexivo. Como define Castoriadis:

La autonomía es pues el proyecto (...) que tiende, en un sentido amplio, a la puesta al día del poder instituyente y su explicación reflexiva (que no puede nunca ser más que parcial); y en un sentido

más estricto, la reabsorción de lo político, como poder explícito, en la política, actividad lúcida y deliberante que tiene como objeto la institución explícita de la sociedad (así como de todo poder explícito) y su función como *nomos*, *diké* y *télos* –legislación, jurisdicción, gobierno- hacia fines comunes y obras públicas que la sociedad se haya propuesto deliberadamente (2008: 16 y 17).

El final de la heteronomía, es decir, el poder de la autonomía, supone una acción reflexiva en un movimiento sin fin de manera a la vez individual y social. Reconoce, siempre, que toda formación social es un producto de lo social e histórico y que tiene, por ello, potencialidad de ser transformada. La existencia de la autonomía se relaciona con la elaboración de instituciones que maximicen la participación de los individuos reflexivos en la construcción de una política colectiva. Nace a partir del cuestionamiento hacia la heteronomía instituida y las propiedades dotadas de sentido por la institución y las significaciones imaginarias de una sociedad dada. La autonomía es potencialidad para modificar el imaginario radical⁸⁰ a través de la sociedad instituyente. Busca crear nuevos poderes y normas que instituyan un orden más cercano a los intereses colectivos y, así, germinar individuos más autónomos.

Raúl Zibechi (2003) señala que estas capacidades incluyen tanto aspectos sociales como culturales y la gama de recursos que tiene un movimiento cambia al mismo ritmo que los cambios culturales. Las múltiples y heterogéneas acciones colectivas surgidas en este nuevo milenio expresan la visibilización de otras subjetividades y la búsqueda de novedosas formas de resistir y promover un proyecto de sociedad alternativo, donde la revalorización de la naturaleza empieza a cobrar una fuerza inusitada.

Para el caso aquí abordado, el colectivo socio-ambiental #FueraMonsanto es descrito como *ambientalista* por la manera en que constituyen su identidad colectiva, el tipo de acción que llevan a cabo y el objetivo social perseguido. Es un colectivo de origen urbano internacional y asambleario vinculado a los problemas socio-ambientales acontecidos en localidades argentinas afectadas por las actividades extractivas como ha sido el caso del Barrio de Ituzaingó Anexo⁸¹ de la provincia de

⁸⁰ Como fuente de creación y de alteración de la sociedad y la historia, como lo social-histórico. Relación entre el imaginario instituido de la sociedad, y el imaginario instituyente como la potencialidad del cambio (Castoriadis, 1993).

⁸¹ Se trata de un barrio de 6.000 habitantes que durante la década de 1990 en adelante ha ido siendo circundado por campos de soja. Con el correr de los años, un grupo de madres empezó a detectar que sus hijos y vecinos padecían problemas de salud similares, como cáncer, leucemia, abortos espontáneos, malformaciones, diabetes, lupus, desórdenes tiroideos, afecciones respiratorias, etc. Una de las madres, Sofía Gatica, comenzó a realizar un relevamiento manzana por manzana de las personas enfermas y el tipo de enfermedad que padecían. “Cuando lo tuve listo lo llevé al Ministerio de Salud y les dije: ‘Esto lo hice yo y algo está pasando. Por favor investiguen esos campos y el agua’. Y ellos quedaron muy sorprendidos, pero no hicieron nada.” (Entrevista a Sofía Gatica, en Barruti, 2013: 110). Para el año 2006, el gobierno provincial realizó una muestra de sangre en treinta niños. Los resultados indicaron que la totalidad tenía pesticidas en sangre. En 2008, y como resultado de la presión y reclamos de la comunidad organizada, se dictaron ordenanzas municipales que establecieron la emergencia sanitaria y ambiental y prohibieron fumigaciones alrededor del barrio (Ordenanzas N° 10505, 10589, 10590), derivando finalmente en la prohibición de las fumigaciones en todo el ejido de la ciudad. Sin embargo, las fumigaciones

Córdoba protagonizado por las *Madres de Ituzaingó Anexo* y los colectivos *Paren de Fumigar*, y actualmente, la lucha llevada a cabo por la *Asamblea Malvinas Lucha por la Vida (Línea fundadora)* contra la construcción de la planta Monsanto destinada a la experimentación y el procesamiento de maíz genéticamente modificado⁸². Sucedió, entonces, que la noche anterior al 18 de septiembre de 2013 y con motivo del festival *Primavera sin Monsanto*, dio comienzo el acampe y bloqueo ideado por Sofía Gatica y el doctor Andrés Carrasco⁸³ para evitar que el predio fuera acordonado por la policía. De este modo, inició el acampe sostenido por diversas organizaciones que bloquea al presente las dos entradas al predio, sólo la *Asamblea Autoconvocads del Bloqueo contra Monsanto* decidió su retiro habiéndose mantenido durante 2 años y 5 meses⁸⁴. El objetivo concreto es paralizar la construcción de la planta impidiendo el ingreso de materiales:

“Como nadie garantizaba que Monsanto cumpliera la ley (se refiere a un fallo que ordenó la paralización de las obras hasta no se presentara un informe de Impacto Ambiental), lo hicimos nosotros con el acampe”; “Somos ciudadanos que luchan por sus derechos porque el Estado no nos protege. Estamos desamparados. Y si no lo hacen ellos, lo tendremos que hacer nosotros. Y así seguiremos.” (Asambleístas, entrevistas realizadas por Periódico MU N° 79, p. 6 y 7).

terrestres y aéreas siguieron siendo una fuente de agresión tóxica para la población. Transcurridos cuatro años, finalmente, en 2012 la Cámara del Crimen N° 1 de la Provincia de Córdoba, lleva a cabo el juicio a dos productores sojeros y a un aviador fumigador por violar la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, las ordenanzas municipales y la Ley Provincial de agroquímicos N° 9164, condenándolos a realizar trabajo comunitario. Si bien la condena resultó ser leve en comparación a los daños ocasionados en la salud de los habitantes del barrio, el caso sentó un importante precedente en la lucha contra las fumigaciones y por el derecho a la salud y la vida. Al mismo tiempo, sirvió para nuclear diferentes poblaciones afectadas y organizar acciones contra el modelo extractivista.

⁸² El mismo día en que se dictó el fallo que confirmó las denuncias de las Madres de Ituzaingó, la ex-presidente Cristina Fernández anunció desde E.E.U.U. por cadena nacional la instalación de la planta Monsanto en Malvinas Argentinas (Periódico MU N° 71). Ese mismo día, un grupo de madres, hijos, vecinos, jóvenes y militantes autoconvocados constituyeron la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. La intención era informar a la comunidad y movilizarse para conseguir que se realice una consulta popular que decidiera el futuro de la planta en la localidad. Cabe destacar que entre el Barrio Ituzaingó Anexo y la localidad de Malvinas Argentinas hay una distancia de sólo 10 kilómetros, sin transporte directo que conecte los puntos.

⁸³ Científico argentino fallecido en mayo de 2014 debido a los efectos del glifosato. Sus investigaciones se centraban en el impacto de agroquímicos en los embriones y en la salud de los pueblos fumigados. Más detalles en: <http://ecoscordoba.com.ar/andres-carrasco-cientifico-y-militante-gracias/>

⁸⁴ “Malvinas: el grupo de Autoconvocados se va del acampe anti Monsanto”, publicado por Redacción *La Voz*, el 12/02/2016: <http://www.lavoz.com.ar/politica/malvinas-el-grupo-de-autoconvocados-se-va-del-acampe-anti-monsanto>

Fue la presencia de un enemigo en común y el peligro socio-ambiental⁸⁵ inminente de su presencia en el territorio lo que unió las luchas, conformándose la acción colectiva #FueraMonsanto. Sus demandas apelan a un cambio de modelo productivo y cultural basado en la agroecología recuperada de la tradición de los pueblos originarios, e incorpora la noción de soberanía alimentaria y la de sustentabilidad como principio de justicia intergeneracional a partir de la cual la satisfacción de necesidades actuales no debe comprometer la satisfacción de las necesidades futuras. #FueraMonsanto se viene construyendo desde 2012 en nuestro país como un actor social antagónico al extractivismo y a todo lo que su modelo implica.

Mercantilizando el ambiente: breve descripción sobre el extractivismo y el agronegocio en Argentina

La aplicación del modelo neoliberal en Argentina como respuesta programática al *Consenso de Washington* inaugura a partir de la década de 1990 hasta nuestros días una nueva etapa de reestructuración económica y política en general, y de la actividad extractiva en particular. Se trata de un proceso que atraviesa las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, iniciado ya en los albores de las formas capitalistas propias de la región y en el transcurso de diferentes etapas históricas que vienen definiendo la división internacional del trabajo. Analíticamente, pueden distinguirse tres momentos (Teubal y Palmisano, 2012): la conquista de América y era colonial donde se configura la economía-mundo y se llevan adelante las primeras actividades extractivas alrededor del saqueo del oro y la plata, y posteriormente, de la producción de azúcar. La era liberal y la conformación de las economías primario-exportadoras hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, donde los metales son desplazados por la adquisición y valoración de la tierra. Y, la etapa actual, con predominio del neoliberalismo y la configuración de un nuevo extractivismo. Se trata de un proceso iniciado en 1492 que ha determinado la colonialidad del poder, del saber y del ser

⁸⁵ Un estudio realizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados, describe las implicancias que tendría la instalación de la planta en el lugar. Debido a los procesos industriales que convierten a las semillas de maíz en resistentes a hongos e insectos, en la planta se procesarían enormes cantidades de agroquímicos con la finalidad de preparar la semilla transgénica para la siembra. Éstas tendrán la capacidad de contaminar la tierra y el agua durante años. Y el mismo tratamiento para impregnar de venenos a las semillas, no sólo consume cantidades siderales de agua, sino que genera líquidos residuales. A su vez, los 200 silos de 137 toneladas destinados al almacenamiento, serán fuente de polución aérea. La zona donde se instala la planta tiene fuertes vientos procedentes del este-noreste. Esto significa que trasladarían la nube tóxica procedente del venteo de los silos. En suma, la planta es una fuente más de contaminación ambiental y nocividad para la salud y la vida de las personas. Respecto las promesas de trabajo y progreso reivindicadas por el gobierno municipal, provincial y nacional, y los representantes de la compañía, tampoco resultan cien por cien fiables. El agronegocio es una lógica productiva que tiende al desplazamiento y la desaparición de los pequeños agricultores y campesinos. La generación de puestos de trabajo resulta un mito del desarrollo capitalista (Castoriadis, 1980) donde las actividades existentes terminan siendo desmanteladas por las grandes corporaciones, como Monsanto. Además, otra cuestión vinculada, es que los empleos se otorgarían solamente en la fase de construcción, luego, con la planta operando, la misma empresa contrataría personal altamente calificado y especializado en el sector. En general, estos puestos de trabajo son ocupados por personal contratado desde exterior del país.

latinoamericano donde Nuestra América cumple la función de suministradora de recursos primarios para las demandas del Capital (Acosta y Machado, 2012: 69).

En el presente, la acumulación originaria que ha sido problematizada por Marx en el Capítulo XXIV de *El Capital* se complejiza adoptando un renovado y amplificado proceso de mercantilización (Seoane, 2013). Al respecto, David Harvey (2004) ha analizado que a los rasgos que en la actualidad forman parte de la geografía del capitalismo y que tienen reminiscencias con lo ocurrido en la acumulación originaria, se le suman otros nuevos que configuran lo que el autor ha denominado como acumulación por desposesión. Ésta se organiza principalmente alrededor del énfasis en los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería y pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), y la corporativización y privatización de los servicios públicos. Todo esto “constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes” (p.115).

La tierra, el agua, los minerales y la biomasa resultan actualmente cada vez más estratégicos para la reproducción del sistema económico hegemónico, regulado a través del neoliberalismo globalizado. Justamente, el modelo extractivista reemerge durante las transformaciones ejecutadas por gobiernos que implementan la doctrina neoliberal. En una instancia inicial, durante la década de 1970, donde se produce una internacionalización de las transacciones comerciales y financieras bajo la gestión de gobiernos militares. Y en una segunda etapa, a partir de la década de 1990 en adelante, los Estados han adoptado medidas tendientes a la liberalización y flexibilización de las instituciones, desregulando y desarticulando el andamiaje institucional. Para el caso de Argentina, a partir del *Decreto de Desregulación* en 1991 llevado a cabo durante la presidencia de Carlos Menem. Se trató un paquete de medidas tendientes a la liberalización plena de la economía. La norma disuelve una serie de entidades encargadas de regular las relaciones y actividades, entre ellas, agropecuarias. En el mismo decreto se establecen medidas que fortalecen la desregulación del comercio interno de bienes y servicios, del comercio exterior, de regímenes de gravámenes de las exportaciones, del sistema de transporte, etc. A partir de entonces, el sector agropecuario argentino se transformó en uno de los más desregulados y abiertos del mundo, sujeto mucho más que antes a los vaivenes de la economía internacional (Giarracca y Teubal, 2008).

En líneas generales, las actividades extractivas -minería, hidrocarburos, forestal, agronegocio- se caracterizan por la privatización, la mercantilización, el patentamiento de la biodiversidad y los genes⁸⁶ y la apropiación intensiva de bienes comunes. Son actividades todas que comprometen cada

⁸⁶ Un ejemplo sobre el fenómeno de cercamientos en torno al uso e intercambio de semillas y el conocimiento, puede analizarse a través del artículo de Tamara Perelmuter “El rol de la propiedad intelectual en los actuales procesos de cercamientos. El caso de las semillas en la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M (coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la economía argentina?* Buenos Aires, Antropofagia, 2013.

vez más la capacidad de resiliencia de los ecosistemas⁸⁷, generan también el arrinconamiento de las poblaciones, y se sustentan por medio de la violencia estatal-legal y paraestatal en los territorios que están siendo disputados entre los intereses de las empresas extractivistas, los Estados, y las poblaciones.

Debido a las características del colectivo socio-ambiental estudiado, se requiere profundizar en aquella actividad extractiva que organiza el sistema hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos: el agronegocio. Durante los últimos años, éste ha ido estableciendo una racionalidad diferente de producir alimentos al desplazar prácticas de la agricultura tradicional, al tiempo que ha ido transformando los hábitos alimentarios del país:

la lectina de soja desplazó a las grasas animales de la gran mayoría de los alimentos a base de harina (galletitas, panificados, golosinas, etc.) generando que en la actualidad la población argentina consuma a diario alimentos modificados genéticamente sin que exista ninguna identificación en ellos (Giarracca y Palmisano, 2013: 165).

Una de las dimensiones que más se destacan es la conformación de los ‘pools de siembra’ o complejos agroindustriales, y la incorporación creciente en el sector agrario de la tecnología de punta y la provisión de insumos: semillas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas y maquinarias. Como han descripto Norma Giarracca y Miguel Teubal (2008),

Las grandes empresas semilleras, combinadas con las que venden los agrotóxicos –introducidos de forma creciente en el sector-, adquieren una preeminencia inusitada en el sistema agroindustrial de nuestro país, en gran medida potenciada como consecuencia, primero, de las denominadas revoluciones tecnológicas de los híbridos (revolución verde) y, más recientemente, de los transgénicos (la revolución biotecnológica). (p. 154).

Las transnacionales que lideran el sector proveen dichos elementos buscando maximizar al corto plazo las ganancias, y como fuentes para la innovación y el desarrollo económico del país. Sin embargo, este proceso conlleva al endeudamiento y la dependencia cada vez mayor de los productores al paquete tecnológico: “Los productores que logran sobrevivir y mantenerse en el sector se ven sujetos más que nunca a la agricultura de contrato que el agronegocio le impone, o bien, a la provisión de semilla y al paquete tecnológico que la semillera exige” (ibídem: 155).

⁸⁷ Entendida como capacidad ecosistémica del ambiente para renovarse a sí mismo de las modificaciones o perturbaciones, refiere a la capacidad natural de autorregeneración.

A la par, esta actividad extractiva ha vuelto a los alimentos en *commodities*⁸⁸. Éstos cotizan en el mercado bursátil especulativo orientando la producción hacia el mercado externo en detrimento de las necesidades del mercado interno, convirtiendo la actividad en un negocio financiero. Bajo este modelo, se privilegia el desarrollo de las ‘economías a escala’ orientadas a la exportación granaria, en lugar de las necesidades de productores familiares y del consumo interno del país. Los productores agropecuarios, en particular los chacareros y campesinos, son desplazados u obligados a reconvertir su actividad por los grandes productores o terratenientes y por ‘pools de siembra’ favorecidos a partir del proceso de *sojización*⁸⁹. Por lo tanto, es una lógica productiva que acrecienta la concentración de la tierra, fenómeno conocido como el *landgrabbing*, es decir, la actividad agropecuaria tiende cada vez más al acaparamiento de tierras bajo la propiedad de unos pocos productores e inversionistas.

Otra consecuencia destacable del agronegocio es el implante del monocultivo en la región pampeana y también en lugares del país que en el pasado se dedicaban a otro tipo de producciones más acordes a la geografía y necesidades de cada región. Se va produciendo, entonces, un corrimiento de la frontera agraria y un aumento de la deforestación con el fin de disponer la tierra para el cultivo, mayormente, de la soja⁹⁰. A esta realidad, se suma el uso intensivo que hace del agua y el suelo, porque es una lógica productiva que no respeta la rotación de cultivos del método tradicional⁹¹. Ello, más el excesivo uso de agroquímicos/agrotóxicos como el glifosato, provoca la erosión de los suelos e inutilización para futuras siembras debido al socavamiento de su fertilidad.

Vinculada directamente con este modelo productivo, se suplanta la ganadería extensiva por el método de *feedlot*⁹². Éste produce alimentos de menor calidad, mayor sufrimiento animal, y potencia la gestación de enfermedades y serios impactos ambientales como la degradación y contaminación de las napas acuíferas: “cuando las lagunas de mierda que forman los corrales drenan hacia abajo, llenan las napas (que antes eran consideradas inagotables y puros reservorios) con partículas tóxicas, químicos, remedios, virus y bacterias.” (Barruti, 2013: 190).

Giarracca y Teubal (2008) caracterizaron al modelo como una ‘agricultura sin agricultores’, por su carácter excluyente respecto a la agricultura familiar y campesina. “Específicamente, el

⁸⁸ Entendido como materias primas transformadas en mercancías. Esto implica que su dinámica de producción esté expuesta a los vaivenes del mercado bursátil y a los intereses y crisis sistémicas del capital financiero internacional.

⁸⁹ “La soja en nuestro país creció en forma espectacular. La producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980, a 11 millones en 1996/1997 y a 47,5 millones en 2006/2007. La cosecha de 2012/2013 es estimada en 50 millones de toneladas. Así la soja pasó de representar 10,6% de la producción granaria total en 1980/81 a más de 50% en 2011/2012.” (Giarracca y Teubal, 2013: 12).

⁹⁰ Detalles en el mapeo realizado por *IconoClasistas* “El corazón del agronegocio sojero (Argentina/2010)”. <http://www.iconoclasistas.net/post/el-corazon-del-agronegocio/>.

⁹¹ “ (...) a partir del ingreso de la soja en los años '60 y su posterior expansión masiva en los '80, se dio un proceso de disminución de la ganadería, que terminó siendo desplazada por este cultivo y dejó de lado la tradicional rotación de los suelos agricultura-ganadería para pasar al doble cultivo trigo-soja” (Perelmuter, 2013: 104).

⁹² Para un análisis detallado sobre la implementación de los *feedlots* en la producción de carne vacuna en Argentina, véase Barruti (2013) “Parte 3: Un país descarnado” en *MalComidos*, Ed. Planeta.

agronegocio es la expresión en el mundo rural del modelo civilizatorio neoliberal. Esto implica una profunda transformación de las estructuras productivas y de los actores que actúan en y sobre ellas” (Giarracca y Palmisano, 2013: 162). Su tendencia hacia la monopolización corporativa de los eslabones locales y globales de producción, distribución, cambio y consumo que componen la cadena agroalimentaria, y esta propensión creciente hacia la *sojización* del agro y el monocultivo, va desplazando otras territorialidades y saberes, y en relación, pone en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos. En los lugares donde se instala la actividad extractiva, se vienen generando tensiones entre las poblaciones locales y los intereses de las multinacionales del agronegocio. A su vez, su desarrollo atenta contra la biodiversidad, y está involucrado con serias consecuencias para la salud humana, animal y la reproducción del ecosistema en su conjunto (Barri, 2013).

“¡Te lo grito, te lo canto, (y te lo comparto), #FueraMonsanto!”⁹³

#FueraMonsanto es un colectivo socio-ambiental que adopta el nombre de un hactash usado para difundir en el ciberespacio las Jornadas de Lucha Mundial contra Monsanto en Argentina y proclamarse en contra de los intereses de la empresa Monsanto y del modelo extractivista que ha sido impulsado durante el ciclo neoliberal y continuado por los gobiernos latinoamericanos de tinte progresista (Acosta y Machado, 2012) de los últimos 15 años. Si bien su nombre sintetiza la resistencia social para expulsar a Monsanto del país y del mundo, también significa un rechazo innegociable al modo de desarrollo también ejecutado por otras grandes transnacionales del agro y la farmacéutica como son Syngenta, Nidera, Bayer, Cargill y Dupont/Pioneer, y las alianzas tejidas por los gobiernos locales, los grandes productores y las fuerzas policiales y parapoliciales encargados de facilitar la operatividad de las transnacionales en los territorios locales, característica central del proceso globalizador al que asistimos (Sassen, 2007).

#FueraMonsanto se ha conformado como una red de redes desde la Campaña Occupy Monsanto organizada en 2011 por el movimiento Occupy Wall Street de EEUU⁹⁴ con el objetivo de impulsar una jornada de protesta mundial contra Monsanto y contra el modelo de vida, de producción y de consumo que significa el agronegocio en particular y el extractivismo en general. En septiembre de 2012, una nueva convocatoria global impulsó a una serie de activistas y diferentes colectivos argentinos con trayectoria en la lucha por la defensa de la naturaleza, la soberanía alimentaria y los

⁹³ El título hace referencia al cántico expresado en las manifestaciones contra Monsanto que suele combinarse con el tema de la banda Perro Verde “Fuera Monsanto” emitido desde un camión equipado con sistema de audio que va acompañando a los manifestantes durante las marchas. La expresión agregada entre paréntesis por la autora busca referirse a la imbricación entre las acciones offline-online características de los movimientos de la Cultura Digital, es decir, alude al rol de la difusión, replicación y viralización de un mensaje en el ciberespacio.

⁹⁴ “Todos contra Monsanto, símbolo del agronegocio” entrevista a Jimena Romero. Recuperado de: <http://www.comambiental.com.ar/2013/05/todos-contra-monsanto-simbolo-del.html>

derechos humanos, a convocar mediante las redes sociales de Internet un acto en la Plaza San Martín frente a las puertas de la sede empresarial de Monsanto en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese entonces, todos los mayo de cada año #FueraMonsanto convoca a sumarse y protestar en consonancia a la gran jornada mundial. Otra estrategia de acción offline (espacio físico de la acción) son las asambleas que realiza todos los 25 de cada mes convocadas desde #Todoslos25hastaquesevayaMonsanto, funcionan mediante grupos de activismo y como espacio deliberativo y organizativo de futuras acciones, además de ser un momento de encuentro “cara a cara” entre los activistas y de convergencia entre diferentes organizaciones.

Si bien se manifiesta en ámbitos urbanos, su resistencia aúna las luchas que los pueblos cercanos a las zonas rurales vienen sobrellevando contra este modelo productivo, como se ha referenciado. Ha organizado movilizaciones en Malvinas Argentinas (Córdoba), Bahía Blanca, Rojas, Tucumán, Rawson, Godoy Cruz (Mendoza), Rosario, Calafate, Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), San Pedro (Misiones) y Resistencia, lugares donde la resistencia al agronegocio se liga a las luchas contra la minería a cielo abierto, las pasteras, los desmontes, los casos de gatillo fácil y el etnocidio que sufren los pueblos originarios y campesinos a diario. Las intervenciones en los territorios son previamente convocadas y circuladas en el espacio online (espacio digital de la acción) mediante Facebook y Twitter, y posteriormente testimoniadas y re-difundidas a través de estos canales virtuales, también Youtube, por prensa online y medios alternativos como el periódico MU de Lavaca⁹⁵ entre otros⁹⁶. También han llevado a cabo prácticas disruptivas de protesta como escraches, marchas performáticas y de alto contenido lúdico, festivales, volanteadas.

El colectivo se autodefine como: apartidario, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Los miembros entrevistados se reconocen como “un colectivo de autoconvocados organizado territorialmente mediante asambleas independientes, espacios en donde se deciden las actividades que se van a hacer y de qué manera”. La dinámica de las asambleas es mensual, cada mes los miembros se reúnen para organizar la actividad que van a llevar a cabo los días 25. Además, explican que cada provincia cuenta con su propia asamblea en donde se van tomando todas las decisiones. Luego, el soporte digital facilita la inmediata intercomunicación entre todas ellas, consiguiendo coordinar una misma acción simultánea de repudio, denuncia y lucha en diferentes puntos del país, de la región y del mundo.

Aquí merece hacer un paréntesis para comprender el lugar que ocupa el uso y la apropiación tecnológica⁹⁷ hecha por los activistas de este colectivo social. Internet en particular ha sido y es un

⁹⁵ Consultar en: <http://www.lavaca.org/>.

⁹⁶ Consultar en: <http://ecoscordoba.com.ar/>; <http://www.ecoportel.net/>; <https://argentina.indymedia.org/>; <http://www.rebellion.org/>; <http://www.matrizur.org/>; <http://renace.net/>; <http://www.rnma.org.ar/nv/index.php>.

⁹⁷ Por el concepto de *apropiación tecnológica* entendemos que “apropiarse no supondría solamente uso o consumo, sino también apropiarse del objeto tecnológico y de los significados que el objeto transfiere, posibilita o desencadena” (Lago Martínez, 2015: 275).

artefacto técnico que ha posibilitado la articulación de redes entre sus activistas. Para analizar este fenómeno, hay que tener en cuenta que desde finales del siglo XX y comienzos del XXI hasta la actualidad, se ha configurado una imbricación particular entre las prácticas sociales y las tecnologías propia de la Cultura Digital. Esta nueva cultura comprende el conjunto de técnicas materiales e intelectuales, de prácticas, modos de pensamiento y valores que se desarrollan en el ciberespacio -espacio online de comunicación creado a partir de la interconexión mundial de ordenadores- que se articulan y coexisten con las prácticas llevadas adelante en los territorios (Lago Martínez, 2012). Desde esta perspectiva la existencia de la cultura digital o cibercultura implica siempre un enlace entre las prácticas online y las offline de la acción. Este tipo de acciones pueden bien tratarse de aquellas que surgen en el ciberespacio y luego se trasladan a las calles, o de acciones colectivas preexistentes al ciberespacio que luego recurren a su uso. Lo destacable es que sea en uno u otro caso existe la combinación de ambos espacios, esto es porque ninguno termina disociándose del otro ya que conforman un continuum de la misma realidad que hace a la existencia de cultura digital de nuestros tiempos.

Esta cultura se ancla en el modo de desarrollo capitalista contemporáneo. La tecnología digital se ha convertido en eje de una nueva configuración social donde el conocimiento y la información desempeñan un papel central para la creación de valor, la circulación de bienes y saberes. Retomando aquí el análisis de Manuel Castells (1995), desde la década de 1970, producto del reordenamiento del sistema capitalista, prima un nuevo modo de desarrollo. Esto no quiere decir que los modos de desarrollo anteriores –agrario e industrial- hayan desaparecido, por supuesto que no, pero sí que en la actualidad es el informacional el que predomina: “en el modo informacional de desarrollo el conocimiento moviliza la generación de nuevo conocimiento como fuente clave de la productividad a través de su impacto sobre los otros elementos del proceso de producción, así como sobre sus relaciones” (p. 33). El desplazamiento hacia la mercantilización ejercida por Monsanto sobre la semilla mediante el patentamiento se enmarca dentro de este nuevo paradigma capitalista.

Ya a partir del nuevo milenio, la centralidad que las tecnologías digitales ocupan en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales tiene un anclaje en la construcción que han hecho los países más ricos del mundo, las Naciones Unidas, la OCDE, la Comunidad Europea y los sectores hegemónicos de los países del Tercer Mundo acerca del Proyecto de la Sociedad de la Información (Valderrama, 2012). Una consecuencia de este plan estratégico es que el conocimiento, la comunicación, la información y la construcción de significados desempeñan un rol vertebral en el ejercicio del poder, y también de su contraparte, el contrapoder. En relación a ello, Scott Lash (2005) señala que para entender a la sociedad de la información hay que tener en cuenta las

cualidades primarias de la propia información, siendo estas: el flujo, el desarraigo, la compresión espacial y temporal y las relaciones en tiempo real.

La revolución tecnológica del período mencionado ha generado un nuevo modelo de organización socio-técnica caracterizada fundamentalmente por la transformación de las dimensiones espacio-temporales de la vida humana. La ampliación de la penetración de las telecomunicaciones y la masificación del acceso a las tecnologías digitales ha producido cambios en las formas en que circulan los discursos, los saberes, las informaciones, los bienes y las formas en que se relacionan los sujetos. El mensaje y los símbolos contenidos en él cuando se transforman en bytes se convierten en “medios para” con la capacidad de proliferar. Circulan en el ciberespacio en forma de bytes, se comprimen, perdiendo en ese momento la clásica limitación espacial y temporal. Este proceso, a su vez, posibilita su replicabilidad veloz tendiente a un costo de 0 y transversal en todos los niveles territoriales hasta donde la Red llegue (local, regional, global). Internet, en especial, tiene la capacidad de transmitir rápidamente mensajes y de organizar una acción en común trascendiendo la relación ‘cara a cara’ propia del espacio físico. No obstante, no significa que estemos frente al fin de los encuentros presenciales, sino que el ciberespacio se convierte en un campo posibilitador para la socialización de imaginarios y para la organización de acciones colectivas deslocalizadas en tiempo real. En términos de Castells (2001), las relaciones sociales actualmente están atravesadas por las tecnologías de comunicación, e Internet es ya un medio de comunicación, de interacción y de organización social.

En diversas investigaciones que abordan la relación entre los movimientos sociales y las tecnologías digitales (Tilly, 2005; Valderrama, 2008; Castells, 2012; Lago Martínez et. al, 2006; Gendler, Lago Martínez y Méndez, 2015, entre otras) se observa que las principales características son: 1) la apropiación social de Internet, que combina el activismo en la calle con el activismo en el espacio virtual; 2) la nueva estética y culturización de la práctica política; 3) la vinculación de sus formas de acción directa y de representación a la idea de contra-información (cultural y política); 4) la multiplicidad de posiciones políticas e ideológicas; 5) las tecnologías digitales, en particular Internet, permiten expandir y visibilizar a los colectivos, pero también contribuyen fuertemente a la constitución y consolidación de las organizaciones, generando nuevas condiciones para el activismo social y político y la formación de movimientos sociales. Como una estrategia de resistencia, #FueraMonsanto funciona como espacio alternativo de denuncia de las empresas, los gobiernos y los medios corporativos que lo avalan, encubren, reproducen y sostienen, considerándose como un actor de contra-información en el sentido de asumir para sí el rol de informar y difundir sobre aquellas problemáticas y sucesos que los medios masivos de comunicación ignoran, ocultan o desinforman. Respecto a ello uno de los activistas responde que:

“... y principalmente medios comunitarios, redes sociales. Los medios masivos de comunicación la verdad que no hablan de esto, entonces recurrimos a este tipo de medios que sí les interesa esta problemática y que sí dicen la verdad de lo que está sucediendo: un envenenamiento masivo de la población. Pasa que en Clarín no vamos a escuchar que se hable de este problema y mucho menos vamos a escuchar en los medios oficialistas, porque ambos están en complicidad con Monsanto y con todas las corporaciones a fines, Syngenta, Bayer, Nidera, Dupont/Pioneer... son varias las que están, siempre hablamos de Monsanto porque es la punta de lanza de este problema, es la cara más visible y es quien controla el 90% del mercado de semillas transgénicas (...) en ocasiones hemos hablado en medios masivos porque hemos ido en el marco de una marcha a exigir que nos den aire en una campaña que hicimos con compañeros del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria, donde exigíamos a los medios que hablen, que cumplan con su rol social que deberían cumplir, o sea, contarle la verdad a la población y no lo que están haciendo, que es no solamente ocultar sino vender todo lo contrario, ellos están diciendo que Monsanto hace agricultura sustentable, que Monsanto trae trabajo, trae riqueza para el pueblo y sucede todo lo contrario (...) nosotros tratamos siempre de difundir la lucha de otros grupos como por ejemplo la Red de Médicos de Pueblos Fumigados que está haciendo un trabajo muy fuerte y que sufren también estas consecuencias; si bien son un montón de médicos que tienen un criterio muy fuerte y una información muy sólida, o sea, con estudios avalados por universidades y demás, no tienen espacios donde difundirlo”.

Para llevar adelante esta difusión alternativa a la que hace referencia el entrevistado, Internet resulta una tecnología fructuosa porque la transmisión del conocimiento se realiza autogestivamente, se disminuyen costos y tiempos en la comunicación y producción y al compartirse el mensaje se abre un espacio para la participación y el intercambio. Apropiarse del ciberespacio de esta manera favorece y facilita la independencia en y para la creación y transmisión de los contenidos a informar, a la par que potencia la vinculación entre la misma causa como entre múltiples causas coexistentes.

Visto el contexto informacional de nuestras sociedades, del que Argentina no está exenta⁹⁸, es central que colectivos socio-ambientales como #FueraMonsanto realicen la apropiación tecnológica.

98

Concretamente, si vemos los datos publicados por la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital de Argentina (2013), el 71% de los argentinos tiene PC, el 68% es usuario, el 65% se conecta a Internet y el 60% tiene conexión en su casa. Aquí se suma que el 24% de la población se conecta a Internet a través de los smartphones. Y con respecto a los contenidos que se consumen en Internet, las redes sociales se ubican primero con un 57% de usuarios, luego le siguen chequear e-mails (54%) e informarse a través de diarios (37%), medios alternativos (36%) y blogs (24%). Es importante destacar que los datos para la población de Buenos Aires -donde para este artículo se han recortado los casos empíricos- son muy superiores: la tenencia de PC y dispositivos inalámbricos están cerca de la cobertura total, y el acceso a Internet sube al 84 %. La ENCCyED fue realizada durante el primer semestre de 2013. Se aplicó a población de 12 años y más residente en localidades de más de 30.000 habitantes de todo el país. Se realizó a través de entrevistas domiciliarias y de aplicación personal, el formato adoptado fue semiestructurado, con predominio de preguntas cerradas, y la extensión alcanzó alrededor de 128 preguntas aproximadamente. El diseño muestral contempló la estratificación según las 6 regiones del país (AMBA, NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia). Al interior de cada estrato se realizó una selección aleatoria (con probabilidad proporcional al tamaño) de radios censales y manzanas de viviendas; la selección final del entrevistado al interior del hogar se realizó con cuotas de sexo y edad ajustadas a parámetros censales. El tamaño de la muestra fue de 3.574 casos efectivos, sobre un total de 3.600 casos planificados inicialmente.

La esfera tecnológica en Argentina con énfasis en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una importancia creciente en la sociabilización de los sujetos contemporáneos y en las prácticas de la vida cotidiana. Además, se está construyendo un imaginario social que valora a las computadoras, los dispositivos móviles y la conectividad como necesarias para el acceso al conocimiento y a las competencias escolares y laborales (Lago Martínez, 2015). #FueraMonsanto, claramente, no está al margen de esta mediatización y digitalización de la vida, influyendo en sus estrategias y formas organizativas, más aún cuando perciben que apropiarse de las tecnologías digitales resulta en la práctica concreta un elemento fundamental para contra-informar, generar conexiones territoriales y organizarse. Para obrar en pos de su objetivo social las tecnologías digitales son para el colectivo medios fundamentales. Tanto su expansión como sus estrategias organizativas, sus métodos de convocatoria, reclutamiento y difusión se encuentran mediados por las ellas (Méndez, 2014), con énfasis de Internet ya que se ha convertido en el soporte interactivo para construir una red de redes y trascender los canales de comunicación tradicionales donde la temática aún se encuentra expulsada. En este caso, el ciberespacio como escenario para la divulgación de información juega un papel muy importante, ya que ésta es considerada como una de las estrategias principales de combate para resistir la implantación del capitalismo extractivista. Retomando un planteo previo en el estudio este caso:

Sin la existencia de Internet, este movimiento no hubiera logrado la coordinación de acciones conjuntas en las escalas locales, regionales y globales. Tampoco tendría el poder de difusión y convocatoria que hoy está adquiriendo tras el uso de las redes virtuales y su web. No obstante, con esto no queremos decir que las tecnologías digitales y de comunicación determinan el accionar de un movimiento, sino que es a partir del modo en que dichas tecnologías son comprendidas y aprehendidas por el movimiento y los actores sociales, lo que genera su eficacia para poner en marcha y construir colectivamente alternativas hacia otro sistema (ibídem, 2014: 17).

Como colectivo socio-ambiental ambientalista, #FueraMonsanto se caracteriza por su fuerte anclaje en la disputa territorial, pero al mismo tiempo y como expresión de origen en la cultura digital, sus estrategias se encuentran atravesadas por su apropiación tecnológica.

¿Germinando prácticas autonómicas?

Según el análisis realizado hasta el momento surge el siguiente interrogante: ¿las acciones de resistencia al agronegocio de #FueraMonsanto en Argentina construyen prácticas autonómicas?

Se puede pensar que, en el contexto de este proceso de resistencia, los actores habilitan espacios de autonomía en el momento que tensionan el fundamento de la heteronomía instituida del modelo

económico, político, histórico y social que sostiene al proyecto de Monsanto. En este sentido, es factible preguntarse: si los espacios de autonomía podrían surgir a partir del cuestionamiento al discurso presentado por la empresa y los actores del Estado, y de qué manera la apropiación tecnológica ha colaborado para que el proceso se ponga en marcha. Si las construcciones y motivaciones significativas son causa para que nazcan prácticas hacia el proyecto autonómico de la sociedad. O también, si la deslegitimación de Monsanto en los procesos de resistencia como el bloqueo, las marchas urbanas, las difusiones online, han sido resultado de un proceso autoreflexivo sobre las consecuencias del desenvolvimiento de la planta Monsanto y las implicaciones del accionar de la transnacional a nivel local y mundial también.

A su vez, considerando las estrategias para resistir el avance de la construcción de la planta (bloqueo, acampe, unión ante los abruptos intentos de desalojo, asambleas, marchas, festivales convocados), sería importante detectar si han resultado ser espacios de acción colectiva idóneos para instituir prácticas autonómicas entre vecinos y organizaciones. Y si la puesta en duda de esta heteronomía ha contribuido a germinar la construcción de la *identidad colectiva Fuera Monsanto* como un contrapoder con potencialidad de transformar la formación social instituida y las significaciones imaginarias en el que ésta se fundamenta.

Otro aspecto es dar cuenta de las características que asume la reterritorialización en este caso, para identificar reconstrucciones identidades y lazos sociales perdurables en el tiempo que gesten acciones autónomas y formas alternativas de pensar, producir y habitar más cercanas a los intereses colectivos.

Una última cuestión relacionada con los interrogantes postulados, es si a partir de las formas alternativas de producir alimentos, de promover la construcción deliberativa de las normas y de reactivar prácticas políticas como las asambleas y la organización horizontal entre pares, la experiencia de #FueraMonsanto está creando un nuevo sujeto de autonomía capaz de movilizar el imaginario radical y producir la ruptura con la heteronomía instituida.

La apertura hacia estos ejes de indagación acerca de la construcción de autonomía en colectivos tan recientes como es #FueraMonsanto, busca ir configurando otra trama conceptual para pensar las acciones colectivas y las identidades que surgen en estos novedosos procesos socio-ambientales imbricados en prácticas propias de la joven cultura digital. Uno de los objetivos de estudio es detectar las perspectivas alternativas que vienen a proponer estos actores emergentes sobre la compleja dinámica que se da *cada vez* entre la sociedad y el ambiente.

Bibliografía

Acosta, Alberto y **Machado**, Decio (2012) “Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismo y conflictos actuales en América Latina”, en *Revista OSAL*, Año XIII, N° 32, pp. 67-94.

Barri, Fernando (2013). “Resistencia comunitaria de los pueblos fumigados en Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M (coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la economía argentina?* Buenos Aires, Antropofagia.

Barruti, Soledad (2013). *MalComidos. Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando*, Buenos Aires, Editorial Planeta.

Brailovsky, Antonio y **Foguelman**, Dina (2006). *Historia Ecológica de Iberoamérica*. Ed. Le Monde Diplomatique/Kaicron, Buenos Aires.

----- (2011). *Memoria Verde. Historia Ecológica de la Argentina*. 10a ed. - Delbolsillo, Buenos Aires.

Castells, Manuel (1995). Capítulo 1 “El modo de desarrollo informacional y la reestructuración del capitalismo”, en *La ciudad informacional. Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional*. Alianza, Madrid.

----- (1999). Capítulo 3 "El reverdecimiento del yo", en *La era de la información. En Vol II El poder de la identidad*. Siglo XXI, México.

----- (2001). *Internet y la Sociedad Red*. Lección inaugural del Programa de doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, España. Obtenido el 22 de febrero de 2016 (<http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/106.pdf>)

----- (2012) *Redes de indignación y esperanza*. Ed. Alianza. Madrid.

Castoriadis, Cornelius (1980) “El mito del Desarrollo”, en *Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad*, Varios Autores. Buenos Aires. Editorial Kairos.

----- (1993). *La institución imaginaria de la sociedad*. Vol. 1. 2a ed. – Tusquets Editores, Buenos Aires.

----- (2008). “Poder, política, autonomía” en *El mundo fragmentado*, Terramar Ediciones, Buenos Aires (pp 87-114).

Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital (2013). Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), Dirección Nacional de Industrias Culturales, Buenos Aires, Argentina.

Gendler, Martín; **Lago Martínez**, Silvia; **Méndez**, Anahí (2015). “Tecnologías digitales y activismo político: ¿un encuentro indispensable?”, en *Acta académica: XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*. ISBN 978-9968-9502-4-4.

Giarracca, Norma y **Teubal**, Miguel (2008). “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: el caso argentino”, en Mançano Fernández, B. (Coord.) *Campesinado y Agronegocios en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO-ASDI.

----- (2013). “Las actividades extractivas en la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M (coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la economía argentina?* Buenos Aires, Antropofagia.

Giarracca, Norma y **Palmisano**, Tomás (2013). “Tres lógicas de producción de alimentos: ¿Hay alternativas al agronegocio?” en Giarracca, N. y Teubal, M (coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la economía argentina?* Buenos Aires, Antropofagia.

Harvey, David. (2004). “El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión”, en *The New Imperial Challenge*, Socialist Register. Traducido por Ruth Fólger.

Hernández, Facundo Martín (2016) “Contribuciones para el estudio de los movimientos sociales en defensa del medio ambiente” en *Apuntes de investigación del CECYP*, N° 27, pp- 218-232. ISSN 0329-2142/ISSNe 1851-9814.

Hernández, Valeria (2009). “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas” en Gras, Carla y Hernández, Valeria. *La Argentina rural*. Buenos Aires: Biblos.

Lago Martínez, Silvia; **Marotias**, Ana y Laura; **Movia**, Guillermo (2006). *Internet y Lucha Política: los movimientos sociales en la red*. Capital Intelectual, Buenos Aires.

Lago Martínez, Silvia (2012). “Comunicación, arte y cultura en la era digital” en *Ciberespacio y Resistencias. Exploración en la cultura digital*. Buenos Aires. Ed. Hekht Libros.

----- (2015). “Los jóvenes, las tecnologías y la escuela”, en *De Tecnologías digitales, educación formal y políticas públicas*. Editorial Teseo, Buenos Aires.

Lash, Scott (2005). *Crítica de la información*. Amorrortu, Madrid.

Méndez, Anahí (2014). “Internet y movimientos en red socio-ambientales. Una aproximación a la red Millones Contra Monsanto y la resistencia al agronegocio”. Actas digitales VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, pp. 1-17. ISSN 2250-8465.

MU el periódico de LaVaca. “Andate al diablo. El acampe que frenó a Monsanto”, noviembre 2013, Año 7, Número 71, Páginas 8 a 13.

MU el periódico de LaVaca “Plantar el futuro. El acampe contra Monsanto cumple un año”, agosto 2014, Año 8, Número 79, Páginas 4 a 7.

Perelmuter, Tamara (2013). “El rol de la propiedad intelectual en los actuales procesos de cercamientos. El caso de las semillas en la Argentina” en Giarracca, N. y Teubal, M (coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la economía argentina?* Buenos Aires, Antropofagia.

Reboratti, Carlos (2012). *Ambiente y Sociedad: conflictos y relaciones*. Prohistoria Ediciones, Rosario.

Revilla Blanco, Marisa (2010). “América Latina y los movimientos sociales: el presente de la «rebelión del coro»” en *Nueva Sociedad*, N° 227. Mayo-Junio. ISSN: 0251-3552.

Sassen, Saskia (2007). *Una sociología de la globalización*, Buenos Aires, Katz Editores.

Seoane, José. (2013). “Modelo extractivo y acumulación por despojo”, en *Extractivismo, Despojo y Crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*, Buenos Aires, Ed. Herramienta, El Colectivo.

Svampa, Maristella y **Antonelli**, Mirta A. (2010). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. 2ª ed. Biblos. Buenos Aires.

Svampa, Maristella (2012a). “3. Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina” y “4. La disputa por el desarrollo: territorios y lenguajes de valoración” en *Cambio de época: movimientos sociales y poder político*. 1 ed.- Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

----- (2012b) “Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina” en *Revista OSAL*, Año XIII, N° 32, pp. 15-38.

Tilly, Charles y **Wood** Lesley (2009). Capítulo 5 “Los movimientos sociales entran en el siglo XXI”, en *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Crítica: Barcelona.

Teubal, Miguel y **Palmisano**, Tomás (2012). “Acumulación por desposesión y la colonialidad del poder en América Latina” en *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina*, (Massuh, Gabriela Editora), Editorial Mardulce; Buenos Aires, p. 131-156, ISBN: 978-987-26965-8-0.

Valderrama, Carlos (2008). “Movimientos sociales: TIC y prácticas políticas”. *Revista Nómadas*, N° 28, IESCO, Bogotá.

----- (2012). “Sociedad de la Información: hegemonía, reduccionismos tecnológicos y resistencias”, en *Revista Nómadas*, N° 36, IESCO. Bogotá.

Zibechi, Raúl (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” en *Revista OSAL*, N° 9, CLACSO, Buenos Aires.

De Território de Liberdade a território de exploração: caminho percorrido pelos camponeses do Município de São Miguel de Taipu/PB/Brasil até a conquista do território de esperança

Rayssa de Lyra Lisboa

Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Geografia/ UFPB

rayssalisboageo@gmail.com

Emília de Rodat Fernandes Moreira

Professora Titular do Departamento de Geociências/ UFPB

André Paulo do Nascimento

Bolsista de Programa de Extensão/UFPB

andrepaulo@outlook.com

Introdução

O presente artigo trata de uma pesquisa analítico descritiva e tem por objetivo analisar o processo de transformação do espaço agrário do município de São Miguel de Taipu a partir das lutas camponesas que ali eclodiram.

Para tanto, destacamos que as lutas camponesas contemporâneas trazem traços históricos do principal movimento camponês que atuou no Nordeste brasileiro, as Ligas Camponesas. Foi a atuação das Ligas Camponesas ainda na década de 1960 que permitiu que os camponeses da região nordeste denunciasses para o mundo a situação de exploração que os camponeses estavam submetidos pelo julgo do latifúndio.

No município de São Miguel de Taipu embora não tenhamos constatado uma atuação veemente desse movimento, devido a uma ação patronal mais violenta, identificamos que a classe camponesa do município passou por um processo de territorialização – desterritorialização – reterritorialização que segundo Fernandes (2004), compreende o processo de conflitualidade entre a classe camponesa e o capital no campo brasileiro.

Na busca pela construção de territorialidades camponesas em um território dominado pela ação do capital, os camponeses desenvolveram estratégias de luta e de resistência para conquistar frações desse território capitalista.

Fruto da luta camponesa no município de São Miguel de Taipu foram criados seis assentamentos rurais, provenientes da desapropriação total ou parcial dos quatro principais

latifúndios que existiam no município, proporcionando a reterritorialização camponesa e a criação de territórios de esperança.

Território e Territorialidade

A discussão sobre o território na Geografia é antiga, remonta ao século XIX quando Ratzel através da sua concepção de espaço vital construiu uma teoria sobre esse conceito. Não pretendemos na pesquisa retomar essa discussão conceitual e nem analisá-la enquanto categoria da ciência geográfica.

Porém, sabemos que a compreensão da categoria geográfica território é de suma importância para análise do nosso objeto de estudo. Buscando a sua definição conceitual, nos apoiaremos nos escritos dos geógrafos Claude Raffestin e Bernardo Mançano Fernandes, por julgarmos dão suporte necessário a essa pesquisa.

Para Raffestin (1980) o território se configura como a porção do espaço apropriada pelo homem, portanto, a sua prisão original, a “prisão que os homens constroem para si” (p.144). A apropriação dessa porção do espaço, que representa o território, ocorre concreta ou abstratamente mediante as intenções de apropriação ou do trabalho, revelando as relações de poder.

Uma porção resultante de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator “territorializa” o espaço. (...). O território, nesta perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação e que por consequência revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens constroem para si (p. 143/144).

O território é caracterizado por relações de poder que ocorrem em uma dada porção do espaço. Essas relações se exprimem através de um conflito de classes onde uma classe tenta se apropriar de alguma porção do espaço dominada e apropriada por uma classe antagônica.

No campo, a conflitualidade entre classes sociais diferentes é representada pela classe dos proprietários capitalistas e dos camponeses.

O conceito de território cunhado por Fernandes (2006) se aplica bem a essa realidade. Para ele o território é o “espaço político por excelência, campo de ação e de poder, onde se realizam determinadas relações sociais”, sendo fundamental para “compreender os enfrentamentos entre agricultura camponesa e agronegócio, já que ambos projetam distintos territórios” (p. 53/54). São, portanto, os territórios produzidos por classes antagônicas que refletem a sua gênese contraditória.

Essa conflitualidade proporciona transformações na paisagem devido as diferentes intencionalidades das classes envolvidas no processo de formação territorial, e posteriormente de disputa territorial. Por esse motivo, no campo brasileiro os conflitos entre o campesinato e o

agronegócio são evidentes, pois, a lógica de organização da produção de ambos são distintas, onde o primeiro organiza a sua produção para o abastecimento familiar e o segundo sobre a lógica exacerbada do lucro.

Assim, a identidade expressa em um dado território vai depender dos interesses da classe que ali se territorializou, constituindo assim territorialidades diferentes.

A territorialidade se constitui a partir das relações existenciais e de produção expressas no interior de um território. A luta pela construção de territorialidades camponesas está diretamente associada à disputa territorial entre as classes antagônicas e com interesses distintos.

No Nordeste brasileiro a luta histórica pela construção da territorialidade camponesa teve maior visibilidade a partir da criação das Ligas Camponesas, que proporcionou a organização camponesa na luta por duas bandeiras: a do fim do cambão e da realização da reforma agrária. A atuação das Ligas mostrou para sociedade a configuração da exploração a qual o homem do campo estava submetido, e ao mesmo tempo permitiu a tomada de consciência política desses sujeitos frente à situação de exploração a qual estavam submetidos em um território caracterizado pela territorialidade do latifúndio canavieiro.

As Ligas Camponesas – O principal movimento camponês do Nordeste do Brasil

As primeiras Ligas Camponesas surgiram na década de 1940, articuladas ao Partido Comunista do Brasil em um contexto de redemocratização após o período ditatorial do governo Vargas. As ações do PCB junto às massas rurais e operários urbanos promoveu a criação de Ligas em quase todos os estados do Brasil. Segundo Stédille (2006) nesse período o Partido era a única forma de organização que se dedicava a classe camponesa. Os interesses das demais organizações políticas estavam associados a manejos eleitorais para a manutenção do poder político latifundiário.

Nesse caminho operaram os ativistas do Partido Comunista, realizando entre 1945 e 1947, uma grande e organizada mobilização de trabalhadores entre 1945 e 1947, uma grande e organizada mobilização de trabalhadores agrícolas em quase todos os estados brasileiros. Fundaram-se, então, centenas de Ligas Camponesas, que reuniram milhares e milhares de pessoas. Os êxitos alcançados foram de tal importância que nem os elevados índices de analfabetismo do meio rural impediram a eleição de considerável número de representantes comunistas para as assembleias estaduais e municipais, com a grande contribuição da votação camponesa (STÉDILLE, 2006, p.22).

As Ligas funcionavam com uma estrutura organizativa totalmente associada ao PCB, não tendo líderes regionais ou locais, o líder geral era o mesmo do PCB, Luiz Carlos Prestes. Essas Ligas tiveram vida curta, já que em 1947 o PCB entrou em ilegalidade. O ascendente governo Dutra

desarticulou as lutas camponesas e acentuou a repressão policial no campo brasileiro. Sem apoio, as lutas no campo se arrefeceram, tendo alguns posseiros desenvolvido ações em localidades isoladas (STÉDILLE, 2006).

A partir de 1955 com a abertura democrática proporcionada pela eleição de Juscelino Kubitschek as Ligas Camponesas voltaram a se articular. Ressurgidas no estado de Pernambuco no município de Vitória de Santo Antão, as novas Ligas Camponesas não estavam vinculadas ao PCB, mas herdaram algumas características dessas. Munidos do desejo de enfrentar a classe latifundiária os camponeses fundaram Ligas em vários estados do Brasil, tendo maior expressividade na região Nordeste.

A primeira Liga Camponesa surgiu no Engenho Galileia, propriedade cuja exploração se dava por meio do arrendamento de terra aos camponeses sem terra. Descontentes com o valor da renda da terra cobrado pelo proprietário, os arrendatários e foreiros que viviam e trabalhavam na propriedade, tentavam impedir a expulsão dos camponeses em débito com o proprietário.

Foi o descontentamento dos foreiros frente à situação de exploração a qual estavam submetidos que os levou a organizar Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, que mais tarde ficaria conhecida como Liga Camponesa de Galileia ou “Liga Mãe”. A associação se configurou primeiramente como uma sociedade civil de cunho beneficente, onde as reivindicações se baseavam na luta pelo funeral digno de seus associados, construção de escolas e assistência médica e jurídica (AZEVEDO, 1982).

A atuação dos camponeses de Galiléia foi duramente reprimida pelo proprietário do engenho e pelos demais mobilizados por este, além da corriqueira ação policial. Nesse exato instante, tem início a longa resistência dos foreiros do Engenho Galiléia, que se negam, não só a desistir da SAPP, como não aceitam o aumento do foro, nem a ordem sumária de despejo do proprietário. A partir daí, as pressões tornam-se mais fortes, com a invasão repetida do engenho por destacamentos policiais, que procuram intimidar os foreiros e expulsá-los de Galiléia (AZEVEDO, 1982, p. 61).

Em contrapartida, os camponeses encontraram na cidade o apoio político necessário para ampliar a atuação das Ligas Camponesas no Brasil, mas, sobretudo no Nordeste. O deputado e advogado Francisco Julião de Paula filiado ao Partido Socialista Brasileiro, foi a figura que diante de sua ação junto aos camponeses se tornou presidente de honra das Ligas representando-a a nível nacional.

Francisco Julião foi o responsável por conquistar camponeses para se juntar a Liga. Através da estratégia pedagógica e da paciência desempenhada pelo seu líder, as Ligas conquistaram camponeses em quase todos os estados do Brasil, entre 1950 e 1960.

Azevêdo (1982) aponta que existiam no ano de 1963 Ligas em 18 dos 22 estados brasileiros, sendo Pernambuco o estado que tinha maior número de Ligas organizadas, totalizando 218. Ao denunciar

a sociedade as miseráveis condições de vida que viviam os camponeses as Ligas Camponesas tomaram visibilidade nacional e internacional.

As Ligas Camponesas proporcionou aos trabalhadores maior respaldo para lutar pelo fim das injustiças que assolavam o campo, caracterizando como a maior forma de resistência camponesa neste período. A organização junto as Ligas permitia que as denúncias fossem ouvidas para além do território dos engenhos, alcançando toda a sociedade.

As reivindicações das Ligas ultrapassavam aquelas pelos direitos trabalhistas dos foreiros, moradores, parceiros, a luta não era apenas pela manutenção dos sítios, dos roçados, dos pagamentos e/ou indenizações das benfeitorias. Os trabalhadores travavam uma luta na esfera civil, reivindicando as leis que regulavam o direito a propriedade (AZEVEDO, 1982).

A ação proposta pelo camponês é em regra, a da indenização por benfeitoria. Quem mais se interessa pela demanda é o próprio camponês. Ele quer ficar na terra ou obter o pagamento de suas benfeitorias. Às audiências, já não comparece só. Leva outros companheiros. O camponês sabe que pode perder a causa ou ter vitória inexpressiva, mas contenta-se em arrastar ao pretório o senhor da terra. É a sua vingança (AZEVEDO, 1982, p.82).

Nesse sentido, a Liga representava para os camponeses uma forma de organização mais ampliada, com uma representação jurídica mais forte, com total apoio dos advogados que lutavam para defender suas causas.

Nem todas as ações propostas por camponeses teve parecer favorável a eles, porém, a chegada de uma ação até os tribunais significava muito para os camponeses, que pela primeira vez, tinham a possibilidade serem tratados com “iguais”⁹⁹ diante de um conflito.

Os novos moldes assumidos pelas lutas camponesas a partir das ações das Ligas Camponesas foi um grande avanço, porque sozinhos, os camponeses lutavam de forma desleal, já que os latifundiários tinham em seu favor a polícia local que imprimia barbaridades na busca pela manutenção do poder e do território dos proprietários.

Embora as Ligas tenham se empenhado na luta pela solução dos problemas dos camponeses, se esbarravam nas limitações trabalhistas, já que a Consolidação das Leis do Trabalho tinha suas leis destinadas aos trabalhadores e operários da cidade, dificultando a solução dos conflitos do campo.

Nesse momento, as Ligas mudaram sua tática de ação, priorizando a organização camponesa em detrimento da luta judicial (AZEVEDO, 1982). A mudança de tática buscou a organização dos arrendatários e dos colonos na busca pela fixação na terra, estratégias para a luta pela realização da reforma agrária.

⁹⁹ Teoricamente a justiça deveria julgar as partes em pé de igualdade, no entanto, o Poder Judiciário, em muitos casos era corrompido pelos poder dos latifundiários, o que dificultava ganho de causa por parte dos camponeses.

Nos primeiros anos da década de 1960 as Ligas tomaram corpo, se transformando “no fantasma que rondaria os campos, agitando a velha ordem estabelecida e ameaçando, com o espectro da reforma agrária radical, o monopólio da terra e o poder das oligarquias e da burguesia industrial” (AZEVEDO, 1982, p. 85). Ao passo que as Ligas intensificavam suas ações as oligarquias rurais responderam com resistência e violência, práticas comuns a essa classe.

Stédille (2006) diz que as Ligas tiveram seu apogeu nos primeiros meses de 1964 organizando Ligas em vários estados do Brasil, que juntas somavam entre 70 e 80 mil associados. Uma grande representatividade, considerando que seu período de expansão se deu entre 1960 e 1964.

Em 1964 com o Golpe Militar instaurado no Brasil, as Ligas Camponesas foram totalmente desarticuladas, tendo parte de suas lideranças assassinadas, ou passado a viver na ilegalidade, temendo pelas represálias dos violentos governos militares.

As Ligas Camponesas foi o maior movimento camponês nesse período, sendo capaz de organizar milhares de trabalhadores em torno de uma luta, a da reforma agrária, denunciando para a sociedade as formas de exploração a qual eram submetidos e a violência com que os proprietários tratavam os moradores, foreiros, rendeiros. Foi o movimento que conseguiu articular os trabalhadores proporcionando a eles uma maior articulação, mostrando que a luta individual era bem mais difícil, mas que a luta organizada era capaz de garantir alguns frutos.

Embora tenham sido desarticuladas, as Ligas serviram de exemplo para os movimentos camponeses que foram posteriormente gestados no Brasil.

No item seguinte, apresentaremos a forma como as Ligas Camponesas se organizaram na Paraíba.

Atuação das Ligas Camponesas na Zona da Mata da Paraíba

A Paraíba foi palco do protagonismo das principais Ligas Camponesas do Brasil, com destaque para as Ligas de Sapé com 13 mil associados e Mamanguape com 10 mil associados. A dimensão alcançada pelas Ligas levou Stédille (2006) caracterizá-la como um movimento camponês, pelo fato de terem conseguido agregar um elevado número de trabalhadores, mesmo diante de tantas dificuldades, o que relevava que o nível exploração era alto e que por esse motivo despertava o interesse de muitos.

A Liga foi, portanto, o movimento que possibilitou aos camponeses a voz da denúncia diante da elevada exploração vivida pelos trabalhadores do campo. Parafraseando Moreira, Targino et al (2011) as Ligas Camponesas representaram a explosão pública da revolta latente entre os camponeses.

Moreira, Targino et al (2011) acrescentam que a intensidade do crescimento quantitativo dos participantes e a expansão geográfica e política das Ligas podem também ser entendidas como a expressão de uma consciência da exploração presente entre os camponeses, que até a criação das Ligas não havia tido a oportunidade de se expressar.

Na Paraíba a organização camponesa se deu inicialmente através da criação da Liga de Sapé, a primeira do estado, liderada por João Pedro Teixeira¹⁰⁰ em meados de 1954. A Liga que não possuía sede própria reunia os camponeses na casa do líder João Pedro, motivo que facilitou a ação dos latifundiários da região e da polícia que posteriormente conseguiu desarticula-la.

Em Sapé as reuniões eram muito visadas. A gente saía e ia ter aquele encontro na casa de um companheiro. Só a gente era quem sabia. [...] A gente se deslocava e tinha aquela reunião. [...] A gente marcava um dia para visitar um camponês numa zona rural e convidava outros. E assim a gente ia fazendo o movimento até que ele cresceu (apud VAN HAM, 2006, p. 53).

O vigário da cidade de Sapé no período de criação das Ligas, monsenhor Odilon Pedrosa, mostra em depoimento quais eram os planos e as reivindicações da Liga de Sapé.

O movimento das ligas camponesas, na Paraíba, aqui surgiu. Sapé tornou-se o quartel general do movimento. A situação em parte da região da várzea, a condição de maior conglomerado industrial do estado, a existência de latifúndios, a monocultura da cana-de-açúcar faziam com que Sapé apresentasse vantagens para sediar o movimento que visava, nos seus planos, à libertação dos trabalhadores rurais. O povo unido e gritando na praça pública assustava a burguesia e os grandes proprietários da terra [...]. Ninguém, em sã consciência, poderia pôr em dúvida a existência de sementes de justiça das demandas. Pelejavam por uma causa justa. Intentava-se corrigir uma situação de miséria. Trabalhadores rurais sofriam aperturas. Mal remunerados, moradia precária, sem terra para plantar. Sem instrumentos legais que os alentasse com a esperança de dias mais seguros e tranquilos (apud VAN HAM, 2006, p. 339).

Após a sua desarticulação, a Liga de Sapé ressurgiu em 1958 com sede na zona urbana, desta vez como o nome de Associação (Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé), tendo a mudança de local inserido o movimento na legalidade burguesa (AUED, 1986). A autora acrescenta que a mudança foi necessária para que a sociedade enxergasse o movimento que era considerado “coisa de comunista” com outros olhos, entendendo que o movimento era reivindicador e lutava pelos direitos da classe camponesa.

¹⁰⁰ Ao lado de João Pedro Teixeira, no trabalho de organização e de propagação do movimento, estava as figuras de Pedro Inácio de Araújo, que ficou conhecido como Pedro Fazendeiro, Alfredo Nascimento e João Alfredo Dias, conhecido, que ficou conhecido como Nêgo Fuba (Moreira, Targino e Menezes, 2011).

Esta mudança fortaleceu muito o movimento embrionário que, já a partir de sua primeira reunião, mobilizou a imprensa e a opinião pública (para acompanhar a iniciativa). Por ter em mira, fundamentalmente, o propósito de trilhar caminhos da legalidade, é que foram convidados, para o primeiro evento, o Juiz de Sapé, o Padre, o médico, o Chefe de Polícia e sua instalação se deu na própria sede da Prefeitura Municipal de Sapé – Pb (AEUD,1986).

A Associação dos Lavradores e Trabalhadores Rurais de Sapé teve dois grandes momentos: a mudança para cidade e o assassinato de seu líder João Pedro Teixeira em 1962, momento em que a viúva do assassinado, Elizabeth Teixeira assumiu a liderança do movimento.

Estima-se que em 1963 a Liga de Sapé¹⁰¹ tinha 10 mil associados, sendo considerada a mais poderosa do Brasil, alcançando posteriormente 13 mil associados. O que implica dizer que o assassinato de João Pedro Teixeira não desmobilizou a luta camponesa, tendo inclusive aumentado o número de sócios após o fato.

Moreira, Targino, et al (2011) mostra que após a criação da Liga de Sapé, foi necessário construir estratégias de ação:

Realização de passeatas, ferramenta importante para atrair os trabalhadores; Apoio dos trabalhadores ameaçados de expulsão das propriedades, importante para dar sustentação ao movimento; Luta contra o cambão, a bandeira mais importante dos primeiros anos de atuação das Ligas; Assistência jurídica aos camponeses, importante para os trabalhadores adquirirem confiança no movimento; Disponibilização de serviços de saúde, que era praticamente inexistente para população rural; Combate ao analfabetismo, para levar o movimento a participar do processo eleitoral; Luta pela reforma agrária, presente no ideário da Liga desde a sua criação. Luta pelos direitos trabalhistas e pela sindicalização, uma das principais pautas de reivindicações dos trabalhadores rurais. Procura por apoio externo, mecanismo fundamental para dar apoio ao movimento (MOREIRA, TARGINO, ET AL, 2011, s/p).

Pessoa (2015) destaca que o sucesso alcançado pela Liga de Sapé se deu justamente pela sua articulação com outros setores da sociedade, como estudantes, parte da imprensa local, organizações sindicais urbanas, setores da esquerda, e até mesmo figuras da classe média.

Nunes (2014) corrobora e acrescenta que:

As Ligas espalharam-se rapidamente por várias cidades do Estado, atingindo um total de 15 entidades, com cerca de 40 mil sócios. A Liga de Sapé foi a maior do Brasil, chegando a contar com 13.000 mil membros, seguida de Mamanguape com 10.000 mil membros, apesar de toda repressão

¹⁰¹ A Liga de Sapé foi a maior do estado da Paraíba. No entanto, outras ligas foram criadas em diversas cidades e fazenda do estado, a exemplo de Alhandra, Fazenda Miriri, Guarabira, Mulungu, Campina Grande, Belém, Pedras de Fogo, Oitizeiro, Itapororoca, Várzea Nova, Itabaiana e Mamanguape (AUED, 1986).

do bloco agroindustrial. Começaram a ser estabelecidas relações entre o campesinato paraibano e o mundo urbano da Capital, passando a Liga a receber apoio de parte da imprensa, de parlamentares progressistas, da Frente de Mobilização Popular, do Centro de Educação Popular, de segmentos da Igreja, de estudantes e até de elementos liberais da classe média (NUNES, 2014, p. 84).

Destaca-se que em regiões onde as oligarquias latifundiárias eram muito bem articuladas a criação de Ligas foi bem mais difícil, a exemplo, dos municípios de Pilar e Itabaiana onde além de possuidores de grande quantidade de terra, os latifundiários detinham o controle das centenas de trabalhadores que viviam em suas propriedades, desempenhando contra eles atos de repressão e violência (AZEVEDO, 1982).

Em Itabaiana foi muito difícil implantar a Associação. Nesta região, assim como na de Pilar, havia propriedades do grupo mais conservador da Paraíba, e que no dizer de um morador “só entende relações com camponeses em termos de violência, de despejo”. Sobre este grupo dizia-se também que ele se superava os demais não pela quantidade de terra, nem pelo número de trabalhadores, mas pela violenta reação contra os camponeses: cercava a casa dos sócios das Ligas, tomava a carteira da Liga, espancava (AUED, 1986 p.34).

As Ligas que surgiram como sociedades beneficentes, logo se caracterizaram como um movimento camponês reivindicador de direitos. Na Paraíba a organização dos trabalhadores gerou revolta entre os latifundiários do estado, que como forma de impedir a luta dos camponeses reagiu com muita violência.

Nunes (2014) diz que as ameaças ocorriam desde repressões “sutis” à violências físicas extremas, na tentativa de desmobilizar os camponeses em luta.

A criação das Ligas Camponesas na Paraíba gerou uma violenta reação de parte dos grandes proprietários. Não satisfeitos com a “petulância” dos camponeses, que ousavam se organizar para lutar por seus direitos, reagiram de forma mais violenta do que a usual no trato dos camponeses, usando a repressão e a violência contra as manifestações. Os latifundiários usaram dois métodos para intimidar os camponeses. Apelaram tanto para argumentos “sutis” de persuasão, tais como: a ameaça de expulsão das terras, agressões e de morte, cooptação de lideranças e sua transferência para outras regiões; intimidação através da realização de manobras militares em área de conflito, como para uso da violência, sob diversas formas, espancamentos, invasão e destruição das residências, prisões irregulares e, por fim, assassinatos de lideranças. Também, tornou-se comum a criação de milícias particulares, fortemente armadas, no interior das propriedades, em áreas socialmente críticas (NUNES, 2014, p. 84/85).

Por vezes, os camponeses respondiam a violência empregada pelos latifundiários e seus capangas, enfrentando-os de forma direta. Mas, a repressão dos latifundiários se deu também de forma organizada, a criação da Associação dos Proprietários Rurais e o Grupo da Várzea¹⁰² foi um exemplo disso. Esses grupos representavam a elite latifundiária paraibana, com uma visão extremamente conservadora. A organização dos proprietários buscava reprimir as Ligas e seus associados na tentativa de desarticula-las.

Na medida em que as ligas camponesas se expandiam e revelavam o seu poder de mobilização, foi se organizando também a reação do latifúndio. Com efeito, o poder dos senhores de terra que permaneceu praticamente intocado desde o início da colonização não podia assistir passivamente a essa crescente contestação à ordem secularmente estabelecida. Era preciso acabar com as ligas! As tentativas de eliminar as ligas assumiram diferentes feições, indo desde o convencimento no âmbito familiar até a repressão generalizada quando do golpe militar de 1964 (MOREIRA, TARGINO et al, 2011, s/p).

A ação violenta da classe latifundiária da região de Sapé contra a ação das Ligas pôde ser percebida também quando um Quartel de Polícia foi instalado na cidade, cujo maior objetivo era desmontar a Liga através da prisão de seus líderes. Esse fato reflete também o poder que tinham os latifundiários, evidenciando a subordinação do poder político e policial aos ditames da oligarquia açucareira (MOREIRA, TARGINO, et al, 2011).

A dura repressão revelada pelos proprietários aos camponeses se amplia com o Golpe Militar de 1964 quando um período ditatorial proporciona aos latifundiários um período de “paz” no campo, tendo em vista que as vozes dos milhares de camponeses em luta por melhores condições de vida foram caladas.

As principais lideranças foram presas: Assis Lemos, Elizabeth Teixeira, Pedro Fazendeiro, João Alfredo Dias, Ofélia Amorim, Antonio Fernandes (prefeito e dirigente da Liga de Rio Tinto) e tantos outros, que direta ou indiretamente estavam envolvidos com as ligas camponesas (LEMOS, 2008; RAMOS, 1989; BENEVIDES, 1985; MACHADO, 1991).

A instalação da ditadura desmontou o movimento camponês que, permaneceu por muitos sem nenhuma expressividade.

¹⁰² Na região de Sapé havia uma organização formada pelos grandes proprietários cujas propriedades situavam-se ao longo do Rio Paraíba. Esses latifundiários detinham além do poder econômico regional, forte influência políticos, com vários representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Esse grupo era denominado Grupo da Várzea, e seu maior objetivo era o desmonte das Ligas, para tanto, praticam na região atos de repressão e extrema violência.

O território de São Miguel de Taipu no contexto das Ligas Camponesas

As tentativas de formação de Ligas em alguns municípios, a exemplo de Pilar e Itabaiana, foi duramente reprimida pela ação dos proprietários.

O município de São Miguel de Taipu, até 1961 pertenceu ao município de Pilar, sendo somente emancipado neste ano. Ou seja, era um território integrado ao deste município, e, por conseguinte, toda violência desempenhada pelas oligarquias que ali se fazia presente, era também desempenhada no território onde atualmente localiza-se o município de São Miguel de Taipu.

Vale dizer ainda que, a emancipação do município não significou o fim da submissão do território ao poder das oligarquias locais, que continuaram exercendo seu poder sobre o território e sobre a vida e o trabalho daqueles que ali vivam.

Chamamos atenção para o fato de que embora o município de São Miguel de Taipu estivesse localizado na Microrregião de Sapé, região onde as Ligas teve maior força, e justamente onde havia uma elevada exploração do trabalho, o movimento não conseguiu grande articulação com os camponeses. Este fato demonstra que a atuação das Ligas não foi homogênea em toda Zona da Mata, e que pode ter sido arrefecida por uma violência patronal ainda mais forte.

Ressaltamos que, conforme depoimentos colhidos junto aos antigos moradores dos engenhos situados no atual município de São Miguel de Taipu, na década de 1960 alguns engenhos já não funcionavam mais, estando parte deles abandonados pelos seus proprietários.

A fraca atuação das Ligas em São Miguel de Taipu pode também se justificar pelo fato de não existir nesse período conflitos direto entre proprietários e trabalhadores, tendo em vista que a organização da vida e da produção era feita parcialmente pelos próprios camponeses, conforme mostra depoimento de um antigo morador do Engenho Novo:

O mato tomava de conta daqui, não tinha cana mais não. A plantação que tinha era a de nós moradores, a gente viveu por muitos anos assim. De vez em quando aparecia um aqui e dizia que tinha comprado a propriedade, a gente ficava sem nem saber de quem era o dono, mas enquanto agente tivesse a casinha prá morar e a terrinha prá plantar a gente ficava na terra. Não tinha prá onde ir mesmo. Se saísse morria era de fome. Era muitas famílias que vivia assim (Depoimento de antigo morador do Engenho Novo).

Embora não tenhamos identificado expressividade da atuação das Ligas no território do município de São Miguel de Taipu, destacamos que o movimento camponês das Ligas Camponesas foi até hoje o mais importante, servindo de inspiração para as lutas que a ocorreram posteriormente em toda região.

Territorialização, desterritorialização e reterritorialização camponesa em São Miguel de Taipu

A conflitualidade inerente ao campo brasileiro é fruto da sua subordinação ao capital e das contradições por ele impostas, em uma lógica de desenvolvimento desigual, onde o que prevalece é a da subordinação camponesa ao capital, e/ou a da sua resistência contra o capital (FERNANDES, 2004).

Para Fernandes (2004) os conflitos no campo se organizam em um movimento continuado de “destruição e recriação” das relações sociais (FERNANDES, 2004, p. 5), onde as transformações das relações sociais se apresentam nos processos de *territorialização, desterritorialização e reterritorialização* do campesinato.

O desenvolvimento da agricultura acontece também pela conflitualidade perene das classes sociais, que se enfrentam e disputam a política e o território. Esse desenvolvimento pela conflitualidade é caracterizado pela contradição e pelo paradoxo insolúveis, que vem sendo registrados na história moderna, predominantemente, por meio da territorialização do capital e da desterritorialização e reterritorialização do campesinato. De um lado, o capital destrói e recria o campesinato, a partir de sua lógica e princípios. De outro lado, o campesinato também se recria, rompendo com a lógica e com os princípios do capital. A reprodução de ambas as formas de organização social são incongruentes, mas realizam-se no mesmo espaço, disputando territórios, gerando conflitualidade, promovendo desenvolvimentos (FERNANDES, 2004, p. 9).

Os conflitos por terra que tiveram lugar em São Miguel de Taipu são reflexos desse processo contínuo de destruição e recriação do campesinato, sendo observados no processo de territorialização do capital que implica na desterritorialização camponesa, e posteriormente na sua reterritorialização mediante conflitualidade que se apresenta através da luta pela terra.

Com o Golpe Militar instaurado no Brasil em 1964, e com isso desmantelamento do maior movimento camponês da época, a repressão sobre os camponeses aumentou não se tendo indício de organização da classe nesse período. A situação de quietude da classe camponesa foi rompida quando, mais uma vez ameaçados pelo julgo extenuante do capital, amparado e impulsionado pelo Estado, através da criação do Proálcool, os proprietários impuseram sobre os camponeses a intensificação da exploração do trabalho (MOREIRA e TARGINO et al, 2011).

Até a década de 1970, o que se observava no espaço agrário de São Miguel de Taipu, era um território cuja classe camponesa nele estava territorializada, seja através do sistema de morada, de parceria ou de arrendamento de terra, que se configuram como relações de trabalho pré-capitalistas.

A partir da criação do Proálcool em 1975 o município passou por um processo de transformação fundiária, onde os territórios ocupados pela classe camponesa foram expropriados para dar lugar à cana de açúcar, que ressurgia no território, como fruto dos incentivos do Proálcool. Essa nova configuração territorial acarretou em transformações na vida e no trabalho da classe camponesa, que em sua maioria foi expropriada. Esse processo se configurou, portanto, na *territorialização* do capital e *desterritorialização* da classe camponesa, conforme afirma Fernandes (2004).

Segundo Moreira (1997) foi entre as décadas de 1970 e 1980 que os conflitos por terra na Paraíba aumentaram, sobretudo, na Zona da Mata, berço da atividade canavieira desde o período colonial.

Foi nesse mesmo período que a luta de resistência camponesa se instalou no município, com o apoio irrestrito do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja Católica através da Comissão Pastoral da Terra, que segundo Mitidiero Jr. (2008) adotou características próprias na Paraíba ao assumir com veemência a luta dos povos oprimidos.

O relato que segue expõe o processo de desterritorialização imposto sobre o campesinato municipal.

Na década de 70 teve a expansão da cana, aí os proprietários começaram a querer expulsar uma “danação” de morador que tinha nas propriedades para aumentar a área de cana, e de fato, muitos foram expulsos, foram morar em várias cidades. Eu fui nessa leva. Quando a Usina comprou a terra, nos despejou, nessa época eu ainda era criança, e meu pai não deixou participar da luta prá ficar na terra onde a gente morava. Meu pai era nascido ali naquela terra. E a gente teve que ir prá casa de um tio meu que era ligado a um proprietário, aí meu tio ajudou meu pai a comprar um pedacinho de terra que é onde a gente vive até hoje. Eu vivo até hoje, porque meu pai já morreu. Mas meus outros tios, que também foram expulsos, e que não tinha como comprar nem um pedacinho de terra, foram embora morar em Santa Rita, outros foram para Itabaiana, e assim, o pessoal ia num sofrimento danado, buscando um pedaço de terra para viver, porque era todo mundo agricultor, só sabia trabalhar na terra. Esse período a cana tomou conta de tudo, de novo, foi no Proálcool (Entrevista com camponês de São Miguel de Taipu. Trabalho de campo. Dezembro de 2015).

O período de estabilidade do setor canavieiro durou até meados da década de 1980, quando o Proálcool foi extinto e com ele os recursos destinado à atividade, motivando o endividamento tanto dos usineiros quanto dos produtores de cana de açúcar.

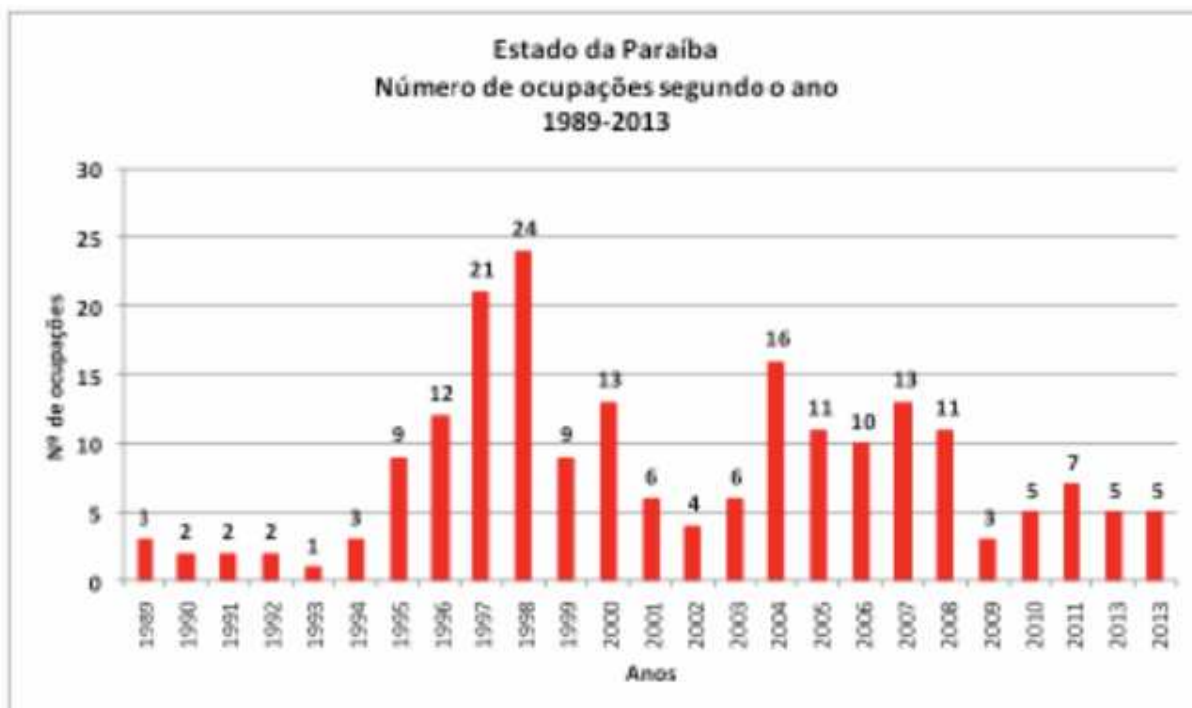
A crise do Proálcool e o aumento da pobreza no campo assolava a vida dos camponeses, que, além da falta de terra, também não tinham mais o trabalho nas usinas, ou nas plantações de cana de açúcar. A única alternativa de sobrevivência para esses trabalhadores foi à luta pela conquista de frações do território capitalista, como pode ser visto no relato:

A gente morava no sítio, mas quando a cana avançou a gente veio morar na rua, mas, trabalha na cana, na limpa e no corte. Trabalhar na cana é o pior serviço que tem, é sofrimento, sofrimento, sofrimento grande. E trabalhava menino, criança, mulher, era tudo trabalhando na cana prá poder sobreviver. Não tinha outra coisa prá fazer não. Ou trabalhava ou morria de fome. Era tudo agricultor, só sabia trabalhar na terra. Era pobreza maior do mundo. A gente morava em uns barraco aqui já no fim da rua, aqui em São Miguel mesmo. Aí fazia uns bico aqui, outro ali, e ia se virando, na pobreza. No sítio a gente plantava milho, feijão, mandioca, não faltava comida não, mas na rua? A gente ia plantar como? Tinha era que trabalhar. As filhas nova da gente ia pra João Pessoa trabalhar nas casas de família. Era o jeito, porque da terra não tinha mais como viver não (Entrevista com camponês de São Miguel de Taipu. Trabalho de campo. Dezembro de 2015).

O depoimento acima demonstra o grau de vulnerabilidade social que os camponeses expropriados viviam na cidade, restando a eles a luta para retornar ao campo, em um processo que se configura na luta pela reterritorialização camponesa. Na busca pela reterritorialização no campo, os camponeses deram início à luta pelo fim do latifúndio em São Miguel de Taipu.

A década de 1990 foi marcada então pela luta camponesa para retornar ao campo, não apenas em São Miguel de Taipu. O **Gráfico 1** mostra que a década de 1990, a partir de 1995 teve uma ascendência nas ocupações de terra em todo estado da Paraíba.

Gráfico 1: Ocupações de terra do Estado da Paraíba



Fonte: Relatório DataLuta/Paraíba, 2014.

Os conflitos ocorridos em São Miguel de Taipu assumiram características diferentes, desde aqueles regados pela violência latifundiária até acordos pacíficos entre camponeses e proprietários, conforme apresentaremos no tópico seguinte.

A reterritorialização camponesa

No município de São Miguel de Taipu o processo de reterritorialização camponesa em sua trajetória campo-cidade-campo se apresenta mediante a desapropriação de 4 latifúndios no município, representando a criação de 393 pequenas unidades de produção camponesa (Quadro tal).

Quadro tal: Assentamentos rurais do município de São Miguel de Taipu

Nome do Imóvel	Nome do Assentamento	Área Desapropriada	Área Medida	Nº. de famílias assentadas	Decreto de Desapropriação/aqui ou convênio	Data da Imissão de posse
Eng.	Amarela I	523,25	527,1		25.03.95	01.09.95

Novo Quinhão 9-C				54		
Eng. Novo Quinhão 9-B	Amarela II	523,45	524,4	42	12.01.95	04.10.95
Engenho Itaipu	Novo Taipu	800,00	839,6	60	19.08.97	18.12.98
Itapuá	Antônio Conselheiro	930,14	947,3	120	07.10.99	06.01.99
Condomínio Tubiacangã	Água Branca	523,45	620,7	73	21.09.04	31.05.05
Maravalha	Maravalha	234,75	234,8	44	Conv-Incra-Estado	Sem informação
06 Imóveis	06 PAs	3.535.04	3.593.9	393		

Fonte: INCRA. Demonstrativo das Áreas de Assentamento na Paraíba, 1986-2010.

A luta camponesa pela sua reterritorialização permitiu a sua recriação mesmo diante da monopolização do território pelo capital. A expressividade dessa luta é observada ao se constatar que do total de mais de 5 mil hectares ocupados pelos engenhos no município até a década de 1990, mais de 3 mil hectares foram desapropriados para fins de reforma agrária.

Dos conflitos eclodidos em São Miguel de Taipu, somente o Engenho Novo não foi desapropriado em sua totalidade, já que o mesmo ocupava área em outros municípios¹⁰³.

¹⁰³ Embora existissem outros dois Engenhos no município, o Engenho Lagoa Preta e o Engenho Oiteiro, não foram alvo de conflitos, e por isso, não houve desapropriação.

O Engenho Oiteiro perante a crise da atividade canavieira se manteve funcionando, conciliando a produção de cana de açúcar para o fabrico de cachaça com a produção de gado para corte, sendo considerado como referência por ter construído no interior do Engenho uma Maternidade de Inseminação Artificial. Atualmente o Engenho ainda encontra-se em funcionamento desenvolvendo atividades de carcinicultura, piscicultura, criação de gado para corte e reprodução e plantação de cana de açúcar para alimentação do gado.

O Engenho Lagoa Preta teve suas terras negociadas com antigos moradores e posseiros do Engenho ainda na década de 1990. Atualmente na área remanescente do antigo Engenho existe a prática de carcinicultura

Porém, segundo os dados cadastrais do INCRA, a porção deste imóvel em São Miguel de Taipu correspondia a 3.139 hectares, e destes, 1.569 hectares foram desapropriados, dando origem a 3 projetos de assentamentos: Amarela I, Amarela II e Água Branca. Ou seja, 49,98% da área ocupada pelo Engenho Novo em São Miguel de Taipu foi desapropriada.

A conquista de frações do território capitalista pela classe camponesa em São Miguel de Taipu demonstra que somente a luta é capaz de transformar a terra de negócio em terra de trabalho e vida (Martins, 1975). O resultado dessa luta proporcionou não somente uma transformação territorial e fundiária do município, mas acima de tudo uma transformação na vida desses camponeses.

A conquista do território permite que o camponês acredite em um futuro mais digno, buscando desenvolver nessa fração do território conquistado formas diferentes daquelas impostas pelo capital, mesmo diante de tantas contradições, buscando através da utopia construir um novo território, um território de esperança (Moreira, 2006).

Os frutos da luta camponesa em São Miguel de Taipu permitiu que essas famílias pudessem acreditar que é possível viver em território com uma lógica de produção diferente daquela imposta pelo capital.

Considerações Finais

Diante do exposto, o que se constata é que o município de São Miguel de Taipu passou por um processo de redistribuição fundiária que proporcionou o acesso a terra a centenas de camponeses sem terra, e que a atuação dos movimentos sociais nesse processo se torna de suma importância para articulação e organização camponesa.

Embora a conquista da terra pelos camponeses não represente o fim da luta, tendo em vista que após a conquista da terra os camponeses assumem uma nova luta pela permanência na terra por acesso a serviços básicos, representa um processo de reterritorialização camponesa, permitindo que além do acesso a terra os camponeses pudessem acreditar na possibilidade de desenvolver um território pautado em lógica diferente daquela imposta pelo capital, um território de esperança.

Referências

AUED, Bernadete Wrublevski. **A vitória dos vencidos: Partido Comunista Brasileiro –PCB – e Ligas Camponesas 1955-64**. Editora da UFSC, 1986.

AZEVÊDO, Fernando Antônio. **As ligas camponesas**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

FERNANDES, Bernardo Maçano. Entrando nos territórios do Território. In: PAULINO, Eliane Tomiasi; FABRINI, João Edmilson. **Campesinato e territórios em disputa**. São Paulo: Expressão Popular, 2008b. pp. 273-302.

MARTINS, José de Sousa. **O cativo da terra**. 9ª edição. São Paulo: Contexto 2015.

Mitidiero Jr. Marco Antônio. **A ação territorial de uma igreja radical: teologia da libertação, luta pela terra e atuação da comissão pastoral da terra no estado da Paraíba**. São Paulo. USP, 2008.

MOREIRA, Emilia de Rodat Fernandes. **Da Zona da Mata ao Sertão: a luta pela terra e a construção de território(s) de esperança no estado da Paraíba**. João Pessoa: Projeto de Pesquisa, DGEOC/PPGG/CNPq, 2011.

MOREIRA, Emilia e TARGINO, Ivan. Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba. João Pessoa: Editora Universitária da Paraíba, 1997.

Pessoa, Victor Gadelha. **As ligas camponesas da Paraíba: história e memória**. João Pessoa, 2015.

RAFFESTIN, Claude. **Por uma Geografia do Poder**. São Paulo: Editora Ática, 1993.

Stédille, João Pedro (2006). **A questão agrária no Brasil: história e natureza da Ligas Camponesas 1954-1964**. 1ª edição. São Paulo. Expressão Popular, 2006.

De los desaparecidos en América até Libertad: significando em silêncio

Luiza Boézzio Greff

(Universidade Federal de Santa Maria
Programa de Pós-Graduação em Letras
Mestrado em Estudos Linguísticos
Linha de Pesquisa: Língua, Sujeito, História
izabgreff@gmail.com)

UM ESTUDO EM MARCHA

Em em junho de 2014, visitando a cidade de Montevidéu para participar de um evento acadêmico da área de Letras, tive contato, pela primeira vez, com o tema da *Marcha del Silencio*. Um cartaz-convite em um mural da Universidad de La Republica convidava os estudantes a participar da marcha que pedia por *verdad, justicia, memoria y nunca más*, que havia ocorrido no dia vinte de maio. Trouxe aquele cartaz comigo para o Brasil e, desde então, passei a dedicar meus estudos acadêmicos à investigar tal Marcha, tornando-a objeto de estudo abordado por um viés discursivo.

A *Marcha del Silencio*, que, para mim, configurava-se como uma novidade, surpreendeu-me com sua história: ocorrendo desde o ano de 1996, tal protesto/manifestação urbana leva às ruas da capital uruguaia milhares de sujeitos que solidarizam-se com a causa daqueles que, direta ou indiretamente, foram afetados pelos horrores da ditadura civil-militar que assolou o país durante as décadas de 1970 e 1980. Desde o anos de 1996, todos os anos, às dezenove horas do dia vinte de maio, milhares de cidadãos marcham pela principal avenida da capital, inundando a cidade com seu silêncio, seu luto e sua luta.

Do ponto teórico de onde miro tal objeto, proponho-me a refletir sobre o mesmo ancorada pelo aparato teórico e metodológico da Análise de Discurso de matriz francesa, buscando compreender o funcionamento discursivo do silêncio, tomado como espaço de fôlego da significação (ORLANDI, 2007), como elemento intraduzível e de potência essencialmente polissêmica. Por esse viés, busco compreender o silêncio constitutivo da *Marcha* como parte do que Orlandi (2007) dialética do oprimido, movimento que, por um processo de ressignificação do discurso (PÊCHEUX, 2009) e deslizamento de sentidos (ORLANDI, 2007), faz significar o silêncio que outrora era *silenciamento* (censura), agora como protesto, luta, reivindicação.

A fim de compreender tal processo, nesse momento, partimos das condições de produção (PÊCHEUX, 2010) de tal marcha e, a partir da reflexão sobre tal elemento, buscamos compreender

como o silêncio configura um importante elemento em um discurso de luto e luta no cenário de reivindicações por verdade e justiça sobre os crimes cometidos pelas ditaduras de segurança nacional que desenvolveram-se não apenas no Uruguai, mas nos países vizinhos, como Argentina e Brasil, unidos pela história de superação de tais regimes autoritários que ameaçaram a democracia na América Latina.

URUGUAY, 1973-1985: SILÊNCIO!

“Nós temos uma filosofia de tango (...). A garota, a velha, o chimarrão, o futebol, a cachaça, o velho bairro Sul, muito sentimentalismo. E assim não se vai a parte alguma. Somos brandos, entende? Perceba que até nossos guardar de honra se chamam os Blandengues. Somos isso, brandos. E temos que ser o contrário, duros, como são estes sujeitos” .

(Mario Benedetti)

Argentina, 1962; Brasil, 1964; Paraguai, 1954; Chile e Uruguai, 1973¹⁰⁴: o sul da América do Sul, na segunda metade do século XX, foi inundado por uma onda de regimes autoritários que mancharam de sangue nossa história recente. Em um cenário no qual o mundo ainda caminhava desnorteado pelos escombros do fim da Segunda Guerra Mundial, a paz parecia inalcançável, embora não explodissem mais bombas nos territórios já devastados dos países envolvidos no/afetados pelo conflito.

Finda a Segunda Guerra (1939-1945). O que deveria ser um momento de reestruturação política, econômica e material, foi o momento de construção de “uma nova correlação de forças na ordem mundial” (VILLALOBOS, 2006, p. 39). O mundo se bipolarizava em defesa e ataque das duas grandes potências “sobreviventes” da guerra que opunham-se ideologicamente.

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos da América. Os interesses defendidos pelas duas, levou o mundo à formação de blocos antagônicos, cujo resultado prático foi a Guerra Fria, um grande duelo político, ideológico e propagandístico, que afastou a possibilidade de harmonia, mas não levou ao confronto aberto. Existia a consciência de que, com o poder de fogo de ambos os lados, não havia chances de existir um vencedor ou dito de outra forma, todos seriam perdedores (VILLALOBOS, 2006, p. 39).

¹⁰⁴

Reconheço a existência de outros regimes de governo autoritários e/ou impostos por meio de golpes de Estado aconteceram antes (e depois) dos períodos que aqui destaco (como é o caso do próprio Uruguai, durante o governo de Gabriel Terra (1933) que, mesmo eleito por voto, fechou o congresso nacional e governou como ditador, ou ainda, muito recentemente, o caso do Brasil, país em que a presidenta eleita, Dilma Rousseff (2016), foi afastada do seu mandato por um processo impeachment sem justificativa legal).

Reconheço o cenário internacional como decisivo para os eventos que se desenrolam na América Latina, sobretudo para a instauração dos diversos regimes ditatoriais no Cone-Sul. Mas alerta para um recorte necessário neste estudo: não é possível darmos conta de refletir sobre os meandros da política internacional e seus efeitos como um todo nos países latinos. Deste palco, cabe-me o espaço em que se insere o Uruguai das décadas de 1970 e 1980 em suas relações políticas com os EUA, grande potência imperialista desse momento histórico (e, por que não dizer, também desses tempos nebulosos do qual escrevo este texto). Foco meus esforços em compreender os desdobramentos da Guerra Fria e do combate à “ameaça vermelha” empreendidos pelos EUA tal qual se apresentam na história uruguaia.

Se, como registra a História, a política externa norte-americana visava a contenção da expansão da URSS e do comunismo; a organização da economia capitalista em volta da sua liderança e interesses; a abertura dos impérios coloniais e das metrópoles européias ocidentais aos seus investimentos e comércio, além da derrota da onda revolucionária anticapitalista na Europa, no Extremo Oriente e, depois, na América Latina e na África (PADRÓS, 2005, p. 125).

Era, então, de interesse político investir contra esse espaço de proliferação de ideias anticapitalistas e antiamericanas que começava a ganhar fôlego em diversos pontos do globo. Nesse ínterim, a vitória do revolucionário comunista Fidel Castro (1959) e seu exército em Cuba pareceu ser o motivo derradeiro para que os EUA e seus aliados justificassem suas investidas imperialistas na América Latina: “o primeiro regime comunista, a poucos quilômetros da Flórida. O fato fez com que surgisse um novo sentido de segurança para a região” (PADRÓS, 2005, p. 42), fazendo crer que a segurança nacional agora devia ser militarizada, armada e doutrinação para “defender” os interesses anticomunismo até as últimas consequências.

A ofensiva autoritária chegou ao país com el nombre de un río quando ele se encontrava em uma situação esgotamento econômico e de crise política. “O país que havia sido a ‘Suíça da América Latina’ começou a misturar crise econômica com crise política” (PADRÓS, 2005, p. 37) e os conflitos internos e externos, combinados, desencadearam a escritura de algumas das mais sangrentas páginas da história uruguaia. “Quando o assunto era Uruguai, o temor da infiltração esquerdista preocupava os estrategistas americanos” (PADRÓS, 2005, p. 44), sua posição de fronteira com duas grandes potências latinas como a Argentina e o Brasil e sua inclinação para uma democracia voltada para o povo tornavam o país um lugar de imensa importância para o combate ao comunismo.

O golpe foi preparado desde 1967, quando o presidente Pacheco Areco viu seu companheiro de governo, o general Oscar Gestido, decretar pela primeira vez “medidas de pronta seguridad” (manobra constitucional), a fim de controlar a agitação popular frente a inflação galopante que

assolava o país (VILLALOBOS, 2006). Em um espaço de tempo de um mandato presidencial, o Uruguai progressista e de (aparentes) firmes bases democráticas, viu-se dominado pela extrema direita, deixando “a porta aberta para o avanço do autoritarismo” (VILLALOBOS, 2006, p. 59). “Nas ruas a violência policial assumia proporções inéditas” (p. 55) e no âmbito da organização política, os cargos passavam a ser distribuídos de acordo com interesses particulares, desrespeitando os interesses da população e as necessidades da nação.

O passo derradeiro para a concessão de poderes para os militares não foi um golpe como podemos imaginar, uma tomada bruta do poder. Em 1972 o poder executivo projetou e executou a Ley de Seguridad del Estado, tornando as Forças Armadas o órgão responsável pela segurança e direção do país. As portas estavam abertas: o “golpe” foi constitucional, a democracia sofria um ataque gestado em si mesma, por governantes autoritários e abusivos¹⁰⁵.

No dia 27 de junho de 1973 (quando o país já restava sob o governo de outro presidente, ainda democraticamente eleito), por fim, estava suspensa a democracia no Uruguai, levada ao chão pelo Decreto 464 que dissolvia o governo e o entregava nas mãos das Forças Armadas (VILLALOBOS, 2006). Padrós (2005, p. 368) compreende que Bordaberry desferiu um “autogolpe”, uma vez que “o presidente Bordaberry, eleito democraticamente, foi derrubado pelo ditador Bordaberry, mantido, rigorosamente, pelas Forças Armadas, enquanto eram fechadas as instituições democráticas e atropelavam-se as liberdades e o Estado de direito”.

Ao longo dos anos, o regime ditatorial endureceu e, no ano de 1976, ano em que deveriam ser realizadas as eleições presidenciais, se “apurava los planes de varias camarillas 27 Acredito também que a nomeação desse sistema político como civil-militar provoca(va) efeitos de sentido que leva(vam) os sujeitos a, erroneamente, acreditar que a Força Armada estava a serviço do povo uruguaio, e não agindo conforme interesses próprio, os quais, em primeira instância, eram interesses internacionais que comprometiam a soberania nacional em nome de proteger o país de um “mal” (que assim se configurava apenas para o capitalismo e seus “devotos”). 60 cívico-militares em acción, que buscaban triunfar em las soterradas pulseadas de trastienda” (CAETANO; RILLA; 1987, p. 25). Não havia mais dúvidas sobre a natureza do governo que se constituía sob os “braços fortes” das Forças Armadas e, aos cidadãos, uruguaios restava atravessar esse período em silêncio ou lutar, resistir, em nome de seus direitos, suas liberdades. Se parte da população viu-se sem voz e sem armas, uma outra parte encontrava-se “nas linhas de frente”: estudantes, professores,

¹⁰⁵ Acredito também que a nomeação desse sistema político como civil-militar provoca(va) efeitos de sentido que leva(vam) os sujeitos a, erroneamente, acreditar que a Força Armada estava a serviço do povo uruguaio, e não agindo conforme interesses próprio, os quais, em primeira instância, eram interesses internacionais que comprometiam a soberania nacional em nome de proteger o país de um “mal” (que assim se configurava apenas para o capitalismo e seus “devotos”).

sindicalistas, trabalhadores de todas as áreas e toda uma gama de sujeitos interpelados pelo ideal democrático colocaram suas vozes e seus corpos em luta.

De muitos deles, jamais saberemos sequer o nome; de outros, temos inscrito na memória, através dos discursos da história, os efeitos de sentido de suas lutas. Em maio de 1976, dois ex-legisladores uruguaios pagam com suas vidas o preço da guerra urbana instaurada pelo regime ditatorial: Zelmar Michelini e Héctor Gutiérrez Ruiz são, conforme noticiado pelo jornal uruguaio *El País* na edição do dia 20 de maio, sequestrados de suas casas em Buenos Aires, na Argentina. O mesmo já havia acontecido com outros importantes nomes da resistência política e ideológica, como o professor argentino Manuel Liberoff, condenado por sua filiação comunista. Ambos encontravam-se residindo na capital argentina em função de exílio político, desde que o governo democrático uruguaio havia sido desmembrado.

No dia seguinte, 21 de maio de 1976, os jornais já noticiavam aquilo de que não restava muitas dúvidas (até mesmo o periódico antecipava que apenas um dos sequestrados, até então, havia sido “liberado”): Michelini e Ruiz estavam mortos.

As mortes de Michelini e Ruiz denunciavam a ação extraterritorial da ditadura uruguaia (PADRÓS, 2005) e o uso indiscriminado da violência como meio para atingir objetivos políticos e silenciar vozes dissonantes. A notícia das mortes chocou o país e incendiou a luta da oposição, somando-se a “la continuación de las detenciones, destituciones y persecuciones de diversa índole sobre organizaciones y ciudadanos de izquierda” (PADRÓS, 2005, p. 29).

“O governo usava todas as armas para sufocar a oposição e é importante assinalar, junto com o endurecimento político, surgiu mais uma situação praticamente desconhecida pelos uruguaios: a censura” (VILLALOBOS, 2006, p. 61). Assim como ocorreu no Brasil, 63 diversos jornais e revistas foram fechados no Uruguai, e seus colunistas e colaboradores perseguidos. Nos que permaneceram abertos, a censura atuava duramente, proibindo não apenas que se publicasse qualquer crítica ao sistema vigente, mas também chegando ao extremo de proibir determinadas palavras: adjetivos como “terrorista” e “subversivos” constavam na lista de palavras interditas (VILLALOBOS, 2006), especialmente quando o assunto fosse os guerrilheiros tupamaros¹⁰⁶.

Compreendo tal exercício da censura como parte de uma série de práticas que configuram a “política do silêncio como um efeito de discurso que instala o antiimplícito: se diz “x” para não

¹⁰⁶ O Movimiento de Libertación Nacional - Tupamaros foi um importante grupo de guerrilha urbana que ofereceu intensa oposição e resistência ao governo ditatorial. “O MLN foi organização sobre a base das convicções e das experiências que amadureciam a partir de uma espécie de coalizão entre os homens do campo e os movimentos urbanos” (VILLALOBOS, 2006, p. 63). Aliando ideais de igualdade e liberdade à guerrilha urbana, os tupamaros ocuparam um lugar de destaque não apenas nas pautas jornalísticas, mas nas políticas de repressão e violência de Estado. Com o advento da guerrilha urbana, a violência e o combate armado tornaram-se uma via de mão dupla. Entretanto, cabe refletir sobre o fato de que o Estado contava não apenas com alguns trabalhadores subversivos insuflados pelo ideal da democracia, mas com um pesado esquema de repressão financiado pelos poderes públicos nacionais e internacionais. De tal embate resultou o “abril sangrento” de 1972 (VILLALOBOS, 2006), quando dezenas de civis e militares morreram em confronto, chegando-se a cogitar declarar “estado de guerra”.

(deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar do dito” (ORLANDI, 2007, p. 73, grifos nossos). Por tal gesto, o Estado e seus censores buscam “evitar” ou, em última instância, “apagar” sentidos possíveis, mas não em tal conjuntura. Como se fosse possível.

Ao mesmo tempo, por meio da prática da cesura total - impedimento de dizer/publicar – tem-se uma outra estratégia política na qual o silêncio tem importância central. “Procuramos analisar a censura enquanto ‘fato’ de linguagem que produz efeitos enquanto política pública de fala e de silêncio” (ORLANDI, 2007, p. 75) e, por um viés discursivo, a compreendemos como “a interdição do sujeito em formações discursivas determinadas. Consequentemente, a identidade do sujeito é imediatamente afetada enquanto sujeito-do-discurso” (ORLANDI, 2007, p. 76), uma vez que o sujeito constitui-se no/através do discurso e, por conseguinte, pelos processos de identificação decorrentes de sua filiação em determinada formação discursiva. Para o Estado, silenciar dizeres sobre a violência institucionalizada resultaria em “apagá-la” ou, no mínimo, não oferecer margens para que este fosse um assunto capaz de mobilizar o povo. Ignorava-se que o silêncio significa e o sujeito significa a si e ao seu mundo também em/no/através do silêncio. À “retórica da opressão”, responde a “retórica da resistência”, inscrevendo nesses silêncios os sentidos que outrora foram negados. Sentidos de asfixia, de amordaçamento, de cerceamento de liberdades, de negação de direitos.

A censura configurou um embate no plano da linguagem, dos direitos ao expressar-se livremente, mas a “guerra” entre o Estado e o povo não se restringiu ao silenciamento de sentidos. Era preciso calar materialmente as vozes, livrar-se da oposição que representavam os corpos em luta nas ruas. Era preciso parar os corações revolucionários que não compactuariam com governos ilegítimos: os embates armados tornaram-se frequentes.

De ambos os lados, empunhavam-se armas: militares e guerrilheiros enfrentavam-se nas ruas uruguaias e acumulavam-se mortos a cada enfrentamento. Se eram numerosas as atividades subversivas dos guerrilheiros, eram assustadoras as ações militares. O Terror de Estado “configura-se como uma modalidade essencialmente distinta do terrorismo individual ou de grupos extremados não-estatais. [...] se fundamenta na lógica de governar mediante intimidação” (PADRÓS, 2005, p. 64). A violência imposta pelo regime ditatorial no Uruguai é legitimada, é uma prática política e serviu aos interesses do Estado, encontrando suporte em sua aparelhagem repressora (ALTHUSSER [1969] 1985).

Assim mesmo, há uma série de atos violentos/terroristas que não estavam “previstos” e/ou assegurados pelas leis que regiam esses regimes e que foram usados como forma de repressão ilegal. Parecia não haver limites para a violência. A ditadura uruguia não estava contente em prender os “delinquentes ideológicos”, uma vez que, mesmo após a prisão, os sujeitos sofriam toda sorte de violência física e simbólica, justificada por sua “subversão”. “Quem não estava preso,

ressentiu-se com a existência de uma ‘liberdade’ profundamente vigiada e controlada, alimentando a ‘cultura do medo’ espalhada por todo o país” (PADRÓS, 2005, p. 116). Imperava o medo, imperava o silêncio.

Silêncio daqueles que calavam frente a possibilidade da punição, silêncio daqueles que ainda que pudessem, nada faziam para influenciar politicamente os rumos do país. Silêncio promovido pela censura que proibia publicações jornalísticas, atividades culturais e acadêmicas. Silêncio daqueles que precisaram sair de seu país para manterem-se a salvo e buscaram outro lugar em que pudessem significar³⁰. Silêncio daqueles que, calados, buscam proteger a si mesmos e aos seus companheiros de vida, de luta. Silêncio do oprimido.

O silêncio assumiu diversas formas. Silenciar configurou-se em uma arma poderosa para os ditadores e não se tratava apenas de calar as vozes de um povo, mas de tentar impedir que os sentidos se construíssem, que exercessem sua potência inata de se tornarem sempre outros, uma vez que a possibilidade da perda de controle era assustador. Tratava-se de se iludir ²⁹ Em sua tese doutoral, Padrós realiza um apanhado de aparelhos e práticas de Terror de Estado no capítulo “A política dos desaparecimentos e o terror de estado” (2005, p. 613). ³⁰ Citamos aqui o caso dos escritores uruguaios Mario Benedetti e Eduardo Galeano, dois grandes nomes da poesia e prosa latina, exilados na Espanha durante o período ditatorial. ⁶⁵ com uma compreensão de que aqueles sentidos que ali foram interditados não significariam em outros espaços, por outros sujeitos (ORLANDI, 2007). Para o opressor, silenciar é uma prática política eficaz e compreendo que tal posição só se justifica por uma interpretação equivocada do que seja o silêncio e de como ele significa. Por esta mirada, o silêncio não é linguagem, é apenas o “cessar de ruído” ou a interjeição que impõe ao sujeito que se cale, como previsto em algumas das entradas dos dicionários consultados neste estudo .

Silenciar era, para o poder autoritário, uma forma de conter a subversão, conter os sentidos que levavam os sujeitos a compreender que algo estava muito errado e que era preciso lutar contra isso. Mas silenciar era também desaparecer sujeitos, levá-los para longe de suas casas e famílias sem deixar rastro. Silenciar era também acabar com a vida de sujeitos, tirarlhes qualquer possibilidade de falar, mas, ao contrário do que podiam prever os (limitados) agentes do Terror de Estado, não era possível impedi-los de significar, mesmo mortos. Tais crimes figuram em documentos oficiais do Estado¹⁰⁷, em documentos da Anistia Internacional, do Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ UY) e

¹⁰⁷ No site da Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (órgão vinculado à presidência do Uruguai) constam os quatro tomos que compilam os resultados das investigações sobre uruguaios detidos desaparecidos durante o período ditatorial das décadas de 1970 e 1980. A Secretaría oferece a qualquer cidadão a oportunidade de fazer parte do processo de busca pelos desaparecidos, realizando denúncias anônimas e fornecendo material genético para identificação de vítimas. O SERPAJ UY oferece apoio a diversas entidades que lutam pelos direitos humanos e promove ações educativas buscando promover noções de igualdade e democracia, além de ser um grande apoiador das

de diversas outras instituições em prol dos direitos humanos no Uruguai e no mundo. A busca por justiça move centenas de pessoas a lutar por verdade, pelo manutenção da memória de seus familiares, amigos e companheiros de luta, mobiliza a sociedade uruguaia e latino americana a lutar por justiça. E a barreira que separa os responsáveis pelos crimes e a punição não é apenas uma questão de falta de provas ou excesso de tempo: há um recurso legal que protege os torturadores, assassinos, sequestradores.

Em 1986 foi aprovada a lei número 15.848, chamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Lei de Caducidade), também conhecida, entre o povo uruguaio, como “Lei da Impunidade”. Tal lei, aprovada durante o governo de Sanguinetti “consagrou a impunidade dos agentes que violaram os direitos humanos durante a ditadura” (PADRÓS, 2005, p. 91). A lei garantia ao Estado proteção contra punições em relação a qualquer delito referente ao período ditatorial cometido por militares, policiais ou ocupantes de cargos equiparados, desde que em cumprimento de ordens governamentais. Apenas em 2010 a Lei de Caducidade foi declarada inconstitucional, oferecendo aos familiares e demais militantes uma esperança na luta por verdade e justiça.

URUGUAI, 1996: POR QUE EL SILENCIO?

“Queremos saber la verdad” (LA REPUBLICA, 1996, p. 6): tal enunciado foi pronunciado no dia 2 de maio de 1996, frente a um anfiteatro lotado de intelectuais, militantes, políticos (e seus apoiadores) representantes da esquerda uruguaia. A fala de Tabaré Vasquez, María Ester Gatti de Islas e Hugo Cores abria, durante o ato do Partido por la Vitoria del Pueclo (PVP), uma série de debates sobre a impunidade relativa aos crimes do período ditatorial.

Data deste mesmo momento a elaboração de um artigo que orientava os governantes e a população sobre “los fundamentos jurídicos del deber de investigar la suerte de los desaparecidos” (idem), de autoria do advogado uruguaio Gonzalo Fernández. A docente uruguaia Gatti de Islas defendia a urgência de se buscar as crianças desaparecidas, filhas de detidos desaparecidos ou mortos. Por fim, Tabaré Vasquez defendia a necessidade de aplicação da lei que, paradoxalmente, havia sido outrora motivo de ataque. Era preciso levar adiante alguns dos pontos da Lei de Caducidade para que as investigações ocorressem, e o representante da esquerda progressiva admitiu o passo contraditório, mas necessário: “hoy, paradójamente, estamos defendiendo la aplicación de una ley que nos impulsamos” (idem). Tal lei afirmava que apenas o Estado uruguaio poderia realizar investigações sobre a situação dos detidos desaparecidos ou mortos durante o regime ditatorial: fizesse, então, cumprir a lei.

Um dos principais jornais do país, La Republica, passou a abrir espaço quase que diariamente em suas edições do caderno de política para a discussão sobre a ditadura (no Uruguai e na América Latina como um todo, chegando a apresentar matérias especiais sobre as torturas em Honduras e na Colômbia e sobre o desfecho das lutas por justiça na Argentina, por exemplo.) e seus “efeitos colaterais” na sociedade. Na edição do dia 5 de maio de 1996, La Republica publicou uma matéria sobre a concordância do então senador Rafael Michelini sobre a necessidade de fazer-se cumprir a Lei de Caducidade, no tocante às investigações do governo sobre o período de 1970 e 1980.

O envolvimento de Rafael Michelini com o caso dos desaparecidos estava além de seu comprometimento com a democracia: o senador é filho de Zelmar Michelini, importante político uruguaio sequestrado e morto durante o início da ditadura civil-militar, quando exilado na Argentina. Em um momento de intenso debate sobre a verdade e a memória da ditadura, Rafael Michelini ganhava visibilidade por suas posições sobre os processos judiciais que enfrentavam o Estado em busca de respostas.

Em entrevistas aos periódicos uruguaiois, Rafael Michelini não escondia seu comprometimento com a investigação sobre os atos violentos do regime ditatorial cívicomilitar que vitimou algumas centenas³⁴ de uruguaiois: “Como senador, tengo la responsabilidad de velar por todos los derechos, como hijo no me puedo olvidar de la tragedia, y como politico quiero que este tema se resuelva para el bien de la comunidad porque no quiero que se vuelvan a repetir nunca más [...]” (LA REPUBLICA, 7 mai. 1996, p. 8-9), “el mejor homenaje a mi padre, y a todos aquellos que han caído, no sería recordalos en forma teórica, sino que la verdad se sepa y que no vuelva a ocurrir” (p. 9).

Em resposta ao fervilhar de protestos por verdade e justiça, começaram a surgir na imprensa declarações de ex-militares declarando que haviam, sim, feito “coisas” das quais não se orgulhavam e das quais jamais se esqueceriam. Declarações que as Forças Armadas buscavam silenciar, afirmando que tais declarações eram “pessoais”, não significando a opinião da instituição (LA REPUBLICA, 7 mai. 1996, p. 4). No mesmo momento, foi publicada uma carta do ex-capitão da marinha uruguaia, Jorge Tróccoli, dirigindo-se ao povo uruguaio ao declarar-se arrependido de seus atos.

Quando dessas declarações, havia ainda 164 uruguaiois adultos e oito crianças em situação de desaparecimento³⁵: a luta precisava ir adiante. Com a abertura democrática estabilizada, chegara o momento de exigir verdade e justiça, fosse no âmbito jurídico, fosse nas ruas da capital. Processos judiciários foram abertos (e tramitam ainda hoje, alguns sem esperança de qualquer resolução), leis foram discutidas, feridas foram abertas. E como parte do processo de cura de tais feridas, uma série de manifestações populares inundaram os espaços públicos da capital uruguaia.

Dentre todas as manifestações a favor das investigações e punições aos responsáveis pelos crimes, uma se destacou rapidamente por seu apelo popular e por suas peculiaridades: já no dia 3 do mês de maio, ao fim de uma notícia sobre discurso de Tabaré Vasquez no jornal *34 Tomamos* como referência as investigações de Padrós (2005) e os números estimados. O historiador afirma a dificuldade em oferecer números de vítimas (entre desaparecidos e mortos) pois era comum a prática de desaparecer também com os cadáveres. ³⁵ Tais números figuram nas páginas dos jornais uruguaios, mas atento novamente para o número ser apenas uma estimativa, visto que é preciso que algum familiar (ou qualquer pessoa próxima) tenha denunciado o desaparecimento para que o Estado o reconheça. ⁶⁸ uruguai *La Republica*, anunciava-se uma “marcha” prevista para o dia 20 de maio. No dia 7 de maio, novamente, a marcha figurou nas notícias, agora com mais detalhes.

A “marcha” em questão ocorreria no dia 20 de maio, data em que completaria vinte anos do sequestro e morte de duas das mais emblemáticas vítimas do Terror de Estado ditatorial uruguio, os já mencionados políticos Zelmar Michelini e Hector Gutiérrez Ruiz. Segundo informes dos organizadores repassados aos meios de comunicação, a marcha partiria da Praça aos Desaparecidos da América (localizada entre as ruas Rivera e Areal Grande) e prosseguiria até a Praça Cagancha, também conhecida como Praça da Liberdade (no centro de Montevideú).

Os manifestantes caminhariam em silêncio do início ao fim, sem bandeiras de partidos políticos e sem realizar discursos por parte de qualquer organização ou manifestante ao final da caminhada. O silêncio e os corpos marchantes seriam o discurso de protesto de sujeitos incansáveis na luta por justiça, surpreendendo não apenas aos simpatizantes da causa, mas principalmente os representantes do governo.

Fizeram parte dos primeiros passos de organização representantes “del Frente Amplio, del PIT-CNT, familiares de detenidos-desaparecidos y varias organizaciones sociales que ya han comprometido su participación en dicho evento” (*LA REPUBLICA*, 7 mai. 1996, p. 7), além do Sindicato Médico do Uruguai, o Arcebispo de Montevideú, a Igreja Metodista, a Confluência Frenteamplista (Confra), o Serviço de Paz e Justiça (SERPAJ UY), o Centro de Investigação Franciscano Popular e Ecológico (CIFPE) e o Instituto de Estudos Legais e Sociais do Uruguai (Ielsur). Com o passar dos dias, uma série de outros movimentos sociais se juntou a estes, contando com importantes nomes da política e da academia nacional. Aderiram à marcha: Serviço pela Dignidade Humana; FEDEFAM (Regional Sur); Movimiento por la Vida y la Paz; Pastoral Social da Arquidiocese de Montevideú; Serviço de Reabilitação Social; União de Mulheres do Uruguai; Federação de Estudantes Universitários do Uruguai (FEEUU); Universidade da República e mais cerca de vinte partidos políticos nacionais.

As edições seguintes passaram a dar grande visibilidade para a Marcha e sua organização, informando a população sobre cada passo: as organizações envolvidas, suas pautas e seus meios de

luta por verdade junto ao Estado e, por outro lado, abrindo espaço também para o discurso das organizações populares e políticas que se recusavam a somar seus passos à Marcha del Silencio³⁶. Na edição do dia 9 de maio, no caderno de política, o jornal La 36 Na edição do dia 15 de maio de 1996, o jornal La Republica noticiava o aumento das adesões, mas também das críticas à marcha do dia 20 empreendidas pelas organizações e partidos políticos tradicionais. Representantes do 69 Republica apresentou dados precisos sobre a marcha que ainda estava inominada, mas recebia já a consigna “Por verdad, justicia y reconciliación” (LA REPUBLICA, 9 mai. 1996, p. 8).

No dia 16 de maio, o jornal La Republica publicou, na íntegra, a convocatória para a marcha do dia 20, apresentando o texto composto pelos vários grupos envolvidos na organização:

Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio en el día 20 de mayo en homenaje a las victimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentramos a las 19 horas desde la Plaza de los Desaparecidos en America, en Jackson y avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las victimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la recuperación de la MEMORIA y la exigencia que en Uruguay NUNCA MAS exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas. La sociedad debe poder reflexionar para poder no desconocer su historia, para no amputarla. A esta RECUPERACION DE LA MEMORIA COLECTIVA queremos que todos nos sintamos convocados marchando con banderas uruguayas, flores multicolores, en silencio y bajo la misma consigna: VERDAD, MEMORIA Y NUNCA MÁS (LA REPUBLICA, 16 mai. 1996, p. 6; grifos do autor).

MARCHA DEL SILENCIO

No dia 20 de maio de 1996, às 19h, partiu a primeira marcha por verdade, memória e nunca mais, silenciosamente percorrendo o trajeto entre a Praça dos Desaparecidos na América até a Praça Liberdade, no centro comercial da capital uruguaia. Após uma série de preparativos que envolveram discussões entre grupos favoráveis e contrários à marcha (o deputado, à época, Guillermo Stirling, chegou a afirmar que a Marcha favoreceria revisionismos do passado e seria um passo em direção ao conflito entre os uruguaios), ela inundava as ruas e avenidas, mobilizando sentidos de luto e de luta.

Portando um grande cartaz estampado com a consigna “VERDAD, MEMORIA Y NUNCA MÁS”, apresentada na convocatória publicada nos meios de comunicação, familiares de desaparecidos e mortos tomavam a frente na caminhada. Fotos das vítimas foram coladas a pequenas hastes de madeira e carregadas por familiares, amigos, companheiros de luta.

O grupo surpreendia não só pelo grande número (muito maior do que se poderia imaginar), mas por sua configuração: idosos, jovens, crianças. Sob o frio intenso daquele 20 de maio, o Uruguai marchava em silêncio. Dava-se início a uma longa marcha por justiça, longa e lenta marcha que construiria mais que uma memória compartilhada sobre os horrores de uma ditadura, mas uma luta comum por justiça sobre os fatos passados e por democracia para o presente e o futuro. Os sujeitos envolvidos naquele marchar não levaram para as ruas da capital apenas sua dor por familiares, amigos, companheiros de luta, mas seu manifesto silencioso por direitos essenciais, como à vida e à liberdade.

O silêncio dos sujeitos marchantes não significava sua resignação frente às injustiças, mas um discurso de protesto frente ao silêncio dos poderosos que insistiam em ocultar a verdade sobre seus crimes. Aquela primeira Marcha del Silencio, em 1996, abriu espaço para a discussão sobre as lutas pós-ditatoriais e suas pautas, suas demandas. O que era possível cobrar do Estado? Como abordar questões tão dramáticas como o desaparecimento de crianças e a morte de famílias inteiras? Que tipo de retratação seria capaz de suprir a ânsia por verdade e justiça? Em um momento de grande discussão sobre processos judiciais, investigações e punições, a Marcha ganhava força diariamente e passo a passo construía e mobilizava uma memória de resistência.

Já no dia seguinte à realização da Marcha, os jornais estampavam em suas manchetes o seu ineditismo e a imensa mobilização popular. Nesses discursos que se construía sobre o evento, o silêncio assumia lugar central. A maioria de nós conhece, empiricamente ou através de discursos sobre, os moldes de um protesto/manifestação popular de reivindicação por direitos na/da América Latina: canções, palavras de ordem, bandeiras de partidos políticos apoiadores do movimento e suas pautas... E se tal mobilização não contasse com grandes faixas nem bandeiras? E se, muito surpreendentemente, não houvesse cantos, discursos, palavras de ordem?

“Apenas” silêncio.

Cerca de oitenta mil pessoas, portando flores e bandeiras uruguaias, ocuparam a avenida 18 de Julio (principal avenida de Montevideú). Uma hora após o início da marcha, diversas quadras da avenida estavam tomadas, “pero a esa altura lo más impactante, más aun que el número, era el silencio casi absoluto. Ni solo un grito, ni sola una consigna, todo era silencio y emoción” (LA REPUBLICA, 21 mai. 1996, p. 02). 71 Descrita pelos periódicos (LA REPUBLICA, 21 mai. 1996, p. 2) como o episódio mais impressionante desde a queda da ditadura, a Marcha del silencio ocupou a capa de um dos principais jornais do país, estampando parte da multidão que se juntou ao caminhar silencioso.

O jornal uruguaio La Republica havia realizado uma grande cobertura sobre as discussões políticas que antecederam o acontecimento da Marcha e, no dia 21 de maio estampou em sua capa: Quem fará calar este silêncio? (LA REPUBLICA, 21 mai. 1996, p. 1, tradução nossa). Em pouco tempo,

os jornais uruguaios já nomeavam a marcha do dia 20 como Marcha del Silencio. Compreendo que tal nomeação (GUIMARÃES, 2005) significa não apenas por remeter à relação constitutiva entre o silêncio (e sua forma assumida) e a marcha, mas por mobilizar memórias da política de silêncio (ORLANDI, 2007) instaurada pelo governo ditatorial, política esta que causou os desaparecimentos e mortes pelos quais marcharam juntos, pela primeira vez, os uruguaios em silêncio.

Desde o ano de 1996, todos os anos, no mesmo dia, local e horário, a Marcha del Silencio inunda as ruas de Montevidéu (e, em alguns anos, também de algumas cidades do interior do país³⁹) com seus passos lentos, seu silêncio profundo e sua mirada para o futuro. A cada ano atraindo mais marchantes, os sentidos de tal marchar foram movendo-se, atendendo a ânsias de diferentes sujeitos, diferentes condições de produção: o pedido por verdade deixou de restringir-se aos casos das vítimas do período ditatorial, passando a tratar-se também de um manifesto pela democracia no presente e no futuro.

Como uma resposta positiva a tamanho empenho dos grupos de ativistas envolvidos com a organização e realização da Marcha, todos os anos o público compareceu em grande número e sempre configurando uma multidão de diversas idades, classes sociais e diferentes posições políticas. O silêncio da/na Marcha uniu, ao longo do tempo, partidários de diferentes vertentes, jovens e idosos.

Em 2006, quando se completavam dez anos desde sua primeira edição, a Marcha levou cerca de setenta mil pessoas à marcha. Atrás de uma grande faixa na qual se podia ler a consigna “Para el pasado, verdad. Para el presente, justicia. Por siempre, memoria y nunca más”, anônimos e grandes nomes da intelectualidade e da política uruguaia juntaram-se em um coro silencioso. A Marcha do ano de 2006 tornou-se emblemática não apenas por completarem-se dez anos desde a primeira vez em que o Uruguai viu seus cidadãos marchando em silêncio pela capital, mas pelas declarações presidenciais sobre ela. O então presidente Tabaré Vasquez afirmava, aos meios de comunicação, seu desejo de que a décima Marcha del Silencio fosse também a última, acreditando que no período de um ano (de 2006) seria possível esclarecer toda a verdade sobre o detidos desaparecidos, bem como assegurar o reconhecimento dos erros por parte do(s) governo(s). Mais uma vez, a voz do Estado encontrava um meio de tentar silenciar o oprimido, desta vez sob a promessa de resolução dos casos judiciais que há mais de um década tramitavam sem previsão de encerramento na justiça uruguaia.

Por outro lado, os oprimidos recusavam tal violência simbólica materializada na tentativa de silenciamento: “Aunque se sepa toda la verdad y se llegue a la justicia, las marchas deben seguirse haciendo para que las generaciones futuras sepan lo que pasó en este país” (REL UITA, 2005, s.p.)⁴², declarou a fundadora da Associação de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, Luisa Cuesta, em réplica à controversa declaração de Tabaré Vasquez⁴³. Quase dez

anos depois, em 2015, organizava-se uma intensa agenda de atividades culturais e políticas para celebrar as vinte edições da Marcha del Silencio. Composta por exposições fotográficas a céu aberto, instalações no museu Subte (localizado no subterrâneo de uma praça no centro da capital e mantido pelo poder público), peças teatrais, exposição de documentários e rodas de debate, a agenda em homenagem à XX Marcha del Silencio fez com que a cidade de Montevideu voltasse a ser palco de uma intensa discussão sobre a ditadura civil-militar enfrentada pelo país, passados quase quarenta anos. No dia 20 de maio, novamente fez-se silêncio e fez-se marcha. Nessa ocasião, junteime pela primeira vez ao coro silencioso, àquele mar de gente que inundou o centro da capital com seus cartazes pedindo por justiça, por verdade, por seus familiares. Marchamos ao lado de senhoras de cabelos brancos que ainda buscam, sem muitas esperanças, seus filhos e suas filhas. Marchamos ao lado de homens e mulheres que ainda esperam saber a verdade sobre o desaparecimento de seus pais, irmãos, maridos. E também marchamos ao lado de jovens e crianças que, como nós, tiveram a sorte de não conhecer uma ditadura - porque alguém, antes, lutou pela democracia. Os jornais falavam em cerca de cem mil pessoas em silêncio, “la gente llenó casi diez cuadras en el recorrido” (EL OBSERVADOR, 2015, s.p.).

Diferentemente dos anos anteriores, esta edição contou com um telão instalado em frente ao prédio da Intendência de Montevideu, no qual foram projetadas as fotos de cada um dos mais de duzentos desaparecidos. A cada nova foto o som a palavra “presente” rompia o silêncio, causando além do estranhamento, um enorme desconforto naquela afirmação de presença pela ausência e da ausência pela voz de milhares de pessoas que davam voz àquele silenciado.

SILÊNCIO(S): RETÓRICA DO OPRIMIDO

“Que escadas, que andaimes constroem o silêncio?

Onde o silêncio principia?

Onde ele começa é claro ou escuro?

É no silêncio que se ouvem as vozes dos deuses?

Que lugar faz o silêncio?”

(Sergio Fingermann¹⁰⁸)

Ancoramo-nos nas reflexões da Análise de Discurso francesa (que apresenta – algo como uma – matriz na obra de Michel Pêcheux e vem sendo desenvolvida com fôlego no Brasil, tendo como nome de grande relevância a professora e pesquisadora Eni Orlandi) para compreender o funcionamento da língua e da linguagem, pensando-a “não como um sistema (o software de um

¹⁰⁸

Poema do livro “Elogio ao Silêncio e alguns escritos sobre pintura”. São Paulo, BEI, 2007.

órgão mental!), mas como um real específico formando o espaço contraditório das discursividades” (Pêcheux, ano, p.228). Se, para Pêcheux, a língua é a base material para processos discursivos e o discurso é a base material por excelência da ideologia (VER QUAL), compreendemos que língua e discurso estão afetados pela ideologia: materializam-na.

Compreendemos também, via reflexões da Análise de Discurso, que o discurso pode apresentar-se em diversas materialidades – isto é, em diversos níveis

“de existência sócio-histórica, que não é nem a língua, nem a literatura, nem mesmo as “mentalidades” de uma época, mas que remete às condições verbais de existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) em uma conjuntura histórica dada.” (Pêcheux, 2014. p.152).

Assim, a Análise de Discurso vem tomando como objeto e produzindo conhecimento sobre o discurso em suas materialidades mais diversas: tomemos seu desenvolvimento no Brasil e teremos diversos estudos sobre o discurso do corpo, da cidade (desenvolvido com excelência pelo Laboratório de Estudos Urbanos na UNICAMP) e (por que não?) o silêncio.

Eni Orlandi, em sua obra “As formas do Silêncio – no movimento dos sentidos” (Editora Unicamp, 2010), empreende um estudo em que o silêncio está no centro de uma reflexão discursiva: o silêncio deixa de ser o “nada”, deslocando-o de sua “posição secundária como excrescência, como o “resto” da linguagem” (Orlandi, 2007, p.12) e, em eu trabalho, “o erige em fator essencial como condição do significar” (idem). Para a autora, o silêncio passa a ser um espaço (discursivo) de possibilidade dos sentidos, de fôlego para a significação e de movência do(s) sujeito(s): “Significa que o silêncio é a garantia do movimento dos sentidos” (Orlandi, 2007, p.23). Afastando-se de uma compreensão religiosa, mística ou reducionista do silêncio, Orlandi apresenta-nos uma leitura afastada da evidência: o silêncio significa e significa em si mesmo.

Assim como Kovadloff (1993) que não se interessa “pelo semblante explicável do silêncio” (p.10), mas por um silêncio que “não encontra, nem pode encontrar equivalência na palavra” (idem), Orlandi (2010) preocupa-se em não buscar palavras que “traduzam” o silêncio. É de interesse da autora, como analista do discurso, compreender **como** significa o silêncio, quais os efeitos de sentido que é ele capaz de provocar em determinadas condições de produção. O silêncio, sendo discurso, terá também a propriedade constitutiva de suscitar sempre outros sentidos: a cada leitura, a cada interpretação, a cada sujeito que significar/significa-se nele/com ele.

Trazemos à baila a noção de condições de produção: conceito caro às análises discursivas, que ajuda-nos a compreender a constituição do discurso como sócio-histórica. Pêcheux (AAD69) pensa as condições de produção (CP) como o espaço sócio-histórico em que se constituem os discursos – afastando-se de uma concepção pragmática de contexto que influenciaria a construção dos

discursos, o filósofo crê que as CP não exercem uma influência externa, mas são constitutivas do mesmo.

Se as CP são sociais e históricas, podemos compreender que estará em funcionamento na constituição do discurso, também, a ideologia e a memória. Interessa-nos especialmente a relação desses dois elementos na constituição do discurso, em funcionamento concomitante com o sujeito que o constrói.

Como mencionado anteriormente, a ideologia encontra no discurso sua materialidade por excelência: é no discurso que podemos apreender seu funcionamento, através de gestos de interpretação orientados por nosso dispositivo teórico e analítico.

Pêcheux (2009) propõe uma articulação da Linguística com a teoria histórica dos processos ideológicos e pensa tanto o discurso quanto o sujeito atravessados pela ideologia (lembramos que, para o autor, é pela interpelação ideológica que indivíduo se constitui em sujeito, capaz de significar e significar-se pelo discurso). Para o autor, “todo processo processo discursivo se inscreve numa relação de luta de classes” (Pêcheux, 2009, p.82) e, em sendo assim, o sujeito produzirá discursos que orientam-se por uma ideologia que está em funcionamento na classe à qual se identifica.

Então, compreendemos a *Marcha del Silencio* como parte de um discurso de sujeitos marcados por uma memória social e coletiva (HALBWACHS, 1998) de um período em que as condições de produção impunham o silêncio, compreendido aqui como efeito de um processo de *silenciamento* (ORLANDI, 2007), silêncio local, da interdição do dizer, da(s) proibição. Entretanto, não é desse silêncio que trata a *Marcha*.

Pensemos: nas décadas de 1970 e 1980 havia uma *real* interdição de dizeres, a censura materializava o silêncio e impunha aos sujeitos a condição de silenciados. Não apenas a censura agia como prática de calar, mas também os processos de exílio e, sobretudo, os assassinatos e desaparecimentos forçados (que configuram um silêncio que até hoje significa). Já na década de 1990, mais precisamente em 1996, quando inicia-se o processo de abertura de processos contra o Estado uruguaio, a fim de investigar-se os crimes ocorridos durante a ditadura civil-militar, não há mais tal prática política de imposição do silêncio. Em um regime democrático, os sujeitos tem liberdade para expressar suas opiniões, suas demandas, lutas, sejam elas em nível jurídico ou nas ruas, com palavras de ordem, cantos e cartazes.

Compreendemos que os sujeitos envolvidos na concepção, organização e realização da *Marcha del Silencio*, ao tomar o silêncio como materialidade simbólica significativa (ORLANDI, 2007) capaz de discursivizar sua luta por verdade e justiça, realizam um movimento que ressignifica o silêncio, apelando para a memória: está em jogo de significação não mais o silêncio da imposição do calar, da interdição, da autoridade, da violência simbólica, mas o silêncio agora outro, silêncio que retoma essa memória para significar luta, para significar a voz do oprimido.

Acreditamos que tal movimento (dos sujeitos, não unívocos, e dos sentidos no/do silêncio, ambos em relação não engessada com as FD e suas ideologias) configura o que Orlandi (2010) chamou de “retórica da resistência” (p.85), que faz o silêncio – promovido por uma “retórica da opressão” – significar de outros modos. Para compreender tais sentidos outros é preciso que consideremos que a significação do silêncio está atravessada pela história, pela memória e pela ideologia. É preciso que em nossa leitura mobilizemos dimensões que tocam as condições de produção do(s) silêncio(s) e do(s) sujeito(s) que significam(-se) no/pelo silêncio.

De onde miramos este silêncio que nos intriga, ele não é transparente, não é o nada, não é o simples calar do oprimido: é um discurso de sujeitos que, determinados por uma constituição sócio-histórica específica, contra-identificam-se (PÊCHEUX, 2009) e buscam ressignificar para significarem-se, interpelados por “alguma coisa de outra ordem” que “colocam em xeque a ideologia dominante tirando partido de seu desequilíbrio” (PÊCHEUX, 2009. P.278).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ALTHUSSER, Louis.** Aparelhos ideológicos de estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985
- CAETANO, G.; RILLA, J.** Breve historia de la dictadura: 1973 - 1985. Montevideu: Ediciones de La Banda Oriental S. D. R., 1987.
- HALBWACHS, M.** A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 1998.
- ORLANDI, E. P.** As formas do silêncio. Campinas, Pontes: 2007.
- _____. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 10. ed. Campinas: Pontes, 2012. 78
- _____. Maio de 1968: Os silêncios da memória. ACHARD, Pierre [et al.]. O papel da memória. Tradução de José Horta Nunes. 4. ed. Campinas: Pontes, 2015. p. 59-71.
- _____. Os falsos da forma. In: ORLANDI, E. P. Palavra, Fé e Poder. Campinas: Pontes, 1987, p. 11-28.
- _____. Terra à vista: discurso do confronto: velho e novo mundo. 2. ed. São Paulo: Unicamp, 2008.
- ORLANDI, Eni de Lourdes Puccinelli; SOUZA, Tânia de.** A língua imaginária e a língua fluida. In: **ORLANDI, E. P.** (Org.). Política Lingüística na América Latina. Campinas: Pontes, 1988. p. 27-40.
- PADRÓS, J. E.** Como el Uruguay no hay: Terror de Estado e Segurança Nacional Uruguai (1968-1985): do Pachecato à Ditadura Civil-Militar. 2005. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- PÊCHEUX, M.** O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni P. Orlandi. 4. ed. Campinas, Pontes: 2006 [1988]. _____. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre [et al.]. O papel

da memória. Tradução de José Horta Nunes. 4. ed. Campinas: Pontes, 2015. p. 43-51. _____. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de Eni Puccineli Orlandi [et al.]. 5. ed. Campinas: Unicamp, 2009 [1988].

PÊCHEUX, Michel; FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectivas. In: GADET, F.; HAK, T. (Orgs.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Tradução Bethânia Mariani [et al.]. Campinas: Unicamp, 2009 [1969].

VILLALOBOS, M. A. Tiranos, tremem! ditadura e resistência popular no Uruguai: 1968- 1985. Porto Alegre: EDUPUCRS, 2006

Realidad y potencialidad contra hegemónica de los derechos humanos. Un análisis desde la construcción socio histórica del poder popular en América Latina.

Iver Aracena.

Doctorante Estudios Latinoamericanos.

Universidad Nacional Autónoma de México

Inicio con un breve panorama histórico actual sobre el uso hegemónico de los DDHH (la realidad de la dominación) para luego internarme en lo que llamo y defino más adelante como realidad y potencialidad contra hegemónica de los derechos humanos (que para términos de esta ponencia lo reflexiono en vínculo al poder popular).

En el México del siglo XXI desde las interpretaciones más liberales se habla de crisis de DDHH, entendiendo a esta como un problema burocrático de fallas administrativas, o como producto de malas políticas de seguridad, o simplemente una anomalía del mercado. Se pretende situar el eje explicativo de esta crisis en problemas como el narcotráfico o en aspectos propios de una identidad colectiva-cultural de quienes construyen la política institucional. Análisis que se quedan en la apariencia que no permiten llegar a la profundidad de un fenómeno político social que es estructural del capitalismo. No es una crisis porque está en su esencia, es su corazón palpitando.

Como se escucha en la calle: *Ayotzinapa no es una hecho aislado, es la viva imagen de la represión de estado.* Pero no es sólo represión, coerción, es creación de un orden social, es legitimación.

Legitimación determinada históricamente por lo que René Zavaleta (siguiendo a Marx) llamó el momento constitutivo, donde la acumulación originaria requiere la “producción de individuos libres, jurídicamente iguales” que a la larga permite la subsunción real del trabajo al capital (mediante la revolución de las bases materiales de producción). Este momento constitutivo lleva a la implantación hegemónica de un tipo particular de intersubjetividad que se construye en base a una identidad mercantil. En la base de esta construcción encontramos los derechos humanos llamados de “primera generación”, derechos individuales, que bajo una apariencia de universalidad abstracta ocultan una estructura asimétrica.

Un proceso socio-histórico actualizado en la constante renovación de acumulaciones originarias, la cual requiere la inversión máxima en el control social y políticas securitarias, contemporánea construcción del capitalismo periférico que define a México y Latinoamérica, nutriendo el proceso central de acumulación. Si bien según datos del Banco Mundial, América Latina representa el 5% de la economía global, lo central es que sus territorios contienen importantes reservas de recursos estratégicos como lo son los recursos hídricos, minerales, petróleo, gas y biodiversidad (Ceceña; 2013).

En este contexto los derechos humanos como un espacio de negociación, de tensión entre la alianza Estado-capital nacional e internacional y diversos procesos organizativos de base. Veamos ese espacio de tensión como una serie de trincheras que la praxis y el discurso de los derechos humanos va construyendo ante el avance de una hegemonía política cultural. En el México actual estos procesos organizativos utilizan esta herramienta para defenderse de los embates neoliberales y articular sus luchas.

Realidad de la dominación: los derechos humanos se transan y negocian para favorecer y configurar “nuevas formas de desarticulación de los de abajo”.

Algo obvio pero invisibilizado...el derecho internacional es creado por los mismos miembros a los cuáles se les aplica (las reglas las crea el Estado). Los principales problemas que surgen en esta lógica son la impunidad, tratados no vinculantes, la preservación del status quo y la legitimación de las políticas de seguridad nacional¹⁰⁹. Un escenario definido por las negociaciones entre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el capital transnacional ha tenido éxito en capturar los diversos Foros de Derechos Humanos de la ONU. Recientemente (más específicamente el 27 de Abril del 2016) el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en el Seminario teológico de la unión en la ciudad de Nueva York este, luego que le preguntarán por el aumento continuo de la muerte de activistas indígenas quiénes se oponen a proyectos de desarrollo, dijo, textualmente “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y que no sucedan algunos de estos incidentes”.

Si para el presidente del Banco Mundial, el asesinato de personas como Berta Cáceres son incidentes ¿Qué justicia podemos esperar a nivel internacional?

El conflicto es aún mayor si profundizamos sobre el lugar del Banco Mundial y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, órgano central del grupo del Banco Mundial), actor clave de la gobernanza global, principal fuente multilateral de préstamos y asistencia técnica para los países en desarrollo y por ende agentes definitorios de las políticas públicas latinoamericanas y mundiales¹¹⁰. ¿Está de acuerdo el Banco Mundial en construir políticas públicas en base a un respeto a las normas internacionales de derechos humanos y a los DESCAs en particular?

Las principales demandas provenientes de organismos internacionales de DDHH y ONGs hacia el Banco Mundial se argumentan (1) en dinámicas que implican proyectos de infraestructura con consecuencias en el desplazamiento de personas; (2) el financiamiento de gobiernos autoritarios o

¹⁰⁹ Posibilidades y límites en la praxis de los derechos humanos. Encuentro de crítica jurídica, 5 de abril, César Contreras León.

¹¹⁰ De acuerdo a su página oficial, durante el año 2013 el Banco Mundial le prestó a 31 países una suma total de \$9.332.615.273 dólares.

con un pésimo record en DDHH; y finalmente (3) en los efectos cuestionables de los programas de ajuste para los derechos económicos y los condicionamientos implicados en términos de derechos políticos (Bank Information Center, 2013). Frente a este escenario

Las directivas del Banco han sido muy reticentes en aceptar responsabilidades en la materia apelando fundamentalmente a su apoliticidad, prevista en su tratado de conformación, la cual por lo demás según algunos se sustenta en un derecho humano de carácter colectivo como es la autodeterminación de los pueblos. Así las cosas, el BM no podría intervenir en los temas de DDHH al ser temas políticos propios de la autodeterminación nacional. Por lo demás señalan que sin su financiamiento, la situación podría ser peor y que sus estatutos le prohíben valorar la situación política de un país a la hora de aprobar y entregar un préstamo (Burgos, 2015; 253).

Otro argumento importante es un presupuesto lógico, que no es propio sólo del Banco Mundial, sino también la base ideológica de la construcción hegemónica de los DDHH: la consideración que la búsqueda del desarrollo, entendido como su objetivo principal, permite avances en DDHH. Al respecto el Sistema de Naciones Unidas a través de la Declaración y el Plan de Acción de Viena establece que la democracia, el desarrollo y los derechos humanos se refuerzan mutuamente (PNUD, 2004). Frente a este presupuesto, lo que nos muestra la realidad latinoamericana, es que es una falacia pensar que desarrollo- progreso van de la mano con los DDHH.

A este escenario hay que sumar el hecho que muchas corporaciones, tales como Vale, Rio Tinto, Barrick Gold entre otras, no solo participan activamente en estos Foros donde se definen los rumbos de los DDHH, sino que trabajan con la ONU para mantener directrices voluntarias basadas en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que no se destinan a parar y punir las violaciones de los derechos humanos por parte de las transnacionales. Como señala Juan Hernández del Instituto Hegoa (País Vasco): “Se trata de códigos no vinculantes, sin mecanismos de aplicación y se basan en los informes de las mismas transnacionales sobre su actuación supuestamente responsable, mientras que los abusos y crímenes corporativos ocurren de manera sistemática”

En el México contemporáneo el avance de la modernidad capitalista expresado en determinaciones jurídicas concretas. Algunas relevantes en lo que va del año: ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México¹¹¹, las reformas al Código de Justicia Militar que faculta a los militares a realizar cateos domiciliarios, autoriza la intervención de comunicaciones privadas que se

¹¹¹ llamada por los medios de comunicación como Ley Atenco y desde la organización social como ley Eruviel, propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, PRI, y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo pasado. Resumidamente sus principales consecuencias para la organización social serían la criminalización de la protesta e impedimento de reunión en espacios públicos. Ley que permite que se repitan otros “Atencos” sin responsabilidad de altos mandos del ejército ni de las autoridades estatales y nacionales. A modo de ejemplo, el artículo 15: “Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá”.

realicen de forma oral, escrita o por medios electrónicos y digitales, y restringe el acceso a los periodistas a los juicios orales castrenses¹¹².

Tema aparte las implicaciones en materia de seguridad de la firma del tratado de TPP y la Ley Federal de las zonas económicas especiales.

Y no es que sea sólo que leyes de este calibre rijan nuestro cotidiano, sino que cuando no es conveniente para el “desarrollo”, las resoluciones de la corte suprema de justicia no se consideran.

Vemos el ejemplo de Xochicautla: el proyecto de construcción de la autopista privada de cuota Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Constructora Teya (la cual es filial del Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, amigo personal de Enrique Peña Nieto). A pesar de que los comuneros indígenas han tenido triunfos legales ante tribunales federales e incluso ante Poder Judicial de la Federación¹¹³, el Estado mexicano ha vuelto a actuar en contra del Derecho y los derechos humanos, al irrumpir violentamente en la comunidad y destruir propiedad común y privada, además de infraestructura pública.

Entonces,

Ya vemos que a nivel internacional la justicia es simbólica, que por tanto ésta sólo se puede conseguir a nivel nacional

¿Pero cómo le hacemos si en México no hay un Estado de derecho?

Por otro lado las normas legales, en el mejor de los casos, no sirven para solucionar conflictos, sino que los desplazan.

De tal manera una realidad definitoria es que la justicia no puede reducirse a la ley y al derecho

¿Pero entonces, dónde buscamos la justicia? ¿Y qué justicia buscamos como sociedad?

Preguntamos con el Galeano del mes de julio del año 1988 en el encuentro Internacional por la democracia en Chile

¿Sería bella la belleza si no fuera justa? ¿Sería justa la justicia si no fuera bella?

Esta es la realidad.

Pasando ahora a la potencialidad, pensando en los límites jurídicos y políticos de los derechos humanos, una revisión general de diversa literatura sobre el tema da cuenta que éstos han sido practicados y teorizados principalmente a nivel de demanda, en términos jurídicos y sociales, desde una politicidad de corto alcance, sin incluir un horizonte emancipatorio. Desde este punto lo que me interesa vislumbrar es la construcción de subjetividades sociopolíticas en torno a los DDHH, acercarnos una noción de sujeto como horizonte interno de

¹¹² Aprobada la madrugada del 28 de abril recién pasado, sin mayor discusión en ambas cámaras legislativas.

¹¹³ El juez quinto de distrito en materia administrativa y de amparo decretó en febrero pasado la suspensión definitiva, en donde ordena al concesionario a no realizar obras ni invadir predios de Xochicautla, hasta que no se emita la sentencia final en este juicio de amparo.

construcción que permita reflexionar en torno a las posibilidades emancipatorias de tal praxis (y por ende, reflexionar en torno a las dinámicas despolitizadoras y desmovilizadoras que la pueden definir).

Problematizar este nudo conceptual, desde la noción de praxis, siguiendo en esto al profesor Modonessi, entendida como una experiencia política que perdura, más allá de la protesta (en donde se posiciona una demanda en vínculo a una queja). Acá se ancla lo que denomino realidad y potencialidad contrahegemónica de los derechos humanos: un posicionamiento social y político en donde los derechos humanos tienen un lugar estratégico para la construcción de un hacer y un pensar crítico-constructivo en las diversas clases y sectores populares.

De esta definición pienso en un criterio central para analizar si existe un uso contrahegemónico de los derechos humanos: la dimensión de estrategia-táctica política encauzado a la construcción de un horizonte emancipatorio.

Entremos entonces a la teoría de la estrategia y la táctica política (que es la dimensión que nos enlaza con el poder popular). Siguiendo en este punto al profesor Carlos Ruiz, miramos hacia los dilemas de construcción de las fuerzas sociales y posibilidades de proyección política como una doble tarea: debilitar, desarticular, transformar el escenario hegemónico, y luego, la producción de una fuerza, procesos que se condicionan mutuamente de manera dialéctica.

La táctica desde la parcialidad, principalmente desarticula, en términos de DDHH la demanda cotoplacista, necesaria pero no suficiente.

Se requiere la estrategia, la visión de totalidad que permite la conformación de un horizonte político e impedir esta visión es un aspecto fundamental de la dominación. Es decir la acumulación de fuerzas de los que están abajo está definida por los modos de dominación en la medida que impidiendo esa visión niegan otras formas de politicidad. La visión de totalidad le da sentido y dirección a la voluntad de acción que surge ante la comprensión de los modos de explotación.

Esta entrada nos lleva a pensar en la tradición del poder popular latinoamericano porque justamente lo que ha caracterizado este modo organizativo es su capacidad de pensarse y auto organizarse en base no únicamente a un espontaneísmo de la acción social sino también como una autonomía que disputa la política. Como señala Miguel Mazzeo:

“la construcción del poder popular es básicamente la construcción de nuevas relaciones sociales alternativas basadas en la auto-organización pero, lo que es central, se vincula al desarrollo desde debajo de una nueva institucionalidad, desde la construcción de organizaciones y espacios autónomos y, paralelamente, a la vocación por su articulación (p. 156-157)

Desde acá entendemos al poder popular como medio fin, como una “dimensión performativa” en palabras de Mazzeo. Para este autor es necesario poner en el centro el desarrollo de una praxis

prefigurativa que permita identificar el “aquí y el ahora” del horizonte estratégico, interrogándose por cuáles vendrían a ser las relaciones entre las herramientas políticas (las condiciones para que esas herramientas políticas expresen esta conciencia gubernamental) y la experiencia de la movilización del pueblo como Estado, y a la vez también supere las limitantes que le pueden generar las prácticas de burocratización y cooptación (Urrutia y Seguel, 2015; 29). Dotar al movimiento popular organizado formas de mediación institucional posibilitando el desarrollo de una conciencia gubernamental del pueblo (la conciencia de que el pueblo en tanto productor de lo social, puede y debe ser quien se gobierne).

De esta manera, considerando que los derechos humanos son una ideología dominante de nuestro tiempo, y en el caso de México, aglutina fuertemente a la movilización social, cabe preguntarnos...

Desde los derechos humanos ¿se crea capacidad política popular? (en términos de Gramsci, ¿ocurre una conversión de masas populares en masas dirigentes como transformación política-cultural?)

Para analizar esto es necesario mirar hacia el modelo o formato organizacional en torno a los derechos humanos (pautas de politización en torno a los derechos humanos), mirar hacia el tipo de sujeto(o) político que se está construyendo.

¿Y por qué es importante reflexionar e investigar sobre esta dimensión?

Porque hay riesgos en la lógica de los derechos humanos, hay riesgos y hay trampas. Trampas que es necesario ir descifrando, reflexionando para ver como se reactualiza la ingeniería del dominio, como se desarticulan memorias y dignidades. La teoría y la práctica de los DDHH corre el gran riesgo de ser puramente ideológica, altamente despolitizadora principalmente en el encubrimiento de la responsabilidad política asociada al poder. Naturalizar y otorgarle legitimidad a un determinado modo de funcionamiento social, económico, político y cultural. Lo que sostienen los DDHH en su modo hegemónico es una determinada idea de democracia y libertad¹¹⁴, en la cual tod(a)os somos ciudadan(a)os, tod(a)os tenemos los mismos derechos, pero queda en evidencia que esto es a un nivel abstracto, pues en la realidad no ocurre de esa manera.

A nivel latinoamericano existe un movimiento contemporáneo de los derechos humanos que surge en el período de las dictaduras del cono sur. Principalmente una herramienta de denuncia, una plataforma para visualizar a nivel nacional e internacional los efectos que implicó la instauración del neoliberalismo en el continente. En este mismo período en México una guerra sucia, desgranada

¹¹⁴ Nos dicen: vivimos en democracia y por ende en plena libertad de elección. Su modo de mantener esta democracia en el México actual es la generación del miedo social, expresado en distintas dimensiones. Miedo a quedarnos sin trabajo, a quedarnos sin dinero para la renta, miedo a la delincuencia y el narcotráfico, miedo generado por la violencia directa como hemos visto recientemente con el actuar del gobierno de Peña Nieto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE) (en su intento de imponer una reforma educativa de carácter neoliberal, dictaminada desde la OCDE y la élite empresarial mexicana). Si la libertad es no tener miedo (como señala Nina Simone en una entrevista en 1968, Nueva York) ¿de qué libertad hablamos cuando ésta justamente se sustenta en el miedo?

por el país pero con un foco importante en Guerrero. En este trayecto se genera un proyecto histórico en torno a los derechos humanos que se caracteriza en términos de prácticas políticas por un fuerte sentido legalista-judicial como señala Óscar Correas.

Siguiendo ahora a Rita Laura Segato, en la posibilidad de reclamar acceso a recursos y garantías de derechos, hay un precio a pagar por esta conquista que es alto, referido a la *pérdida de la memoria de las finalidades alternativas*: lo que es reclamable o deseable también llega definido, como una finalidad impuesta. La conciencia de la pluralidad de las aspiraciones humanas es disuadida, y un determinismo del origen sustituye el principio de que lo que une a los seres humanos es el tipo de mundo que defienden. Junto a esto se da una pérdida de tradición, de la imaginación apoyada en soluciones culturales peculiares y un olvido de las formas de convivencia que no caben en este modelo y que son propias de nuestro sincretismo latinoamericano.

Hay una visión de mundo tras los derechos humanos, se construye sentido común a la manera gramsciana que permite la instauración de una hegemonía.

Pues bien, para cerrar señalar que en este análisis será necesario ir descifrando el lugar de los derechos humanos en los nuevos modos de dominación y paralelamente lo que sucede cuando diversos procesos organizativos se posicionan en tal defensa.

Ciudad y paz territorial. Una reflexión desde las luchas urbanas en Bogotá, Colombia.¹¹⁵

Sandra Carolina Bautista Bautista

Docente de la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia

sancbautista@unisalle.edu.co

Introducción

Uno de los elementos más trascendentes del momento histórico que se vive en América Latina radica en el avance decidido de los diálogos de La Habana, establecidos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). La larga confrontación armada de más de seis décadas en Colombia, ha afectado tanto el ámbito nacional como el regional, facilitando entre otras cosas, el impune intervencionismo político-militar de los Estados Unidos en América Latina, parapetado en la lucha contrainsurgente y frente al narcotráfico. De manera que el tema es de total relevancia en perspectiva continental.

El pasado 23 de junio se firmó el último de los acuerdos parciales, asociados a cada uno de los cinco puntos de la agenda, relacionado con el fin del conflicto y la dejación de armas¹¹⁶. De manera que el tránsito de las FARC-EP como guerrilla más antigua de América Latina, a movimiento político legal se concibe como un hecho cuyos momentos decisivos próximos se encuentran en la firma del acuerdo final y en la aprobación del plebiscito que le daría respaldo popular a lo pactado entre gobierno e insurgencia.

En el marco de los más diversos enfoques y la amplia gama de asuntos que emergen al abordar el tema de la paz, se ha optado por discutir el concepto de paz territorial desde los aportes y prácticas de organizaciones sociales urbanas, en el marco de una perspectiva crítica. La noción de paz territorial ha ido emergiendo en el proceso de diálogo y en los diferentes acuerdos parciales logrados hasta el momento entre las partes; ha ido cultivando titulares de prensa y columnas académicas y políticas. Pero al ser una categoría en ciernes, invita a su discusión y problematización.

El carácter de la agenda y los acuerdos logrados hasta el momento, ha planteado un énfasis en la situación del campo y en la participación política, situación totalmente razonable en la medida en que, al decir de Alfredo Molano (2015), dos tipos de disputas se han establecido como causas

¹¹⁵ Ponencia presentada a las III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe: escenarios en disputa. Eje 7: Luchas populares y movimientos sociales.

¹¹⁶ Los diálogos de La Habana iniciaron en el segundo semestre de 2012. La agenda pactada incluye cinco puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de drogas ilícitas; 5. Víctimas. A la fecha (11 de julio de 2016), se han firmado acuerdos parciales en todos los puntos y quedan pendientes salvedades en al menos dos (1. Política de desarrollo agrario integral y 4. Solución al problema de drogas ilícitas), así como la firma del acuerdo final. Esta última marca el inicio del tiempo pactado para el proceso de dejación de armas

históricas de la confrontación armada: las disputas por el Estado y por la tierra. No obstante, no es factible pensar la superación de la dinámica de guerra en el ejercicio de la política en Colombia sin hacer la necesaria reflexión sobre las dinámicas de la ciudad y lo urbano.

Se explora la discusión apelando a la mirada planteada por diferentes procesos organizativos de la ciudad de Bogotá. Lo anterior ya que es vital subrayar que el debate guerra-paz vincula no solo al Estado, las insurgencias, la comunidad internacional, sino que tiene como sujetos activos a las diferentes expresiones del movimiento social, en particular porque ha sido el principal protagonista en la exigencia de construcción de paz.

Debates en torno a la paz

En primera instancia, es importante reconocer que no existe una única forma de comprender lo qué es la paz, ni en el bloque dominante, ni entre los sectores populares. El empeño del gobierno de Juan Manuel Santos por llevar adelante las negociaciones de paz con las FARC-EP y con el Ejército de Liberación Nacional, evidencia la intención de un sector de las clases dominantes por cerrar el frente de guerra contrainsurgente y posibilitar la ampliación de la lógica de acumulación capitalista en las zonas que hasta el momento el Estado colombiano no ha logrado dominar militarmente. Se trata de la burguesía ligada a la gran industria, el capital financiero, los agronegocios, grandes comerciantes y actividades minero energéticas. Desde su perspectiva, el escenario posterior a la firma de un acuerdo con las FARC-EP, o escenario posacuerdo, es ante todo una posibilidad para realizar nuevos negocios, en un contexto en el que la guerra contrainsurgente deja de ser la bandera fundamental para la aplicación de la violencia que es propia del capitalismo.

La intención de profundizar las lógicas del capitalismo -por ende de la explotación, la desigualdad social y la destrucción de la naturaleza-, se hacen evidentes en declaraciones como las de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y actual presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, la estatal más importante del país, quien ha asegurado sin el mínimo recato que “la paz nos va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto”(El Espectador, 2016). Lo anterior en el contexto de crisis civilizatoria que sacude al mundo, la región y el país, y que en el caso colombiano se expresa, entre otras cosas, en una frágil situación económica, el alarmante crecimiento de la desigualdad y la devastación de la naturaleza que azota en grado sumo las regiones sometidas al yugo de la explotación minera.

Si bien las élites se han esforzado por ocultarla crisis, afirmando que otros países en la región latinoamericana se encuentran en peores condiciones, todos los indicadores muestran que nuevamente Colombia enfrenta las idas y venidas del capitalismo. De tal manera, en los últimos cinco años el Producto Interno Bruto ha caído constantemente y pasó de crecer al 6,6% en 2011 al

2,5% en 2015. Uno de los factores de mayor impacto ha sido la crisis del sector petrolero¹¹⁷ que implicó reducciones sustanciales de las exportaciones¹¹⁸ y del presupuesto público¹¹⁹.

Lo anterior es el resultado lógico del modelo neoliberal impuesto, anclado en la dependencia de productos primarios y el extractivismo. Desde los años noventa las clases dominantes sometieron al país a padecer los horrores de la violencia oficial y paramilitar para implantar los procesos de despojo que le dieron vía libre al capital trasnacional en sectores como el minero energético. Posterior al experimento de la palma aceitera, promovido por los sucesivos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006;2006-2010), y que dejó millones de víctimas, finalmente la lógica de la ganancia inclinó la balanza a favor de las trasnacionales y los negocios del petróleo, el carbón y el oro con la denominada locomotora minera de Juan Manuel Santos.

Tras un quinquenio de boom petrolero y la crisis profunda del sector, el proceso de paz es visto por los sectores de clase favorables a los diálogos como una suerte de salvavidas que permite vincular nuevas zonas a la dinámica neoliberal. Tal y como lo afirma Echeverry:

La paz cada día es más importante para la economía colombiana, porque nos va a ayudar a construir la nueva economía. (...) Pasado el boom de los productos básicos, del petróleo, de los minerales, esa nueva economía va a estar cimentada sobre la agricultura, el turismo, la industria, y sectores que dependen críticamente de que logremos la paz (El Espectador, 2016).

Por lo tanto y desde el punto de vista de estos sectores, la apuesta central en el escenario posacuerdo sería profundizar las garantías al gran capital a través de legislación favorable a sus intereses y en los sectores que habrán de colonizar las regiones que se “liberen” de la confrontación armada.

Pero en la medida en que la guerra en Colombia se ha convertido en un producto de exportación y fuente para el ejercicio de poder de sectores militaristas, también se han propuesto asegurar la continuación de la guerra que, de contrainsurgente, pasa a dar mayor énfasis a la lucha contra las drogas. Según Juan Carlos Pinzón, ministro de dicha cartera en el periodo 2011-2015 y actual embajador en los Estados Unidos, más que una institución del Estado se trata de uno poderoso grupo empresarial, ya que agrupa a 19 firmas concentradas en el Grupo Empresarial y Social de la Defensa, con utilidades que superan los \$180.000 millones y exportaciones cercanas a los \$30.000 millones durante el 2014 (Revista Dinero, 2015). Mediante la producción y venta de armas,

¹¹⁷ Mientras que en junio de 2008 el barril de petróleo se cotizaba a más de 140 dólares el barril, en enero de 2016 se transaba en el mercado por poco menos de 28 dólares el barril.

¹¹⁸ Según cifras del DANE, entre enero y marzo de 2014 las exportaciones en Colombia ascendieron 4.408 millones de dólares, mientras que para el mismo periodo de 2016 fueron tan solo de 2.301. Lo anterior quiere decir que las exportaciones se redujeron a la mitad.

¹¹⁹ Entre 2015 y 2016 el Presupuesto General de la Nación (PGN) se redujo en 40,6 billones de pesos, es decir en un 12,12%.

explosivos, incluso aviones y buques, y con el entrenamiento de personal -alrededor de 18.000 militares y policías de 63 países y en Colombia en los últimos cinco años- las Fuerzas Militares se han insertado en el mercado internacional. De tal manera, las clases dominantes han convertido en negocio la brutalidad de la guerra y el exterminio, lo que constituye una amenaza a las posibilidades de democratización no solo para del país, sino para toda Nuestra América.

El propósito de dar continuidad a la guerra se evidencia también en la agenda del denominado Plan Paz Colombia, pactada en enero de 2016, y con la cual se supone que el gobierno de los Estados Unidos da un giro en su estrategia de intervención, conocida anteriormente como Plan Colombia. Vale recordar que este nefasto plan permitió ampliar el control militar en el hemisferio con la instalación de siete bases estadounidenses en territorio colombiano; fue un elemento decisivo para recrudecer la guerra al entregar más de 9 billones dólares en 15 años, y dejó más de 5 millones de víctimas fatales, entre las que se cuentan cerca de 6.000 ejecuciones de civiles por parte del Ejército Colombiano.

Con una inversión inicial de 450 millones de dólares, el nuevo rostro de esta estrategia de intervención, de la cual solo se conocen anuncios fragmentados pese a que ya se encuentra en debate en el Congreso de los Estados Unidos, plantea como puntos fundamentales los siguientes:

3 Lucha contra crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Este primer énfasis permite afirmar que el modelo posacuerdo promovido por los sectores declase afines a los diálogos de paz no implica una renuncia a la lógica de la guerra, sino una desvinculación de la lucha contrainsurgente del leitmotiv. Así, se busca preservar el negocio de la guerra, y se asegura una excusa para mantener sociedad militarizada.

4 Apoyo proceso de paz: implementación de los aspectos logísticos y operativos de los acuerdos. Por esta vía se asegura una cercanía a los aspectos más concretos en el proceso de dejación de armas por parte de las FARC-EP.

5 Desarrollo rural: “para llevar al Estado a esas zonas donde ha estado ausente”. Aquí aparece nuevamente la pretensión de lograr el control de territorios que hasta el momento no han estado vinculados a las lógicas del capital transnacional, haciendo énfasis en los denominados “negocios estratégicos”, tales como alimentos, hidrocarburos, agua y energía.

6 Erradicación minas anti-personas.

También aparece como parte en este modelo de posacuerdo la intervención de organismos multilaterales con aspiraciones de replicar modelos de paz implementados a rajatabla en otras latitudes como los Balcanes y África, los cuales han tenido como común denominador la construcción de condiciones políticas y económicas para la aplicación del neoliberalismo. En el caso colombiano el objetivo sería la profundización del modelo de despojo como sinónimo de paz.

Pero los elementos anteriormente mencionados no son compartidos por la totalidad de sectores de clase del bloque hegemónico. Aquellos que articulan los intereses de grandes terratenientes y ganaderos, ubicados en la extrema derecha, se ha opuesto de las más variadas formas al desarrollo de los diálogos, al fin de la guerra y a toda posibilidad de democratización. Los sectores parapetados en el partido “Centro Democrático”, colectividad cuyo presidente vitalicio es el expresidente Álvaro Uribe, han generado opinión en medios y a través de centros de pensamiento, se han lanzado a la aventura de movilización en las calles, pero en últimas han tenido que transitar discursivamente de la oposición férrea a los diálogos de La Habana a la fabricación de consignas como “paz sin impunidad”. En la actualidad se encuentran recolectando firmas para oponerse a los acuerdos de paz, han hecho un llamado a la “resistencia civil” al mismo y son promotores de primer orden del “NO” en el referendo con el que se busca darle apoyo en la sociedad civil a los acuerdos e incorporarlos en la formalidad de la ley y la institucionalidad pública. No puede dejar de mencionarse la clara vinculación de la idea de “resistencia civil” con los discursos con los que se promovió y legitimó la violencia paramilitar en los años noventa.

Así mismo y con claras coincidencias en materia de posturas y propuestas, durante el desarrollo del proceso de paz se ha verificado la reactivación de diferentes organizaciones paramilitares, eufemísticamente llamadas “Bandas Criminales” o Bacrim, que nuevamente han desplegado su accionar en contra de líderes populares, particularmente aquellos que apoyado la posibilidad de construcción de paz. Así, en 2014 se registraron al menos 78 asesinatos de dirigentes sociales, mientras que en 2015 la cifra fue de 105, lo que significó un aumento de 35%, según la Defensoría del Pueblo (Pedraza, 2016). Entre tanto, a lo largo del 2016 por lo menos 12 dirigentes sociales han sido víctima de ejecuciones.

El momento de mayor coincidencia entre estos sectores de la derecha recalcitrante se observó el 2 de abril del presente año, día en el que el Centro Democrático convocó una movilización nacional en contra del gobierno de Juan Manuel Santos y del proceso de paz, la cual contó importantes marchas en ciudades como Bogotá y Medellín. Pero esta acción estuvo también acompañada de un paro armado decretado por el “Clan Úsuga”, uno de los grupos paramilitares que actúa en el país posterior al proceso que desestructuró las Autodefensas Unidas de Colombia en 2003, pero que no desactivó esta lógica de acción contrainsurgente y antidemocrática que ha caracterizado el ejercicio de la política desde las élites. El paro afectó se desarrolló durante cuatro días, afectó al menos 36 municipios en 8 departamentos y dejó al menos cinco personas muertas (El Espectador, 2016).

Estos sectores de clase son clara muestra de la pervivencia del pensamiento más radical de derecha, de raíz anticomunista, arraigados en la lógica contrainsurgente y contrario al acceso de la izquierda al espacio político hegemónico hasta el momento por las élites. Aunque se autoproclaman como la oposición al gobierno, lo cierto que sólo se diferencian en su profundo rechazo a los diálogos,

dado que el proyecto socioeconómico neoliberal se mantiene intacto y al margen del debate mediático, ambos sectores de la derecha han logrado sacar adelante iniciativas legislativas que favorecen los intereses de clase del conjunto, más allá de las diferencias frente al panorama político. Del debate al interior de las clases dominantes vale la pena destacar dos elementos. Primero, se han generado fisuras en el bloque hegemónico articuladas a la posibilidad de que sectores populares históricamente perseguidos y apartados del ejercicio legal y formal de la política, efectivamente puedan tener juego. Segundo, y articulado a lo anterior, el sector de la derecha en franca oposición a la paz constituye el principal riesgo para que efectivamente se avance en la democratización y en la renuncia al uso de las armas para el ejercicio de la política. Lo anterior con un ingrediente trascendente: con las marchas organizadas por la extrema derecha se ha evidenciado a lo largo de la última década se evidencia la construcción de cierta capacidad de movilización de masas, elemento que profundiza los debates y disputas por la paz.

Desde el campo popular también han emergido diferentes formas de comprender la construcción de paz, dado que no existe una visión unificada sobre sus características e implicaciones. Según el profesor Sergio de Zubiría(2016), en la izquierda existen al menos cuatro posturas también en pugna frente al asunto de la paz. Por sus características, las dos primeras visiones desestiman, de una u otra forma, el proceso de paz en curso. En primer lugar, se encuentran los sectores más cercanos a la socialdemocracia para quienes el asunto de conflicto y paz compete de manera exclusiva a los insurgentes y combatientes. En un segundo lugar, refiere a los argumentos de aquellos que afirman la imposibilidad de construir paz de manera efectiva mientras el capitalismo siga vigente, ya que se trata de una situación totalmente opuesta a las dinámicas de explotación.

Así mismo, el profesor de Zubiría afirma que al interior del campo popular se ubica una tercera visión en el debate que, si bien es solidaria con el proceso de diálogos de La Habana, encuentra en el mismo un conjunto de falencias en los acuerdos hasta el momento logrados, particularmente en lo relacionado con la jurisdicción especial de paz, incluida en el punto cinco. Por último, se encuentra una perspectiva que considera al proceso de diálogo como un momento con vocación para la apertura de la lucha social, la cual en el corto y mediano plazo logre acumulados hacia la transformación social.

En el marco del debate y las posturas encontradas, la discusión y las prácticas políticas en los sectores populares ha permitido la emergencia de la noción de “paz con justicia social”, la cual se ha posicionado como horizonte de sentido ante la posibilidad de cerrar lógicas del conflicto armado. Este es quizás uno de los principales aportes desde la izquierda, ya que ha permitido sentar las bases de un marco de referencia para contrarrestar la idea de paz simplemente como ausencia de guerra. En síntesis, se trata de problematizar las causas de la guerra, colocando acento en el orden social

injusto que caracteriza la historia de Colombia, por lo que la construcción de paz real pasa necesariamente por la transformación de tal estructura.

Para configurar tal perspectiva, han sido particularmente importantes las apuestas y propuestas de los movimientos sociales, que viven en la actualidad un momento de recomposición que contrasta con la crisis y el reflujo que experimentaban en procesos de paz anteriores, como en el caso de los diálogos del Caguán con las FARC-EP (1999-2001).

La reactivación de la movilización en Colombia, con el repunte más evidente en los últimos seis años, se ha caracterizado no solo por el incremento constante en el número de eventos de protesta, sino por la reconstrucción del tejido organizativo -posterior a la ofensiva paramilitar y el terrorismo de Estado de los años ochenta y noventa-, la aparición de procesos de articulación nacional sectorial e intersectorial, y la construcción de propuestas programáticas en clave constituyente y perspectiva antineoliberal. De tal manera, las organizaciones sociales no sólo han hecho acento en la expresión de inconformidades, sino en la generación de alternativas a las problemáticas vividas a nivel local, regional y nacional, cuestionando de fondo las lógicas de mercantilización inherentes a la institucionalidad vigente. Las propuestas han dado forma a diferentes tipos de documentos como programas, mandatos y leyes alternativas populares. A manera de ejemplo se pueden citar Lineamientos para la construcción de la Política Pública Ambiental Distrital para los Cerros Orientales de Bogotá -2006-, el Programa mínimo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -2011-, la ley Alternativa en Educación Superior -2013-, el Pliego de exigencias: Mandatos para el bien vivir, la democracia y la paz, construido por el movimiento agrario (indígenas, campesinos, afrodescendientes) -2014-, o el Mandato popular por la defensa del agua, definido en la ciudad de Pasto en 2015.

Tales construcciones programáticas dan sustento y sintetizan buena parte de los diagnósticos sectoriales, pero también de las alternativas y propuestas para la resolución de los problemas identificados. Así mismo, se trata de apuestas que no se alejan del asunto de la paz, y más bien se presentan como las alternativas específicas para su construcción efectiva, todas con un común denominador, hacer frente a las dinámicas de pobreza y desigualdad que continúan siendo constantes en la realidad colombiana.

La paz territorial al debate

El concepto de paz territorial ha surgido en medio del debate político, académico y técnico que ha convocado el desarrollo de los diálogos de La Habana, y fue enunciado en principio por el gobierno nacional, específicamente en la voz del alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo(2014). Desde su perspectiva, se trata de una versión que articula dos ideas fuerza: la noción del enfoque de derechos de corte liberal, y la conformación de “instituciones fuertes” que efectivamente hagan cumplir esos derechos en todo el territorio. El diagnóstico del funcionario parte de proponer que el

conflicto en Colombia está asociado a fallas en las instituciones construidas hasta el momento, particularmente en las regiones más alejadas del país, situación que ha abierto la puerta a la guerra y ha generado una desconfianza por parte de las comunidades. Su enfoque de paz territorial remitiría por tanto a la corrección de dichas fallas, en un proceso que habrá de forjar una nueva alianza entre Estado y comunidad desde la planeación “de abajo hacia arriba”. De manera que, Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios. Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción... Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar (Jaramillo, 2014).

De la postura gubernamental sobre la paz territorial destacan varias ideas. En primer lugar, tal y como lo expresa el profesor de Zubiría (2016), se trata de una postura neoinstitucionalista que busca forjar territorios para el desarrollo capitalista, de ahí la insistencia por corregir fallas institucionales e incluir regiones y poblaciones que han estado por fuera de las lógicas imperante.

De igual manera, se observa que el discurso de Jaramillo hace un reconocimiento a las dinámicas de planeación local que históricamente han realizado las comunidades en diferentes territorios, lo cual, como se afirmaba párrafos arriba está asociado al momento de recomposición y fortalecimiento de los movimientos sociales en Colombia. Pero la lectura de este sector de las clases dominantes sobre el momento de construcción de alternativas en clave popular, evidencia cierta perspectiva corporativista que vale la pena discutir.

En palabras del comisionado de paz, el proceso de diálogo con las FARC-EP y el nuevo pacto Estado-sociedad civil que debe sustentar el escenario posacuerdo, tiene el claro propósito de disputar las construcciones sociales y políticas existentes al margen del Estado centralista, por lo que afirma que “no podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. ***Hay que llenar el espacio***, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos” (Jaramillo, 2014).

La idea de llenar un vacío remite de inmediato la noción de “Estado aparente”, una de las características de la estatalidad en América Latina según Thwaites y Ouviaña (2012), quienes retomando a autores como Zavaleta y Tapia, afirman la existencia de una articulación de mecanismos de exclusión real de grupos poblacionales que mantienen tanto formas de organización, autoridad y

toma de decisiones propias, vinculadas también a modos de producción y tiempos históricos divergentes pero vinculadas a las lógicas hegemónicas. De tal manera, la soberanía nacional del Estado es en realidad una condición de ilusoria, una ficción de orden jurídico que no construye una relación orgánica con las comunidades sobre las que rige.

Al relacionar esta concepción con lo planteado por el comisionado de paz colombiano, se encuentra que el diagnóstico planteado por el funcionario no tiene capacidad explicativa frente a las particularidades del conflicto en Colombia, ya el Estado aparente se ha dado en varias latitudes en América Latina. Así mismo, vale decir que la intención de los sectores de las clases dominante afines a los diálogos de paz no es *llenar sino desplazar, desarticular y/o integrar* las realidades sociales, políticas, económicas, culturales existentes hasta el momento en los lugares en los que la característica de Estado aparente ha sido más crítica. Lo anterior, en la medida en que no se trata de espacios vacíos o que se vacíen fácilmente con el tránsito de las FARC-EP a la lucha política legal, quienes han cumplido un papel trascendente la construcción de parte de esas formas organización excluidas.

A fin de lograr esa desarticulación/integración, el camino planteado es sencillo y apela a la vieja fórmula del corporativismo: entrar a disputar las formas de organización comunitaria y social, apropiarse de los ejercicios de planeación comunitaria y las construcciones programáticas mediante canalización de recursos, muchos de ellos provenientes de cooperación internacional. Es una apuesta por embridar la iniciativa popular que se ha propuesto construir territorialidades propias y disidentes frente al neoliberalismo, mecanismo para relegitimar la estatalidad vigente, en un momento de profunda crisis de orden estructural.

Elementos para la conceptualización de la paz territorial

¿Significa lo anterior que desde los sectores populares se debe renunciar a la construcción de paz territorial? En esta ponencia se afirma un categórico No. El análisis previo sólo busca colocar en contexto la existencia de un profundo debate que enmarca el momento histórico actual, lo que hace de la paz territorial un campo en disputa. A este debate el campo popular arriba con acumulados trascendentes que se desprenden en lo fundamental de las prácticas políticas, de movilización social y construcción del territorio.

Como contribución a la discusión, a continuación, se presentan algunas necesidades que se consideran vitales en al considerar el concepto de paz territorial.

Necesidad de la dimensión territorial. Hoy por hoy se encuentra como consenso el hecho de entender que tanto el conflicto como la paz deben ser interpretados desde una perspectiva territorial, con un enfoque que supera la simple mirada de lugar. De acuerdo con Mançano(2013), en la política pública contemporánea agenciada desde los organismos multilaterales, lo territorial es interpretado básicamente como unidad geográfica específica, contenedora de procesos, camino por el cual queda

desprovisto de la conflictividad que lo configura. Para este autor, el territorio deviene de las relaciones sociales que configuran el espacio, las cuales generan lógicas de apropiación del mismo, dando paso a territorialidades concretas. Así, dentro de un territorio existen a su vez otros múltiples territorios que se encuentran en relación y pugna, dado que expresan las diferentes construcciones realizadas por las clases sociales en conflicto en un espacio específico.

En el mismo sentido Porto-Gonçalves(2009) afirma que el territorio es ante todo espacio apropiado por sujetos y grupos sociales, de manera que no es posible concebirlo al margen de la sociedad, sus conflictividades y lógicas de poder. Una característica esencial del territorio será el hecho de ser un producto directo de los procesos sociales de territorialización, los cuales configuran una forma específica de vivir/sentir/pensar el espacio. Pero, a la vez advierte que “el territorio tiende a naturalizar las relaciones sociales y de poder, pues se hace refugio, lugar donde cada cual se siente en casa, aunque en una sociedad dividida” (Porto-Gonçalves, 2009, pág. 127).

En el marco de las anteriores consideraciones, la apreciación del conflicto y la construcción de paz en Colombia desde lo territorial implican necesariamente reconocer los diversos procesos de construcción de territorio que las clases y grupos sociales realizan, bien de manera planificada, bien como derivación no intencionada de sus lógicas de acción. Una mirada de este tipo va más allá de la delimitación geográfica de los lugares en los que han ocurrido hechos de guerra para, posteriormente, destinar recursos a la construcción de la institucionalidad del Estado, ausente allí durante de décadas. De lo que se trata es de la necesidad de comprender las diversas territorialidades configuradas por distintos sujetos, y derivadas de procesos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que han tenido en la guerra uno de sus pilares centrales.

No se puede continuar viendo el territorio como una unidad administrativa o un sitio particular con límites, por demás ficticios desde los límites impuestos por el Estado. El territorio es una construcción social mediada, en el caso colombiano, por la expresión armada que asumido el proceso confrontación social y política. Diversos sujetos han tenido allí el protagonismo: procesos comunitarios rurales de indígenas, campesinos y afrodescendientes, empresas nacionales y trasnacionales, organizaciones armadas insurgentes, paramilitares y del Estado, entidades de cooperación internacional, iglesias, organizaciones no gubernamentales, entre otras, y cuyas acciones en los territorios los han configurado y definido.

La construcción de paz pasa por reconocer las territorialidades construidas en el marco del conflicto, ya que el territorio no es simplemente un contenedor que habrá de “vaciar” de la presencia de la insurgencia para que el Estado pase a llenarlo. En los diversos territorios que componen la complejidad de Colombia se han construido relaciones sociales, dinámicas de apropiación, de vivir y sentir, base para edificar la paz.

Necesidad de trascender las lógicas de focalización neoliberal. En términos prácticos, desde diferentes instancias se ha perfilado la construcción de paz territorial a partir de la selección de un conjunto de municipios con altos indicadores en términos de confrontación armada y pobreza, sobre los cuales se busca hacer una priorización de recursos. Tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas –ONU-, entidad que ha confeccionado una lista de 125 municipios para la intervención prioritaria de 1.122 totales, a los cuales orientará las acciones posacuerdo (Mi Putumayo, 2016).

Dado que en su momento la lista de la ONU fue asumida como aquella que contenía los municipios hacia los cuales se dirigirían las políticas públicas de posconflicto, el ministro de la cartera creada para tales asuntos, Rafael Pardo, desmintió las afirmaciones para asegurar que todas las localidades serían priorizadas (RCN Radio, 2016). No obstante, en abril del año en curso, en el sitio Web del Ministerio de Agricultura, apareció la convocatoria al programa de Alianzas Productivas, en la que se anuncia la orientación de los recursos hacia los 322 municipios en 26 departamentos, priorizados por el Ministerio del Posconflicto.

Más allá de lo eminentemente anecdótico y las contradicciones en el discurso, la situación mencionada permite evidenciar el carácter de la política pública propuesta para el escenario posacuerdo, en función de un mayor despliegue de las lógicas de acumulación capitalista en clave neoliberal. Por un lado, se evidencia que el enfoque territorial es tomado como focalización de municipios, lo que resulta a todas luces coherente con los criterios básicos de la política social en el neoliberalismo. Se trata de la identificación de los “más vulnerables”, los que no se han podido insertar en las lógicas del mercado, para orientar políticas que extiendan las relaciones mercantiles y de explotación.

En el caso de la convocatoria del Ministerio de Agricultura, basta con mencionar que el programa de Alianzas Productivas fue instaurado durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, como una apuesta por desarrollar relaciones de explotación y extracción de plusvalía con trabajadores agrícolas, en dinámicas que implican la articulación de pequeños productores y grandes empresarios para la producción de bienes ubicados en la canasta de agroexportación definida por el Ministerio de Agricultura. De tal manera, las y los campesinos han colocado sus tierras y su trabajo en los procesos productivos, en tanto que los grandes productores colocan el capital. Bajo tales dinámicas el campesinado se subordina a los intereses de los grandes empresarios y ha perdido autonomía en la producción en temas como las variedades de semilla, área sembrada, tipo de prácticas productiva, acompañado de la consecuente afectación sobre la soberanía alimentaria.

Evidentemente las dinámicas del conflicto social, político, económico y armado han sido diferentes en los distintos territorios del país, pero la lógica de focalización a partir de niveles de vulnerabilidad y según capacidades, propia del neoliberalismo, desconoce que el conflicto es una

realidad presente en todo el territorio nacional, fragmenta la dinámica social, y acentúa la ficción de que la guerra sólo se ha vivido en áreas rurales y en los territorios más lejanos del centro político del país.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, entre los municipios priorizados aparecen sólo 11 capitales de departamento, ninguna de las diez ciudades más grandes del país, distribuidas por regiones de la siguiente manera:

Tabla 1 Capitales de departamento incluidas en la priorización de municipios para el posconflicto

CIUDAD	DEPARTAMENTO	REGIÓN
Santa Marta	Magdalena	Región Caribe
Riohacha	Guajira	
Valledupar	Cesar	
San José del Guaviare	Guaviare	Región Orinoquía (limítrofe con Venezuela)
Puerto Carreño	Vichada	
Mitú	Vaupés	
Arauca	Arauca	
Quibdó	Chocó	Región Pacífica
Mocoa	Putumayo	Región Amazónica
Florencia	Caquetá	

Fuente: Elaboración a partir de datos del Ministerio de Agricultura

La tabla 1 permiten corroborar que la priorización establecida por el gobierno nacional para las acciones posconflicto desconoce las realidades urbanas más dinámicas y realiza un mayor énfasis en las capitales de departamento que se encuentran en zonas sin presencia del estatal efectiva, donde la apariencia del Estado ha sido más crítica, ubicadas en áreas fronterizas con países como Ecuador y Venezuela, y con altísimos niveles de conflictividad social, como en el caso de Quibdó y Riohacha. Si bien es necesario construir alternativas situadas según las realidades locales y regionales, es fundamental la acción territorial más allá de la lógica de focalización del gasto, que ha evidenciado sus amplias precariedades en sectores como salud y educación, más aún si la pretensión es legitimarlas mediante ejercicios de planeación con rostro participativo. Más que focalizar se trata de dinamizar las construcciones territoriales, identificando de manera clara las disputas y relaciones de poder que se entretienen en el proceso.

Adicionalmente, *es fundamental transitar hacia formas de definición de los territorios más allá de la división políticos-administrativa que ha sido impuesta por el Estado a lo largo de la historia republicana.* Al respecto, bien vale recordar las afirmaciones de Orlando Fals al respecto: “los

límites departamentales y municipales no son reales y no funcionan ni se respetan”, por lo que “se necesita agrupar las unidades territoriales por afinidades culturales, económicas, históricas y geográficas”, lo que convoca a la tarea perentoria de “recuperar las historias regionales y locales” (Fals, s.f.).

Necesidad inaplazable, participación social y comunitaria en la construcción de paz, que exige/construye una territorialidad contrahegemónica. La definición de territorio presentada páginas atrás enfatiza en el hecho de comprenderlo como construcción social, en la que diversidad de sujetos interactúan. Al afirmar que las lógicas del conflicto han tenido un carácter territorial se busca trascender la idea de que la guerra ocurre en un lugar dado, para problematizar la construcción de territorialidades, es decir, las formas de apropiación de espacios que han devenido de la confrontación social y política del país, incluidas aquellas que se han realizado mediante el uso de las armas.

En tal marco, la construcción de paz territorial implica el reconocimiento de dichas territorialidades y el impulso de otras nuevas en las que no se haga uso de las armas en el desenvolvimiento de los conflictos. La base insustituible de tal posibilidad se encuentra en las acciones y el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales que día a día han configurado formas de entender, sentir, vivir y comportarse en el territorio. La lógica de paz territorial desde una perspectiva crítica coloca a los sujetos colectivos contrahegemónicos como protagonistas de primer orden.

¿Qué diferencia esta idea de lo planteado por el comisionado de paz Sergio Jaramillo? Dos elementos son factibles de proponer como respuesta. Por un lado, no se considera que la paz territorial signifique el vaciar los lugares de las construcciones sociales previas para “llenarlas” con institucionalidad estatal derivada de una suerte de lógica corporativa. Por el contrario, de lo que se trata es de propiciar la transformación de los territorios desde la acción organizada de comunidades y sujetos colectivos para contrarrestar los espacios conquistados por el capital y convertirlos, parafraseando a David Harvey, en espacios de esperanza, es decir, territorios construidos desde las apuestas de la paz con justicia social.

En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, la construcción de territorialidades contrahegemónicas implica necesariamente enfrentar el aparataje y el tecnicismo neoliberal, generando procesos que permitan resignificar la planeación participativa y la participación comunitaria. Tras décadas de neoliberalismo los procesos comunitarios de planeación, organización y decisión han sido duramente atacados, sometidos al formalismo y desestructurados frente a la perspectiva solidaria que los había fundado. No se trata de un desprecio de la técnica, necesaria para cualquier proceso de organización con el territorio, sino de la necesaria disputa ideológica que pasa también por la recuperación de saberes y prácticas colectivas sepultadas por la burocracia del capital.

En Colombia, procesos como los de las Zonas de Reserva Campesina –ZRC-, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, constituyen ejemplos claros de territorialidades en disputa frente a la lógica del capital. Las ZRC, por ejemplo, han dado una pelea por más de dos décadas para poder configurar territorios organizados acorde con los anhelos de diversas comunidades campesinas. Con los amplios antecedentes en la lucha por el acceso a la tierra, las ZRC surgen como una figura jurídica para el ordenamiento territorial en la ley de tierras de 1994. Sin embargo, el mismo Estado ha generado serias talanqueras para su desarrollo, por lo que su realidad más dinámica se encuentra en el trabajo político y organizativo que han desarrollado las y los campesinos articulados hoy en 66 procesos organizativos que hacen parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

El propósito de las ZRC va más allá del acceso a la tierra; ya que ha permitido el desarrollo de procesos económicos fundados en la solidaridad, la producción sustentable, la recuperación de tradiciones y saberes, la organización propia y el fomento de la cultura campesina. Adicionalmente, la delimitación geográfica de las ZRC no se realiza en términos municipales, sino por de acuerdo con territorios construidos culturalmente.

Las siete ZRC actualmente constituidas más las 22 restantes que están en proceso de trámite, han tenido que desarrollar importantes procesos de movilización social y jurídica para lograr su reconocimiento. Por ejemplo, la ZRC del Catatumbo, ubicada en la región limítrofe con Venezuela, realizó varios paros regionales, el más importante de ellos en junio de 2013, en el que participaron más 4.000 campesinos, al menos 4 resultaron muertos y más de 100 heridos. Esta situación parecería paradójica a primera vista, ya que se trata de una figura establecida en la ley, aunque con serias precariedades en términos de reglamentación. Sin embargo, el hecho de reconocer que allí en estas regiones se están construyendo territorialidades contrahegemónicas que disputan los espacios del capital contribuye a explicar porque la realización de esta figura jurídica ha enfrentado tantas dificultades.

Necesidad de un mirada multiescalar y multidimensional.

En sus diversas disertaciones sobre el concepto de territorio, Bernardo Mançano(2013) propone cuatro atributos esenciales, totalidad, soberanía, multidimensionalidad y multiescalariedad, los cuales contribuyen también a precisar el concepto de paz territorial.

Afirma Mançano que cada territorio es una totalidad soberana diferenciada de otras por las relaciones sociales y las escalas geográficas, lo que no implica una suerte de autocracia, todo lo contrario, dado que se relaciona de manera compleja con otros territorios. Más bien con esta idea se refiera a la construcción de territorio que hace cada institución, organización y sujeto, dotándolo de sentido particular. Pero el territorio también multiesclar, en la medida en la que es construído en

diferentes niveles, local, institucional, de los sujetos, en lo municipal, regional, departamental, nacional. Por último, existen diversas dimensiones del territorio, no sólo la geográfica, ya que abre un ábanico de posibilidades como complejas y densas son las formas de relaciones entre sujetos que construyen los territorios.

Se diría entonces con el autor que no existe el territorio sino diversos territorios:

La multiterritorialidad une a todos los territorios por medio de la multidimensionalidad y de las escalas geográficas, que pueden ser representadas como camadas sobrepuestas en que una acción política se desdobra en varios niveles y escalas: local, regional, nacional e internacional.(Mançano, 2013, pág. 120)

Al relacionar los atributos antes mencionados con la construcción paz territorial se encuentra que tal ejercicio debe no solo reconocer que existen diversas formas de apropiar el espacio, sino que es necesario que se realice en múltiples escalas y en múltiples dimensiones. La acción política que entraña la paz ha de permitir la concurrencia de diferentes tipos de labores que impacten y articulen las diferentes dimensiones y escalas en las que se configuran los territorios, a la vez que permite a los sujetos comprometidos en éste empeño la exploración de dimensiones nuevas en el territorio.

Lo anterior resulta particularmente importante para contrarrestar la idea de que la paz territorial se comprende como conjuntos de acciones localizadas y focalizadas. Desde la perspectiva aquí propuesta, se subraya en el papel de acciones que cumplan la doble característica de estar situadas, ubicadas en los territorios, pero articuladas, con los otros territorios de las diversas escalas.

Potenciar las acciones de las comunidades y sujetos colectivos para la transformación de sus territorios apuntando a diversas dimensiones, se convierte en un intento incompleto si tal dinámica no trasciende hacia nuevas formas organización territorial ene escalas más amplias, como el regional y el nacional. De ahí que sea necesario reiterar en la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial para el país como totalidad, elemento clave en la construcción de paz, toda vez que la forma vigente responde a intereses fundados en lógicas poder enquistadas hace más de 100 años (Beltrán, 2016).Se trata de hacer énfasis en un ordenamiento territorial realmente participativo.

En la relación entre participación y ordenamiento territorial, se encuentra que según la legislación vigente en Colombia el diseño del POT debe ser contar con la voz y propuestas de las y los ciudadanos. Los consejos territoriales de planeación son instancias creadas al amparo de La Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994), deben estar conformados por integrantes de la sociedad civil y se supone cumplen el papel de incorporar la visión de la ciudadanía en la organización del territorio. Sin embargo, la configuración misma de los Consejo Territorial de Planeación Distrital de Bogotá (CTPD) lesiona el espíritu de participación real ya que es el propio alcalde de Bogotá quien los nombre a partir de ternas presentadas por cada uno de los diferentes sectores que los conforman.

Adicionalmente, la nota predominante con este tipo escenarios es su carácter meramente consultivo, por lo que sus definiciones y propuestas no tienen carácter vinculante, en desmedro de los intentos de realizar propuestas de cara a las necesidades más sentidas de los habitantes de la ciudad que algunos de los Consejos han realizado. Lo anterior se ejemplifica con lo planteado por el CTPD que se conformó en 2008, que en su gestión incorporó el enfoque de derechos y generó un diagnóstico a partir de la diversidad de conflictos territoriales existentes en ese momento. El escenario distrital presenta un agravante en términos de incidencia efectiva de las y los ciudadanos, ya que los debates entre los técnicos y las decisiones políticas han reducido aún más la participación al restringirla a diferentes acciones de información (Duque, 2010).

Este tipo de estrategia ha hecho que la lógica de ordenamiento del territorio sustentada en dinámicas de concertación entre actores no pase de ser un enunciado, ya que las comunidades, sujetos protagonistas de primer orden en la construcción del territorio, quedan marginadas de las dinámicas de decisión, tal y como ocurrió tanto en la formulación del POT de 1997 en la primera administración de Enrique Peñalosa como en la revisión del mismo en 2003. De acuerdo con el análisis de Isabel Duque (2010), entre 1998 y el año 2000, la Alcaldía Mayor se limitó a realizar reuniones informativas que con exceso de lenguaje técnico no dieron posibilidad de reaccionar a quienes participaban de dichos espacios.

Por todo lo anterior, para un verdadero ordenamiento territorial participativo es necesario que a partir de una relación de mutua determinación entre lo político y lo social, la participación política social y popular se comprenda en sí misma construcción de poder social, de poder popular, ejercido desde la perspectiva colectiva y de construcción social, para el logro efectivo de una “democracia directa de tipo maximalista”, capaz de llevar los campos de decisión a la definición del modelo económico, el sistema de justicia y el control de la política, tal y como lo propone el profesor de Zubiría (2012).

¿Qué diferenciaría la dinámica de participación política en tanto que construcción de poder social de la democracia participativa tan publicitada bajo la dinámica del neoliberalismo? Tal y como se puede inferir de la concepción propuesta por Atilio Borón, la participación política que le es propia implica la construcción de escenarios y mecanismos de decisión desde las propias comunidades y procesos sociales y populares que emprenden un ejercicio de tal naturaleza. Las reglas de juego y las formas de participación y decisión serían la primera gran construcción colectiva de esta forma de poder, conjugada con la definición de agendas, temas, niveles de relevancia de los mismos y tiempos.

Con lo dicho hasta el momento se podría sintetizar que la paz territorial es el proceso de transformación de los territorios en clave de justicia social, a partir del reconocimiento las trayectorias históricas de los sujetos allí actuantes y las diversas características de los conflictos

existentes, mediado por sendas apuestas de autorganización social, económica, cultural y ambiental protagonizados por las comunidades. La paz territorial como proceso implica la consideración de múltiples dimensiones y múltiples escalas para la acción política, las cuales permitan el tránsito hacia otras territorialidades, otras formas de apropiar/vivir/sentir el espacio que finquen el interés en el logro del bien común, el buen vivir y un futuro colectivo posible, aquel en el que la vida se coloque por encima de todo.

La ciudad, la guerra

Adicional al hecho de ser una discusión reciente, los debates sobre paz territorial se caracterizan también por gravitar preferentemente en torno a las realidades rurales, dado que la confrontación armada ha tenido un mayor protagonismo en dicho ámbito; lo urbano continúa como gran ausente. Sin embargo, el referente conceptual hasta el momento utilizado hace un llamado a la reflexión en torno a lo que acontece en las ciudades en tanto que territorio con especificidad propia, parte integrante de otros territorios con diversas escalas, atravesado en su configuración por las lógicas del conflicto y elemento fundamental para la construcción de paz.

Como se proponía en apartados anteriores, resulta vital romper con la idea de que el conflicto es un asunto exclusivamente rural, para lo cual vale la pena traer a colación un par de ideas.

La más evidente de todas es que las ciudades en Colombia son construcciones sociales realizadas por campesinos migrantes y desplazados por las dinámicas del conflicto social, político, económico y armado. Sus imaginarios, aspiraciones y formas de vida sentaron las bases de los procesos de autoconstrucción a los que se vieron enfrentadas las familias rurales que llegaron a las ciudades desde los años treinta. La huella dejada se evidencia claramente en los miles de barrios populares que crecieron en las periferias de las grandes urbes colombianas. Al respecto, la investigadora María Elvira Naranjo (2014) explora la idea de colonización popular urbana realizada por “destechados invasores”, campesinos desplazados que pasan de colonizar tierras baldías en lo rural, a hacerlo en predios urbanos mediante autoconstrucción. De tal manera, los históricos problemas de acceso a vivienda, a servicios públicos y equipamientos urbanos, los de movilidad e inseguridad heredan la huella de los conflictos rurales no resueltos y de la guerra misma.

Lejos de lo que se cree cotidianamente, las ciudades en Colombia han tenido un papel trascendente en el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado. Una de las primeras grandes evidencias se encuentran en el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, considerado por el historiador inglés Eric Hobsbawm como la rebelión popular más importante del hemisferio occidental en la primera mitad del siglo XX. Ese día, la revuelta desatada por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, deja más de 4.000 muertos en la capital del país y se crea un punto de inflexión que permite evidenciar a nivel nacional la existencia de la guerra con escenario preferente en los campos, pero que también sometería a las ciudades.

Así mismo, los años cincuenta registran varias masacres cometidas en la ciudad de Bogotá, al amparo de la perspectiva contrainsurgente, particularmente bajo la dictadura del general Rojas Pinilla. Al menos dos han quedado con algún registro en la historia: el ataque alevé que sufrieron los estudiantes de la Universidad Nacional el 9 de junio de 1954 por parte del Ejército, con un saldo de nueve estudiantes muertos, y la masacre de la Plaza de Toros, con un número indeterminado de víctimas, ocurrida el 5 de febrero de 1957.

El desarrollo del conflicto armado en Colombia se ha sustentado en las disputas por el control de la tierra y por el control del Estado, bajo una férrea tradición anticomunista y contrainsurgente. La relación consenso-coerción ha sido particularmente compleja ya que las clases dominantes han recurrido de manera permanente al dispositivo de la guerra como mecanismo para el ejercicio del control, a la par que se han desarrollado procesos de democracia formal. Para completar el cuadro, esta dinámica se ha retroalimentado de manera constante con el buen provecho que ha sacado de la guerra el capital nacional y transnacional en función de los procesos de neoliberalización.

De todo lo anterior ha derivado una extrema naturalización de la militarización de la vida, situación que ha impactado de manera severa la cotidiana en las ciudades sometidas a diversas formas de control legal y paraestatal, que se han alimentado de los procesos de la guerra. Como ejemplos de lo anterior se pueden citar entre otros, el tratamiento militar de la protesta social, con casos tan aberrantes en materia de violación de derechos humanos como el Estatuto de Seguridad de 1978, respuesta del gobierno del momento a la más importante muestra de inconformidad urbana en el país, el paro cívico de septiembre de 1977. Fue un instrumento usado preferentemente en las ciudades y bajo lógica contrainsurgente derivada de una guerra que se suponía estaba únicamente en el campo.

Otro ejemplo de los impactos de la guerra, la militarización y la lógica contrainsurgente en las ciudades se encuentra en presencia directa del paramilitarismo. En ciudades como Bogotá significó la persecución y el asesinato de importantes líderes y defensores de derechos humanos, así como de dirigentes barriales y juveniles, particularmente a finales de los años noventa y principios de la década de dos mil. Se encuentra allí casos como el del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en su casa en 1998, y los miles de jóvenes asesinados en localidades populares de la capital como Ciudad Bolívar y Usme.

A través de grupos como la “Oficina de Envigado”, “La Terraza” o el “Bloque Capital” de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo ha logrado el control de amplias cadenas de comercialización de bienes y servicios, sobre todo las de carácter ilegal e informal, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Pereira. Los llamados “san andresitos”, lugares de comercialización de productos importados y el microtráfico de estupefacientes son algunos de los negocios

preferidos. También han tenido una participación notoria en el manejo de importantes sectores del transporte público, particularmente taxis.

Recientemente en Bogotá ha surgido gran preocupación por la aparición de un grupo criminal denominado “Los Sayayines”, que controla sectores importantes del centro de la ciudad, maneja el tráfico de estupefacientes y armas, la prostitución, y tiene sistemas de ajuste de cuentas de particular crueldad en los que incluyen “casas de pique”, sitios en los que descuartizan vivos a quienes tienen deudas no pagas. Las investigaciones judiciales y periodísticas han demostrado que el mencionado grupo está confirmado por policías, ex policías y paramilitares, quienes aprendieron las técnicas de tortura y ajusticiamiento que aplican, en el fragor de la guerra de los años noventa (Revista Semana, 2016).

Luchas urbanas y construcción de paz.

El 9 de marzo de 2012 en Bogotá, capital de Colombia, se vivió una masiva protesta de usuarios del Sistema de Transporte Masivo, Transmilenio, quienes bloquearon la Avenida Caracas, una de las más importantes, argumentando costos excesivos y condiciones de movilidad indignas. La escena se ha repetido de manera constante desde ese año en áreas neurálgicas de los cuatro puntos cardinales del Distrito Capital.

En diciembre del mismo año, miles de personas se tomaron por varias semanas la plaza de Bolívar, epicentro político local y nacional, en protesta por la destitución del Alcalde Mayor, Gustavo Petro. Según la Procuraduría General de la Nación, el mandatario tuvo un comportamiento irregular en el proceso de reorganización del sistema de basuras, en el cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de carácter estatal, asumía la tarea de recolección de residuos, dejando por fuera a grandes empresas del sector privado.

Estos ejemplos evidencian como a lo largo de los últimos cinco años Bogotá ha sido escenario de importantes protestas urbanas, relacionadas de manera directa con la organización de la vida en colectivo de la ciudad. Dado el marcado carácter centralista del régimen político colombiano, la capital del país ha sido el epicentro de luchas sociales protagonizadas por estudiantes, indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, o aquellas que se han enmarcado en la búsqueda de la paz. Pero toda esta álgida dinámica ha hecho que la ciudad parezca más bien una suerte de receptáculo de la protesta, ya que en lo contemporáneo las problemáticas propias de la vida urbana parecieran no estar claramente representadas.

Los hechos de 2012 son un vehículo para visibilizar las dinámicas de acción colectiva contenciosa en la ciudad, apuntando hacia una probable reconfiguración de las luchas urbanas. El reconocimiento de la dinámica de la protesta en la ciudad de Bogotá es un tema no explorado de manera suficiente, particularmente en las últimas dos décadas. La investigación más completa y más reciente sobre el tema es la del profesor Alfonso Torres (2007) quien aborda las dinámicas de

participación política gestadas por organizaciones populares de la capital entre 1980 y 2000, apuntando también a un análisis en la dinámica de la protesta urbana a nivel global.

La investigación de Torres muestra que a lo largo de los años noventa, último periodo de análisis que aborda, la protesta urbana en Bogotá se incrementa de manera sostenida. Si bien no existen estudios sobre cómo se comportan las acciones colectivas de carácter contencioso del año 2000 al presente, diversas conversaciones con dirigentes urbanos de la ciudad permiten proponer como hipótesis inicial, un declive, amparado en dos dinámicas que ameritan ser estudiadas: el arribo de gobiernos de centro-izquierda que propiciaron dinámicas de cooptación de dirigentes y procesos populares, y el influjo del paramilitarismo. Todo lo anterior en el marco del auge del neoliberalismo en la ciudad.

De tal manera, los eventos de protesta de los últimos cinco años se pueden interpretar como posible evidencia en términos de recomposición. Así mismo, a lo largo de la última década se han conformado procesos sociales que pueden leerse como Organizaciones Populares Urbanas –OPU– (Torres, 2007), las cuales actúan generando acciones de protesta y defensa de los territorios que habitan, acompañadas por la construcción de propuestas programáticas que apuntan a la generación de política pública alternativa. Ejemplifican tal dinámica la Mesa Ambiental de Cerros Orientales, que actúa en la zona oriental de Bogotá, El Comité Cívico Popular del Centro, o las organizaciones que se están articulando en El Foro de la Media Luna Sur, que abarca las localidades¹²⁰ de San Cristóbal, Usme, Bosa y Ciudad Bolívar.

Aunque las protestas frente al sistema de transporte masivo y en contravía de la destitución del alcalde se dan de manera paralela y no claramente conectadas con las acciones colectivas que protagonizan las OPU en distintos territorios, vistas de conjunto se presentan como hechos trascendentes que invitan a discutir el estado actual de la luchas urbanas en Bogotá, una ciudad que durante la primera década del siglo XXI no evidenció mayores eventos de protesta de esta naturaleza.

De manera preliminar, se propone a continuación una clasificación de las formas de protesta en la ciudad de Bogotá, la última de las cuales tiene una relación más directa con la construcción de paz territorial:

Protestas más o menos espontáneas, fugaces y masivas, protagonizadas por ciudadanos y ciudadanas que expresan altos niveles de inconformidad por el acceso a bienes, servicios y equipamientos colectivos. Tal es el caso de los bloqueos al servicio de transporte masivo citados anteriormente, hechos en los que la inconformidad se expresa sin la existencia de organizaciones estables que den continuidad a la misma. Son dinámicas que se caracterizan por su relativa espontaneidad (Gramsci diría que nada es totalmente espontáneo y totalmente organizado), poca

¹²⁰ Las localidades corresponden a la división político-administrativa de la ciudad.

capacidad para sostenerse en el tiempo, pero también por la amplia participación, así sea momentánea, lo que les confiere impacto en la vida cotidiana. Otros detonantes de este tipo de movilizaciones han sido los problemas con cupos en colegios de la ciudad, ya que prácticamente todos los años desde 2010 registran este tipo de eventos, las de taxistas o usuarios de servicios de salud. En todos los casos se trata de reivindicaciones puntuales, no vinculadas a pliegos o construcciones programáticas.

Protestas soportadas organizativamente con capacidad de impacto más acotada. Aquí se incluyen aquellas dinámicas de movilización en las que si bien existe algún tipo de estructura organizativa no son tan masivas y por lo tanto, con niveles de afectación parciales en la cotidianidad. Son protestas que logran sostenerse en el tiempo pero se mantienen en el ámbito de la reivindicación concreta. Como ejemplos se pueden citar los plantones y movilizaciones protagonizadas por vecinos de diferentes barrios del occidente de la ciudad en contra de los incrementos en el impuesto de valorización en el año 2014, o las recientes protestas de las y los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, tras el anuncio de su venta por la actual alcaldía.

Protestas estructuradas organizativamente vinculadas a propuestas programáticas. En este caso lo que se encuentra son procesos de movilización social protagonizados por organizaciones populares urbanas, que de la mano con luchas por reivindicaciones puntuales, han generado alternativas de tipo programático que vinculan las soluciones a disputas en perspectiva territorial. En este caso las protestas no se sólo se articulan a la provisión de bienes y servicios y al acceso a equipamientos colectivos, sino que estructuran en el marco de la apropiación del espacio, el cuestionamiento de las formas de territorialización del capital en lógica neoliberal, y la formulación de alternativas hacia nuevas dinámicas de ordenamiento territorial. Tal es el caso de la Mesa de los Cerros Orientales, gestada desde 2004 por pobladores de barrios ubicados en ésta zona de la ciudad. La trayectoria social, política y organizativa de este proceso les ha permitido realizar un tránsito de la exigencia a la propuesta en términos de sus reivindicaciones, generando propuestas de política pública que necesariamente deben ser incorporadas a cualquier ejercicio de planeación.

El primer grupo de propuesta de política pública fue publicado en 2008 (Mesa de los Cerros Orientales), y reúne tanto un diagnóstico territorial como un conjunto de propuestas realizadas por diversos colectivos de trabajo, organizaciones de base, grupos de vecinos y Juntas de Acción Comunal. Con tales insumos la Mesa configuró propuestas en diez ejes de acción e incidencia: Hábitat Digno y Gestión Integral de Riesgos Ambientales, Pactos de Borde, Producción agroecológica, Mejoramiento Integral de Ecobarrios, Preservación y uso Público para todos y todas, Juventud y Cerros Orientales, Educación Ambiental, generación de empleo e ingreso productivo ambiental local, Restauración ecológica y recuperación geomorfológica.

El citado caso pone de manifiesto como la configuración de procesos organizativos son base de primer orden en la construcción de paz territorial, al evidenciar tanto el papel de la acción colectiva en la construcción y ordenamiento del territorio, como los desarrollos en políticas públicas que no son de perfil tecnocrático y que se enraízan en el sentir y querer de las propias comunidades.

Referencias

Beltrán, A. (2016). La paz más allá de los acuerdos: territorio, participación política y fuerza pública en el posacuerdo. *Izquierda*(69), 21-27.

El Espectador. (1 de Abril de 2016). "*Paro armado del clan Úsuga se vivió en 36 municipios del país*": Cerac. Obtenido de Elespectador.com: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-se-vivio-36-municipios-del-p-articulo-625021>

El Espectador. (14 de Abril de 2016). *La paz nos va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto*. Obtenido de Elespectador.com: <http://www.elespectador.com/noticias/economia/paz-nos-va-permitir-sacar-mas-petroleo-de-zonas-vedadas-articulo-627058>

Fals, O. (s.f.). *Paz y ordenamiento territorial*. Obtenido de Mama Coca: http://www.mamacoca.org/Compendio_regional/Orlando_Fals.htm

Jaramillo, S. (13 de Marzo de 2014). *La paz territorial*. Obtenido de Equipo de paz del gobierno, presidencia de la República: <http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/declaraciones/Paginas/paz-territorial-sergio-jaramillo-alto-comisionado-paz-proceso-paz.aspx>

Manzano, B. (2013). Territorios: teorías y disputas por el desarrollo rural. *Novedades en población*, 116-133.

Mi Putumayo. (26 de Enero de 2016). *Estos son los 125 municipios del posconflicto, según la ONU*. Obtenido de MiPutumayo.com: <http://miputumayo.com.co/2016/01/26/estos-son-los-125-municipios-del-posconflicto-segun-la-onu/>

Molano, A. (1 de junio de 2015). *Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia*. . Obtenido de Informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas a la Mesa de Diálogos de La Habana. Espacio Crítico: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/libros/chcv/chcv_molano.pdf

Naranjo, M. E. (2014). Provienda: protagonista de la colonización popular en Colombia. *Revista Historia y Memoria*(9), 89-118.

Pedraza, J. C. (27 de Marzo de 2016). *A los líderes sociales, en Colombia, los están matando*. Obtenido de Eltiempo.com: <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/asesinatos-de-lideres-sociales-en-2015/16546681>

Porto-Gonçalves, C. (2009). De Saberes y de Territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana. *Polis*, 121-136.

RCN Radio. (1 de Febrero de 2016). *No habrá municipios priorizados en el posconflicto: Rafael Pardo*. Obtenido de RCNradio.com: <http://www.rcnradio.com/locales/no-habra-municipios-priorizados-posconflicto-rafael-pardo/>

Revista Dinero. (23 de Enero de 2015). *Mindefensa Inc.* Obtenido de Dinero.com: <http://www.dinero.com/edicion-impresacaratula/articulo/las-empresas-del-ministerio-defensa/204966>

Revista Semana. (9 de Junio de 2016). *¿Cómo aprendieron los 'sayayines' del Bronx a ser tan crueles?* Obtenido de Semana.com: <http://www.semana.com/educacion/articulo/escuelas-paramilitares-en-el-bronx/476960>

Thwaites, M., & Ouviaña, H. (2012). La estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e hipótesis alrededor del problema del poder político y las transiciones. En M. Thwaites (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (págs. 51-92). Santiago de Chile: Editorial Arcis, CLACSO.

Torres, A. (2007). *Identidad y política de la acción colectiva: organizaciones populares y luchas urbanas en Bogotá, 1980-2000*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Zubiría, S. d. (12 de Marzo de 2016). La Paz territorial. Cartagena, Bolívar, Colombia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=l1xQ_pi8bkE

A Campanha Diretas Já no Rio Grande do Sul através das páginas do jornal Zero Hora

Daniela de Campos¹²¹

Introdução

A imagem de um cidadão brasileiro com a camisa verde e amarelo numa manifestação social pode nos remeter a, pelo menos, três ocasiões da história recente, e no primeiro caso imediata, da história política do Brasil. A primeira diz respeito às últimas manifestações contra a corrupção e ao governo da presidente Dilma Rousseff. A segunda pode remeter aos protestos contra o presidente Fernando Collor de Mello no início da década de 1990¹²², e a outra ocasião diz respeito aos atos em defesa das eleições diretas para presidência da república, ocorridas em 1984. Enquanto a última desejava o retorno do regime democrático, em seu símbolo maior, o voto popular, percebe-se que a primeira, a partir de algumas imagens e enunciados sugere, por alguns discursos pontuais, um retorno ao período de exceção como a solução aos problemas políticos e econômicos que afligem o Brasil atualmente.

Assim, estudos que se debruçam sobre as manifestações que ocorreram em 1983 e 1984 pelo retorno à plena democracia no Brasil podem contribuir para um debate sobre os rumos da democracia no país e também na América Latina, uma vez que os contextos se assemelham, tanto o atual, como o de outrora.

Diante do exposto, o presente texto tem como objetivo demonstrar como um dos principais periódicos do Rio Grande do Sul, o jornal Zero Hora, noticiou os eventos relacionados à campanha para eleição direta para Presidente da República, desde março de 1983 até o início do ano seguinte. Estudos sobre o regime militar brasileiro dão conta de que muitas empresas jornalísticas se alinharam ao regime militar, não somente por força da censura, mas também por contrapartidas econômicas. Essa postura, em grande medida, se modificou com a crise econômica que assolou o país no final da década de 1970, após um período de euforia gerado pelo “milagre econômico”¹²³, e a pressão para que o governo promovesse a abertura política. Ou seja, se a partir de 1964 e meados

¹²¹ Doutora em História. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – *Campus* Farroupilha.

¹²² Fernando Collor de Mello foi eleito presidente em 1989, a primeira eleição direta após o período da ditadura militar e na qual disputaram o cargo de presidente vários políticos que protagonizaram a Campanha Diretas Já anos antes.

¹²³ Período compreendido entre 1967-1974, em que a economia brasileira presenciou elevadas taxas de crescimento anuais calcadas no setor industrial. Após 1974, houve drástica desaceleração econômica, provocando uma também radical redução no nível de vida da classe trabalhadora

da década seguinte era interessante para os principais meios de comunicação fomentar a defesa do regime instituído, no final dos anos 70 o discurso teve que se modificar para contemplar as mudanças que se seguiriam, ainda que de forma “lenta e gradual”.

Em 1964 um golpe civil-militar derrubou o presidente João Goulart¹²⁴ e instituiu uma ditadura que perdurou por vinte e um anos e serviu de modelo para as que se seguiram na região. Nos anos de ditadura, sucederam-se cinco presidentes militares. Foi um período marcado, por um lado, por grandes taxas de crescimento econômico (no período 1967-74), e por outro de crise, concentração de renda, altas taxas de inflação e de endividamento externo, especialmente no último governo (1979-1985).

A ambiguidade não se apresentou apenas na economia. Havia um rígido controle em relação aos meios de comunicação, órgãos de cultura, organizações sindicais e estudantis, instituições de ensino, artistas e intelectuais. Mas também foi um período de grande criatividade e expressividade cultural, como se pode notar no movimento tropicalista e nos festivais da canção, por exemplo.

Também houve resistência, a despeito da empreitada das forças de repressão para eliminá-la da sociedade brasileira. Mesmo com as pressões, mortes, exílios e silêncios, foi a existência de uma oposição, muitas vezes clandestina, fator importante para que a partir do final dos anos 1970 houvesse um deslocamento de rumo. Desde 1978, no estado de São Paulo, uma série de movimentos grevistas impulsionaram o movimento sindical brasileiro e evidenciaram o protagonismo de um de seus líderes, o então metalúrgico Luís Inácio Lula da Silva, e ainda criaram as bases para o surgimento de um dos mais importantes partidos políticos pós-ditadura, o Partido dos Trabalhadores (PT).

Em 1979 foi promulgada, para o bem ou para o mal, a Lei da Anistia, que possibilitou que vários brasileiros que estavam exilados pudessem retornar ao país, mas também que muitos agentes da repressão não fossem julgados pelos crimes que cometeram. Essa lei, deu o tom inicial de como o Brasil trataria as atrocidades cometidas pelo regime ditatorial, diferentemente de muitos de seus vizinhos latino-americanos.

E, por fim, mas não menos importante, a partir de 1983 inicia-se uma movimentação pelo retorno às eleições diretas para escolha do Presidente da República, fato que não ocorria desde 1960. Essa movimentação, que se pode localizar na proposta de emenda parlamentar do deputado Dante de Oliveira foi encampada por vários setores da oposição política nacional, liderado pelo PMDB, na figura do deputado Ulysses Guimarães, que se julgava candidato natural ao futuro pleito. A reivindicação por eleições diretas num período de desgaste do regime ditatorial e de crise

¹²⁴ João Goulart era vice-presidente de Jânio Quadros que renunciou à presidência em 1961. Ainda nesse ano o Brasil enfrentou uma séria crise política com iminência de guerra civil para garantir a posse do vice-presidente.

econômica levou milhares de pessoas às ruas para pedir o retorno à democracia, sendo, até hoje, uma das mais expressivas mobilizações populares da história brasileira.

Esse artigo é resultado parcial de projeto de pesquisa em andamento desenvolvido no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, *Campus Farroupilha*, contando com auxílio do bolsista de iniciação científica Andrei Marcelo da Rosa, aluno do ensino técnico da instituição.

A imprensa escrita durante a ditadura militar brasileira

Na rememoração dos cinquenta anos do golpe civil militar que desembocou nos 21 anos de ditadura, muitas empresas jornalísticas publicaram uma espécie de *mea culpa*, procurando melhorar sua imagem junto a seus leitores/consumidores, fazendo uma crítica da postura assumida na ocasião. O caso mais emblemático, devido a importância que a empresa ocupa no cenário nacional, localiza-se nas Organizações Globo. Sabidamente, essa empresa foi grande beneficiária do regime instituído em 1964. Seu apoio sempre foi explícito. Porém, como sabem os historiadores, a memória não é estática, ela é construída. Em agosto de 2013, em seu editorial o Jornal o Globo admitiu que “desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas: ‘a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura’. De fato, trata-se de uma verdade, e, também de fato, de uma verdade dura.”¹²⁵

O jornal admite ter se posicionado ao lado dos militares da ordem democrática em 1964, entretanto afirma que não estava sozinho nesse intento:

A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há como refutá-la. É História. O GLOBO, de fato, à época, concordou com a intervenção dos militares, ao lado de outros grandes jornais, com do ‘O Estado de São Paulo’. “Folha de S. Paulo”. “Jornal do Brasil” e o “Correio da Manhã”, para citar apenas alguns. Fez o mesmo parcela importante da população, um apoio expresso em manifestações e passeatas organizadas em Rio, São Paulo e outras capitais.¹²⁶

O jornal Zero Hora é a publicação diária impressa de maior circulação no estado do Rio Grande do Sul, conforme dados de 2015¹²⁷. Pertence atualmente ao grupo RBS (Rede Brasil Sul), de propriedade da família Sirotsky, que, por sua vez, está vinculado à Globo¹²⁸. Sua ascensão, de Zero Hora, ocorreu justamente no período de efervescência da campanha Diretas Já, vinculada à crise do jornal Correio do Povo, de maior prestígio à época¹²⁹. Somente em 1970, o jornal passou para o controle da família Sirotsky.

De acordo com Giovanaz (2015), a partir da emergência dos governos militares ditatoriais o grupo RBS expandiu sua área de atuação progressivamente e, conseqüentemente, seu poderio econômico,

¹²⁵ APOIO..., 2013.

¹²⁶ Idem.

¹²⁷ Dados da Associação Nacional de Jornais. <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>

¹²⁸ Desde 1967, a RBS tornou-se afiliada da Rede Globo. Conforme Giovanaz, 2015.

¹²⁹ O Correio do Povo deixou de circular em 1984, retornando somente em 1986. Felippi, 2006.

tornando-se hegemônico no estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, em Santa Catarina. Isso ocorreu, em grande medida, por sua associação à Rede Globo, o que, conforme o autor supracitado “representava um atestado inequívoco de adesão ao regime”¹³⁰ militar. No período essa adesão significava maior poder de atuação e de expansão sem muitas restrições.

Dessa forma, a fonte de pesquisa escolhida recaiu sobre um jornal que se tornara hegemônico no Rio Grande do Sul, vinculado a uma empresa jornalística, que, por sua vez, mantinha relações com órgãos do governo e a maior empresa de comunicação do país, as Organizações Globo.

Como dito no início dessa seção, muitos grupos jornalísticos aderiram ao regime autoritário, entretanto cabe mencionar que apesar da dificuldade, da repressão e da censura imposta pelo governo, especialmente a partir de 1968, com a edição do Ato Institucional nº. 5, alguns jornais tentaram burlar essa barreira. São exemplos de jornalismo de resistência ao regime os periódicos Coojornal, Pasquim, Pif Paf, entre outros, além de jornalistas que mesmo estando em grandes jornais, tentavam escapar dos mecanismos de censura para divulgar suas matérias.

Uma abertura consentida

O final dos anos 1970 demonstrou que muitas coisas estavam se modificando no cenário político brasileiro. Pode-se afirmar que o primeiro indício foi a retomada do movimento sindical ocorrida com as greves da região do ABC paulista¹³¹, a partir de 1978. A política econômica levada a termo pelo governo militar, que onerou fortemente os trabalhadores, promoveu um forte arrocho salarial, pois a recomposição dos rendimentos não acompanhava os índices de inflação e o aumento do custo de vida levou fatalmente a mobilização dos operários por melhores salários.

Em 1978 aconteceu a greve dos trabalhadores da fábrica da Scania, localizada na cidade de São Bernardo. Foi como um rastilho de pólvora. Nos anos seguintes novas greves eclodiram, atingindo também cidades próximas como Santo André, São Caetano e a capital do estado, São Paulo. Esse movimento provocou o surgimento de novos líderes sindicais, sendo o maior expoente o futuro presidente, Luis Inácio Lula da Silva, mas também revitalizou o movimento sindical abafado pelos anos de governo autoritário.

Para muitos estudiosos do período esse foi o primeiro indício de peso de que o regime se esboroava. A partir desses movimentos de trabalhadores, outros surgiram: a formação da Central Única dos Trabalhadores - CUT, a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST, a

¹³⁰ Giovanaz, 2015, p.34.

¹³¹ O termo faz referência aos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, que integram a região metropolitana de São Paulo. Essas cidades agregavam várias indústrias metalúrgicas no final dos anos 1970 e início da década seguinte.

revogação do AI-5 em janeiro de 1979, a lei da Anistia, também em 1979 e, é claro, a Campanha Diretas Já.

No Brasil, a historiografia sobre o retorno ao estado democrático, segundo Denise Rollemberg (2010), apresenta-se sob três vertentes. A primeira, em que o Estado aparece como um ente coercitivo, o protagonismo está colocado nos movimentos sociais, que ressurgem, especialmente, por força da crise do regime, mais especificamente, pela crise econômica causada pelo fim do período do *milagre*.

A segunda corrente explicativa, ainda que considere o papel dos movimentos sociais, especialmente dos trabalhadores, percebe o momento de abertura política como tributário do sucesso da política econômica (milagre econômico) e não de sua crise, invertendo assim a lógica de análise. A explicação está mais relacionada às dissensões do próprio grupo militar no poder (linha dura, linha moderada). Para os autores que adotam essa perspectiva, “mais complexa e sofisticada”, segundo Rollemberg,

...os militares só perderiam o controle da situação no governo João Figueiredo, marcado por um elemento importante no cenário político: o movimento sindical do ABC paulista, surgido em 1978, ou seja, ainda sob Geisel.”¹³²

Nessa linha de interpretação, considerara-se fundamental o peso que os militares da linha dura tiveram no processo de abertura, isto é, posicionando-se de forma contrária, ditando o ritmo lento e controlado como ele ocorreu.

Já o terceiro eixo historiográfico explica a transição para a democracia como fruto dos conflitos que existiam “dentro da corporação militar, nas disputas entre projetos rivais alternativos e excludentes”.¹³³ Os autores que se vinculam a essa corrente não descartam a importância dos movimentos sociais de oposição ao regime, como, por exemplo, o das Diretas, mas veem, nos anos que se seguem ao fim da ditadura, mais continuidades do que rupturas.

De certa forma, as duas últimas vertentes explicativas dão a ideia de como ocorreu a transição entre esses dois momentos políticos (o do final da ditadura e o de retorno da democracia) no Brasil. Foi, muito antes, uma forma conciliatória de terminar um regime extremamente autoritário, do que uma guinada histórica e política. A lei da Anistia (1979)¹³⁴ bem prova isso, conforme nos indica o historiador Daniel Aarão Reis¹³⁵.

¹³² Rollemberg, 2010, p. 100. Geisel foi o quarto presidente militar, governando no período 1974-1979.

¹³³ Idem, p. 101.

¹³⁴ Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Regulamentada pelo Decreto nº 84.143, de 31 de outubro de 1979. Essa lei concedia anistia àqueles que cometeram crimes políticos entre 1961 e 1979, excetuando-se os denominados crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Também anistiou entes públicos que cometeram prisões arbitrárias, atos de tortura e assassinatos em nome do regime. A Comissão Nacional da Verdade solicitou em 2014 a revisão dessa lei, pois em documento datado daquele ano afirma que o documento infringe leis internacionais, pois, “não poderia incluir agentes públicos que realizaram crimes como “detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções,

O governo civil que se estabeleceu em 1985, por meio de eleições indiretas (colégio eleitoral¹³⁶), também é um reflexo dessa continuidade, pois os candidatos da chapa de oposição ao regime eram antigos aliados dos militares e garantiriam uma política de não revanchismo aos antigos ocupantes do poder central.

A Campanha pelas eleições diretas no Brasil

Para o jornalista e escritor Elio Gaspari (2016), a Campanha Diretas Já foi uma espécie de união entre vários setores políticos que se colocavam em oposição – ainda que em momentos anteriores possam ter prestado apoio - ao governo militar, e o povo.

De toda forma, a Campanha, ainda que tenha contado com forte participação popular, o movimento também foi permeado por disputas internas. O regime estava em seus momentos finais, ainda que o presidente Figueiredo insistisse em algumas manobras para se manter mais alguns anos no poder. Políticos que antes eram aliados dos militares viam agora a possibilidade de passar à oposição. Outros mantiveram sua posição de apoio à ditadura vislumbrando mais alguns anos de regime autoritário. Novos políticos também surgiam, uma oposição mais aguerrida e que se misturava a essa oposição “requentada”.

Além dos políticos “profissionais” a Campanha pelas Diretas contou também com a participação efetiva de intelectuais, jornalistas, juristas, artistas, sindicalistas, lideranças religiosas e, até, torcida organizada de times de futebol. Todos tinham o mesmo objetivo, porém nem sempre concordavam com o caminho a tomar para alcançá-lo.

Assim, no dia 2 de março de 1983 o deputado federal Dante de Oliveira do PMDB (Mato Grosso) apresentou ao Congresso Nacional proposta de emenda que visava estabelecer eleições diretas para presidência da República. No mês seguinte o diretório Nacional do partido decidiu por encampar a bandeira pela eleição direta. O governo militar, dois meses depois, por meio de um ministro, propôs a reeleição do presidente Figueiredo. Esse era o clima político no ano de 1983, quando se começou a discutir abertamente a possibilidade do retorno às eleições diretas para presidente no Brasil.

Ainda naquele ano formava-se um comitê suprapartidário para organizar as ações em prol das eleições diretas. Integravam essa frente o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Lula,

desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres”, pois tais ilícitos são “incompatíveis com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional”, uma vez que se tratam de crimes contra a humanidade, “imprescritíveis e não passíveis de anistia.” LIMA, 2014.

¹³⁵ Ver REIS, Daniel Aarão. Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória. In: 1964-2004: 40 anos do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.

REIS, Daniel Aarão. A ditadura faz cinquenta anos: história e cultura política nacional-estatista. In: A ditadura que mudou o Brasil. 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

¹³⁶ Desde a Constituição de 1967 os presidentes eram escolhidos por meio de Colégio Eleitoral, composto por “membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas assembleias legislativas dos estados, cujo número final era determinado pela proporcionalidade do número de eleitores inscritos em cada estado”. (DIRETAS JÁ, Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro). Após 1982 essa representação por estado foi uniformizada: eram seis representantes por assembleia.

presidente do PT, o governador de São Paulo Franco Montoro, o deputado e presidente do PMDB Ulysses Guimarães, entre outros.

A primeira manifestação pública pelas Diretas aconteceu em Goiânia, após um debate sobre o tema em que compareceram representantes do PT e Ulysses Guimarães, em que os participantes ocuparam as ruas da cidade exigindo o retorno à ordem democrática.

A partir daí uma série de comícios e eventos, alguns de grandes proporções tomaram conta das grandes cidades brasileiras. O PMDB tinha um grande aparato para dar conta da mobilidade que era exigida de seus líderes, e da montagem das estruturas para os eventos.

Em relação à imprensa, de acordo com as fontes consultadas e, especialmente conforme Gaspari, poucos foram os veículos que, inicialmente, deram destaque aos comícios e atividades que reivindicavam as eleições diretas; muitos ainda estavam fortemente comprometidos com o governo instituído. À medida que as manifestações cresciam e angariavam mais apoios, ficava mais difícil ignorar o fato, mas podia-se dedicar pouco espaço a ele. Essa era a prática, por exemplo, da Rede Globo (televisão e jornais). Tática diferente adotou a TV Bandeirantes¹³⁷ e também a Folha de São Paulo.

E no Rio Grande do Sul?

Como já mencionado, esse texto é resultado de pesquisa empreendida com fontes de imprensa escrita, mais especificamente com o jornal Zero Hora, de circulação no estado do Rio Grande do Sul. O recorte temporal escolhido, no âmbito da historiografia, está circunscrito à História do Tempo Presente, pois relaciona-se com os acontecimentos que dizem respeito a contemporaneidade do pesquisador. Segundo o historiador François Dosse (2012), a história do tempo presente vincula-se ao "tempo da experiência", volta-se para temas atuais e que, de certa forma, ainda suscitam discussões sociais.

O movimento pelas Diretas, embora de curta existência, pois teve duração de cerca de dois anos, foi prolífico, com constantes atos nas principais cidades do país, concentrando os maiores nas principais capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

A capital do Rio Grande do Sul se articulou em prol do movimento, mas, assim como percebe-se para temas da história política mais recente, como por exemplo no que tange ao período da ditadura militar, a produção acadêmica e, especialmente historiográfica, acerca do assunto é escassa. Para comprovar essa afirmação, basta uma simples busca em base de dados ou em páginas de bibliotecas universitárias. Konrad e Lameira (2014), ao compararem os trabalhos acadêmicos sobre o golpe e a ditadura no Brasil em 2004 e 2014, concluem que,

¹³⁷ A TV Bandeirantes sofreu retaliação do governo pela cobertura dada aos comícios pelas Diretas. Segundo Gaspari (2016), teve negada concessão para abertura de sucursal em Brasília.

Passados dez anos desses balanços a tendência de aprofundamentos analítico e empírico se manteve, embora sem o mesmo ímpeto. Poucas novidades em termos de historiografia foram apresentadas, ao contrário de dez anos antes. No caso do Rio Grande do Sul, contudo, os trabalhos que tratam do Golpe de 1964 e da Ditadura de Segurança Nacional são ainda escassos. Principalmente, aqueles de acesso a um público maior. Há uma relativa ausência de estudos monográficos que se debruçam sobre as temáticas relativas a essa temática.¹³⁸

Dessa forma, ainda que o campo de pesquisa seja farto para os historiadores e pesquisadores de outras áreas, há poucos parâmetros para diálogos e para se tecer comparações entre as análises.

A pesquisa em Zero Hora, de março de 1983 a abril de 1984, revela que o jornal não se furtou de noticiar os eventos e debates relativos a questão da sucessão presidencial e, especialmente, no que diz respeito à Campanha pelas eleições diretas. O material encontrado no periódico compreende cartas de leitores que opinavam sobre o tema, geralmente se colocando a favor das eleições diretas, entrevistas, artigos produzidos por seus jornalistas e pequenos informes sobre o movimento.

No que diz respeito ao tema desse estudo, a bibliografia consultada indicou que os atos populares no Rio Grande do Sul só ocorreram em 1984, tendo referência a duas manifestações: uma caminhada que congregou cerca de 50 mil pessoas na cidade de Capão da Canoa, localizada no litoral do estado. Conforme Kotsho (1984), no evento compareceram Orestes Quércia (SP), o ex-governador do Rio Grande do Sul Sinval Guazzelli e o senador Pedro Simon (PMDB). O outro ato, dessa vez realizado na capital, ocorreu no dia 13 de abril. No ato estavam presentes Lula, Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Alceu Collares e Osmar Santos, o mestre de cerimônias das Diretas. De acordo com Kotsho (1984), no evento estiveram presentes 200 mil pessoas.

A análise da documentação revelou que articulação da Campanha Diretas Já era realizada, no Rio Grande do Sul, pelo então deputado federal José Fogaça (PMDB) e que outros atos foram organizados, não somente aqueles citados pela bibliografia.



Figura 1: Cartaz produzido PMDB/RS. Zero Hora, 12 jan. 1984.

No dia 5 de janeiro, Zero Hora noticiava que havia ocorrido no dia anterior, no centro da capital gaúcha, um comício relâmpago que visava divulgar futuras ações do comitê local, em especial um grande ato planejado para a próxima semana que contaria com a presença de vários artistas locais e do centro do país, além de diversos políticos. Denunciava, entretanto, a completa ausência de deputados estaduais, poucos vereadores e a participação de apenas dois deputados federais: José Fogaça e Jorge Uequet.

No dia seguinte ao evento de abertura oficial da Campanha em Porto Alegre, Zero Hora noticiou na capa o ato, como pode-se observar na figura abaixo, destacando o protagonismo do PMDB, bem como nas matérias que integraram o periódico naquela data. Além dos líderes daquele partido, participaram o então presidente do Partido Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e vários artistas de renome. O jornal também noticiou uma especial visita dos líderes do PMDB à sede da RBS.



Figura 2: Capa do jornal Zero Hora de 14 jan 1984.

Do trabalho realizado até a presente data, depreende-se que o jornal procurou dar ampla cobertura ao debate sobre a sucessão presidencial, contemplando os argumentos dos dois grupos que se antagonizavam. Entretanto, análise inicial da documentação indica que o jornal atribuía mais destaque às notícias referentes ao grupo defensor das Diretas, bem como suas diversas ações. Uma possível explicação para isso, visto que, como indicado no início desse artigo, o jornal havia se colocado ao lado dos militares, pode estar no fato de que a ditadura já dava seus últimos suspiros e era necessário pensar nos novos tempos que se vislumbravam.

Porém, cumpre-nos ressaltar, que essas são conclusões iniciais. A análise mais aprofundada da documentação poderá indicar outras explicações.

Considerações finais

Embora tenha levado às ruas milhares de pessoas, em várias cidades do país e tenha congregado diversos grupos sob uma mesma bandeira, a Campanha Diretas Já não logrou êxito, no que diz respeito ao seu objetivo primordial. Em 26 de abril de 1984 a Emenda Constitucional Dante de Oliveira foi derrotada. Pode-se concluir, por outro lado, que mesmo não tendo sido vitoriosa a

emenda que levaria o povo novamente às urnas, a Campanha foi exitosa sob o ponto de vista da mobilização popular.

Os meses seguintes foram de articulação de ambos os lados; não houve consenso nem mesmo em torno do candidato que significava a continuidade do regime. Contrariando a expectativa de muitos, incluindo o Presidente, Paulo Maluf seria o representante do governo. No que tange à oposição, optou-se por uma saída menos ruidosa, mais conciliatória, que garantisse a vitória da chapa liderada pelo PMDB no Colégio Eleitoral. Assim, o candidato natural, aquele que liderara o movimento pelas Diretas, Ulysses Guimarães, cedeu lugar a Tancredo Neves que escolheu como seu vice José Sarney.

Tancredo Neves não chegou a assumir, pois gravemente doente na data da posse, faleceu poucos dias depois. Seu vice assumiu, tendo a posse garantida por todos os personagens envolvidos no processo político, fossem eles do governo que saía, ou do grupo que entrava.

Referências Bibliográficas

APOIO editorial ao golpe de 64 foi um erro. O Globo, Rio de Janeiro, 31 ago. 2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604>. Acesso em: 6 de junho de 2016.

CHAUVEAU, Agnès; TÉTART, Philippe (orgs) *Questões para a história do presente*. Bauru: EDUSC, 1999.

DIRETAS JÁ. In: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC: Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo>.

DOSSE, François. História do Tempo Presente e Historiografia. *Tempo e Argumento*, Florianópolis, v. 4, n. 1, p. 5-22, jan/jun 2012.

ELMIR, Cláudio Pereira. Uma aventura com o Última Hora: o jornal e a pesquisa histórica. *Anos 90*, Porto Alegre, v. 19, n. 36, p. 67-90, 2012.

FELIPPI, Ângela Cristina Trevisan. *Jornalismo e Identidade Cultural*. Construção da Identidade Gaúcha em Zero Hora. 2006. Tese (Doutorado em Comunicação Social). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

GASPARI, Elio. *A Ditadura Acabada*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.

GIOVANAZ, Daniel Piassa. *Da conquista do canal 12 à compra do jornal A Notícia: As articulações políticas que consolidaram o oligopólio da RBS em Santa Catarina*. 2015. 289 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

KONRAD, Diorge Alceno. LAMEIRA, Rafael Fantinel. O golpe civil-militar de 1964 e o Rio Grande do Sul: Historiografia e História. BATISTELLA, Alessandro (org). *O golpe civil-militar de 1964 no Sul do Brasil*. Chapecó: Argos, 2014. ePUB.

KOTSHO, Ricardo. *Explode um Novo Brasil*. Diário da Campanha das Diretas. São Paulo: Brasiliense, 1984.

LEONELLI, Domingos. OLIVEIRA, Dante de. *Diretas já: 15 meses que abalaram a ditadura*. Rio de Janeiro: Record, 2004.

LIMA, José Antonio. Comissão da Verdade pede a revisão da Lei da Anistia. *Carta Capital*, 10 dez. 2014. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/comissao-da-verdade-pede-a-revisao-da-lei-da-anistia-3171.html>. Acesso em: 6 de junho de 2016.

NERY, Vanderlei Elias. Diretas Já: a busca pela democracia e seus limites. *Lutas Sociais*, São Paulo, n.24, p.70-77, 1o sem. 2010.

RODRIGUES, Alberto Tosi. *Diretas Já. O grito preso na garganta*. São Paulo: Perseu Abramo, 2003.

ROLLEMBERG, Denise. As trincheiras da memória. A Associação Brasileira de Imprensa e a ditadura (1964-1974). ROLLEMBERG, Denise. QUADRAT, Samantha Viz. *A Construção Social dos Regimes Autoritários*. Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p.97-144.

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no Brasil, 1974-1985. In: FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs). *O Brasil Republicano*. Vol.4 – O tempo da ditadura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 243-282.

Formación política por la paz de Colombia: perspectivas del movimiento social en el posacuerdo

Jorge Enrique Aponte Otálvaro

Universidad Pedagógica Nacional

Fundación Universitaria Unimonserrate

Escuela de Formación Política Pedro Nel Jiménez

Movimiento Social y Político Marcha Patriótica

Resumen: El fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), es un hecho. El término del proceso de diálogos y de la mesa de conversaciones entre estas dos partes en conflicto ha dado como resultado una salida pactada, política y consensuada a la guerra que ha atravesado al país desde hace más de sesenta años. El acuerdo final pactado implicará varios retos en el porvenir de Colombia, pero en particular del movimiento social y organizado. Para quienes asumen sus procesos de movilización y militancia en la izquierda política, la implementación de los acuerdos es una ventana de oportunidad hacia la realización de una sociedad más justa, democrática y que defina condiciones de vida digna para la población colombiana. En esta ponencia planteo los retos del proceso de implementación de los acuerdos de la Habana, en el marco del pos acuerdo y de la acción política que recae sobre el movimiento social en ello. Esto último se formula tomando como base una de las apuestas de Estanislao Zuleta en cuanto a los procesos de formación política, el cual definió que estos deben dirigirse hacia la creación de un mundo de posibilidades que les permita a los sectores subalternizados de la sociedad colombiana pensar en ser gobierno en ser poder popular.

*

Durante más de cincuenta años Colombia ha sufrido los embates de una guerra, que ha arrojado un saldo elevado de víctimas de todo tipo. Siete millones de desplazados internos, mas de mil novecientas masacres, cerca de cinco mil desapariciones forzadas, veintisiete mil secuestros y más de veintitrés mil asesinatos selectivos; dan cuenta de las dimensiones de un largo conflicto armado con profundas raíces estructurales (Centro de Memoria Histórica, 2014).

Estas dimensiones del conflicto permiten dar cuenta del nivel de catástrofe que ha tenido que afrontar el país. La salida a la guerra se mantuvo en el péndulo guerra y paz, entendida la primera como la búsqueda de terminar el conflicto por medio de la eliminación física del contendiente (Estado o insurgencia) y la paz vista como las salidas dialogadas, negociadas y pactadas sin el recurso a la violencia para concertar un cese de la guerra.

Son muchos los intentos de lograr la salida pactada a la guerra. Desde los años ochenta se evidencian las primeras apuestas por lograr allanar un escenario de diálogo que permitiera abordar

las causas sociales y políticas del enfrentamiento, sin embargo muchos de estos intentos fueron al traste. Solamente finalizado los años ochenta y en las postrimerías de los noventa, se logran pactos políticos entre el Estado colombiano y cinco ejércitos guerrilleros: el movimiento 19 de abril M-19 en 1989, el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL) en 1991, la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1994, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) en 1992 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1993.

A pesar de estos importantes logros en la finalización de la guerra con estos cinco actores, aún restaba lograr acuerdos con los dos ejércitos guerrilleros más antiguos y grandes del país. Aquí bajo la dirección colegiada de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, se agrupan los dos ejércitos guerrilleros existentes en este momento con la intención de mantener una interlocución con el gobierno nacional. Se dan dos ocasiones de encuentro entre la coordinadora y el Estado colombiano. La primera en Caracas y la segunda en Tlaxcala. Las dos son infructuosas y reabren un nuevo periodo de escalamiento del conflicto.

Como se mencionaba, en el otro extremo del péndulo está la guerra. Cada vez que se daba un intento por lograr un acuerdo entre las insurgencias y el Estado colombiano se maximizaban los enfrentamientos, sabotajes, y en general la persecución hacia la ciudadanía que tuviera cercanía o simpatizara con la salida política a la guerra. Es importante mencionar la acción legal e ilegal de Estado colombiano, el surgimiento y puesta en marcha de estructuras paramilitares y del narcotráfico que tuvieron como objetivo la eliminación física del proyecto revolucionario de la insurgencia por medio de la eliminación física de la población civil. El principio fundamental, tanto de las fuerzas legales del Estado como de las estructuras ilegales fue la doctrina de seguridad nacional con la lógica “quitar al pez el agua”.

Diferentes autores han señalado los desarrollos, dinámicas y periodos del conflicto armado. Todos concuerdan en afirmar que el periodo que va de los años ochenta en adelante es el más cruento no solo por el número de víctimas sino por las modalidades de acción bélica. En este marco se ubica la persecución política, pues si bien las guerrillas y el establecimiento se enfrentaban sobre todo por la toma del poder y a partir de allí modificar el modelo económico del país, se trataba también de una estrecha franja de participación que ha circunscrito a la democracia colombiana a la simple representatividad. Miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, militantes políticos, comunales, asociados entre sí con proyectos políticos que fueron trucados por medio de la muerte y no por el debate.

Aun así, el movimiento social y político de Colombia no desfalleció en su exigencia y trabajo por la paz. La mesa de diálogos de la Habana no solo es un logro de las partes en confrontación. Es también producto de la persistente acción política del movimiento social que ha exigido una salida

negociada al conflicto armado social y político de Colombia. Después de cuatro años de conversaciones, se ha logrado un acuerdo pactado entre las partes enfrentadas militarmente.

**

El acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, plantea varios retos que se inscribe en el proceso que a mediano y largo plazo se avizora en Colombia. Este proceso se ha denominado como pos acuerdo, contrario a la idea de pos conflicto, pues parte de comprender que el pacto político firmado entre la insurgencia y el gobierno nacional, es el cierre del enfrentamiento bélico, pero no la solución definitiva de los conflictos sociales que han sido la base del guerra en Colombia. Al contrario el periodo de tiempo que se define posterior a la firma del acuerdo será de intensa movilización social y de maximización de los conflictos que requerirán de amplios niveles de participación. Aquí reside un primer desafío en su implementación: construir, preparar, formar políticamente a la población colombiana que exija los cambios sociales que requieren la tramitación de los conflictos y violencias estructurales y simbólicas del país.

Es importante señalar, que el acuerdo retoma las experiencias fallidas de procesos anteriores no solo entre este actor armado y el Estado, sino en los procesos que también culminó con pactos y procesos de reincorporación a la vida civil. En segunda instancia planteó en su hoja de ruta los puntos sobre los cuales se ha sostenido el enfrentamiento armado; por una parte las profundas desigualdades en los sectores rurales del país y por otra las profundas restricciones a la participación política colombiana. Los puntos restantes (fin de la guerra, solución al problema de cultivos de uso ilícito y narcotráfico, víctimas y proceso de implementación) atañen a elementos más recientes del conflicto social, político y armado del país.

Cada uno de los puntos del *acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*, pretenden dar salida pactada a las causa del enfrentamiento violento entre las FARC EP y el gobierno nacional. En detalle, el acuerdo tiene dos particularidades: la primera una perspectiva territorial la cual da cuenta de los problemas del sector de manera diferenciada, destacando que si bien en la base de los problemas del campo colombiano está la inequitativa y desigual distribución de la riqueza y la propiedad rural, pues cada región merece una atención especial a los problemas particulares de su localidad. Un segundo elemento es la perspectiva concentrada en las víctimas. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que este acuerdo es el primero en la historia de procesos de negociación en el mundo que fija su atención en la reparación integral de las víctimas buscando disminuir la impunidad, promoviendo mayores niveles de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición.

Aquí se define un segundo desafío, pues al concentrarse el acuerdo en la perspectiva territorial y en la dignificación de las víctimas, el movimiento social requerirá de importantes bríos en su acción

política que logren aumentar la plataforma militante en la regiones, construya puentes entre la ruralidad y lo urbano, descentralice la toma de decisiones y la participación y configure apuestas por la formación de sujetos políticos.

En Colombia son amplias y diversas las experiencias de educación popular que han logrado dar cuenta de reales procesos de formación política ligado a experiencias organizativas (RUIZ, 1993) (Tamayo, 2006) (Unda, Martinez, & Medina, 2003). Experiencias de educación en las periferias de las ciudades, procesos de formación del campesinado, escuelas y seminarios de formación partidarios y en fin propuestas de trabajo de base que parten desde la implementación de una iniciativa educativa. Muchas de estas experiencias son conocidas en el mundo, sobre todo por quienes participaron en ellas y lograron un saber sistematizado sobre las mismas (Fals Borda, Lola Cendales, Ignacio Torres, Alfonso Torres entre muchos otros), marcadas por el objetivo de formar sujetos políticos que fijen posición sobre el momento histórico actual (RODRIGUEZ Avila, 2007). Gracias a estas experiencias, es posible pensar hoy en día en lo que implican los términos formación de sujetos políticos o formación política. Cuando nos referimos a procesos de formación el propósito es establecer las condiciones que permitan el compartir, enseñar, aprender, reflexionar, comprender y actuar conducentes a la constitución de sujetos orgánicos que con elementos de juicio suficientes asumen una posición frente al escenario social colombiano y toman decisiones, y determinan su acción sobre él (Aponte & Mendoza, 2014); (Rodríguez, 2012); (Mendoza & Rodríguez, 2007).

Con ello se busca que la formación trascienda la idea de concientización estandarizada y potencie al sujeto en su capacidad de agenciamiento, de acción crítica, haciendo énfasis en los niveles de compromiso ético con las demandas sociales (Zemelman, 2001). Estos procesos de formación se deben definir a partir de estrategias de trabajo que permitan a los sujetos distanciarse de los roles sociales y culturales del capitalismo adjudicado a los sujetos, problematizándolos y cuestionándolos.

Esto último fue una de las preocupaciones políticas del maestro Estanislao Zuleta. En su momento histórico, Zuleta tenía la inquietud por la transformación social, que en sus últimas intervenciones orales y escritas daba en llamar una sociedad democrática. Sin entrar en los pormenores del término que usaba, es evidente en sus escritos y disertaciones públicas, que su preocupación estaba ligada a las líneas de acción política que permitirían la creación de una sociedad diferente. Al respecto Zuleta indicaba lo siguiente:

Un pueblo disperso, cada cual- como he dicho- refugiado en el rincón de su pequeña miseria, sin más relaciones que las que se desprenden de los linderos o de los celos, es un pueblo que no produce nada. Es necesario que el pueblo se organice en comunidades de vecinos de barrios, de

campesinos, en comunidades de cualquier tipo, porque mientras está disperso está perdido; no solamente porque hay mucha miseria-eso también es muy grave- sino porque no tiene cultura y creatividad propias. Y esta organización es esencial porque es la manera que tiene el pueblo de producir su propia cultura, no solo de recibirla. (Zuleta, Democracia y participación, 2008: 40)

Lo anterior nos permite pensar en un principio de acción política y ética que dibuja un sentido en los procesos de formación. Sería inconcebible pensar en procesos de formación que no tengan por expectativa la organización, que rompa la ética individualista. Desde el pensamiento de Zuleta, se deben potenciar acciones educativas (de formación diríamos nosotros) que permitan hacer indeseable vivir en medio del tipo de sociedad que tenemos, que le permita a los sujetos hacerse a su propio criterio acerca de la sociedad en la que vive, soñando una distinta y articulándose orgánicamente a otros para transformar la realidad. Los procesos de formación, si se llaman a sí mismos políticos, deben conducir desde este principio señalado, hacia la provocación y el deseo por luchar por una sociedad más justa y diferente, que forme a los sujetos para participar no solo desde la resistencia, sino para ser gobierno, para dirigir los destinos de sus territorios, que los forme para participar y ser poder.

Que la gente pueda opinar no es suficiente, es necesario que pueda actuar en aquello que le interesa en su comunidad, en su barrio, en su municipio. Pero para poder actuar tiene que tener bases, instrumentos culturales y materiales. La apertura democrática implica la creación de un mundo de instrumentos colectivos. A esto se le puede llamar participación. [...] la lucha por una apertura democrática no puede existir sin participación popular. (Zuleta, Democracia y participación, 2008:40-41)

Aquí dibujamos un primer horizonte de sentido, pues en su acción educativa y formativa la escuela debe priorizar por la formación de sujetos, más allá de la coyuntura de diálogos de paz. Si se piensa en detalle, la Escuela tiene un importante radio de acción e influencia educativa, que sobre todo recae en población campesina. En el largo plazo en cada una de estas regiones, las cuales muchas de ellas han sido de las más golpeadas por la guerra, se requerirán de sujetos políticos empoderados y críticos que decidan no solo resistir sino que tengan las posibilidades materiales y culturales para poder ser gobierno. A manera de ejemplo, valga revisar los borradores conjuntos de preacuerdo de la mesa de diálogos de la Habana, y se encontrará que en cada uno de los puntos hasta ahora acordados, se desprenden la creación de consejos municipales, departamentales y nacionales en los cuales se dará apertura a niveles de participación y decisión; allí será importante dotar de instrumentos materiales y culturales que les permita a los y las campesinas de Colombia incidir directamente en el rumbo de sus destinos, en cerrar la inequitativa distribución de la riqueza en Colombia y alcanzar reales niveles de participación.

Para Zuleta, esta labor era fundamental. Por una parte porque conlleva a la creación de un conjunto de posibilidades reales que le permitan a los ciudadanos participar efectivamente en la conducción y control de los asuntos que les conciernen, de otro lado porque abre una ventana de oportunidad para construir una sociedad más justa en la que pueda ser real el goce de todos los derechos. Aquí es válido plantear una discusión con lo que he denominado luchas pedagógicas por la paz de Colombia. Por ellas entiendo, los debates, conflictos e intereses cruzados que existen entre quienes realizamos labores educativas y de formación a distintos niveles y que hemos asumido una posición acerca del proceso de paz y por lo tanto edificamos propuesta de educación acordes con nuestra interpretación y posición fijada sobre la mesa de diálogos, los acuerdos alcanzados y el pos acuerdo. Estas pugnas se dan en dos sentidos. Entre quienes son escépticos al proceso de paz, sus acuerdos e implementación y consideran que los procesos de formación política deben conducirse a “*eleva los niveles de conciencia de clase*”, centrarse en un único sujeto (sujeto trabajador) y restar importancia a lo pactado entre la insurgencia y el Estado Colombiano. Esta posición es muy discutible, pues encierra la acción educativa y pedagógica de formación a un estrecho margen de maniobra. Es miope frente a los acuerdos alcanzados y no logra evidenciar las posibilidades de superación de la guerra y a su vez el reto en la formación de otras ciudadanías.

De otro lado está la posición que ha asumido la labor de formación en correspondencia a los acuerdos logrados en la mesa de diálogos de paz y proyecta un ejercicio de acción que supera el corto plazo, es decir piensa no solo la implementación inmediata (cinco a diez años), sino que avizora procesos de formación que amplíen la base social que quiera, desee y pueda participar directamente en construir una sociedad más justa. En el caso de la Escuela Pedro Nel, considero esta debe ser una de sus líneas rectoras en su modelo pedagógico, lo cual recogería en gran medida la idea de organicidad defendida por Zuleta así como la ampliación de los canales de participación y de construcción de sociedades democráticas.

Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad de los justos cantarían el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho. Hay que poner un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. (Zuleta, 1994)

Visto así, formulo para la discusión del movimiento social, y en general para los procesos de formación en Colombia al interior de las organizaciones sociales de izquierda, retomar esta idea

rectora de Zuleta: la formación política debe dirigirse hacia la creación de un mundo de posibilidades que les permita a los sectores subalternizados de la sociedad colombiana, a aquellos quienes han sido golpeados por la miseria y el conflicto social, político y armado pensar en ser gobierno en ser poder, dotarlos de las herramientas culturales y materiales que requieren para ello, lograr que cada día más los ciudadanos colombianos no se resignen a vivir en este sistema sino que decidan cambiarlo

El sistema no se derrumbará, como pensaba el camarada Lenin, desde arriba, porque alguien se tome el poder, organice leyes y nacionalice empresas. El sistema solo se derrumba desde abajo cuando los que allí están ya no puedan soportarlo. Las llamadas revoluciones socialistas, a pesar de sus propósitos, no destruyeron el sistema, porque se limitaron a crear un aparato desde arriba, cuando el asunto es que no puede destruirse sino desde abajo. En este sentido los educadores tienen un trabajo importante por hacer: promover a la gente de tal manera que ya no puedan adaptarse al sistema, que no se resignen a él. Y si el sistema resulta invivible pues habrá necesidad de construir un sistema contra el sistema. Muchos de nosotros no estamos adaptados al sistema, o por lo menos parcialmente. Cuando no estemos adaptados todos, entonces no habrá sistema, y tendremos que inventar una nueva humanidad. Esa es la idea: una nueva humanidad que para todos sea vivible. (Zuleta, 1993: 32)

Lo acordado en la mesa de la Habana, se constituye en una ventana de oportunidad política sin igual pues en el papel plantea mecanismos de participación que sobrepasen la democracia representativa hacia la democracia directa. ¿Están las organizaciones sociales, el movimiento social y sus bases en condiciones de asumir este reto?, ¿Contamos con los actores políticos que influyeran directamente en la toma de decisiones? El acuerdo de la Habana crea veintitres nuevas instituciones en las cuales la participación efectiva o transversal del movimiento social será fundamental para lograr el cumplimiento de lo pactado. Valga mencionar el consejo superior de la administración del ordenamiento del suelo rural, el sistema nacional de alimentación y nutrición, el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, las circunscripciones electorales, el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros. Se trata de instituciones que brindan la posibilidad de ser copados por nuevas generaciones políticas, precisamente quienes han sido silenciados históricamente en el país.

A lo anterior es necesario articular la creación de nuevos partidos políticos y movimientos sociales, que no solo se darán juego en los comicios electorales (lo cual ya es muy importante) sino que deberán ser poder local, poder popular. La historia reciente de Colombia estuvo signada por la estigmatización, persecución y aniquilamiento del movimiento popular. Son miles de cuadros quienes fueron eliminados y con ellos proyectos políticos obliterados, utopías desdibujadas como anquilosadas y tachadas como propuestas por fuera de su tiempo. Un último desafío, en vista de

lograr una sociedad que supere la inequidad y la desigualdad, será la puesta en marcha de un proyecto político que cuente con mas y mas miembros, que lo apoyen, lo legitimen y lo hagna parte de su ser. Nuevas generaciones de colombianos se suman a este esfuerzo. Para lograrlo será necesario sin duda el fundamento y la formación del mvimiento social para ello.

Bibliografía

APONTE, J., Mendoza, C., & Rodríguez, S. (2014). Movimientos, organizaciones sociales y acciones colectivas en la formación de profesores. *Revista Nomadas*(41), 167-183.

MENDOZA, C. &. (2007). La formacion política. *folios*, 36.

RODRIGUEZ Avila, S. P. (2007). Subjetividad, formación política y construcción de memorias. *Pedagogía y Saberes*, 77-85.

RUIZ, H. (1993). *La educación popular en América Latína*. Bogotá: La oveja Negra.

TAMAYO, A. (2006). El movimiento pedagógico en Colombia. *Revista HISTEDBER On-line*(24), 102-113.

UNDA, M. d., Martinez, A., & Medina, M. (Noviembre de 2003). *La expedición pedagógica y las redes de maestros: otros modos de formación*. Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_unda.pdf

VELEZ, G. &. (2014). Formación Política en el tiempo presente: Ecologías violentas y pedagogía de la memoria. *Nómadas*, 123-131.

ZEMELMAN, H. (2001). *De la historia a la política. La experienciade América Latina*. México: Siglo XXI editores.

ZULETA, E. (1993). *Educación y democracia un campo de combate*. Medellín: Fundación Estandislaio Zuleta.

ZULETA, E. (1994). *El elogio de la dificultad y otros ensayos*. Cali: Fundación Estandislaio Zuleta.

ZULETA, E. (2008). Democracia y participación. En E. Zuleta, *Colombia: violencia, democracia y derechos humanos* (pág. 40). Medellín: Hombre Nuevo Editores.

Más allá de la verticalidad y la horizontalidad: la toma de decisiones en los movimientos sociales contemporáneos

Mg. Francisco Longa

CONICET / IDIHCS-UNLP /

Resumen

Con la caída del bloque de países socialistas hacia finales de la década de 1980, terminaron de entrar en crisis las formas organizativas clásicas de la izquierda del siglo XX como partidos políticos y sindicatos, caracterizados entre otras dimensiones, por la verticalidad y la centralidad en la toma de decisiones. La emergencia de nuevos movimientos sociales puso en cuestión esta verticalidad, buscando promover dinámicas horizontales de toma de decisión.

Desde la teoría sociológica este fenómeno fue abordado muchas veces en forma superficial, tomando las formas organizativas –como por ejemplo las asambleas– simplemente como datos empíricos que garantizarían procesos de horizontalidad. En el presente artículo propongo abordar desde una perspectiva sociológica y analítica un caso de estudio: el Frente Popular Darío Santillán, movimiento social argentino nacido en 2004 y de presencia nacional. Orienta la mirada de este trabajo, como hipótesis investigativa, que el par ‘verticalidad-horizontalidad’ resultaría útil, aunque insuficiente, para dar cuenta de la complejidad que revisten los procesos de toma de decisión en los movimientos sociales contemporáneos.

Palabras clave: toma de decisiones- movimientos sociales- horizontalidad- asambleísmo- Argentina

Introducción

Partiendo generalmente de la crítica a los esquemas verticalistas que primaron en las organizaciones políticas clásicas de décadas anteriores, como partidos políticos, sindicatos y organizaciones guerrilleras (Carnovale, 2011 Massetti, 2009), los movimientos sociales contemporáneos buscaron poner en escena nuevas formas organizativas que trascendieran aquellas rígidas estructuras (Svampa, 2008). Así, colectivos culturales, grupos de trabajo social en barrios marginales, procesos de autogestión de fábricas y grupos territoriales de desocupados, buscaron poner en pie nuevas

formas de disputar sentidos de lo público, de construcción desde la autonomía y por fuera de las estructuras institucionales –principalmente el Estado- (Mazzeo, 2007; Vázquez, 2009).

Desde la teoría social, no obstante, estos movimientos fueron observados en la mayoría de los casos desde una perspectiva simplificada (Ferrara, 2003), cuando no idealizadora (Zibechi, 1999), dejando de lado la problematización en profundidad que un abordaje analítico, es decir que busca comprender y analizar orientaciones y significados de las acciones (Melucci, 1994), puede ofrecer al respecto de la toma de decisiones. En función de alcanzar esta profundidad de abordaje, esta investigación se propuso un prolongado trabajo de campo de observación en espacios del movimiento elegido como instancias de toma de decisión, movilizaciones y actividades cotidianas; además, se han realizado entrevistas en profundidad con referentes de diversos movimientos de base que componen la unidad de estudio seleccionada.

De esta forma una de las hipótesis que se busca poner a prueba en el presente trabajo, es que el par horizontalidad-verticalidad es insuficiente para dar cuenta de la complejidad real de los procesos de toma de decisión en los movimientos sociales contemporáneos, requiriéndose por el contrario un abordaje analítico en profundidad que pueda dar cuenta de las dinámicas reales, de consenso y/o centralización que nutren la toma de decisiones. Este trabajo se desprende del trabajo de Maestría (Longa, 2013) que se ocupó de analizar las formas organizativas y las subjetividades políticas en las generaciones políticas que co existen en el movimiento mencionado.

Definiciones conceptuales: abordaje de los movimientos sociales y epistemología crítica

Diversos han sido los modos que ha encontrado la teoría sociológica para abordar el estudio de los movimientos sociales contemporáneos. El amplio abanico conceptual que signa la producción académica en este campo, va desde el análisis racionalista hasta el estudio de las identidades políticas de los sujetos que componen los movimientos. En función de tanta diversidad de enfoques, Pérez Ledesma (1994) reconoció dos grandes paradigmas que han hegemonizado los estudios del campo en Norteamérica y Europa: el paradigma del Actor Racional y el paradigma de la Identidad.

El llamado paradigma del actor racional aloja en su interior a la corriente de la Movilización de Recursos (MR) que parte de la creencia en la racionalidad de los actores, quienes definirían su participación en los movimientos sociales en función de un cálculo de costo-beneficio (Olson, 1971; Elster, 1989). Desde dicho marco, los movimientos sociales fueron analizados a través de la actividad individual de los sujetos que participan en ellos, entendiendo a éstos como naturalmente maximizadores de beneficios. Sidney Tarrow, uno de los principales referentes de lo que luego se denominará la corriente de la Movilización Política (también dentro de este paradigma), observó la

limitación que reviste un enfoque que apenas busca los incentivos micro-económicos, sin analizar los factores culturales. En la misma línea, Cohen (1985) destacó que la MR dejaba de lado valores, normas, ideologías, cultura e identidades de los grupos estudiados, los cuales resultan fundamentales para una total comprensión de los movimientos sociales. Por su parte, Mayer (1995) remarcó el individualismo metodológico implícito en este acercamiento, y criticó el silenciamiento que la MR dispensó hacia las creencias y emociones en los comportamientos colectivos de la sociedad.

En función de contrarrestar el énfasis en los incentivos materiales de los autores del paradigma del actor racional, a partir de los años 1960 surgió en Europa una nueva corriente para el estudio de los Movimientos Sociales que puso en primer plano la cuestión de la identidad. La denominada escuela de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) forjó un modelo teórico que escapaba del análisis racional, a la vez que negaba la visión funcionalista de la cultura como conjunto fijo y predeterminado de normas y valores heredados del pasado. Por el contrario, el paradigma de la identidad vino a sostener que los NMS son capaces de generar áreas y redes donde se nuclean individuos y grupos compartiendo culturas e identidades. Entre sus autores más destacados se encuentran Alberto Melucci, Alain Touraine y Alessandro Pizzorno. Para profundizar las diferencias con el análisis racionalista del paradigma del Actor Racional, desde el paradigma de la identidad se ha sostenido que “el grado de identificación con un grupo alcanza su nivel máximo cuando el coste de actuar junto a otros por el mismo fin colectivo es nulo” (Pizzorno, 1989: 31). De esa forma se sostiene que en las acciones colectivas el mismo hecho de participar anula “la relación coste/beneficio porque sólo a través de la propia participación en la acción puede beneficiarse un individuo” (Revilla Blanco, 1994: 191), lo cual demostraría que la participación es un fin en sí mismo.

Sin dudas, el autor más destacado dentro del paradigma de la identidad ha sido el ya mencionado Alberto Melucci quien, operó un giro epistemológico respecto a las corrientes anteriores, ya que no se limitó a agregar variables al análisis sino que partió de un enfoque radicalmente distinto, al analizar a los movimientos como unidades analíticas en lugar de hacerlo como unidades empíricas. Para Melucci las corrientes anteriores trataron a los movimientos sociales como datos empíricos unitarios cuando su propuesta, en cambio, implica considerar los fenómenos colectivos como “procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian, y toman decisiones” (Melucci, 1999: 57). En este trabajo, los procesos de toma de decisiones son abordados entonces principalmente teniendo en consideración las advertencias de Melucci, buscando dar cuenta de las orientaciones y sentidos que componen el complejo entramado decisional del movimiento.

Como vemos, tanto desde el paradigma del actor racional como desde el paradigma de la identidad se han producido aportes y avances significativos para el estudio de los movimientos sociales. Sin embargo, las particularidades de América Latina exigen un esfuerzo metodológico que contemple lo específico de sus formaciones sociales y políticas, a la hora de elaborar una teoría crítica (Quijano, 2000). La búsqueda de un camino alternativo desde la región no es un afán novedoso; Lander (2003) rescata una larga y valiosa tradición en Latinoamérica del saber ‘no eurocéntrico’ donde recupera, en el campo de la teoría política, la obra de José Carlos Mariátegui y en la actualidad desde la teoría social, los aportes de Enrique Dussel, Arturo Escobar, Walter Mignolo y Fernando Coronil entre otros.

Acuerdo entonces con Dávalos (2003) para quien, desde una perspectiva analítica, los movimientos sociales de América Latina exigen el forjamiento de un paradigma propio, orientado a “comprender, analizar y estudiar justamente estas complejidades de los nuevos procesos sociales, la emergencias de nuevos actores” (Dávalos, 2002: 3). Por otra parte, en la actualidad seguir adscribiendo a uno u otro paradigma en forma escindida, limita la capacidad analítica necesaria para abordar un objeto de estudio tan complejo como los movimientos sociales en nuestra región. En los últimos años el paradigma del actor racional y el de la identidad han tendido a unificar algunos criterios conceptuales y esquemas de interpretación para la comprensión de la acción colectiva y de los movimientos sociales (Wahren, 2009). En este sentido, coincido con Gerardo Munck quien plantea que “sólo a través de una síntesis de los elementos discutidos en ambas escuelas es posible avanzar en el análisis de todas las dimensiones clave de los movimientos sociales” (Munck, 1995: 17).

La toma de decisiones en los albores del siglo XXI

Respecto del contexto sociopolítico en el que se forjan los movimientos contemporáneos en Argentina, el proceso de descomposición social que se había iniciado en el país hacia mediados de la década de 1970, logró alcanzar su punto más álgido entre 1989 y 1999, cuando los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem -de cuño neoliberal-, llevaron a cabo un proceso de desindustrialización del modelo económico, de privatización del sector público y de ajuste estructural de las cuentas fiscales. Dicho proceso dará lugar a niveles inusitados de desempleo, subempleo y trabajo precario, a la vez que se elevarán sustancialmente los niveles de pobreza e indigencia (Thwaites Rey, 2004).

Este nuevo contexto político y social traerá aparejado la proliferación de nuevas prácticas de acción colectiva, entre las cuales encontraremos un amplio abanico de organizaciones sociales, movimientos populares, colectivos culturales y asambleas barriales, que recibieron el estudio antropológico inaugural de Wallace (1998). Más adelante Massetti destacó que el escenario neoliberal, con los altos niveles de pobreza que construyó, reconfiguró las estrategias de

acumulación política de los movimientos, las cuales viraron de la lucha ideológico-política que había caracterizado a las organizaciones políticas durante los 1970, a la lucha social-reivindicativa de los nuevos movimientos sociales. Dicho proceso constituirá una novedad siendo que “lo reivindicativo fue central en la búsqueda de la re politización de sectores que, a pesar de ser perjudicados directamente por las transformaciones neoliberales, estaban absolutamente despolitizados y huérfanos de representaciones políticas” (Masseti, 2009: 48).

En ese marco, hacia finales de 2004 una serie de organizaciones provenientes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón sumados a otras organizaciones independientes, conformaron el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El FPDS se autodenomina un “movimiento social y político, multisectorial y autónomo, con vocación revolucionaria”¹³⁹ y nuclea organizaciones sindicales, estudiantiles, culturales y movimientos de trabajadores desocupados. Una de las características más importantes del Frente reenvía a su estructura multisectorial, es decir que no es solamente un reagrupamiento de trabajadores desocupados, sino que tiene un horizonte y una práctica multisectorial aunque con predominancia numérica y política de los trabajadores desocupados, agrupados principalmente en Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD). Con presencia en nueve provincias del país, pero con un desarrollo cuantitativa y cualitativamente mayoritario en el área sur del conurbano de Buenos Aires, al interior del FPDS se desarrollan trabajos territoriales (bloqueras, panaderías comunitarias, talleres de costura, talleres de herrería, comedores populares, merenderos); educativos (bachilleratos populares, talleres de alfabetización); de género (campamentos de formación en géneros, espacios de militancia antipatriarcal); estudiantiles (disputa de los centros de estudiantes y de las federaciones universitarias, organización de cátedras abiertas) y sindicales (jornadas de formación sindical, disputa de comisiones internas).

En lo que refiere a la perspectiva metodológica del abordaje del movimiento, desde una mirada sociológica he llevado a cabo un prolongado trabajo de campo con el movimiento, en el cual se desarrollaron principalmente las técnicas de la observación, del análisis documental y de la entrevista. En lo que refiere a las entrevistas, se trabajó con una guía de preguntas divididas por ejes, con entrevistas abiertas que fueron realizadas a un conjunto importante de referentes del movimiento. La selección de la muestra se realizó en forma estratégica, es decir que la mayoría de los/as entrevistados/as fueron seleccionados/as a partir de la propia decisión del investigador, tal como sostienen varios autores que corresponde a esta modalidad de muestreo no probabilístico (Sabino, 2000; Vieytes, 2004). El análisis documental referido a la base empírica se centró en el relevamiento, la lectura y la sistematización de documentos, comunicados, cartillas de formación, revistas, periódicos y demás producciones del Frente. En lo que respecta a las observaciones, se han

¹³⁹ Estas definiciones se encuentran en la presentación del sitio Web del FPDS: <http://www.frentedariosantillan.org>

acompañado talleres, movilizaciones y espacios de toma de decisiones del FPDS. Durante dicho proceso, se han confeccionado diferentes tipos de notas que se corresponden con los tipos presentados por Valles (2003), es decir: notas ‘condensadas’, citas textuales durante las observaciones y notas ‘expandidas’, ampliación en detalle de las notas condensadas, después de la observación. Además, siguiendo el modelo de notas de campo de Schatzman y Strauss (1979) se utilizaron “notas metodológicas” durante las observaciones, que sirvieron para luego completar información.

Para dar cuenta específicamente de la complejidad de los procesos de toma de decisión en forma analítica, el trabajo de campo llevó a confeccionar una tipología de la toma de decisiones que se compone de tres dimensiones; en primer lugar el nivel de proyección de la decisión, en segundo lugar la temporalidad de la toma de decisión, y en tercer lugar el grado de organicidad de la decisión:

1-Proyección de la decisión: se entiende por proyección de la decisión al alcance político-organizativo que implica una determinada decisión en el marco de un movimiento social. En ese sentido un movimiento, con la complejidad y multiplicidad de decisiones que ya se mencionaron, presenta cuatro tipos de proyección posibles en las decisiones: estratégicas, tácticas, coyunturales o cotidianas.

2-Temporalidad de la decisión: refiere a la duración de tiempo desde que se instala el debate hasta que se toma una decisión concreta; en este sentido se reconocen tres distintas temporalidades: de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo.

3-Grado de organicidad de la decisión: alude al grado de organicidad en relación con el tipo de tratamiento que atraviesa una decisión antes de ser tomada por el movimiento. Los tipos de tratamiento pueden configurar: decisiones tomadas a través de instancias orgánicas multisectoriales (mesas nacionales y plenarios nacionales), decisiones tomadas por medio de canales orgánicos sectoriales (asambleas de base) o decisiones que son tomadas por fuera de las instancias orgánicas.

A continuación presento entonces el procesamiento de los datos recolectados en el trabajo de campo donde, a partir de la ponderación de la variable ‘proyección’, analicé la configuración de las otras dos variables (temporalidad y organicidad); la matriz de datos construida entonces para abordar la toma de decisiones quedaría compuesta de la siguiente manera:

Matriz de Datos: toma de decisiones en el FPDS

Unidad de análisis	VARIABLES	Valores
Toma de decisiones	Proyección	Estratégica
		Táctica
		Coyuntural
		Cotidiana
	Temporalidad	Largo plazo
		Mediano plazo
		Corto plazo
	Organicidad	A través de instancias orgánicas multisectoriales
		A través de instancias orgánicas sectoriales
		Fuera de instancias orgánicas

La toma de decisiones por dentro

a-Las decisiones estratégicas

Las decisiones estratégicas que afronta un movimiento social son aquellas que, fruto de su resolución, terminan comprometiendo a la totalidad de los recursos de la organización (Skocpol, 1984). Se entiende aquí como recursos, tanto a los militantes como a la estructura organizativa y a las fuentes económicas con las que cuenta un movimiento. Estas decisiones estratégicas implican en general posicionamientos que marcan una línea de acción de largo plazo para el conjunto de la organización. Una decisión estratégica implicará para el movimiento un alto nivel de compromiso con las tareas y orientaciones que surjan producto de esa decisión; es así que posiblemente esa decisión marque fuertemente la configuración orgánica y política del movimiento durante los años subsiguientes. En lo que refiere a la unidad de estudio elegida, las definiciones que son producto de decisiones estratégicas son la de postularse como una organización *multisectorial*, *anticapitalista*, *antiimperialista*, *antipatriarcal*, *socialista* y *feminista*; a continuación se analiza el modo en que se tomó la definición del FPDS de constituirse como organización *antipatriarcal*.

Como se observa en los documentos iniciales del Frente, el antipatriarcal no aparece como definición estratégica. En un documento interno del año 2004 llamado “Acuerdos Políticos del Frente Popular Darío Santillán”, que luego el movimiento publicó en 2013, se consignaba: “las organizaciones que conformamos este espacio nos definimos como antiimperialistas y anticapitalistas y somos independientes del Estado, de las iglesias, de los sindicatos y de los

partidos políticos”¹⁴⁰. Sin embargo conforme el Frente fue creciendo, la actividad del Espacio de Mujeres del FPDS se fue desarrollando. Incluso, lo que hoy es el Espacio de Mujeres del Frente ya existía, aunque con otro nombre, desde 2003. Fue luego de participar en un Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que un conjunto de mujeres miembros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón impulsó la primera Asamblea de Mujeres (Partenio, 2008)¹⁴¹. Es decir que el Espacio de Mujeres como tal, es previo a la conformación del Frente, pero será luego de sus primeras acciones como Espacio de Mujeres del FPDS que comenzará a ganar legitimidad y referencia tanto al interior de la organización como hacia fuera. A partir de allí, la participación del espacio en los Encuentros Nacionales de Mujeres cada año y sus aportes a las discusiones de género respecto de los temas de agenda nacional fue marcando un vector importante en la discusión estratégica del Frente.

En ese marco, un número de la revista Cambio Social que refleja las posiciones del Frente consignaba: “En el plenario de Mar del Plata, donde asumimos como FPDS el antipatriarcado, surgió con fuerza la posibilidad y la necesidad de comenzar hacer talleres mixtos de debates y reflexión”¹⁴². La noción respecto de que fue el Espacio de Mujeres el que logró instalar la demanda de género en una instancia orgánica de decisión, es compartida por los entrevistados: “en principio fue un fuerte impulso de parte de compañeras que venían militando los Espacios de Mujeres, tanto al interior de los Movimientos de Trabajadores de Desocupados (MTD) en los años de mayor movilización, como en los encuentros nacionales de mujeres, desde una perspectiva feminista”¹⁴³.

Como se evidencia a partir del trabajo de observación de espacios de decisión y también de los testimonios de las entrevistas, esta decisión, al igual que otras decisiones estratégicas del movimiento, atravesaron temporalidades de largo plazo; ese largo plazo, si bien no implica una cantidad determinada y exacta de tiempo, pueden contemplar desde una serie prolongada de meses hasta un conjunto de años.

Respecto de los canales orgánicos a partir de los cuales son conducidos los debates estratégicos, como vemos, el canal privilegiado para una definición estratégica es el plenario nacional, es decir una instancia orgánica multisectorial. Si bien en las mesas nacionales se debaten y dan tratamiento a muchas cuestiones de orden estratégico, y de hecho se generan insumos que luego son clave a la

¹⁴⁰ Acuerdos Políticos del Frente Popular Darío Santillán, documento interno, septiembre de 2004, publicado en FPDS (2013).

¹⁴¹ Florencia Partenio ha trabajado en profundidad la participación femenina en los movimientos sociales contemporáneos. En particular, en un trabajo de 2008 abordó la conformación del Espacio de Mujeres del Frente y, a partir de allí, los límites y potencialidades del espacio en relación a la igualdad de géneros al interior del movimiento. Por su parte Cecilia Espinosa (2011) también trabajó sobre el espacio de mujeres del FPDS, para observar sentidos y recorridos de politización en las mujeres que lo componen.

¹⁴² Revista Cambio social, N° 4 junio 2009.

¹⁴³ Entrevista con referente N°1 del FPDS.

hora del tratamiento de una decisión estratégica, es principalmente en los plenarios nacionales donde se da cauce a una decisión estratégica en esta unidad de estudio.

En suma, las decisiones estratégicas obligan al movimiento estudiado a un tratamiento de largo plazo, lo que implica debates que circulan por las instancias orgánicas durante meses o años. En ese sentido, las decisiones estratégicas se debaten en la mayor cantidad de espacios orgánicos de los diferentes sectores que componen el FPDS, aunque la deliberación queda como competencia primordial de los plenarios nacionales.

Las decisiones tácticas

Los cambios y reconfiguraciones en función del entorno político, las aperturas del escenario institucional y los cambios en las alianzas, son ejemplos de acontecimientos que muchas veces obligan a un re posicionamiento táctico por parte del movimiento. Según Skocpol (1984) son decisiones tácticas aquellas que comprometen solo una parcialidad de los recursos de la organización. Desde la teoría política, en general lo táctico ha sido relacionado con los medios para alcanzar algún fin (el cual sería lo estratégico). Los posicionamientos tácticos de los movimientos no solamente son una respuesta frente a una Estructura de Oportunidades Política favorable (Gohn, 1997), sino que se puede tratar también de una política táctica que el movimiento decide darse para una etapa específica producto de una lectura propia. Son ejemplos de decisiones tácticas de un movimiento: el posicionamiento que asume frente a una coyuntura electoral o frente a una política relevante llevada a delante por un gobierno (como recuperar un predio militar para destinarlo a un espacio de derechos humanos), o la decisión de participar en una determinada coordinadora de organizaciones. El ejemplo que analizaremos de una decisión táctica llevada adelante por nuestra unidad de estudio es el de su posicionamiento respecto del conflicto entre las patronales agrarias y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008.

Hacia 2008, el gobierno intentó aprobar la resolución N° 125, que implicaba un aumento en las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, acrecentando sustancialmente el porcentaje de retención a la soja. La reacción de las patronales agrarias, que incluyeron un prolongado paro agrario, cortes de rutas, desabastecimientos y una fuerte campaña mediática contra el gobierno, generó un escenario de fuerte polarización social entre el kirchernismo y los empresarios agropecuarios autodenominados el 'campo' (Giarracca y Teubal, 2009). El impacto social de este conflicto arrastró fuertemente a los movimientos sociales, muchos de los cuales se movilizaron a favor o en contra de las retenciones. Cabe destacar que organizaciones históricas de la izquierda como el Partido Comunista Revolucionario o el Movimiento Socialista de los Trabajadores se movilizaron junto a las entidades clásicas del sector agropecuario como la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas. El FPDS, al igual que otras organizaciones de izquierda

adoptó una postura que sería factor común a lo largo de estos años en la relación entre el Frente y el gobierno: la crítica sin impugnación.

En lo que refiere a ésta última medida, la crítica sin impugnación implicó que el FPDS promoviera movilizaciones y comunicados reivindicando el aumento a las retenciones que impulsaba el gobierno, a la vez que denunciando los fines asistencialistas que, según el movimiento, el gobierno pretendía dar a las hipotéticas retenciones. Es decir que el Frente acompañó en términos generales la resolución N° 125 que impulsaba el gobierno nacional para aumentar las retenciones a las exportaciones de soja, aunque marcando demandas propias para la aplicación de los fondos obtenidos a partir de las retenciones.

A nivel táctico el FPDS tomó la decisión de, no solamente salir públicamente a respaldar la resolución sino de impulsar una coordinación de organizaciones, de dirigentes e intelectuales, que pudiera a la vez visibilizar una diferencia de fondo con el gobierno y con el sector agrario. La decisión táctica consistió principalmente en impulsar un espacio capaz de imponer una ‘tercera voz’ en medio de la fuerte polarización; este espacio de coordinación se llamó “Otro Camino para Superar la Crisis” y sostuvo: “Sí a las retenciones! Pero que sirvan para eliminar el IVA a los alimentos y productos de primera necesidad y para aumentar el salario mínimo, las jubilaciones y los planes a los desocupados!”¹⁴⁴. Según los entrevistados, la táctica fue debatida y resuelta en una instancia orgánica multisectorial, en función de los insumos de las asambleas de base, lo que indica que una decisión de tipo táctica en nuestra unidad de estudio es tratada privilegiadamente a través de los canales orgánicos multisectoriales, generalmente en las mesas nacionales.

Esto no significa que su tratamiento no circule también por las asambleas de base de cada sector, pero ello es insuficiente, siendo necesario también que la decisión táctica se trate en una instancia orgánica multisectorial. El nivel de importancia en el procesamiento del asunto y el grado de recursos organizativos que en definitiva se pondrán en juego en función de la decisión táctica que tome el movimiento, obligan a un tratamiento a partir de una temporalidad mediana o larga. El tratamiento que requiere una toma de decisión táctica, en general, puede llevar semanas o incluso meses; en este caso, como en el anterior, el tipo de tratamiento orgánico y su temporalidad son dimensiones que están intrínsecamente relacionadas.

En suma, al ser las decisiones tácticas posicionamientos del movimiento que pueden devenir en acciones de mediano plazo, como la conformación de una coordinadora de organizaciones, y al requerir medianos y largos plazos para su tratamiento, se canalizan a través de instancias orgánicas multisectoriales.

Las decisiones coyunturales

¹⁴⁴ Ver. <http://otrocaminowordpress.com/> Fecha de consulta 04/03/2013.

Las decisiones coyunturales que atraviesan a un movimiento social reenvían a la resolución de cuestiones de menor grado político que las revisadas más arriba, y cuyas definiciones comprometerán apenas a sectores del movimiento y no a su totalidad. Esas decisiones, por ser de carácter coyuntural, no refieren a situaciones políticas generales ni marcan una etapa política para el sector, sino que se ajustan a coyunturas acotadas. Las situaciones que disparan decisiones coyunturales refieren a acontecimientos imprevistos o a sucesos ocurridos en un tiempo reciente, que obligan al movimiento o al sector a asumir un posicionamiento o una acción pública que le dé respuesta. Ejemplos de situaciones que requieren decisiones coyunturales para un movimiento o un sector, pueden ser sucesos fortuitos en el escenario político local, como el fallecimiento de un intendente en la localidad donde tiene desarrollo el movimiento, o una toma de tierras acaecida en el área de influencia del movimiento que cobra relevancia mediática.

Para el caso del FPDS, se analiza la toma de decisiones coyunturales a partir de una situación recurrente en la vida política del movimiento: la apertura de una negociación con autoridades estatales, sean estas locales, provinciales o nacionales. En esos casos, lo que hay que resaltar es que el movimiento busca ‘entrar a la negociación’ con el mayor número posible de militantes, lo cual no siempre resulta posible:

en principio, siempre proponemos una delegación colectiva a la hora de interactuar con el Estado o la patronal. Buscamos evitar la representación individual, como reaseguro pero también como ayuda al compañero delegado, que estará más expuesto cuantos menos compañeros sean en la instancia de negociación¹⁴⁵.

Sin embargo, a pesar de la intención de generar negociaciones con varios delegados, en la mayoría de los casos los funcionarios estatales no aceptan negociar con delegaciones numerosas, por lo que la reunión termina dirimiéndose con un puñado de referentes, lo cual ya configura un escenario muy distinto respecto del tratamiento que vimos anteriormente con las decisiones estratégicas y tácticas, donde el debate encontraba un soporte colectivo; en estas situaciones los elegidos para la negociación con el Estado son los referentes de las organizaciones.

Si bien es cierto que los referentes tienen un mandato surgido de la asamblea de base, en general el mandato original requiere ser reformulado en el momento, en función de las contra-propuestas efectuadas por la otra parte actuante en la negociación. A partir de allí, dentro de la negociación los referentes tienen un margen donde pueden, si hiciera falta, modificar algunas de las reivindicaciones, negociar, bajar reclamos que evalúan en el momento que son menos realizables, modificar levemente los tonos políticos con los cuales se quiere encarar la negociación, etc. Esta situación confiere un peso específico muy importante a la capacidad individual de negociación del o de los/as referentes del movimiento:

¹⁴⁵ Entrevista a referente N°2 del FPDS.

el margen de maniobra está en cuanto a variables de implementación, en cuanto a ‘buscarle la vuelta’ a la demanda, ya que después de todo, estamos hablando de una negociación, y en raras ocasiones se dan resultados netos, de conquista absoluta, por no decir prácticamente nunca. Entonces, en la mesa de negociación los delegados pueden debatir algunas variables de implementación del reclamo, o incluso saber de antemano, junto a sus compañeros, cuánto “aflojar” durante la negociación y evaluar un plan B¹⁴⁶.

Respecto a la temporalidad de la decisión, con grados variables según el contenido específico de la situación problemática sobre la cual decidir, este tipo de decisiones coyunturales son tratadas a partir de lo que llamamos cortos plazos. Estos tiempos pueden ser muy disímiles, lo cual dificulta su tipificación. No obstante son decisiones que se deben resolver en la misma jornada o las jornadas inmediatamente posteriores al acontecimiento, o a la notoriedad mediática del acontecimiento. De esta forma, en el mismo día o en los días subsiguientes, el movimiento o el sector buscan tomar una decisión que sienta un posicionamiento. Estas decisiones coyunturales, aún cuando sean tomadas en cortos plazos (incluso en el mismo día), van a implicar un posicionamiento general del movimiento, por lo que aquí, la ecuación entre tiempo y organicidad es por demás compleja.

Con ese horizonte temporal, el movimiento comienza a poner en marcha un mecanismo decisional que no presenta un tipo de canalización orgánica definido, pudiendo el tratamiento oscilar entre la realización de una instancia orgánica extraordinaria, y la decisión entre los referentes del movimiento por fuera de cualquier instancia orgánica. En el primero de los casos el mecanismo inherente a la práctica del movimiento llevaría a que los referentes convoquen a una asamblea extraordinaria para el tratamiento del tema. En ese caso la decisión se tomaría a través de un ámbito orgánico (aunque no regular) del movimiento. En el segundo de los casos, y suponiendo que la decisión coyuntural requiere tiempos aún más perentorios, los referentes toman las decisiones por fuera de los ámbitos orgánicos. Sin embargo, al tratarse de decisiones de carácter político que seguramente implicarán una acción colectiva pública para el movimiento, en estos casos el mecanismo presenta un sistema de compensaciones. Este sistema de compensaciones: un circuito de circulación, deliberación y toma de decisión entre los referentes.

En estos casos queda en evidencia el lugar central de los referentes en determinados aspectos de la toma de decisiones, en detrimento de las posibilidades de decidir de un participante cualquiera del movimiento. En las decisiones coyunturales, la variable temporalidad (de corto plazo) y organicidad (fuera de instancias orgánicas), terminan por configurar un mecanismo decisional más centralizado y distante de la horizontalidad.

¹⁴⁶ Entrevista a referente N°2 del FPDS.

Las decisiones cotidianas

La dinámica de funcionamiento cotidiano en la que están imbuidos los movimientos sociales supone una multiplicidad de tareas que implican una práctica constante de resolución de conflictos y situaciones problemáticas. A diferencia de las proyecciones anteriores, las decisiones cotidianas refieren en general a la toma de posición respecto de situaciones específicas, cuya resolución no comprometen cantidades importantes de recursos de la organización; sin embargo, no por ello dejan de ser decisiones significativas para el desarrollo de un movimiento u organización. Pueden ser ejemplos de decisiones cotidianas en nuestra unidad de estudio, desde la necesidad de comprar de urgencia un tubo de gas para un comedor de un MTD, hasta cubrir una reunión que surgió de imprevisto con un conjunto de autoridades universitarias para una agrupación estudiantil del FPDS. En estos casos es fácil advertir que se requiere un mecanismo de toma de decisión rápido, ágil y efectivo, que resuelva el problema en el corto plazo. Esto lleva en general a que la decisión sea tomada por el o la responsable de ese espacio en ese momento.

Esto se plantea así, en función de evitar la parálisis que se generaría en caso de intentar canalizar dichas decisiones en espacios como asambleas, reuniones de responsables, etc. Sin embargo a la capacidad decisionista de los referentes o responsables, se le debe agregar su entrega y dedicación para la resolución cotidiana de conflictos, siendo que muchas veces estas decisiones implican también una acción consecutiva a la decisión. Con los ejemplos anteriores, ir a comprar el tubo de gas o acudir a una reunión que tiene horario de finalización incierto, son actividades que se suelen derivar del tipo de decisión que tome el responsable. Lo que es dable en destacar, es que en general las acciones que surgen de la decisión tomada, en muchos casos también son canalizadas por los mismos responsables. Es así que la segunda dimensión de análisis nos indica que estas decisiones se dan por fuera de los ámbitos orgánicos tales como asambleas, mesas barriales, mesas regionales, etc.

Sin embargo, es preciso señalar también que en muchas de las decisiones los responsables buscan rastrear criterios colectivos previos (en caso que los hubiera) recordando cómo se resolvió la última vez una situación similar¹⁴⁷. También es común que los responsables, antes de tomar la decisión, realicen lo que se advierte como una rápida ‘consulta de cercanía’. Esta consulta de cercanía es un recurso muchas veces utilizado por referentes o por encargados de alguna actividad del movimiento, y consiste en realizar consultas expeditivas con el resto de las participantes que se encuentran en el local del movimiento o en la actividad, maniobrando dentro del escaso margen de tiempo que, como vimos, exigen en general las decisiones cotidianas.

¹⁴⁷ Este mecanismo se ve obturado, evidentemente, cuando las situaciones a resolver son novedosas y no presentan antecedentes en el movimiento.

Por otro lado, como vimos, las tareas que resultan de las decisiones cotidianas terminan siendo tomadas por el o la referente del movimiento; es decir que en este esquema por momentos ‘decisionista’, un mayor nivel de toma de decisiones también suele implicar un mayor nivel de dedicación al movimiento, lo cual demuestra también una entrega a la práctica militante que en general es mayor a la del resto de los que participan en las actividades del movimiento. En suma, las decisiones de proyección cotidiana en el FPDS se canalizan en temporalidades cortas, por fuera de ámbitos orgánicos del movimiento y apelando a consensos automáticos, a partir de lo que podríamos denominar un ‘decisionismo de los referentes’.

De esta manera, y luego de analizar los diversos tipos de decisiones que nutren la práctica de un movimiento social, y los complejos y variados mecanismos decisionales que se ponen en marcha para canalizar una u otra decisión en función de su proyección, de la temporalidad y de la organicidad, se presenta un cuadro que permite completar una tipología propia para dar cuenta de los procesos decisionales en el FPDS.

Cuadro: la toma de decisiones en el Frente Popular Darío Santillán

Proyección de la decisión	Nivel de Organicidad	Temporalidad	Ejemplo
Estratégica	Ámbito orgánico multisectorial	Largo plazo	Definición del FPDS como movimiento antipatriarcal
Táctica	Ámbito orgánico multisectorial	Mediano plazo	Posicionamiento del FPDS ante el conflicto entre el patronales agrarias y el gobierno kirchnerista en 2008.
Coyuntural	Ámbito orgánico sectorial	Corto plazo	Decisión tomada por un referente respecto de una propuesta en el marco de una negociación con el Estado.

Cotidiana	Fuera de ámbito orgánico	Corto plazo	Reemplazo de un tubo de gas en un comedor de un MTD.
-----------	--------------------------	-------------	--

Conclusión: hacia una constelación de consensos

En el presente trabajo se ha analizado la toma de decisiones en el Frente Popular Darío Santillán a partir de tres dimensiones: la proyección, la organicidad y la temporalidad. En función de lo visto, lo primero que surge como conclusión parcial y que confirma la hipótesis de trabajo inicial, es que procesar la toma de decisiones a través de un esquema binario que va del verticalismo a la horizontalidad es insuficiente.

Por el contrario, antes que un modo uniforme para la toma de decisiones, sea éste vertical u horizontal, el esquema decisional del FPDS se podría definir como una *constelación de prácticas decisionales de diversos tipos*. Difícilmente se pueda entonces definir el tipo de toma de decisión que aparece en este caso de estudio de forma lineal o esquemática. En la base empírica observada no existe un modo unívoco para la toma de decisiones, sino una constelación de prácticas decisionales de rango variable. Esta constelación de prácticas a la que me refiero va desde el decisionismo vertical que hoy recalca en los referentes, hasta el asambleísmo de cuño horizontalista. Al referirme a una constelación de prácticas decisionales, hago alusión a un desarrollo desigual y combinado en cuanto a los métodos de toma de decisiones en el Frente, en función del tipo de decisión que se deba tomar, teniendo la variable ‘proyección’ de la decisión un peso específico mayor al resto.

La constelación decisional sobre la cual pivotea el movimiento es entonces amplia y diversa. Esta amplitud no solamente refiere a los diversos mecanismos de toma de decisión, sino también a las diferentes formas internas de relación entre las instancias orgánicas de decisión que conviven en el FPDS (mesas, asambleas, iniciativas de los referentes, plenarios, etc.). Ahora bien, existen también algunos factores comunes que permiten generalizar y tipificar este complejo andamiaje decisional; sostengo así que el principal factor unificador para el análisis de la toma de decisiones tiene que ver con la siempre presente tendencia hacia la búsqueda de consensos. El énfasis en realizar debates en instancias orgánicas, o bien en asentarse en acuerdos previos en caso de decisiones que quedan en manos de referentes, son muestras de toda una cultura política que reviste las prácticas decisionales; esta cultura se asienta en la búsqueda de consensos. Claro que esta ‘búsqueda’ no siempre es exitosa, y es fácil advertir que algunas decisiones tomadas en forma centralizada por referentes de algún espacio de base, puedan no ser luego apropiadas de la mejor manera por el resto de los militantes de base.

Por otra parte, esta búsqueda de consensos nos lleva a dejar planteado un interrogante acerca de este complejo mecanismo decisional que nutre al movimiento estudiado. La fuerte presencia de la búsqueda de consensos en la constelación de prácticas decisionales del Frente podría enfrentarse, en determinadas circunstancias, a algunas limitaciones.

Principalmente en lo referido a las decisiones estratégicas y tácticas, la falta de un mecanismo claro para la resolución de debates que generan diferentes posicionamientos en instancias orgánicas como mesas nacionales o plenarios nacionales, cuando el consenso no es alcanzado, podría desembocar en una situación de parálisis de la organización. Así, el fuerte acento en los consensos (por sobre el mecanismo de la votación), podría dejar entrever ‘puntos ciegos’ que dificulten la toma de decisiones en escenarios de polarización interna en el movimiento. De hecho, la ruptura acontecida en el movimiento en el año 2013, donde tras largos períodos de debates internos y falta de acuerdos, un sector importante del movimiento se retiró del FPDS y conformó el Frente Popular Darío Santillán –Corriente Nacional, podría dar cuenta de estos puntos ciegos. Poder seguir indagando en estas dimensiones de la acción de los movimientos sociales, desde una perspectiva analítica y sociológica, forma parte de mis motivaciones académicas a mediano plazo.

Referencias bibliográficas

Carnovale, V. (2011) Los combatientes. Historia del PRT-ERTP. Buenos Aires: Siglo XXI.

Espinosa, C. (2011) ‘Cansadas de ceder. Sentidos de la politización del género en el Espacio de Mujeres de un movimiento piquetero’, (con) textos: revista d’antropologia i investigació social 5: 46-61.

Cohen, J. L. (1985) ‘Strategy or identity: New theoretical paradigms and contemporary social movements’, Social research: 663-716.

Dávalos, P. (2002) ‘Movimiento indígena ecuatoriano: Construcción política y epistémica’, Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Caracas, Universidad Central de Venezuela: 21-46.

Elster, J. (1989) ‘Social norms and economic theory’, The Journal of Economic Perspectives 3.4: 99-117.

Ferrara, F. (2003) Más allá del corte de rutas: la lucha por una nueva subjetividad. Buenos Aires: La Rosa Blindada/PI CA. So.

Giarracca, N. y M. Teubal (2009) *Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.

Gohn, M. (1997) *Teoria dos movimentos sociais*. São Paulo: Loyola.

Lander, E. (2003) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Caracas: UNESCO, CLACSO.

Longa, F. (2013) 'Formas organizativas y subjetividad política. Una lectura generacional de los 'ethos militantes' en el Frente Popular Darío Santillán'. Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

Massetti, A. (2009) *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*, Buenos Aires: Nueva Trilce.

Mayer, M. (1995) 'Social-Movement Research in the United States: A European Perspective', Lyman, Stanford. (org) *Social Movements: Critiques, Concepts & Case-studies*. Nueva York.

Mazzeo, M. (2007) *El poder popular y la izquierda por venir*, disponible en URL: <http://lahaine.org/b2-img/mazzeopoder.pdf>

Melucci, A. (1994) 'Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales', *Zona Abierta*, Madrid.

Melucci, A. (1999) *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.

Munck, G. (1995) 'Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales', en *Revista Mexicana de Sociología* Año LVII/Núm. 3, Julio-Septiembre, UNAM, México.

Olson, M. (1971) *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*, Harvard, Harvars Economic Studies.

Partenio, F. (2008) 'Género y participación política: Los desafíos de la organización de las mujeres dentro de los movimientos piqueteros en Argentina'. Informe final del concurso: Las deudas

abiertas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2008. Disponible en:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/deuda/partenio.pdf>

Pérez Ledesma, M. (1994) 'Cuando lleguen los días de la cólera, Movimientos sociales, teoría e historia', Zona abierta N°69: 51-120. Madrid.

Pizzorno, A. (1989) 'Algún otro tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional', Sistema. Revista de Ciencias Sociales N°88: 27-42.

Quijano, A. (2000) 'Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina', Lander, E. (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.

Blanco, M. (1994) 'El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido', Zona abierta N° 69: 181-213.

Sabino, C. (2000) El proceso de investigación. Buenos Aires: Lumen.

Schatzman L., y Straus, AL (1979). Field research. Strategies for natural sociology. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Skocpol, T. (1984) Los Estados y las revoluciones sociales Un análisis comparado, México: Fondo de Cultura Económica.

Svampa, M. (2008) Cambio de época. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.

Thwaites Rey, M. (2004) La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Valles, M. (2003) Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión metodológica y práctica profesional. España: Síntesis.

Vázquez, M. (2009) 'La política desde abajo: narrativas militantes de jóvenes desocupados y desocupadas en Argentina', *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, vol.7 no.1 Manizales.

Vieytes, R. (2004) Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas. Buenos Aires: de las Ciencias.

Wahren, J. (2009) 'Territorialidades en disputa: Movimientos Sociales, Autogestión y Recursos Naturales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi (Salta, Argentina).' Presentado en XXVIII Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA), Río de Janeiro.

Wallace, S. (1998) 'Hacia un abordaje antropológico de los movimientos', AAVV. *Antropología Social y Política*, Buenos Aires: Eudeba.

Zibechi, R. (1999) *La mirada horizontal: movimientos sociales y emancipación*. Montevideo: Nordan-Comunidad.

Revistas y sitios Web consultados

Revista Cambio social

<http://www.frentedariosantillan.org>

<http://otrocaminio.wordpress.com/>

Movimientos al conocimiento como bien común: Nuevas claves en la resistencias sociales en Latinoamérica

Alberto L. Bialakowsky, Cecilia Lusnich, Gabriela Buckstein y Alomai Rodríguez¹⁴⁸

Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

5. Introducción

En el actual contexto de época, advertimos, en diferentes campos, notorias estrategias del capitalismo en torno al “*cercamiento del conocimiento*”. Partimos para el análisis de dos enlaces conceptuales básicos, por un lado, la propuesta de comprender la producción universitaria e intelectual con entidad social productora, y, por el otro, develar su enajenación por parte del capital para conducirla hacia a la acumulación capitalista y al dominio de la *inteligencia social*, el *general intellect*. Este intelecto en su versión científica incluye de modo basal un marco epistémico, opacado, que determina la orientación del conocimiento y a sus productores intelectuales. Se produce así una profundización de un *dualismo* (Quijano, 2014) acentuado de fractura entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público, del valor de cambio y el de uso, la privatización de los “bienes comunes” (Harvey, 2005), como también el debate acerca de los “bienes comunes” y los “bienes comunales” (Puello-Socarrás, 2015)¹⁴⁹.

No se trata ya solamente de reconocer al capital como un generador de lucro privado, sino también como generador del establecimiento de condiciones sociales para *concentrar* el *saber general*, claves que lo caracterizan como metabolismo del sistema, por medio del penetración y secuestro del saber, como así también de la colonización de los productores sociales del saber (Wise y Chávez-Elorza, 2016).

Así en este punto históricamente culminante de avance del capitalismo no nos encontramos con un *intelecto colectivo* a conquistar, sino con un *intelecto social enajenado* que se modula, bajo la

¹⁴⁸ Alberto L. Bialakowsky: Profesor Investigador, Carrera de Sociología e Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Director de Proyecto de Investigación UBACyT 2014-2017. Visiting Professor Rhodes University; Cecilia Lusnich: Docente e Investigadora, Carrera de Sociología e Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Gabriela Bukstein: Docente Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Alomai Rodríguez: Estudiante Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

¹⁴⁹ Respecto de esta contraposición entre los conceptos de bienes comunes y comunales, consideremos que en tanto el lenguaje es también un “campo de lucha”, de cercamiento y ocupación, los conceptos son y pueden ser resignificados por el neoliberalismo, es una característica de saber-poder-discurso, así como la apropiación de componentes del lenguaje que radicaban antes en el opositor incluso exhibiendo “contradicción expuesta”. De ahí su captura como el grado acentuado de la banalización (Dejours, 2006). El intelectual crítico se encuentra con un nuevo desafío amerita crear y nutrir un nuevo paradigma cognoscitivo cuyo conocimiento emancipador se alcance a través del diálogo y la autenticación social (Bauman, 1977).

dirección del capital, y alcanza la vida (Marx, 1972). La inteligencia social se transforma en una fuerza centrípeta a la acumulación capitalista, que como se ha señalado se sostiene en la absorción y *negación* al mismo tiempo del pensamiento colectivo. En su fase de hegemonía de matriz neoliberal revela caracteres distintivos, tales como primacía del mercado y bienes de cambio, individualismo, elitismo y competencia como instrumento de selectividad social. Significantes todos ellos que indican a la vez que dominación, la suspensión del protagonismo colectivo y mercantilización de las relaciones sociales. Dicho intelecto neoliberal en su versión científica incluye de modo infraestructural un marco epistémico negado (Bialakowsky y Lusnich, 2016), que determina la orientación del conocimiento y la explotación tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales que llevan abismalmente a la “extinción planetaria”, al decir de Eduardo Grüner una dirección empecinada y consciente de su metabolismo (Grüner, 2011).

Las nuevas hipótesis que guían los presentes avances de investigación enfatizan que *las tensiones se producen en el núcleo mismo del incremento de acumulación y sus formas de investidura* (Bialakowsky y Lusnich 2015; Antunes, 2010; Delgado Wise, 2015). Se especifican así tres tipos de tensiones: a. entre la acumulación de ganancia y la distribución; b. entre los bienes privados y los bienes comunes o comunales; c. entre el monopolio experto y el conocimiento horizontal. Caras éstas que forman parte de un *poliedro* de análisis, así se señala se produce la actualización de la “acumulación por desposesión de los bienes comunes” y el dominio sobre las fuerzas productivas a través de la subsunción del intelecto social. La investigación avanza, entonces, sobre la relevancia actual del rol del intelecto colectivo como los nuevos “actores sociales” latinoamericanos que se dirigen socialmente a interpelarlo a través de sus resistencias y movilizaciones en la región.

En la reelaboración y análisis de las posturas de la “*teórica crítica latinoamericana*” y de sus principales corrientes, recuperamos el concepto del espacio definido como “*marco epistémico*” (Rolando García, 1994) que intenta recuperar la producción social que tiene lugar detrás del telón metodológico, revisando los procesos de trabajo, tales como sus lógicas. A partir del cual se deduce que en la evolución de las ciencias sociales debe dimensionarse el carácter que ha asumido históricamente su producción desconociendo sus enlaces colectivos. Aun cuando dicha producción se basa inevitablemente en esta cadena productor-comunidad intelectual, en su formato ha primado el diseño de elución del pensamiento colectivo, de modo tal que se apoya en su “comunidad epistémica” pero al mismo tiempo la supone de “generación espontánea”. Así una ciencia social crítica no puede desconocer una *filosofía de la praxis* (Sánchez Vázquez, 2007) y su recursividad, en la que conocer y transformar se compactan.

En este estudio abordamos, consecuentemente, las formas que asume la matriz intelectual y las luchas en este campo, en el cual se destaca por una lado, la colonialización del espacio educativo y universitario latinoamericano por la lógica neoliberal (Puello Socarrás, 2008) y, por otro a la vez, el

diseño de los patrones de dominio del intelecto colectivo por medio de la sustracción de bienes comunes del conocimiento. Así como contracara, en este juego de dominación rescatamos las *resistencias colectivas* que se han producido en América Latina, especialmente en el último decenio, con la singular expresión de nuevos sujetos colectivos, los que a través de sus manifestaciones multitudinarias abren fisuras al intento totalizador de captura del intelecto colectivo (general intellect). Desde esta perspectiva nos detendremos con especial énfasis en el análisis de las acciones de resistencia de movimientos sociales encarnados por productores intelectuales que ensayan incidir sobre dicha hegemonía para descubrir sus praxis de conciencia y acción colectiva dirigidas, en sus reclamos, al intelecto social. Tales los encarnados por los movimientos magisteriales y estudiantiles latinoamericanos movilizados en México, Chile y Brasil (Bialakowsky y Lusnich, 2014a) como así en Bolivia, Ecuador y Colombia.

6. El conocimiento como “bien común”

Las nuevas corrientes del pensamiento crítico latinoamericano, que abrevan y renuevan la “teorías de la dependencia” conducen a comprender que la *colonialidad del poder* (Quijano, 2009; Mignolo, 2001) no ha sido un hecho histórico detenido en el tiempo sino que se ha reproducido a través de distintos ropajes y alcanzan en la madurez del capitalismo con la subsunción de la ciencia y a la universidad investidas de universalidad bajo un enfoque euro-céntrico. Entre los muchos contenidos que revelan estas formas modélicas de concebir la ciencia “normal”, nos inclinamos por subrayar los procesos de trabajo que sitúan a la ciencia y sus productores en indefensión como ciencia colonizada (Lander, 2000). Reconocer que el contexto opera en la base de la construcción científica a través de las cosmovisiones sociales (Rolando García, 1994) y los procesos sociales de trabajo que la hacen realmente existente, posibilitan definir a la comunidad epistémica como parte del artefacto científico, como así también reconocer que en este cono de sombra –del marco epistémico- se esconde el principio de enajenación científica.

El concepto de *bienes comunes*, como una primera hipótesis para el análisis, aporta un modo de comprender el cercamiento y la sustracción de conocimientos, mutados e incorporados al circuito de la mercancía, la propiedad y el capital. A la vez que el concepto abre la posibilidad de pensar el cambio social. Así se observa, la historia del capitalismo muestra el desarrollo de una continua desposesión, la historia de una *continua extracción de aquello producido colectivamente*, sin esa desposesión y sus legitimaciones el metabolismo del sistema no podría sostenerse. Tal como lo ha señalado David Harvey (2005), esa es precisamente la esencia del capitalismo tanto en su origen como en su desarrollo histórico¹⁵⁰.

¹⁵⁰ “La historia del capitalismo es la historia de una continua desposesión, la historia de una continua extracción de aquello producido colectivamente. Es bien conocido cómo el paso de una economía feudal a una economía de base capitalista vino acompañado por un violento proceso bajo el que se expulsó a las clases campesinas de las tierras comunales, medio que constituía su principal fuente de supervivencia. Esto fue lo que Karl Marx describió en El

Desde la década de los 70, la etapa actual del capitalismo acusa crisis y procesos de sobreacumulación, con la generación de continuos excedentes y contracciones de empleo, productividad, stock, liquidez y endeudamiento financiero. Para sustentarse el capitalismo se vale de los denominados “ajustes espacio-temporales”, procesos por los cuales se traslada la crisis ya sea en el tiempo o bien a otros territorios. Una vez agotadas las posibilidades las capacidades productivas el capitalismo desplaza sus crisis para encontrar nuevas condiciones bajo las cuales reproducirse, iniciando así un nuevo ciclo de acumulación basado en la desposesión. Las diferentes fases del capitalismo se apoyan como otrora en la histórica mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión de poblaciones; reconversión de diversas formas de derechos de propiedad común, colectiva y públicas; transformación de la fuerza de trabajo como valor de cambio con la supresión de formas de producción y consumo alternativos.¹⁵¹

François Houtart sintetiza a través del concepto de bienes comunes el recorrido histórico: “...*en su desarrollo –el sistema capitalista- ha destruido poco a poco todos los bienes comunes los ‘commons’ como se les decía en Inglaterra, la destrucción de los ‘commons’, de la tierra que era colectiva para los campesinos, se destruyó el engroso, es decir, el hecho de que se constituyeron propiedades privadas de la tierra, la tierra común era considerada como una tierra perdida, se debía realmente privatizar todo para justamente generar otro tipo de desarrollo, eso fue el nacimiento de las clases sociales del capital y así, recuperar sus puestos, todo el periodo neoliberal justamente de privatizar los servicios públicos y los bienes comunes, y la ventaja de los regímenes progresistas en América Latina es precisamente reconstruir el Estado para también reconstruir los bienes comunes, los servicios públicos. En el mundo entero tenemos ahora luchas para los bienes comunes en todos los dominios, desde evidentemente el Seguro Social, hasta la protección de bosques y otros aspectos similares, es un primer nivel, recuperar los bienes comunes, recuperar los servicios públicos y realmente recrear una nueva cultura después de la destrucción neoliberal que ha estado en el mundo entero y que en muchas partes del mundo todavía está vigente, el caso por*

Capital como ‘acumulación originaria’ capítulo fundacional del capitalismo que derribaba la supuesta ‘transición natural’ que con tanta insistencia relataban los economistas liberales. Desposesión y normativización de las tierras, desposesión y normativización de los cuerpos, desposesión y usurpación de otros modos de existencia... Si volvemos al presente, queda claro que no hay que tomar ese momento como un episodio singular o como una nota al margen de los ciclos de acumulación capitalista. Los continuos procesos de cercamiento de tierras comunales, la devastación de territorios (tanto materiales como culturales), la larga cola de procesos coloniales y neocoloniales que arrastra el capitalismo, el endeudamiento ciudadano y la dilapidación de otros modos de vida son la base genética de un modelo que se sirve de la desposesión para perpetuarse... El capitalismo internaliza prácticas canibalísticas, depredadoras y fraudulentas... La acumulación por desposesión puede ocurrir de diversos modos y su modus operandi tiene mucho de contingente y azaroso. Así y todo, es omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se acelera cuando ocurren crisis de sobreacumulación en la reproducción ampliada, cuando parece no haber otra salida excepto la devaluación.” (Harvey, 2005:106)

¹⁵¹ En síntesis, tiene lugar el continuum de los procesos “...*coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito.*” (Harvey, 2005: 116).

ejemplo de Europa, la comunidad Europea que no ve otras maneras de salir de la crisis que incrementar las medidas neoliberales de privatización y de destrucción de los bienes comunes.” (Houtart, 2015:109).

Desde este enfoque resulta provechoso articular el concepto de “*ocupación por desposesión de los bienes comunes*” acuñado por David Harvey con el concepto de Aníbal Quijano sobre la “*colonialidad del poder*”. Por una parte se recupera la idea del *common land*, o si se quiere la filosofía de la “*comunalidad ayllu*” (Puello Socarrás, 2015; García Linera, 2011); en otras palabras, lo común en su sentido comunal que propone una versión diferente a una simple hibridación entre lo privado y lo público al proponer una praxis que tiene como condición de existencia la deliberación colectiva, que ya no estarán dominadas exclusivamente por la lógica del intercambio.¹⁵²

7. El intelecto neoliberal, la ciencia y la universidad

En concordancia con los desarrollos antecedentes, el modelo universitario contemporáneo, en perspectiva de época, se caracteriza por la selectividad de productores intelectuales y técnicos, dirigidos a la competencia individual y racialmente enfocados. Lo que en realidad es de hecho una coproducción social se reviste de *individuación* y *privatización* del conocimiento. Esta estructura piramidal resulta perfectamente homóloga a la concepción social (neo) liberal (Puello-Socarrás, 2008; Aboites, 2013). Así la captura de los productores intelectuales se realiza desde la formación misma en el sistema educativo, prueba de ello son los diseños macro de reforma educativa de la educación en general y universitaria en particular, a través de las políticas y ensayos de aplicación de las reformas que promueven, entre otros, los Proyectos de Bologna y Alfa Tuning¹⁵³. Si bien los discursos se enmascaran señalando un horizonte que conduce a la sociedad del conocimiento, mientras que, su arquitectura se basa en establecer una plataforma masiva de “recursos humanos calificados” a bajo costo y un ejército de reserva y lo suficientemente amplio para su selección, control y rotación. Al mismo tiempo, que se produce por diseño educativo la expulsión de otra

¹⁵² “Este apelativo es sin dudas importante, dado que es sostenido por movimientos sociales y altermundistas; una idea-fuerza que nutre gran parte de los horizontes de expectativas y la construcción de una economía verde o la posibilidad de vislumbrar la consolidación de un ecosocialismo. En efecto, tal como menciona Giovanna Ricoveri en «*Commons vs. Commodities*», los bienes comunes serían «la columna vertebral de un orden social alternativo» dado que se basarían en la cooperación más que en la competencia, su utilización sería colectiva (ni privada ni pública) y sostenible, y promovería la democracia directa: «En resumen, que proporcionan bienes y servicios que no se convierten en mercancías que se intercambian en el mercado capitalista». De este modo, el valor de los bienes comunes consistiría precisamente en estar más allá de la cuantificación, puesto que exceden cualquier connotación utilitarista o mercantil y son investidos de una dimensión común de la propiedad con una fuerte carga ético-política.” (Fornillo, 2014:111)

¹⁵³ Los contenidos sociales que subyacen en las enunciaciones del Proyecto Bologna, Tuning, Alfa como así también los impactos de los enunciados del Banco Mundial en los procesos de trabajo universitarios y en las formas de producción de conocimiento, acentuados por las políticas neoliberales, se evidencian sobre matrices que colocan el énfasis en la mercantilización universitaria, la productividad del aprendizaje, la libre competencia económica y social entre instituciones e individuos, la calidad educativa universitaria, las cuales impregnan y diseñan la construcción del conocimiento científico.

fracción equivalente, también masiva, de aspirantes, ya sea por “limitaciones” del sistema de acceso como a la mercantilización del proceso educativo (Mollis, 2014; Guadilla, 2010). Se trata entonces a unísono del dominio intelectual y del proceso de absorción del intelecto social.¹⁵⁴

He aquí algunos datos que dan cuenta de la lógica instrumental que subyace al diseño universitario, que a su vez lo vinculan con la racionalidad neoliberal. La expansión de la masa intelectual en América Latina medida solamente por el incremento de la matriculación en los estudios terciarios y universitarios, fuente principal de productores intelectuales en el campo de la ciencia y la tecnología, resulta significativa: de 1.9 millones de estudiantes en 1970, se pasa a 8.4 millones en 1990 y se alcanza a 25 millones en 2011, con tasas de incremento cada cinco años que llegan al 60% según los países, tal el caso de Brasil que posee la más alta, del 67%. Considerando la tasa de estudiantes en educación superior por cada cien mil habitantes, los países de América Latina y el Caribe (para 30 de ellos se cuenta con información) han aumentado desde 2,316 en 2000 a 3,328 en 2010, lo cual representó un incremento de poco más del 40% en la década. Según los datos oficiales, la región avanzó entre 1998 y 2010 desde 20% hasta 41%; de acuerdo a nuestras estimaciones, es probable que hacia 2015 la tasa bruta de matrícula en educación terciaria promedio regional llegue a un 51%.¹⁵⁵

En este complejo contexto expansivo y a través de diversos canales tanto económicos -el ingreso de algunos países latinoamericanos a los acuerdos de integración económica, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA, Alianza del Pacífico– como diseños específicamente educativos como el denominado Proceso Bologna y, posteriormente, los proyectos Tuning y ALFA para Latinoamérica, las tendencias de intervención global aparecen renovadas, como así también las características del modelo universitario del siglo XXI, destacando las fuertes tendencias hacia el denominado “capitalismo académico”.¹⁵⁶

8. Las resistencias en Chile, Brasil y México

¹⁵⁴ Recuérdese que en la sociedad del Estado de Bienestar o del pleno empleo los sistemas educativos superiores y universitarios, se desempeñaban con relativa autonomía del sistema productivo, y generaban “naturalmente” para el sistema económico tanto fuerza de trabajo calificada como producciones científicas. En la nueva fase capitalista, precisamente luego de la década de los 80, se observan dos fenómenos contradictorios, por una parte se perpetúa el impulso social para producir una expansión geométrica en la población universitaria y por la otra, se amplía y profundiza la privatización y selectividad social tanto en el campo universitario y como en dichos desarrollos científicos.

¹⁵⁵ Datos estadísticos y proyecciones tomados del último informe disponible de la UNESCO, “Situación Educativa en América Latina y el Caribe”, 2013.

¹⁵⁶ El proyecto ALFA-Tuning-América Latina, que nace de la experiencia previa del proyecto Tuning Educational Structures in Europe 11, situado en el corazón de los objetivos del proceso de Bologna. El proyecto latinoamericano nace durante la IV Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC) en la ciudad de Córdoba (España) en Octubre de 2002. Participan 186 universidades latinoamericanas y se han establecido 19 centros nacionales de Tuning-América Latina, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Enseguida, y como un derivado del Proyecto europeo Reflex (The Flexible Professional in the Knowledge Society), se viene desarrollando ahora su versión latinoamericana, bajo el nombre de proyecto Proflex (El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento).

Luego de la modulación del diseño y estructuración de los estudios universitarios en América Latina para ajustar la formación de productores intelectuales a las necesidades del mercado, al mismo tiempo que tarifar los costos de matrícula de dicha formación, se producen movilizaciones de resistencia protagonizado por “productores intelectuales” para resistir y proponer, a contracara, acceso universitario público, gratuito, universal y de calidad, por lo tanto, en esta lectura, como un “bien común y colectivo”. Tanto la educación superior como la ciencia misma propuestos como bienes comunales se sitúan en la fractura del intelecto neoliberal.

Estas resistencias, en esta interpretación estarían interrogando precisamente el significado del conocimiento como bien común. En dicha lógica, el conocimiento se presenta con una forma de racionalidad diversa de la que domina la escena debate económico, social y político. En el caso de los movimientos al intelecto colectivo, la directa relación entre bienes comunes y sujetos sociales entramado en un colectivo, colocan en primer plano las necesidades y los bienes necesarios para satisfacerlas, modificando así la concepción jurídica que sustenta toda la estructura de propiedad, ya sea privada o estatal. No se trataría de “otro” tipo de propiedad, sino de lo opuesto a la propiedad (Rodotà, 2011).

Para aportar al análisis del rol y las complejidades que introducen los movimientos sociales al intelecto colectivo, hemos desarrollado, en tanto que instrumento conceptual y metodológico, la figura poliedra de un “pentaedro”, inspirada en las claves teóricas desarrolladas tanto por Paulo Freire como Orlando Fals Borda (Bialakowsky y Lusnich, 2014b). Figura ésta que refiere a una metáfora teórica y epistémica que comprende cinco elementos: *dialogicidad*, *saber colectivo*, *masa y pueblo*, *politicidad* y *reapropiación* como contenidos emergentes en la praxis de los movimientos al intelecto social latinoamericanos. Estas movilizaciones, al intervenir en el espacio público, no sólo resisten a su exclusión del intelecto social sino que, al mismo tiempo, refutan la lógica del aislamiento individual y la selectividad como gramática básica para la producción intelectual, erigiéndose como productoras que amplían las fisuras en las lógicas de la hegemonía que sustentan de los discursos que instalan los modelos neoliberales.

La elección se bifurca entre el individualismo dominado y la acción del colectivo con conciencia “para sí” como intelecto social, proceso en el cual se resignifica el conocimiento como un bien común (Reygadas, 2014), compartido. Es importante señalar en estos casos de análisis citados como en los que siguen, que las acciones colectivas tienen como motivo reivindicaciones específicas y sociales, al mismo tiempo se obligan a la construcción de un colectivo “para sí”, sin el cual no podrían movilizarse, de modo tal que la propia creación de los colectivos, sus símbolos conceptuales y estéticos representan “en sí” la radicalidad colectiva frente a dominación fragmentaria. Sus confrontaciones frente al *statu quo* ideológico, si bien reflejan explícitamente objetivos de impugnación tales como oposición al arancelamiento educativo, altas tarifas de

transporte, distorsión comunicacional o a la ética pública, trascienden por sus proyecciones de su carácter coyuntural al advertir socialmente sobre un futuro marcado por la formación del intelecto neoliberal.

“Me tardé horas para escribir, en una línea, las palabras que he buscado durante meses para expresar una sensación que medité por semanas y que nació en sólo unos segundos de catarsis, empoderamiento y comunión, cuando llegamos al Zócalo con la Marcha de la Luz, un día previo a las elecciones de 2012. No tenemos sueños: los sueños nos tienen a nosotros. Antes de eso éramos provincias de ser distribuidas aisladamente. Nos acechaba una muerte con rostro de hormiga, con hemorragias de fastidio al vivir la cultura del pasotismo y la soledad política. Nuestras esperanzas debían autoexiliarse en la jaula de la vida privada, mientras las opiniones que defendíamos terminaban en debates de papel arrugado. Encontrarnos nos salvó de nunca llegar a conocernos... Sostengo que las causas profundas de nuestra emergencia son cinco: la desigualdad, que es la falla motriz que estructura las relaciones y disyuntivas de nuestra sociedad; la democratización de la democracia –que incluye la democratización del sistema de medios– impulsada por jóvenes y ciudadanos que quieren incidir en la vida pública; la acumulación impune de agravios e injusticias; una agenda social pendiente donde no somos incluidos y un bloqueo en la cúspide de la pirámide social que pone en crisis el sistema meritario.” (César Alan Ruiz Galicia)¹⁵⁷

Es así que los movimientos configuran nuevas formas de movilización entre los productores intelectuales, donde se pone en juego el espacio de lo público y su gubernamentalidad en una zona de lo compartido que determina la construcción colectiva.

En el caso de Chile, el proceso de lucha llevado adelante por los estudiantes secundarios autodenominados “pingüinos”¹⁵⁸ desde el año 2006 hasta la actualidad, representa uno de los más relevantes cuestionamientos a la estructura del sistema educativo en la región, cuya clave de rechazo el afianzamiento de los diseños de privatización, arancelamiento y selectividad social en el espacio educativo, y que han logrado sumar las adhesiones de sectores sociales, acceder a la representación política e incluso adhesiones a nivel internacional. El eje destacado del reclamo gira sobre la igualdad de acceso, gratuidad y calidad, plasmado en reclamos por la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, fin de la municipalización de la enseñanza, la derogación del decreto que regula la actividad de los centros de estudiantes y la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria, entre otros. Cabe comentar que la educación superior en Chile se considera entre las más costosas de la región.

No obstante, la comprensión del movimiento estudiantil chileno, y especialmente las propuestas y puntos de partida de los estudiantes secundarios que remiten directamente a la historia de su país,

¹⁵⁷ #YoSoy132 a un año de la lucha. México: www.sinembargo.mx, 11/05/2013

¹⁵⁸ Nombre que hace referencia al atuendo típico del estudiante secundario chileno.

interrogada y revisitada en tanto condición para la transformación, lleva a una propuesta contextual.¹⁵⁹ A su vez, los estudiantes universitarios se han organizado históricamente a través de las federaciones de estudiantes y a su vez en una confederación, la CONFECH, que es finalmente la encargada de articular las distintas propuestas e iniciativas emanadas desde las bases y en donde, efectivamente, los líderes emergen de manera mucho más visible. Los impactos del movimiento estudiantil para promover la reforma educacional gubernamental¹⁶⁰ han sido crecientes, aunque se encuentran aún vigente el conflicto para cumplir sus reivindicaciones, expandidas en la actualidad en docentes.

Así *“la oposición entre una educación entendida como derecho o como negocio no es antojadiza ni opera solamente en el plano de las ideas... Es la expresión, en el campo educacional, de una determinada concepción del hombre y la sociedad”*. (Camila Miranda, 2014, Directora del Centro de Estudios de la Fech-Federación de Estudiantes de Chile)

Los cuestionamientos muestran que el modelo chileno no sólo incumple en la tarea de dar educación de “calidad” a todos como derecho, sino que además genera un horizonte educativo cuya lógica se basa en lógica del mercado y el lucro. *“Se avizoraba ya que el sistema privado como eje de la educación sólo podía inducir desigualdad y exclusión. Pienso que fue esa generación de estudiantes quienes desmontaron el mito de la supuesta calidad de la educación particular subvencionada. Lo que debe quedar claro es que estudiantes, profesores, padres y trabajadores defendemos una reforma transformadora que permita que pensemos nuestro sistema educativo, que pensemos en la sociedad... donde no seamos una suma de individuos, sino distintas partes de una sociedad colectiva.”* (Lissette Fuentes, chilena, cursante de la Carrera de Sociología en la UBA) *“... El elemento de fuerza ha sido su indocilidad... los jóvenes convocan asambleas por las cuales resuelven y deciden sus planes de acción. En este sentido, los secundarios han dado una muestra de que se puede construir una sociedad distinta... La presidenta Bachelet presentó este 2015, a pesar del rechazo del movimiento estudiantil, el nuevo proyecto de ley de educación en el congreso, con grandes cambios que buscan capturar las demandas históricas del movimiento estudiantil, como lo son: reinversión en educación pública, reforma para los colegios particulares/subvencionados, mayor control del lucro, cobertura del 60% de gratuidad en educación universitaria, etc. La*

¹⁵⁹ Siguiendo el análisis de Carlos Ruiz Encina (2013) en torno al movimiento estudiantil chileno, en líneas generales, existió por parte de los estudiantes un ejercicio profundo de la actividad democrática, asamblearia y de acción directa, expresada en la participación en manifestaciones, tomas y otras acciones de protesta. No obstante, los estudiantes secundarios mantuvieron siempre en las dos organizaciones que los agrupaban -la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES)-, el sistema de “voceros” que, valga la redundancia, eran la voz de una asamblea que podía decidir la revocación de la responsabilidad depositada en estas figuras, evitando de este modo la generación de liderazgos personalistas.

¹⁶⁰ Sección Quienes Somos, Blog Colectivo Plataforma Colectiva, Universidad de Chile. <http://plataforma-colectiva.blogspot.com/>

respuesta del movimiento se encuentra en la calle, su crítica ha sido más clara que nunca, opinan que esta nueva reforma es igual a las anteriores, a pesar de los grandes cambios que ofrece el gobierno no aborda el tema de fondo: fin al lucro y a la mercantilización de la educación...” (Andrés Ávila, sociólogo chileno, Maestrando en la UBA).

El cuestionamiento desborda la simplicidad de obtener mejoras, reiteradamente se interrogan los basamentos del sistema. “*El absoluto predominio de las leyes del mercado y la ausencia de regulación por parte del Estado, transformó la educación en un negocio más, con grandes consorcios empresariales nacionales y extranjeros que compran y venden centros educacionales, y a los estudiantes en mercancías transables al mejor postor*”, señala el Manifiesto por la Educación firmado en junio de 2011 por la CONFECH (Sisto, 2013:71).

Queda –pensamos así conceptualmente- expuesta la relación entre la (re)apropiación de la producción colectiva desde la impronta contextual-histórica, desde una lectura freireana: “*Heredando la experiencia adquirida, creando y recreando, integrándose a las condiciones de su contexto, respondiendo a sus desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo –el de la historia y de la cultura.*” (Freire, 1986: 30). A fines de diciembre de 2015, y como claro avance logrado por los movimientos estudiantiles, el Congreso aprobó luego de intensos conflictos y debates, una enmienda a la Ley de Educación Superior, que beneficiaría a partir del 2016 a casi 180.000 estudiantes universitarios. En rigor, se trata de un sistema de financiamiento parcial de la educación superior ya que la gratuidad definitiva aún no ha sido discutida¹⁶¹. De hecho, en el curso del año 2016 las protestas estudiantiles se han renovado, dando cuenta de las limitaciones que las reformas político-sociales conllevan¹⁶².

En otro espacio nacional, como antes se señalara en modo comparativo y convergente para comprender el dominio sobre la materialidad del intelecto público, se verifica una masiva movilización despertó mayores interrogantes, por su expresión, composición social y reivindicaciones. En el curso del mes de junio de 2013, en diferentes ciudades de Brasil se produjeron manifestaciones y marchas multitudinarias, en las que se batió como reivindicación el límite de los aumentos y la propia gratuidad del transporte público, y de manera asociada a los bienes comunes de la educación como de la salud, liderada por el denominado MPL (Movimiento de Pase Libre)¹⁶³. Luego de las movilizaciones, las autoridades de las principales ciudades del país

¹⁶¹ <http://www.telesurtv.net/news/Chile-tendra-nuevo-sistema-de-gratuidad-de-educacion-durante-2016-20151223-0030.html>.

¹⁶² <http://www.20minutos.es/noticia/2755242/0/estudiantes-chile-protestas-reforma-educativa/>

¹⁶³ Las masivas protestas brasileñas se inscribieron en la discusión sobre las enormes inversiones públicas orientadas a la realización de la Copa del Mundo (Mundial de Fútbol 2014) y las Olimpiadas que tendrán lugar en los próximos años en Brasil. La protesta en contra del alza de la tarifa del transporte público en Sao Paulo rápidamente se extendió a diversas ciudades del país, masificándose. La convocatoria la hizo originalmente el movimiento “*Passé*

revocaron los decretos con los que habían reajustado incrementando el costo de los pasajes de autobús, metro y trenes municipales. Incluso, en respuesta casi inmediata, la presidenta del país anunciaba regular nuevos fondos adicionales para las áreas de educación y desarrollo social.

Los “inusitados” modos de organización y movilización que se fueron dando en esta coyuntura en Brasil, también contribuyen a interrogar las prácticas y los saberes “normalizadores” del intelecto colonizado, en palabras de Raúl Zibechi podría afirmarse que: *“Estamos, entonces, ante grupos de base integrados por militantes investigadores o militantes-intelectuales que tienen capacidad para organizar, trabajar con sectores populares, definir proyectos y estrategias para construir una fuerza social que promueva cambios desde abajo. Este conjunto de rasgos son los que permiten hablar de una nueva cultura política, o cultura de luchas y de organización, que nació en Brasil en la primera década del siglo XXI, se fue consolidando en pequeñas y medianas batallas y estalló masivamente en junio de 2013.”* (Zibechi, 2013:259).

La dialogicidad enfrenta las dualidades: sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-sociedad que propone la ciencia subjetivista-objetivista. El conocimiento *“se constituye en las relaciones hombre - mundo, relaciones de transformación, y se perfecciona en la problematización crítica de estas relaciones”* (Freire, 1972: 96) La problematización implica un retorno crítico a la acción, no puede desligarse de la situación concreta. Tanto en el movimiento estudiantil chileno como en el MPL brasileiro se hace presente dicha dimensión, en tanto se reconocen a sí mismos como actores políticos que han sido capaces de articular una resistencia crítica a las políticas educativas neoliberales, no sólo en relación con temas relacionados con la educación superior, sino que otras áreas de interés público y social, como vivienda, salud, prestaciones sociales y empleo.

En esta línea citemos que las luchas magisteriales en México (Aboites, 2013, 2015), en concomitancia, también reflejan el conflicto social sobre la equidad y la soberanía educativa, como así evitar el *epistemicidio* (de Sousa Santos, 2011), al que conducen los planes gubernamentales para sellar la caducidad de los lenguajes originarios, sus lógicas y horizontes de sentido.¹⁶⁴ Estas movilizaciones en el espacio público no solamente resisten a la exclusión del intelecto social sino que, al mismo tiempo refutan la lógica del aislamiento individualista y la selectividad como

Livre” de Sao Paulo, que concitó el apoyo y adhesión activa de otros grupos y movimientos sociales. El 24 de junio de 2013 el Movimento Passe Livre dirigió una carta abierta a la presidenta Dilma Rousseff, en la que junto con criticar la represión y criminalización a la que son sometidos permanentemente los movimientos sociales y de sorprenderse por la invitación a conversar –producto de las movilizaciones–, le manifiestan su exigencia de establecer en Brasil un sistema de transporte público libre o gratuito. Como es de conocimiento público, el alza de tarifas fue revocada como consecuencia del masivo movimiento de protesta. Interesante resulta el planteamiento del movimiento en el sentido de considerar el transporte como un *derecho universal*, de acceso libre, equivalente al de la educación y la salud.

¹⁶⁴ *“En el mes de febrero del 2013, decenas de miles de maestros y maestras (algunas cargando a sus niños pequeños), padres de familia e integrantes de comunidades rurales bajaron de las agrestes montañas, y llegaron de los valles y cañadas de Guerrero a la capital de esa entidad federativa. Se adueñaron de las calles de la ciudad y cortaron la única vía de tránsito terrestre entre la capital de la república (el Distrito Federal) y el puerto de Acapulco. A pesar del peligro que implicaba su acción (poco antes, la policía había dispersado a balazos otra manifestación similar, de futuros maestros, con saldo de dos muertos y heridos), no vacilaron en desafiar a las policías estatal y federal que los cercaban.”* (Aboites, 2013: 78)

modulación basal de la producción intelectual. Conceptualmente se ponen de manifiesto caras del pentaedro conceptual señalado, tales aquellas que aluden a la relación del intelectual con la masa/pueblo y la que remite expresivamente al saber colectivo.

Su dramaticidad social se manifestó - en forma cruenta- con lo acontecido con los “43” Normalistas de Ayotzinapa “desaparecidos” por un grupo armado hasta la fecha desde “... *el pasado 26 de septiembre (de 2014) pertenecían a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una diminuta comunidad serrana de apenas un centenar de habitantes en Guerrero, al sur de México y uno de sus estados más pobres...*” (Méndez, José, 2014:2). Justamente las Escuelas Normales Rurales, son refugios de la estrategia educativa emancipadora en México desde principios del siglo XX, y que aún luchan por su supervivencia con la idea de dar oportunidad a las comunidades postergadas de México. “*Creo que el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era que las Escuelas Normales murieran de inanición, y eso es una verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el problema, lo que decidieron fue ahogarlas económicamente*”, asegura Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex).

La lógica de gobierno de lo común, en este sentido, no se fundamenta en los equilibrios entre el papel del Estado y el del mercado, sino en la idea de la descentralización y el acuerdo entre iguales preocupados por problemas comunes: “*Avanzando, al realizar un recorrido panorámico por las principales experiencias de politización juvenil que se despliegan en América Latina en la actualidad, observamos que se trata de organizaciones que producen movilizaciones que expresan posibilidades políticas de establecimiento de relaciones intergeneracionales, a la vez que tienden puentes entre las movilizaciones de los jóvenes y las de otros movimientos y expresiones sociales colectivas más o menos organizadas. Así, vemos cómo estas movilizaciones superan ampliamente los límites sectoriales (y aun los generacionales), para convertirse en procesos que dinamizan diversas luchas sociales más amplias y expresan impugnaciones al sistema dominante que exceden las cuestiones aparentemente corporativas.*” (Vommaro, 2014:62)

El proceso de la lucha magisterial citado fue impulsado por estos drásticos acontecimientos a pronunciarse y a actuar en consonancia. “*La movilización nacional que tuvo lugar hacia el final de 2014 en torno a Ayotzinapa despertó a muchos rincones sociales adormecidos o apáticos y generó un cuestionamiento profundo al gobierno federal, al del estado de Guerrero y al Estado mexicano... Visto desde 2015, hay una fuerte tentación de considerar la movilización magisterial como un movimiento estrictamente gremial. Esto no es del todo exacto, porque tuvo un importante y dinámico componente de movimiento social amplio, en tanto que se sumaron múltiples organizaciones y sectores populares... (con que) subrayaron la importancia política amplia de la jornada magisterial...*” (Aboites, 2015:89). Así sus protagonistas productores de conocimiento

descubren en la acción colectiva el lazo social como condición de resistencia, al par que postulan derecho a su existencia y soberanía intelectual.

En el reciente mes de junio del presente año, el movimiento magisterial en México volvió a ser objeto de represión por parte del gobierno mexicano como reacción a sus protagonismos reclamando en Oaxaca “diálogo” por despidos y veto de la nueva ley de orientación neoliberal¹⁶⁵, en una confusa situación de violencia cuyo resultado, de acuerdo con fuentes periodísticas, arrojaron el número de ocho muertos y veintidós personas desaparecidas. *“...el poder gubernamental se empeña violentamente en modular la palabra, reprimir al magisterio que abreva en lenguajes raigales y horizontes de futuros bifurcados al pensamiento único. Y se nos viene, una respuesta casi rápida, el pensamiento colocado en otra dirección desmonta la legitimidad del montaje que se expone desnudo y contradictorio, de ahí su tamaño importancia para el poder. Ellos saben que lo social se modula colectivamente y requiere un tejido ideológico para poder producir la selección. En su pensamiento –expuesto- la selección no es un proceso natural sino que requiere diseño para el dominio de los pocos sobre los muchos, es necesario producir sobrantes, y su lógica secuencia el despido, una sociedad con despedidos. Pero los magisteriales, como aquellos 43, o los 132, nos enseñan que la voz no puede ser secuestrada, porque la soberanía intelectual no es una mercancía sino un sentir profundo y un carácter de expresar la inteligencia popular en democracia.”*¹⁶⁶

9. Los movimientos al conocimiento en Colombia, Bolivia y Ecuador

Los protagonistas descubren, como venimos analizando, la existencia del lazo social como condición de resistencia, construyen -aun cuando fuera circunstancialmente- movimientos intelectuales al colectivo. Y en esta disposición social se relacionan con los conceptos de dialogicidad, masividad, politicidad pública (especialmente observable respecto de las resistencias a las legislaciones de carácter “privatizador”)¹⁶⁷ y equidad que se resumen en la reapropiación del saber. Se conjugan incluso en diseño alternativo al intelecto colonizado y poder popular.

Así es que la movilización estudiantil de 2011 en Colombia¹⁶⁸ consistió en una serie de manifestaciones de estudiantes, sectores docentes, trabajadores universitarios y sindicatos, que toma particular desarrollo a partir de octubre de ese año, en todo el territorio colombiano como protesta

¹⁶⁵ <http://insurgenciamagisterial.com/>

¹⁶⁶ <https://actualidad.rt.com/actualidad/212384-apoyo-familias-alumnos-magisterio>

¹⁶⁷ “Resulta significativo reconocer cómo, en América Latina, la privatización de la educación se ha profundizado no sólo mediante la transferencia de la responsabilidad del financiamiento (del Estado al mercado), sino también mediante un no menos complejo proceso de transferencia del poder efectivo de control y coerción de la esfera gubernamental a corporaciones empresariales o fundaciones privadas.” (Gentili, 2007: 30)

¹⁶⁸ “Universidades con ánimo de lucro, apuesta del Gobierno”, El Espectador, 10 de Marzo de 2011.

por el Proyecto de Reforma a la Educación Superior presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en octubre de 2011. El proyecto de Ley contemplaba una mayor inversión en créditos para educación superior, a través del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), los cuales serían financiados por los beneficiarios una vez terminen sus estudios e ingresen al mercado laboral, con la posibilidad de condonación de la deuda por excelentes resultados académicos. El movimiento estudiantil colombiano vuelve a poner en primer plano el derecho a la educación frente a aquellas políticas neoliberales que incluyen modelos y prácticas donde el conocimiento es monopolizado y expropiado de forma privada por aquellos individuos, grupos u organizaciones que disponen del poder y de los recursos, de la fuerza y de la superioridad técnica para acumularlo, alienando o enajenado a otros de sus beneficios.

Observamos así claras semejanzas con las motivaciones que generaron y generan las movilizaciones de Chile por los altos costos de la educación superior y el riesgo de aumento de la privatización de un Estado proclive a la liberalización económica, en un marco de injusticia que niega la educación como derecho: *“Cuando el gobierno presenta el proyecto creo que más bien fue una reacción ante la inminente privatización de las universidades públicas lo que llevó a los estudiantes a unirse (...) cuando el gobierno plantea el ánimo de lucro para la educación superior, cambia la naturaleza de las universidades y se busca que tengan un carácter mixto con capitales públicos y capitales privados. La magnitud de esas iniciativas que claramente iban en detrimento del derecho a la educación nos llevó a dejar a un lado las diferencias dentro de las dinámicas internas del estudiantado (regionales y nacionales) y hacer un bloque amplio un frente común para buscar tumbar la reforma”* Edwin Adrián Sánchez Obando, Universidad Surcolombiana (en González Mantilla, 2015:8).

Los estudiantes universitario colombianos, organizados en la Mesa Amplía Nacional Estudiantil (MANE) iniciaron la construcción de la Propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior a través de múltiples encuentros en diferentes ciudades. Por su parte el Gobierno Nacional, por medio del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), emprendió la construcción de la Política Pública de Educación Superior y en 2014 presentó al país el documento denominado Acuerdo por lo Superior 2034, que contiene los lineamientos para este sector en el periodo 2014-2034. Dado que en la construcción de estos lineamientos, nuevamente no fueron incluidos los aportes de las organizaciones estudiantiles, la MANE ha planteado la posibilidad de nuevas protestas.¹⁶⁹

En el caso de Bolivia, desde 2003 al 2006 se consolidaron las organizaciones de los Movimientos Sociales a través de distintas confederaciones las que permiten el resurgir de Evo Morales primero como diputado, lo cual lo impulsa a convertirse en el candidato del Movimiento al Socialismo

¹⁶⁹ El 16 de octubre del mismo año y el 19 de marzo de 2015, de nuevo cientos de estudiantes salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para reclamar por esta nueva propuesta gubernamental.

(MAS) ganando las elecciones nacionales de 2005 y 2009 con los mayores porcentajes de la historia de Bolivia (54% y 63%, respectivamente). No obstante, durante el año 2002 se realizaron numerosas protestas estudiantiles, el recorrido por las mismas, nos permite comprender la situación del estudiantado y la operatoria de sus luchas¹⁷⁰.

Entre ellas se destaca la movilización, convocada por el Comité Boliviano de Lucha Contra el ALCA, organizada en la ciudad de La Paz, para protestar contra el acuerdo continental en la cual participaron aproximadamente cinco mil personas de distintas organizaciones tales como jubilados, maestros, universitarios, artesanos, sindicatos y parlamentarios del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). Los estudiantes universitarios conscientes de la realidad social del país y de la situación de crisis del movimiento universitario, organizan el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) con la finalidad de contribuir junto a otros Frentes de universitarios, para que surja un movimiento universitario clasista, revolucionario y aliado con los trabajadores¹⁷¹.

En el año 2015 durante cuatro semanas y a través de masivas movilizaciones callejeras, la toma del canal universitario de televisión y piquetes de huelga de hambre, los estudiantes bolivianos reclamaron por la reforma de los mecanismos de titularización docente. Los estudiantes de la UMSS se movilizaron entre el 7 de abril y el 1 de agosto de 2015 en rechazo a la resolución 1/2015 que aprobó el Honorable Consejo Universitario (HCU), presidido por el rector Waldo Jiménez, para que más de 1.000 docentes extraordinarios suban a la categoría de titulares sin examen de competencia. □ Luego de 17 semanas de conflicto los dirigentes estudiantiles, docentes y autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) lograron un acuerdo que deja sin efecto las resoluciones que posibilitaban la titularización docente sin exámenes.

En Ecuador¹⁷², la organización que representa a los estudiantes universitarios es la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la cual se ha fortalecido durante décadas en torno a

¹⁷⁰ En septiembre de 2002 los estudiantes de la agrupación Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas (URUS), efectúan dos piquetes de huelga de hambre en el Rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS); ese mismo año se suman más enfrentamientos y marchas ya que los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) protestan por la decisión tomada por el ministro de Hacienda de congelar las cuentas de la universidad, por ello, organizan una masiva marcha en La Paz. A lo cual se suma el reclamo de otro grupo de estudiantes que inician una huelga de hambre en el edificio anexo del Congreso Nacional, exigiendo que se respete la autonomía universitaria y que dicha institución se incorpore al sistema universitario nacional, entre los reclamos más importantes.

¹⁷¹ Los estudiantes impulsan una profunda reforma con el objeto de eliminar a docentes vitalicios, imponer un cogobierno mayoritariamente estudiantil, preservar el régimen público y gratuito de enseñanza, eliminar todo aporte extraordinario, además de la “fiscalización de aportes y de los asuntos financieros y administrativos por delegados obreros” (Asamblea Universitaria). Su principal objetivo es que la universidad se ponga al servicio de los trabajadores. Con respecto a lo académico-pedagógico se busca establecer una relación entre la teoría y la práctica, lo cual se considera una herramienta esencial para terminar con cátedras memorísticas y repetitivas, y así poder desarrollar un proceso de enseñanza superior que transforme la realidad de pobreza y atraso que estigmatizan al departamento altiplánico de Oruro.

¹⁷² Los lineamientos en relación con las políticas universitarias que se llevaron a la práctica a lo largo de los ochenta y noventa y que estarán vigentes hasta el año 2006, siguen los modelos neoliberales implantados en la región: el manejo de las políticas públicas y el llamado “cambio estructural” con la liberalización de los mercados; igualdad de oportunidades de inversión a capitalistas nacionales y extranjeros; privatización de las empresas; flexibilización

la lucha en defensa de los derechos de los movimientos estudiantiles y populares en general. Es así que en el año 2002, la participación de la FEUE en la lucha por la Convocatoria a una Asamblea Constituyente para sentar las bases de un nuevo Estado, permite plantear la necesidad de una profunda Reforma Universitaria, lo cual se cristaliza años más tarde.

Entre 2007 y 2013, y bajo la presidencia de Rafael Correa, se dará un giro importante en la historia del país, pues desde el inicio de este gobierno se asumen muchas de las demandas de las organizaciones sociales, movimiento indígena, movimientos de mujeres, ecologistas, jóvenes, etc., posicionadas en las décadas anteriores. La problematización implica un retorno crítico a la acción, no puede desligarse de la situación concreta. Por lo señalado, emerge como hipótesis que estas movilizaciones en el espacio público no sólo resisten a la exclusión de participar en la factura del intelecto social sino que, al mismo tiempo, refutan la lógica del aislamiento individual y la selectividad como gramática básica para la producción intelectual. Sus protagonistas descubren la existencia del lazo social como condición de resistencia, construyen -aun cuando fuera circunstancialmente- movimientos intelectuales al colectivo.

En el año 2010 la FEUE resuelve retomar los “plantones regionales” como medida de presión para que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional establezca con ellos el diálogo para alcanzar consensos sobre la Ley de Educación Superior; dichas acciones se desarrollaron en Guayaquil y en Quito hasta el 30 de abril que fue el plazo previsto para que se realice el segundo y definitivo debate de dicha ley. Dada la situación de ruptura del diálogo, en 2011 la FEUE se une a la Jornada Latinoamericana de Movilización que reclamaban por una educación de calidad y universidad gratuita que movilizó a más de 50 mil estudiantes de universidades públicas y privadas.¹⁷³

En esta especificidad de los movimientos intelectuales universitarios analizados en este apartado, se registran movilizaciones tanto en el siglo XX como en la actualidad del siglo XXI que continúan las lógicas ya subrayadas; en ellos se registra una doble irrupción, por un lado, se manifiestan los reclamos de equidad e inclusión educativa, por el otro, un combate de hecho y de derecho por la expresión colectiva. Cuánto más radicales resultan históricamente sus praxis y pronunciamientos de

del sistema financiero; descentralización y autogestión de los servicios básicos de educación y salud; libertad para crear instituciones de educación superior, bajo requisitos mínimos y sistemas de autofinanciamiento (Pacheco 2013).

¹⁷³ La aprobación de la Ley trajo consigo la creación y revitalización de varias instituciones como la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación), CEAACES (Consejo de la Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), CES (Consejo de Educación Superior), y algunas otras de menor relevancia a nivel nacional, pero de mucha importancia para la implantación de ciertas políticas; lo que además de alterar la estructura del sistema de educación superior ha cambiado las lógicas de funcionamiento y concepción de la universidad: como el SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión) a través del ENES (Examen de Nivelación en la Educación Superior), o el nuevo escalafón docente con la obligatoriedad de maestrías y doctorados en un plazo de tiempo determinado, reformas al régimen académico, gratuidad con responsabilidad académica, disminución de la edad de jubilación docente, entre otras; a lo que se suma la creación de cuatro universidades estatales.

resistencia, más violenta resulta la respuesta del régimen gubernamental. Es decir cuánto más se tiende a debilitar la hegemonía, esta forma de modulación principalmente ideológica se abandona para dar lugar a la violencia descarnada. Dicha violencia dimensiona, en consecuencia, como contracara, la importancia básica que ocupa en el metabolismo del sistema la construcción educativa y científica para la acumulación y sus formas de reproducción.

10. A modo de conclusiones

Nuestra hipótesis es que la ciencia se caracteriza por un paradigma que ha logrado eludir cuestiones centrales que conciernen íntimamente a su “marco epistémico” (Piaget y García, 1982: 84-87). El paradigma actual sólo admite como ciencia un proceso que abarca teoría, metodología y datos para su demostración, al mismo tiempo que el saber científico se certifica a sí mismo como saber objetivo y universal y adquiere con ello valor político y social de legitimación. No se trata de un saber cualquiera sino de un saber científico “regulado” institucionalmente, se distingue de lo mítico, de la barbarie, de lo arbitrario

Por nuestra parte sumamos o agregamos dentro de este componente epistémico los procesos sociales de trabajo que dan lugar a la existencia real de la ciencia. Desde nuestra perspectiva la ciencia se compone inescindiblemente con estos cuatro elementos que deben conformar un mismo y solo corpus de conocimiento, la praxis científica así queda definida como avance. Por una parte tenemos, una ciencia antecedente que por autodefinición se abstrae de su realidad productiva y social y por lo tanto no la discute, por la otra, un paradigma emergente que coloca en debate y en acción las formas de producir, transferir y distribuir la creación científica como parte de su mismo corpus científico.

Tal como analizamos los movimientos intelectuales inciden con una ruptura epistémica sobre la hegemonía el intelecto colectivo, sus valores, sus lógicas y procesos productivos y laborales. En todos los casos su impacto social ha resultado sorprendente, como así sus efectos sobre las políticas nacionales, alcanzando en el caso chileno representaciones para ocupar cargos en el gobierno electo, como por sus repercusiones sobre la planificación estatal en Brasil, y firmes resistencias en las reformas educativas en el caso de Colombia, Ecuador y Bolivia. Así pueden descubrirse en su praxis rasgos de resistencia al extrañamiento del intelecto social colonizado. La dimensión de este conflicto resulta evidente, sobre todo y en contracara, la reacción se precipita con coerción. El concepto de reapropiación sintetiza el descubrimiento del campo del saber colectivo a la vez que como bien común, implica de suyo, una producción dialógica, socialmente deliberativa.

En síntesis en este estudio hemos explorado el intelecto social como una clave para investigar el metabolismo del sistema. Fase que puede considerarse del más alto alcance de absorción y subsunción del *general intellect*, tanto por cercamiento como por desposesión, a través de múltiples

formas de colonización y direccionamiento del saber social. En la última década frente a esta realidad, notoriamente en el presente quinquenio, los productores intelectuales se han movilizad multitudinariamente para resistir su exclusión, disputando su derecho al conocimiento en oposición a la lógica segmentaria que se impone como pensamiento único. Expresiones que siendo pacíficas, que reclaman diálogo, despiertan entre otras políticas, violentas reacciones gubernamentales, que en este extremo prueban la citada clave de irrupción en la formación de intelecto colectivo.

Maestros manifestando en
Oaxaca,
<http://www.pagina12.com.ar/2016-06-20.html>



Bibliografía

- 7 Abad Montesinos, Jaime (2014). “La economía social y solidaria como alternativa económica. Bienes comunes y democracia”. En *Recerca. Revista de Pensament i analisi*, N°15, 55-75. Valencia.
- 8 Aboites, Hugo (2015). “Reformas y Ayotzinapa: percepciones y estrategias en la lucha magisterial 2012-2015”. En *El Cotidiano*, N°190, 83-91. México DF.
- 9 Aboites, Hugo (2013). México: la rebelión magisterial del 2013. En OSAL, *Observatorio de América Latina*, 72-91. México D.F.: CLACSO – UNAM.
- 10 Antunes, Ricardo (2010). La dialéctica entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto”. En *Revista Herramienta*, N° 44.
- 11 Bauman, Zygmunt (1977). *Para una Sociología Crítica. Un ensayo sobre el sentido común y la emancipación*. Buenos Aires: Ediciones Marymar.
- 12 Bialakowsky, Alberto; Lusnich, Cecilia y Bossio, Constanza (2014a). “Más allá del neoliberalismo. Pensamiento Crítico Latinoamericano y movimientos al intelecto colectivo”. En *Revista Horizontes Sociológicos: AAS*, Año 2 N°4, 70-88. Buenos Aires.
- 3- Bialakowsky, Alberto L.; Lusnich, Cecilia y Bossio, Constanza (2014b). Resistencias, movimientos latinoamericanos al intelecto colectivo. *Pre ALAS Patagonia / VI Foro Sur Sur*, Universidad Nacional Patagonia Austral, Calafate, 7 al 9 de mayo.
- 4- Bialakowsky A.L. y Lusnich C. (2015). “Intelecto social, la educación y las movilizaciones sociales”. En *Guía sobre post-desarrollo y nuevos horizontes utópicos*, Paulo Henrique Martins, Marcos de Araújo Silva, Bruno Freire Lira, Éder Lira de Souza Leão(Organizadores), Programa de Pós-Graduaçãoem Sociologia/Universidade Federal de Pernambuco, ALAS – Asociación Latino-

Americana de Sociología, CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil), Estudios Sociológicos Editora, Buenos Aires.

5- Bialakowsky, Alberto y Lusnich Cecilia (2016) “Agotamiento de un paradigma científico frente a los bienes comunes”. En *Guía sobre post-desarrollo y nuevos horizontes utópicos*, Paulo Henrique Martins (Comp.) Programa de Pós-Graduação em Sociologia/Universidade Federal de Pernambuco, ALAS – Asociación Latino-Americana de Sociología, CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil), Estudios Sociológicos Editora, Buenos Aires. En prensa.

6- Delgado Wise, Raúl (2015). “Reflexiones en torno a la reestructuración de los sistemas de innovación en el horizonte Norte-Sur: lecciones a partir de la experiencia mexicana”, en A.L. Bialakowsky (director), *Cuestiones críticas del capitalismo e intelecto social*, Buenos Aires: Editorial Teseo-IIGG/FCS/UBA (en edición)

7- Delgado Wise, Raúl y Chávez-Elorza, María (2016). “Patentad, patentad: apuntes sobre la apropiación del trabajo científico por las grandes corporaciones multinacionales”. En *Observatorio del Desarrollo* (en prensa).

8- De Sousa Santos, Bonaventura (2011). *Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación*. Buenos Aires: CLACSO-Siglo XXI Editores.

9- Fornillo, Bruno (2014). “¿Commodities, bienes comunes o recursos estratégicos? La importancia de un nombre”, en *Nueva Sociedad* N° 252, 101-117.

10- Freire, Paulo (1972). *La educación como práctica de la libertad*. Río de Janeiro: Paz e Terra. 1º reimpresión Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005.

11- Freire, Paulo (1986). *Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faúndez*. Buenos Aires: Ediciones La Aurora.

12- García, Rolando (1994). “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”. En Leff, E. (Comp), *Ciencias Sociales y formación ambiental*. Barcelona: Gedisa.

13- García Linera, Álvaro (2011). *Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal*, CLACSO- Prometeo: Buenos Aires.

14- Gentile, Pablo (2007). *Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos*. Rosario: Homo Sapiens

15- Guadilla, Carmen (2010). “Heterogeneidad y concentración en las dinámicas geopolíticas del conocimiento académico, reflexiones y preguntas en el caso de América Latina”. En *Políticas de posgrado y conocimiento público en América Latina y el Caribe Desafíos y perspectivas*, M. Mollis, J. Núñez Jover, C. García Guadilla, Colección Red de Posgrados CLACSO. Buenos Aires: CLACSO – ASDI.

- 16- González Mantilla, Vitoria (2015). “Los movimientos sociales como agentes de producción de significación. El caso de la Mesa Amplia de Estudiantil MANE (Colombia). Ponencia presentada en VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC, agosto 2015, Córdoba.
- 17- Grüner, Eduardo (2011). *Nuestra América y el Pensar Crítico. Fragmentos de Pensamiento Crítico de Latinoamérica y el Caribe*. Buenos Aires: CLACSO.
- 18- Harvey, David (2005). *El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión*, Buenos Aires: CLACSO.
- 19- Houtart, François (2014). “De los bienes comunes al bien común de la humanidad”, en *Revista Kavilando*, Vol. 6 N°2, Medellín, 104-117.
- 20- Landier, Edgardo (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico. En libro: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- 21- Marx, Karl (1972). *Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Borrador 1857-1858)*, Buenos Aires: Siglo XXI Argentina Editores.
- 22- Méndez, José (2014). *Guerrero: una historia de lucha social, cacicazgos y pobreza*, http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/28/actualidad/1414457377_371609.html
- 23- Mignolo, Walter (2001). *Capitalismo y geopolítica del conocimiento*. Buenos Aires: Ediciones del Signo – Duke University.
- 24- Mollis, Marcela (2014). “Administrar la crisis de la educación pública y evaluar la calidad universitaria en América Latina: dos caras de la misma reforma educativa”. En *Revista de la Educación Superior*, Vol. XLIII, N° 169, 25-45.
- 25- Pacheco Prado, Lucas. (2013). “El contexto histórico de la creación de universidades a partir de 1990”. En *Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior*. Quito: CEAACES.
- 26- Puello-Socarrás, José F. (2008). *Nueva gramática del neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- 27- Puello-Socarrás, José (2008). *Nueva gramática del neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- 28- Puello-Socarrás, José F. (2015). “No diga ‘bienes comunes’. Diga bienes comunales”. En *Revista Subversiones Intelectuales*, N°54, 30-37.
- 29- Rodotà, Stefano (2011). “Il corpo giuridificato”. En *Trattato di biodiritto, Il governo del corpo*. Milano: Giuffrè.
- 30- Ramis, Álvaro (2014). “Los bienes comunes intangibles en el capitalismo cognitivo”. En *Recerca, Revista de pensament i anàlisi*, N° 15, 109-129.

- 31- Reygadas, Luis (2014). “La biblioteca de Babel. Dilemas del conocimiento como bien común en América Latina”. En *Revista Crítica y Emancipación*, Año VI, Número 12, 297-356.
- 32- Ruiz Encina, Carlos (2013). *Conflicto social en el neoliberalismo avanzado: análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile*. Buenos Aires: CLACSO.
- 33- Quijano, Aníbal (2014). “¿Bien vivir?: entre el ‘desarrollo’ y la Des / Colonialidad del poder”, en *Cuestiones y Horizontes. Antología esencial. De la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder*, 847-859. CLACSO: Buenos Aires.
- 34- Quijano Aníbal (2009). “La crisis del horizonte de sentido colonial/moderno/eurocentrado”. En *Sociedad, Cultura y Cambio en América Latina*. Lima: Universidad Ricardo Palma, Julio Mejía Navarrete Editor.
- 35- Sánchez Vázquez, Adolfo (2007). *Filosofía da praxis. Pensamiento social latinoamericano*. CLACSO: Buenos Aires-San Pablo
- 36- Sisto, Vicente (2013). “Entre la Privatización y La Reconstrucción de lo Público en Chile: Movimientos Estudiantiles y el debate acerca del devenir de la universidad”. En *Revista Horizontes Sociológicos*, AAS, Año 1 N° 1, 62-76.
- 37- Vercelli, Ariel (2010). “Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes” en Iconos. En *Revista de Ciencias Sociales*, N° 37, 55-64. Quito: FLACSO.
- 38- Virno, Paolo (2003). *Gramática de la multitud. Para un análisis de la forma de vidas contemporáneas*. Buenos Aires: Colihue.
- 39- Vommaro, Pablo (2014). “La disputa por lo público en América Latina. Las juventudes en las protestas y en la construcción de lo común”. En *Nueva Sociedad* N° 251, 55-69.
- 40- Zibechi, Raúl (2013). Debajo y detrás de las grandes movilizaciones. En OSAL, *Observatorio de América Latina*. México D.F.: CLACSO – UNAM, 15-135.

Clases y movimientos sociales. Un intento de debate alrededor de la dialéctica acumulación-conflicto-hegemonía

Guido Galafassi¹⁷⁴

11. Clases/lucha de clases y movimientos sociales

Es largo el historial de lo producido y el debate subsecuente en torno a la problemática de las clases sociales y la lucha de clases. En principio caben distinguir la diferenciación entre las visiones sobre las clases que las independizan de la lucha de clases de aquellas otras que de ninguna manera pueden pensarlas como categorías autónomas. Será esta última discusión sobre la que me interesará esbozar algunos comentarios introductorios, dada la esterilidad de la categoría clase social en tanto solo segmento estratificador por su insustancialidad en tanto pensamiento dialéctico.

Entender a la clase social en tanto componente consustancial a la lucha de clases ha tenido y tiene aún, un recorrido de debate sumamente extenso y variado, del cual fundamentalmente me interesará aquel que se sumerge y compenetra en la tensión existente entre la clase en tanto componente estructural de una sociedad basada en el antagonismo y la clase en tanto resultado y construcción histórica de la acción humana a partir de conexiones portadoras de identidad y significado. De más está decir que la variante estructural es la más extendida por cuanto es la enlaza más visiblemente con las preocupaciones de Karl Marx por desentrañar las reglas del Capital en tanto relación social que guía las relaciones de explotación y dominación en la sociedad capitalista. En todo caso, las perspectivas que resaltan la clase en tanto construcción de relaciones subjetivas emerge más fuertemente en las últimas décadas con la intención justamente de contrarrestar el carácter determinativo de la clase por sobre los sujetos. Y me interesa básicamente esta tensión porque es aquella que me permitirá luego poder articularla en una noción de conflicto dialéctico que pueda dar una mejor cuenta de la complejidad de variantes que asume la conflictividad y que se visibiliza más cabalmente en las últimas décadas montada sobre una diversidad de antagonismos y contradicciones y en donde la dimensión cultural de consenso-coerción y de construcción de identidad (conciencia) cobra una importancia fuerte y que van más allá de la primaria y fundamental contradicción presente entre el capital y el trabajo, sin que esto implique negarla o ignorarla .

Se hace necesario al día de hoy, luego de tantas décadas de debate, comenzar a incorporar definitivamente para la comprensión y explicación de la realidad socio-histórica una perspectiva que contemple los diferentes planos y dimensiones que la integran, ya no en una perspectiva

¹⁷⁴ Profesor Titular UNQ, Investigador Independiente CONICET. Director del GEACH (Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía) <http://theomai.unq.edu.ar/GEACH/Index.htm>

sistémica sin jerarquías donde los componentes están en función del mantenimiento del conjunto; sino desde una complejidad dialéctica que pueda articular los diversos grados de determinación que puedan emanar de la dimensión estructural junto a la irreductible sustantividad de la acción de los sujetos y de las construcciones culturales y simbólicas que imprimen valores e identidades en pugna.

Es en este sentido, que de tanto en tanto han surgido intentos de superación, simultáneos o parciales de la esclerosis que han sufrido tanto el marxismo como las interpretaciones alternativas en sus versiones más dogmáticas y que se caracterizaron por: un cierto reduccionismo mecanicista y economicista en el análisis del antagonismo y la conflictividad, un cierto “obrerismo” exclusivista en versiones del marxismo más dinámico; un relativo empirismo “sin teoría” en buena parte de la historia, la sociología y la antropología “académica” más ortodoxa; un dominante ahistoricismo en la sociología funcionalista; una ausencia de teoría en el historicismo empírico de buena parte de la historia –sea marxista o liberal-, y también un sesgado reduccionismo individualista en las teorías interpretativas de la acción. Dentro del marxismo se ha venido generando algún debate al respecto, centrado especialmente en sostener la centralidad de la estructura o separarse de esta “determinación” para darle lugar al sujeto; prestando, salvo pocas excepciones, una escasa atención sin embargo al relativo exclusivismo obrero de sus análisis. Desde la otra vereda, las conceptualizaciones contemporáneas sobre los movimientos sociales han relativamente intentado, o por lo menos así lo manifiestan, superar algunas de estas trabas, recayendo sin embargo en nuevas manifestaciones individualistas de estos viejos parcelamientos y teniendo fundamentalmente como supuesto la negación de la lucha de clases.

El desafío es entonces articular una perspectiva de análisis dialéctica que supere los reduccionismos de diverso tipo y que permita vislumbrar en la diversidad de los procesos de conflicto los patrones de unidad que la atraviesan al mismo tiempo que la manifestación en tanto diferencias en sus expresiones espaciales e históricas. Esto implicará poder reconocer ciertas tendencias a las determinaciones y sobre-determinaciones de un predominantemente origen estructural, sin caer en ninguna clase de reduccionismo ni totalitarismo explicativo. Para el mismo tiempo y de manera estrictamente dialéctica poder interpretar y explicar, en base al reconocimiento de una relativa diversidad de antagonismos presentes (saliéndose así de la exclusividad que implica solo reconocer la contradicción capital-trabajo), cierta multiplicidad de situaciones y dimensiones en donde los procesos ideológicos, culturales, identitarios y de construcción de hegemonía y subjetividad se vuelven relevantes. Procesos estos últimos que interactúan tanto en la definición para la gestación de procesos de conflictividad generando las condiciones de emergencia de los mismos, como a su vez en el desarrollo de estos procesos, marcando e influenciado los caminos seguidos, aunque siempre –y no está de más insistir- en correlación dialéctica con las dimensiones estructurales.

Dimensiones estas que emanan básicamente de la presencia de las relaciones sociales de producción que configuran a través del tiempo diferentes modos de acumulación del capital y de gestación de formaciones sociales dinámicas en permanente proceso de contradicción y reelaboración interna. Pero todo esto, implicará como se dijo, el tener que admitir relaciones dialécticamente jerárquicas (para así no caer en la indefinición tautológica de los análisis sistémicos) que no tienen que ser necesariamente homogéneas en el desarrollo del proceso socio-histórico, sino que por el contrario asumirán variantes diversas a lo largo del tiempo y el espacio.

Sin lugar a dudas que uno de los primeros pasos a dar en romper cualquier reduccionismo pero especialmente el economicismo tan característico en buena parte del pensamiento marxista, es sumarle a la dimensión económica de base, condición necesaria pero para nada exclusiva como se dijo, las dimensiones políticas e ideológicas; de tal manera de conjugar junto a las relaciones sociales de producción que son el germen primero de la materialización de las relaciones de explotación en las sociedades basadas en la hegemonía del capital, las relaciones de dominación en tanto dominación-subordinación de manera concatenada con la dimensión ideológica como fundamentación legitimadora de la dominación. Esto se evidencia, entre otros autores, en Nicos Poulantzas, quien a pesar de un lenguaje duro con tintes de cierto mecanicismo, define precisamente a la lucha de clases en una triple dimensión argumentando específicamente respecto al carácter determinativo de las dimensiones y a la necesidad de articular lo estructural con lo superestructural (metáfora dicotómica que será incluso criticada más adelante por otros autores, junto a la noción misma de determinación). En su clásico trabajo “Las clases sociales en el capitalismo actual” comienza definiendo a las clases sociales y su anclaje en lo económico en tanto “*agentes sociales determinados principal pero no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción*”; para inmediatamente subrayar junto a la centralidad de lo económico su insuficiencia relativa al afirmar que para el marxismo “*lo económico desempeña en efecto el papel determinante en un modo de producción y en una formación social; pero lo político y la ideología, en suma la superestructura, tienen igualmente un papel muy importante*”. Seguidamente define algo que es absolutamente clave en el camino de superación de cierta tendencia, inclusive del propio marxismo, de caer en explicaciones ahistóricas, tan características del estructural-funcionalismo. Se trata de ligar indisolublemente a las clases sociales con la lucha de clases cuando dice que las primeras significan para el marxismo “*en un único y mismo movimiento, contradicciones y lucha de clases: las clases sociales no existen primero, como tales, para entrar después en la lucha de clases, lo que haría suponer que existen clases sin lucha de clases. Las clases sociales cubren prácticas de clase, es decir la lucha de clases, y no se dan sino en su oposición*”. Pero esta presencia de “prácticas de clase” que abre la puerta a la acción del sujeto colectivo, no mella sin embargo lo que Poulantzas sigue definiendo como determinación de las clases, que “*sin dejar de cubrir prácticas-lucha-de*

clases y extendiéndose a las relaciones políticas e ideológicas, designa unos lugares objetivos ocupados por los agentes en la división social del trabajo: lugares que son independientes de la voluntad de tales agentes". Es decir, que a pesar de la incorporación de la dimensión superestructural, esto no cumple mucho más que un papel de sumatoria de variables y componentes que complejizan la mirada centrada en la determinación económico-estructural, dejando escaso margen tanto a la actuación creativa como a la autonomía relativa que podría asumir la dimensión político-ideológica. De aquí deriva lo que el mismo designará como "*determinación estructural de clase*" como aquella determinación dada por la estructura, más precisamente por las relaciones de producción (lugar en el conjunto de la división social del trabajo) acompañada por los lugares ocupados en la dominación-subordinación política e ideológica en las prácticas de clase. Pero su inicio de apertura al incorporar justamente la dimensión político-ideológica le permitirá también distinguir la "*posición de clase en la coyuntura*", la cual precisará inmediatamente advirtiendo que, "*... insistir en la importancia de las relaciones políticas e ideológicas en la determinación de las clases, y en el hecho de que las clases sociales no existen más que como lucha (prácticas) de clases, no puede reducir, de manera `voluntarista', la determinación de las clases a la posición de las clases; esto reviste toda su importancia en los casos en que se comprueba una distancia entre la determinación estructural de las clases y las posiciones de clase en la coyuntura*". Como ejemplos típicos da los casos de la aristocracia obrera y de la pequeña burguesía. Así, la primera puede asumir posiciones de clase burguesa en la coyuntura sin que esto implique -por la determinación estructural de clase- que deje de formar parte de la clase obrera; y la segunda puede llegar a tener en coyunturas concretas posiciones de clase proletarias o que por lo menos se le aproximan. Pero inmediatamente vuelve a precisar, en un posible debate con posiciones tales como las de Alan Touraine; que para aquellos años y pesar de tomar -resignificando trágicamente- categorías del marxismo respecto a la centralidad de las luchas y la presencia de las clases, inicia un camino alternativo de explicación de la conflictividad centrado en el actor y en los movimientos sociales. En síntesis, luego de esta digresión y volviendo a Poulantzas, precisará la supremacía de la dimensión estructural-económica al criticar afirmando que "*Reducir la determinación estructural de clase a la posición de clase, es abandonar la determinación objetiva de los lugares de las clases sociales por una ideología `relacional' de los `movimientos sociales'*".

Es entonces que si bien Poulantzas recorre el camino no ortodoxo del marxismo (como antes lo habían hecho por ejemplo Gramsci, Lukács, y mucho más radicalmente la Escuela de Frankfurt, entre otros) al incorporar junto a las relaciones sociales de producción para la definición de las clases las dimensiones políticas e ideológicas, no rompe sin embargo con las causales de determinación que la estructura económica tendrá sobre la lucha de clases, permitiendo si, en todo caso, un mayor juego de posibilidades en torno a las prácticas sociales sin que esto implique

correrse del planteo de una lucha de clases a priori determinada por la propia conformación antagónica de la sociedad capitalista, que es en todo caso, la formación más novedosa en términos de sociedad de clases. Es decir que la lucha de clases es inherentes a la misma sociedad construida en base al antagonismo de clase y lo que si podría variar es la expresión de esta lucha de clases en términos de las prácticas que desarrolle cada clase o fracción de clase en base a la complejidad dialéctica que se define a partir de la conjunción de los componentes del proceso de producción más el político y el ideológico, tomando siempre como fundamento absolutamente central a la contradicción capital-trabajo.

Sin lugar a dudas que Poulantzas complejiza y desarrolla aquellas famosas afirmaciones de Engels en su carta a Bloch de 1890 cuando escribía *“Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en última instancia. Pero también desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones políticas, y hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los hombres”*. Las condiciones políticas adquieren para Engels un papel relevante, aunque no decisivas; componiendo un panorama un tanto más alejado de cualquier interpretación mecanicista, el cual Poulantzas retomaría, con lo económico como determinante, a lo que se le suma lo político e ideológico que adquiere claramente unos lugares destacados que se expresan a través de las prácticas de clase.

Pero Engels, inmediatamente agrega un componente mucho más incomprendido para las miradas más estructuralistas del materialismo dialéctico, como es el de la individualidad. *“En segundo lugar, la historia se hace a sí misma de tal manera que el resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante --el acontecimiento histórico--, que a su vez, puede considerarse producto de una fuerza única, que, como un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere tropieza con la resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha querido. De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y sometida también, sustancialmente, a las mismas leyes dinámicas. Pero del hecho de que las distintas voluntades individuales --cada una de las cuales apetece aquello a que le impulsa su constitución física y una serie de circunstancias externas, que son, en última instancia, circunstancias económicas (o las suyas propias personales o las generales de la sociedad)-- no alcancen lo que desean, sino que se fundan todas en una media total, en una resultante común, no debe inferirse que estas voluntades sean igual a cero. Por el contrario, todas contribuyen a la resultante y se hallan, por tanto, incluidas en ella”*. Esta segunda afirmación de Engels servirá para

plantear un debate sumamente rico dentro del marxismo, a pesar de los fuertes ribetes de enfrentamiento que ha generado y sigue generando. Es que coloca al sujeto individual en el centro de la escena, generando aparentemente un problema conceptual al propio supuesto de la clase, entidad colectiva que subsumiría cualquier individualidad. Sobre esta carta de Engels es que se asienta en parte la apertura de este debate, al opinar sobre ella primero Althusser para luego ser retomada por E. P. Thompson como disparador para sus críticas y sus planteos de clase y sujeto alternativos.

Primero veamos el enfado de Thompson con el propio Engels al marcar el supuesto contrasentido de este al querer conjugar la voluntad individual con el condicionamiento económico. Dirá el historiador inglés, “¿Cómo entonces se nos puede decir que ‘hacemos nuestra propia historia’ si en definitiva el movimiento económico se afirma como necesario?”; para luego dictaminar que la supuesta solución de Engels solo termina por oscurecer más aquello que parecía ser una develación anti-estructuralista para caer en el determinismo colectivo más claro, borrando definitivamente al sujeto. Así Thompson dirá, “Al proponer una solución, Engels calladamente cambia los sujetos y substituye ‘nosotros hacemos’ por ‘la historia se hace a sí misma’”. Vemos como solo un par de palabras le sirven a Thompson para profundizar su crítica anti-estructural.

Igualmente lo más rico está sin dudas en el debate con Althusser pues al marcar las diferencias con la mirada estructural, se posiciona nuevamente en su clásica definición (“Formación de la clase obrera en Inglaterra”) de clase que se hace a sí misma en tanto sujetos que interactúan y se construye en la lucha. Lo que le criticará precisamente a Althusser es el desprecio de este por las voluntades humanas, cuando en “Misericordia de la Filosofía” critica justamente a Engels por su preocupación poco diferenciada de la “ideología burguesa”. Para Althusser y según Thompson, la preocupación conjunta por la condición económica y la voluntad individual es inútil (“vana” dirá explícitamente) “porque Engels ha planteado un no-problema: si el ‘movimiento económico’ produce el resultado histórico, entonces deberíamos seguir con el análisis de las estructuras y desestimar las ‘voluntades individuales’. La idea misma de acción humana no es más que la ‘apariencia de un problema para la ideología burguesa’ (Thompson, “Misericordia de la Teoría”, pp. 145). Paso seguido Thompson dejará claramente planteada su diferencia y aunque en “Formación de la Clase Obrera” casi desestima toda connotación estructural para la definición de la clase social, aquí rescata a Engels a partir de la consideración de la ambivalencia humana en tanto sujeto y objeto, en tanto acción y estructura; diferenciación y posicionamiento que considero crucial para entender toda la complejidad dialéctica de la lucha de clases y no seguir cayendo así en mecanicismos que además ponen el énfasis solo sobre fracciones particulares de las clases dominadas. Retomando explícitamente a Thompson, vale entonces la siguiente cita, oración que continúa la resaltada unos renglones más arriba. “Yo, por el contrario, considero que Engels ha

planteado un problema crucial –el de la acción y el proceso- y que, pese a ciertas deficiencias, la tendencia general de su meditación es útil. Por lo menos no desestima la crucial ambivalencia de nuestra humana presencia en nuestra propia historia, en parte como sujetos y en parte como objetos, como agentes voluntarios de nuestras determinaciones involuntarias” (Thompson, “Miseria de la Teoría”, pp. 145).

12. Contradicciones y Antagonismos

Planteado muy someramente y muy inicialmente el debate sobre estructura y sujeto, vale ahora adentrarse un poco en la cuestión de las contradicciones y antagonismos, o aquello que el propio Althusser planteó como sobredeterminación, contemplando así la presencia de múltiples contradicciones.

Al definirse la modernidad en términos capitalistas se sentaron las bases de una contradicción fundamental (pero no única) dada entre el capital y el trabajo, por cuanto el capital necesita de la fuerza de trabajo para poder realizar su plusvalía al mismo tiempo que le significa costos que por lo tanto se tiende a eliminar o disminuir; y la fuerza de trabajo, dadas las condiciones de “libertad individual” y disponibilidad, única, de su capacidad laboral, necesita forzosamente emplearse para poder conseguir su sustento diario, vía el circuito del dinero, a pesar de que esto implica someterse a relaciones de explotación que por razones obvias no pueden aceptarse. Así, esta condición de necesidad mutua guarda esencialmente su propia impugnación, por la tendencia a la eliminación de los costos por un lado y de la relación de explotación por otro. Pero contradicción asentada en la predominancia de las relaciones de producción, se instala junto a otras premisas fundamentales de la modernidad liberal como son el humanismo, el racionalismo, la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad, consecuentemente, sólo en el plano de los derechos y las oportunidades.

Es entonces que junto a esa contradicción fundamental se constituye una condición básica asentada en la privatización de lo común, comenzando por la tierra en tanto medio de producción y del trabajo en tanto creador de valor que se traduce en la mercantilización ininterrumpida y creciente de las múltiples dimensiones de la vida. Si en el feudalismo y en las culturas extra-europeas previas a su colonización el carácter de lo común ocupaba un lugar de relativa alta importancia tanto en la producción como en los valores simbólicos, la lógica del capital fue cercenando crecientemente esta premisa por cuanto su propia constitución se asienta en la apropiación privada e individual de los medios de vida, su legitimación normativo-jurídica, su justificación ideológica y cultural y su rubricación política en tanto proceso de construcción de hegemonía.

Así, de la apropiación privada de la producción se pasa gradualmente a la constitución de la propiedad privada como un valor esencial y cada vez más excluyente en el modo de vida moderno-

capitalista, cubriendo gradualmente todos los aspectos de la existencia; profundizados actualmente en la creciente y persistente tendencia neoliberal y en la profunda crisis de las diversas corrientes ideológicas y políticas críticas del capitalismo.

Y esta mercantilización y privatización de lo común (justificada y aceptada mayoritariamente) se entrecruza entonces con la contradicción fundamental, atravesando la esencialidad de la modernidad capitalista. Pero se superpone además con otra serie de antagonismos y contradicciones que persisten, surgen y/o se multiplican, pudiendo constituirse en ciertos casos y por momentos en antagonismos más sobresalientes que aquel definido entre el capital y el trabajo. Contradicciones y antagonismos de género, étnicas, político-regionales, entre la sociedad y la naturaleza, entre el capital y las condiciones de producción (la llamada segunda contradicción de capitalismo por O'Connor), contradicciones culturales y de valores (entre lo privado y lo común), entre los principios de liberalismo económico y aquellos del liberalismo políticos, entre el sujeto como individuo y el sujeto como ser en la sociedad, entre lo común y lo privado como característica de los bienes materiales y simbólicos, entre las diversas formas de valorar la vida y la existencia, etc.

Entender la conflictividad moderna implica por lo tanto, atender tanto a la contradicción primaria y fundamental entre el capital y el trabajo como a todas estas series de contradicciones y antagonismos, pues es a partir de todas ellas que se construyen y emergen las diferentes series de procesos de conflicto montados sobre un soporte básico de una sociedad regida por la lucha de clases en tanto está constituida por clases antagónicas. Es entonces importante retomar aquellas consideraciones esbozadas por Althusser respecto a la contradicción y la sobredeterminación que quiebra precisamente la tradicional concepción monista comenzando a registrar una diversidad de contradicciones con orígenes diferentes, pudiendo atender así las especificidades y la diferencia, examinando las múltiples determinaciones para así dar cuenta de las particularidades en tiempo y espacio. Pero pensar la diferencia no implica adoptar el desplazamiento en boga que traslada el eje de la práctica al discurso, tal la tónica dominante en el deconstruccionismo, sino pensar la diferencia en consonancia con la unidad en términos de estructuras complejas de dominación y consenso (hegemonía) y en consonancia con los niveles de abstracción en el camino que va de lo abstracto a lo concreto. Es decir que será clave el proceso de pensar en pos de una articulación como reemplazo del esquema antinómico diferencia – unidad. Esta noción de articulación es lo que destaca Stuart Hall respecto de las ideas de Althusser en relación a la contradicción y la sobredeterminación, en tanto mérito por poder pensar a partir de aquí la unidad y la diferencia de manera dialéctica, dado que si bien es cierto lo del continuo desplazamiento que diferencia la particularidad, al mismo tiempo no podemos negar los procesos de fijación a ejes de generalidad. De aquí la noción de articulación. Pensar en estructuras complejas de dominación y pensar en articulación nos lleva también a problematizar la cuestión de la correspondencia necesaria entre

estructura y superestructura como una interpretación un tanto forzada y esclerosada. Raymond Williams ya había problematizado este forzamiento y más recientemente también el mencionado Hall lo retoma. Esto no implica, en absoluto, caer en la simpleza contemporánea que plantea que necesariamente no hay correspondencia, sino, por el contrario, y retomando la noción de articulación, se hace necesario comenzar a pensar la estructura compleja como la articulación dialéctica en donde la correspondencia no es mecánica, sino compleja y sobredeterminada.

Es entonces que la lucha de clases no se expresa todo el tiempo como tal en su faceta más explícita en donde a cada clase le corresponde necesariamente siempre una conciencia determinada ni en donde la única o casi predominante contradicción es aquella planteada entre el capital y el trabajo; sino que está permeada en forma permanente por estas múltiples contradicciones, expresándose diferencialmente una o alguna de ellas de acuerdo tanto a la constitución social de que se trate como del proceso histórico de constitución de la misma. Y es así entonces que podemos reconocer, además de las clases (con toda su complejidad que no se termina en una simple división binaria y maniquea) toda otra serie de sujetos colectivos –de diferente densidad tanto ontológica como sociológica-, entre los cuales los movimientos sociales quizás hayan emergido en las últimas décadas como los más característicos. Sujetos colectivos que interaccionan dialécticamente con y en la constitución de la sociedad de clases y con el proceso subyacente de lucha de clases. Esto implica tener que reconocer toda una serie compleja de procesos de construcción de identidad y subjetividades que caracterizan tanto a las diferentes clases y fracciones de clases como de sujetos colectivos y expresiones de la individualidad, que se montan entre y sobre los procesos políticos de dominación y construcción de hegemonía. Es importante dejar claro que los procesos de construcción de subjetividades e identidades así como los procesos ideológicos y culturales asentados en la dialéctica coerción-consenso atraviesan la multiplicidad de contradicciones y antagonismos, tanto la contradicción primaria capital-trabajo como el resto de los antagonismos. Es que el proceso de acumulación y construcción de hegemonía en tanto reproducción de las relaciones de clase en el capitalismo, implica no solo la reproducción de las relaciones de producción, explotación y plusvalía, sino toda una serie compleja de valores y construcciones ideológico-culturales que legitiman y crean consenso respecto a la división en clases de la sociedad, naturalizando la desigualdad al crear el consentimiento colectivo necesario que hace que el statu quo básico no se modifique. Es entonces que solo interpelando a la diversidad de contradicciones y entendiendo la jerarquía que puede establecerse en cada caso -dependiendo claro del nivel de abstracción-, que pueden entenderse la multiplicidad de conflictos de la sociedad moderna y la diversidad de sujetos actuantes que interaccionan, de manera más directa o más mediada, siempre con el proceso estructurante de la lucha de clases. Esto implica tanto dejar de lado las posiciones que pueden caer en un reduccionismo clasista como única explicación del conflicto, como aquellas

otras que negando la lucha de clases, decretan la muerte de las contradicciones fundantes y construyen sujetos colectivos contingentes y temporarios en tanto un caso especial de acción colectiva.

13. Reproducción ampliada y acumulación originaria para el análisis de la conflictividad

El reconocimiento actualizado de la persistencia en el presente de varios de los componentes de la acumulación originaria¹⁷⁵ nos obliga a establecer ciertos puntos centrales que nos permitan identificar y al mismo tiempo diferenciar procesos, para de esta manera poder establecer correlaciones con tipologías de conflictos, sujetos y demandas. Tanto en la reproducción ampliada (acumulación propiamente dicha) como en la llamada acumulación originaria, se produce la separación entre productores y medios de producción, pero mientras la primera implica la reproducción (continua) a escala ampliada de dicha separación, en la acumulación originaria podemos hablar de la creación *ex novo* de dicha separación (de una vez y para siempre) (De Angelis, 2012, pp: 20-24). A su vez, mientras en la reproducción ampliada esta separación se da y se mantiene “naturalmente” en base al juego conjunto consenso-coerción impuesta por las relaciones económico-políticas; en la acumulación originaria la separación es creada, principalmente, por fuerza directa extraeconómica (que se complementa y/o transforma en indirecta, por vía político-legal, en la continuidad de los mecanismos de este modo de acumulación, como veremos más adelante). Y por último, podríamos establecer también que mientras en la reproducción ampliada lo que predomina son los mecanismos de explotación (extracción de plusvalía como componente esencial) en la acumulación originaria sería el mecanismo de expropiación (vía la fuerza) el predominante. La continuidad de los mecanismos de la acumulación originaria¹⁷⁶ hace que esta conviva actualmente con los procesos de la reproducción ampliada, manifestándose una serie diversa de contradicciones y antagonismos además del neurálgico capital-trabajo, de tal manera que es posible identificar correlaciones con la conflictividad social, que vayan bastante más allá de una simple tipología de sujetos (nuevos o viejos movimientos sociales, por ejemplo) complejizándose también los procesos de construcción de hegemonía. Esta continuidad hace que en el presente, la aparición de procesos y componentes de la acumulación originaria respondan a una estrategia del capital con la intención de avanzar sobre aquellas áreas de las relaciones sociales todavía no del todo incorporadas al mercado en lugar de su papel “primitivo” en la fundación del capitalismo. Así, los mecanismos de la acumulación originaria representan en el presente no ya aquello

¹⁷⁵ Ver Revista Theomai nº 25 y 26: <http://revista-theomai.unq.edu.ar>

¹⁷⁶ Michael Perelman (2012) sostiene la idea de que el carácter continuo de la acumulación primitiva ya está presente en Marx a pesar que por razones políticas más que teóricas enfatizó siempre sobre la “silenciosa compulsión del mercado”

que ocurre antes de la emergencia del modo de producción capitalista, sino más bien la base y la precondition para que la reproducción ampliada (o acumulación propiamente dicha) pueda llevarse a cabo con mayor amplitud. De Angelis apela al concepto de “doble movimiento” de Karl Polanyi, en el sentido de resistencia por parte de las instituciones sociales de protección ante el continuo embate del mercado por avasallar aquello todavía no mercantilizado. De esta manera, el proceso de cercamiento propio de la acumulación originaria puede fácilmente ser identificado en todas las políticas neoliberales (tanto en la periferia como en los países centrales) que se llevaron por delante las áreas de protección en términos de derechos comunes creadas tanto por el Estado de Bienestar europeo como por los programas populares-reformistas de la periferia (Riker, 1990; Federici, 1990; Levidow, 1990; Harvey, 2004)

14. La “aparición” de los “nuevos movimiento sociales”

Los “años ´60” (que como aquí los entendemos empiezan en los ´50 para extenderse hasta los ´70) representaron para el mundo entero una década de rebeliones, protestas y revoluciones en más de un sentido, no solo político y económico sino también y sobre todo cultural-ideológico, subjetivo y simbólico¹⁷⁷. Si como dice Marshall Berman (1998) que en la modernidad “todo lo sólido se desvanece en el aire”¹⁷⁸, en esos años la modernidad parece potenciarse y entonces todo se desvanecía más rápido. Si las revueltas en Europa eran comunes desde hacía ya varios siglos (al ser la cuna de todas las revoluciones modernas, sean capitalistas o socialistas), en esa década tuvieron una impronta particular representando un cierto y relativo punto de inflexión respecto a las anteriores décadas de vanguardia obrera y socialista, cuestionando ya no sólo al capitalismo sino también a todo el estilo productivista-consumista de vida que encorsetaba la libre manifestación de la subjetividad y la condición humana en toda su complejidad. Fueron también los más “tradicionales” EE.UU. (con una mayoritaria clase obrera que desde hacía tiempo estaba integrada al sistema y carente de todo objetivo revolucionario) quienes de alguna manera dieron la nota con procesos de movilización y conflictos de diversa índole, desde las llamadas protestas por los derechos civiles de los negros, hasta la resistencia frente a la invasión norteamericana sobre el territorio vietnamita. Junto a éstas tuvimos también las importantes y masivas revueltas

¹⁷⁷ Vale la pena recordar, dado cierto olvido presente en estos años, que *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*, de Louis Althusser (1969) y *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, de Nicos Poulantzas (1968) representaron, por ejemplo, dos obras fundamentales relativas a los análisis críticos sobre los mecanismos de dominación en el plano simbólico-ideológico y político.

¹⁷⁸ Frase resumida que remite a la cita textual del Manifiesto Comunista, tal como sigue: "Todas las relaciones fijas y herrumbradas, con su séquito de representaciones y opiniones ancestralmente veneradas, son disueltas; todas las relaciones recientemente formadas envejecen antes de poder osificarse. *Todo lo establecido y estable se evapora*, todo lo santo es profanado, y los hombres se ven, por fin, obligados a contemplar con una mirada sobria su opinión en la vida, sus relaciones recíprocas."

estudiantiles en las universidades, el hipismo y los beatniks denunciando el materialismo consumista moderno justamente en su lugar de máxima expresión, y hasta la llamada nueva izquierda o liberalismo radicalizado, que se animaba por primera vez a avanzar sobre los tradicionales tópicos políticos del bipartidismo histórico.

América Latina, que al igual que Europa mantenía una larga tradición de conflictividad social y política, renueva su potencialidad de “desvanecimiento de lo sólido” haciéndose eco, por un lado, de la dinámica de conflictos de los países centrales y su discusión entre capitalismo y las diversas corrientes de interpretación del marxismo, tomando incluso la veta rebelde anti productivista-consumista, y su propuesta de nuevas subjetividades; para al mismo tiempo proponer toda una serie de revueltas propias, asentadas en su particularidad histórica en tanto complejo entramado de acumulación agrario-industrial, con sus sujetos sociales y culturas asociadas. Se ponían cada vez más en jaque no sólo la dominación interna, sino la relación de dominación imperial histórica a la que se veía sometida. La Revolución Cubana y toda la compleja dinámica guerrillera de la época junto a las movilizaciones estudiantiles, campesinas, obreras y toda una propuesta de renovación en el arte, son solo ejemplos más que evidentes de estos procesos dialécticos.

Focalizando por el momento en los países centrales, todo este conjunto de revueltas de los años '60 darán origen a lo que hoy mayoritariamente se denominan como “nuevos movimientos sociales” (NMS). Estas interpretaciones se asentaron sobre cambios en los modos de acumulación que reconfiguraron no solo los procesos productivos sino también las relaciones sociales y los imaginarios culturales y colectivos; cambios sin los cuales no es posible entender la renovación de los conflictos y de las identidades participantes. Con la aparición de lo que se ha dado en llamar el Capitalismo Monopolista de Estado en su fase Keynesiana, este se erige en agente económico de vital importancia, propiciando una relativa “desmercantilización” de lo social a partir de la irrupción y consolidación del Estado de Bienestar. Se produce paulatinamente una mayor diferenciación de la clase trabajadora como consecuencia del incremento de la división social del trabajo. Una parte mayor de las inversiones y ganancias se ubican en servicios: educación, sanidad, atención social, etc., generando el desarrollo de profesiones en la esfera de lo social-estatal. Crece a su vez la redistribución de plusvalía que realiza el Estado y se observa una clase media en expansión que conquista cuotas crecientes de autonomía social, acceso a conocimientos especializados y a ciertos resortes de decisión dentro de las sociedades keynesianas. Se ensancha la conciencia de clase media entre la fuerza de trabajo, y se produce una paulatina fragmentación de la clase obrera, así como una pérdida de la conciencia de tal por parte de amplios sectores de la población (es la clase media subjetiva universal).

Se puede observar entonces una correlación entre la aparición de los llamados “nuevos movimientos sociales” y la estabilización de la fase Keynesiana del llamado capitalismo

monopolista de Estado, consolidándose durante la etapa siguiente del llamado capitalismo monopolista transnacional. Para esto fue clave el pacto capital-trabajo en el que ingresaron las tradicionales organizaciones sindicales de los países centrales una vez que el primer mundo reorienta su economía redistribuyendo parcialmente ganancias, que pudieran en parte contrarrestar las propuestas de superación de la tradición obrero-clasista, refortalecidas a partir de las diversas revoluciones socialistas y el crecimiento del marxismo en el mundo. En este contexto, además de las demandas de des-burocratización de la izquierda, de las reivindicaciones clasistas y autónomas de la clase obrera y la movilización radicalizada de los estudiantes -que darán origen por ejemplo al Mayo Francés y al Otoño Caliente Italiano (Tronti, 1966; Negri, 1972)- crecen y se fortalecen una gran diversidad de organizaciones y movimientos ecologistas y ambientalistas (que habían sentado sus bases décadas atrás, cfr. Galafassi, 2006), junto a una revitalización del feminismo, motorizando a su vez la Guerra Fría el surgimiento de movimientos pacifistas. Todos se encontraban fuertemente interrelacionados e imbuidos de una crítica a la concepción sesgadamente material de la existencia, aunque sobre una base esencialmente no clasista. Las principales aportaciones de estos llamados nuevos movimientos sociales estarán focalizadas en la órbita de la politización de la vida cotidiana para intentar dar respuesta a la colonización del mundo de la vida en tanto dinámica de extensión mercantilista a todos los aspectos de la existencia. Esto implicará denunciar y desafiar el pacto de clase Capital-Trabajo que olvidó las denuncias de explotación o desigualdad en, tanto las relaciones de género o división sexual del trabajo, como en la instrumentalización mercantilista del hábitat humano y de la naturaleza en su conjunto, o la división internacional del trabajo y el militarismo; así como en la férrea moralidad sexual, de relaciones afectivas y de control sobre el cuerpo. La reconstrucción y resignificación de los valores culturales y de la propia subjetividad implicó también focalizar fundamentalmente en las relaciones de dominación y reproducción ideológica, promoviendo la construcción de un concepto extendido de ciudadanía con nuevos derechos sociales incluyendo la incorporación de los ecológicos; defendiendo las identidades elegidas contra la estandarización y alienación; y promoviendo la desmercantilización de ciertos consumos esenciales de tal manera de frenar la invasión de la esfera privada por las relaciones sociales de producción capitalista (Piqueras, 2002). Esta rica serie de movilizaciones de los años '60 y '70 expresó un renovado intento de resistencia y protesta frente a la sociedad disciplinaria -presente tanto desde el primer al tercer mundo- que incubó en parte las tragedias del siglo XX.

A la luz de toda esta serie de protestas de los años '60 en el primer mundo es que se reconfigura la conceptualización sobre el conflicto emergiendo definitivamente la categoría movimiento social como pilar del individualismo metodológico. "Movimiento social" pasa a ser la categoría de agregación colectiva necesaria de la concepción individualista de sociedad, categoría indispensable para poder analizar el conflicto social desde un marco teórico que no cuenta con la noción de clase como eje del

análisis. El comportamiento desviado y el desajuste funcional son dejados de lado definitivamente y los movimientos sociales son vistos como actores “racionales” que definen objetivos concretos y estrategias racionalmente calculadas. Surge así el enfoque de la “elección racional” (*rational choice*) de raíz fuertemente individualista. Lo que explicaría la acción colectiva sería el interés individual por conseguir beneficios privados, motivando esto la participación política en grandes grupos. Mancur Olson (1965), el principal mentor de esta corriente, elaboró un modelo de interpretación en donde los individuos participan en acciones colectivas siempre que exista una racionalidad básica basada en el hecho que los “costos” de su acción tienen que ser siempre menores que los “beneficios”, y es este cálculo de costos y beneficios lo que le da el carácter de racional al comportamiento. Aparece en este contexto el “problema del gorrón” (*free-rider*) por el cual cualquier sujeto que incluso coincida y racionalmente vea que sus intereses son los del colectivo, puede tranquilamente no participar, pues obtendría igualmente los beneficios gracias a la participación de los demás.

En este marco, surge la teoría de la “movilización de recursos” (*resource mobilization*), que es, por mucho, aquella que ha cosechado la mayor parte de los adeptos y aquella que se mantiene vigente hasta la actualidad. La diversidad de matices es muy grande pero podemos mencionar a modo de ejemplo los siguientes autores afines a esta línea: McAdam (1982), McCarthy (1977), Tarrow (1997), Tilly (1978, 1990), Craig Jenkins (1994), etc. Aquí, la preocupación parte del individuo y llega a la “organización”. Se pregunta cómo los individuos reunidos en organizaciones sociales gestionan los recursos de que disponen (recursos humanos, de conocimiento, económicos, etc.) para alcanzar los objetivos propuestos. Ya no interesa tanto descubrir si existe o no insatisfacción individual por cuanto se da por sentado su existencia, por lo tanto, lo importante para este cuerpo teórico es analizar cómo los movimientos sociales se dan una organización capaz de movilizar y aunar esta insatisfacción individual. Esta pregunta es necesaria por cuanto la unidad de análisis sigue siendo el individuo y al ser el movimiento social una entidad colectiva, que se gesta por sobre la unidad social básica, se vuelve indispensable explicar su conformación y persistencia a través de la organización. El énfasis en la gestión y lo organizacional los lleva a definir un concepto clave, que es la figura del “empresario movimientista”, como aquel sujeto individual o grupal que toma la iniciativa, precisamente para la organización del movimiento. Los movimientos sociales surgen como resultado de la acción colectiva en un contexto que admite la existencia de conflictos y estos, por sí solos, ya no son vistos como anormalidades del sistema. Una sociedad moderna y capitalista está atravesada por conflictos, que por sí solos no desestabilizan al sistema. Sigue siendo fundamental el concepto de acción colectiva y ya no se establecen diferencias entre una acción colectiva institucional (normal) y otra no institucional (patológica). Esta acción colectiva involucra la búsqueda racional del propio interés por parte de grupos, es decir que estamos ante una socialización del principio de “elección racional”. No se abandona este supuesto sino que se lo somete a la acción de grupos, en lugar de relacionarlo

únicamente con una acción individual. El agravio es considerado un motor fundamental de la acción colectiva, entendiendo por tal, a toda manifestación del sistema que perjudique a individuos o grupos. Pero como los agravios y sus reacciones son resultados permanentes de las relaciones de poder y por tanto no pueden explicar por sí solos la formación de movimientos. Ésta depende, más bien, de cambios en los recursos con que cuentan los grupos, de la organización y de las oportunidades para la acción colectiva. Es decir que dado un agravio, se generará un movimiento social en tanto los individuos y los grupos cuenten con los recursos organizacionales necesarios para la formación del mismo. La movilización puede involucrar entonces organizaciones formales burocráticas de gran escala y con propósitos definidos.

Una categoría clave que se suma a las anteriores es la de “nuevos movimientos sociales” (Galafassi, 2012). La preocupación fundamental radica en diferenciar los movimientos sociales post '68 de los anteriores y es así que surge la teorización sobre estos “nuevos movimientos”. Alain Touraine (1978, 1991), Clauss Offe (1985, 1996) y Alberto Melucci (1984, 1994) son tres de sus representantes más conspicuos. Este énfasis en la figura de “nuevo movimiento” lo relacionan con transformaciones fundamentales de las sociedades industriales, siendo sus casos de estudio los movimientos pacifistas, ecologistas, feministas, etc., que emergen con relativa fuerza en la Europa de los años '60 y '70. Mientras los “viejos” movimientos sociales eran organizaciones institucionalizadas centradas casi exclusivamente en los movimientos de la clase obrera, los nuevos movimientos, por oposición, poseen organizaciones más laxas y permeables. Esto lo relacionan estrechamente con la diferenciación entre un viejo y un nuevo paradigma político. Los contenidos del viejo paradigma se relacionan con el crecimiento económico y la distribución, la seguridad militar y social y el control social; y en el nuevo, con el mantenimiento de la paz, el entorno, los derechos humanos y las formas no alienadas de trabajo. Los valores se orientan hacia la libertad y la seguridad en el consumo privado y el progreso material dentro del viejo paradigma; y hacia la autonomía personal e identidad en oposición al control centralizado, para el nuevo paradigma. Por último, en los modos de actuar, para el viejo paradigma se daba una organización interna formalizada con asociaciones representativas a gran escala y una intermediación pluralista en lo externo, unida a un corporativismo de intereses basado en la regla de la mayoría junto a la competencia entre partidos políticos. En cambio, en lo interno el nuevo paradigma se basa en la informalidad, la espontaneidad, el bajo grado de diferenciación horizontal y vertical, y en lo externo, se caracteriza por una política de protesta basada en exigencias formuladas en términos predominantemente negativos.

A estos autores también se los llama “teóricos de la identidad” pues esta categoría es clave en sus análisis. Así, mientras para la movilización de recursos lo fundamental para definir un movimiento social es la forma de la organización, para estos enfoques europeos, la cuestión de la identidad, que se construiría a partir del agregado de individuos en organizaciones sociales, constituye el foco a

dilucidar, siendo aquella equivalente a la organización, en cuanto son los conceptos clave por los cuales se explica un movimiento social. Un movimiento social implica para esta corriente un proceso de interacción entre individuos con el objetivo fundamental de encontrar un perfil identitario que les permita ubicarse en el juego de la diversidad social. El movimiento social consumaría su razón de ser a partir de la asunción de una identidad. Esta corriente dice responder así al “reduccionismo político” de las interpretaciones clasistas dominantes hasta los años ‘70.

15. La diferente y diversa realidad latinoamericana y la consecuente reconceptualización de la conflictividad social

“Nuevos movimientos sociales”, “movilización de recursos” y “acción colectiva” son todas maneras concurrentes de referirse a los procesos de conflicto, que como se dijo más arriba, eligen una mirada más fenoménica y con poco interés en la problemática de las clases y los procesos de acumulación. Pero también el conflicto puede leerse desde una perspectiva más dialéctica, analizando los actos fenoménicos en sus relaciones socio-históricas en donde las “novedades rupturistas” podrían más bien entenderse como procesos de cambio y de renovación en tanto características intrínsecas a la modernidad capitalista. De esta manera resultará más que útil considerar el origen del término “nuevos movimientos sociales” en las revueltas de los años ‘60 en los países centrales que apelaban al desvelamiento de los otros antagonismos no exclusivamente centrados en la contradicción capital/trabajo, pero sin que esto implique adherir ciegamente a todo el corpus teórico del individualismo metodológico que dio origen al concepto. Es que la aparición de nuevas o renovadas formas de conflictividad se asentó sobre cambios en los modos de acumulación que reconfiguraron no solo los procesos productivos sino también las relaciones sociales y los imaginarios culturales y colectivos y en los argumentos para construir hegemonía y contra-hegemonías; cambios sin los cuales no es posible entender la renovación de los conflictos y de las identidades participantes. Es decir que vemos la yuxtaposición de antagonismos, la renovación de las formas de protesta, de organización y de subjetivación, la diversificación de los conflictos y la expresión compleja y múltiple de un proceso estructural de lucha de clases, que no deja de existir a pesar del “relajamiento” de las reivindicaciones de la clase obrera como tal.

Al mismo tiempo, la realidad latinoamericana y de toda la periferia nos muestra sin tapujos una confrontación abierta entre sectores y bloques sociales ligados más directamente al mundo productivo en donde la vieja contradicción capital-trabajo (reproducción ampliada) se conjuga más abiertamente con la contradicción capital-condiciones de producción (acumulación originaria), tornando todavía más insuficiente aquel análisis a partir de categorías básicas y predominantemente

subjetivistas y organizacionales. Pero al mismo tiempo, sería una equivocación desaprovechar los llamados de atención que conllevan, no sólo los cambios en los procesos socio-históricos de conflicto sino también la insistencia de las perspectivas del actor que provocan abiertamente a las miradas cerradamente estructuralistas y economicistas. Éstas nos deben invitar, por lo tanto, a reflexionar también sobre y a partir de la interacción dialéctica sujeto/proceso social - subjetividad/historia – cultura/economía y política/acumulación.

América Latina es rica y obvia al mostrar profundamente todas estas interacciones socio-históricas, socio-estructurales, simbólicas y culturales, tanto en su diversidad exterior, así como en sus relativas determinaciones en común. Los mecanismos de la acumulación originaria interactúan en un juego permanente pero renovado con las definiciones de la reproducción ampliada dominante, conformando así una complejidad histórica y espacial de los procesos de conflicto que no puede ser ignorada, ni tampoco reificada en tanto ausencia de nodos tendencialmente dominantes.

Pero vale destacar que toda la diversa serie de procesos de conflictividad social en América Latina de la última década ha generado una muy numerosa literatura que intenta precisamente explicarlos principalmente en base a los esquemas teóricos del mundo desarrollado centrados en lo fenoménico y lo organizacional. Estos conflictos nos sirven gráficamente para problematizar las distintas categorías de interpretación, tanto del individualismo metodológico como de las perspectivas dialécticas vistas más atrás. Para el caso de Argentina, quizás lo más destacado hayan sido los numerosos cortes de ruta de fines de los '90 y principios de los '2000 que sirvieron como acicate fundamental para volver a poner el conflicto social en un lugar destacado del análisis sociológico (Galafassi, 2012). Primero en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén) y luego en Gral. Mosconi (Salta) se producen fuertes puebladas que tienen básicamente como protagonistas a ex – trabajadores, para extenderse luego al resto del país. La abundante producción académica de la época los define rápidamente como los primeros representantes de los llamados “nuevos movimientos sociales” en el país marcando así un corte fundamental con todo proceso de conflicto previo¹⁷⁹. Pero remarquemos que se trata de conflictos protagonizados fundamentalmente por ex trabajadores que en el momento se encontraban en una situación de desocupación al ser en su mayoría despedidos en el marco de la racionalización económica y que los procesos de construcción de hegemonía de la época los catalogaba como “sobrantes” a partir de las interpretaciones diversas de la intelectualidad y prensa orgánicas. Pero si nos remitimos entonces a un análisis basado en la correlación conflicto-acumulación, podemos vislumbrar la riqueza analítica encerrada en estos procesos de conflicto. Es que los sujetos parten de la condición de trabajador industrial ocupado, posición clásica de la reproducción ampliada; para pasar a ser trabajadores desocupados a través de un proceso de “cercamiento” de los “bienes sociales comunes” (que remite a los componentes de la

¹⁷⁹ Cfr. Svampa, 2003; Auyero, 2004; Giarraca, 2001; Schuster, 2005.

acumulación originaria que persistirían) vía las políticas de privatización y financiarización de la economía¹⁸⁰.

Los bienes comunes sociales a lo que hace referencia De Angelis aparecen en escena en el marco de los conflictos y antagonismos característicos de la reproducción ampliada. Serán estos bienes comunes sociales conquistados los que son “expropiados” vía mecanismos de la acumulación originaria (“nuevos” cercamientos), al entrar en vigor el modo de acumulación neoliberal. Se produce de nuevo una separación, ya no quizás entre el trabajador y sus medios de producción originales, sino entre el trabajador y sus condiciones de vida mejoradas gracias a la conquista de los bienes comunes sociales.

Para los casos de los conflictos de General Mosconi y Cutral-Co mencionados más arriba, la empresa petrolera YPF, de propiedad estatal, constituía el eje del desarrollo, ya que además de ser una fuente de trabajo regional, asumía toda una matriz de desarrollo local ligada a la intervención del Estado, ya sea, vía la misma empresa, o a través de organismos y procesos vinculados a otras áreas complementarias, motorizando y sosteniendo a su vez una red de mercado capitalista regional creando así “polos de desarrollo” en donde la desocupación era marginal y creando al mismo tiempo un entramado de cultura comunal local y de subjetividades que dependían fuertemente de la presencia de la empresa estatal, construyendo la identidad del “ypefiano”, bases de sustentación al mismo tiempo de los procesos de hegemonía política locales. Al privatizarse YPF, se desmorona todo este entramado de contención, al imponerse un “nuevo cercamiento” sobre las condiciones de existencia en base a “bienes sociales comunes” (que promovía la YPF estatal) ganando la desocupación la primera plana, al expulsar trabajadores dejándolos sin trabajo, y al hacer desaparecer el mecanismo de promoción de políticas de bienestar y sostenimiento regional. Una serie sucesiva de grandes procesos de conflicto fue la consecuencia (puebladas de 1996 y 1997 en Cutral-Có / Plaza Huinul, Neuquén y 1997-2001 en Tartagal / Gral. Mosconi, Salta), en donde los trabajadores (ayer ocupados, hoy desocupados) y todo su entorno familiar y comunitario se rebelaron ante esta situación demandando trabajo y la recuperación de los bienes sociales comunes perdidos. Al trastocarse las identidades previas, se reconstruyen estas y se va logrando una organización de lucha, solidaridad y nuevas formas de auto-sustentación que tendrán diferentes

180

Respecto al carácter continuo de los procesos de cercamiento y a los bienes comunes sociales, vale remitirse por un instante a un trabajo de Massimo De Angelis (2012: 33), “...*enfaticar sus características comunes nos permite interpretar lo nuevo sin olvidarnos de las duras lecciones de lo viejo. [...] el actual proyecto neoliberal, que de diversas maneras se propone avanzar sobre los bienes comunes sociales creados en el período de posguerra, se establece a sí mismo como una moderna forma de cercamiento, que algunos denominan como “nuevos cercamientos”. Así, la comprensión del carácter continuo de los cercamientos ilumina dos cuestiones cruciales. Primero, el hecho de que existe un sustrato común entre las diferentes formas fenoménicas que adoptan las políticas neoliberales y que, por lo tanto, las poblaciones del Norte, Este y Sur están enfrentando estrategias de separación de sus medios de existencia, posiblemente diferentes en apariencia, pero sustancialmente similares en sus lógicas profundas. Segundo, esto nos permite identificar la cuestión esencial que cualquier debate sobre las alternativas en el marco del creciente movimiento global anti-capitalista debe plantearse: el problema del acceso directo a los medios de existencia, producción y comunicación; el problema de los bienes comunes*”.

historias de acuerdo a variables diversas de las regiones en cuestión. Las nuevas relaciones hegemónicas generaron excluidos que pasaron a luchar por ser incluidos nuevamente, o en algunos casos por cambiar las relaciones de dominación.

Recordemos que se caracteriza al proceso de la acumulación originaria como la separación del trabajador de sus medios de producción. En el propio contexto de la reproducción ampliada, con una parte importante de la clase trabajadora regional en condición de desocupación, se observa un proceso de reedición de esta separación, a través del despojo de sus medios de ingreso (salario). El resultado es el mismo: dejar al trabajador a merced de las ofrendas del sistema, trabajo asalariado en los inicios de la industrialización o subsidios para desocupados en el contexto de la privatización. Del despojo de sus medios de producción al despojo de sus medios de ingreso, así es como pueden entenderse los procesos de cercamiento de los bienes sociales comunes. Los movimientos de trabajadores desocupados y los de fábricas recuperadas interpretaban al trabajo como un “bien social común”, como un derecho, como la condición básica para constituirse en asalariado, para constituirse como clase (más allá que muchas veces la subjetividad e identidad no acompañe necesariamente con su condición social de base, proceso en el cual intervienen, entre otros, los diversos dispositivos culturales y políticos generados a partir de la construcción ramificada y compleja de hegemonía por parte de las fracciones de clase dominantes y sus aliadas). A pesar de ser el trabajo asalariado sinónimo de creación y transferencia de valor, es el único medio de subsistencia para los trabajadores en las sociedades capitalistas y de ahí que su ausencia vía el despojo originaba el reclamo por recuperar un bien común, un derecho perdido vía la política de la privatización.

En síntesis, podemos ver cómo desde procesos enrolados en la reproducción ampliada al introducirse condiciones y situaciones de “despojo por la fuerza” (característicos de la llamada acumulación originaria) se termina en conflictos en donde los sujetos siguen siendo aquellos característicos de los procesos de la reproducción ampliada. Muchas situaciones nuevas se suceden, pero sin embargo no podemos hablar cabalmente de nuevos sujetos o nuevos movimientos, sino del cambio de condición de un mismo sujeto, el obrero, en la medida que van cambiando los parámetros y procesos de las formas en que se desenvuelve el modo de acumulación en su evolución. Sobre estas premisas básicas del análisis, se podrán considerar toda una serie de procesos de subjetivación, organización del movimiento y construcción y reconstrucción de identidades en tanto sucedáneos de los procesos de conflicto dialécticamente relacionados a los cambios en el modo de acumulación.

Por su parte, las movilizaciones de campesinos y de pueblos originarios que se vienen gestando a lo largo de toda América Latina desde el mismo momento de la conquista, así como los más recientes movimientos para oponerse a los proyectos mega-extractivos, intentaron e intentan poner un freno

al “saqueo” del territorio (cfr. Revista Theomai n° 25 y 26) que afecta de modo directo la continuidad de la vida de cientos o miles de comunidades. Se posicionan tomando a la naturaleza y al territorio como un bien común, adoptando de esta manera el papel histórico más tradicional en la argumentación sobre los fenómenos de despojo por la fuerza, vinculado a los procesos de la clásica acumulación originaria. Territorio y naturaleza en tanto bienes comunes remiten directamente a los postulados de Marx y Luxemburgo, pero también al tratamiento que hiciera el ecologismo crítico de los años ´60 sobre el tema, o con los planteos –claramente más liberales- referidos a la tragedia de los comunes también por los mismos años (Hardin, 1968) o los planteos actuales que recuperan la discusión sobre la pervivencia de los mecanismos ligados a la acumulación originaria¹⁸¹.

Bienes comunes naturales y sociales, materiales y simbólicos, comparten posiciones y condiciones en la historia de la civilización y así también lo hacen desde la conceptualización teórica todas aquellas organizaciones y movimientos que se inscriben en esta tipología de conflictividades, al ser la atomización mercantilista de lo humano aquello que está en juego. Tanto los pueblos originarios y campesinos que parten de su organización más comunitaria y su uso común de la tierra y los recursos¹⁸², como el movimiento Neozapatista, el Movimiento sin Tierra, las tesis del Buen Vivir, las asambleas que se oponen al saqueo ambiental del presente, junto a la histórica organización comunitaria y cooperativa de la clase obrera en tanto “clase para sí”, o las más recientes prácticas organizativas y productivas de movimientos de desocupados, asambleas ciudadanas u organizaciones de fábricas recuperadas, comparten varias premisas que rescatan la idea de bien común; premisa esta que es obturada, vía los cercamientos y la privatización (ya sea temprana o tardía) tanto por los mecanismos de la acumulación originaria como por los mecanismos de la reproducción ampliada¹⁸³.

Los así llamados “nuevos movimientos sociales”, a la vez que han descentrado las demandas desde la contradicción básica capital-trabajo hacia otras contradicciones y antagonismos, han puesto sobre el tapete muchos mecanismos de alienación cultural y también la problemática de los bienes comunes más allá de la cuestión de clase (Galafassi, 2012). Con la consolidación, en los países

¹⁸¹ Ver Revista Theomai 25 y 26 dedicadas íntegramente a tratar esta problemática. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2025/Index.htm> (Modos de acumulación, recursos naturales y dominio colonial en América Latina); <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Index.htm> (Trazos de sangre y fuego.: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra época?

¹⁸² Problemática que Mariategui en sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* lo dejó claramente planteado hace ya muchas décadas.

¹⁸³ “Las tierras y pasturas comunales mantenían vivo en la comunidad un vigoroso espíritu cooperativo; los cercamientos lo hambreadon. Históricamente, los campesinos tenían que trabajar juntos amigablemente, para acordar la rotación de cultivos, la utilización de pasturas comunes, el mantenimiento y la mejora de sus pastos y prados, la limpieza de las zanjas, el cercado de las tierras. Trabajaban intensamente codo a codo, y caminaban juntos del campo al pueblo, de la granja al brezal, en la mañana, la tarde y la noche. Todos dependían de los recursos comunes para obtener su combustible, su ropa de cama, y forraje para su ganado, y poniendo en común muchas de las necesidades de subsistencia, eran disciplinados desde la primera juventud para someterse a las reglas y costumbres de la comunidad. Luego de los cercamientos, cuando cada hombre pudo apropiarse de una porción de la tierra y expulsar a sus vecinos, se perdió la disciplina de compartir las cosas con los vecinos, y cada hogar se convirtió en una isla en sí misma” (Thirsk, 1967)

centrales, del pacto keynesiano entre capital-trabajo se desplegaron toda una serie de luchas fragmentadas, que continúan hasta nuestros días, en pos de reivindicaciones contra la alienación más allá del estricto campo material de la explotación salarial (alienación cultural, simbólica, ideológica, cotidiana, ambiental, etc)¹⁸⁴; luchas en el marco de la reproducción ampliada pero que excedían y exceden aquellas perspectivas estrechas de la contradicción capital-trabajo que veían y ven a la clase obrera como el único sujeto válido en los procesos antagónicos de las sociedades modernas. Se viene dando una lucha por la “desmercantilización” de ciertos consumos y esferas de la vida, intentando reconstruir un espacio de bienes comunes por fuera de los mecanismos del mercado, quitándolos, separándolos de la reproducción ampliada, aunque, como se dijo, en muchos casos los propios involucrados en el conflicto no lo argumenten en este marco de totalidad sino primordialmente en términos de una lucha focalizada y puntual. Una construcción contra-hegemónica y reconstitutiva de una subjetividad e identidad diferente, aunque muchas veces solapada y no explícita, está presente en este proceso. En contra de las premisas del neoliberalismo que representa la inteligente y eficaz estrategia para volver a reconstruir cercamientos -vía las privatizaciones y la liberalización del mercado- a los bienes sociales comunes que se habían “recuperado” con el estado benefactor, fragmentando aún más los procesos de lucha al exacerbar la perspectiva individualista y competitiva de la vida. Se hace necesario entonces un ejercicio teórico de re-unificación, tanto de las miradas fragmentadoras como de las fragmentadas protestas y luchas, retomando los horizontes integradores de las diversas teorías críticas no dogmáticas, articulando dialécticamente conflicto, con acumulación y construcción de hegemonía. Si los movimientos pacifistas, ecologistas, estudiantiles de los países centrales en los años ´60 denunciaban, por un lado, el carácter alienante de la sociedad de consumo que excedía el marco de explotación del puesto de trabajo, los movimientos de liberación nacional y social del Tercer Mundo mostraban, por otro -aunque muchas veces de maneras trucas-, que la lucha de clases no se restringía exclusivamente al obrero industrial y tomaban la bandera de una mayor amplitud que incluía necesariamente horizontes políticos, geopolíticos y de desarrollo regional como reivindicación principal con el objetivo de reconstituir lazos comunitarios igualitarios (objetivo que no muchas veces llegó al éxito). Los movimientos antiglobalización de los años ´90 sitúan más explícitamente la problemática de los bienes comunes, y las infinitas protestas de campesinos y pueblos originarios en América Latina y otros puntos del subdesarrollo vuelven a situar la cuestión de la tierra y el territorio como un aspecto insoslayable de los procesos de acumulación. La democracia deliberativa de los muy diversos movimientos assemblearios a lo largo del mundo ha vuelto a reaparecer -aunque en forma fragmentaria y con vaivenes- en tanto un bien común organizativo básico de todo movimiento antisistema, como reacción primaria a la burocratización y dogmatización de la

¹⁸⁴ O lo que Gramsci (1992) llamaba “conflictos superiores al mundo material inmediato”.

izquierda y los sindicatos. Al incrementarse exponencialmente la mercantilización de la vida con el neoliberalismo, el rescate del concepto de bien común posibilita rever el proceso original y característico de todos los modos de acumulación bajo el reinado del capital, que implican necesariamente la separación del trabajador de sus medios de existencia. Pero esta separación hay que entenderla en toda su complejidad, por cuanto no se limita exclusivamente al proceso de intervención manual sobre el objeto de trabajo en el puesto laboral, sino que abarca a las diversas dimensiones complejas que estructuran la vida de los hombres dentro del modo de acumulación capitalista. Al ser la separación la marca de origen, luego se manifiesta en cada uno de los aspectos cotidianos que van siendo paulatinamente cercados y privatizados para poder así el capital administrarlos. Estado y capital administran estratégicamente este proceso. Así, ante el avance del comunismo soviético en el primer mundo -o su expresión vernácula en el tercer mundo-, la respuesta fue el Estado de Bienestar o el reformismo populista (quienes se encargaron de recrear espacios comunes vía el pleno empleo y el consumo amplio, por ejemplo) que dejaba fuera, temporalmente, ciertos procesos de cercamiento. Pero luego y rápidamente se desandan estos pasos una vez la instalación de las últimas dictaduras en América Latina o la caída del muro de Berlín en Europa, y el individualismo creciente se impone con las recetas de cercamientos neoliberales. Cercamiento y despojo se suceden entonces a lo largo de la historia del capital, manteniendo vivos ciertos mecanismos de la acumulación originaria que se interpenetran con la contradicción básica de la reproducción ampliada constituida por la relación capital-trabajo.

Consideraciones finales

Los conflictos y las luchas deben entenderse entonces en el marco de este juego siempre dialéctico, que puede asumir características arquetípicas de la reproducción ampliada (conflictos del mundo del trabajo, clase obrera, salarios, desocupación, etc.) o de la persistencia de los mecanismos y componentes de la acumulación originaria (privatización de bienes comunes); o de las diversas combinaciones complejas entre ambos. Pero los conflictos son a su vez contruidos socialmente en términos de su significación y de su legitimación identitaria y simbólica, así como las estrategias de protesta, de lucha y de deconstrucción de las hegemonías establecidas en términos del cuestionamiento a los intereses particulares devenidos en ficticios intereses generales.

Esto hace que históricamente varíe la conformación tanto de las formas y características en que se dan los modos de protesta y lucha, como las razones más específicas que motivan los conflictos. Es muy distinta la conflictividad social en un contexto político-ideológico-cultural que potencia la construcción colectiva de herramientas de cambio que cuando lo que prima es la máxima hobbesiana de la supervivencia individual; los antagonismos que afloran no tienen por qué ser siempre los mismos, más allá de la permanencia de la contradicción fundamental. Existe

ciertamente una legitimación hacia aquello que puede ser o no objeto de protesta, aunque obviamente esta legitimación se construye históricamente a partir de la interacción entre el entramado complejo de las relaciones de producción y los procesos de subjetivación y construcción de sentidos, que en una sociedad de clases estarán siempre mediados por los procesos de dominación y hegemonía (Galafassi, 2011). Así, cualquiera sea el caso particular, la norma general será el conflicto en el marco de la pervivencia de la lucha de clases, entendida esta en términos claramente dialécticos, dinámicos y complejos, en donde la clase también se construye a sí misma, lucha que a su vez se manifiesta de múltiples maneras. Porque la división de la sociedad en clases, los procesos varios de antagonismo, hegemonía y la lucha entre clases permean toda la dialéctica social, todo agregado y proceso social. Pero esto de ninguna manera implica que cada situación presente en la sociedad pueda explicarse directa y simplemente como lucha de clases a *prima facie* y de manera mecánica a través de la contradicción capital/trabajo. Por el contrario, junto a la lucha de clases (centrada en la contradicción capital/trabajo) y en la lucha de clases en sí misma se manifiestan toda otra serie de antagonismos (étnicos, de género, de status, culturales, por lo común y lo privado, etc.) que se interpenetran con la contradicción fundamental (jugando incluso en ocasiones en sentidos contrarios), pudiendo ser valioso volver a discutir la dinámica dialéctica entre contradicción y sobredeterminación. Es decir que las contradicciones estructurales (básicamente capital-trabajo) están sobredeterminadas por otras instancias que a su vez tienen autonomía relativa respecto a las primeras. Así, contradicción pasa a ser una totalidad compleja en donde lo estructural es precisado permanentemente por antinomias de origen cultural, ideológico, político, socio-ambiental, etc. De esta manera los conflictos sociales ni pueden explicarse exclusivamente en base a una mecánica interpretación de la lucha de clases (aquella que identifica clase exclusivamente con obrero industrial) ni mucho menos en base a una mirada reducida desde el individualismo metodológico. Cada situación, cada proceso de conflicto, se construye social e históricamente, estando siempre permeado por condiciones de la lucha de clases, pero a su vez se enriquece y hasta es determinado primariamente, en base a otros antagonismos y a complejas relaciones de poder¹⁸⁵, dando de esta manera un abanico diverso de situaciones que van desde conflictos con claros y evidentes rasgos de antagonismo “clásico” (conflictos de la clase obrera industrial, por ejemplo) hasta otros en donde la superposición y complejidad de antagonismos es más que evidente (ecologismos policlasistas, protestas de las clases medias, por ejemplo). En esta diversidad de situaciones, sin embargo, las condiciones del modo de acumulación serán un componente siempre presente, interactuando dialécticamente con la serie de antagonismos en disputa. Crea, cuanto menos, el marco del conflicto, encaminando las individualidades y su

¹⁸⁵ Por poder me refiero al mismo en tanto relaciones y no como cosa fijada, tal lo entendía hace ya tiempo Gramsci (1975), y que más recientemente Foucault (1980) volviera a problematizar.

expresión diversa y marcando los límites para un determinado tejido de relaciones materiales, políticas y socioculturales que definirán coacciones sociales que van más allá de las decisiones individuales y que interactúan con estas. Esta dinámica es lo que hace que la novedad sea permanente, sucesiva y recurrente, de tal manera que fijar a un determinado conflicto o movimiento social como nuevo “per se” constituye una herramienta heurísticamente superficial que sólo mira el costado estático de la compleja realidad social.

Los conflictos sociales entonces sólo podrán entenderse en este entramado complejo y dialéctico, y en razón de sus procesos de construcción sociohistóricos. Esto significa abandonar definitivamente cualquier intento de monismo teórico-metodológico para ser reemplazado por una primacía de las relaciones, de relaciones dialécticas, descartando así también la simple trama de relaciones sistémicas sin jerarquías. Sólo un proceso de conocimiento basado en la comprensión y explicación de las relaciones dialécticas asentadas en la presencia de antagonismos nos permitirá superar los reduccionismos dominantes.

6. Bibliografía

- ALTHUSSER, Louis: Contradicción y sobredeterminación (Notas para una investigación), en, La revolución teórica de Marx. México, Siglo XXI, 1976.
- AUYERO, Javier, (2004). *Vidas beligerantes: dos mujeres argentina, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Quilmes: Editorial UNQ.
- BONEFELD, Werner, (2001). The Permanence of Primitive Accumulation: Commodity Fetishism and Social Constitution, en *The Commoner*, n° 2, September, <http://www.thecommoner.org>
- BOURDIEU, Pierre y L. WACQUANT, (2005). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- COSER, Lewis, (1954). *The functions of Social Conflicts*. New York: The Free Press.
- De ANGELIS, Massimo, (2012). Marx y la acumulación primitiva: el carácter continuo de los cercamientos capitalistas, en *Revista Theomai* n° 26, segundo semestre; pp. 16-35.
- DIANI, Mario, (1992). The concept of social movement, en *The Sociological Review*, 40 (1), Chicago.
- ELIAS, Norbert, (1988). *El proceso de la civilización*. México, FCE.
- EYERMAN, Ron and Andrew JAMISON, (1991). *Social Movements. A Cognitive Approach*. Pennstate University Press.
- FEDERICI, Silvia, (1990). The debt crisis, Africa and the New Enclosures, en *Midnight Notes* ° 10, pp. 10-17, New York.
- FOUCAULT, Michel, (1980). *Microfísica del poder*. Barcelona, La Piqueta Ediciones.

GALAFASSI, Guido, (2006). Cuando el árbol no deja ver el bosque. Neofuncionalismo y posmodernidad en los estudios sobre movimientos sociales, en *Revista Theomai*, n° 14, segundo semestre, pp. 37-58, <http://revista-theomai.unq.edu.ar>

GALAFASSI, Guido, (2006). *Naturaleza, Sociedad y Alienación. Ciencia y proceso social en la modernidad*. Montevideo: Nordan-Comunidad.

GALAFASSI, Guido -comp.-, (2011). *Ejercicios de hegemonía. Lecturas de la Argentina contemporánea a la luz del pensamiento de Antonio Gramsci*. Buenos Aires: Herramienta ediciones.

GALAFASSI, Guido, (2012). Para una relectura de los procesos de conflicto y movilización social en la Argentina de inicios del milenio (2001-2003), en *Revista Mexicana de Sociología* 74 (1), pp. 69-88, enero-marzo.

GALAFASSI, Guido, (2012). ¿Qué hay de nuevo, viejo? Procesos de movilización y conflictos socioambientales. *Conflicto Social* Año 5, n° 8, pp. 8-40.
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/08/04_galafassi.pdf

GIARRACA, Norma, (2001). *La protesta social en la Argentina*. Buenos Aires, Alianza.

GRAMSCI, A., (1975). *Quaderni del carcere*. Turín, Einaudi.

GRAMSCI, A., (1992). Análisis de situaciones y correlaciones de fuerzas, en *Antología, selección, traducción y notas de Manuel Sacristán*. México: Siglo XXI.

HALL, Stuart: Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en los estudios culturales. Universidad Andina Simón Bolívar – Pontificia Universidad Javeriana – Instituto de Estudios Peruanos – Envión, Quito-Bogotá-Lima, 2010

HARVEY, David, (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.

LEVIDOW, Les, (1990). Holding the Green Line, Israeli Ecological Imperialism, en *Midnight Notes* ° 10, pp. 23-27, New York.

MARIATEGUI, José Carlos, (1928). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Varias ediciones.

MARX, Karl, (2004). *El Capital, tomo I, vol. 3, El proceso de producción del capital*. Buenos Aries: Siglo XXI.

MARX, Karl, (1974). *Historia crítica de la teoría de la plusvalía*. Buenos Aires: Brumario.

NEGRI, Antonio: Los libros de la autonomía obrera. Madrid, Akal, 2004.

O'CONNOR, James, (2001). *Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico*. México, Siglo XXI.

PERELMAN, Michael, (2012). La historia secreta de la acumulación primitiva y la economía política clásica. *Revista Theomai* n° 26, pp. 36-55.

PEREZ LEDESMA, Manuel, (1994). Cuando lleguen los días de cólera. Movimientos sociales, teoría e historia. *Zona Abierta*, n° 69.

- POLANYI, Karl, (1989). *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. Madrid, Ediciones de la Piqueta.
- POULANTZAS, Nicos: *Las clases sociales en el capitalismo actual*. Barcelona, Siglo XXI, 1977
- PURICELLI, Sonia, (2010). *El movimiento el campo no aguanta más. Auge, contradicciones y declive (México, 2002-2004)*. México, Plaza y Valdés.
- RASCHKE, Joachim, (1994). Sobre el concepto de movimiento social. *Zona Abierta*, nº 69.
- REVISTA THEOMAI 25, (2012). *Modos de acumulación, recursos naturales y dominio colonial en América Latina*; <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2025/Index.htm>
- REVISTA THEOMAI 26, (2012). *Trazos de sangre y fuego.: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra época?*; <http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Index.htm>
- RIECHAMAN, Jorge y Francisco FERNÁNDEZ BUEY, (1995). *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*. Barcelona, Paidós, 1995.
- RIKER, David, (1990). The struggle against enclosures in Jay, Maine. *Midnight Notes* ° 10, pp. 42-53, New York.
- SCHUSTER, Federico, (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva, en Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra (comp.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Prometeo Libros
- SVAMPA, M. y S. PEREYRA, (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires, Biblos.
- THIRSK, Joan, (1967). *The agrarian history of England and Wales*. Cambridge University Press.
- THOMPSON, E.P.,(1963). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Madrid, Capital Swing.
- THOMPSON, E.P.: *Miseria de la teoría*. Barcelona, Crítica, 1981.
- TRONTI, Mario: *Obreros y capital*. Madrid, Akal, 2001.
- VELTMEYER, Henry, (1997). New Social Movements in Latin America: the Dynamics of Class and Identity. *Journal of Peasant Studies*, vol. 25, nº 1.
- WILLIAMS, Raymond: *Marxismo y literatura*. Barcelona, Ediciones Península, 1977.

Universidad, Autonomía y Movimiento Estudiantil: Aportes críticos acerca de los conflictos universitarios en la UNCo 2004-2006.

Ayelén Penchulef

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue

Introducción

El presente artículo forma parte del trabajo “*Universidad, Autonomía y Movimiento Estudiantil: Aportes para un análisis crítico de los conflictos universitarios en la UNCo (2004/2006)*” con el que concluimos la Licenciatura en Sociología de la UNCo. En el mismo propusimos problematizar las condiciones de posibilidad del proceso de organización del movimiento estudiantil en los conflictos de la UNCo entre 2004 y 2006.

A estas luchas en las que tuvo un fuerte protagonismo el movimiento estudiantil, se les debe más horas de estudio y análisis que las que se le han dedicado¹⁸⁶. Visto así, cualquier intento por dar cuenta de la situación actual de la Universidad del Comahue, no puede pasar por alto las huellas de estos procesos en el marco de la lucha de clases y los intentos de construcción de hegemonía propuestos por el kirchnerismo.

Inscribir y enlazar históricamente estos conflictos es la primera cuestión que haremos, para pasar luego a una reconstrucción histórico-analítica de cada uno en la que profundizaremos en cada eje analítico.

Conceptualmente recuperamos la caracterización de la universidad como arena de conflictos y la noción de *Estado* como cristalización de una correlación de fuerzas (Poulantzas, 1998), la noción de autonomía, en tanto Autonomía Universitaria como legado de la Reforma del '18, pero también como concepto de autonomía relativa, central en el pensamiento marxista y para el estudio del Estado y las subjetividades políticas (Izaguirre, 2003; Poulantzas, 1998; Modonessi, 2010; Thwaites Rey, 1993). Otro concepto nodal es el de *movimiento estudiantil*. En su definición recuperamos las caracterizaciones del mismo a partir de su relación con estructuras distintas de las económicas, es decir, como categoría social específica, (Bonavena y Millán, 2012; Poulantzas, 1985); en las mediaciones entre la categoría social “estudiante” y las clases o fracciones de clase a las que pertenecen, entendiendo que el proceso de formación de la fuerza de trabajo no basta para definir que los estudiantes pertenecen a la clase obrera (Astarita, 2012); y la noción de *posición de clase que nos habilita un* abordaje fundado en los términos de la teoría de la lucha de clases, en tanto son: “*conjuntos humanos que ubicados en posiciones distintas en las relaciones de propiedad, luchan entre sí, y al interior de sí, entre fracciones, en función de intereses de todo tipo –económicos,*

¹⁸⁶ Rescatamos como trabajos pioneros, todos con diversos puntos de análisis desde distintas perspectivas teóricas y lugares de enunciación, los artículos escritos por Bonifacio (2012), Alexis Zenin (2010) y Maqueda (2010).

políticos, teóricos, culturales en sentido amplio; se alían entre sí y con fracciones de otras clases, o sea que la confrontación siempre se da entre alianzas que constituyen fuerzas sociales; que estas alianzas producen alineamientos, construyen poder y permiten el proceso de toma de conciencia acerca de sí mismas y de sus antagonistas” (Izaguirre, 2003, p. 250-1).

Es así que el movimiento estudiantil se nos revela como parte de alguno de los sectores que participan de la confrontación entre las clases en el seno del propio Estado. Entonces la conformación y consolidación de distintos sectores, independientes y transversales a los claustros, expresan necesariamente una posición de clase.

Dicho esto, no está de más aclarar que las categorías analíticas no pretendieron ser una resolución en abstracto del conflicto, ni tampoco un esquema en el cuál “encajar” nuestro caso, sino más bien resultado del proceso de conocimiento en la búsqueda de desandar la complejidad de los conflictos. Por ello no plantaremos sólo relaciones conceptuales en abstracto, sino conceptos que tienen anclajes históricos-concretos (materiales) con nuestro problema de investigación, ellos serán introducidos oportunamente en el cuerpo del trabajo.

Sin duda el peso mayor dentro del proceso de producción se lo dimos al trabajo de campo en la realización de 12 entrevistas con docentes/ investigadores de conflicto social y política educativa, estudiantes que participaron del proceso de las tomas y representantes del oficialismo universitario: una ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y al ex decano de la Facultad de Ingeniería. El mismo fue desarrollado entre los meses de abril de 2013 y septiembre de 2014 y el segundo semestre de 2015.

Destacamos aquí que la recuperación de los testimonios en el análisis se identificará con el rol dentro de los conflictos. Tomamos este recaudo a fin de proteger las identidades, y dar un tratamiento adecuado a la información que nos han aportado. Como criterio de validez aportaremos la fecha de realización de la entrevista.

La universidad neoliberal en la posconvertibilidad: una historia de conflictos.

Entroncamos las condiciones de posibilidad para los conflictos en la UNCo entre 2004 y 2006 a las circunstancias históricas de las luchas en las universidades nacionales, estas se remontan al reformismo de 1918 con la idea de una universidad abierta, crítica y emancipadora. Las distintas correlaciones de fuerzas han ido cristalizando en tanto política educativa estatal un proyecto de universidad en función de la construcción hegemónica propia de la fracción dominante de la clase políticamente dominante.

El menemismo sentó las bases y abrió un proceso para la reforma universitaria (y educativa en sentido amplio), que tendió a mercantilizar el derecho a la educación, cercenar la Autonomía

Universitaria y a instituir un Estado evaluador¹⁸⁷ y una Universidad administradora/gestora de la educación concebida como una correa de transmisión de conocimientos técnicos para impulsar procesos de crecimiento económico. Este proceso trasciende las fronteras del propio menemismo y alcanza hasta nuestros días. Sin embargo, la continuidad en las reformas educativas cobra un sentido diferente en el marco de la disputa por la hegemonía en las instituciones estatales llevada adelante por el kirchnerismo, en la que las universidades como espacios de construcción de conocimiento legitiman y afianzan la construcción del Estado y la democracia capitalista, y la consolidación del patrón de acumulación de capitales sobre la sobreexplotación de los bienes comunes.

La hegemonía neoliberal tuvo como centro el proceso de mercantilización de las relaciones sociales, la ampliación de los procesos de privatización a espacios que anteriormente le habían sido vedados (Bonnet, 2007).

Las características que adquirió el desenvolvimiento de la lucha de clases en la posconvertibilidad y el vínculo del Estado con esas luchas son fundamentales para encuadrar nuestro trabajo. Indaguemos un poco más al respecto.

Los recortes permanentes al gasto público, el empobrecimiento de amplios sectores de la población y el ascenso de la conflictividad, evidenciaron una metamorfosis en las luchas sociales que adquirieron predominantemente modalidades no- sindicales de lucha (Bonnet, 2007).

A pesar de que el Estado neoliberal había logrado capturar la lucha de los trabajadores, manteniendo a raya los conflictos sindicales a partir de la compra de sus direcciones, y que las privatizaciones habían significado un duro golpe para las familias trabajadoras vinculadas a las empresas estatales, duros enfrentamientos surgieron sobre el final de la década del `90. Dice Bonnet (2007), “*de la derrota de esas luchas sindicales (...) emergían nuevas modalidades no-sindicales de lucha*” (p. 350).

Los pueblos afectados por la privatización o racionalización de las empresas públicas emergieron como sujetos de lucha dando lugar a reivindicaciones más amplias que las sindicales, a la vez que los clásicos cuerpos de delegados sindicales fueron reemplazados por asambleas comunitarias y democracia directa como nuevos modos de organización. Estas modalidades no- sindicales de lucha continuaron articulándose a lo largo de la década con las modalidades sindicales de las que habían surgido (Bonnet, 2007). Esta articulación desembocaría en un nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que puso fin a la convertibilidad.

¹⁸⁷ O como lo denomina Facundo Solanas (2012), un *Estado acreditador*, puesto que se encuentra de manera incuestionable e institucionalizada, una política y un sistema de acreditación universitaria que se puso en marcha a partir de la sanción de la LES en Argentina y mediante la creación de la CONEAU.

Para el período de nuestro estudio, la crisis de la convertibilidad implicó que entre 2001 y 2003 se desarrollara un proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalista “*en un modo que expresó los cambios en la relaciones de fuerza entre las clases*” (Piva, 2014: 87). Sin embargo, ello no significó una ruptura con el proceso de mercantilización de las relaciones sociales, al contrario, habilitó la profundización de tendencias inauguradas en los noventa y relanzadas durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (Bonnet, 2012).

La dominación política de la hegemonía neoliberal se ejercía en función de la imposición de la disciplina impuesta por el mercado, y el Estado intervenía en tanto mediatizador de “*imperativos de ese orden técnico-económico del mercado*” (Bonnet, 2012, P. 296, 297). En cambio, el arbitraje neopopulista¹⁸⁸ (Piva, 2014) del kirchnerismo buscó -con mayor o menor éxito- arbitrar entre las distintas fracciones de la burguesía que integraban el bloque en el poder, por lo que el Estado aparece interviniendo en cada conflicto, dándole un carácter político.

En palabras del propio Bonnet (2012): “*(...) el Estado kirchnerista interviene intentando esconder la manera en que esa lógica de mercado se impone efectivamente a través de su intervención detrás de la politización de dicha intervención*” (P. 297).

La recuperación de las herramientas económicas para la esfera del Estado, permitió una mayor capacidad para redistribuir costos y beneficios entre las fracciones burguesas, pero también la hizo más cuestionable y por tanto más débil. Tal es así que la recomposición de la dominación política no significó la instauración de una nueva hegemonía, no solo porque el bloque en el poder no pudo consolidarse, sino porque la lucha de clases continuó desafiando las posibilidades del Estado para contenerla dentro de sus márgenes.

La emergencia permanente de conflictos derivados de la contradicción capital/trabajo han demostrado la fragilidad de la construcción política del kirchnerismo estos últimos doce años, así como lo rebatible de su discurso en términos materiales. En el plano de las políticas educativas la continuidad y profundización de la política menemista resulta evidente.

Suásnabar (2011) caracteriza que el gobierno ha dado un *giro neointervencionista* que no ha conseguido estructurar una nueva agenda de política universitaria, sino que más bien dan cuenta de cierta “*inercia de las líneas de política heredadas del período anterior*” (p. 7). A nuestro criterio la tendencia de las políticas estatales para la educación superior han sido claras en la tendencia a profundizar los vínculos entre la producción de conocimiento y la imposición de un nuevo patrón de acumulación asociado a las actividades extractivas y la producción de bienes de bajo valor agregado.

¹⁸⁸ Para una caracterización más amplia de la dominación política del kirchnerismo como *neopopulista* puede consultarse Piva (2014) “¿Cuánto hay de nuevo y cuánto de populismo en el neopopulismo? Kirchnerismo y peronismo en la Argentina post 2001?” en *Economía y política en la Argentina Kirchnerista*. Buenos Aires. Batalla de ideas.

En este sentido, podemos señalar la creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación productiva, y las políticas promoción del financiamiento externo como base presupuestaria del funcionamiento de las universidades públicas. Sólo por citar un ejemplo, en 2008 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acuerda la distribución de 36.800.000 pesos procedentes de las utilidades de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio). La aceptación de estos fondos generó un importante repudio que desató, una combinación de acción directa, acción institucional y denuncia pública, en un buen número de Universidades Nacionales. Tres universidades nacionales (Río Cuarto-UNRC, Luján-UNLU, Córdoba-UNC) rechazaron los fondos al igual que unas treinta unidades académicas de una decena de universidades más (Liaudat, et. Al., 2011).

Así mismo, la propuesta de una ley de financiamiento educativo y la sanción de la Ley de Educación Técnica también apuntaron a reforzar la relación entre sistema educativo y sector productivo, esta orientación causó un fuerte impacto en la opinión pública, con voces a favor y en contra (Suasnábar, 2005).

La desafiliación a los preceptos de la era neoliberal del actual gobierno, no se ha traducido en hechos concretos en tanto no se realizaron modificaciones sustantivas a la Ley de Educación Superior. Muy por el contrario, algunos de sus dispositivos se encuentran hoy en día arraigados y asumidos por las universidades, este es el caso de los programas de incentivos, la acreditación de postgrados y las evaluaciones institucionales. La acreditación de las carreras de grado aún sigue generando conflictos y resistencias fundamentalmente por parte de estudiantes y sectores minoritarios docentes, conflictos que expresan las tensiones y los límites del ejercicio de la autonomía universitaria y la intervención estatal (Penchulef, 2014).

Si bien es indiscutible el aumento presupuestario para la educación superior (traducido en aumento de los salarios docentes y no docentes y el monto y la cantidad de becas estudiantiles, fundamentalmente después de 2005 con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo) que contrasta con la tendencia al desfinanciamiento de la década pasada, estos incrementos han resultado ser insuficientes, por lo que la presencia de la financiación externa fue fomentada directa o indirectamente. Al mismo tiempo, organismos dependientes del ejecutivo han incrementado su injerencia en las políticas de desarrollo académico en las universidades, fundamentalmente en el incremento de la presencia “*de programas de financiamiento especiales "focalizados", orientados al mejoramiento de disciplinas, carreras e instituciones*” (Suasnábar, 2011, p. 9) como vía de financiamiento. Por ejemplo, la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) ha tendido multiplicar los programas especiales, así como lo ha hecho el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), con especial énfasis en la promoción de carreras como las ingenierías. En términos más concretos, podemos señalar el vínculo que ha mantenido YPF como una de las principales empresas que lleva

adelante las explotaciones de gas y petróleo en el yacimiento Vaca Muerta de la provincia de Neuquén con las universidades nacionales, por ejemplo, a través de la Fundación YPF (FYPF) creó la red de universidades petroleras de la cual la UNCo forma parte, y ha realizado actividades sugiriendo cambios en los planes de estudio para cubrir las demandas de los nuevos proyectos extractivos.

Un dato que no podemos dejar pasar es la expansión del sistema de educación superior (SES), desde 2003 se crearon 10 nuevas universidades públicas: la Universidad Nacional del Noroeste, de la Provincia de Buenos Aires, la Nacional de Chilecito (La Rioja), Nacional de Río Negro, De Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de Avellaneda, Arturo Jauretche, de Moreno, de José C. Paz, y de Merlo. Desde la lectura oficial, la ampliación del número de universidades públicas, su oferta académica y su ubicación está asociada a descomprimir la elevada matrícula de las universidades tradicionales como la de Córdoba, La Plata, Buenos Aires, y a garantizar el acceso y la igualdad, pero también a expandir el modelo de gestión educativa presente en la LES y funcionar como nichos políticos del kirchnerismo. Baste mencionar como la creación de la Universidad Nacional de Río Negro se convirtió en la piedra fundamental de la candidatura a gobernador de Miguel Pichetto, mano derecha de Cristina Fernández en el senado.

Actualmente y pese a las resistencias, la educación superior presenta rasgos mercantiles, no solo en el hecho de que la universidad pública presta servicios a terceros -en su mayoría empresas privadas- sino como caso paradigmático debemos mencionar el boom de la educación de posgrado que constituye el “mercado de posgrados” arancelados en el cual las instituciones y programas comenzaron a desarrollar estrategias para la captación de recursos, alumnos y profesores (Suasnábar 2011).

En un análisis enfocado sobre el movimiento estudiantil que va desde 2001 a 2011, Liaudat, Et. Al. (2011) destaca los principales cambios en el mapa de fuerzas políticas, sus ejes de intervención y las prácticas organizativas. De la etapa del kirchnerismo diferencia entre los conflictos que se dieron en el bienio 2004 y 2005 vinculados al rechazo de las acreditaciones con epicentro en la UNCo, la UBA y la UNLP, y al reclamo presupuestario que tuvo su centro en la Universidad Nacional de Córdoba en 2005, y la *oleada democratizante* que cristalizó en 2006 con las reformas estatutarias en las principales universidades del país. Cabe señalar al respecto de las reformas que no todas ellas se dieron producto de conflictos, sino que algunas se anticiparon a las demandas que pudieran surgir por parte de los sectores estudiantiles y docentes. Podríamos decir que se trata de reformas “preventivas” en las que el Estado logra canalizar los conflictos incluso antes de que puedan surgir. Profundizaremos en el análisis de los conflictos en el siguiente apartado.

La ofensiva acreditadora y la toma del 2004 como trinchera.

En la zona de Río Negro y Neuquén, los dos recortes presupuestarios que se dieron en el breve período del gobierno de la Alianza (1999-2001) provocaron que en la UNCo se activaran procesos de reorganización del movimiento estudiantil y el surgimiento de nuevas agrupaciones que tiempo después conformarían el Frente de Estudiantes por la Resistencia (FER).

Para el período de 2003-2004, el grupo de organizaciones surgidas del 2001 dentro de la universidad consiguen ganarle la conducción de la Federación Universitaria del Comahue (FUC) al grupo que apoyaba la asunción de Kirchner, “Venceremos” línea estudiantil de la corriente nacional “Patria Libre” que representaba un conjunto de prácticas violentas y burocráticas que compatibilizaba con el estilo de gestión política en la negociación de las reivindicaciones.

A partir del cambio de conducción, la FUC cobra importancia y se visibiliza en la escena política regional, empieza a tener presencia encabezando conflictos de orden gremial. Se produjeron encuentros con otros sectores que simultáneamente mantenían conflictos y cierto grado de movilización: obreros de la ex Zanón, bases del movimiento de trabajadores desocupados, organizaciones piqueteras y de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora de Neuquén e HIJOS Alto Valle, la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) entre las más significativas. Situación que consolidó un bloque de alianzas solidarias y colaborativas en las que las acciones llevadas adelante por cada una de las organizaciones eran acompañadas, legitimadas y difundidas por las demás. Estas organizaciones confluyeron en lo que se denominó *La Coordinadora del Alto Valle*¹⁸⁹.

La UNCo ya se había pronunciado en contra de la LES en dos ocasiones: la primera una semana antes de su sanción en 1995, y en 1998 cuando docentes y estudiantes se opusieron al proceso de readecuación del estatuto a los parámetros de la Ley dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación.

Durante el mes de septiembre de 2004 llegan a los temarios de los Consejos Directivos (CD) las acreditaciones y mientras que en la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA) en CD aprobó por mayoría no someterse al proceso de acreditación, en la Facultad de Ingeniería (FAI) la situación se invertía: la mayoría de los claustros (docentes, no docentes y graduados) aceptaban iniciar el proceso de evaluación dejando como posición antagónica a los representantes del claustro estudiantil.

La medida tomada por el CD de Agrarias arrastró a los sectores corporativos a posicionarse a favor de la acreditación, así lo hicieron el Colegio de Ingenieros Agrónomos, sectores docentes alineados con la gestión de la universidad.

189

La Coordinadora del Alto Valle fue una iniciativa del Sindicato Ceramista (SOENC) en la vorágine política de 2001, el objetivo que perseguía era consolidar un polo activista que coordinara la protesta de gremios, comisiones internas, activistas, delegados, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda (Aiziczon, 2009).

La rectora y el titular de la CONEAU Víctor Nicoletti en conferencia de prensa ratificaron la necesidad de acreditar las carreras¹⁹⁰ y afirmaron que el rechazo afectaría a la validez de los títulos y podría paralizar la inscripción en 2005¹⁹¹.

En la FAI, tras horas de debate y exposición, la sesión del CD del 29 de septiembre concluye sin votación, los estudiantes la impiden desplazando el conflicto temporalmente dejando la decisión definitiva supeditada al tratamiento del CS que se reuniría el día siguiente.

Para Boccanera, decano de la FAI, otrora opositor a la LES, la aplicación de la ley y las evaluaciones de CONEAU en el marco del gobierno kirchnerista eran resignificadas: le permitía impugnar el carácter privatizador del gobierno menemista y salvar la instancia de evaluación como una manera de rediscutir la pertinencia de la orientación profesional de las carreras y su vinculación con el modelo productivo (Ex decano de la FAI, 16/09/2015).

La decisión unilateral de Ingeniería de acreditar infringía lo dispuesto en los dos pronunciamientos de 1995 y 1998 y obligaba al CS a pronunciarse nuevamente.

La suspensión devenida del retiro repentino de la rectora de la sala de reuniones¹⁹² del Consejo superior, provocó que el sector estudiantil, sus organizaciones, centros de estudiantes y la FUC en conjunto con algunos docentes de ADUNC (Asociación Docente de la Universidad Nacional del Comahue), comenzaran una serie de actividades de difusión del conflicto. Los vínculos FEI-FUC y la centralidad de la FAI fueron factores que actuaron como caja de resonancia: el lema “*primero ingeniería pero vienen por todo*” generaba adhesión entre los estudiantes de todas las carreras y facultades.

Con la negativa de tratar el tema los estudiantes de ingeniería deciden iniciar una toma del edificio de la facultad a partir del 27 de octubre. Esa misma noche en una asamblea interfacultades se propone extender la medida a otros edificios de la universidad. Se suman rápidamente a la toma las facultades de Humanidades y el módulo de de Servicio Social de Neuquén.

Al día cinco de noviembre se encontraran tomadas las facultades de Economía, Turismo, Ciencias de la Educación, el Centro Regional Universitario Bariloche, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Roca y el Centro Universitario Regional Zona Atlántica en Viedma. Las medidas de fuerza se multiplicaron, la conflictividad se expandía en todo el alcance territorial de la universidad, incluso los asentamientos más alejados. Paradójicamente la FACA sería tomada por los estudiantes

¹⁹⁰ Diario Río Negro, 29/09/2004 “La CONEAU ratificó que las facultades deben acreditarse”.

¹⁹¹ La invalidez de los títulos de grado solo está mencionada en el apartado de las disposiciones transitorias de la LES y se supone válida en el caso de carreras y universidades de apertura reciente.

¹⁹² La sesión fue suspendida con el argumento de que no estaban dadas las “condiciones de seguridad” en clara referencia a la cantidad de estudiantes que se habían movilizado al CS para que este se expida con respecto al tema de las acreditaciones (Avilés, Fernández y Namuncurá; 2004. En <http://red-accion.uncoma.edu.ar/investigaciones/2004/rebellion/pagcentral2.htm> consultado el 2/06/2012)

recién el día 15 de noviembre con una fuerte oposición docente y de los habitantes de la localidad que se movilizaron e intentaron desalojar la toma violentamente en varias oportunidades.

La toma convierte a la universidad -al decir de Gramsci- en una verdadera *trinchera*, los sectores movilizados solicitaban una convocatoria a sesión que discutiera y aprobara los siguientes puntos: “1. Rechazo y anulación de la Ley de Educación Superior. 2. Desconocer a la CONEAU como órgano acreditador. 3. Anulación de todos los procesos de acreditación en la UNC (...)” (Boletín de la toma; 29/10/2004).

La ocupación de los edificios expone y clarifica posiciones: por un lado, el sector de los estudiantes- apoyados por un sector docente minoritario- en contra de la evaluación de las carreras por parte de la CONEAU; cuestionan sobre todo su composición política y el condicionamiento presupuestario para someterse a las evaluaciones periódicas; por otra parte, el sector que responde a la gestión de Pechén que impulsa las acreditaciones. Estos eran la mayoría, como retrata un militante estudiantil acerca de la diferencia en votos: “Sabíamos que no estábamos en condiciones de ganar la votación en el Consejo Superior, a lo sumo llegaríamos a los trece votos. No llegábamos ni ahí...” (Militante estudiantil; 15/05/2013).

La posición estudiantil tenía un importante respaldo de las organizaciones sociales que contribuyó a que, en el transcurso de veintinueve días de toma, cambiaran las correlaciones de fuerzas.

Un caso figurativo del cambio en las posiciones es cómo se consigue el voto del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Juan Manuel Salgado había originalmente formado parte del sector que eligió a Pechén como rectora en 2002 y se había pronunciado a favor de la acreditación desde la primera hora en apariciones públicas¹⁹³, pero el CD de la facultad se pronuncia en rechazo a la acreditación y mandata al Decano para que lleve la posición al CS. De esta manera, comienza a resquebrajarse el marco de alianzas de Pechén. El transformismo de Salgado, arrastro también al decano de Humanidades Pedro Barreiro y al decano del Centro Regional Bariloche, Horacio Planas.

Desde los apoyos a Pechén en este conflicto, el ex decano de Ingeniería afirmaba que las posiciones en contra de la LES que sostenían los decanos no eran tales “no les importaba nada, sólo querían perpetuarse políticamente. (...) a la semana de que votamos en el superior el rechazo, Nataine¹⁹⁴

¹⁹³ Este tipo de transformismo político es muy frecuente entre las autoridades universitarias, sólo por citar algunos ejemplos el actual vicerrector, Daniel Nataine que se oponía a las acreditaciones en aquellos años, es quién impulsa los procesos de discusión dentro de la universidad para poder garantizar acreditaciones “con consenso”; al mismo tiempo el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Pescader quién por aquellos años adhería a la aplicación de la ley, hoy es uno de sus principales oponentes dentro del proceso de los foros debate que impulsa la UNCo para discutir la LES, (para más información pueden leer el artículo que publicamos a fines de 2014 en varios medios digitales titulado “Ni muerto el perro, ni muerta la rabia”)

¹⁹⁴ Nataine fue Vicedecano del CRUB hasta 2006, y luego decano. Es actualmente Vicerrector de la UNCo por la lista kirchnerista “Debate Abierto Universitario” (DAU) que derrotó a Vega (MPN) en 2014.

trajo una caja a rectorado con las acreditaciones de todos los postgrados del CRUB” (ex decano de la FAI, 16/09/2015).

El Claustro No-Docente es uno de los que se pronuncian con muchísimas tensiones, dado su carácter corporativo y las normas administrativas que lo condicionan a apoyar las posiciones políticas de las gestiones¹⁹⁵. El gremio que concentra al claustro de no docentes APUNC (Asociación de Personal de la UNCo) también se rompió: tres de los cuatro consejeros manifiestan públicamente que van a votar en contra de CONEAU.

Haciendo foco en la participación estudiantil diremos que se caracterizó por su masividad, lo que configuró particularidades en términos de la organización interna de la toma de los edificios. Una de ellas fue que la mayoría de los estudiantes que participaban no pertenecían a las agrupaciones, sino que se identificaban con el reclamo y “*ponían el cuerpo*” (Consejero estudiantil; 15/05/13). Además la dinámica mediante la cual se construían las decisiones era amplia, incluía la realización de asambleas en cada facultad y asambleas plenarias en las que se reunían estudiantes de todas las facultades a definir posiciones más generales.

Se crearon comisiones que garantizaban la permanencia en los edificios, pero también en torno a las necesidades de la lucha política. Por mencionar algunas, surgieron comisiones de cocina, de limpieza, de financiamiento -que abrió cuentas bancarias para recolectar fondos-, la comisión de seguridad, grupos de estudio de la LES. La comisión de prensa, que se proponía contrarrestar la información surgida del sector opositor en medios masivos de la región como el diario *Río Negro* y *La mañana de Neuquén*.

La amplitud de la participación y los procedimientos para alcanzar las decisiones hicieron incuestionable la transparencia de las acciones llevadas a cabo¹⁹⁶.

El apoyo contundente de los pares universitarios y en amplios sectores de la sociedad, obligó al rectorado a ceder. La medida fue suspendida el 26 de noviembre previamente a la sesión del CS que materializó la resolución del conflicto a través de la Ordenanza del CS N° 739/04. La misma se impuso por diecisiete votos a doce, de los cuales cuatro correspondían a decanos (Barreiro, de Humanidades, Salgado, de Derecho y Ciencias Sociales, Girardin de Agrarias y Planas, del *Centro Regional Universitario Bariloche* (CRUB); cuatro no docentes; los cinco estudiantes; tres graduados y una docente¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Los asensos en la carrera administrativa no docente son aprobados por el ejecutivo universitario, lo que habilita que las posiciones políticas se negocien a cambio de privilegios.

¹⁹⁶ No negamos la existencia de críticas internas que expresaron las divergencias dentro del movimiento estudiantil, sin embargo, estas no tuvieron mayor trascendencia en el momento, quedando relegadas a un cuestionamiento llano a la tendencia política de las organizaciones que participaban del FER como conducción de la FUC.

¹⁹⁷ Fuente: Diario digital Bariloche 2000 <http://bariloche2000.com/noticias/leer/la-unco-suspendi-las-acreditaciones/8608#> consultado el 13/02/2015.

La Ordenanza consta de cinco puntos en los que se resuelve rechazar la LES ratificando los dos pronunciamientos anteriores (1995 y 1998), rechaza a CONEAU como organismo evaluador y suspende todos los procesos de acreditación de las carreras de grado y posgrado hasta la derogación de la LES. Además, ordena iniciar acciones para lograr su derogación ante el CIN, el Ministerio de Educación de la Nación, Diputados Nacionales, Diputados de las provincias patagónicas, Legisladores Provinciales de Río Negro y Neuquén, y hacer extensivo a otros gobiernos y Universidades Nacionales.

Quizás lo más interesante son las consideraciones que condensan los argumentos centrales que habían dado inicio al conflicto:

“la Ley de Educación Superior viola la Autonomía Universitaria e impone un modelo neoliberal y neoconservador. Que atenta contra los derechos a estudiar y trabajar; Que, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un órgano político que tiene como objetivo imponer las políticas que sustenta la Ley de Educación Superior” (Ord.738/04)

La Ordenanza *captura* el conflicto, la lógica de la institución entra en contradicción con el Estado del que forma parte. Esto es posible porque la universidad pretende un cierto margen de autonomía relativa en el cual decide y regula su funcionamiento político y académico.

La dinámica de la lucha de clases desborda las posibilidades de encauzar el conflicto del bloque dominante en la universidad (a partir del consenso o la represión) y se canaliza en la ordenanza que expresa esa correlación de fuerzas que obliga a hacer concesiones

La toma, abre la trama del conflicto e involucra sectores que no forman parte de la universidad: los medios, la opinión pública, otras reparticiones del Estado, legisladoras, diputadas, periodistas y organizaciones empiezan a posicionarse. La presión política cambia la correlación de fuerzas entre el sector oficialista que niega la discusión y los estudiantes que la reclaman.

El bloque en el poder que mantenía el sector de la rectora se quiebra, lo que permite al movimiento estudiantil conformar un sector estratégico de “acuerdos tácitos” que le permitió gobernar virtualmente la universidad a través del CS hasta entrado el 2006.

La articulación entre el sujeto estudiantil y otros sectores movlizados, característica de la forma de desenvolvimiento de la lucha de clases que rompió la hegemonía neoliberal, fue central en la producción de este escenario.

Por lo dicho, proponemos que el conflicto en la UNCo, expresó tardíamente la confrontación entre la LES, como expresión material de la hegemonía –neoconservadora- del menemismo (Bonnet; 2007), y las formas de enfrentar y romper esa hegemonía, que predominaron en el desenvolvimiento de la lucha de clases. Nos decía un consejero superior apropósito de una de las sesiones:

“Fuimos a debatir, con movilización importante al consejo, y empezaron a dar frutos las relaciones que teníamos por fuera de la universidad, porque se empezaron a movilizar Zanón, organismos de Derechos Humanos, teníamos un Superior que estaba lleno (...) con bombos, olla popular” (15/05/2013).

Por último, el conflicto contra la LES-CONEAU expresó la oposición a un modelo privatizante y de exclusión social que restringe a las clases trabajadoras del acceso a la universidad, característica central de las luchas de la década anterior.

Cabe preguntarnos, si el espacio de apertura a sectores extra-universitarios perduró.

En un análisis provocativo, una docente de la casa propone que el espacio dispuesto a la discusión no fue tal, sino que fue insuficiente porque:

“La toma encerraba a los que pensaban de una manera, y dejaba afuera... (...), la preocupación es que se dejaba afuera a buena parte del movimiento estudiantil. Si hoy recorremos los pasillos de la universidad y preguntamos qué es la CONEAU a los estudiantes creo que encontramos muy poca información, porque no se había discutido, (...) Es una cuestión compleja, no es CONEAU si, CONEAU no. (...) (Docente 13/05/2013).

Aunque podemos discutir qué sectores forman parte del movimiento estudiantil, debemos reconocer que la discusión sobre CONEAU y los procesos de acreditación –ciertamente vinculados con la Autonomía Universitaria y su ejercicio- pudo haberse visto reducida a la mera oposición al proceso y sin una crítica más integral del vínculo universidad-Estado. Este planteo cobra más sentido cuándo recuperamos las discusiones en el conflicto 2006. La noción de Autonomía se disuelve y no aparece como una discusión nodal, siendo que es el corazón de cualquier reclamo de democratización.

TOMA 2006: Entre la democratización y el asalto al rectorado

Este conflicto es enunciado por nuestros entrevistados como un conflicto por la *democratización* de la universidad lo que nos remite a la reforma del '18 de la cual se recuperan puntos para la organización político-académica de las universidades del mundo como la Autonomía, los concursos con jurado estudiantil, el cogobierno con representación del todos los claustros, entre otros.

Pese a que estos principios formaban parte del espíritu del estatuto de la UNCo, se presentaban algunas situaciones cuestionables. Como ejemplos, la composición del claustro docente (que excluía a los de categoría inferior a la de profesor regular) y estudiantil (escasamente representado a

pesar de ser el claustro mayoritario). El poder de la toma de decisiones se concentraba¹⁹⁸ en el claustro minoritario, el docente.

Desde el año `95 existían proyectos de reforma estatutaria, que eran retomados cada vez que había Asamblea Universitaria (AU). Para el año 2002, el gremio docente ADUNC había presentado un proyecto para la creación de un claustro único docente (CUD) que incorporara las categorías Asistente de Docencia y Ayudante de Trabajos Prácticos. La propuesta no logró adhesión suficiente, por lo que concretándose la elección de Pechén como rectora se pasó a un cuarto intermedio con el compromiso de ser retomado en una futura Asamblea.

Como anticipábamos, la mayoría que votó en contra de la acreditación empezó a conformar un espacio político “tácito” que se oponía a Pechén en el CS hasta al menos 2006¹⁹⁹.

Entre los docentes aparecen dos sectores, el sector progresista de ADUNC encabezado por el decano de Agrarias, Girardín, y el de los decanos que habiendo apoyado la elección de Pechén votaron en contra de la acreditación: Salgado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Barreiro de Humanidades y, aunque con más distancia, Planas del CRUB.

Esa mayoría era heterogénea, se completaba con las definiciones de estos últimos quienes quedan objetivamente “en el medio” inclinando la balanza hacia las posiciones más progresistas. Dice uno de los entrevistados que: “*Salgado y Barreiro eran los que te definían el Consejo, porque se daban vuelta para un lado o para el otro, sus posiciones eran las que daban vuelta el Consejo*” (Militante estudiantil, Facultad de Ingeniería 17/06/2013).

Por su parte, el sector estudiantil fortalecido por los conflictos, había conseguido robustecer las organizaciones, ampliar los reclamos y vigorizar la legitimidad de los órganos de participación y representación como la FUC y los centros de estudiantes. Anticipándose a la convocatoria del CS para la Asamblea Universitaria (AU), la Federación anunció la realización de un Congreso Extraordinario el 13 de mayo para discutir la propuesta del claustro en el proceso de reforma del Estatuto.

Aunque entre los estudiantes circulaban propuestas que iban desde la “*reforma política de los estatutos*” a “*mayoría estudiantil en los órganos de co-gobierno*”, pasando por la “*democratización de todos los espacios*”, resultaron de aquella discusión puntos de acuerdo comunes: “*Democratización de todos los espacios de la universidad, claustro único docente, paridad con los docentes y reforzar el co-gobierno*” (Militante estudiantil, Facultad de Humanidades 15/05/13).

¹⁹⁸ La LES en su artículo 53 dispone que “el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%)”. La concentración del poder en los órganos de decisión merma las posibilidades de otros sectores de disputar las reivindicaciones propias.

¹⁹⁹ Por razones de espacio no incluimos el análisis del período 2004-2005. En otra parte (Penchulef, 2014) caracterizamos los alcances políticos de estos acuerdos tácitos que llevaron a importantes conquistas como el ingreso irrestricto de Medicina.

La democratización, traducida como aumento de la representación institucional en los órganos de cogobierno, es consecuencia directa de la experiencia acumulada del movimiento estudiantil. En otras palabras: “(...) *nosotros íbamos a los Consejos con urgencia para discutir alguna cosa, con miles de razones y ellos no tenían ninguna, solamente te levantaban la mano y te cagaban a votazos*” (Militante estudiantil 18/07/2013).

Los puntos acordados por los estudiantes no se extendían a los “acuerdos tácitos” que mantenían con los demás sectores, cada uno tenía sus expectativas y proyectos propios frente a la AU.

En el claustro docente se habían producido rupturas a raíz del apoyo de ADUNC en la toma, surge un sindicato paralelo, CEDIUNCO (Central de Docentes e Investigadores de la UNCo) impulsado por la gestión de la universidad. Entre los no docentes también se daba una situación similar porque el sector dominante se encargaría de abroquelar un gran sector a partir de prebendas, lo que les permitía negociar sus votos, fragmentando e imposibilitando cualquier tipo de discusión política al respecto.

Así las cosas, las posibilidades de discutir y elaborar un proyecto común de estatuto para democratizar la universidad se vieron eclipsadas.

Pese al compromiso de tratar las propuestas de reforma estatutaria, pendientes desde 2002, la Asamblea fue convocada sólo para elegir rector, lo que comenzó de inmediato a subir la temperatura del clima electoral.

El Diario Río Negro titulaba “*Con sigilo la UNC se encamina a elecciones*” (16/02/2006) a una nota en la que caracterizaba que existía un cierto equilibrio entre las fuerzas de los “tomadores” y “no tomadores”, denominados así por el apoyo o rechazo a la acción directa llevada adelante por el claustro estudiantil en 2004.

A la negativa de incorporar los proyectos de reforma estatutaria en la AU, le siguieron medidas de presión política para abrir un espacio de discusión.

Dice un entrevistado:

“Esa asamblea la habían convocado al aula magna, ya tenía el rector puesto, el proyecto de cambio de estatuto, puesto y acordado, la repartija de puestos para las facultades, estaba todo arreglado. (...) llega la Asamblea Universitaria, estaba todo arreglado y ¿vos que ibas a hacer?, la íbamos a re pinchar (Militante estudiantil, 15/05/13).

El 16 de mayo de 2006, fecha dispuesta para la AU, estudiantes y docentes (representantes en su mayoría del claustro de graduados) se presentaron en el aula magna de la Universidad, algunos para reclamar, otros para impedir la elección de rector y otros para participar, se encontraron con la sorpresa: el aula magna vacía. Situación que certificaron inclusive con la asistencia de un escribano.

El misterio se develaría en las horas siguientes cuando trascendiera públicamente un acta certificada en la que 108 asambleístas²⁰⁰ se pronunciaron a favor de la elección de Boccanera, la AU había sido desplegada en un local sindical de Cipolletti.

Se precipitaron varios procesos. Las organizaciones y el activismo estudiantil tomaron la decisión de encarar una medida de acción directa: la ocupación del edificio del rectorado para denunciar el “golpe institucional”²⁰¹ y evitar su funcionamiento bajo la dirección de Boccanera. Además, el sindicato docente ADUNC presentó una denuncia a la Cámara Federal y judicializó el conflicto con el fin de aclarar la elección.

Días después de realizada la denuncia, la jueza federal Carolina Pandolfi declara en primera instancia que la AU y la elección de Bocannera habían sido válidas, motivo por el que ADUNC apela a la Cámara Federal de Roca para que resuelva definitivamente.

Mientras la elección de Boccanera es saludada por referentes políticos de la región, el rectorado continuó tomado, y el nuevo rector decide alquilar céntricas oficinas en Neuquén.

La asamblea interclaustró se respalda nuevamente en los sectores que habían apoyado en 2004, a la vez que se acoplan a otros conflictos.

Ante la ratificación de Pandolfi y la resistencia de la gestión para no discutir, las asambleas de Humanidades y Trabajo Social deciden avanzar con una toma del edificio de Humanidades a partir del 7 de junio. La toma sumó presión a la coyuntura para el resto de las asambleas estudiantiles que se verían impulsadas a acompañar la medida para no romper la *unidad de acción*. La medida fue inesperada, lo que complejizó el panorama político:

“(...) todas las otras agrupaciones que estábamos en la FUC, a partir de ahí empezamos a correr contrarreloj para no dejarlos solos. Y ¿cómo hacés algo tan rápido? Laburamos con la indignación, (...) era impresionante la cantidad de gente, no entrábamos en el aula magna. Y lo que movía era la indignación, la indignación contra el autoritarismo. (...) Entonces la primera mitad de la toma fue muy potente, más que la experiencia del 2004” (Militante estudiantil, Ingeniería 21/06/03).

Con el correr de los días, y con la realización de asambleas de por medio, la ocupación se extiende a los edificios de Ciencias de la Educación y Psicología en Cipolletti el 11 de junio. Y con tiempos más lentos que los del 2004, para el 22 de junio se realiza una asamblea interfacultades en Neuquén que decide tomar todas las facultades de la barda, (Ingeniería, Economía, Turismo) y una toma de decanato en Derecho y Ciencias Sociales (Roca). Los centros regionales más alejados como

²⁰⁰ La AU tenía según el estatuto 164 asambleístas.

²⁰¹ Es el nombre que le dieron estudiantes, docentes y graduados opositores a la elección de rector.

Bariloche y Viedma, no fueron alcanzados. A poco más de un mes de iniciado el conflicto, la radicalidad de las acciones llegaba al máximo.

La gestión mantuvo su posición y amenazaba con iniciar acciones legales a los estudiantes si no deponían la medida²⁰², al mismo tiempo se sostenía una intensa y sistemática campaña de deslegitimación. Cares Leiva designado Secretario de Extensión declaraba: “*La Federación ha impulsado una toma general de la universidad, pero no ha conseguido el aval de los estudiantes*” (Diario Página12 23/06/2006²⁰³).

En esta primera etapa no hubo diálogos que mediaran para resolver el conflicto, sobre todo porque la asamblea inter-claustro y la asamblea interfacultades no reconocían al supuesto rector como interlocutor válido, por lo que la definición quedaba en parte en manos de la justicia.

Al igual que en 2004 se pusieron en funcionamiento las comisiones y se realizaron numerosas actividades, sin embargo, este nuevo enfrentamiento se daba en una coyuntura política con particularidades: el gobierno de Kirchner había conseguido consolidarse y generar condiciones de gobernabilidad abriendo expectativas en algunos núcleos militantes progresistas. Al mismo tiempo consiguió alianzas estratégicas con sectores que habían permanecido hasta entonces en las calles, y que ahora se retiraban de ellas formando parte del consenso kirchnerista.

Así las cosas, el movimiento estudiantil se encontró frente a un conflicto que cuestionaba el status quo en un horizonte de relativa calma. El conjunto que se movilizaba aparecía cada vez más fragmentado, producto en gran medida de la intervención estatal. Las condiciones objetivas de la movilización no eran las mismas que para 2004, y la toma como medida, así como lo fue el piquete, empieza a ser fuertemente cuestionada.

Con más cautela en esta primera etapa y luego más abiertamente, las tensiones entre estudiantes autoconvocados y los que participaban de la toma fueron incrementándose, llegando inclusive a hechos de violencia. El 27 de junio ingresan estudiantes, docentes y no docentes que desalojan violentamente a los estudiantes que ocupaban el edificio en la Facultad de Turismo. El desalojo de Turismo representó un primer síntoma de que los sectores más reacios a la movilización se habían fortalecido, la gestión podía encontrar un nicho desde dónde mantener sus posiciones de dirección y privilegio con legitimidad suficiente, a la vez que socavar las bases de la movilización estudiantil.

Recién para el día 13 de julio la Cámara Federal de Roca por medio de un fallo que criticaba duramente la Asamblea realizada en Cipolletti, ordenaría retrotraer la situación al 16 de mayo, lo que implicaba realizar una nueva elección, Boccanera vería nuevamente frustradas, -esta vez por la

²⁰² “Intiman a estudiantes a levantar la toma en la Universidad del Comahue” (Infobae; 05/07/2006)
<http://www.infobae.com/2006/07/05/264187-intiman-estudiantes-levantar-la-toma-universidad-del-comahue>
consultada el 29/05/2014

²⁰³ Fuente: <http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-68881-2006-06-23.html> Consultada el 25/05/2014

justicia- sus intenciones de ser rector. Teresa Vega, la decana de más edad, quedó al frente del rectorado de manera interina.

La caída de Boccanera marca un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto, dado que debía definirse la continuidad o la suspensión de la toma, que, si había comenzado por el pedido de reforma estatutaria y la democratización, se había prolongado e intensificado con el golpe institucional.

Comenta un estudiante de Humanidades: *“El movimiento estudiantil hasta ahí, estaba todo de acuerdo. Estábamos todos en contra del golpe institucional. Cae Boccanera y se decide no levantar la toma y profundizar el debate sobre la democratización dónde no estábamos todos a favor”* (Militante estudiantil y territorial 23/06/2013).

Empezaron a ser visibles las divisiones al interior del movimiento estudiantil. La agrupación estudiantil CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, línea de masas del Partido Comunista Revolucionario -PCR-) conducción del centro de la Facultad de Ciencias Agrarias y Derecho y Ciencias Sociales, llamaría públicamente a asamblea estudiantil para discutir el levantamiento de las tomas, rompiendo unilateralmente la unidad de acción.

Al mismo tiempo ADUNC, presionado por los costos políticos que le generaba apoyar la medida de acción directa también instó al levantamiento de las tomas.

Explica un estudiante:

“ADUNC decide suspender la Asamblea porque no llegaba con los votos a imponer un rector y lo que les interesaba, lo de claustro único. (...), entonces les quedaba cómodo, o no perdían nada si la Asamblea Universitaria no se hacía. El que perdía todo era Boccanera, que tenía los votos y tenía las condiciones para conducir la universidad. Entonces los docentes, cuando ven que la justicia baja a Boccanera a partir de una interposición judicial, ellos dicen “ganamos”. Ganaron de acuerdo a los objetivos que ellos se habían planteado, no los nuestros” (Militante estudiantil 17/06/2013).

El último apoyo que le quedaba al movimiento estudiantil en la universidad se disolvía, lo que muestra también la divergencia de intereses en el sector que inicialmente había sostenido la suspensión de la AU.

Si mantener la ocupación de los edificios era un costo políticamente alto para el movimiento estudiantil pues los enfrentaba con otros estudiantes, la pérdida de la unidad de acción operó como un elemento facilitador para la fragmentación que ya había iniciado la derecha entre el conjunto de los estudiantes primero, y esta vez en el interior del movimiento estudiantil. Cuantiosa cantidad de estudiantes que participaban de la toma de manera no orgánica dejan de participar por lo que el sostenimiento de la toma se hace más difícil.

La rectora interina, intenta generar condiciones para llegar a un acuerdo creando una mesa de diálogo, pero según los estudiantes ninguna de las propuestas significaba un avance en la democratización, sino más bien que el objetivo de las autoridades era lograr la suspensión de la medida sin concesiones.

Como indicábamos, el gremio ADUNC también entendía que el paso siguiente era levantar la toma para facilitar la discusión. Aunque otra de las versiones indica que la dirección del gremio docente (PCR) en alianza con sectores progresistas, definieron y negociaron con la gestión interina de Vega una reforma estatutaria que incorporara el CUD, a cambio de que las autoridades unipersonales (decanos, rector) fueran designados por elección directa. Pensando en esta línea estratégica de acción del gremio docente, este “intercambio” o “acuerdo” los beneficia en términos de que podían ampliar su espacio de poder y mejorar su correlación de fuerzas dentro del claustro docente. Además, su accionar y el accionar de la línea estudiantil (CEPA-PCR) coinciden, puesto que esta organización presionó para el levantamiento de la toma posteriormente a la caída de Boccanera.

De cualquier forma, el sector docente quitó el apoyo a los estudiantes argumentando diferencias estratégicas sobre cómo encarar la lucha, lo que sumado a la falta de claridad de los intereses estudiantiles complicaba aún más algún tipo de acuerdo entre los claustros.

Sin propuestas viables, sin un rumbo político claro y con un proceso de fragmentación y atomización en ciernes, el movimiento estudiantil mantuvo la toma por más de cien días sin que las autoridades tuvieran ningún tipo de gesto o interés en ceder espacios y resolver el conflicto, más bien esperaron que el paso del tiempo desgaste las fuerzas estudiantiles.

Surgieron en estos meses escisiones en las agrupaciones, militantes comenzaron a desprenderse de sus espacios orgánicos, las tensiones se agudizaron al interior del movimiento estudiantil. Las organizaciones que habían visto sus expectativas y propuestas rechazadas dejaron de prestar apoyo material abandonando las comisiones.

Recién para el 23 de agosto la toma se levanta luego de una última ronda de negociaciones y sin resultados.

Cerrada la toma, las autoridades recuperaron los edificios, no sin denunciar y deslegitimar nuevamente a los estudiantes por “destrozos” en los mismos²⁰⁴. Docentes y autoridades aprovecharon las condiciones de exposición y vulnerabilidad de las organizaciones y militantes estudiantiles para ejercer su poder, no realizaron ninguna concesión en el calendario académico. Los militantes fueron perseguidos políticamente, varios de ellos tuvieron que abandonar la universidad por la intensidad de las presiones.

²⁰⁴ La única excepción para el caso fue el edificio de la facultad de Ciencias de la Educación en Cipolletti, en el que las autoridades destacaron las condiciones en las que fue devuelto.

Luego de la toma, las organizaciones que habían sido revitalizadas en el lapso de 2004-2005 pierden peso, *“La FUC empieza a no aglutinar. (...) empieza a atomizarse el movimiento estudiantil, lo que la Federación aglutino durante tres años, luego se empezó a dispersar”* (Militante estudiantil 15/05/2013).

Conclusiones

Como afirmamos anteriormente, la potencia del conflicto de 2004 se constituye, al menos en parte, por la articulación con otros sectores y remite directamente a otros conflictos a lo largo de la historia en los que la mentada “unidad obrero-estudiantil” adquiere formas concretas. Para el caso, los estudiantes ya no se articulaban con los obreros solamente, sino con los sujetos que habían quedado en el campo popular ocupando una posición de clase luego de la ruptura de la hegemonía neoconservadora, neoliberal.

Estos conflictos mostraron las continuidades del neoliberalismo generando contradicciones en el Estado, pero no en cualquier institución, sino en la Universidad, cuyo funcionamiento se asienta en el principio de la autonomía. La autonomía, y de aquí viene nuestra segunda tesis, es el elemento que abona las posibilidades para la conformación del movimiento estudiantil como sujeto político con iniciativa para la disputa estatal, sujeto que antagoniza en el seno del Estado, representando los sectores subalternos. Esta autonomía es una fortaleza que puede ser reforzada en la lucha política - condición de posibilidad para su constitución como sujeto y la articulación con otros sectores en lucha-, y que muestra la complejidad de las estrategias que tiene que darse el sector dominante para ejercer su dominación, estableciendo y manteniendo cierto consenso en el plano estatal. Complejidad más que necesaria por el carácter especial de la Autonomía Universitaria que imposibilita al Estado a intervenir en los conflictos con las fuerzas represivas.

La autonomía relativa fue condición de posibilidad para que estos conflictos cuestionaran el bloque en el poder, superando las estrategias de contención posible para el sector conducido por Pechén.

En estos conflictos, vemos una expresión del ascenso de la lucha de clases en un marco institucional que provoca un proceso de crisis y descomposición del bloque en el poder, representado por el sector encabezado por Ana Pechén del MPN; con un proceso yuxtapuesto en el cual se va organizando un nuevo bloque dominante que representa el proyecto de universidad del kirchnerismo. Bloque que se consolida y legitima para nosotros definitivamente en 2014 con la elección del rector kirchnerista, Gustavo Crisafulli.

¿Qué sucede con ese movimiento estudiantil activo, movilizado, pujante y lleno de discusión? Luego de los conflictos del año 2004-2005, el movimiento estudiantil sale, aunque victorioso,

golpeado y desgastado por la intensidad de la confrontación. Las condiciones en las cuales habían sido propicias las confrontaciones empezaban a licuarse y la intensidad de las luchas sociales disminuyó. En términos de Bonnet (2007), muchos de los modos otrora nuevos en el desenvolvimiento de la lucha de clases fueron institucionalizados, expropiados y “*hechos Estado*”, ejemplos de ello son la cooperativización de las fábricas recuperadas, planes y programas basados en lógicas de autoempleo o autogestión del trabajo surgidas como formas de subsistencia en los ‘90; entre muchas otras fueron poniendo márgenes al desenvolvimiento de la lucha de clases y desmembrando las alianzas que se habían tejido al calor de las luchas en los años ‘90. El kirchnerismo pudo generar otra atmósfera política que le permitió bajar el clima de conflicto.

Por último, estos conflictos rebaten los discursos kirchneristas de ruptura con el neoliberalismo, dan cuenta de su continuidad y profundización en el ámbito educativo. Veinte años después de la sanción de la LES las universidades siguen bajo el mismo marco normativo neoliberal²⁰⁵.

El bloque dominante en el Estado busca cristalizar un proyecto de universidad en función de su propia construcción hegemónica que no podemos definir por oposición al neoliberalismo, sino más bien como una continuidad y profundización de la tendencia a mercantilizar la educación superior en la que la LES cobra un nuevo sentido. Esta vez en un marco en el que el *desarrollo nacional* conforma un reeditado artificio que busca reafirmar el cercenamiento de la Autonomía Universitaria, el carácter evaluador del Estado y convertir definitivamente a las universidades en gestoras de conocimientos técnicos que contribuyan en los procesos de acumulación y reproducción del capital.

Cuando la autonomía relativa de la universidad es cuestionada por los vínculos entre el Estado y el mercado, el velo de “representante de la sociedad civil” del Estado, autónomo de las relaciones sociales de producción, se cae demostrando verdaderamente el carácter burgués y los intereses que protege. Al mismo tiempo, la Autonomía Universitaria opera como una trinchera legítima desde la cual resguardar un espacio autónomo de pensamiento crítico que permita cuestionar las contradicciones del sistema capitalista, fomentando su superación en la articulación con los demás sectores que confrontan al Estado, desafiando permanentemente la separación estatal entre lo político y lo económico, politizando las relaciones de producción y mostrando los clivajes materiales de la política.

Bibliografía

²⁰⁵ El 28/10/2015 en vísperas de elecciones presidenciales, se dio sanción en el Senado a una serie de modificaciones a la LES a partir de un proyecto elaborado por la diputada Adriana Puiggrós del FPV. Las modificaciones no condensan ningún cambio sustantivo en el carácter mercantilizador de la Ley menemista, aunque si debemos reconocer que introducen contradicciones con su lógica entre los artículos incorporados y los que se dejaron intactos. Este estudio amerita un espacio más extenso que el que podemos destinarle aquí.

Aiziczon, Fernando. (2009). *Protesta social y cultura política. Aportes para pensar los años '90 en Neuquén*. Recuperado de

<http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Jornadas%20de%20Roca%20-%202006/Aiziczon.pdf>
(Consultado el 18/08/2015)

Astarita, Rolando. 2010 (a). “Profundizar el modelo” después de Kirchner. Recuperado de <https://rolandoastarita.wordpress.com/2010/10/31/profundizar-el-modelo-despues-de-kirchner/>
(Consultado el 5/09/2015)

(2010) (b). *Mitos sobre finanzas e industrialismo en tiempos K*. Recuperado de <https://rolandoastarita.wordpress.com/2010/08/17/mitos-sobre-los-tiempos-k/#more-266>
(consultado el 8/09/2015)

(2012) “¿De qué clase social somos los estudiantes?” en *Revista Sociolog@s para qué? Revista de sociología del El Viejo Topo*, Año XVII, N° 12, 13-16.

Bonavena, Pablo y Millán Mariano (2012) “El Movimiento estudiantil en la actualidad argentina: una aproximación socio-histórica” en *Revista Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Año XII, N° 31. CLACSO, 99-112.

Bonifacio, José Luis. (2012). Neoliberalismo y Movimiento Estudiantil en la Universidad Nacional del Comahue. *Cuestiones de Sociología N°8*. UNLP, pp. 85-94.

Bonnet, Alberto. (2007). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo.

(2009). Las relaciones con el Estado en las luchas sociales recientes. En A. Bonnet y A. Piva (comps.) *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de convertibilidad* (pp. 71-114). Buenos Aires: Ediciones Continente

(2012). La crisis del Estado neoliberal en la Argentina. en Twihaites Rey, Mabel (Ed.) *El Estado en América Latina* (pp. 279-302). Santiago de Chile: CLACSO.

Izaguirre, Inés (2003) “Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social” en José Seoane (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (pp. 288-296). Buenos Aires: CLACSO.

Liaudat, María Dolores, Liaudat, Santiago y Pis Diez, Nayla (2011) “2001-2011: Continuidades y rupturas en una década del movimiento estudiantil argentino” en *Revista Herramienta*. En <http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-10/2001-2011-continuidades-y-rupturas-en-una-decada-del-movimiento-estudiantil-argen> (Consultado el 20/03/2015)

Maqueda, Guillermo. (2010). El conflicto universitario en la Universidad Nacional del Comahue. 2006-2009. Balance preliminar y comentarios. En Jornadas Pre- ALAS. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1° al 3 de diciembre 2010. Neuquén y General Roca, Argentina. (Ponencia).

Penchulef, Ayelén. (2014). *Universidad, Autonomía y Movimiento Estudiantil: Apuntes para un análisis crítico de los conflictos universitarios en la UNCo (2004/2006)*. En <http://jornadasadhoc.uncoma.edu.ar/archivos/Conflicto/apuntes%20para%20un%20an%C3%A1lisis%20crítico%20del%20conflicto%20universitario%20en%20la%20Unco.pdf>

Piva, Adrián. (2014). *Economía y política en la Argentina Kirchnerista*. Buenos Aires: Batalla de ideas.

Poulantzas, Nicos. (1967). Introducción al estudio de la hegemonía en el estado. Recuperado de <https://cdamcheguevara.files.wordpress.com/2012/06/hegemonia-en-el-estado-por-nicos-poulantzas.pdf> (Consultado 2/10/2015)

(1998). *Estado, poder y socialismo*. España: Siglo XXI.

Solanas, Facundo. (2012). El Estado acreditador: del caso argentino al MERCOSUR” en D. Leite. et.al. *Políticas de evaluación universitaria en América Latina: perspectivas críticas* (99-138). Buenos Aires: CLACSO-Instituto de investigaciones Gino Germani.

Therborn, Göran (1979) “El ejercicio del poder de Estado, II Procesos de mediación”. En *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo* (pp.135-187). Buenos Aires: S. XXI

Thwaites Rey, Mabel. (1993). La paradoja de una contradicción. en *Revista DOXA Cuadernos de Ciencias Sociales* Año IV N°9/10, 16-28.

Zambón, Humberto. (2008). “La misión Remus Tetu en el Comahue”. Neuquén: Educo.

Zanín, Alexis. (2010). Las tomas estudiantiles del 2004 y 2006 en la universidad del Comahue. 2 hitos en la universidad del Comahue. Recuperado de www.mov-estudiantil.com.ar/terceras/3tres.doc (Consultado el 19/05/ 2011).

Zibechi, Raúl (2003), Capítulo 3: “El desborde juvenil de los `90. Experimentar la diversidad” En *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento* (pp.68-118). La Plata: Nordanpor.